
FRANCK GAUDICHAUD
Chile 1970-1973. Mil días que estremecieron al mundo
Poder popular, cordones industriales y socialismo durante el gobierno de Salvador Allende
CORDON-CERRILLOS
LOM
EDICIONES


FRANCK GAUDICHAUD
Chile 1970-1973. Mil días que estremecieron al mundo
Poder popular, cordones industriales y socialismo durante el gobierno de Salvador Allende
CORDON-CERRILLOS
LOM
EDICIONES

Franck Gaudichaud

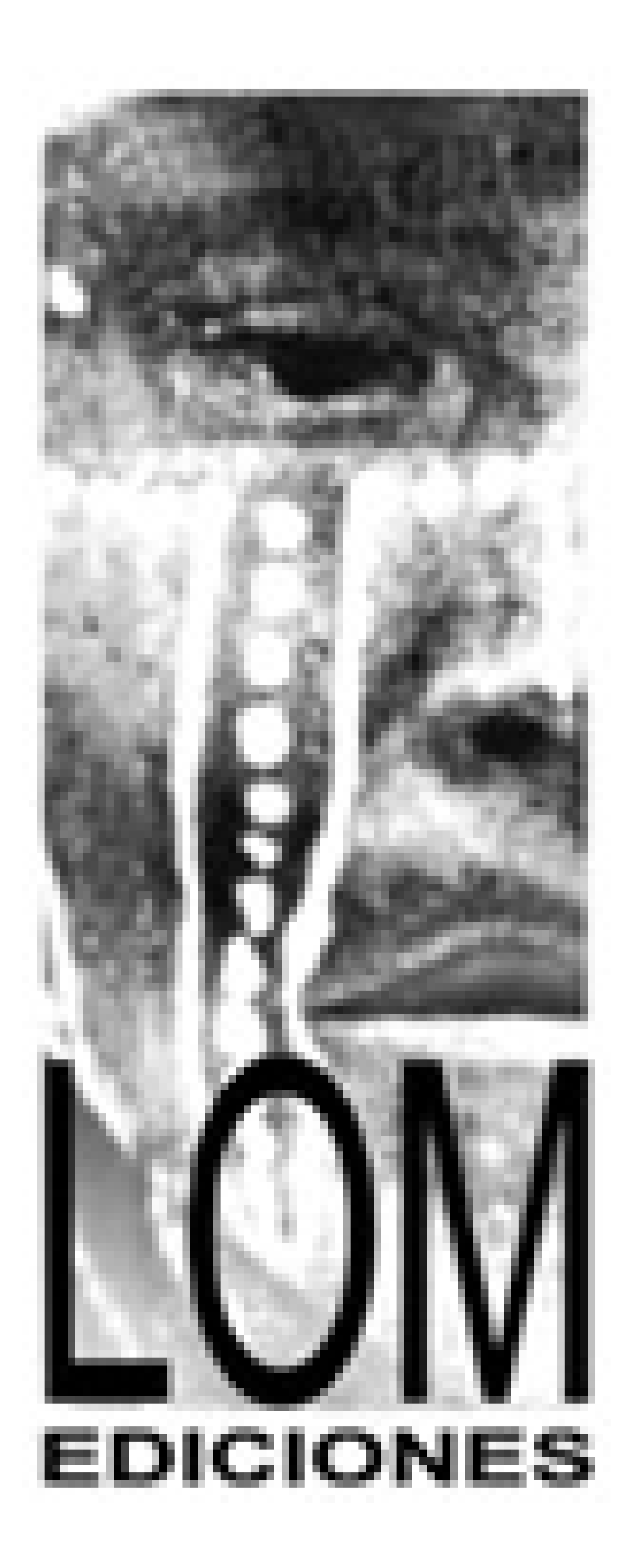
Traducido por Claudia Marchan

Chile 1970-1973.

Mil días que estremecieron al mundo

Poder popular, cordones industriales

y socialismo durante el gobierno de Salvador Allende


LOM
EDICIONES

LOM PALABRA DE LA LENGUA YÁMANA QUE SIGNIFICA SOL

Primera edición, 2016

ISBN impreso: 978-956-00-0824-4

ISBN Digital: 978-956-00-0911-1

Motivo de portada: Marcha del Cordón Cerrillos,

fotografía de Armindo Cardoso, 1973

Titulo original

«Chili 1970-1973: mille jours qui ébranlèrent le monde»

Primera edición, Les PUR, Francia, 2013

Esta obra fue traducida gracias al Programa de Apoyo

a la Traducción del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes.

A cargo de esta colección: Julio Pinto

Diseño, Composición y Diagramación

LOM Ediciones. Concha y Toro 23, Santiago

Fono: (56-2) 688 52 73 • Fax: (56-2) 696 63 88

www.lom.cl

lom@lom.cl

A mi padre y a Frankie, in memoriam.

A Darío Amaru, pequeña e intensa luz en la oscuridad de nuestros tiempos.

A Luis Vitale, historiador e intelectual revolucionario hasta el fin de su vida.

A Daniel Bensaïd, quien supo resistir de manera intempestiva

al pensamiento hegemónico y sugerir caminos rebeldes para el siglo XXI.

Este libro está dedicado:

a las familias de detenidos-desaparecidos,

a los miles de chilenos y chilenas que sufrieron la represión,

a la nueva generación de trabajadores, estudiantes, pobladores

que se movilizan hoy en contra de un modelo de sociedad impuesto en dictadura,

a todos los y las rebeldes que no renunciaron a «crear, crear, poder popular».

Con la convicción de que conocer y aprender del pasado es la clave

de nuestros presentes y la condición de nuestros futuros.

Agradecimientos

Esta tesis doctoral, hoy convertida en libro, es el resultado –como toda investigación en ciencias sociales– del producto acumulado de un importante y vasto trabajo colectivo, realizado desde hace varios años en Chile y a través del mundo, por decenas de investigadores y también de generaciones de militantes, para comprender, analizar, aprender críticamente de la intensa experiencia histórica que vivió el pueblo chileno entre 1970 y 1973.

Más concretamente, este texto no podría haber sido escrito sin la participación y apoyo directo de decenas de personas, a quienes quisiera agradecer aquí[1].

Entre ellas:

- Mi familia extendida y amigos (que no nombraré pues seguro sabrán reconocerse), que facilitaron, leyeron, corrigieron, discutieron y apoyaron –de un modo u otro– esta investigación y me acogieron en sus casas en Chile y en Francia.

- Michael Löwy, director de investigación en el CNRS y profesor emérito de la Universidad París VIII, quien aceptó ser el director de este trabajo.

- El profesor Jacques Chonchol y los miembros de la Escuela de Doctorado de la Universidad ARCIS, quienes me recibieron como estudiante de doctorado extranjero durante dos años y medio a principios de los años 2000.

- Varios investigadores chilenos y particularmente el amigo Luis Vitale, Mario Garcés, Augusto Samaniego, Sergio Grez, Patricio Quiroga, Patricio García, Fernando Casanueva, Rafael Sagredo, María Emilia Tijoux, Renzo Henríquez G., Roberto Merino y Boris Cofré.

- Gracias a sus estudios pioneros sobre la Unidad Popular y las formas de poder popular, Hugo Cancino Troncoso, Miguel Silva, Peter Winn y Jorge Magasich contribuyeron –sin siempre saberlo– a la realización de este trabajo.

- Las chilenas y chilenos dispuestos a abrir la puerta de sus memorias y de su

experiencia militante y que permitieron la realización de las entrevistas, que se iniciaron en Bordeaux (Francia) y terminaron en Santiago. Entre ellos, le debo mucho a Héctor Velásquez (dirigente del sindicato Madeco), luchador incansable, organizador sin igual, militante anticapitalista.

- Jean-Paul Salles, amigo e historiador de la Universidad de La Rochelle (Francia), quien pasó muchas horas leyendo y comentando mi tesis y luego este manuscrito.

- Claudia Marchant, incansable, aguda y fraterna traductora (y amiga) de esta obra.

- Paula Bravo, por su apoyo a la hora de arreglar figuras y mapas.

- Los intercambios con la historiadora Eugenia Palieraki fueron especialmente fructíferos, así como la calurosa acogida de la familia Lusson, de Patty, Miguel y Renata Molina, en mis innumerables desplazamientos a París.

- El equipo de la revista Dissidences[2], fuente de inspiración y de emulación científica durante varios años, y particularmente gracias a Georges Ubbiali, Jean-Guillaume Lanuque y Fréderic Thomas por sus relecturas.

- La asociación de solidaridad internacional France Amérique Latine[3], con quienes comparto el compromiso y los sueños por «otro mundo posible» desde hace ya numerosos años.

- Mis colegas de la Universidad de La Rochelle, donde me inicié como profesor-investigador, así como los colegas de Amiens (particularmente Enzo Traverso) y ahora de la Universidad Grenoble-Alpes.

- Gracias también a la Facultad de Ciencias Sociales (FACSO) de la Universidad de Chile, y en particular a Miguel Urrutia, por haberme acogido como investigador invitado en 2015-2016, facilitando de esta manera el trabajo de actualización de mi tesis doctoral, al mismo tiempo que iniciaba investigaciones sobre el sindicalismo en el Chile neoliberal actual.

- Los asalariados de varios centros de archivos y bibliotecas, y muy especialmente a Fabiola Rodríguez, quien entonces trabajaba en la BDIC-París y actualmente en el Institut des Hautes Études d’Amérique Latine (IHEAL); los trabajadores del Archivo Nacional, de la Biblioteca Nacional (gracias en

particular a Tatiana Castillo C.) y de la Biblioteca del Congreso en Santiago.

- Rocío Gajardo Fica sabe todo lo que le debo y hasta qué punto sus rebeldías, amor y su lenta impaciencia me son esenciales, un camino de más de una década hoy compartido con nuestro hijo, Darío Amaru.

- Finalmente, gracias al gran periodista estadounidense John Reed (1887-1920): el título de este trabajo es un guiño, pero también un homenaje, a su libro sobre la revolución rusa Ten days that shook the world (1920).

1 Para contactar al autor, escribir a <fgaudichaud@gmail.com>.

2 Disponible en [https://revuesshs.u–bourgogne.fr/dissidences].

3 [http://www.franceameriquelatine.org].

Prólogo

Una reflexión de calidad sobre una creación mayor de los trabajadores

Según la expresión del propio Franck Gaudichaud, lo acontecido durante aquel intenso y excepcional trienio 1970-1973 ha suscitado un verdadero «océano bibliográfico». Hay, en efecto, cientos de libros que abordan el período de la Unidad Popular desde ángulos diversos, y se necesitarán tal vez algunos más para expresar la riqueza y creatividad popular que se desarrolló hace cuatro décadas. Sin embargo, aquel «océano» no cubre las temáticas en porciones similares. La parte más extensa la componen los relatos de vivencias personales, los ensayos biográficos sobre Salvador Allende, y también los trabajos que argumentan por una u otra ala de la izquierda. Se encuentran también, en menor medida, estudios sobre el proyecto y las realizaciones de la Unidad Popular: el fin de los anacrónicos latifundios; la nacionalización de las cinco grandes minas de cobre; la creación del área de propiedad social, incluyendo la nacionalización del salitre, carbón, hierro y de los bancos, lo que hizo posible un sensible aumento de los ingresos, especialmente el de los más modestos. Y han aparecido algunos estudios que comienzan a indicar cómo se urdió la conjura.

Paradójicamente, los movimientos sociales han sido objeto de pocos estudios, aunque su importancia y su «peso histórico» mayor estén fuera de duda. La llegada de Allende a La Moneda en 1970 es la coronación de un largo proceso social de acción y organización de los sectores populares. Desde los años treinta, incluso antes, los trabajadores crean y consolidan organizaciones sindicales y otras, que con avances y retrocesos dan luchas sociales trascendentales, incluyendo varias huelgas generales. Estas inspiran a los partidos socialista y comunista, que desde los años cincuenta formulan las ideas básicas del programa de gobierno histórico de la izquierda: reforma agraria, nacionalización del cobre, creación de un sector social de la economía, ideas que serán propuestas en cuatro elecciones presidenciales. Aquella tradición de organización se amplifica a partir de 1970, cuando «los de abajo» adquieren conciencia de su rol de actores de la

historia y se muestran determinados a incidir sobre su curso. El «pueblo de izquierda» se organiza en una red de unos 15.000 comités de Unidad Popular que hicieron posible la elección de Allende. Y desde fines de 1971 aparecen nuevas organizaciones, como los Consejos Comunales Campesinos, las Juntas de Abastecimiento y Precios, las experiencias de «canasta popular» y abastecimiento directo y, sobre todo, los Cordones Industriales, que surgen como respuestas populares al agudo conflicto social. Esta nueva dimensión organizativa confirma aquellos movimientos sociales como actores cruciales del período y como el principal sostén del Gobierno de Allende. Desde 1972 serán designadas con el término genérico de «Poder Popular», adoptado por la historiografía.

Estas nuevas organizaciones, no previstas por la izquierda ni la derecha, se organizan en la óptica de defender al gobierno (en ningún caso contra él), ya que éste encarna el proyecto de transformaciones con los que se identifica el movimiento obrero. Pero el apoyo no es absoluto y hubo conflictos entre el Gobierno de la Unidad Popular y el «Poder Popular». Próximos al ala más radical de la izquierda, los Cordones Industriales critican algunas decisiones del Ejecutivo, como la devolución a los propietarios de las empresas que intentaron paralizar durante la huelga patronal y que continuaron funcionando ocupadas por los trabajadores. Y se manifiestan contra la devolución. El surgimiento, actuación y proyección del «Poder Popular» fueron estudiados en 1972-1973, «en directo», por intelectuales como Cristina Cordero, Eder Sader y Mónica Threfall. En los años ochenta, en el exilio, por Hugo Cancino y por quien firma este prólogo. Después de 1990, han profundizado el tema, entre otros, Patricio García, Sandra Castillo, Pablo Nyns y Franck Gaudichaud, en este acucioso trabajo.

Si este libro proporciona una visión resumida del trienio 1970-1973, su finalidad explícita es concentrarse en el estudio del movimiento obrero, caracterizado como uno de los actores principales, y también sobre el movimiento social urbano –los pobladores–, considerando su surgimiento, estructuras internas, representatividad y discurso. Su hilo conductor es el comportamiento de estos actores cuando muchos de ellos creen en el inminente cambio social y se sienten constructores de una nueva sociedad. Para estudiarlo, Gaudichaud indaga los procesos precursores, como la formación y extinción de los Comités de Unidad Popular, constituidos en 1970 para promover la campaña electoral de Salvador Allende. También examina la formación del Área de Propiedad Social, compuesta a menudo por grandes empresas con sus numerosos trabajadores, y la

realidad de la participación de los trabajadores en la administración de las empresas públicas, concertada entre el Gobierno y la CUT. Sin olvidar las Juntas de Abastecimiento y Precios, organismos vecinales que se desarrollan desde fines de 1971 para luchar contra el desabastecimiento y el mercado negro.

La parte cardinal del trabajo es la descripción y el análisis del Poder Popular que emerge en 1972, particularmente de los Cordones Industriales, esta novedosa forma de organización territorial que se dieron los trabajadores de los grandes enclaves industriales, durante unos once meses; un tiempo corto pero particularmente intenso. Una de las particularidades de esta investigación es que se basa en un trabajo sistemático de entrevistas a una decena de dirigentes sindicales y militantes obreros que participaron en el Poder Popular, especialmente en los Cordones Industriales, y a otra decena de militantes y dirigentes de los partidos de izquierda, publicadas bajo el título Poder Popular y Cordones Industriales. Testimonios sobre el movimiento popular urbano, 1970-1973, LOM ediciones, 2004. Estas entrevistas son una fuente mayor para explorar este aspecto de la historia del movimiento popular; una verdadera «inmersión» en el mundo de los cordones.

En este marco, Gaudichaud introduce los conceptos de cordón en sí para referirse a la concentración industrial con sus barrios populares, particularmente el de Cerrillos-Maipú, cuna de la industrialización chilena desde los años cuarenta, y cordón para sí, que designa la coordinación de los trabajadores de la zona, consciente y movilizada. Y desarrolla el concepto de poder popular constituyente, para designar las experiencias que cuestionan los mecanismos de dominación, poniendo en práctica apropiaciones colectivas. Con estas –y otras– categorías, analiza con ahínco y con la necesaria distancia crítica el nacimiento de los cordones en octubre de 1972, cuando trabajadores de los cordones en sí, se autoorganizan para crear los cordones para sí, para mantener las empresas en funcionamiento, en contra de la huelga insurreccional de derecha que busca paralizar al país y crear las condiciones para derrocar al Gobierno. Relata cómo los cordones toman varias iniciativas que contribuyen a mantener las industrias en marcha. Después del paro, reclaman la nacionalización de las empresas, oponiéndose a la política del Gobierno de devolverlas a sus dueños.

Con un conocimiento excepcional de los movimientos sociales de aquel trienio, construido a partir de las investigaciones emprendidas en el marco de su tesis doctoral, Franck Gaudichaud muestra un dominio de buena parte del «océano bibliográfico» sobre este período. Su trabajo proporciona una rica densidad de

fuentes y un vasto dominio de teorías sociológicas y políticas interpretativas. Las numerosas entrevistas permiten comparar las aproximaciones teóricas con los recuerdos de los trabajadores que vivieron aquella experiencia. A partir de esas fuentes, restituye los debates sobre los cordones y responde algunas preguntas fundamentales: ¿qué relaciones mantuvieron los cordones y la CUT?; ¿cómo evoluciona la posición del Partido Comunista hasta llegar a intentar crear cordones dominados por él?; ¿cómo justifica el MIR su extraña postura de restar importancia a los cordones para favorecer los «comandos comunales»(que rara vez pasaron de ser una intención)?; ¿cómo fracasó el intento de crear una coordinación de cordones en Santiago?, proyecto apoyado por algunos socialistas pero rechazado por el PC y el MIR; y ¿cuáles fueron los tiempos intensos de los cordones y sus momentos de cierto aislamiento?

La profundidad de la investigación permite determinar la dimensión real de varios cordones, refutando la propaganda mercurial que los describe como un gigantesco dispositivo de fuerza que rodea Santiago y será base de la futura dictadura totalitaria. También le permite establecer los límites de las acciones y de la influencia del Poder Popular, desmitificando y rectificando exageraciones. Así, por ejemplo, la imagen del Cordón Cerrillos, proyectada por los sectores de izquierda del PS a mediados de 1972, como una poderosa e influyente organización, está lejos de su realidad organizacional y de su poder efectivo. Y el cordón Vicuña Mackenna coordina treinta a cuarenta empresas (no trescientas, como lo afirma su presidente). Asimismo, impugna la imagen mítica de una democracia directa en el seno de los cordones y constata que los periódicos percibidos como «prensa de los cordones» son con frecuencia editados por el ala izquierda del Partido Socialista, en particular el Regional Cordillera. Por último, comprueba la ausencia de resistencia organizada de los cordones el 11 de septiembre.

En resumen, Franck Gaudichaud alimenta la memoria y la reflexión sobre esta acción excepcional de los trabajadores, que sin duda ejercerá influencias sobre luchas sociales inscritas en el futuro.

Jorge Magasich

(doctor en Historia, profesor en el Institut des hautes

études des communications sociales de Bruxelas)

Introducción general

Descentrar la mirada. Nuevos paisajes y tesoros perdidos

de los procesos revolucionarios latinoamericanos

[…] todo conocimiento e interpretación de la realidad social está ligado, de manera directa o indirecta, a una de las visiones sociales del mundo, a una perspectiva global socialmente condicionada; es decir, lo que Pierre Bourdieu define, en una expresión precisa, como «las categorías de pensamiento impensadas que delimitan lo pensable y predeterminan lo pensado». Por lo tanto, la verdad objetiva sobre la sociedad no es concebible como una imagen, sino más bien como un paisaje pintado por un artista; y que, finalmente, ese paisaje será tanto más verdadero mientras el pintor se sitúe en un observatorio o mirador más elevado, permitiéndole una vista más amplia y extendida del irregular y accidentado panorama de la realidad social.

Michael Löwy

, «Paysages de la vérité».

Introduction à Une sociologie critique de la connaissance, París, Anthropos, 1985, p.14.

Este libro es el resultado de una tesis de doctorado en ciencias políticas (2005) y de más de cinco años de investigación, de los cuales dos y medio fueron realizados en Chile. Nuestro trabajo en terreno ha sido vasto y múltiple, fruto de una formación inicial como historiador que luego derivó hacia las ciencias políticas y la sociología: llevamos a cabo una extensa búsqueda de archivos, revisamos miles de páginas de la prensa, de literatura militante y documentos de

la época, realizamos entrevistas orales a varias decenas de actores de esta historia y nos abocamos a la lectura y análisis de numerosas obras sobre el período. Nuestro enfoque también ha sido teórico y epistemológico. En total, esta tesis se compone de más de 800 páginas, disponible en línea (incluyendo 130 páginas dedicadas a la metodología, la reflexión teórica, la contextualización, la investigación oral y sus problemas)[1]. Con el objeto de acotar nuestro propósito y volver esta publicación accesible a un amplio público, hemos procedido a la reescritura de dicha investigación, reduciendo considerablemente nuestro abordaje epistemológico, empezando por la introducción. En las siguientes páginas, presentamos muy resumidamente sólo algunas grandes líneas de nuestro trabajo, enviando al texto de la tesis a aquellos lectores e investigadores en búsqueda de mayores detalles. Se han ajustado ciertos capítulos y sintetizado o simplemente eliminado varios párrafos y estudios de casos por razones editoriales o de coherencia del conjunto. Globalmente, la arquitectura inicial del doctorado ha sido respetada, aunque se redujeron considerablemente las notas al pie de página, los anexos y las referencias bibliográficas. Desde el año 2005, varios –pero todavía demasiado pocos– trabajos y publicaciones han sido realizados en torno al gobierno de Allende, el movimiento obrero y el poder popular, publicaciones que han venido a confirmar, detallar o completar lo que aquí presentamos: este libro –publicado inicialmente en francés (2013) y hoy en castellano– incorpora los aportes de las mayores y nuevas producciones de esta última década, y por lo tanto actualiza nuestro trabajo inicial de doctorado.

Políticas del conflicto, movimiento obrero

y «poderes populares constituyentes»: una breve puesta en perspectiva

Hoy como ayer, el estudio de las clases sociales, de la acción colectiva o de los movimientos revolucionarios en América Latina (como en otros lugares) continúa generando numerosos debates teóricos. Intentaremos aquí describir y analizar minuciosamente los conflictos sociales a estudiar, a los agentes que los componen y comprender en qué entorno se desarrollan. Analizar las

movilizaciones protestatarias que sacuden a las sociedades contemporáneas constituye un objeto de investigación altamente conflictivo y polémico[2]. La ciencia política, tal como ha sido asumida aquí, ha sufrido dos grandes giros epistemológicos en el curso de los últimos años: la apertura hacia la sociología, por un lado, y hacia la historia, por el otro. Esta manera llamada «híbrida» de hacer ciencia política es también la que nos permite abordar nuestro objeto desde el punto de vista de la transdisciplinariedad[3]. Sin entrar en los detalles de las diferentes escuelas de acción colectiva y del universo protestatario, indiquemos que en esta obra compartimos la recomendación de «prolongar la problemática marxista del movimiento social», propuesta por algunos sociólogos franceses como Sophie Béroud, René Mouriaux e incluso Michel Vakaloulis[4]. Este enfoque inspirado en un marxismo no determinista, dialéctico, abierto a otras corrientes sociológicas críticas, utiliza las categorías de «movimiento social» o «movimiento obrero», sin por ello abandonar las de «clases sociales» o de «lucha de clases». Recuerda con razón los lazos que, a menudo, unen antagonismo social, conflicto del trabajo y movilización colectiva[5]. De este modo, los movimientos sociales, en el amplio sentido del término (incluido el movimiento obrero), se inscriben perfectamente en un conjunto flexible, ubicado en la intersección de los diferentes componentes de la sociedad (en el sentido bourdieusiano: campos económico, político, social y cultural), en el seno del cual se desarrollan, y en este mismo proceso tienden a transformarse. Esta perspectiva «interaccional» es también la de los trabajos de los politólogos anglosajones Charles Tilly y Sydney Tarrow, es decir, una óptica en términos de política del conflicto (contentious politics):

una interacción donde los actores levantan reivindicaciones relativas a intereses de otros sectores, lo que conduce a la coordinación de esfuerzos en nombre de objetivos o programas compartidos y donde el Estado se encuentra implicado, en tanto destinatario de la reivindicación, instigador o como un tercero[6].

Su teoría de movilización de recursos y del proceso político –que es ya clásica y ha conocido una reciente e interesante reformulación a través de una aproximación en términos de política del conflicto– nos ofrece varias herramientas de análisis pertinentes para el caso que aquí nos interesa. Además, la escuela francesa de las movilizaciones colectivas ha permitido también enriquecer –y a veces, atenuar ampliamente– el enfoque anglosajón, otorgándole un lugar más importante a la comprensión fina de las acciones colectivas

observadas y a sus dimensiones individuales y ya no tan sólo centrado en las relaciones entre Estado, campo político y movilizaciones (siendo, por ejemplo, la interacción entre los movimientos en lucha igualmente esencial)[7].

Nuestra ambición es poder analizar las políticas del conflicto durante el gobierno de Allende como una dinámica y describir los mecanismos, las secuencias de interacción, intentar comprender las causas y los resultados, los principales ritmos y modos de difusión. Con el ejemplo de los estudios sobre Francia de Lilian Mathieu en mente, trabajos que entregan otra pauta de análisis, igualmente fecunda, buscamos también analizar las relaciones complejas que se establecen entre el espacio de los movimientos sociales chilenos y el resto de la sociedad. Intentamos así «situar la actividad contestataria» en su aspecto interno («la dinámica interna de las relaciones que unen a los diferentes movimientos»), pero también en su aspecto externo («las relaciones que esta esfera de actividad establece con otros universos sociales, como el campo político o el mundo sindical»)[8]. Por el momento, nos quedaremos con una definición mínima del movimiento social, uno de los principales elementos de la política del conflicto contemporáneo: una contestación colectiva conducida por individuos solidarios y que comparten objetivos comunes[9], definición que permite aislar cuatro dimensiones esenciales: el carácter colectivo del movimiento contestatario; el hecho de que comparte objetivos comunes; el surgimiento de una solidaridad en el grupo movilizado; el enfrentamiento con los poderes y/o con el capital. Estos movimientos se inscriben en una temporalidad específica y pueden ser llevados a negociar activamente sus reivindicaciones. Pueden también ampliarse y radicalizarse llegando a situaciones revolucionarias (en el concepto de Tilly) o, por el contrario, ser reprimidos, incluso cooptados o institucionalizados. Se trata entonces de una «dinámica propia de un grupo social con reivindicaciones importantes, duraderas y conflictivas»[10].

Esta definición nos reenvía a la autonomía relativa del espacio de estos movimientos y a sus lazos –estrechos o lejanos– con otros campos de la sociedad, a sus recursos organizacionales, a los agentes sociales o fracciones de clases movilizadas, incluso a los modos de representación del conflicto expuesto. No hay duda de que en todo proceso de lucha de clases existen diferenciaciones de identidades colectivas, trayectorias militantes, intereses sectoriales e individuos específicos o formas de movilización diferenciadas o sectorializadas. Así, es a partir de este conjunto de precisiones sobre «la diagonal de las clases» y de la complejidad de las variadas figuras del conflicto que pretendemos abordar esta época emblemática de la historia chilena[11].

Desde nuestra perspectiva, las clases sociales –como el movimiento social o el obrero– deben ser consideradas como un proceso en permanente construcción y redefinición, y no como una estructura, un objeto frío o estático. Como lo explicaba Edward P. Thompson, la experiencia vivida es esencial para comprender la formación de una clase obrera, es decir que ésta es parte importante de su propia elaboración, que no es una cosa sino que adviene, está inscrita en una historicidad:

Una clase es una formación social y cultural (que a menudo encuentra una expresión institucional) que no se puede definir en abstracto o aisladamente, sino únicamente en sus relaciones con las otras clases; y finalmente, la definición sólo se puede elaborar en función de la dimensión temporal, es decir, en términos de acción y reacción, de cambio y de conflicto[12].

En el mismo sentido, Mathieu subraya que una clase no es un dato fijo, «producido por mecanismos económicos, sino el resultado de un trabajo de unificación, de movilización y de representación (especialmente por la creación de organizaciones dotadas de portavoces), cuyos miembros son ellos mismos los actores principales»[13].

Como lo indican Tilly y Tarrow, toda investigación sobre las políticas del conflicto debería comenzar por situar los sitios del conflicto estudiados (comprendidos como los grupos sociales instigadores de la movilización). Al término de nuestro estudio de terreno, elegimos centrarnos en el movimiento obrero, uno de los principales actores del conflicto sociopolítico en ese período, en el corazón de las contradicciones capital-trabajo y en la intersección entre campo económico, movilizaciones sindicales, universo político y organizaciones partidarias.

La clase obrera (en particular, la industrial) y sus organizaciones desarrollaron un movimiento cuya amplitud y lugar esencial en la estructura social chilena de 1970 permite realizar un recorrido ejemplar por las movilizaciones colectivas protestatarias, junto a otras fracciones de la población urbana. En efecto, en el curso de nuestra investigación, apareció otro sitio de conflicto mayor: el movimiento social urbano, es decir las movilizaciones colectivas de otros sectores sociales subalternos que viven

en las periferias urbanas (los pobladores) y que se movilizan en torno a problemáticas tales como la vivienda, el acceso a los servicios públicos, el abastecimiento, etc.[14], lo que Henri Lefebvre denominó el derecho a la ciudad[15]. Esta orientación metodológica se basa en los trabajos del sociólogo Manuel Castells sobre las luchas urbanas en Chile y América Latina[16]. Esto no significa –por supuesto– que no existan otras experiencias interesantes en ese sentido en el medio rural; muy por el contrario[17]. Podemos decir entonces que intentamos analizar el espacio, la dinámica y las acciones del movimiento obrero y del movimiento social urbano en el contexto del Chile al alba de los años setenta, con la precaución de poner en relación esas luchas sociales con sus lógicas internas, pero también en sus interacciones con la izquierda militante, ampliamente comprometida en esas luchas y con el gobierno de Allende y el Estado chileno. Esto, en un período donde el espacio protestatario estudiado es muy poco autónomo con respecto del campo político y parcialmente construido o alimentado por militantes «multicomprometidos» en el campo sindical y partidario. En efecto, el movimiento obrero está en el corazón del sistema político chileno y de sus agenciamientos

–incluidos el institucional– desde, al menos, comienzos de los años treinta y es uno de los agentes fundamentales del cambio social en el país, característica que no es, por lo demás, específica del Chile de los años setenta. La politóloga Hélène Combes, en sus investigaciones sobre la izquierda mexicana, muestra la necesidad de descompartimentar y abrir el estudio de los movimientos sociales y el de los partidos políticos para ir hacia una aproximación en términos de medio partidario (milieu partisan, noción muy valorada por Fréderic Sawicki) y de multicompromisos militantes[18]. El interés de un estudio sobre las relaciones entre Estado, partidos y movimientos ha sido confirmado por varias publicaciones en el curso de los últimos años[19].

Se desprenden, así, dos ejes de análisis prioritarios. Primero, el de una puesta en perspectiva relacionada con la coyuntura política nacional, puesto que los flujos de conflicto[20] que analizamos están directamente relacionados con el conflicto de clase nacional en un período de agitación de tipo prerrevolucionario. En segundo lugar, la comprensión más estrecha relacionada con las luchas locales a escala de un territorio determinado y, a menudo, reivindicado por los agentes movilizados en tanto espacio reapropiado. Esto permite instalar varios cuestionamientos conexos que intervienen en la formación de las organizaciones protestatarias estudiadas: condiciones de surgimiento y de estructuración interna, repertorios de movilización y representatividad, praxis y discurso (o ethos y logos si

seguimos a Pierre Bourdieu), relaciones con los otros agentes movilizados en el seno del espacio social estudiado, dinámicas de interacción con los partidos políticos, etc. Es a partir de estas reflexiones diversas que intentamos dibujar los diferentes «paisajes de la verdad» de ese «poder popular» chileno.

El período que tratamos está lleno de imágenes heroicas y de mitos que, muchas veces, empañan el trabajo del investigador. Dedicarse al estudio de algunas formas de «poder popular» en un período de ascenso de los movimientos revolucionarios, o que se reclaman como tales, es a veces fuente de confusión. El sólo término «revolución» merecería extensos desarrollos críticos y teóricos (de hecho, a nuestro entender, conviene hablar más bien de proceso revolucionario[21]). Como lo subraya el historiador Pierre Vayssière, «pocas palabras del vocabulario presentan tantos signos dialécticamente contradictorios[22]. Como sea, la anatomía de los fenómenos revolucionarios es hasta hoy una empresa difícil de realizar y las simplificaciones deben ser desechadas si se quiere restituir toda la riqueza de dichos períodos[23]. Por otra parte, incluso Karl Marx siempre se negó a entregar una definición única del concepto de «revolución»

para, por el contrario, demostrar que toda crisis revolucionaria es el producto de un contexto y de contradicciones sociales específicas que no pueden seguir un esquema preconcebido[24]. En cuanto al concepto de «poder popular», se trata de una noción imprecisa y ambigua, que tiene, como veremos, acepciones políticas, prácticas y simbólicas heterogéneas. En términos generales, este concepto fue enarbolado por la izquierda latinoamericana, especialmente después de la revolución cubana. En ese sentido, está históricamente datado y geográficamente limitado, corresponde al contexto de lo que Tomás Vasconi define como «la década larga» en América Latina: período que se extiende desde el 1 de enero de 1959 con la toma del poder por los «barbudos» en La Habana, y concluye con el golpe de Estado en Chile, el 11 de septiembre de 1973[25]. Destaquemos que es, más o menos, el mismo período en el que en Europa se desarrolla lo que Pierre Rosanvallon llama la edad de la autogestión[26]. La referencia al «poder popular» designa entonces una dinámica que se puede identificar durante los períodos de crisis revolucionarias, pero también en varias experiencias colectivas circunscritas a un barrio, una fábrica, un territorio con múltiples puestas en práctica. Esto es precisamente, lo que la filósofa alemana Hannah Arendt destaca en su ensayo Sobre la revolución y que acertadamente calificó de «tesoro perdido de la tradición revolucionaria», un modo de designar los eventos y experiencias políticas que la historiografía dominante ha desestimado hace

demasiado tiempo (empezando por la historia de los consejos obreros[27]).

Para este trabajo, proponemos utilizar y «probar» la noción de «poder popular constituyente», con el objeto de estudiar esas formas creadoras de organización y movilización provenientes «desde abajo»: una dinámica bottom-up (como es llamada por los sociólogos anglosajones) de la cual los agentes del movimiento protestatario –en su diversidad– parecen ser los portadores, durante los breves momentos de ruptura del orden hegemónico que tuvieron lugar en el siglo pasado y principios del siglo XXI. Podemos, entonces, describir el surgimiento desde las clases dominadas movilizadas, de múltiples experiencias de autoorganización, que se oponen de manera dialéctica a los organismos instituidos y a las relaciones de producción y simbólicas hegemónicas, lo que Arendt llama «autogobierno representativo» inspirándose en las revoluciones francesa, estadounidense y rusa. América Latina ha sido salpicada, en diferentes lugares, por esos «destellos autogestionarios» que tienen una identidad y geografía social específica a este continente[28]. En un vasto estudio consagrado a los diversos movimientos de participación y de autogestión latinoamericanos, Francisco Iturraspe insiste:

En diferentes lugares, los trabajadores, actores primordiales de la producción, desarrollan variadas experiencias en las cuales participan y asumen la gestión de las empresas: la participación, la cogestión y la autogestión, en sus diferentes modalidades y con múltiples realidades en su aplicación, expresan un proceso de socialización que no se circunscribe solamente a la producción sino que repercute en todos los niveles de la sociedad[29].

Se trata efectivamente, como lo escribe el pensador crítico Antonio «Toni» Negri, de interesarse en una temporalidad histórica «que hace irrupción, que corta, que interrumpe, disgrega todo equilibrio preexistente y toda posibilidad de continuidad»[30]. En resumen, se trata de un poder que entra en fricción con los «poderes constituidos», es decir, con las formas de dominación instituidas y reguladas, especialmente el Estado o el capital (o fracciones de éstos). Pero si proponemos este concepto, es también desmarcándonos de los trabajos del filósofo italiano y de su teoría de las «multitudes» sociales o de la simple constitución de contrapoderes[31]. Cornelius Castoriadis ha escrito bastante sobre esta relación entre instituyente e instituido en su búsqueda de una praxis de la autonomía[32]. Recientemente, el máximo representante de la «nueva historia

social» chilena, Gabriel Salazar, en su amplio estudio sobre el «bajo pueblo» también hace referencia al «poder constituyente de los asalariados e intelectuales» o incluso al «poder ciudadano» a lo largo del siglo XX, concebido como el ejercicio de la «soberanía popular» a través de las diferentes experiencias de movilización social, y especialmente sus capacidades de gestión a nivel comunal o «autoeducativas» frente a constituciones políticas impuestas «por arriba» (en 1830, 1925 y 1980)[33]. Si estas reflexiones de Salazar son útiles para la renovación de la historia chilena, su uso de la noción de «poder popular constituyente» es, sin embargo, bastante ambiguo y finalmente poco útil para nuestro estudio. Además, como lo han subrayado varios investigadores (Sergio Grez, Igor Goicovic, Jorge Rojas, Miguel Fuentes), el enfoque de Salazar se centra en un vasto y cambiante «sujeto social», sin conectarlo directamente al campo político sobre el cual y en el cual, sin embargo, interactúa[34].

Por nuestra parte, si desde el año 2005 proponemos el concepto de «poder popular constituyente», es para –justamente– incluir el conjunto de sus dimensiones políticas, económica e ideológicas y subrayar, en este espacio del movimiento social del Chile de comienzo de los años setenta, la centralidad del movimiento obrero y de sus organizaciones sindicales y partidarias. Nuestro concepto también se hace eco de aquél, marxista, de «dualidad de poderes» o «poder dual», noción que fue desarrollada por León Trotsky, después de su participación en el soviet de San Petersburgo en 1905 y profundizada en su trabajo sobre la revolución rusa. En este último, intentó demostrar cómo, en un momento dado, la irrupción de las clases populares en la escena política puede permitir que el poder político pase de manos de los sectores dominantes a las de los dominados, que los substituyen en la conducción de la sociedad. Se trata de una fase transitoria y eminentemente inestable, durante la cual coexisten y se enfrentan el antiguo orden y la nueva sociedad[35]. Este enfoque será luego ajustado y complementado por múltiples investigadores, incluidos aquellos fuera del campo del marxismo, como Charles Tilly[36], con el objeto de estudiar los fenómenos de las grandes crisis sociales o revolucionarias. La experiencia chilena se inscribe parcialmente en este corto siglo XX abierto por las revoluciones mexicana y rusa[37], pero sería ilusorio compararla o buscar en ella sistemáticamente las huellas de estas últimas, puesto que tanto las sociedades como el período concernido son diferentes. Junto al cientista político Michel Dobry, advertimos en contra de la ilusión de una «historia natural» de las revoluciones y crisis políticas que amenazan toda investigación que busca –legítimamente– subrayar las grandes etapas de esos procesos, con el riesgo de restituir de modo teleológico el encadenamiento de las diferentes fases a partir

de ideas preconcebidas, basadas en el resultado esperado de tales crisis (según la lógica del método regresivo[38]).

Sin embargo, como lo ha sugerido Ernest Mandel, en una antología ya clásica, el fenómeno de dualización de poder constituye una de las tramas comunes de las crisis revolucionarias contemporáneas[39]. Nuestro concepto de «poder popular constituyente» comprende, en parte, las nociones de «control obrero» y de «autogestión», pero ofrece una visión más amplia y no solamente centrada en las movilizaciones obreras. A modo de «tipo ideal» weberiano y de primera definición, digamos que consiste en la creación de experimentaciones sociales y políticas, de contrapoder y contrahegemonías organizadas, así como de nuevas formas de apropiación colectiva (a menudo limitadas y contradictorias), que se oponen –en parte o totalmente– a la formación social dominante y a las instituciones establecidas. Concretamente, corresponde a un cuestionamiento relativo –o total– de las formas de organización del trabajo, las jerarquías sociales, los mecanismos de dominación materiales o simbólicos. Retomando una reflexión del historiador Luis Vitale en un breve folleto de educación popular del año 1994, el «poder popular constituyente» podría entenderse como

el resultado de un proceso de lucha, de acumulación de fuerzas, en que se van relacionando las reivindicaciones inmediatas con las necesidades de crear una sociedad nueva. Se da en un periodo ascenso de las luchas […] El poder popular puede expresarse, entonces, en diferentes niveles. Ser un organismo en una fase embrionaria que realiza tareas limitadas de poder local, y también convertirse en un poderoso poder popular que, comenzando por ejercer realmente el poder en una zona determinada, llegue a plantearse como poder dual a escala nacional[40].

Rechazamos igualmente en este trabajo la imagen fetichizada del consejo obrero o del soviet, supuestamente presente en estado puro en toda crisis revolucionaria, para, por el contrario, intentar describir la dinámica compleja y las movilizaciones multisectoriales que ocurrieron durante la Unidad Popular y que constituyen su riqueza y especificidad.

¿«La revolución desde abajo»? Historiografía crítica de la Unidad Popular

Un «océano» bibliográfico[41]

Una primera constatación: el extraordinario volumen de libros que abordan el tema de la Unidad Popular (UP). La experiencia chilena ha simbolizado tanto, ha sido tan discutida, que el investigador se encuentra frente a una bibliografía descomunal. Max Nolff, por ejemplo, en 1993 pudo identificar más de 200 libros consagrados solamente al presidente Salvador Allende[42]. Veinte años después esa cifra está muy por debajo de la realidad editorial. Uno de los peligros es entonces «ahogarse» en este océano bibliográfico, por lo que se hace indispensable realizar una selección previa, cualitativa y cuantitativa. A pesar del carácter a veces arbitrario y por cierto incompleto de tal operación, presentaremos aquí las principales tendencias de análisis y algunas de las obras más representativas sobre este tema. Se puede elaborar una primera distinción basándose en el carácter científico del escrito, más exactamente verificando la seriedad –o no– de la metodología de investigación, la diversidad, el carácter sistémico y la originalidad del trabajo.

Durante los años que siguieron al golpe de Estado, numerosos libros fueron redactados por actores «comprometidos» en la lucha contra la dictadura. Corresponden a ensayos militantes y testimonios escritos desde la urgencia de la resistencia política o de la solidaridad internacional. Como lo destaca Hugo Cancino, el objeto de la mayoría de estas publicaciones era

crear un sentimiento de solidaridad con el pueblo chileno y de indignación y condena moral de la dictadura militar […] El género ensayista, a pesar de su intento de explicar y formular hipótesis sobre el decurso de la experiencia chilena, superando con ello la crónica periodística, no remite en la mayoría de los casos a un trabajo sistemático de fuentes primarias y secundarias[43].

En esta categoría, encontramos múltiples escritos que hoy aportan poco a los investigadores en términos de datos de primera mano. Sin embargo, varios tienen aún hoy un valor ineludible y fundamental. Redactados por intelectuales, dirigentes partidarios, militantes, vinculados directa o indirectamente a la UP,

nos entregan puntos de vista, vivencias, recuerdos y espacios de una memoria política que sería difícil reconstruir sin esos textos. Es necesario entonces utilizarlos –aunque con precaución–, ya que pueden servirnos tanto como archivos históricos (sobre las representaciones subjetivas de la época) como fuentes de información. Citemos, por ejemplo, los escritos de un importante asesor político de Allende: el politólogo catalán Joan Garcés. Sus libros sobre el proceso político de la «vía chilena», reeditados regularmente desde 1974, permiten comprender desde dentro la posición del gobierno y la apuesta estratégica de la izquierda, así como sus dilemas internos frente a la coyuntura[44]. El libro de Carlos Altamirano, entonces secretario general del Partido Socialista (PS) chileno, es también un clásico en el género[45], al igual que los estudios de uno de los economistas de la UP, Sergio Bitar[46], o incluso la compilación de obras de Pedro Vuskovic, ministro de Economía durante un período[47]. Agreguemos el diario del sociólogo francés Alain Touraine, que nos ofrece sus reflexiones del día a día durante su estadía en Chile[48].

Estos textos fueron redactados en los años setenta. Más tarde, numerosos actores intentaron aportar su grano de arena al edificio de la reconstrucción de la memoria, con la voluntad de entender los mecanismos sociopolíticos que condujeron al régimen militar del general Pinochet, pero también con el objeto de explicar y justificar su propio accionar histórico. Citemos las memorias de los dirigentes del Partido Comunista como Orlando Millas[49] o Luis Corvalán[50], y también las conversaciones más recientes de Carlos Altamirano con Gabriel Salazar[51] o con la periodista Patricia Politzer[52], que nos entregan nuevos elementos tanto sobre los setenta como sobre la evolución-«renovación» de la izquierda chilena después del golpe y durante la posdictadura.

Con el paso del tiempo y más allá de los testimonios o de los ensayos biográficos, los historiadores y académicos se adentraron también en los mil días de la UP. No obstante, sería ilusorio trazar una línea muy delimitada entre ensayos y trabajos académicos. A menudo, los primeros universitarios que trabajaron sobre el periodo fueron también, y al mismo tiempo, actores del proceso político chileno y sufrieron, personalmente y/o sus cercanos, la represión y el destierro: retomando estudios y realizando doctorados en el extranjero, empezaron a abrir camino en la historización de la UP, pero siempre desde su experiencia política y vivencias personales en Chile. Como lo anota Jorge Rojas, pensar en periodo de dictadura o desde el exilio político, sin lugar a dudas determinó en gran medida la producción intelectual y la manera de pensar históricamente el tiempo presente chileno durante muchos años, y en particular

la historia del gobierno de Allende[53].

Como todo trabajo de investigación en historia o en ciencias sociales, los estudios –pasados o más recientes– consagrados a la Unidad Popular pueden ser divididos en grandes corrientes de análisis. La historiografía de este período es sumamente conflictual y ha sido fuertemente marcada por el violento quiebre que representa el golpe de Estado. Los enfoques siguen siendo bastante diferenciados y reflejan los distintos presupuestos teóricos, metodológicos e ideológicos de sus autores. En un análisis iluminador y polémico, el historiador Luis Moulian distingue tres grandes corrientes en la historiografía chilena que trata el período de las grandes reformas en Chile, es decir entre 1964 y 1973[54]. Según Moulian, la inmensa mayoría de los trabajos sobre la UP se inscribe, de un modo u otro y aunque con matices, en el marco de una de estas tendencias teórico-analíticas fundamentales. No obstante, como lo veremos más adelante, es importante subrayar que una nueva generación de investigadores intenta cruzar las fronteras epistemológicas y sobre todo metodológicas, para proponer una renovación de enfoques, estudios de terrenos y análisis.

La primera gran familia epistemológica deriva de la historia tradicionalista y neoconservadora, siendo sus representantes más conocidos Ricardo Krebs y Gonzalo Vial. Este último ve en la Unidad Popular la culminación de la violencia política fomentada esencialmente por la izquierda a favor de «modelos o utopías revolucionarias». El año 1973 representa así el punto culminante de una crisis de autoridad y de los valores morales nacionales, resultado de una «sobreideologización» del conjunto de la sociedad y de un lento proceso de «decadencia nacional» que finalmente obligó a las Fuerzas Armadas a intervenir para restablecer el orden. Este creciente e incontrolado desorden tendría su origen, por una parte, en las reformas sociales y, por la otra, en la acción desestabilizadora de los partidos políticos, todos favorables a «proyectos globales» de transformación social[55]. Encontramos enfoques parecidos en los escritos de Mario Góngora sobre el Estado en Chile.

La segunda tendencia historiográfica sería «mesohistórica» y, aunque bastante heterogénea, cercana al pensamiento del cristianismo social. Esta corriente es representada por historiadores como Sergio Villalobos o Cristián Gazmuri y por Genaro Arriagada en el campo de la ciencia política. Se caracteriza por el interés en las descripciones empíricas, por el lugar dedicado al relato de los hechos (y finalmente por una visión positivista de la historia). Muy fáctico, este tipo de análisis deja poco lugar a la interpretación y al debate teórico. La «vía chilena al

socialismo» es entonces percibida como un camino que conduce desde la vía institucional, heredada del gobierno democratacristiano (1964-1970), hasta las veleidades del «poder total», encarnado por Salvador Allende. Podríamos agregar a esta tendencia el capítulo XII de la Historia general de Chile, publicada por Cambridge University, también influenciada por el sello de una historia esencialmente descriptiva[56].

Finalmente, un tercer grupo de interpretación destacado por Luis Moulian es marxista o que utiliza algunas categorías «marxianas». Durante casi tres décadas, el marxismo ortodoxo dominó ampliamente la historia del movimiento obrero chileno, con autores como Hernán Ramírez Necochea, miembro del PC chileno, marxismo universitario que estuvo marcado por el determinismo histórico y una visión teleológica de los procesos políticos:

En Chile, como en otras latitudes, los obreros del sector industrial y minero pasaron a constituir los grandes protagonistas de la historia de la salvación y redención de la humanidad. Esta filosofía de la historia hacía casi inevitable que el ordenamiento de los hechos siguiera una secuencia que se encaminaba hacia un desenlace conocido y necesario[57].

Con la caída del muro de Berlín y el descalabro de los «socialismos reales», tales certezas deterministas se desmoronaron. Hasta su fallecimiento en 2010, el principal representante del materialismo histórico en Chile fue Luis Vitale, historiador marxista heterodoxo y prolífico, cofundador del MIR (Movimiento de Izquierda Revolucionaria) e influenciado por el trotskismo y el guevarismo. Sus últimas contribuciones sobre la UP muestran una cierta apertura problemática y su voluntad por colaborar con una nueva generación de investigadores[58]. Esta corriente considera el período de la UP como «prerrevolucionario» y el gobierno de Allende como «democrático avanzado» pero prisionero del legalismo burgués y de la táctica de una «revolución por etapas», desbordada por la dimensión del conflicto de clase. En relación con este enfoque, es indispensable añadir los trabajos más actuales del politólogo Juan Carlos Gómez, que constituyen un aporte importante a la renovación historiográfica de la Unidad Popular, centrando su reflexión sobre el derecho de propiedad en Chile (1925-1973) y analizando cómo la democratización que significó la UP, al tensionar el derecho de propiedad privada, explica en gran parte la opción de las clases dominantes por la instauración de un régimen

autoritario[59]. Luis Moulian ubica también al historiador (y premio nacional) Gabriel Salazar en esta categoría, aunque esta clasificación es discutible, ya que Salazar no se reconoce en esta filiación marxista. En su amplia Historia de Chile, codirigida con Julio Pinto, insiste –en una perspectiva gramsciana– en las nociones de «clase política civil» y «clase política militar» e inscribe a la UP como continuidad de los frentes populares de los años treinta, describiendo un régimen desarrollista de tipo «nacional-populista en crisis»[60]. Finalmente, entre los investigadores de «sensibilidad marxista», se encuentra también el sociólogo Tomás Moulian, quien trabajó durante largo tiempo con el sociólogo Manuel Garretón, para luego acercarse a ciertos paradigmas marxistas. Sin embargo, sus «conversaciones con Allende» son más bien del orden del ensayo filosófico que un análisis estrictamente histórico[61].

¿Crisis del «sistema político» y destrucción del centro?

Las distinciones realizadas más arriba son seguramente simplificadoras, pero tienen el mérito de balizar el terreno. Sin duda, necesitarían ser ampliamente afinadas: numerosos son los autores chilenos que estudiaron, e investigan hoy, la Unidad Popular y que no se reconocerán completamente en ninguna de estas tres grandes categorías. Además, es necesario incluir las numerosas investigaciones realizadas fuera de Chile, y dejadas de lado por Luis Moulian en la clasificación propuesta. Por ejemplo, entre muchos otros, sería necesario recordar los diversos estudios del sociólogo estadounidense marxista James Petras o de Tanya Harmer sobre el impacto de la Guerra Fría en Chile[62]. En lo que se refiere a la producción francesa, podríamos citar los trabajos de la socióloga Marie-Noëlle Sarget o de Ingrid Seguel-Boccara, dedicado a las «pasiones políticas» durante la Unidad Popular[63]. También podría ser interesante, con el objeto de mostrar la gran diversidad de entradas posibles respecto de la UP y de investigaciones en curso, hacer una clasificación historiográfica según las temáticas abordadas. De nuevo, algunos ejemplos: las relaciones internacionales (además de Harmer citada más arriba, estudios de Olga Ulianova sobre la influencia soviética[64] o el enfoque en términos de «sistema-mundo» de Luis Garrido[65]), la política económica del gobierno (tesis doctoral realizada en Bélgica por Héctor Vega[66] o el libro de Edén Medina sobre el «plan cibernético» de planificación de Allende[67]), la memoria militante (José del Pozo[68]), las Fuerzas Armadas (libro de

Jorge Magasich sobre los marinos[69]), la CUT y el movimiento sindical (tesis doctoral del historiador Augusto Samaniego[70]), el debate cristiano-marxista (investigación de Marcos Fernández), la problemática de los medios de comunicación (trabajos de Armand Mattelart y del politólogo Antoine Faure), la problemática cultural, televisual y musical (artículos de César Albornoz), etc. Para completar tal panorama, podría ser también de gran interés adentrarse en una historia social de los de «arriba»: por ejemplo preguntándose ¿cómo vivieron la UP los grandes latifundistas y cómo actuaron frente a la reforma agraria? ¿Cómo entender y hacer la historia de los gremios patronales y de las clases dominantes durante este periodo clave?

Pero sin duda son, sobre todo, las investigaciones anglosajonas las que han tenido una influencia duradera en el modo de comprender la UP y su violento desenlace. En particular, es el caso del importante trabajo desarrollado, a partir de los años cincuenta, por la escuela funcionalista de Estados Unidos alrededor de Talcott Parson. En cuanto a Chile, ese enfoque es todavía dominado por las investigaciones de los años ochenta del equipo de Arturo Valenzuela[71] (Universidad de Columbia), que produjo obras de referencia, reflexiones basadas en la concepción de la democracia liberal y de sus necesarios consensos, tal como ha sido pensado por el politólogo español Juan Linz. Esta escuela centra su interpretación en el sistema político durante la Unidad Popular, interesándose en el campo institucional-estatal y en el funcionamiento de los partidos políticos (estrategia, dirección, relación con las instituciones y el Parlamento). Resumiendo, la UP es interpretada como un momento de destrucción acelerada del sistema de democracia representativa, bajo el peso de un proceso de polarización y de ruptura del «centro político». Según Valenzuela, una de las características del sistema político chileno desde los años treinta, es la existencia de una articulación entre los «extremos políticos» (comunistas y socialistas, a la izquierda, y conservadores a la derecha) y un centro dirigido por el Partido Radical, con características flexibles (es decir que puede aliarse tanto con su izquierda como con su derecha). Un movimiento pendular que modera al conjunto del sistema y favorece la búsqueda de alianzas y consensos mayoritarios. Ahora bien, a partir de los años sesenta, la aparición de la Democracia Cristiana –partido que afirmando un «camino propio»– firmaría la sentencia de muerte de dicho equilibrio, desplazando a los radicales y abriendo una caja de Pandora de la triangularización del espacio político: los famosos «tres tercios», cada uno articulándose en torno a proyectos globales distintos, excluyentes y minoritarios (siendo la «vía chilena al socialismo» el último y el más radical). La producción académica chilena fue particularmente sensible a

este esquema epistemológico: una revisión de los trabajos de Flacso de los años ochenta y noventa y de los libros ya «clásicos» sobre proceso político, democracia y democratización de los sociólogos Manuel Garretón y Tomás Moulian demuestran el predominio de tales análisis[72]. Más recientemente, el historiador liberal Alfredo Jocelyn-Holt sigue reivindicándose de esta corriente teórica: describe el «frágil equilibrio» del sistema político chileno y, a partir de 1964, a causa de lo que denomina el «mesianismo ideológico», una radicalización política, juzgada destructiva para la estabilidad democrática[73].

En un trabajo realizado durante el año 2004, los historiadores Mario Garcés y Sebastián Leiva compararon los argumentos de un conjunto de quince obras, publicadas en Chile entre 1974 y 2004, consideradas como ineludibles sobre el tema. Sus primeras conclusiones establecen que, aunque los diversos textos provienen de diferentes miradas y variadas disciplinas,

la tendencia de la mayoría de los estudios ha sido, hasta ahora, constituir en objeto de análisis casi exclusivamente a los actores políticos «formales», es decir, los partidos políticos, las temáticas vinculadas a ellos (programas, tácticas, alianzas) y los ámbitos donde estos concentraban su accionar (sobre todo los diversos espacios del aparato estatal[74]).

Así, el énfasis está puesto de manera casi exclusiva o insistente, en el papel de los partidos políticos y en el sistema institucional, considerando que estos encarnaron a los actores fundamentales del proceso, principalmente vía negociaciones a nivel del Congreso, gracias a la política pública llevada a cabo por el gobierno de Allende o por el peso de estos partidos en la dirección del movimiento obrero. Sin embargo, en el seno de esta matriz, se pueden observar otras corrientes con diferentes énfasis. Algunos siguen apuntando a la desaparición del centro del sistema político y, en ese sentido, retoman –actualizándolas– las teorías funcionalistas de Valenzuela. Paradójicamente, historiadores críticos que proponen romper con esta orientación dominante, para recomponer un contexto sociohistórico mucho más amplio, no siempre lo lograron: en su obra, el historiador Luis Corvalán Márquez, a pesar del real interés de su detallado trabajo sobre las tensiones y confluencias que atravesaron la política chilena entre 1970 y 1973, no siempre alcanza este objetivo[75]. Otros autores concentran su atención en el peso de las contradicciones existentes entre los partidos políticos y específicamente en aquellos que formaron parte del

gobierno, empezando por el PC y el PS. Así, Tomás Moulian, después de haberse distanciado de manera notable de sus escritos con Garretón para acercarse al marxismo, argumenta que la derrota de la «vía chilena al socialismo» tiene efectivamente sus orígenes, por un lado, en la incapacidad del gobierno para encontrar un terreno de negociación válido con la Democracia Cristiana y, por el otro, en la existencia de una división fratricida en el seno de la izquierda entre los «revolucionarios moderados» (PC, ala reformista del PS, sectores cristianos) y los sectores «rupturistas», cuyo peso desestabilizador fue acentuado por la presencia de la izquierda extraparlamentaria, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR[76]). Debemos señalar que es también, con algunos matices, la versión «oficial» defendida «post-golpe» por numerosos dirigentes de la izquierda chilena (entre ellos, Luis Corvalán Lepe, ex secretario general del PC).

No cabe duda que estos diferentes enfoques, que intentan descifrar a la UP esencialmente a través de un estudio del campo político, son un aporte para todos aquellos que quieren comprender estos mil días de historia chilena. La política gubernamental, la acción de los partidos, las reacciones del sistema institucional, la hostilidad de la mayoría del aparato estatal al programa de Allende y la acción de los dirigentes son efectivamente fundamentales. Y quedan obviamente temas por investigar en esta dirección. La reciente biografía política de Salvador Allende publicada por el historiador español Mario Amorós es una demostración de que, incluso sobre un personaje ya muy conocido, se puede renovar la historiografía gracias a un sólido trabajo de fuentes[77]. Otro ejemplo: los estudios sobre las derechas emprendidos en Chile por Verónica Valdivia Ortiz de Zárate[78] (o en Francia por Stéphane Boisard) abren nuevas interrogantes de trabajo muy estimulantes sobre las dinámicas partidarias.

Sin embargo, el peso de la visión funcionalista todavía sigue muy presente en varios estudios. Por nuestra parte, creemos que el principal problema de estas diversas tesis es que tienden (más allá de sus diferencias) a pensar la época de la vía chilena al socialismo de manera casi exclusiva desde el funcionamiento del régimen político-institucional y ven su destrucción en 1973 como el resultado de tensiones o de una radicalización meramente ideológica:

expuestas las cosas de esta forma, los grandes responsables políticos e históricos del quiebre del régimen democrático nacional serían, por lo tanto, el gobierno de la Unidad Popular, en particular, y los partidos políticos, en general. El primero por intentar realizar profundos cambios estructurales sin contar con el respaldo

mayoritario a nivel electoral y social, y los segundos, por no haber sido capaces de establecer alianzas políticas estables y duraderas que permitieran la continuidad del sistema político. Por otro lado, los analistas han señalado también al sistema electoral e institucional existente como responsable del quiebre democrático, puesto que éste permitía acceder al gobierno a partidos o coaliciones partidistas sin las mayorías electorales necesarias para dar estabilidad al sistema político[79].

Por nuestra parte, apostamos que la única manera de entender realmente este proceso prerrevolucionario es descentrando nuestra mirada hacia «abajo» y hacia los conflictos de clases, pensando este periodo en tanto consecuencia de un conflicto mucho más fundamental: las profundas tensiones que atravesaban en ese momento la estructura social chilena y las luchas que se daban en torno a la propiedad de los medios de producción, como también de las riquezas del país.

¿La «revolución desde abajo»?

Para una visión renovada de la Unidad Popular desde arriba y desde abajo

A pesar de las numerosas investigaciones ya realizadas sobre Chile, el período de la Unidad Popular sigue siendo rico en campos de investigación no explorados o poco desarrollados. En su balance, en 2004, Garcés y Leiva identifican dos «grandes omisiones». La primera, relacionada con el rol jugado por la intervención imperialista de EEUU en la desestabilización del régimen. A cuarenta años del golpe, relativizaremos esta afirmación, en la medida que comisiones parlamentarias (como el informe Church en EEUU, 1974) y varias investigaciones serias ya han detallado la participación del gobierno de Nixon. Los excelentes trabajos de Peter Kornbluh[80] o el reciente libro de Luis Corvalán Márquez[81] sobre el nivel de intervención de la CIA y financiamiento de los sectores más conservadores de la DC para desestabilizar el gobierno de Allende, son aportes importantes que permiten comprender mejor cómo el gobierno de Estados Unidos fue un actor clave del «drama chileno». Sin embargo, es cierto

que las recientes desclasificaciones de nuevos archivos de los servicios secretos de EEUU[82] en Paraguay (archivos de la Operación Cóndor) y ahora último, de miles de archivos de la dictadura en Brasil, abren un nuevo terreno de investigación en torno a ésta temática y sobre la influencia de los regímenes autoritarios de la región (Brasil en particular[83]) en la preparación del golpe en Chile.

La otra «omisión» historiográfica y zona oscura a explorar es paradojalmente la que se refiere a uno de los aspectos más relevantes de este proceso histórico: las luchas de los trabajadores, el impulso del movimiento popular y los diversos repertorios de acción colectiva.

En la mayoría de los trabajos consultados los sectores populares no constituyen actores sociales y políticos definidos por una historicidad propia. Son pocos los historiadores que han indagado en este período sobre los movimientos sociales y cuando lo han hecho, han reproducido los enfoques dominantes[84].

Es precisamente aquí donde se sitúa una posible renovación historiográfica en profundidad, la que está en la base de nuestro trabajo: reencontrar la dinámica del movimiento obrero y social, reubicar en el centro de nuestro análisis los disensos de clases y mostrar en qué medida pudieron –o no– adquirir una mecánica propia, aunque por cierto no aislada del campo partidario o institucional. En esta óptica, el legítimo y necesario «retorno a lo social» debe evitar la ilusión de un proceso separado de lo político, para saber articular, al contrario, los dos espacios intrínsecamente ligados entre sí durante este periodo de grandes cambios revolucionarios. Como lo señala Sergio Grez, después del boom de la «nueva historia» chilena (a mediados de los años ochenta) que reintrodujo la vida cotidiana de los trabajadores pobres y del «bajo pueblo» en el centro del debate académico, se trata de elaborar una historia social y política de los actores populares[85].

Los sociólogos Patrick Guillaudat y Pierre Mouterde, en sus estudios sobre los movimientos sociales durante la dictadura, señalaron que para el período precedente, relativo a ese famoso «poder popular», todavía «queda por hacer un balance». Agregan:

debería entrar en la discusión toda la cuestión del rol preciso de los organismos

de doble poder y específicamente el de los «Cordones Industriales», como medio para acrecentar la participación obrera y popular, para unificar las diferentes clases dominadas, para dejar los aparatos represivos de la ex clase dominante sin capacidad de causar daño, en la perspectiva de una toma de poder popular verdaderamente democrática[86].

Esta observación responde como un eco a la que formulara ya en 1974 Alain Joxe[87]. La historiadora María Angélica Illanes insiste también en la necesidad de reconstruir esta «historia desde abajo» y sobre el poder popular, aún desconocida, y que califica de «tema muy central de la experiencia chilena de la Unidad Popular[88]».

Precisemos, sin embargo, que existe hoy una cierta cantidad de trabajos en esta materia. Y algunos fueron verdaderamente pioneros. En Francia, desde 1974 el militante Maurice Najman analiza en caliente este fenómeno en Le Chili est proche; también lo hace la revista Les Temps Modernes. La memoria de licenciatura de Jorge Magasich, escrita en 1980, es también un trabajo notable, puesto que fue realizada en el exilio con un acceso a las fuentes muy limitado[89]. Durante largo tiempo, la investigación de Hugo Cancino sobre la «problemática del poder popular» constituyó la única publicación académica seria sobre el tema[90]. Desgraciadamente este amplio trabajo, muy marcado por las concepciones eurocomunistas reivindicadas por el autor, tuvo poco eco en los círculos universitarios durante casi dos décadas. Miguel Silva, por su parte aborda los cordones industriales más bien como compilador e historiador militante, a través de un libro importante que entrega muchas fuentes y testimonios[91]. Para Silva, se trata de describir la historia de la UP desde «el punto de vista del ‘socialismo desde abajo’. Sin embargo, para María Angélica Illanes, esta compilación es a veces de difícil uso: «A lo largo de sus casi 600 páginas nos sumerge en la incomprensión del proceso y nos mantiene en la angustia de su oscuridad, dañando la experiencia y la comprensión histórica de la Unidad Popular[92]».

En los años ochenta, es Peter Winn quien abrió una brecha historiográfica con sus «tejedores de la revolución». Este historiador estadounidense centró su doctorado en el estudio de la industria textil Yarur, combinando, de modo original, la historia oral (numerosos testimonios) y la historia local (estudio de una industria). En su investigación logra establecer una visión general del

proceso, al mismo tiempo que restituye en detalle los conflictos dentro de la empresa[93]. A través de una historia a escala humana, este autor opone la «revolución desde arriba» encarnada en el gobierno y Allende, a la «revolución desde abajo» en gestación en ese entonces, en las fábricas nacionalizadas y las clases populares[94]. Por otra parte, es esencial relevar que está en camino la construcción de una nueva historia social de la UP, un fenómeno valioso que va en incremento desde que hemos terminado nuestro doctorado (base de este libro). Es lo que demostraron el trabajo sobre las mujeres de derecha de Margaret Power o las dos obras colectivas coordinadas por Julio Pinto[95]. Las temáticas abordadas no dejan de lado el campo institucional (con un análisis de la crisis del discurso estratégico de los partidos de izquierda y otro dedicado a las Fuerzas Armadas), pero se detienen igualmente en el movimiento sindical y sus disidencias, en los comités de base de la Iglesia y en el movimiento «Cristianos por el socialismo», en las producciones culturales y musicales populares, en las poblaciones de los barrios periféricos, etc. Una nueva generación de historiadores y cientistas sociales chilenos y extranjeros está comprometida en esa renovación, y en particular en reconstruir la historia del poder popular. Citemos, como ejemplo algunos trabajos que se inscriben en esa estela: las investigaciones de Boris Cofré sobre pobladores y el campamento Nueva Habana[96], el minucioso trabajo de Renzo Henríquez Guaico sobre la comuna de Maipú, el «poder del campo» y el Cordón industrial Cerrillos[97], el trabajo de Sandra Castillo sobre los cordones industriales y la sociabilidad obrera[98], las investigaciones de Sebastián Leiva y Fahra Neghme sobre el papel del MIR en la construcción del poder popular[99] o la historia oral de los cordones industriales coordinado recientemente por la historiadora Ana López[100]. Desde la historia militante y el trabajo cultural alternativo, varios colectivos también se proponen rescatar esta historia de lucha: es el caso de «Pepe» Burgos con el taller audiovisual Llalliypacha[101], del «museo obrero Luis Emilio Recabarren[102]» o de la compañía de teatro «Tarea Urgente»[103]. Algunos actores de estas experiencias también ha publicado valiosos relatos sobre sus historias militantes; entre ellos, destacan Guillermo Rodríguez[104] y Rafael Kries[105], aunque desde perspectivas distintas.

No obstante, queda mucho por conocer e investigar: según Mario Garcés, considerando los aun pocos trabajos existentes sobre el tema, uno de los desafíos epistemológicos es cuestionar la realidad, los mitos y las lógicas de esta «revolución desde abajo[106]». Es también nuestro punto de partida en esta investigación, que comenzamos a desarrollar en un primer libro de historia oral publicado en 2004. La técnica de la entrevista oral semidirigida combinada con

el trabajo sobre las fuentes escritas (o más bien lo que queda después del golpe de Estado…) permite evitar los análisis reduccionistas. Relacionados con los archivos y fuentes escritas, los relatos de vida permiten restituir la dimensión microsocial de las acciones colectivas. En resumen, comprender de qué modo las movilizaciones y los recorridos individuales se articularon con el conflicto político global[107]. Nos dedicamos entonces al estudio de la dinámica contradictoria y diacrónica entre la acción del gobierno de Allende y un eventual «poder popular» en gestación[108]. Para ello, nos enfocamos primero en la estrategia del gobierno de la UP y específicamente en su política de «participación de los trabajadores» dentro del sector nacionalizado, llamado el «Área de Propiedad Social» (APS). Se trata, en cierto modo, del estudio de un «poder popular constituido» desde arriba o institucionalizado, contemplado por el programa de gobierno y la dirección de los principales partidos de izquierda. Paradojalmente, este aspecto ha sido ampliamente abandonado por los investigadores, aunque es un dato central que podría explicar cómo se complementan, entran en fricción o se oponen medidas gubernamentales y diversas formas de «poder popular constituyente». Este ángulo de investigación es, por lo demás, confirmado por un estudio preliminar llevado a cabo por Flacso, en agosto 1972. Aunque este proyecto científico no pudo ser terminado, un equipo de sociólogos pone de relieve la importancia de un estudio del APS y del «proceso de incorporación de los trabajadores[109]».

Con el objeto de promover una comprensión contextualizada de esta dinámica social a reconstruir, intentamos mostrar en qué marco interactúa. Es por esta razón, que inscribimos, en un primer momento, esta problemática en su perspectiva histórica y recordamos brevemente la composición del movimiento social urbano en 1970, las orientaciones de la izquierda chilena y el proyecto político de la Unidad Popular. Los siguientes capítulos evocan los diferentes episodios de contestación[110] y expresiones de las luchas urbanas hasta el golpe de Estado. La segunda parte está dedicada a las iniciativas tomadas por el gobierno de Allende en favor de la participación popular y a sus límites; se consagra a los primeros signos de desborde y de creatividad provenientes de los conflictos urbanos y especialmente a la radicalización del movimiento obrero industrial. La tercera parte intenta analizar la génesis y desarrollo de los «cordones industriales», particularmente a partir de octubre 1972, donde se abordan sus condiciones de surgimiento, estructuración y expresión cultural. Revisamos también las tensiones que se acumulan alrededor de esta cuestión en el seno de la izquierda, del movimiento sindical y del gobierno, así como sobre las otras dinámicas del espacio del movimiento social urbano, especialmente aquellas

vinculadas a los pobladores y al abastecimiento en los barrios pobres. Finalmente, la última parte está dedicada a realizar una presentación de la estructuración nacional de estos organismos, sus últimas movilizaciones e intentos de coordinación. Procura poner en su lugar al discurso y la praxis real de esas políticas del conflicto, presentando su inscripción territorial y un panorama de su repertorio de acciones. El último capítulo explica la situación en víspera del golpe de Estado.

1 Gaudichaud, Franck, Étude du mouvement social urbain chilien : « pouvoir populaire» et dynamique des Cordons industriels (1970-73), Thèse de doctorat en science politique sous la direction de Michael Löwy, Université Paris VIII, Laboratoire «Théorie du politique et rapports sociaux», 2005 (en línea: http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00788830).

2 Cours-Salies, Pierre, «Un futur antérieur et un présent». En Cours-Salies, Pierre, Vakaloulis, Michel, Les mobilisations collectives. Une controverse sociologique, París, PUF, Actuel Marx, 2003, pp. 55-80.

3 Déloye, Yves; Voutat, Bernard, «L'hybridation de la science politique», Faire de la science politique, París, Belin, Coll. SocioHistoires, 2002, pp. 7-24.

4 Béroud, Sophie; Mouriaux, René; Vakaloulis, Michel, Le mouvement social en France, París, La Dispute/Snédit, 1998. Para una reflexión general, consultar Neveux, Erik, Sociologie des mouvements sociaux, París, La Découverte, Coll. Repères, 1996; Chazel, François, «Mouvements sociaux». En: Boudon, Raymond (dir.), Traité de sociologie, París, PUF, pp. 263-312 y Mathieu, Lilian, Comment lutter? Sociologie et mouvements sociaux, París, Textuel, Collection La Discorde, 2004.

5 Vakaloulis, Michel, «Antagonisme social et action collective». En Travail salarié et conflit social, París, PUF, Actuel Marx, 1999, pp. 221-248.

6 Tilly, Charles; Tarrow, Sidney, Politique(s) du conflit. De la grève à la révolution, París, Presses de Sciences Po, 2008. Ver también: Tilly, Charles, From mobilization to revolution, Reading-Massachusetts, Addison-Wesley, 1976 y McAdam, Doug, Tilly, Charles, Tarrow, Sidney, Dynamics of contention, Cambridge, CUP, 2001.

7 Fillieule, Olivier; Agrikoliansky, Eric; Sommier, Isabelle (dir.), Penser les mouvements sociaux. Conflits sociaux et contestations dans les sociétés contemporaines, París, La Découverte, coll. «Recherches», 2010.

8 Según Lilian Mathieu, «El concepto de espacio de los movimientos sociales designa el universo de práctica y sentido, relativamente autónomo al interior del mundo social, en el seno del cual las movilizaciones protestatarias están unidas por relaciones de interdependencia» en «L'espace des mouvements sociaux», Politix, 2007/1, nº 77, pp. 131-151. Ver también: Mathieu, Lilian, L'espace des mouvements sociaux, París, Éditions du Croquant, coll. «Sociopo», 2012.

9 Tarrow, Sidney, Power in movement, social movements, collective action and politics, Cambridge, CUP, 1994, pp. 3-4.

10 Béroud, Sophie; Mouriaux, René; Vakaloulis, Michel, «Le concept de mouvement social», Le mouvement social en France, op. cit., pp. 13-62.

11 Para continuar con esta reflexión, recomendamos leer el ensayo de Bensaïd, Daniel, «Sur les crises, les classes, l'histoire». En: La discordance des temps, París, Les Éditions de la Passion, 1995.

12 Ver el epílogo de la versión francesa de Thompson, Edward P., The making of the English working class, Londres, Penguin, 1968 (La formation de la classe ouvrière anglaise, París, Le Seuil / Gallimard, Coll. Hautes Études, 1988).

13 Mathieu, Lilian, Comment lutter? Sociologie et mouvements sociaux, París, Textuel, 2004, p. 28.

14 Ver el capítulo en este libro sobre las movilizaciones reivindicativas de los «pobres de la ciudad».

15 Lefebvre, Henri, Le droit à la ville, París, Anthropos, 1968.

16 Ver Castells, Manuel, Luttes urbaines, París, Maspero, 1975 y Baño, Rodrigo, Conceptos y proposiciones acerca del movimiento popular urbano, Santiago, documento de trabajo, programa Flacso, n°161, noviembre 1982. Este enfoque es, por lo tanto, contrario a las teorías accionalistas de Alain Touraine, que rechazan la idea de un movimiento social urbano (La parole et le sang. Politique et Société en Amérique latine, París, O. Jacob, 1988, pp. 240-248).

17 Castex, Patrick, Voie chilienne au socialisme et luttes paysannes, París, Maspero, 1977.

18 Combes, Hélène, Faire parti. Trajectoires de gauche au Mexique, París, Karthala, Coll. Recherches Internationales, 2011.

19 Ver Luck, Simon; Dechezelles, Stéphanie (dir.), Voix de la rue ou voix des Urnes? Mouvements sociaux et partis politiques, Rennes, PUR, 2011, y Goldstone, Jack A., (ed.), States, Parties and Social Movements, Cambridge, Cambridge University Press, 2003.

20 Se entiende por flujo de conflictos «una serie de momentos de reivindicación colectiva relacionados entre sí y que el observador aísla para su explicación», Tilly, Charles, Tarrow, Sidney, Politique(s) du conflit, op. cit.,

p. 347. Estos flujos pueden tener diferente amplitud, desde el conflicto de vecindad persistente hasta un proceso prerrevolucionario que implica a varios actores de los campos partidistas e institucionales, como es el caso que nos interesa en este trabajo.

21 Découflé, André, Sociologie des révolutions, París, PUF, Coll. Que sais-je ? 1968 ; Rocher, Guy, «Le processus révolutionnaire», Le changement social, París, Seuil, 1970, pp. 255-280. Con una definición centrada solamente en el Estado (y por lo tanto, insatisfactoria), Tarrow y Tilly explican la revolución como «una transferencia forzada del poder de Estado, en la cual al menos dos bloques distintos de beligerantes encarnan pretensiones incompatibles y donde cada bloque puede adjudicarse la adhesión de una fracción significativa de la población» (Politique(s) du conflit, op. cit., p. 260).

22 Vayssière, Pierre, Les révolutions en Amérique latine, París, Seuil, Coll. Points, 1991, pp. 9-25. Consultar también, Mires, Fernando, La rebelión permanente. Las revoluciones sociales en América latina, México, Siglo XXI, 2001.

23 Brinton, Crane, Anatomía de la revolución, México, Fondo de Cultura Económica, 1985. Para una crítica del historicismo de los trabajos comparatistas de Brinton, ver: Dobry, Michel, Sociologies des crises politiques, París, Presses Nationales de Sciences Po, 2009. Para un análisis a partir del caso chileno, ver: Pinto, Julio, «Hacer la revolución en Chile». En: Cuando hicimos historia. La experiencia de la Unidad Popular, Santiago, LOM ediciones, 2005, pp. 9-33.

24 Es este tipo de análisis el que está siendo desarrollado actualmente por colectivos de investigación como la revista Dissidences (Francia).

25 Vasconi, Tomás, Las ciencias sociales en América del Sur y Chile: 1960-1990, Santiago, Universidad Arcis, 1995.

26 Rosanvallon, Pierre, L'âge de l'autogestion, París, Le Seuil, 1976.

27 Arendt, Hannah, Sobre la revolución, Madrid, Alianza editorial, 1988.

28 Brown C., Jonathan, Workers' Control in Latin America, 1930-1979, Chapel Hill, University of North Carolina Press, 1997, y Petras, James, Veltmeyer, Henry, Autogestión de trabajadores en una perspectiva histórica, Topia-La Maza, Buenos Aires, 2002.

29 Iturraspe, Francisco (coord.), Participación, cogestión y autogestión en América Latina, Nueva Sociedad, Caracas, 1986, tomo I, Introducción.

30 Negri, Antonio, Le pouvoir constituant, París, PUF, 1997.

31 Para una crítica de estas teorías: Borón, Atilio, «Poder, contra-poder, antipoder: notas sobre un extravío teórico-político en el pensamiento crítico contemporáneo», Herramienta, Buenos Aires, 2003 [www.herramienta.com.ar].

32 Castoriadis, Cornelius, L'institution imaginaire de la société, París, Le Seuil, 1975.

33 Salazar, Gabriel, Del poder constituyente de asalariados e intelectuales (Chile, siglos XX y XXI), Santiago, LOM ediciones, 2009.

34 Grez, Sergio, «Escribir la historia de los sectores populares. ¿Con o sin la política incluida?», Revista Política, Universidad de Chile, Vol. 44, 2005, pp. 17-31; Fuentes, Miguel, Gabriel Salazar y la «Nueva historia»: elementos para una polémica desde el marxismo, memoria de licenciatura, Universidad de Chile, 2007.

35 Trotsky, León, Histoire de la révolution russe, París, Seuil, 1950.

36 Charles Tilly insiste sobre el aporte del concepto de dualidad de poderes para comprender los fenómenos revolucionarios contemporáneos, aunque

introduciendo algunos matices, en From mobilization to revolution, op. cit., pp. 190-193).

37 Hobsbawm, Eric, L'âge des extrêmes. Le court XXe siècle, París, Le Monde Diplomatique, Éditions Complexe, 1999, y Bethell, Leslie (ed.), Historia de América Latina: política y sociedad desde 1930, Barcelona, Cambridge University Press/Critica, t.XII, 1997.

38 Dobry, Michel, Sociologies des crises politiques, op. cit., pp. 58-74.

39 Mandel, Ernest, Contrôle ouvrier, conseils ouvriers et autogestion (anthologie), París, F. Maspero, 1973 (3 tomos). Ver también: Zavaleta, René, El poder dual en América latina, México, Siglo XXI, col. Mínima, 1974.

40 Vitale, Luis, ¿Qué es el poder popular?, (folleto), Santiago, Sembrando, 1994.

41 Este párrafo fue publicado en parte como artículo en: «A 40 años del golpe. Historiografía crítica y pistas de investigación para (re)pensar la Unidad Popular (1970-1973)», Revista Tiempo Histórico, Universidad Academia de Humanismo Cristiano, N°6, Santiago, 2013, pp. 63-79, <http://bibliotecadigital.academia.cl/bitstream/123456789/1729/1/063-079.pdf>.

42 Nolff, Max, Salvador Allende: el político, el estadista. Bibliografía comentada y temática de más de 200 libros, Santiago, Documentas, 1993.

43 Cancino, Hugo, La problemática del poder popular en el proceso de la vía chilena al socialismo 1970-73, Aarhus, Aarhus Universitet Press, 1988, p. 2.

44 Garcés, Joan, El estado y los problemas tácticos del gobierno de Allende, México, Siglo XXI, 1974, y Allende y la experiencia chilena: las armas de la política, Barcelona, Ariel Ediciones, 1976.

45 Altamirano, Carlos, Dialéctica de una derrota, Siglo XXI, 1977.

46 Bitar, Sergio, Chile 1970-1973: asumir la historia para construir el futuro, Santiago, Pehuén, 1995.

47 Vuskovic, Pedro (comp. R. Maldonado), Obras escogidas sobre Chile (1964-1992), Santiago, CEPLA, 1993.

48 Touraine, Alain, Vie et mort du Chili populaire, journal sociologique, París, Seuil, 1973.

49 Millas, Orlando, Memorias, 1957-1991. Una digresión, Santiago, Cesoc, 2008.

50 Corvalán L., Luis, De lo vivido y lo peleado: memorias, Santiago, LOM ediciones, 1997, y El gobierno de Salvador Allende, Santiago, LOM ediciones, 2003.

51 Salazar, Gabriel, Conversaciones con Carlos Altamirano. Memorias críticas, Santiago, Debate, 2000.

52 Politzer, Patricia, Altamirano, Santiago, Random House Mondadori, 2013.

53 Rojas F., Jorge, «Los trabajadores en la historiografía chilena: balance y proyecciones», Revista de Economía y Trabajo, nº10, Santiago, 2000, pp. 47-117.

54 Moulian, Luis, «Balance historiográfico: sobre los últimos 30 años de la historia de Chile». En: Vitale, Luis, (coord.), Para recuperar la memoria histórica: Frei, Allende, Pinochet, Santiago, Ed. Chile-América/Cesoc, 1999), pp. 43-111.

55 Vial, Gonzalo, Historia de Chile, Santiago, Santillana, 1981; Salvador Allende: el fracaso de una ilusión, Santiago, Universidad Finis Terrae, Centro de Estudios Bicentenario, 2005. Gonzalo Vial fue un ferviente defensor de la dictadura y autor –anónimo– del Libro blanco de la Junta.

56 Collier, Simon; Sater, William, Historia de Chile: 1909-1994, Madrid, Cambridge University Press, 1999.

57 Rojas F., Jorge, «Los trabajadores en la historiografía chilena: balance y proyecciones», op. cit., p. 51.

58 Vitale, Luis (coord.), Para recuperar la memoria histórica..., op. cit.

59 Gómez L., Juan C., La frontera de la democracia. El derecho de propiedad en Chile 1925-1973, Santiago, LOM ediciones, 2004.

60 Salazar, Gabriel, Pinto, Julio, Historia contemporánea de Chile, T.1, Santiago, LOM ediciones, 1999.

61 Moulian, Tomás, Conversaciones interrumpidas con Allende, Santiago, LOM ediciones, 1997.

62 Harmer, Tanya, Allende y la Guerra fría interamericana, Santiago, Ediciones UDP, 2013, y Harmer, Tanya, Riquelme Segovia, Alfredo (eds.), Chile y la Guerra Fría global, Santiago, RIL Editores, Instituto de Historia-Pontificia Universidad Católica de Chile, 2014.

63 Seguel-Boccara, Ingrid, Les passions politiques au Chili durant l'Unité Populaire (1970-1973): un essai d'analyse systémique, París, L'Harmattan, 1997.

64 Ulianova, Olga, «La Unidad Popular y el golpe militar en Chile: percepciones y análisis soviéticos», Estudios Públicos, Nº 79, 2000.

65 Garrido, Luis, La «vía chilena» al socialismo (1970-1973). Un itinerario geohistórico de la Unidad Popular en el sistema-mundo, Santiago, Ediciones Universidad Alberto Hurtado, 2015.

66 Vega, Héctor, Chili 1970-1973: la politique économique de la transition au socialisme, thèse de Doctorat, Université Libre de Bruxelles, Institut de Sociologie, Bruxelles, 1980.

67 Medina, Edén, Revolucionarios cibernéticos: tecnología y política en el Chile de Salvador Allende, Santiago, LOM ediciones, 2013.

68 Pozo, José del, Rebeldes, reformistas y revolucionarios. Una historia oral de la izquierda chilena en la época de la Unidad popular, Santiago, Documentas, 1992.

69 Magasich, Jorge, Los que dijeron No. Historia del movimiento de los marinos antigolpistas de 1973, Santiago, LOM ediciones, 2008. Ver también el breve ensayo sobre el período: Allende, la UP y el golpe, Santiago, Editorial Aun creemos en los sueños/Le Monde Diplomatique, 2013.

70 Samaniego, Augusto, Les stratégies syndicales de la «Centrale Unique des travailleurs» et l'action socio-politique des salariés (1953-1973), thèse de doctorat en sociologie, Paris, Université Paris 8, 1998.

71 Valenzuela, Arturo, The origins of democracy: theorical reflections on the Chilean case, Washington, The Wilson Center ed., 1983; El quiebre de la democracia en Chile, Santiago, Flacso, 1989.

72 Garretón, Manuel A. (dir.), El proceso político chileno, Santiago, Flacso,1983. Moulian, Tomás, Democracia y socialismo en Chile, Santiago, Flacso, 1983.

73 Jocelyn-Holt, Alfredo, El Chile perplejo. Del avanzar sin transar al transar sin parar, Santiago, Planeta/Ariel, 1999.

74 Garcés, Mario, Leiva, Sebastián, Perspectivas de análisis de la Unidad Popular: opciones y omisiones, informe de avance, Santiago, Universidad Arcis, 2004.

75 Corvalán M., Luis, Los partidos y el golpe del 11 de septiembre: contribución al estudio del contexto histórico, Santiago, Cesoc, 2000.

76 Moulian, Tomás, Chile actual: anatomía de un mito, Santiago, LOM ediciones, 1997.

77 Amorós, Mario, Allende. La biografía, Santiago, Ediciones B, 2013.

78 Valdivia Ortiz de Zárate, Verónica, Nacionales y gremialistas: el «parto» de la nueva derecha política chilena, 1964-1973, Santiago, LOM ediciones, 2008.

79 Gómez L., Juan C., La frontera de la democracia…, op. cit., p. 8.

80 Kornbluh, Peter, The Pinochet File: A Declassified Dossier on Atrocity and Accountability, USA, New press ed., 2004.

81 Corvalán M., Luis, La secreta obscenidad de la historia de Chile contemporáneo, Santiago, Ceibo, 2013.

82 Consultar la página web del «National Security Archive» de la Universidad George Washington: [www.gwu.edu/~nsarchiv/latin_america/chile.htm].

83 Investigación de Mila Burns, de la City University of New York.

84 Garcés, Mario, Leiva, Sebastián, Perspectivas de análisis de la Unidad

Popular…, op.cit. p. 13.

85 Grez, Sergio, «Escribir la historia de los sectores populares», op. cit.

86 Guillaudat, Patrick, Mouterde, Pierre, Les mouvements sociaux au Chili 1973-1993, Paris, L'Harmattan, 1995, p. 61.

87 Joxe, Alain, Le Chili sous Allende, París, Gallimard, p. 176.

88 Illanes, María Angélica, «Reforma + Revolución. En torno a una historiográfica del movimiento de trabajadores durante el Gobierno de la Unidad Popular». En: La batalla de la memoria, Santiago, Planeta/Ariel, 2002, p. 178.

89 Magasich, Jorge, Pouvoir formel et pouvoir réel au Chili. 1972-1973, Mémoire de Licence en histoire, Université Libre de Bruxelles. Faculté de philosophie et lettres, Bruxelles, 1980.

90 Cancino, Hugo, La problemática del poder popular en el proceso de la vía chilena al socialismo 1970-73, op. cit.

91 Silva, Miguel, Los Cordones Industriales y el socialismo desde abajo, Santiago, s/e, 1999.

92 Illanes, María Angélica, La batalla de la memoria, op. cit., p. 180.

93 Destacar que siguiendo los pasos de Peter Winn (Tejedores de la revolución. Los trabajadores de Yarur y la vía chilena al socialismo, Santiago, LOM ediciones, 2004 –primera edición en inglés en 1986–), se han realizado dos estudios monográficos importantes sobre grandes empresas chilenas: Stillermann, Joël, From solidarity to survival. Transformation in the culture and style of mobilization of Chilean metal worker under democratic and authoritarian regimes, 1945-1995, New School for social research, Ph. D. of Philosophy, 1998. Rojas, Jorge, Rodríguez, Cinthia, Fernández, Moisés, Cristaleros, recuerdos de un siglo. Los trabajadores de Cristalerías Chile, Santiago, Sindicato nº2 y PET, 1998.

94 Ver la síntesis de su interpretación en: Winn, Peter, La revolución chilena, Santiago, LOM ediciones, 2013.

95 Power, Margaret, La mujer de derecha: el poder femenino y la lucha contra

Salvador Allende, 1964-1973, Santiago de Chile, Centro de Investigaciones Diego Barros Arana, DIBAM, 2008 ; Pinto, Julio (ed.), Cuando hicimos historia. La experiencia de la Unidad Popular, Santiago, LOM ediciones, 2005, y Fiesta y drama. Nuevas historias de la Unidad Popular, Santiago, LOM ediciones, 2014.

96 Cofré, Boris, Campamento Nueva La Habana: el MIR y el movimiento de pobladores: 1970-1973, Concepción, Escaparate, 2007.

97 Henríquez G., Renzo, Cordón Cerrillos Maipú. Experiencia en movimiento y ejercicios de poder popular, Tesis de Licenciatura en Historia, Universidad Arcis, Santiago, 2008, y El poder del campo. Los campesinos de Maipú durante el gobierno de Allende, Santiago, Ediciones Londres 38, 2015.

98 Castillo, Sandra, Cordones Industriales: nuevas formas de sociabilidad obrera y organización política popular (Chile: 1970-1973), Santiago, Escaparate, 2009.

99 Neghme, Fahra y Leiva, Sebastián, La política del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) durante la Unidad Popular y su influencia sobre los obreros y pobladores de Santiago, Tesis de licenciatura, Santiago, Usach, 2000; Leiva, Sebastián, Teoría y práctica del poder popular: los casos del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR, Chile, 1970-1973) y el Partido Revolucionario de los Trabajadores-Ejército Revolucionario del Pueblo (PRT-ERP, Argentina, 1973-1976), Tesis para optar al grado de Magíster en Historia, USACH, Santiago, 2007.

100 López D., Ana, Aguiar, Santiago, Yáñez, Valeria, Muñoz, Gabriel, Testimonios de los Cordones Industriales. Reconstruyendo la historia con sus protagonistas, Santiago, Universidad Academia de Humanismo Cristiano, 2015.

101 Ver en la bibliografía los documentales audiovisuales de Pepe Burgos del taller Llalliypacha.

102 [www.mundoobrero.cl].

103 [http://cordonesindustriales.cl].

104 Rodríguez, Guillermo, De la brigada secundaria al cordón Cerrillos, Santiago, Editorial Universidad Bolivariana, 2007.

105 Kries, Rafael, El ABC del Poder Popular. Cordones industriales y proyectos

sociales en Chile 1970-1973, Concepción, Escaparate, 2014.

106 Garcés, Mario, «El movimiento popular, la Unidad popular y el golpe», Punto Final, 25 septiembre de 2003.

107 Gaudichaud, Franck, Poder Popular y Cordones industriales… op. cit.

108 Para un estudio preliminar, ver: Gaudichaud, Franck (coord.), Dossier «Autour du mouvement révolutionnaire chilien», revista Dissidences, Nancy, N °14-15, 2004.

109 Fausto, Ayrton, Frías, Patricio, Opazo, Andrés, Perspectivas de poder popular en Chile: informe preliminar, Santiago, Flacso, circulación interna, agosto 1972, pp. 35-40.

110 Episodios de contestación entendidos como «secuencias vinculadas de interacción continuada, generalmente son el producto de “cortes de tijera” que el investigador practica en un flujo de conflicto con fines de observación, comparación y explicación sistemáticas» (Tarrow, Sidney, Tilly, Charles, Politique(s) du conflit, op. cit., 2008, p. 71).

Primera parte

El Chile de la Unidad Popular

Chile vive una crisis profunda que se manifiesta en el estancamiento económico y social, en la pobreza generalizada y en las postergaciones de todo orden que sufren los obreros, campesinos y demás capas explotadas, así como en las crecientes dificultades que enfrentan empleados, profesionales, empresarios pequeños y medianos y en las mínimas oportunidades de que disponen la mujer y la juventud. [...] Lo que ha fracasado en Chile es un sistema que no corresponde a las necesidades de nuestro tiempo. Chile es un país capitalista, dependiente del imperialismo, dominado por sectores de la burguesía estructuralmente ligados al capital extranjero, que no pueden resolver los problemas fundamentales del país, los que se derivan precisamente de sus privilegios de clase a los que jamás renunciarán voluntariamente.

Programa de la Unidad Popular,

17 de diciembre de 1969, Santiago de Chile

Capítulo 1

¿Un Estado de compromiso? Los fundamentos

de las relaciones entre movimiento obrero, partidos y Estado

Las relaciones entre los partidos políticos y el Estado, la evolución del movimiento sindical, las condiciones socioeconómicas así como la estructura de la clase obrera son elementos que, en parte, explican el particular modo en que se articularon las luchas sociales durante la Unidad Popular[1]. Nos proponemos revisar, a grandes rasgos, los fundamentos del movimiento social urbano chileno, sus orientaciones políticas, su estructuración sindical y su nivel de organización.

La verdadera génesis del proletariado chileno se sitúa a mediados del siglo XIX y está directamente vinculada a la economía de enclave y al desarrollo del capitalismo minero dependiente[2]. Las mutuales constituyen la forma inicial de organización obrera. En 1854 se funda la Sociedad Tipográfica de Socorro Mutuo, y como lo demuestra Manuel Barrera en su estudio histórico sobre las huelgas en Chile, la clase obrera adquiere rápidamente una práctica de acción directa y organizada, multiplicándose huelgas y conflictos, a veces violentos[3]. La primera gran ola de huelgas se produce en la estela de lo que Sergio Grez ha llamado la «regeneración del pueblo», que se desarrolla hasta fines del siglo XIX: las formas «primitivas de revuelta», rebeliones y bandidaje social son, poco a poco, remplazados por la huelga general[4]. En esta época, los obreros dejan su «marginalidad total» para intervenir directamente en la escena política nacional. Nuevas organizaciones aparecen.

Desde la creación de las Mancomunales y de las Sociedades de Resistencia a fines del siglo XIX hasta el surgimiento de la Central Única de Trabajadores (CUT) en febrero de 1953, el movimiento obrero se constituyó en un actor nacional esencial en el desarrollo histórico chileno gracias, principalmente, a un movimiento sindical poderoso[5]. Su historia está también marcada por una permanente oscilación entre períodos de autonomía, de independencia y de

subordinación a las instituciones estatales y a los partidos políticos que en ellas participan, así como por diversos momentos de alianzas parciales o de oposición frontal con ciertas fracciones de las clases dominantes[6]. Históricamente, los dos principales partidos «obreros» fueron el Partido Comunista (PC) y el Partido Socialista (PS), que siempre buscaron canalizar y dirigir la fuerza de transformación social que entonces encarnaba, a sus ojos, el proletariado (sobre todo la clase obrera de la minería y de la gran industria), intentando orientar al movimiento obrero en función de sus objetivos del momento[7]. La actividad de la Asamblea Obrera de Alimentación Nacional (AOAN), en 1918-1919, puede ser sin duda descrita como una experiencia de poder popular constituyente. Producto de la miseria social en la que viven en ese entonces las capas populares (organizan «marchas del hambre» contra el alza del costo de la vida), la AOAN es también la prueba de la capacidad de organización de clase frente al Estado oligárquico[8]. Luis Vitale identifica, por su parte, varios otros ejemplos embrionarios de este tipo en el curso de los siglos XIX y XX. Finalmente, citemos las diferentes formas de autoorganización popular que aparecieron durante la ocupación de Puerto Natales en enero de 1919, o durante la llamada «República socialista» (4 al 16 de junio de 1932). Aunque ésta sólo dura algunos días, en los «comités revolucionarios» se pueden efectivamente identificar expresiones latentes de poder popular constituyente[9].

Más allá del detalle de los eventos, subrayemos que en esta época se inicia un nuevo período histórico[10]:

En los años 20 se abre una nueva fase en que se pretende conjurar el fantasma de la insurrección popular promoviendo una legislación integradora que exige al mismo tiempo un auto control del capital sobre sí mismo. […] El conflicto social pasa a ser regulado por la potencia soberana del Estado. El proceso político que se inicia entonces tiene un carácter claramente preventivo. Se puede hablar de un ciclo político de larga duración que se extiende desde 1920 hasta 1973, caracterizado por la centralidad del Estado en el proceso económico[11].

La llegada de los gobiernos del Frente Popular permite una industrialización parcial llamada de «sustitución de importaciones». Las clases dominantes se revelan capaces de unificarse en torno a este Estado, instalando instituciones bastante flexibles para representar sus intereses (el «Estado emprendedor» descrito por los historiadores Pinto y Salazar). Al mismo tiempo que incorporan

algunas fracciones del movimiento obrero, otras quedan excluidas[12]. Así, los numerosos ciclos de brutal represión en contra de los trabajadores (las «grandes masacres») hacen parte de la memoria colectiva chilena: de Santa María de Iquique en 1907 a Puerto Montt en 1969. Sin embargo, si el régimen político chileno no es –sin duda– el de una «dictadura militar permanente[13]» sólo se puede hablar de un «Estado de compromiso» si no se le confunde, como lo hacen varios autores, con una «especie de democracia de consenso», ubicada fuera del tiempo histórico[14]. Como lo destaca José Benado Medvinsky, el «Estado de compromiso» chileno es principalmente una herramienta de control social –en manos de una burguesía industrial hegemónica– gracias especialmente a la entrega de ciertas concesiones económico-sociales hacia fracciones reducidas y específicas de las clases dominadas[15]. Es decir que el famoso «Estado de compromiso», invocado por numerosos analistas al momento de comprender el sistema político chileno y su excepcional estabilidad constitucional en comparación con otros países del Cono Sur (Bolivia por ejemplo), representa un equilibrio inestable y transitorio entre sectores dominantes y fracciones de las capas medias y obreras. En efecto, las elites chilenas lograron mantener la continuidad del Estado «liberal-oligárquico» (instaurado a mediados de los años veinte), institucionalizando parte de las reivindicaciones del movimiento sindical (y reprimiendo otras), marginando sistemáticamente al campesinado (y su sed de reforma agraria) e intentando incorporar en este «consenso» a las organizaciones partidarias de la izquierda, con el fin de perpetuar el modelo de enclave de capitalismo minero y enfrentar con éxito las múltiples movilizaciones de los trabajadores, de los campesinos y de los de «abajo». Gabriel Salazar ha subrayado, con razón, la presencia permanente de la violencia estatal y del autoritarismo en todo este periodo, pero también de una violencia popular disruptiva como forma de resistencia, característica del régimen republicano chileno, muy lejos del lugar común de una democracia pacífica o consensual[16]. Desde otra perspectiva, Gómez Leyton afirma:

En el Chile del siglo XX (1920-1973), la democracia no fue el régimen político predominante. Cuando éste existió no fue pacifico ni estable. Por lo tanto, no tuvo la duración que las ciencias sociales nacionales como extranjeras le atribuyen. […] El régimen democrático pleno en Chile tuvo una corta y agitada duración. Sostenemos que la democracia chilena existente entre 1958 y 1973 y no antes; fue una democracia eminentemente subversiva, por ende, conflictiva, inestable y con importantes grados de violencia política[17].

Es a partir del período de Frentes Populares que los partidos políticos de izquierda y sindicatos obreros entran decididamente en la arena institucional e inician una política alternando negociación y lucha en contra de las clases dominantes del país. Esta integración truncada se desarrolla en diferentes fases, entre independencia y colaboración abierta, y pasando de la participación a la exclusión en los gobiernos sucesivos. En este contexto, las relaciones Estado-movimiento obrero están marcadas por un fenómeno de péndulo, en donde se mantienen varios ciclos de represión política y de movilizaciones colectivas, llevadas a cabo por las capas sociales descontentas o excluidas de ese famoso «Estado de compromiso». A partir de 1953, año de la creación de la Central Única de Trabajadores (CUT), el sindicalismo y el movimiento obrero se encuentran en un posicionamiento de oposición e independencia de clase relativa, en un contexto nacional de ascenso de los conflictos sociales, de inflación económica y de fuertes enfrentamientos ideológicos, con la Guerra Fría como telón de fondo. Bajo la dirección de Clotario Blest, cristiano revolucionario sin filiación partidaria, la CUT adopta posiciones radicales (especialmente el uso masivo del arma de la huelga general)[18]. De hecho, desde los primeros meses de su existencia, la CUT tiene que reafirmar su voluntad de autonomía frente al nombramiento de uno de sus dirigentes como ministro del Trabajo del gobierno del ex dictador

Carlos Ibáñez (1952-1958). Siguiendo los estatutos, el dirigente sindical es llamado a abandonar su puesto de dirección en la CUT[19].

A comienzo de los años sesenta, el movimiento obrero chileno se encuentra, a pesar de todo, en una relación de fuerzas bastante más desfavorable que lo que había conocido durante los quince años precedentes[20]. Es en ese contexto que el período de independencia «excepcional» (aunque siempre relativa) de la CUT llega a su término: en 1961, el PC reafirma su control sobre la Central para dirigirla, con los socialistas y la Democracia Cristiana (DC), hasta el golpe de Estado de 1973: los partidos de la izquierda refuerzan así su posición de dirección en la CUT[21]. El nuevo fracaso en las elecciones presidenciales de 1964 del candidato de la izquierda (Salvador Allende) apoyado por la CUT y la elección de Eduardo Frei (democratacristiano), acentúa la oposición entre el movimiento sindical y el gobierno[22]. Desde 1966, se asiste a una reestructuración del movimiento social, especialmente del proletariado urbano industrial y los sectores obreros ligados a la minería, los asalariados de la función pública

(educación), los empleados del sector bancario, el movimiento estudiantil, el de pobladores y un movimiento campesino en plena expansión. En efecto, durante el gobierno de Frei, se registra un aumento de alrededor de un 125% de la cantidad de afiliados a los diferentes sindicatos. En esta coyuntura se acelera la descomposición del proyecto populista democratacristiano. Se trata de una época en que el conjunto de partidos obreros exalta las conquistas sociales de la revolución cubana en oposición a la llamada «revolución en libertad» de los democratacristianos, enmarcada directamente en el plan previsto por la administración Kennedy para contener el avance de la ola revolucionaria que entonces agita a América Latina. El plan «desarrollista» de la Democracia Cristiana promueve un conjunto de reformas importantes, que demuestran claramente el mayor peso que tiene la burguesía industrial en el seno de las clases dominantes, ya que se trata también de estimular ciertas ramas de la industria a través de la fusión con capitales extranjeros. Implica, además, la instalación de medidas destinadas a responder al estrangulamiento estructural que vive la economía chilena y también a una demanda social en aumento: «chilenización» del cobre, reforma agraria, programa de construcción de viviendas, reforma educacional…

Desde esta época, se puede ver el desfase creciente entre la dirección del movimiento obrero y las prácticas de luchas en la base, que tienden a desbordar al conjunto de los aparatos de representación y de mediación social tradicionales. Rápidamente, el gobierno opta por la represión abierta con, por ejemplo, el intento de aplastamiento de la huelga general del 23 de noviembre de 1967 organizada para oponerse al proyecto de reajuste salarial (5 muertos y varias centenas de heridos), o con la violencia policial en contra de los pobladores. En ese contexto, las formas que toma la acción reivindicativa del movimiento sindical se modifican cualitativa y cuantitativamente. En efecto, se produce un claro cambio de rumbo y la huelga se impone sobre la negociación colectiva. Se registran 723 huelgas legales en 1965, cifra que alcanza 1.142 en 1967 para disminuir a 977 en 1969. Otra señal importante es que se asiste a un salto cualitativo en la relación entre acciones legales e ilegales por parte de los huelguistas. En los primeros años de la década, la proporción de huelgas ilegales sobre el total de los conflictos es de un 72,6% (lo que en parte, deja en evidencia el carácter arcaico de la legislación laboral), y este porcentaje alcanza el 89,2% a comienzos del gobierno de Allende[23]. Por otra parte, a partir de 1968, se manifiesta una importante tendencia hacia prácticas innovadoras de la huelga, con ocupación de fábricas e interrupción de caminos. La clase obrera minera e industrial sigue siendo predominante en estas acciones de protesta, pero son los

campesinos y los obreros de la construcción los que se muestran más activos[24].

Podemos hablar, entonces, de una discontinuidad, incluso de una ruptura, en las formas que adquiere la lucha de clases a partir de 1964. Como lo destaca el sociólogo Manuel Antonio Garretón, es la legitimidad misma del sistema capitalista dependiente la que está en crisis en esta época[25]. Estas consideraciones nos llevan a presentar de manera más precisa la situación de la clase obrera, objeto del siguiente capítulo.

1 Vitale, Luis, Interpretación marxista de la historia de Chile, Santiago, PLA, 1967. Obras generales sobre este tema: González Casanova, Pablo (coord.), Historia del movimiento obrero en América Latina, México, Siglo XXI, 1984; Alba, Víctor, Historia del movimiento obrero en América Latina, México, Ed. Limusa Wiley, 1964; Godio, Julio, Historia del movimiento obrero latinoamericano, México, Ed. Nueva Imagen, 1980, 2 tomos.

2 Vayssière, Pierre, Un siècle de capitalisme minier au Chili:1830-1930, Paris, Ed. du CNRS, 1980.

3 La importancia de la huelga tiene un significado sociológico de primer orden, ya que determina, en parte, la constitución del grupo obrero en tanto clase, llevándolo a posicionarse colectivamente en relación a los patrones y al Estado (Barrera, Manuel, «Perspectiva histórica de la huelga obrera en Chile», Santiago, Ceren, n°9, septiembre 1971, pp. 119-155).

4 Grez, Sergio, De la «regeneración del pueblo» a la huelga general. Génesis y evolución histórica del movimiento popular en Chile 1810-1890, Santiago, Ril, vol. XIII, 1997.

5 Barría, Jorge, Trayectoria y estructura del movimiento sindical chileno, Santiago, Insora, 1963; Frías, Patricio, Construcción del sindicalismo chileno como actor nacional, Santiago, CUT-PET, Vol. I, 1993, y Salazar, Gabriel, Pinto, Julio, Historia contemporánea de Chile, Santiago, LOM ediciones, 1999.

6 Milos, Pedro; Garcés, Mario, Cuadernos de historia popular: serie Historia del movimiento obrero, Santiago, Cetral/CEAL, n°12, 1983.

7 Angell, Alan, Partidos políticos y movimiento obrero en Chile, México, Era,

1974.

8 De Diego, Patricio ; Peña, Luis; Peralta, Claudio, La Asamblea Obrera de Alimentación Nacional: un hito en la historia de Chile, Santiago, Sociedad Chilena de Sociología, 2002.

9 Vitale, Luis, ¿Que es el poder popular?, (folleto), Santiago, Sembrando, 1994, e Interpretación marxista de la historia de Chile, op. cit.

10 Julio Pinto y Gabriel Salazar hablan de Estado «nacional-desarrollista», que surgiría a partir de 1938 con el triunfo electoral de Pedro Aguirre Cerda (Salazar, Gabriel y Pinto, Julio, Historia contemporánea de Chile, Santiago, LOM ediciones, 1999, Tomo I, p. 60).

11 Cruz Salas, Luis, «Estado, partidos y movimiento obrero». En: Para recuperar la memoria histórica. Frei, Allende, Pinochet, Santiago, Ed. ChileAmerica-Cesoc, 1999, pp. 393-394.

12 El sociólogo marxista boliviano Zavaleta Mercado incluso describirá Chile como la «patria del Estado en América Latina» (El poder dual en América Latina, op. cit.).

13 Manns, Patricio, Chile: una dictadura permanente (1811-1999), Santiago, Sudamericana, 1999.

14 Ver sobre este tema, las anotaciones de Luis Cruz Salas en «Estado, partidos y movimiento obrero», op. cit.,

pp. 382-426.

15 Benado Medvinsky, José, Les origines du mouvement social au Chili (1973-1982): les fondements économiques et politiques, mémoire de DEA, París, EHESS, 1985, pp. 137-138. Es también la posición de Juan Carlos Gómez (La frontera de la democracia, op. cit.).

16 Salazar, Gabriel; Pinto, Julio, Historia contemporánea de Chile, T.1, op. cit.

17 Gómez L., Juan C., La frontera de la democracia…, op. cit., p. 9.

18 Silva, Miguel, Los partidos, los sindicatos y Clotario Blest, Santiago,

Mosquito, 2000.

19 Se trata del sindicalista Leandro Moreno (Barría, Jorge, Historia de la CUT, Santiago, Prensa Latinoamericana, 1971, p. 62).

20 Barrera, Manuel, «Perspectiva histórica de la huelga obrera en Chile», Santiago, Ceren, n°9, septiembre 1971, y Pizarro, Crisóstomo, La huelga en Chile. 1890-1970, Santiago, Ed. Sur, Col. Estudios Históricos, 1986.

21 Sobre el fin de la dirección de Clotario Blest en la CUT, el relato de Humberto Valenzuela (dirigente obrero trotskista) es especialmente interesante: Historia del Movimiento obrero chileno, Santiago, 1972.

22 Según la cronología de Alberto Cuevas, se trata del período de «oposición» de la CUT («La experiencia de la CUT (1953-1973): una visión crítica», Chile-América, Bruselas, n°84-85, enero-marzo 1983, pp. 27-34).

23 Hay que recordar que el código laboral de 1931 prohíbe la huelga para los trabajadores fiscales (una limitación que continuará con el nuevo código inaugurado en dictadura en 1979), por lo cual toda movilización dentro de estos sectores tiende a incrementar fuertemente las estadísticas de huelgas ilegales.

24 Cifras tomadas de Marini, Ruy Mauro, El reformismo y la revolución. Estudios sobre Chile, México, Era, 1976.

25 Garretón, Manuel A., El Proceso político chileno, Santiago, Flacso, 1983.

Capítulo 2

Elementos de un proceso conflictivo:

condiciones socioeconómicas y situación de los movimientos obrero y social en 1970

Una clave de análisis esencial para entender el proceso revolucionario chileno es la comprensión, por una parte, de la realidad económica y social de Chile en 1970 y, por la otra, de su estructuración social, especialmente la de la clase obrera. Es decir, es necesario analizar la composición y organización del movimiento sindical, pero también la de otros sectores dominados de la ciudad, como los pobladores. Tal como lo recuerdan los sociólogos franceses, lo fundamental es analizar el «en sí» (l'en soi) del proceso conflictivo, el conjunto de determinaciones estructurales que pueden ayudar a dar cuenta de lo que el «para sí» (pour soi) organizacional y cognitivo no restituye de manera integral[1].

La realidad chilena al momento de la elección de Salvador Allende es la de una sociedad altamente desigual. Como lo subraya Cecilia Casassus-Montero: «En 1969, la mitad de la población activa recibe un ingreso promedio de 35 dólares per cápita, es decir, que para la gran mayoría el problema sigue siendo tener un techo, pan y abrigo[2]». En esta época la estructura social es la siguiente:

Cuadro 1: Distribución de la mano de obra según el tipo de ocupación socioprofesional (1970)

Actividad profesional	Cifras en mi
Obreros Empleados Trabajadores independientes Otros Empresarios	1.388,3 722,
TOTAL de la población económicamente activa ocupada	2.998,6

Fuente: Odeplan, Santiago, 1971

En 1970, la sociedad chilena se compone principalmente de asalariados y más del 85% de la población activa está formada por grupos sociales que viven sólo de su fuerza de trabajo[3]. Como lo destaca Marie-Noëlle Sarget, la burguesía y pequeña burguesía propietaria, en conjunto, representan menos del 15% de la población, mientras que el bloque formado por el proletariado, semiproletariado y subproletariado sobrepasa el 58%. A esta mayoría popular se le debe agregar una fracción más acomodada del asalariado, que podemos calificar como «capa media asalariada». Se trata principalmente de los sectores llamados «profesionales» (y a menudo, denominados empleados) que corresponden a cerca de un cuarto de la población activa ocupada: cuentan con sus propias organizaciones sindicales, separadas de los sindicatos obreros, y aunque la gran mayoría comparte las condiciones de vida de la clase obrera, su «visión del mundo» y valores identitarios son, muchas veces, ajenos a esta clase. Estos datos nos parecen relevantes, ya que numerosos autores han amalgamado, demasiado rápidamente, la pequeña burguesía con las capas medias asalariadas bajo la categoría imprecisa de «clase media», sin comprender que desde el punto de vista de la estructura de clase, estas capas de la población pertenecen al asalariado y, por lo tanto, pueden ser movilizadas en torno al bloque popular que pretende dirigir la izquierda.

Según el Informe económico anual de 1970, publicado por Odeplan (Oficina de Planificación Nacional), la evolución de la distribución del ingreso nacional es idéntica a la de la propiedad, en constante concentración desde 1960. Los ingresos que provienen de los salarios pasaron, entre 1960 y 1969, de 18,4% al 16,2% del ingreso nacional. En 1968, el 1% de la población recibe más del 10% del ingreso, mientras que el 30% de las familias chilenas tiene un ingreso total inferior a un salario mínimo, llamado «salario vital». En esas condiciones, se creó una estructura productiva diversificada pero subutilizada[4]. Cuando la UP llega al poder, alrededor de 1 millón 256 mil personas (es decir, casi la mitad de la población ocupada) recibe ingresos inferiores al salario mínimo, lo que significa que en 1970, la gran masa de trabajadores chilenos recibe sueldos que no le permiten satisfacer sus necesidades materiales mínimas. En general, la economía chilena en 1970 está marcada por un dualismo importante entre un capitalismo monopólico (privado y estatal) moderno y sectores enteros de la

economía abandonados a la explotación latifundista o en manos de múltiples pequeños emprendedores. Otra característica esencial de la historia del país ha sido el desarrollo desigual y combinado así como su dependencia de los países del «centro» de la economía-mundo. En 1970, la extracción del cobre, actividad fundamental, está dominada por compañías estadounidenses tales como Anaconda Sales Corp., Kennecott Sales Corp. y Braden Copper Co. Allende recibe la gestión de uno de los países más endeudados del mundo (sólo después de Israel) con una deuda externa de 4.226 millones de dólares, correspondiente a 3.271 millones de dólares de crédito y 955 millones de intereses. La dominación extranjera de los sectores más desarrollados explica el impacto que tuvieron las medidas coercitivas sobre la economía para desestabilizar al gobierno, impuestas por Estados Unidos durante la Unidad Popular (medidas de bloqueo económico además de aquellas, ocultas, de los servicios secretos estadounidenses[5]). Junto a unas pocas grandes empresas, subsisten como pueden un gran número de pequeñas y medianas empresas que son la mayoría y que están dominadas por el gran capital. De esta estructura deriva, en gran parte, el aspecto heterogéneo de la clase obrera y que impactan sus formas de organización. Por otra parte, el carácter de la industrialización parcial de Chile y su urbanización son factores que igualmente permiten comprender la dinámica sociopolítica que se inicia a partir de los años sesenta. En ese sentido, hay que insistir en el peso que progresivamente va tomando el sector manufacturero en la economía chilena y particularmente, en el «gran Santiago[6]». En general, la industria latinoamericana comienza a emplear una clase obrera joven en establecimientos modernos y de un tamaño relativamente importante, favoreciendo un aumento de las actividades sindicales, así como la agudización de la lucha de clases a nivel continental[7], situación que, inevitablemente, impacta el modo en que se va a movilizar el movimiento obrero, abriendo un nuevo «ciclo de contestación» (Tarrow), el cual alcanza su apogeo durante la Unidad Popular. Esta fase ascendente debe inscribirse en un tiempo largo de lo que Salazar llama violencia política popular y que –según sus investigaciones– se iniciaría en 1943 para terminar en 1973 («ciclo IV»), época marcada por la radicalización del movimiento popular, su politización y la tendencia al uso de nuevas formas de lucha[8].

El movimiento sindical

Globalmente, desde los años treinta, el sindicalismo chileno se ha caracterizado por estar compuesto por un gran número de pequeños sindicatos, con pocos medios de presión en un marco estrictamente legal. La mayoría de las normas que regulan las relaciones laborales provienen del Código del Trabajo de 1931. Esta legislación es el fruto de propuestas legislativas de las dos principales fuerzas políticas de los años veinte (liberales y conservadores) y consolida una arquitectura legal que busca controlar autoritariamente al sindicalismo, atomizarlo e impedir su radicalización política[9]. Así, para formar un sindicato, los obreros deben pertenecer a una empresa de más de 25 personas y representar una mayoría superior al 55% de los asalariados. La ley reconoce un solo sindicato por establecimiento y el Código del Trabajo les impide disponer libremente de recursos financieros y, específicamente, destinar sus fondos a la organización de huelgas[10]. Los diferentes estudios de terreno realizados durante los años sesenta y setenta, demuestran que los dirigentes de los sindicatos industriales consideran su organización sobre todo como un instrumento de lucha económica (aumento de salarios, indemnización…). Sin embargo, como lo ha demostrado el estudio de Petras y Zeitlin, la clase obrera chilena se mantiene impregnada de cierto grado de radicalismo político, favorable a un sindicalismo «clasista[11]». Por otra parte, el hecho de que la formación de los sindicatos sea totalmente independiente de toda tutela federativa o nacional y que la dirección de éstos sea cada año completamente renovada, favorece el trabajo de base y evita, en cierta medida, el fenómeno burocrático.

Según los cálculos de Clotario Blest, en 1969, 472.481 asalariados obreros y empleados del sector privado están sindicalizados, cifra a la cual se pueden agregar los 250 mil empleados del sector público (cuya tasa de «sindicalización[12]» sobrepasa el 90%!). En total, la sindicalización del sector privado representa un 19% y si le adicionamos los asalariados del sector público, alcanza un 25% de la fuerza de trabajo[13]. En 1970, la CUT agrupa oficialmente a poco más de 700 mil trabajadores, cifra deliberadamente inflada por razones políticas evidentes[14]. Entre estos, 47% pertenece a la clase obrera de la minería y de la industria, 40% son empleados y 23% campesinos. La importante diferencia entre el sector privado (2.566.000 a inicios de 1972) y el sector público (294.976 en la misma fecha) se mantiene durante todo el período. Sin embargo, la dinámica sociopolítica desencadenada por la Unidad Popular provoca una fuerte aceleración de la sindicalización en el sector privado: aumento de 6% entre abril de 1971 y abril de 1972 (es decir, un 28,75% de los asalariados del sector privado para una tasa total de 37,5%[15]). El movimiento sindical, muy presente en las minas y en el sector industrial, no integra a un amplio sector de obreros de la

pequeña y mediana industria, así como tampoco de la industria textil, alimentaria y de la construcción, es decir, más de un 50% del proletariado industrial que en su mayoría trabaja en establecimientos de menos de diez obreros[16]. A grandes rasgos, podemos concluir, como lo hace Alan Angell, que «la característica más notable del panorama sindical en Chile no es tanto la falta de sindicalización, como las serias limitaciones que se le han impuesto[17]». El sindicalismo chileno no está estructurado por rama (como en Argentina o Brasil), los sindicatos pueden agruparse en federaciones, pero éstas no pueden participar en la negociación colectiva, siendo la mayor parte de los acuerdos firmados a nivel de empresa[18]. La CUT es, en ese entonces, la única organización interprofesional nacional. Se trata de un instrumento poderoso de unificación para el movimiento sindical ya que le otorga, en teoría, una dirección unitaria más allá de las diferentes tendencias políticas que la componen (comunista, socialista y democratacristiana, principalmente). La Central funciona fundamentalmente sobre la base de federaciones y confederaciones[19] y se estima que, a fines de 1970, reagrupa a poco más de la mitad del total de sindicalizados a nivel nacional (aunque es cierto que sólo será reconocida el año siguiente[20]).

En lo que se refiere a su arquitectura, las decisiones se toman principalmente a nivel superior mientras que los organismos locales a menudo, no tienen vida real. De hecho, se trata más bien de una autoridad que, por su prestigio, ejerce una importante presión sobre los sindicatos de base. Posee una organización altamente verticalista, lo que implica una ausencia de capacidad para organizar territorial y transversalmente a los trabajadores. Esta situación facilita, sin lugar a dudas, la aparición de nuevas organizaciones de base «alternativas» durante el gobierno de la UP, tal como lo veremos en la segunda parte.

Los «pobres de la ciudad» y el movimiento de pobladores

La incorporación a nuestro estudio de lo que clásicamente se ha llamado «movimiento de pobladores» y que a veces es también denominado como movimiento social de los «pobres de la ciudad», se mostró indispensable[21]. En efecto, es necesario abordar este otro «sitio de conflicto», el espacio del movimiento social urbano que tuvo un importante rol en términos de creación de diferentes formas de poderes populares constituyentes durante la Unidad

Popular[22]. Los pobladores pertenecen a sectores urbanos que viven mayoritariamente en la periferia de las ciudades y en general, aunque no sistemáticamente, en situación de gran precariedad económica. Son el producto de un proceso de urbanización desequilibrado, característico de los países dependientes. El problema de la vivienda y las malas condiciones de vida articuladas con una concentración urbana desregulada, promovieron el surgimiento de estos sectores sociales urbanos específicos. La crisis del sector minero y el éxodo rural, la centralización en Santiago de todos los servicios y la esperanza de encontrar trabajo en la mayor conglomeración industrial del país, fueron el motor de esta formación de las poblaciones[23]. En un primer momento, estos grupos desraizados se agrupan en el antiguo centro urbano, pero desde 1946, frente al flujo continuo y a la ausencia de cualquier programa de vivienda social comienzan las ocupaciones ilegales de terrenos (1946, ocupación del «Zanjón de la Aguada»). En los años cincuenta y sesenta surgen otras importantes tomas de terreno como «La Legua», «Población La Victoria», «José María Caro» y «Barrancas», generalmente bajo la conducción del Partido Comunista. En estos terrenos baldíos se forman los «campamentos» y las poblaciones «callampas», construcciones extremadamente precarias.

Los estudios de campo demuestran la heterogeneidad de estos grupos sociales urbanos. Las diferentes categorizaciones que se han establecido se enfrentan constantemente con la dificultad para caracterizar a una población tan diversa[24]. Lo que podemos retener de estos datos es que en el movimiento de pobladores existe una proporción importante de asalariados precarios: por ello es posible que se produzca, a nivel de la «población», una combinación del movimiento obrero con el de pobladores. Sin embargo, la gran precariedad económica hace difícil una real integración de esas capas sociales a los sectores más organizados del movimiento obrero. El proyecto populista democratacristiano mostrándose inviable, refuerza el sentimiento de exclusión social de los pobladores, que comienzan entonces a organizarse (multiplicación de las tomas de terreno). Es sobre la base de este «universo pobladores» que nace el «movimiento de pobladores», componente importante del movimiento social urbano. En 1970, viven en «campamentos» no menos de 55 mil familias, equivalente a un 10% de la población total del gran Santiago, y en mayo de 1972, el ministro de Vivienda entrega una cifra de 83 mil familias (15% en el gran Santiago[25]). El gobierno de Allende impulsa y permite a las poblaciones «salir de las sombras» con una política –voluntarista– de construcción de miles de viviendas[26].

El movimiento de pobladores se organiza en torno a reivindicaciones inmediatas

(vivienda, salud, transporte público) o «movilizaciones reivindicativas urbanas[27]». Alrededor de un núcleo duro de militantes de izquierda, este movimiento agrupa a una amplia gama de organizaciones territoriales que reúnen hasta 800 mil personas[28]. En lo referente a la articulación de esta movilización colectiva multiforme con la esfera de lo político, existía hasta ahora una visión historiográfica tradicional que veía en la acción de los partidos en el universo «pobladores», una estrategia esencialmente clientelista, en particular de la DC y del PC. Varias investigaciones demuestran esta dinámica de «populismo urbano[29]». Mario Garcés en su trabajo de tesis ha relativizado ampliamente esta visión, aunque sin cuestionarla completamente[30]. En la época de la UP, varios estudios sociológicos y encuestas en terreno intentaron establecer una tipología de esta articulación[31]. Con un enfoque renovado, Vicente Espinoza ilumina las orientaciones predominantes de la acción colectiva de los «pobladores». Según Espinoza, la definición identitaria de estos últimos combinaría varias acepciones «que van desde la clase (por referencia estructural al sistema económico) hasta términos más amplios como los de pueblo o comunidad[32]». Este autor identifica cuatro tipos de movilizaciones protestatarias de los pobladores: a) «Acción reivindicativa»; b) «Participación populista»; c) «Acción comunitaria» y d) «Lógica de ruptura». Aunque el sistema institucional se sostiene siempre sobre un lazo paternalista con los pobladores, Espinoza destaca que al final de los años sesenta y sobre todo bajo el gobierno de Allende, sus reivindicaciones parecen mostrar los gérmenes de una lógica de ruptura y de autonomía de clase. Tendremos presente esta hipótesis con el objeto de verificar si efectivamente esas movilizaciones facilitaron el desarrollo del «poder popular», reivindicado por una parte del movimiento social y de la izquierda partidaria.

1 Béroud, Sophie; Mouriaux, René; Vakaloulis, Michel, Le mouvement social en France, op. cit., pp. 60-61.

2 Casassus-Montero, Cecilia, Travail et travailleurs au Chili, Paris, La Découverte, 1984, p. 34.

3 Es lo que el intelectual comunista José Cademartori llama entonces «masas trabajadoras» (La economía chilena, Santiago, Ed. Universitaria, 1968, p. 277).

4 Odeplan, Informe económico anual 1970, Santiago, Ed. Universitaria, 1971.

5 Los documentos secretos de la ITT, Santiago, Ed. Quimantú, 1972 y The National Security Archive, Chile and the United States: Declassified Documents relating to the Military Coup, 1970-1976, Washington en [www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB8/nsaebb8.htm].

6 En 1930, 15,7% de la fuerza de trabajo se concentra en la industria manufacturera; en 1960, el 24%.

7 Roxborough, Ian, «La clase trabajadora urbana y el movimiento obrero desde 1930». En: Historia de América Latina: política y sociedad desde 1930, Barcelona, Cambridge University Press/Critica, t.12, 1997, pp. 132-192.

8 Salazar, Gabriel, Violencia política popular en las «grandes alamedas», Santiago: 1947-1987, Santiago, LOM ediciones, 2006.

9 Angell, Alan, Partidos políticos y movimiento obrero en Chile, México, Era, 1974.

10 Casassus-Montero, Cecilia, Travail et travailleurs au Chili, op. cit., pp. 40-42.

11 Petras, James; Zeitlin, Maurice, El radicalismo de la clase trabajadora chilena, Buenos Aires, Centro Editor de América Latina, 1969.

12 Recordemos que no se trata de una sindicalización stricto sensu puesto que los trabajadores públicos no tienen derecho a sindicalizarse, por lo cual se organizan en agrupaciones, como la ANEF (Agrupación Nacional de Empleados Fiscales).

13 Blest, Clotario, «Organización de la clase trabajadora», Punto Final, 22 de abril de 1969.

14 Algunos autores calculan un total de 627.664 afiliados en 1970 para 4.581 sindicatos.

15 Según el Ministerio del Trabajo, citado por Wallon, Alain «Perspectives actuelles de mouvement ouvrier au Chili», Les Temps Modernes, París, junio 1973, p. 1990.

16 Zapata, Francisco, Estructura y representatividad del sindicalismo en Chile, Santiago, Ilpes, 1968.

17 Angell, Alan, Partidos políticos y movimiento obrero en Chile, op. cit., p. 66.

18 Zapata, Francisco, Federaciones y centrales en el sindicalismo chileno, Ginebra, International Institute for Labour Studies, Documento de trabajo interno, 1971.

19 Según la OIT, 130 confederaciones y federaciones hacen parte de la CUT antes que sea disuelta por la Junta Militar el 17 de septiembre de 1973 (OIT, La situación sindical en Chile: Informe de la comisión de investigación y de conciliación en materia de libertad sindical, Ginebra, 1975).

20 Castillo, Fernando; Echeverría, Rafael; Larraín, Jorge, «Las masas, el Estado y el problema del poder en Chile», Cuadernos de la Realidad Nacional, nº16, Santiago, abril de 1973, pp. 3-70.

21 Garcés, Mario, Tomando su sitio, El movimiento de pobladores de Santiago, 1957-1970, LOM ediciones, Santiago, 2002; Espinoza, Vicente, Para una historia de los pobres de la ciudad, Santiago, Sur, Col. Estudios Históricos, 1988; Dubet, François; Tironi, Eugenio; Espinoza, Vicente; Valenzuela, Eduardo, Pobladores: luttes sociales et démocratie au Chili, París, L'Harmattan, 1989.

22 Garcés, Mario, «Construyendo las poblaciones: El movimiento de pobladores durante la Unidad Popular». En: Pinto, Julio (ed.), Cuando hicimos historia. La experiencia de la Unidad Popular, Santiago, LOM ediciones, 2005, pp. 57-79, y Cofré, Boris, El movimiento de pobladores en el Gran Santiago: las tomas de sitios y organizaciones en los campamentos. 1970-1973, Tesis de maestría en Historia, Universidad de Santiago de Chile, 2011

23 En 1970, 54 % de los habitantes de América Latina vive en las ciudades. Esta tasa sobrepasa el 70% para el caso de Chile. En Santiago, la capital, habita más del tercio del total de la población chilena. (Reynier, Claude, Marginalité et luttes de classes: le Chili de l'Unité populaire, mémoire de maîtrise en sociologie, París, IHEAL-Paris III, 1974).

24 Castells, Manuel, Estructura de clases y política urbana en América Latina, Buenos Aires, Ed. Siap, 1974.

25 Duque, Joaquín; Pastrana, Ernesto, «La movilización reivindicativa urbana de los sectores populares en Chile. 1964-1972», Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, n°4, diciembre 1972, pp. 259-293.

26 Castelain, Christine, «Quand les poblaciones sortent de l'ombre». En: Arenas, Patricio; Gutiérrez, Rosa; Vallespir, Oscar (coord.), Salvador Allende. Un monde possible, París, Syllepse, 2004, pp. 55-63.

27 Duque, Joaquín; Pastrana, Ernesto, «La movilización reivindicativa urbana de los sectores populares», op. cit.

28 Cifra entregada por Manuel Castells («Movimiento de pobladores y lucha de clases en Chile», Eure, Vol.3, nº7, Santiago, abril de 1973, pp. 9-35).

29 Pingeot, François, Populisme urbain et crise du centre-ville dans les sociétés dépendantes : enquête sociologique sur les mouvements revendicatifs urbains à Santiago du Chili: 1969-1973, thèse de doctorat du troisième cycle, Université de Paris V, 1976.

30 Este historiador demuestra el rol particularmente importante del PC en la organización y desarrollo del movimiento de pobladores. Garcés, Mario, Tomando su sitio, op. cit.

31 Duque, Joaquín; Pastrana, Ernesto, «La movilización reivindicativa urbana de los sectores populares en Chile», op. cit.

32 Espinoza, Vicente, «Historia social de la acción colectiva urbana: Los pobladores de Santiago, 1957-1987», Eure, vol.24, n°72, Santiago, septiembre 1998; ver también: Para una historia de los pobres de la ciudad, Santiago, Sur, Col. Estudios Históricos, 1988.

Capítulo 3

Los partidos políticos de izquierda

y la «vía chilena al socialismo»

Los principales partidos de izquierda: discurso y estrategia

Más allá de las diferencias políticas, el conjunto de la izquierda chilena comparte una matriz y referentes ideológicos comunes basados, principalmente, en un marco bastante limitado de textos pertenecientes globalmente al «marxismo soviético[1]». En consecuencia, una revisión de las citas teóricas de la izquierda demuestra la pobreza relativa del «arsenal teórico» utilizado, en el sentido de que no sólo la cantidad de autores es reducido sino también las referencias. Autores europeos como Antonio Gramsci, Karl Korsch, Herbert Marcuse o latinoamericanos como José Carlos Mariátegui, Julio Antonio Mella o José Aricó son desconocidos o casi completamente ignorados (exceptuando Althusser que tiene un amplio eco entre la intelectualidad chilena, gracias a los escritos de Marta Harnecker o Ernesto «Che» Guevara, leído en particular por la juventud radicalizada[2]). Además, las traducciones al español de los clásicos del marxismo en circulación están lejos de abrazar toda su diversidad.

Para resumir en pocas palabras, una de las divergencias centrales en el seno de la izquierda, en cuanto a la estrategia a adoptar para la conquista del poder, se origina en la caracterización de la formación social y de las instituciones del país: en el marco de un país capitalista dependiente como Chile, ¿existe una «burguesía nacional» disponible para apoyar un proyecto de desarrollo económico autocentrado, bajo la dirección de los partidos de izquierda? Partiendo de diferentes análisis de la situación nacional, estas organizaciones partidarias llegan a conclusiones tácticas y estratégicas divergentes: ¿qué tipo de alianza de clases es necesario?, ¿cuál es el ritmo de la transición al socialismo?, ¿cómo caracterizar al Estado chileno[3]? Las dos posiciones más claramente

opuestas y representativas de este debate son las del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y la del Partido Comunista (PC). En relación con el tema del «poder popular», los principales partidos obreros jamás levantaron esta consigna como su bandera reivindicativa principal: será necesario esperar el desarrollo de las luchas sociales durante la Unidad Popular para que esta temática se convierta en un eje central del debate político[4].

El Partido Comunista chileno

Fundado en enero de 1922, el Partido Comunista de Chile (PC) es el heredero del Partido Obrero Socialista (POS), fundado por Luis Emilio Recabarren. En 1970, es uno de los principales PC de América Latina y la mayor fuerza político-social de la Unidad Popular. Es una organización disciplinada y bien estructurada que posee una capacidad militante excepcional en relación con los otros partidos y cuyo pasado le ha permitido ir acumulando una gran cantidad de lazos estrechos con una amplia base social obrera y popular. La cultura e identidad comunista está marcada por una «tradición histórica recabarrenista» donde el «hacer» cotidiano de miles de militantes es central, en contacto con el pueblo a diario, en poblaciones, campos y fábricas, al mismo tiempo que parte de los dirigentes participan del trabajo parlamentario de la República o, en pocas ocasiones, en los ministerios[5]. A la fecha del XIV congreso (1969), el partido estaba compuesto de 3.618 células, de norte a sur del país, representando a 160 mil militantes, de los cuales un 29,4% eran mujeres, 66,6% obreros, 7,7% campesinos y el 20% restante pertenecía principalmente a la pequeña burguesía[6]. Su organización de jóvenes –las JJCC– llegó a tener, según uno de sus encargados nacionales (Juan Carlos Arriaga), más de 80 mil miembros en 1973[7]. Desde su fundación, este partido ha estado fuertemente ligado a la URSS y se mantiene, contra viento y marea, hermético a toda crítica al estalinismo[8]. Se caracteriza también por un fuerte monolitismo reivindicado por sus dirigentes como una cualidad, y por el verticalismo interno, lo que significa la preponderancia del centralismo por sobre la democracia, y la marginación de toda disidencia[9].

En 1970, la concepción de la «vía pacífica» –reafirmada por la «doctrina Brézhnev-Kosygin»– y sobre todo para el Tercer Mundo, la revolución «por

etapas» en alianza con la burguesía nacional, forman parte de los ejes estratégicos del PC. Esta visión política tiene gran influencia en la «vía chilena al socialismo» dirigida por la Unidad Popular[10]. No obstante, como bien lo recuerda el historiador Rolando Álvarez, más que una perspectiva en términos de «vía pacífica», varios dirigentes del PC introducen una mutación en sus discursos entre los Congresos de 1965 y 1969 para reivindicar más bien el camino de una «vía no armada» al socialismo, político-institucional, pero también basada en la «lucha de masas» que «no escatimaba el uso de todos los espacios legales para desarrollarse, así como tampoco despreciaba métodos 'ilegales' cuando era necesario», incluyendo la constitución de un pequeño aparato político-militar[11]. Con la elección de Allende, el PC identifica el «poder popular» esencialmente con el establecimiento de un «gobierno popular» –también llamado «gobierno de los trabajadores»– y con todas las formas de movilización que le pudiera dar gobernabilidad, sin sobrepasar la legalidad vigente, y a la vez abrir paso a una transición poscapitalista. Debemos señalar que, en ese entonces, la noción clásica del marxismo-leninismo de «dictadura del proletariado» no es reivindicada como tal por el PC: el partido considera que la primera fase –o etapa– de la revolución chilena (cuya duración no está definida) debe pasar por un sistema de economía híbrida, combinando capitalismo monopólico de Estado con un modo de acumulación proveniente del sector privado. Esto supone una política de colaboración con la pequeña y mediana burguesía, bajo conducción de la clase obrera y el control por el aparato estatal de sectores enteros de la economía, pero que no implica de ningún modo su remplazo o «destrucción», como lo indica clásicamente el leninismo. La alianza preconizada, llamada «política de mayoría nacional» incluye a la burguesía «nacional» que no esté en situación de monopolio[12].

El Partido Socialista chileno

El Partido Socialista chileno (PS), organización a la que pertenece el presidente Allende, es el segundo partido obrero del país. Se trata de una organización socialmente más heterogénea que el PC. Durante la UP, conoce un crecimiento explosivo del número de militantes y aumenta considerablemente su implantación en los medios populares. Históricamente, este partido podría ser identificado por sus raíces populistas, sus importantes relaciones con los medios

parlamentarios y la francmasonería. Habiendo sabido mantener su calidad de partido-movimiento, se trata de una organización que presenta una gran receptividad a las presiones del movimiento social y por esa razón, se caracteriza por una táctica política «centrista» (en el sentido marxiano del término, es decir, oscilando entre reforma y revolución[13]). Los nuevos estatutos del Partido son aprobados en el Congreso Nacional de Chillán (1967), donde se define como un partido «marxista-leninista», basado en el centralismo democrático y dividiendo a sus adherentes en simpatizantes, aspirantes y militantes[14]. Según el testimonio de Carlos Altamirano, secretario general del PS durante la Unidad Popular, este partido cuenta con entre 50 y 60 mil militantes al inicio del período y con 120 a 130 mil en 1973[15]. El PS se caracteriza por incluir numerosas tendencias internas, que van desde la centroizquierda hasta sectores favorables a prácticas mucho más radicales. Existen por ejemplo, una corriente de sensibilidad trotskista (una de sus figuras es Adonis Sepúlveda), otras tendencias conocidas como la de los «comandantes», la de los «elenos[16]» y, finalmente, un ala moderada en torno a la figura de Salvador Allende[17].

El carácter discursivo muy radical de este partido y su crítica al reformismo y a la revolución por etapas son claramente enunciados en el Congreso de Chillán, bajo la dirección de su secretario general, Aniceto Rodríguez. El sector moderado, más cercano al PC y dirigido por Salvador Allende (o incluso por el historiador Julio César Jobet), mantiene sin embargo un peso esencial en todos los niveles del aparato y prestigio en las bases. En su tesis, Marie-Noëlle Sarget ha recordado la capacidad de adaptación y oportunismo de esta organización que, en ciertas coyunturas, supo unir discurso revolucionario y prácticas políticas reformistas, respetuosas del sistema institucional[18]. Como lo afirma el historiador Peter Winn, este partido, más allá de su perfil marxista, «mantenía considerables elementos tanto populistas como social-demócratas[19]». Es en el XXIII Congreso, organizado en La Serena el 27 de enero de 1971, en el que se define la línea política de esta colectividad para los siguientes años. En esta ocasión, la «línea dura» encarnada por Aniceto Rodríguez sufre un revés. Sin embargo, la elección de Carlos Altamirano como nuevo secretario general, implica que la línea del «frente de trabajadores» no es totalmente cuestionada. La alianza política con la DC –propuesta por Allende en el Parlamento– es fuertemente criticada. Por otra parte, se define la UP como una formación política «pluriclasista» donde confluyen «tendencias obreras, pequeñoburguesas y burguesas[20]». En conclusión, las tesis de La Serena consagran la postura crítica del PS frente a las posiciones de los «gradualistas» a pesar de que los socialistas son entonces, una fuerza esencial del gobierno. Esto explica la actitud a veces contradictoria de

esta organización durante la UP.

Los cristianos revolucionarios

y el Movimiento de Acción Popular Unitaria (MAPU)

Los cristianos juegan un importante rol durante toda la Unidad Popular en el movimiento social y partidista. El MAPU nació de una escisión de la Democracia Cristiana en 1969, cuando se enfrentaron tres tendencias principales: la «oficialista», la «tercerista» y la «rebelde». Esta última constituye la base del MAPU, que se incorporó a la Unidad Popular bajo la dirección de Rodrigo Ambrosio (secretario general). El MAPU se declara como «movimiento» y no como partido político. En efecto, el objetivo proclamado por estos militantes es lograr la reunificación de todos los partidos de izquierda en un gran partido revolucionario. Con el propósito de confirmar su opción por la revolución, el movimiento postula la necesidad de constituir un «frente amplio de trabajadores» bajo hegemonía obrera y que excluiría a la pequeña burguesía progresista, posición paradójica, ya que la mayoría del MAPU proviene precisamente de esa clase social[21]. Según el testimonio de Sergio Aguilar, responsable regional del MAPU en Santiago durante la dictadura y miembro de la dirección nacional, esta organización en 1972 habría contado con entre 10 mil y 15 mil miembros[22]. Respecto de la vía a seguir para la conquista del poder, Jaime Gazmuri, dirigente de la organización, entrevistado por la revista Punto Final, prefiere hablar de una combinación de dos modos estratégicos (vía pacífica y vía armada), mostrando así una posición intermedia al interior de la coalición de la Unidad Popular[23]. El MAPU es una de las organizaciones de la UP que reivindican más regularmente la noción de poder popular. Progresivamente, otros sectores cristianos se integran al proyecto de la izquierda. Es lo que sucede, por ejemplo, durante 1971 con la aparición de la Izquierda Cristiana (IC), escisión de la DC también, pero además de otros pequeños movimientos estructurados en torno a la Iglesia católica, como el muy radical movimiento de Cristianos Por el Socialismo (CPS). El CPS tiene su origen en organizaciones como la «Iglesia Joven» y la «Iglesia con el pueblo» constituidas por algunos curas y religiosos, a los cuales se le unen alrededor de 200 laicos[24].

El Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR)

El Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) es el resultado de un proceso de unificación de varios pequeños grupos revolucionarios, provenientes de diferentes horizontes sociales y políticos. Contrariamente a una cierta historiografía persistente, el MIR no es el producto de una supuesta «influencia extranjera» (Cuba), y tampoco el fruto de la acción de un colectivo de estudiantes radicalizados de Concepción (conducidos por su futuro líder, Miguel Enríquez). Si estos últimos jugaron un rol indesmentible en su formación –y posterior conducción–, reconocemos en los orígenes de la «prehistoria del MIR[25]» o más bien de su «constituyente revolucionaria» a varios dirigentes provenientes del mundo obrero[26]. Entre ellos, estaban Humberto Valenzuela y Luis Vitale, historiador-militante de este movimiento que identifica ocho grupos en su conformación original[27]. Con una marcada influencia del trotskismo, encontramos al Partido Socialista Popular (PSP), que nace del Partido Obrero Revolucionario (POR), y a la Vanguardia Revolucionaria Marxista (VRM)-Rebelde. Por su parte, el grupo estudiantil de los hermanos Enríquez y de Bautista van Schouwen, organizado en torno al periódico Revolución, proviene de las filas de las Juventudes Socialistas de Concepción y previamente de la VRM. El trabajo de la historiadora Eugenia Palieraki ha permitido esclarecer, de manera crítica y documentada, la génesis de esta «nueva izquierda» latinoamericana[28].

El hecho de que el antiguo dirigente nacional de la CUT, el cristiano revolucionario Clotario Blest, haya participado de manera fugaz en la formación del MIR, le dio sin duda una legitimidad inmediata. En agosto de 1965 esta organización se funda en Santiago con el objetivo claramente identificado, a partir de su Declaración de Principios, de contrarrestar la hegemonía reformista ejercida por el PS y el PC sobre las clases populares: «Las condiciones objetivas están más que nunca maduras para el derrocamiento del sistema capitalista. A pesar de ello, el reformismo y revisionismo siguen traicionando los intereses del proletariado» (artículo 5[29]). En esta óptica, el MIR rechaza la teoría de la «vía pacífica» (artículo 7). El principio de la inevitabilidad de la lucha armada es una de las bases de la teoría política del MIR, aunque no por ello se debe sobreestimar la inspiración castrista de sus orígenes[30]. Cuando se produce el giro

teórico de diciembre de 1967, con ocasión del III Congreso del MIR, la autocrítica apunta al «ideologismo puro» inicial de la organización y a la necesidad de pasar a la «acción directa de masas». En esta oportunidad, Miguel Enríquez, hijo del rector de la Universidad de Concepción, se convierte en su secretario general. Esta inflexión implica un cambio de táctica: la organización se propone acentuar su presencia entre los campesinos pobres (particularmente, los campesinos mapuche de la provincia de Cautín) y entre el proletariado urbano, sobre todo aquel que vive en las condiciones más duras: los pobladores de los campamentos de Santiago, siendo el de Nueva Habana uno de los más simbólicos. Su inserción social en la clase obrera todavía es muy débil, no obstante cuenta con una presencia notable en algunos sectores como, por ejemplo, en la industria textil (fábricas de Tomé) y en la minas de carbón del sur del país, franjas populares donde existe algún espacio político que no ha sido completamente «copado» por el PS y el PC. Con respecto a la política internacional, el MIR permanece ligado a Cuba como a un polo magnético. Sus posicionamientos internacionales no hacen muchas referencias al fenómeno estalinista y dejan poco lugar al análisis crítico de la naturaleza del bloque del Este[31]. Paralelamente a su difícil trabajo de inserción social, la dirección decide en 1967, acentuar su estrategia de acción directa, especialmente a través de la expropiación de bancos[32]. Exponiéndose así a la represión del Grupo Móvil de Carabineros del gobierno de Frei, el movimiento pasa a la clandestinidad. Esta reorganización «desde arriba», sin consultar a las bases y que privilegia la acción directa armada, provoca disensos en la organización. Por otra parte, cuando la comisión política mirista se entera de la candidatura de Salvador Allende, decide suspender las acciones directas pero rechaza participar en el juego electoral siguiendo el principio de que «una victoria electoral no significa la conquista del poder por los trabajadores[33]».

Esta estrategia lleva a la división del movimiento en julio de 1969, antes incluso de que se desarrolle el IV Congreso: la «vieja guardia» del movimiento, específicamente el sector trotskista, deja la organización[34]. Después de la victoria del «Chicho» (apodo de Allende), el MIR realiza una autocrítica parcial, admitiendo que el «triunfo electoral de la izquierda constituye un inmenso avance en la lucha del pueblo por conquistar el poder» y que no habían previsto «en profundidad de que la UP pudiera asumir el gobierno[35]». Sin embargo la visión general sobre la necesidad de transformación revolucionaria se mantiene: destrucción violenta del Estado burgués, enfrentamiento armado entre los capitalistas y los trabajadores «con el socialismo como única meta[36]». A partir de esta fecha, el MIR decide apoyar críticamente el proceso conducido por la UP,

manteniendo su independencia organizativa. Proporciona, sin embargo, durante varios meses una guardia cercana al presidente Allende formando parte del Grupo de Amigos del Presidente (GAP), así como una modesta ayuda gracias a su aparato de informaciones[37]. Los Grupos Político Militares (GPM), creados a partir de noviembre de 1969, constituyen los núcleos de base del MIR y cada uno de ellos se consagra al trabajo político en los diferentes «frentes de masas» (campesino, estudiantil, pobladores, trabajadores, soldados[38]). Los secretarios regionales son designados por el Secretariado Nacional y los jefes de GPM por los Comités Regionales. El derecho a organizarse como tendencia interna no está contemplado y el ingreso de militantes se hace a cuenta gotas[39]. Este esquema, leninista y político-militar y por lo tanto compartimentado, sufre varias transformaciones bajo el impacto del desarrollo del trabajo en el seno del movimiento social durante la UP. Es lo que condujo a la aparición de «comisiones» de coordinación del trabajo sindical, campesino, etc. Pareciera incluso que hubo una crisis orgánica de los GPM bajo la presión del desfase creciente entre la estructura político-militar del MIR y la inserción creciente de esos militantes en los «frentes de masas». El testimonio de Javier Bertín y de Guillermo Rodríguez, ambos militantes del GPM 4 de Santiago, permite conocer mejor esos «reajustes[40]». A fines de los años sesenta, la organización contaría con alrededor de 2 mil militantes, cifra que llega a más de 6 mil en 1973, incluso 10 mil militantes, revolucionarios «profesionales[41]». Si se toma en cuenta a los numerosos simpatizantes y aspirantes del joven partido, todos muy activos políticamente, la cifra de 15 mil militantes debiese ser bastante cercana a la realidad.

Otros movimientos de la izquierda extraparlamentaria

Si quisiéramos realizar un estudio exhaustivo del paisaje político de la(s) izquierda(s) chilena(s) en 1970, sería necesario abordar las numerosas pequeñas organizaciones o movimientos que existían a la izquierda del MIR. Un campo inexplorado de investigación de gran interés para politólogos, sociólogos o historiadores de los movimientos revolucionarios latinoamericanos. Podemos destacar aquí, algunos aspectos interesantes. En lo relativo a la historia del «poder popular» chileno, varias organizaciones parecen tener cierta influencia local. Esto, a pesar de su tamaño a veces minúsculo y su campo de acción

limitado. Ya hemos intentado demostrar el interés que tendría, por ejemplo, conocer mejor el movimiento trotskista. El Frente Revolucionario (FR), proveniente en parte de una escisión del MIR producto de las diferencias del año 1969, es una tendencia trotskista heredera del Partido Obrero Revolucionario (POR), fundado a fines de los años treinta y liderado por el dirigente obrero Humberto Valenzuela[42]. Su orientación política está marcada por su adhesión a las tesis de la Cuarta Internacional-Secretariado Unificado (SU). Entre las reivindicaciones de esta organización, se encuentra el tema del «control obrero». Durante el año 1972, esta tendencia política se transforma en el Partido Socialista Revolucionario (PSR[43]), organización con una limitada influencia en la clase obrera, pero que, a pesar de ello, logró contar con dirigentes nacionales en la CUT. Podemos destacar también la existencia de la Liga Comunista que, en la misma época, es una sección «simpatizante» de la Cuarta Internacional-SU. Mencionemos igualmente las organizaciones maoístas, provenientes en general –en el impulso del conflicto sino-soviético– de una escisión del Partido Comunista. Sabemos por ejemplo, que el Partido Comunista Revolucionario (PCR) y el PC Bandera roja jugaron un cierto rol a nivel de los cordones industriales (especialmente en el de Macul). Según Eugenio Cantillana (obrero encargado del frente sindical del PCR en Santiago), su partido agrupa en ese entonces, a no más de 200 militantes (con un núcleo de 60 personas en Concepción[44]). Habría que mencionar también la existencia de la VOP –Vanguardia Organizada del Pueblo–, organización insurreccional armada, formada en agosto 1968, dirigida por los hermanos Rivera Calderón (expulsados de las Juventudes Comunistas y del MIR), y responsable del asesinato del ex ministro del Interior Edmundo Pérez Zujovic, en junio de 1971[45].

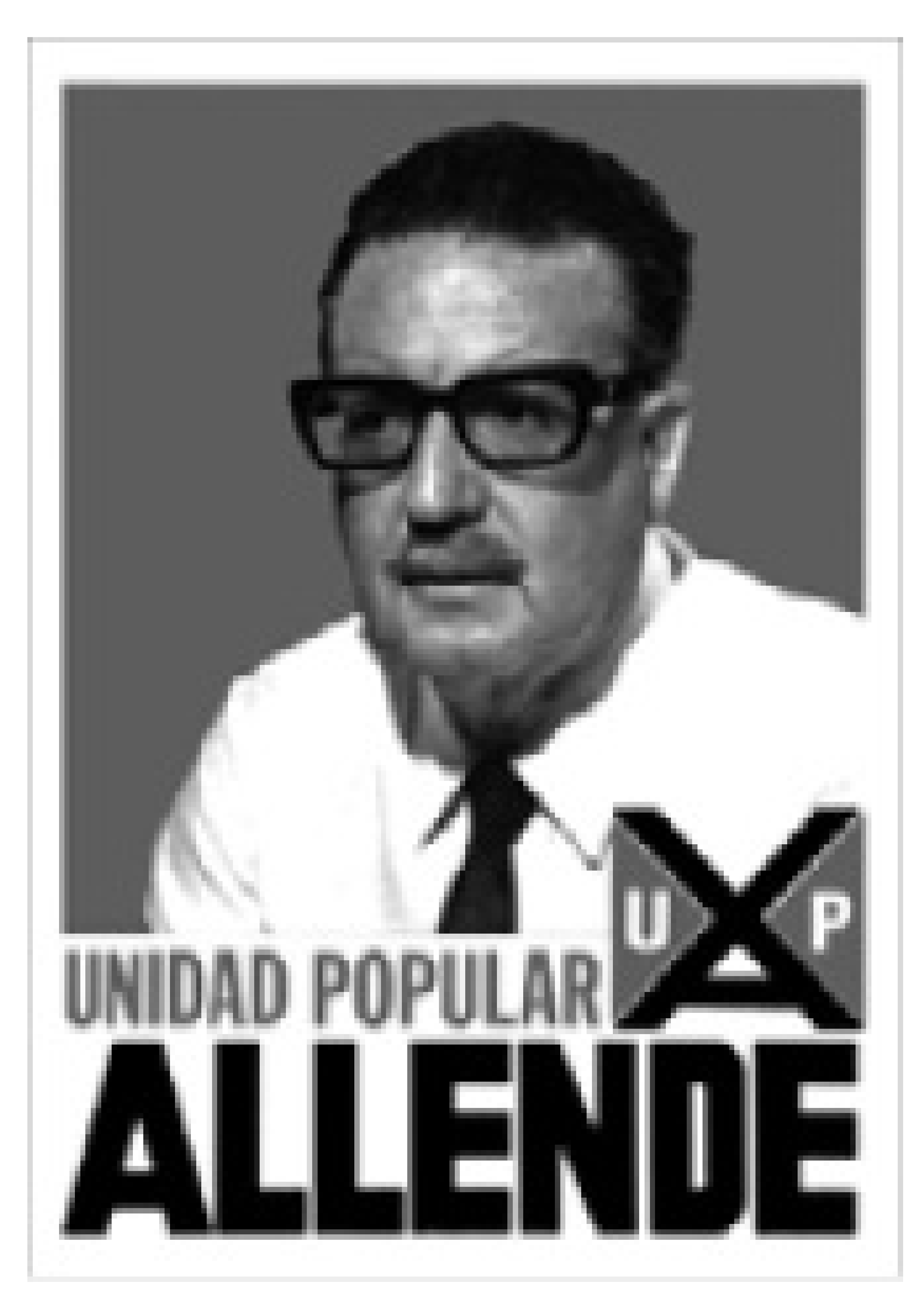
A modo de conclusión, subrayemos que, en un país con apenas 10 millones de habitantes, la existencia de varias centenas de miles de militantes de izquierda que se declaran favorables a un proyecto político anticapitalista y socialista no es un hecho menor. Esta presencia política es una clave para comprender las numerosas relaciones e interacciones entre el campo político y el espacio del movimiento social u obrero, cuando numerosos activistas están «multiposicionados» en el medio partidario. Como lo tiende a demostrar la entrevista oral, una mayoría de los dirigentes del movimiento popular (sindicalista, organizaciones vecinales, etc.) es también militante de partidos políticos[46]. Esta fuerte extensión del campo político de la izquierda a vastas porciones de la sociedad civil organizada implica el refuerzo de una subjetividad colectiva movilizadora, la legitimación de la figura del militante como una suerte de necesidad compartida por amplios sectores sociales y la elaboración de

imaginarios nacionales propensos a aceptar o discutir la idea del socialismo como horizonte utópico. Aunque no será centro del análisis de este libro, es menester subrayar que frente a estas organizaciones, se encuentran partidos de oposición que también poseen un campo militante activo, aunque numéricamente inferior pero estrechamente más ligados al empresariado y a las clases dominantes: la Democracia Cristiana (DC) agrupa alrededor de 60 mil militantes (con también una fuerte presencia en el movimiento sindical y en la CUT) y la oposición de derecha conservadora (Partido Nacional) o fascista (con organizaciones como Patria y Libertad) acumularía cerca de 30 mil militantes[47].

La «vía chilena al socialismo». Formación y programa de la Unidad Popular

La UP es una coalición heterogénea de partidos políticos que van desde el Partido Comunista hasta el reducido Partido Radical, pasando por el Partido Socialista y sectores democratacristianos en ruptura con su organización. El 17 de diciembre de 1969, los diferentes partidos se ponen de acuerdo en torno a un programa que debe servir a la campaña presidencial de Salvador Allende (finalmente elegido representante de la coalición).

Cartel para la campana electoral presidencial de 1970


UNIDAD POPULAR
U
P
ALLENDE

Fuente: Vico, Mauricio, «El cartel político del gobierno

de Salvador Allende (1970-1973)», Monográfica, 2012[48].

Para resumir, la «vía chilena al socialismo» es sobre todo una adaptación sui generis de la teoría de la vía pacífica o más bien «no armada» al socialismo. Si bien es cierto que la vía chilena es producto de una construcción original unitaria desde la izquierda y parte del movimiento popular nacional, podemos también distinguir claramente en esta apuesta la influencia de las teorías internacionales del PCUS moscovita y la imbricación de Chile en el ajedrez geopolítico de la Guerra Fría, aunque para Allende se trata de forjar una «tercera vía» entre la URSS, Cuba y el imperialismo made in USA[49]. Intelectuales orgánicos de la UP, como el asesor de Allende Joan Garcés, prefieren llamarla «vía política» o «institucional» al socialismo (en oposición a la vía insurreccional o armada[50]). En palabras de Garcés, la Unidad Popular abre un proceso de transición al socialismo, pero manteniendo la coexistencia entre clases sociales antagónicas y buscando una reestructuración socioeconómica dentro del marco legal burgués, donde la clase obrera generaría la hegemonía política para conducir el cambio social[51]. Según el historiador Luis Corvalán Márquez, la UP instaló

un programa que correspondía a una vía pacífica, institucional y de amplia alianza nacional y popular. Esta visión reflejaba predominantemente las concepciones de su candidato Salvador Allende y del PC. Por tanto, no respondía al concepto de Frente de Trabajadores ni al recurso a la vía armada planteado con antelación por el PS[52].

¿Qué es lo que explica entonces la participación del Partido Socialista? Carlos Altamirano ha respondido en varias oportunidades a esta pregunta afirmando que,

[…] la institucionalidad chilena era legítimamente aprovechable por el movimiento revolucionario. Pero no en la perspectiva de completar un ciclo histórico hasta la construcción del socialismo, sino solamente en la de enfrentar desde posiciones de fuerza más favorables –políticas, sociales y militares– la

ruptura del Estado burgués[53]».

La táctica de la «vía chilena al socialismo» se sostiene principalmente sobre cuatro tesis centrales, articuladas entre ellas:

a. La tesis de la «revolución por etapas» o mejor dicho la posibilidad de una transición gradual e institucional al socialismo, utilizando todo el potencial de las instituciones existentes.

b. La tesis de la «flexibilidad institucional» y de la especificidad del Estado chileno, que se supone está inserto en el seno de un sistema político estable, garantizando, de este modo, que se mantenga el funcionamiento de la «democracia».

c. La tesis según la cual las Fuerzas Armadas son constitucionalistas y de ahí su respeto inquebrantable del sufragio universal.

d. La tesis de la alianza de clases con la llamada «burguesía nacional progresista», en el marco de un proyecto de desarrollo industrial autocentrado, antimonopolista y antiimperialista.

La Unidad Popular manifiesta la voluntad de salir del entrampamiento de los gobiernos anteriores con el objetivo de aplicar valientes reformas democráticas y antiimperialistas, así como realizar una verdadera redistribución de las riquezas[54]:

- Nacionalización de los recursos naturales del país, principalmente el cobre (el «salario de Chile») en manos del imperialismo estadounidense.

- Reforma agraria que profundizaría la que había iniciado el gobierno democratacristiano.

- Nacionalización parcial de los grandes monopolios industriales y del sistema bancario, así como de una parte del sector de la distribución.

- Numerosas reformas sociales progresistas (las «40 medidas») sin precedentes

–por su envergadura– en la historia del país.

Globalmente, el programa económico de la UP anuncia un conjunto de medidas destinadas a favorecer el desarrollo económico del país y a utilizar al máximo sus capacidades productivas. Allende quiere alcanzar este objetivo, mediante una intervención gubernamental fuerte con la implantación de un capitalismo de Estado que controle los principales monopolios del país. Es lo que se llamó la «construcción de la nueva economía», que convocaba a la edificación de un «Área de Propiedad Social y mixta» (APS), conformada por la nacionalización del sector minero (cobre, salitre, fierro, carbón…), la banca y el comercio exterior, así como de los «monopolios industriales estratégicos» y de las «grandes empresas y monopolios de distribución[55]». En una perspectiva de larga duración, la estrategia de la UP –especialmente por su proyecto de alianza táctica con la «burguesía nacional»– se inscribe en la continuidad de los frentes populares de fines de los años treinta, aunque con características muy diferentes, partiendo por el hecho de que se encuentra bajo hegemonía de dos partidos marxistas, mayoritariamente obreros. Los historiadores Gabriel Salazar y Julio Pinto califican a la UP como coalición «nacional-populista» acompañada de un discurso revolucionario. Este análisis se basa principalmente en el uso que se propone hacer la izquierda del Estado y en el programa de continuidad del período abierto en los años treinta, con diversos intentos de desarrollo capitalista autocentrado[56]. En nuestra opinión, el inconveniente de la noción de «nacional-populismo» radica en que tiende a ser un verdadero comodín teórico que no permite comprender las verdaderas características de este gobierno, su base social organizada –en particular, por el sindicalismo–, su inserción popular, su orientación socialista y articulación en torno a grandes partidos obreros que reivindican el marxismo. Así, en ningún caso se puede confundir un gobierno democrático-popular con una clara orientación antiimperialista como el de Salvador Allende con el «populismo integral» de los regímenes de Vargas o Perón, en Brasil y Argentina, respectivamente, o incluso con experiencias nacional-populares posneoliberales más recientes (como el chavismo venezolano por ejemplo[57]). No se puede negar entonces el carácter específico de la UP; en otros términos, su carácter sui generis y original, aunque en el plano histórico se inscriba evidentemente dentro de la tradición de los frentes populares practicados por la izquierda parlamentaria chilena desde finales de los años treinta.

Una característica específica de la táctica de la Unidad Popular es el papel que les otorga a los militares en la transición al socialismo. La tesis que predomina entre los partidos que conforman la UP es la de la excepción histórica del Estado democrático chileno y de la sumisión legalista de las Fuerzas Armadas a las decisiones políticas civiles[58]. Como ya lo había demostrado a fines de los años sesenta el sociólogo Alain Joxe, una puesta en perspectiva histórica resiste mal tales argumentos[59]… Según Fernando Mires, la estrategia de la Unidad Popular estuvo marcada por «dos pecados originales[60]»: por una parte, la «obsesión» y el apego incondicional al Estado y su legalidad; por la otra, las limitaciones de su programa en términos económicos y participativos. Gabriel Smirnov en el mismo sentido destaca tres debilidades fundamentales de la izquierda gubernamental: su proyecto de alianza de clase, la política en relación con las Fuerzas Armadas y sus ilusiones sobre el posible uso del aparato estatal-institucional en la transición al socialismo[61].

En cuanto al «poder popular», en los textos oficiales aparece interpretado desde una versión minimalista hasta una más amplia: desde un apoyo de las bases populares organizadas (a través de la «lucha de masas») a la política del gobierno hasta la creación de los gérmenes de un nuevo Estado socialista. El programa de la UP contiene un párrafo que se llama explícitamente «El poder popular», donde se afirma que las transformaciones estructurales propuestas son procesos de cambios revolucionarios. Su aplicación

reside en el control por el pueblo organizado del poder político y económico, expresado en el área estatal de la economía y en la planificación general de ésta. Es este poder popular el que asegurará el cumplimiento de las tareas señaladas[62].

De un modo general, la referencia al «poder popular» por Salvador Allende reenvía a una amplia alianza de las clases y capas populares[63]. A la pregunta «Qué es el poder popular», el nuevo presidente responde evasivamente:

Poder popular significa que acabaremos con los pilares donde se afianzan las minorías que, desde siempre, condenaron a nuestro país al subdesarrollo […] Terminaremos con el proceso de desnacionalización, cada vez mayor, de nuestras industrias y fuentes de trabajo, que nos somete a la explotación foránea […] Es tarea esencial del Gobierno Popular, o sea de cada uno de nosotros, repito, crear un Estado justo, capaz de dar el máximo de oportunidades a todos

los que convivimos en nuestro territorio[64].

El Estado «justo» está puesto al centro del proceso de transformación, sin que sea mencionado claramente en el marco de qué tipo de relaciones de producción y modo de acumulación, este proyecto se inserta.

La constitución de este «poder popular» se concibe a partir de dos hipótesis: una política y otra socioeconómica (una interactuando con la otra[65]). La hipótesis política afirma que la UP va a transformar las actuales instituciones para instaurar un nuevo Estado donde los trabajadores y el pueblo ejercerán realmente el poder. Este futuro «Estado popular» se supone será levantado sobre la base de organismos regionales y locales, así como gracias a la constitución de la «Asamblea del pueblo» y de una «nueva Constitución». Tal transformación, por la vía legal, considera tener la mayoría absoluta en el Parlamento, lo que finalmente la UP nunca tuvo. Una de las primeras manifestaciones de esta limitación impuesta al proceso de cambio es el «estatuto de garantías constitucionales», que los democratacristianos proponen a cambio de su apoyo para la confirmación oficial de Allende en el Congreso[66]. Estas «garantías constitucionales», además de introducir cierta cantidad de «trampas» al programa de la UP, contemplan impedir el uso de una posible «censura» sobre medios de comunicación por parte del Estado, garantizar «la libertad de trabajo y su protección» y la libertad sindical, prohibir que «Juntas de Vecinos, Centros de Madres, Sindicatos, Cooperativas y demás organizaciones sociales» puedan «arrogarse el nombre o representación del pueblo, ni intentar ejercer poderes propios de las autoridades del Estado»(artículo 17) e insisten en que «la fuerza pública está constituida única y exclusivamente por las Fuerzas Armadas y el Cuerpo de Carabineros, instituciones esencialmente profesionales, jerarquizadas, disciplinadas, obedientes y no deliberantes» (artículo 22). Desde 1970, la oposición a Allende quería asegurarse que éste no buscaría reforzar su respaldo político apoyándose sobre órganos de democracia directa o formas de poder popular que pudieran cuestionar el monopolio de la violencia del Estado y el orden institucional en Chile[67].

Por otra parte, la hipótesis socioeconómica de la izquierda consiste en la constitución de una nueva estructura productiva y en el aumento de los ingresos de los más pobres. Las temáticas en torno a la incorporación explícita de las clases populares a la administración directa de la economía, la autogestión y el

control obrero están prácticamente ausentes del programa inicial. En efecto, la participación de los trabajadores es abordada muy tímidamente en el texto ya que, y es un hecho remarcable, sólo se hace una alusión a una «eventual» participación en el funcionamiento de las empresas nacionalizadas. Según Fernando Mires, se trataría por lo tanto de un programa político que «marginaliza» la perspectiva de participación directa de una mayoría de las capas populares, mientras que en el sector privado, que se mantiene mayoritario, nada ha sido previsto en relación con el derecho de control de los trabajadores sobre la producción. Según algunas estimaciones, más de un millón y medio de personas no harían parte de un programa de participación política organizada[68]. Mario Durán calcula que, sólo desde el punto de vista de los asalariados, aproximadamente unas 700 mil personas son así «excluidas» del proyecto de participación de los trabajadores en el sector nacionalizado o Área de Propiedad Social[69]. Como concluye Héctor Vega,

cuando el proyecto economicista de la UP es propuesto, 65% de los trabajadores quedan fuera. Los límites del programa de acción tienen una doble consecuencia: por una parte, la fuerza de los trabajadores incorporados es considerablemente restringida y por la otra, nos pronunciamos por una alianza con los sectores medios que en la práctica iba a mostrar sus límites[70].

No obstante, como lo veremos más adelante, el tema de la participación de los trabajadores cobrará una importancia creciente en el discurso de los dirigentes y praxis del movimiento obrero. En este sentido, Luis Figueroa, presidente nacional de la CUT y militante comunista, señala en marzo 1972 que

La participación de los trabajadores se entiende como una participación en los mecanismos económicos de producción y de comercialización en las empresas y servicios. Pero no la entendemos sólo limitada al área económica, sino como participación multifacética, que va desde la constitución de un modesto comité de producción en una sección de una empresa, hasta la administración de la misma empresa; desde la preocupación por aumentar la producción y la productividad hasta la planificación regional y nacional de la economía. Es decir, la entendemos como una participación en toda la vida económica y social del país[71].

La UP pretende también movilizar su base popular en torno a dos ejes[72]. En primer lugar, gracias a su implantación en las organizaciones sociales tradicionales: el movimiento sindical (CUT, sindicatos industriales, profesionales y campesinos) y las organizaciones poblacionales, principalmente las Juntas de Vecinos que habían sido promovidas por la administración Frei, con el objetivo de canalizar las reivindicaciones de los sectores urbanos marginalizados[73]. El otro elemento movilizador es más original, ya que se plantea concretamente la pregunta de una nueva forma de «poder popular»: se trata de los Comités de la Unidad Popular (CUP). Estos últimos fueron concebidos para movilizar militantes y simpatizantes que participaran en la campaña electoral a favor de Allende. Sin embargo, según el programa de la UP, «los CUP no sólo serán organismos electorales. Serán intérpretes y combatientes de las reivindicaciones inmediatas de las masas y, sobre todo, se prepararán para ejercer el poder popular[74]». Será necesario entonces, preguntarse cuál fue su real actividad y alcance. En definitiva, tal como lo subraya Víctor Farías, convergen en el proyecto de la UP formas híbridas donde domina un «poder popular institucionalizado» –bajo control estatal y restringido a ciertos sectores sociales– que se va a combinar crecientemente con un «poder popular de masas[75]», que llamaremos aquí «poder popular constituyente».

La llegada de Salvador Allende a La Moneda, se hace en el marco de una movilización colectiva extraordinaria en todo el país y que anunciaba la «batalla de Chile» a venir, admirablemente ilustrada en los documentales de Patricio Guzmán[76]. Es esta ola de esperanza revolucionaria la que es legitimada en las urnas: el 4 de septiembre de 1970 después de una campaña electoral marcada por una agitación fuera de lo común; una experiencia que ya en sí misma es una «gran ruptura» del consenso que reina en el seno de las clases dominantes. Es el día de la «celebración popular» por excelencia, el día de fiesta y sueños descrito por Tomás Moulian, que también encerraba en sí posibles dramas y derrotas futuros:

El 4 de septiembre de 1970 en la noche, la muchedumbre ocupó «las anchas avenidas» para gritar y bailar, para abrazarse y compartir las esperanzas del triunfo. La marea humana que recorría la Alameda no era una masa amorfa, un heterogéneo agregado de individuos dispersos, sino un pueblo, una comunidad que expresaba su alegría: cada uno portaba en su rostro ese signo. Pero cada uno de los que allí estaban sabía que su acto no sólo correspondía al registro catártico o al rito comunitario de compartir con los otros la alegría por un triunfo largamente esperado. Sabían que esa marcha alegre y festiva no sólo tenía el

carácter de una celebración; también era el primer movimiento de una batalla: movilizarse era un acto de alegría pero también una demostración de fuerza. La noche del triunfo el sentido de ese período aún no vivido se presenta en la forma de síntesis, apareciendo la fiesta y el drama en su unidad contradictoria[77].

Es este formidable impulso popular el que lleva a la presidencia de la República a Salvador Allende, médico y francmasón, varias veces candidato en este tipo de elecciones, viejo conocido de los pasillos parlamentarios, pero también excelente tribuno y militante socialista convencido, capaz de arengar a las masas y movilizar a los trabajadores[78]. Esta victoria se obtiene sólo con una mayoría relativa de 36,6% de los votos emitidos y fue posible por la división de la derecha y de las élites, pero también por la intensa movilización electoral popular[79]. Sin lograr superar sus propias contradicciones, la oposición al «Chicho» se enfrenta con dos proyectos distintos: uno, encarnado por Radomiro Tomic, representante de la Democracia Cristiana (del ala izquierda de este partido) que obtiene un 27,8%; el otro, por Jorge Alessandri, candidato de la derecha conservadora y liberal, con 34,9%. A partir del 5 de noviembre, Salvador Allende reitera su concepción de una transición al socialismo legalista e institucional apoyada por la movilización organizada de las masas populares. En su discurso en el Estadio Nacional, frente a delegaciones extranjeras, le rinde homenaje al recién asesinado general –legalista– Schneider, en una maniobra fracasada de un comando paramilitar de Patria y Libertad (apoyado por la CIA) para impedir su acceso a la presidencia

en estos sesenta días decisivos que acabamos de vivir, Chile y el mundo entero han sido testigos, en forma inequívoca, de los intentos confesados para conculcar fraudulentamente el espíritu de nuestra Constitución; para burlar la voluntad del pueblo; para atentar contra la economía del país, y, sobre todo, en actos cobardes de desesperación, para provocar un choque sangriento, violento, entre nuestros conciudadanos. Estoy personalmente convencido de que el sacrificio heroico de un soldado, el comandante en jefe del Ejército, general René Schneider, ha sido el acontecimiento imprevisible que ha salvado a nuestra patria de una guerra civil[80].

Ya habían comenzado los tumultuosos mil días que cambiaron a Chile… ¿El

gobierno supo y pudo enfrentar exitosamente a sus numerosos adversarios internos y externos, apoyándose en la «lucha de masas» como se lo proponía? ¿En qué medida el movimiento obrero y social urbano logró autoorganizarse en dirección hacia ese famoso «poder popular» y en clave de construir la transición al socialismo? ¿Alcanzó la izquierda chilena a sobrepasar las limitaciones inherentes a la estrategia de la vía institucional en el contexto histórico en el cual debe asumir el poder?

Es lo que pretendemos analizar en este libro.

1 Marcuse, Herbert, Le marxisme soviétique: essai d'analyse critique, París, Gallimard, 1971.

2 Vergara, Jorge, «El pensamiento de la izquierda chilena en los sesenta. Notas de investigación». En: Varas, Augusto (comp.), El Partido comunista de Chile: estudio multidisciplinario, Santiago, Cesoc-Flacso, 1988, pp. 261-341.

3 Para una síntesis de este debate, consultar la introducción a la importante compilación de documentos históricos de Víctor Farías: La izquierda chilena (1969-1973): documentos para el estudio de su línea estratégica, Berlín, CEP, 6 tomos, 2000-2001.

4 Castillo, Fernando; Larraín, Jorge, «Poder obrero-campesino y transición al socialismo en Chile», Cuadernos de le Realidad Nacional, n°10, diciembre de 1971, p. 172.

5 Álvarez, Rolando, Arriba los pobres del mundo. Cultura e identidad política del Partido Comunista de Chile entre democracia y dictadura. 1965-1990, Santiago de Chile, LOM ediciones, 2011.

6 Corvalán, Luis, Informe al XIV° Congreso nacional del partido, Santiago, noviembre 1969.

7 Citado en nota de pie 45 en: Álvarez, Rolando, Arriba los pobres del mundo, op. cit.

8 En sus memorias, el dirigente Orlando Millas afirma que ni siquiera se plantearon la pregunta (Memorias 1957-1991, una digresión, op. cit, p. 541).

9 Labarca, Eduardo, Corvalán, 27 horas: el PC chileno por fuera y por dentro, Santiago, Quimantú, 1972.

10 Daire, Alonso, «La política del Partido Comunista desde la post-guerra a la Unidad popular». En: Varas, Augusto (comp.), El Partido comunista de Chile, op. cit., pp. 141-239.

11 Álvarez, Rolando, «¿Reforma o revolución?: lucha de masas y la vía no armada al socialismo. El PC chileno 1965-1973». En: Concheiro, Elvira; Modonesi, Massimo; Crespo, Horacio, El comunismo, otras miradas desde América Latina, México, UNAM, 2007, p. 324.

12 Corvalán, Luis, Informe al XIV° Congreso Nacional del Partido, op. cit., p. 44.

13 Sarget, Marie-Nöelle, Système politique et Parti Socialiste au Chili : un essai d'analyse systémique, París, L'Harmattan, 1994, y Casanueva, Fernando; Fernández, Manuel, El Partido Socialista y la lucha de clases en Chile, Santiago, Quimantú, 1972.

14 Partido Socialista (comité central), «Estatutos del Partido sancionados en el congreso general efectuado en Chillán en noviembre 1967» (En: Farías, Víctor, op. cit., t.I, pp. 53-77).

15 Entrevista realizada en Santiago, 11 de marzo de 2002.

16 Llamados así por su apoyo a la revolución cubana y al Ejército de Liberación Nacional (ELN) de Ernesto Guevara en Bolivia.

17 También conocidos como «los guatones».

18 Sarget, Marie-Nöelle, op. cit.

19 Winn, Peter, Tejedores de la Revolución, op. cit., p. 94.

20 Partido Socialista, Resoluciones del XXIII Congreso del PS, La Serena, enero de 1970.

21 Lo que por lo demás, es reconocido por el propio Rodrigo Ambrosio. MAPU, Sobre la construcción del partido, Santiago, archivos BDIC, s/f.

22 Entrevista realizada en Santiago, el 22 de mayo de 2002.

23 Punto Final, 3 de marzo 1970.

24 Amorós, Mario, «La Iglesia que nace pueblo. Relevancia del movimiento Cristianos por el socialismo». En: Pinto, Julio (coord.), Cuando hicimos historia. La experiencia de la Unidad popular, Santiago, LOM ediciones, 2005, pp. 107-126.

25 Expresión de Carlos Sandoval en MIR. Una historia, Santiago, Ed Trabajadores, 1990, t. I.

26 Álvarez V., Marco, La constituyente Revolucionaria. Historia de la fundación del MIR chileno, Santiago, LOM ediciones, 2015.

27 Gaudichaud, Franck, «Contribution à l'histoire du mouvement révolutionnaire chilien. Conversation avec Luis Vitale», Dissidences (BLEMR), Nancy, n° 14-15, enero 2004, pp. 34-39. Ver también Miguel Enríquez (secretario general del MIR), Algunos antecedentes del MIR, Santiago, marzo de 1971 (Documentos Internos 2A-1973).

28 Palieraki, Eugenia, ¡La revolución ya viene! El Mir chileno en los años sesenta, op. cit.

29 MIR, «Declaración de Principios». En: MIR, Naranjo, Pedro (ed.), Miguel Enríquez y el proyecto revolucionario en Chile: Discursos y documentos del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, Santiago, LOM ediciones, 2004, p. 100.

30 La Declaración de Principios del MIR (redactada en parte por Luis Vitale) se inspira parcialmente en el programa de transición de la IV Internacional.

31 Ver la interpretación de uno de sus dirigentes históricos, realizada el año 2000: Andrés Pascal Allende, «El MIR, 35 años de lucha», Punto Final, N° 447, N° 478, N° 480.

32 Sobre la «elección de las armas» del MIR y la mística que la rodea, Cf. Palieraki, Eugenia, ¡La revolución ya viene! El Mir chileno en los años sesenta,.op. cit.

33 Extracto del manifiesto «Aux ouvriers, paysans, pobladores et étudiants», agosto 1970 (en francés en: MIR, Recueil de textes 1970-1973, París, Ed. Politique Hebdo, 1974, pp. 9-11).

34 Se puede revisar la interpretación de Miguel Enríquez, secretario general del MIR en Algunos antecedentes del MIR, Santiago, Marzo de 1971 (Documentos Internos 2A-1973) y en: Álvarez V., Marco, La constituyente Revolucionaria, op. cit.

35 MIR, «Documento del Secretariado Nacional del MIR, 28 de septiembre de 1970». En: MIR, Naranjo, Pedro (ed.), Miguel Enríquez y el proyecto revolucionario en Chile, op. cit., Santiago, LOM ediciones, 2004, p. 115 y 129.

36 Ibíd., p. 125.

37 Quiroga, Patricio, Compañeros. El GAP: la escolta de Allende, Santiago, Aguilar, 2001, y Pérez, Cristián, «Salvador Allende, Apuntes sobre su dispositivo de seguridad: El GAP», Estudios Públicos, Santiago, n°79, 2000.

38 Según un estudio interno de la dirección del MIR, en 1972, cada uno de los GPM está dividido entre 4 a 6 sectores y está conformado en promedio por 3 militantes y 15 aspirantes, además de un «frente político organizado» de 50 personas (MIR, Documentos Internos 1972).

39 Según el Secretariado General, en promedio, se requiere entre 5 a 6 meses para convertirse en militante del MIR: Algunos antecedentes del MIR, Santiago, Marzo de 1971 (Documentos Internos 2A-1973).

40 El GPM 4 corresponde a la zona de Cerrillos –Las Rejas– J. M. Caro y su dirección está formada por 6 miembros. Cf. capítulo sobre el Cordón Industrial Cerrillos-Maipú en este libro.

41 Cifra mencionada por Pascal Allende, dirigente del MIR («El MIR, 35 años de lucha», Punto Final, op. cit.).

42 Miranda, Nicolás, Contribución para una historia del trotskismo chileno, Santiago, Ediciones Clase Contra Clase, 1999, y Alexander, Robert J., International Trotskyism 1929-1985, London, Duke University Press, 1991.

43 Gaudichaud, Franck, «Contribution à l'histoire du mouvement

révolutionnaire chilien», op. cit.

44 Entrevista telefónica realizada el 25 de julio de 2005.

45 Pomar R., Jorge A., «La Vanguardia Organizada del Pueblo (VOP): Origen, subversión y aniquilamiento. ¡El pan que con sangre fue quitado, con sangre será recuperado!», XIV Encuentro de Latinoamericanistas Españoles: congreso internacional, 2010, Santiago de Compostela, Spain (en línea: <https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00531204>).

46 Hélène Combes dedicó su tesis a este fenómeno, analizando las trayectorias militantes del PRD mexicano: Faire parti. Trajectoires de gauche au Mexique, op. cit.

47 Cifras mencionadas por Castells, Manuel, La lucha de clases en Chile, Buenos Aires, Siglo XXI, 1974, p. 426. Sobre las derechas y sus transformaciones internas en estos años, ver: Verónica Valdivia Ortiz de Zárate, Nacionales y gremialistas, op. cit.

48 En: [www.monografica.org/02/02/Art%C3%ADculo/3956].

49 Fermandois, Joaquín, «¿Peón o actor? Chile en la Guerra Fría (1962-1973)», Estudios Públicos, Santiago, n°72, 1998 pp. 149-171. Sin embargo, se debe precisar que sería un grave error resumir la historia del PC chileno a la idea de un simple «agente de Moscú», puesto que se trata de un partido ligado a la historia nacional. Ver: Harmer, Tanya; Riquelme S., Alfredo (eds), Chile y la Guerra Fría global, Santiago de Chile, RIL Editores, Instituto de Historia-Pontificia Universidad Católica de Chile, 2014.

50 Garcés, Joan, «Vía insurreccional y vía política: dos tácticas», Revista de la Universidad Técnica del Estado, Santiago, n°13/14, marzo-junio 1973, pp. 7-39.

51 Garcés, Joan, Allende y la experiencia chilena, op. cit., pp. 43-44.

52 Corvalán M., Luis, Los partidos y el golpe del 11 de septiembre: contribución al estudio del contexto histórico, Santiago, Cesoc, 2000, p. 19.

53 Altamirano, Carlos, Dialéctica de une derrota, México, Siglo XXI, 1977, p. 67.

54 Para conocer el programa y la estrategia de la UP, así como una gran cantidad de documentos, consultar: [www.archivochile.com]. Ver también: Garcés, Joan, Allende y la experiencia chilena: las armas de la política, op. cit.

55 Ver el capítulo dedicado a la constitución del Área de Propiedad Social (capítulo cuatro, segunda parte).

56 Estos autores explican que la «centralización del nacional-populismo en lo que se llamó 'la transición al socialismo'» habría sido legitimada por una «bifurcación discursiva» revolucionaria (Salazar, Gabriel; Pinto, Julio, Historia contemporánea de Chile, Santiago, LOM ediciones, 1999, t. I, pp. 151-166).

57 Sobre la naturaleza del populismo chileno, consultar Drake, Paul, Socialismo y populismo en Chile 1936-1973, Universidad Católica de Valparaíso, 1992.

58 Moulian, Tomás, Conversación interrumpida con Allende, op. cit., pp. 67-71.

59 Joxe, Alain, Las Fuerzas Armadas en el sistema político chileno, Santiago, Ed. Universitaria, 1970, y Quiroga, Patricio, «Las Fuerzas Armadas y la visión-de-mundo (un acercamiento)», Alamedas, Santiago, 1993, pp. 58-62.

60 Mires, Fernando, La rebelión permanente, op. cit., pp. 347-355.

61 Smirnow, Gabriel, Le développement de la lutte pour le pouvoir pendant l'Unité populaire, Thèse de troisième cycle, Université Paris VIII, 1977, p. 232.

62 Unidad Popular, Programa básico de gobierno de la Unidad Popular, Santiago, s/e, 1969, pp. 24-25.

63 Cancino, Hugo, La problemática..., op. cit., pp. 125-132.

64 Quiroga, Patricio (ed), Salvador Allende-Obras Escogidas (1970-1973), Barcelona, Editorial Crítica, 1989, p. 225.

65 Vega, Héctor, L'économie du populisme et le projet de passage au socialisme proposé par l'Unité populaire, Thèse d'Etat en économie, Université Aix-Marseille II, 1981, pp. 296-319.

66 Corvalán M., Luis, Los partidos y el golpe del 11 de septiembre, op. cit, p. 36.

67 Texto del «estatuto de garantías constitucionales» (30 de diciembre del 1970) en : [http://patrimoniochileno.cl/arts/297-ley-17038-estatuto-de-garntias-constitucionales.html]. Ver también: Novoa, Eduardo, «L'utilisation de la loi sous le gouvernement Allende», Chili, un pays laboratoire, Actes du colloque organisé à Bruxelles, Maison de l'Amérique Latine, 1998, pp. 11-24.

68 Ver las estadísticas citadas por Mires, Fernando, La rebelión permanente, op. cit., p. 355.

69 Vitale, Luis, «El gobierno de Salvador Allende», op. cit., p. 206.

70 Vega, Héctor, L'économie du populisme, op. cit., p. 316.

71 Figueroa, Luis, «La participación en el gobierno de la Unidad Popular». En: Seminario ODEPLAN-Universidad de Sussex, La Vía Chilena al Socialismo, México, Siglo XXI, 1973 (en: [www.blest.eu/biblio/via_chilena/index.html]).

72 Castillo, Fernando; Echeverría, Rafael; Larraín, Jorge, «Las masas, el Estado y el problema del poder en Chile», op. cit.

73 Vanderschueren, Franz, «Significado político de las juntas de vecinos en poblaciones de Santiago», Eure, Vol. I, n°2, Santiago, julio 1971.

74 Unidad Popular, Programa básico de gobierno de la Unidad Popular, op. cit., p. 11.

75 Farías, Víctor, La izquierda chilena, op. cit., Introducción al Capítulo I del tomo I.

76 Guzmán, Patricio, La Batalla de Chile, Chile/Cuba/Venezuela, 1975-1979.

77 Moulian, Tomás, «La Unidad Popular: fiesta, drama y derrota». En: Moulian, Tomas, La Forja de Ilusiones: el sistema de partidos, 1932-1973, ARCIS-FLACSO, Santiago de Chile, 1993, p. 268.

78 Para un documental nostálgico y sensible sobre Allende, ver Guzmán, Patricio, Salvador Allende, Patricio Guzmán Producciones, 2004, y también consultar los libros de Mario Amorós: Compañero Presidente, Valencia, Publicaciones de la Universidad de Valencia, 2008 y Allende. La biografía, op. cit.

79 «El 36% obtenido por Allende posee un valor distinto al 38% de 1964, cuando la coyuntura política del país era menos radicalizada que seis años más tarde» (Álvarez V, Rolando, «La Unidad Popular y las elecciones presidenciales de 1970 en Chile: la batalla electoral como vía revolucionaria». En OSAL, Buenos Aires, CLACSO, Año XI, N° 28, noviembre 2010, http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/osal/osal28/14Alvarez.pdf.).

80 Allende, Salvador, «Discurso en el Estadio Nacional», 5 de noviembre de 1970. En: [http://www.salvador-allende.cl/Discursos/1970/Estadio.pdf].

Segunda parte

¿Hacia el desbordamiento? Del fracaso de los Comités de la Unidad Popular a la Asamblea de Concepción

La «fiesta» es una de las dimensiones inherentes a los procesos revolucionarios, por cuanto en ellos se produce una subversión de los órdenes y jerarquías subjetivas de poder y por lo tanto se rompen tabúes simbólicos, diferenciaciones sociales establecidas y cristalizadas: cambia el tono y las modalidades del trato de obreros a gerentes, de criadas a señoras, de campesinos a patrones o administradores. Los poderes establecidos se desmoronan en el espacio de su cotidianidad. Es en esos ámbitos del disciplinamiento social donde la revolución en sus dimensiones moleculares, en cuanto transgresión de pautas de autoridad y jerarquía en el trato, se ponía en acto diariamente. Pero además de esa transgresión microsocial existía la otra, las ocupaciones de fábricas, fundos, sitios, que el gobierno aceptaba y legitimaba, incluso legalizaba. Ese representaba pasar el límite, amenazar al fundamento mismo del orden, porque constituía la burla al principio sacrosanto de la propiedad burguesa.

Tomás Moulian, Conversación interrumpida con Allende,

Santiago, LOM ediciones-Arcis, 1999, p.86.

Capítulo 4

Poder popular institucionalizado y medidas

a favor de la participación social

Los Comités de la Unidad Popular (CUP) y la puesta en marcha de la participación de los trabajadores

Los Comités de la Unidad Popular: fracaso de un embrión de poder popular constituyente

Los Comités de la Unidad Popular (CUP) son, como lo hemos visto, uno de los ejes levantados por el gobierno en su táctica electoral, pero también como despliegue de un «poder popular», pero ¿cuál fue el desarrollo de estos comités en la práctica?

Tal como se expone en el programa de la Unidad Popular (UP), los CUP tienen dos objetivos. Por una parte, dar un carácter de movilización de masas a la campaña electoral y, por la otra, intentar asegurar la continuidad de dicho impulso para orientarlo hacia la creación de verdaderos organismos de poder de base, en apoyo al gobierno de Allende. En su informe de febrero de 1970, en el pleno del Comité Central del Partido Comunista (PC), el diputado Jorge Insunza insiste sobre este aspecto[1]. Se los considera un medio de movilización de masas pero –factor esencial– deben multiplicarse sólo bajo la dirección de los partidos de la UP. El organismo director de la campaña es el Comando Nacional de la Unidad Popular, compuesto por tres representantes de cada partido[2]. Luego vienen, en un nivel intermedio, los Comandos Provinciales y Regionales, después, los Comunales y Locales. Si damos crédito a la intervención en el pleno del PC de José Oyarce, futuro ministro del Trabajo, estos diferentes organismos

intermedios no deben implementarse sistemáticamente sino sólo en aquellos lugares en donde se estimen más necesarios. En el nivel más bajo de esta escala, se encuentra el Comité de Base, el CUP. Todos se constituyen con representantes de la UP aunque se pueden integrar otras personalidades locales, pero excluyendo a los «provocadores izquierdistas» que no pueden participar ni siquiera a título individual[3]. Nos preguntamos por cierto, ¿en base a qué criterios se identifican estos «provocadores»?… Por otro lado, el testimonio de Mario Olivares, trabajador de una fábrica de muebles en Santiago permite comprobar que el MIR participa clandestinamente en los CUP[4].

En su informe al Comité Central del PC de mayo de 1970, cuando la campaña electoral está en su apogeo, Luis Corvalán reafirma que el objetivo del Comando Nacional es crear 15 mil CUP a lo largo del país[5]. Llama a los Comandos Provinciales y Comunales a una mejor planificación, pero también convoca a los CUP a autoorganizarse para participar activamente en la realización de la propaganda mural, radial y escrita. Sin embargo, más allá de ese trabajo de propaganda electoral no se hace ninguna mención a las tareas futuras que tendrían los CUP. Llamando «a cuadrar al 80 o al 90% de los obreros y empleados con la candidatura de la UP[6]» y a movilizar a los dirigentes sindicales, el secretario general del PC no precisa ninguna medida concreta para los miles de CUP, formados por militantes obreros en el seno de las empresas. Paralelamente, se reafirma el objetivo de conquistar políticamente a los pequeños y medianos emprendedores, insistiendo en que Comandos Provinciales y Comunales de algunas ciudades actúen en ese sentido[7]. Así, a pesar de las numerosas declaraciones de intenciones sobre la forma de poder popular que constituirían los CUP, reciben pocas orientaciones concretas, más allá del trabajo de propaganda electoral. No se trata de un comportamiento exclusivo del PC sino más bien uno compartido por todos los partidos de la UP. Sobre este papel confuso o ambiguo, el historiador del partido comunista Rolando Álvarez anota

El documento oficial de la UP «Conducción y estilo de campaña» planteaba que los CUP debían «ir convirtiéndose en el curso de la campaña en expresiones germinales del poder popular que conquistaremos en 1970, comenzando aun antes de la victoria a concretar aspiraciones reivindicativas de las masas y transformándose una vez obtenida en factores dinamizadores y de dirección local de los procesos de cambios revolucionarios» (El Siglo, 28 de diciembre de 1969). Sin embargo, el Partido Comunista –sector moderado de la coalición– excluía toda alusión al poder popular en relación a los CUP, o desmerecía que les cupiera alguna función una vez finalizada la campaña, enfatizando en cambio su

papel de dinamizador de la movilización social durante ella (El Siglo, 7 de febrero de 1970[8]).

Frente a esta concepción, finalmente limitada a una intensa movilización electoral, se encuentra aquella que defiende el MIR. El movimiento dirigido por Miguel Enríquez insiste, en primer lugar, en recordar a los representantes de la UP que los CUP no se han transformado en gérmenes de «poder popular». Como el PC, el MIR ve los peligros de una adhesión oportunista de miles de personas a esos comités, sin embargo y a pesar de ello, llama a su apertura y masificación. En concordancia con la UP, el MIR considera que el objetivo de los CUP debe ser la concientización política. Aunque, a nivel de las prácticas de defensa del proceso de transformación social, les otorga una dimensión mucho más amplia. De acuerdo con la estrategia de lucha armada que postula el MIR, los CUP son llamados a «prepararse para la defensa de la región geográfica en la que les corresponde actuar». Lo que implica que,

la directiva del comité, sin que lo sepan necesariamente todos sus miembros, debería hacer un fichaje de todos los instrumentos técnicos de que se dispone. Debería luego destacar un grupo dentro del comité, el más decidido y de mayor iniciativa, para las tareas directamente militares. El resto del comité debería desempeñar una tarea de vigilancia constante del sector en que le corresponde actuar[9].

El MIR llama a hacer un «esfuerzo por integrar a estas tareas, aunque sólo fuese como instructores, a todos los elementos de las Fuerzas Armadas y Carabineros que viven en el sector y que apoyan al gobierno popular[10]». Esta concepción político-militar es completamente diferente a la de la UP. Sin embargo, la débil inserción mirista en el movimiento social le impide dar un curso real a sus afirmaciones y, por lo tanto, se queda en un plano meramente propagandístico. La UP, durante los primeros meses de gobierno, reflexiona repetidamente y de modo autocrítico sobre el fracaso de los CUP. Allende incluso lo reconoce públicamente, en junio de 1971: «los CUP no han cumplido las tareas que [le] han sido fijadas[11]».

En resumen, podemos atribuir a tres factores principales la desaparición

progresiva de los CUP y su fracaso como gérmenes de poder popular constituyente: ausencia de objetivos políticos concretos más allá de la campaña electoral; cierto sectarismo político y control en la participación en los comités y; dificultad de coordinar la acción de miles de militantes recién llegados a la política, además de la conducción de una masiva lucha electoral.

La creación de los CUP enfatizó el trabajo de base, en desmedro de campañas anteriores, excesivamente burocratizadas. Este hecho, ocurrido en un momento político especialmente radicalizado, en donde la llamada «revolución de las expectativas» promovía la participación ciudadana, provocó que los comités tuvieran un papel destacado en los meses de campaña, tanto difundiendo el programa del candidato de la UP como promoviendo y solidarizando con la movilización social popular durante aquellos meses. La conciencia entre sus integrantes de la posibilidad real del triunfo de Allende –como lo señalaban las encuestas de la época– alentaba la esperanza de que la batalla electoral de 1970 culminaría con la primera mayoría para el candidato de la UP. Esta fue la motivación fundamental de los CUP, antes que las posibles discusiones sobre su papel como instancias de «poder popular[12]».

Sin embargo, a pesar de su rápida desmovilización, pareciera que algunos CUP sí lograron mantenerse activos después de las elecciones, como el de la fábrica Muebles Easton, según lo recuerda Mario Olivares[13], o el de la empresa textil ex-Yarur descrito por Peter Winn[14]. Sin embargo, más globalmente, los CUP no lograron formarse en tanto verdaderos órganos de participación popular constituyente, fuera de la campaña electoral misma[15]. Como ya lo señalaban algunos sociólogos chilenos en 1971, la UP difícilmente les hubiera podido dar otra orientación, ya que ello los podría haber transformado en un «contrapoder» opuesto a la vía institucional escogida por Allende y legitimada en las urnas[16].

La formación del Área de Propiedad Social (APS)

Según los dirigentes de la UP, el APS también debía constituirse en el espacio de un verdadero cambio de sociedad y de transformación del modelo económico

nacional (aunque coexistiendo con el sector «mixto» y privado). Es en este espíritu que Salvador Allende declara, en su discurso del 21 de mayo de 1971, que

en el plano económico, instaurar el socialismo significa reemplazar el modo de producción capitalista mediante un cambio cualitativo de las relaciones de propiedad y una redefinición de las relaciones de producción. En ese contexto, la construcción del área de propiedad social tiene un significado humano, político y económico[17].

En cuanto al carácter de la participación de los trabajadores en este contexto, Joan Garcés reconoce que

Estamos en un sistema económico de estructura netamente capitalista; se está introduciendo una serie de innovaciones de orden social y económico, en lo institucional y en lo organizativo, que tienden a alterar las bases económicas del capitalismo, introduciendo el embrión de futuras organizaciones socialistas. Pero, al mismo tiempo, se requiere mantener la unidad del proceso productivo, la integración de todo el sistema económico al crecimiento económico ininterrumpido, y el mantenimiento de la autoridad del Estado por encima de cada uno de los mecanismos de toma de decisiones en las unidades empresariales, como instrumento de regulación del mercado que continúa funcionando de acuerdo con las reglas del capitalismo[18].

Considerando que la UP no posee la mayoría en el Parlamento y que se vio obligada a firmar el «estatuto de garantías constitucionales» (destinado entre otras cosas a proteger la propiedad privada de los medios de producción), el gobierno intenta «jugar» con la flexibilidad (relativa) el sistema institucional chileno para poder conformar legalmente el APS y el Área mixta. Se lanza entonces en una verdadera «batalla jurídica» (se habla incluso de «guerrilla jurídica») en el curso de la cual pierde mucha energía y tiempo (lo que se ha denominado la técnica de los «resquicios legales[19]»). A medida que se acrecientan las contradicciones políticas y sociales, esta batalla legal entra progresivamente en desfase con la dinámica del movimiento social. El gobierno dispone legalmente de varios mecanismos para ampliar el sector económico

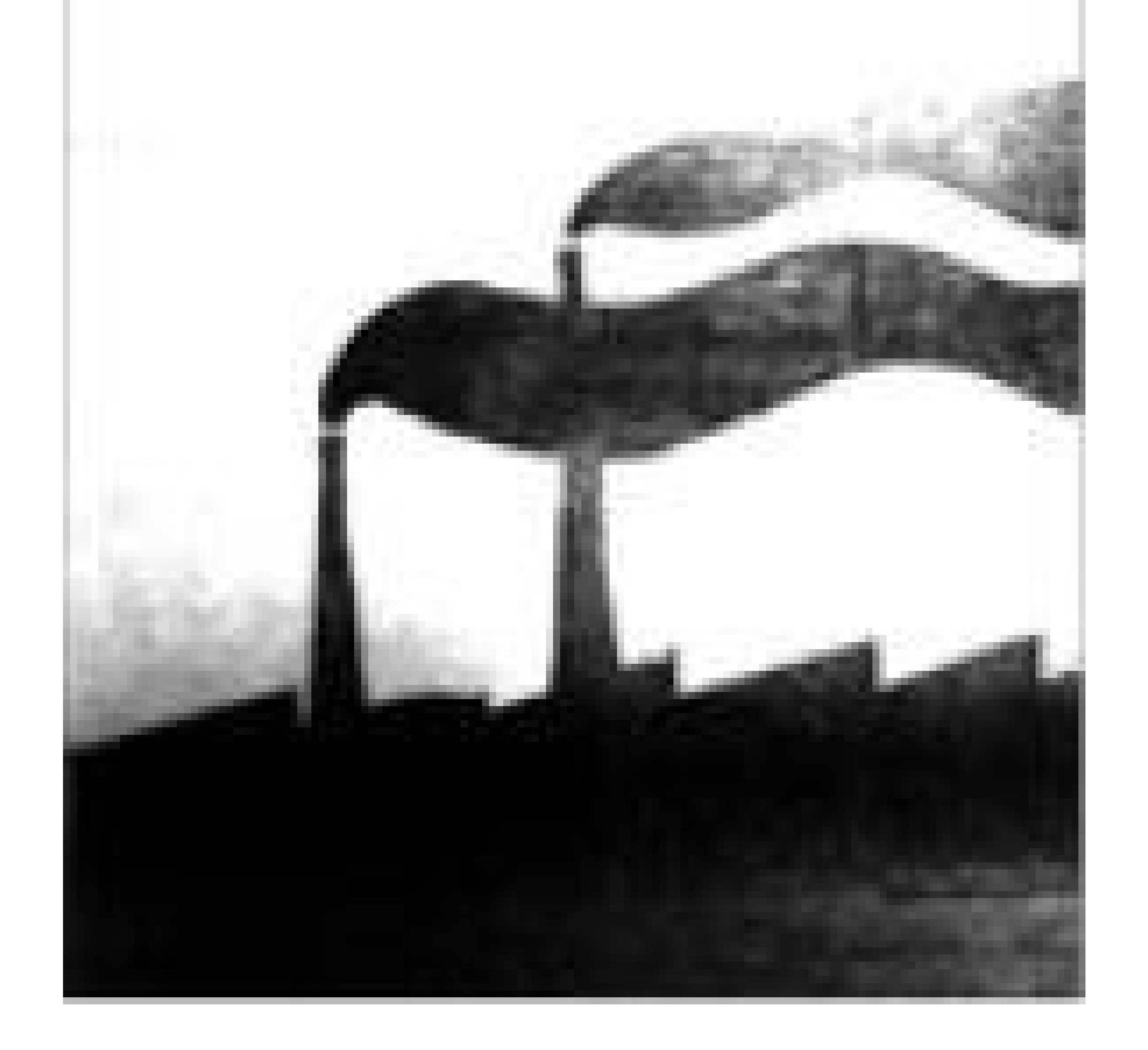
controlado por el Estado[20].

Numerosas empresas que pasan al APS lo hacen mediante la «intervención» del Estado o la «requisición», lo que es permitido por diversos decretos del Código del Trabajo: el gobierno nombra un «interventor», esto es un administrador encargado de organizar la puesta en marcha de la producción. Este procedimiento permite transferir temporalmente al Estado el control de la empresa, aunque la propiedad se mantiene legalmente en manos del propietario. La apropiación definitiva requiere de la aprobación del Congreso, colaboración que Allende nunca obtuvo (dejando en suspenso una cuestión tan esencial hasta el golpe de Estado[21]). Así, cada año decenas de empresas intervenidas o requisadas vuelven al sector privado. Para proceder a las requisiciones-intervenciones, los expertos de la UP reflotan un antiguo decreto que data de 1932 (el famoso decreto-ley nº520), cuya inconstitucionalidad no logra ser demostrada por la oposición. En resumen, dicho decreto otorga al Estado el derecho de requisar los establecimientos paralizados (por ejemplo, por un conflicto social irresuelto), y esto en nombre de la defensa de la economía nacional. Esta norma es utilizada por primera vez, en el caso de la fábrica textil Bellavista-Tomé, y provoca la inmediata y enardecida reacción del empresariado[22]. En respuesta, los trabajadores de la empresa ocupan la fábrica y bloquean la producción, lo que le permite al gobierno invocar la paralización y la requisición legal.

En el sector textil, a fines de mayo de 1971, Pedro Vuskovic, ministro de Economía, anuncia la requisición de las fábricas Caupolicán, Renca y Rayonil de San Antonio, paralizadas durante varios días por huelgas, y declara la incorporación próxima al APS de la totalidad de los monopolios textiles Yarur, Sumar, Rayón Said e Hirmas, que pertenecen a las grandes familias de la burguesía industrial e involucran a miles de trabajadores[23]. El sector textil es un pilar central del proceso de nacionalización de la economía y participación de los trabajadores, hecho que la prensa de izquierda resalta regularmente:

Los trabajadores textiles, «vanguardia» de la participación

LOS TRABAJADORES DE EX-RAYON SAID FIRMES CON LA NACIONALIZACION



LOS TRABAJADORES TEXTILES VANGUARDIA DEL PROCESO DE LIBERACION SOCIAL Y ECONOMICA TRABAJAN POR CHILE



EL AREA SOCIAL ES PROPIEDAD DE LOS TRABAJADORES CHILENOS

EMPRESAS TEXTILES DEL AREA SOCIAL

Fuente: Central Única, agosto de 1971 y La Aurora de Chile,

N° 6, 18 de enero de 1973

Entre las empresas textiles esenciales, la estatización de Yarur tenía valor de ejemplo y recibió el apoyo tanto de los próximos colaboradores de Allende –como por ejemplo el subsecretario de economía, el militante MAPU Guillermo Garretón–, como también de Pedro Vuskovic y del Partido Comunista, a pesar de las reticencias iniciales de Allende:

Si el gobierno Allende estaba buscando un «monopolio» para expropiar, Yarur era el clásico caso. La rápida estatización abanderada de la familia, junto con la toma reciente de los bancos de Yarur y de sus fábricas de lana socavaría el poder de uno de los «clanes capitalistas más importantes de Chile». La socialización de la industria Yarur entonces, era una simbólica y eficiente manera de comenzar la fase decisiva de la campaña de la Unidad Popular para «obtener el control de las cúpulas que mandaban la economía[24]».

El ministro de Economía anuncia su disponibilidad para negociar con los propietarios (es decir, está dispuesto a pagar la indemnización de los monopolios), pero también los amenaza con la expropiación pura y simple, si llegan a negarse. Paralelamente, Vuskovic renueva las garantías a las pequeñas y medianas industrias que no hacen parte del programa de estatización. Sin embargo, aquí también, las declaraciones del gobierno aceleran la movilización de los trabajadores en la base, que proceden a las «tomas» de las principales fábricas textiles afectadas por las medidas anunciadas. Estas ocupaciones van acompañadas con la organización de asambleas permanentes en un ambiente de fiesta y júbilo. En esta ocasión, la CUT y la Federación Textil se pronuncian abiertamente a favor de las «tomas», deseando, al mismo tiempo un rápido retorno a la producción bajo el control de los trabajadores[25].

Además de la requisición existe la posibilidad para el gobierno de proceder a la intervención. Esta requiere de procedimientos administrativos más largos, pero entrega al interventor, el administrador designado por el Estado, mayor margen

de maniobra financiera[26]. Varias empresas son intervenidas al mismo tiempo. En cuanto a las empresas extranjeras, el gobierno se orienta, en la mayor parte de los casos, hacia una política «a lo amigo», negociando con los inversionistas las modalidades de transferencia de capitales. Globalmente, la mayoría de las empresas que integran el APS, lo hacen mediante mecanismos jurídicos tradicionales, es decir, a través de la compra de acciones por un organismo estatal como la Corporación de Fomento de la Producción, Corfo. No obstante, numerosas «nacionalizaciones» se realizan al precio de un importante endeudamiento del Estado chileno, deuda que repercute sobre el conjunto de la economía[27].

A pesar de su legalidad, tales medidas no dejan de provocar la reacción enérgica de la burguesía chilena, que se siente directamente amenazada. Desde un punto de vista político, esta reacción se traduce, primero, en una enorme campaña de la derecha en su contra, orquestada por El Mercurio, que las califica de arbitrarias o trata de presentarlas como ilegales[28]. La Democracia Cristiana (DC) se ubica progresivamente tras la derecha en esta vía, lo que la conduce al proyecto de reforma constitucional presentado por los senadores Renán Fuentealba y Juan Hamilton (octubre de 1971) y aprobado por el Congreso en febrero de 1972, aunque inmediatamente bloqueado por el veto presidencial[29]. Tanto el objetivo del gobierno como los primeros síntomas de un eventual control obrero en las industrias, llevan a la DC a exigir más garantías para limitar el Área social. En efecto, el proyecto de ley del APS de octubre de 1971, considera que 254 sociedades anónimas podrían ser transferidas ya que son monopolistas[30]. Frente al rechazo de los democratacristianos, en diciembre se envía al Parlamento un nuevo proyecto que reduce dicha cifra a la mínima expresión de 91, y luego de 90. Ciertamente «ignorando que esto era ya la negación de un proceso de transición, el gobierno entra en un proceso interminable de negociaciones para reglamentar las formas de constitución del sector estatal y su funcionamiento[31]».

La oposición al APS se desarrolla también con fuerza en las fábricas, incluso donde la estatización ha sido negociada; la llegada del interventor puede significar un enfrentamiento físico y una resistencia violenta por parte de los propietarios desplazados y/o de trabajadores opositores[32]. En cambio, el proyecto de ley de nacionalización del cobre y de las grandes empresas de extracción recibe el apoyo unánime del Congreso (11 de julio de 1971). Si esta unanimidad confirma el acuerdo nacional de las clases dominantes para que Chile se convierta en el dueño de su principal fuente de ingreso (el «sueldo de Chile» en palabras de Allende), no deja de provocar la reacción inmediata del gran capital

estadounidense y del gobierno de ese país: el presidente Nixon acelera las maniobras para desestabilizar a Allende y preparar su caída por todos los medios, legales e ilegales (incluida la «compra» de algunos diputados y dirigentes democratacristianos[33]).

Además de la gran explotación minera, el APS se desarrolla también en el seno del sector industrial (14 grandes empresas integradas en noviembre de 1971). A esa fecha, los organismos oficiales estiman que el 58% de las empresas industriales bajo control del Estado corresponden a bienes de consumo básico, 23% a bienes intermedios y 19% a bienes de consumo duradero. Están especialmente representadas en el APS, la industria textil (50% del producto y de las ventas del sector, 75% de las materias primas importadas), metalúrgica (con empresas como la Compañía de Acero del Pacífico), e incluso establecimientos ligados a la producción de electrodomésticos (Mademsa, Fensa, Sindelen, entre otros). El control, por ejemplo, de las grandes empresas de la industria o de la energía le otorga al gobierno cierto peso sobre los otros sectores. Igualmente, el control estatal de la gran mayoría del sector bancario es un medio de presión indirecto muy poderoso (a través del crédito, por ejemplo).

Sin embargo, la revisión a la baja de los objetivos del APS en los meses siguientes, el hecho de que grandes monopolios permanezcan en manos privadas y sobre todo las dificultades en la implementación de una planificación general real, le impide a la UP conformar un polo dominante coherente y bien estructurado. Por otra parte, la construcción de un sector estatal de «propiedad social» no garantiza por sí solo la transición a una economía socialista e incluso puede favorecer una modernización capitalista. No obstante, el hecho de poner por delante la consigna de la participación de los trabajadores, de fomentar ciertas formas de control del proceso de producción y estatizar algunas grandes empresas, libera una enorme energía participativa desde las bases obreras. Estas comienzan entonces a darle un contenido cada vez más concreto a las nociones de «participación de los trabajadores» y de «propiedad social», impulsadas por Allende. Aunque frente a un aparato estatal «profundo» que se resiste a dichas medidas, rápidamente se produce el estancamiento de la «guerrilla jurídica» del gobierno. La Contraloría General de la República, en principio encargada de resguardar la constitucionalidad de las medidas tomadas por el gobierno, se lanza en una práctica sistemática de obstrucción y oposición a la ampliación del APS. Declara «ilegales» numerosas requisiciones bajo el pretexto de que Dirinco (Dirección de Industria y Comercio) no entrega los documentos necesarios. En el Parlamento, una oposición sistemática toma el relevo en esta ofensiva. Se

multiplican entonces los intentos de lo que el Partido Socialista califica de «golpe de Estado legal» (entre ellos, las acusaciones constitucionales en contra de miembros del gobierno, como el caso del ministro del Interior, José Tohá[34]). A pesar de los considerables avances en términos de redistribución de ingresos y de una popularidad reforzada, la UP se enfrenta, desde comienzos del año 1972, a numerosos problemas de orden político y económico[35]. Según el ministro Vuskovic

Los avances que se registraron en el año 1971, en el objetivo programático de reestructuración de la economía, en general muestran un grado de avance relativamente grande. La nacionalización del cobre y de otros recursos mineros ha sido completa. En la reforma agraria se avanzó sustancialmente, hasta el punto de que está planteada la erradicación completa del latifundio, definido como unidades productivas superiores a determinadas superficies en términos de riego básico. En el sistema financiero se llegó prácticamente al control estatal de todo lo que era la banca privada. Se avanzó considerablemente en el control social sobre los grandes monopolios de la distribución mayorista y se avanzó también en la estatización de empresas, o en el control estatal sobre empresas de importantes sectores de la actividad industrial, tales como industrias textiles, industria del cemento, siderurgia, carbón y otras ramas de la industria. No obstante todo este avance experimentado durante el año 1971, se mantienen aún centros importantes de decisión que no han sido afectados, no pudiendo considerarse que hay una situación suficientemente adelantada como para que el objetivo de seguir avanzando en esta reestructuración de la economía tuviera hoy día mucho menos relieve del que tuvo a comienzos del año 1971[36].

¿Qué tipo de participación? Capitalismo de Estado, planificación y control de los trabajadores

¿Cómo se implementó la participación de los trabajadores en el APS? El acuerdo firmado entre la CUT y el gobierno el 7 de diciembre de 1970, se refiere explícitamente a la necesidad de una participación en el proceso de transformación nacional, especialmente a nivel de la gestión económica. Sin embargo, no es ni directamente el gobierno, ni la CUT, quienes proponen la idea

de la formación de «comités obreros[37]». Es, finalmente, desde la base que el problema del control de los trabajadores es levantado por algunos representantes sindicales, tanto así que se discute en la novena Conferencia de la CUT, en Valparaíso. Un estudio realizado por una comisión CUT-gobierno concluye con la redacción de las «Normas básicas de participación de los trabajadores en la dirección de área social y mixta», fundamento legal de esta participación[38]. Este documento establece dos niveles de participación. El primero, relativo a la planificación de la economía. Para este efecto, se organiza el Consejo Nacional de Desarrollo que incluye a seis «representantes de los trabajadores», que discuten la política económica a nivel nacional. Estos representantes son dirigentes de la CUT y de las federaciones que participan en las reuniones de los organismos de planificación (como Odeplan). Se crean también, consejos del mismo tipo a nivel regional (Consejos de Desarrollo Regional). El segundo nivel guarda relación con la dirección de las empresas del APS. En términos generales, los organismos de participación tienen el siguiente esquema:

Cuadro 2: Participación de los trabajadores en el APS[39]

Asamblea de Trabajadores	Órgano presidido por la
Asamblea de las Unidades Productivas	Reunión de los trabajad
Comité Coordinador de los trabajadores de la empresa	Compuesto por los 5 rep
Consejo de Administración	Compuesto por 5 repres

▪

Fuente: elaboración propia a partir de Normas básicas de participación de los trabajadores en la dirección del área social y mixta, Santiago, CUT, 1972.

Los testimonios recogidos prueban que el momento de la puesta en marcha de este sistema en las empresas permanece grabado en la memoria de los militantes de izquierda y de numerosos trabajadores como una de las transformaciones más importantes vividas en las fábricas.

En lo global, se instala un programa de cogestión entre el Estado y los representantes de los trabajadores que democratiza fuertemente el aparato de producción en las empresas involucradas y transforma las formas de trabajo. Los representantes son elegidos por dos años (no reciben una remuneración asociada a este mandato) y pueden ser reelegidos sólo una vez (igualmente pueden ser destituidos por la Asamblea de Trabajadores en cualquier momento). Con el objeto de mantener una cierta independencia sindical, los delegados sindicales no pueden presentarse formalmente en estas elecciones, aunque mantienen gran influencia en todo el proceso de participación (por ejemplo, a través de las «comisiones sindicales») y numerosos dirigentes frenan abiertamente la instalación de estos nuevos mecanismos por miedo a perder su poder de representación de los asalariados.

Un punto importante a subrayar es la preponderancia del Estado como organismo que decide y la subrepresentación de los trabajadores en el Consejo de Administración (5 de los 11 representantes). Sin embargo, la mayoría de los testimonios destaca que, en los hechos, el interventor nombrado por el Estado no siempre está presente (ya que, entre otras razones, está implicado en varios sitios al mismo tiempo) o, en algunos casos, es también un asalariado de la empresa[40]. En algunos casos, los Comités de Producción son reducidos a un rol productivo (control de la buena marcha de la empresa y decisión sobre el funcionamiento de la cadena de producción), cuando en otras empresas estos Comités están claramente orientados hacia una acción que favorece la participación sociopolítica de los trabajadores, el control obrero y el empoderamiento desde abajo: la historia interna de cada empresa, la tradición de organización y lucha, la gestión del interventor o las relaciones de fuerzas políticas entre los trabajadores explican esta existencia de una coyuntura diferenciada de la

apropiación social de las normas de participación (ver el capítulo sobre las «tensiones en el seno del Área de Propiedad Social»).

Mario Olivares, joven trabajador de Muebles Easton (400 asalariados) y militante del MIR, se acuerda de los debates una vez su empresa estatizada

Nosotros ya empezábamos a hablar de un poder real de los trabajadores muy incipiente. Quizás no teníamos tan claro el punto de vista netamente ideológico, pero exigíamos una mayor participación en todos los ámbitos y no solamente orientado, preocupado en la producción y cuando nosotros decíamos mayor participación, por ejemplo de los comités de producción y en la gestión y control de la empresa[41].

Finalmente, una limitación notable a este proceso de democratización económica radical es la ausencia de una visión global, así como la casi nula participación en la planificación nacional que se les ofrece a los representantes obreros. En efecto, si ésta ha sido considerada, es sólo a través de los organismos directivos de la CUT o de sus federaciones. Los representantes elegidos por las Asambleas de Trabajadores no tienen acceso a esta visión de conjunto, indispensable para el establecimiento de una planificación económica democrática. Más aun, la participación de los representantes sindicales a nivel regional nunca se puso en práctica (al menos, hasta agosto de 1972) y la CUT se limitó a un rol principalmente consultivo en el seno de los diferentes organismos económicos gubernamentales. Así, la forma de participación en el Área social y mixta consiste en asumir la aplicación de las normas, e incluso en algunos casos (como en la textil Yarur) su profundización o superación, pero esencialmente a nivel de la fábrica. Considerando la falta de un verdadero sistema orgánico de planificación y de democracia obrera centralizada, los objetivos de las empresas del Área social siguieron orientaciones muy generales, lo que llevó a aumentar la producción, pero no siempre a un cambio radical de las formas y relaciones de trabajo en el sector nacionalizado[42].

En ese sentido, podemos afirmar –como lo hace Víctor Farías– que la importancia de la transformación de las relaciones de producción no siempre fue tomada en cuenta por la UP, aún cuando inicialmente el APS se suponía debía encarnar los gérmenes del control obrero y democrático de la futura sociedad socialista[43].

Y ¿cuál es la situación de la participación en el sector privado que involucra a más del 50% de la mano de obra industrial? Según la documentación oficial, en las empresas privadas, no se ha previsto la participación: «En éstas, los trabajadores deben contribuir a constituir los Comités de Vigilancia de la producción»[44].

Toda maniobra de sabotaje económico debe ser denunciada a la CUT. Estos organismos son formados por representantes de los trabajadores, elegidos en asamblea (entre 5 y 10 representantes), pero quedan bajo la dirección de los sindicatos y están muy lejos de conformar alguna forma de poder popular constituyente o de control obrero. Progresivamente numerosos son los trabajadores que van a exigir que su empresa también sea integrada al APS en una dinámica que escapa rápidamente al control del gobierno.

La «batalla de la producción» y redistribución de las riquezas.

Una edad de oro de corta duración

Primeros éxitos, primeros obstáculos

El primer año del gobierno de Salvador Allende está marcado por un éxito económico real, a pesar de las numerosas turbulencias políticas y sociales que debe enfrentar la UP: el «plan Vuskovic» parece dar todos sus frutos, ampliando la base social de apoyo del ejecutivo[45].

La política de reajuste de los salarios provoca un aumento promedio de los ingresos de los trabajadores cercano a un 50%, lo que junto al establecimiento del control de precios (reducción de la inflación a 20%) desencadena un crecimiento considerable de los ingresos provenientes del trabajo. Esta nueva llegada de dinero a las clases populares, combinada con una reactivación del gasto fiscal en trabajos públicos y vivienda, redunda en una significativa disminución de la tasa de desempleo (en promedio en 1971, ésta alcanza un 4,3%). El mercado interno es estimulado: el consumo familiar aumenta alrededor

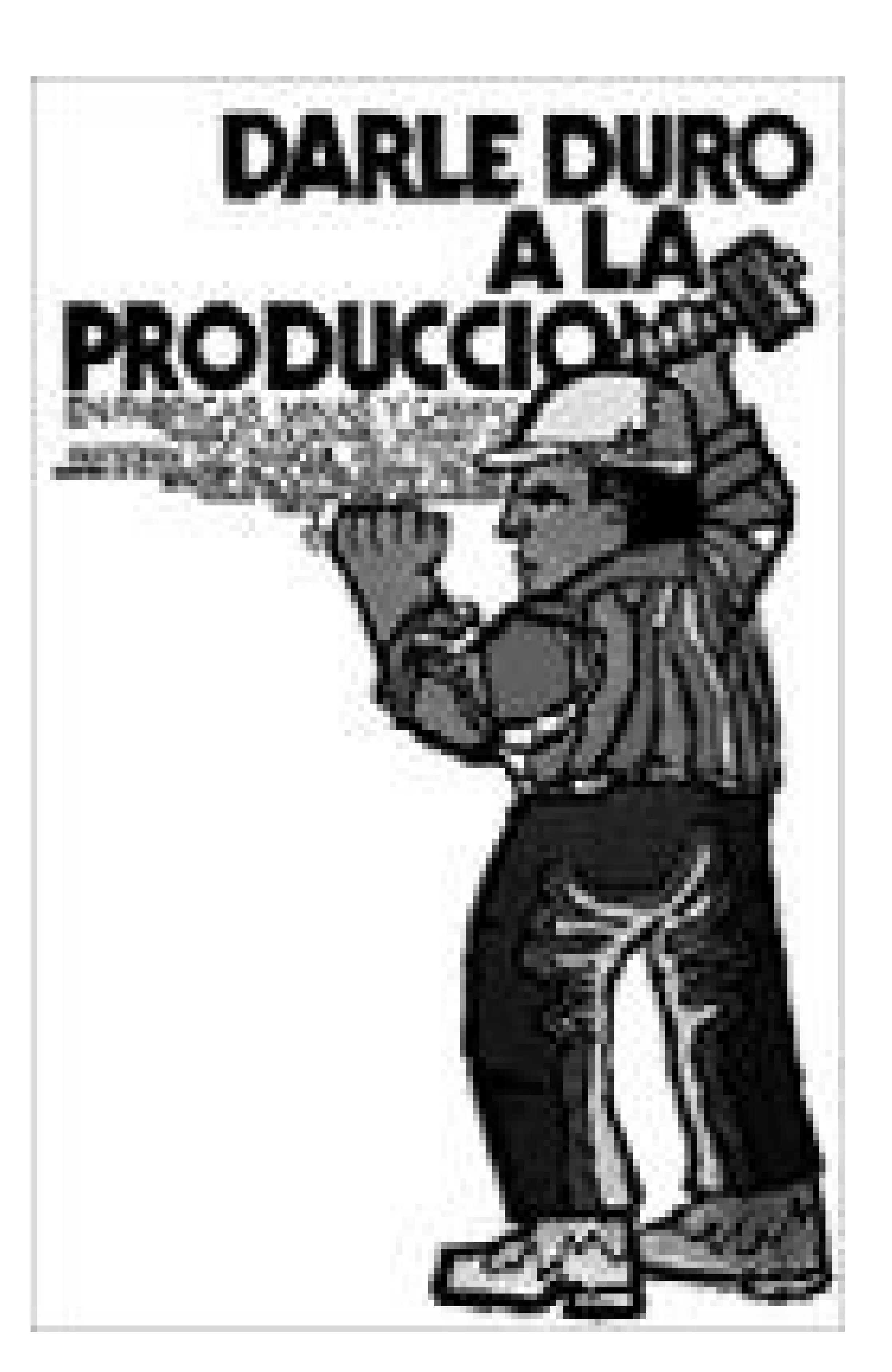
de un 13% en promedio. Esta política distributiva, en paralelo con el control del sector bancario, la nacionalización del cobre, la profundización de la reforma agraria y de los primeros grandes monopolios, genera un crecimiento industrial anual de más de 12%. A nivel del APS, el gobierno anuncia orgullosamente que «la participación de los trabajadores significa que éstos libran con entusiasmo la batalla por aumentar la producción ya que saben que desde ahora, ellos son los beneficiarios»[46].

Los diferentes informes gubernamentales describen un éxito productivo sin precedentes en las empresas que han pasado a manos del Estado. Se observa la misma evolución en la gran minería del cobre y del salitre, sectores esenciales para la economía del país. Son también relevantes las reformas estructurales iniciadas en la agricultura. Odeplan concluye que el aumento de la producción industrial alcanza +19,8%, en los dos primeros meses del año (en relación al mismo período en 1971); e incluso más de 100% en ciertas fábricas textiles en 1971. En cambio, el boicot imperialista organizado por el gobierno de los Estados Unidos («enemigo nº 1» de Allende) y la inquietud de los inversionistas para los años que vienen, estrangulan la economía en todo lo que se refiere a repuestos y a la compra de nueva maquinaria.

La «batalla de la producción» es uno de los ejes de la política económica de la Unidad Popular. Allende, en su discurso a los trabajadores en la conmemoración del primero de mayo de 1971, declara «que es fundamental el mayor esfuerzo, el mayor sacrificio y el mayor empeño patriótico [de los trabajadores…] y producir más, porque al hacerlo estarán asegurando el futuro de la patria»[47].

Es posible identificar la aparición de una suerte de stajanovismo a la chilena, ensalzado por la prensa oficial, los círculos gubernamentales, la CUT y el Partido Comunista, que insisten en la «responsabilidad» que les incumbe a los trabajadores. Un examen de la prensa militante o de afiches de la época permite tener una idea de la amplitud de esta propaganda:

Propaganda a favor de la «batalla de la producción»


DARLE DURO
A LA
PRODUCCION


central
única
VENCEREMOS
EN LA BATALLA DE LA

Fuente: Chile. Breve Imaginería política (1970-1973)
[www.abacq.net/imagineria]

y Central Única, febrero de 1972

A su regreso de la Unión Soviética, Luis Figueroa (a dicha fecha, presidente nacional de la CUT y futuro ministro del Trabajo de Allende), destaca que en la «patria del socialismo», uno de los caminos escogidos es igualmente la intensificación de la producción y de la productividad[48].

Según la CUT, la prioridad para los trabajadores es, desde ahora en adelante, «producir y estudiar»[49].

A inicios del año 1972, la revista teórica del PC explica claramente que el objetivo principal de la participación es aumentar la producción y que los trabajadores del APS serán recompensados (entre otros, financieramente) según su productividad[50].

En las bases, son los militantes y dirigentes sindicales los encargados de transmitir esta directiva. Para numerosos militantes sindicalistas, el combate político prioritario en esta época es el de la «batalla de la producción». Ciertas entrevistas dan cuenta, incluso hoy, de ese estado de ánimo, como es el caso de Neftalí Zúñiga, dirigente sindical y militante comunista, designado interventor en 1971 de la fábrica Pollak (alrededor de 2 mil empleados):

Bueno, dentro del área social los que fuimos más consecuentes teníamos muy claro que teníamos que producir más, porque para eso era el gobierno, para satisfacer la mayor parte de las necesidades de nuestra población, entonces donde yo trabajaba como mecánico, lo ideal siempre fue educar a los trabajadores para hacer más liviana su carga y que fueran más productivos[51]

Por su parte, el MIR plantea que se trata de un error típico del capitalismo de Estado el querer dar prioridad a la producción cuando el problema fundamental del poder y del Estado aún no ha sido resuelto en favor de los trabajadores[52].

No obstante, José Moya, obrero del MIR, elegido presidente del Comité de Producción de la fábrica de discos del gran monopolio de radiotelevisión IRT (ex-RCA), se acuerda que tenían una responsabilidad productiva que asumir como trabajadores, más allá de sus posibles discrepancias con el gobierno:

Yo fui presidente del Comité de Producción de la fábrica de discos, donde trabajábamos cerca de 120 personas. La labor básica era discutir la producción de cada empresa o de cada área y también la distribución. Era un momento de mucho consumo de discos, radio y televisión, nosotros trabajábamos a un turno pero en un momento tuvimos que decidir trabajar a dos turnos, ampliar nuestra capacidad de trabajo, incluso hubo que contratar a más gente porque los niveles producción no daba abasto[53].

Según Manuel Castells, tres elementos combinados pero contradictorios determinan el carácter de la participación de los asalariados en el sector estatizado: la hegemonía de la estructura sindical; la inserción de los organismos de participación en torno al objetivo de la «batalla de la producción»; la casi nula existencia de un sistema de planificación democrático nacional. Mientras que en un primer momento, la producción aumenta espectacularmente y que los excedentes generados son transferidos desde el APS hacia los otros sectores sociales y populares, la combinación de estos tres elementos tiene también como consecuencia el aumento del nivel de vida y «privilegios» de los obreros del Área social, profundizando las brechas existentes en el seno de la clase obrera[54].

Estas claras diferencias afectan negativamente la unidad de las movilizaciones de los múltiples segmentos de la clase trabajadora y tiende a circunscribir a los asalariados del APS en una carrera por la producción, sin garantías de que los excedentes no sean reacumulados por el sector privado, a través de los intermediarios de la distribución (en su mayoría en manos de capitalistas privados); aunque en numerosos casos, el control de los precios por parte del gobierno y las nuevas líneas de producción orientadas a la fabricación de productos populares, de bajo precios, hacía que las empresas manufactureras del APS no generaran ganancias, y al contrario, tuvieran que lidiar con pérdidas crónicas. Estos problemas, de diversa índole, que comienzan a ser señalados por los sectores críticos dentro de la izquierda, se confirman mientras que la política económica de corto plazo de la UP muestra serios signos de estancamiento, entre otras cosas bajo la presión de una inflación creciente.

La reacción de las clases dominantes y la reivindicación de un «poder popular» alternativo

A pesar de las numerosas tensiones sociales y políticas, el año 1971 fue una «edad de oro» para la UP en comparación con los meses que vendrán. En abril, el resultado de las elecciones municipales muestra una consolidación de la coalición en el gobierno: la UP obtiene la mayoría absoluta (50,5%), con un aumento espectacular del Partido Socialista (PS) –que pasa del 12,2% al 22,4%)[55].

Sobre la base de este éxito, la coalición duda durante largo tiempo, si es el momento o no, de organizar un referéndum destinado a que los chilenos aprueben el cambio institucional previsto en el programa, para elaborar una nueva constitución y constituir finalmente ese famoso «Estado popular» (uno de los ejes centrales del «poder popular» institucionalizado deseado por Allende). Sin embargo, a pesar de la opinión favorable del PS y de Salvador Allende, es la del PC la que prevalece. Los dirigentes comunistas piensan que es mejor esperar y acelerar las transformaciones económicas, con el objeto de ampliar aún más el apoyo al gobierno y garantizar un resultado positivo en esta consulta democrática, sobre todo cuando todavía la propuesta constitucional de Allende no está todavía redactada[56].

Vista con la perspectiva histórica, esta indecisión es sin duda alguna, una de las ocasiones perdidas de la UP para realizar las profundas transformaciones institucionales previstas y poder desarmar momentáneamente a la oposición (en el Parlamento y también a nivel de la lucha de clases económica). En efecto, a esta fecha, la derecha y las clases dominantes siguen aún divididas y buscan la forma de unificarse. Además, la economía muestra todavía algunos signos alentadores. Estos dos datos ofrecían un espacio político para el llamado al plebiscito popular, pero esta «ventana histórica» –de corta duración– no será aprovechada por la izquierda. La unificación de la derecha podría ser fechada el 18 de julio de 1971, cuando se realizan elecciones complementarias en Valparaíso (para elegir un diputado)[57], unidad que es acelerada por el electrochoque provocado por el asesinato del ex ministro del Interior de Frei,

Edmundo Pérez Zujovic, en junio de ese mismo año[58].

El cambio en la relación de fuerzas sociales provoca el reposicionamiento de las diferentes organizaciones políticas. A fines de julio, la DC vive una crisis interna que permite el surgimiento de la Izquierda Cristiana (IC), la que se pronuncia a favor de la UP y por la integración de los militantes cristianos a un proyecto de transformación social radical.

Estos ajustes y reposicionamientos suceden mientras que el ala dura de la DC (representada por Eduardo Frei Montalva) retoma la dirección del Partido. Como lo afirma la historiadora Verónica Valdivia Ortiz de Zárate, surge en esos momentos «una derecha en guerra» que después del trauma de la derrota electoral busca organizar la ofensiva en todos los frentes –a pesar de sus diferencias internas– a través de la batalla institucional, pero también desde el terreno económico e incluso conspirativo[59].

Por su parte, el Partido Nacional (PN), principal fuerza de la derecha, redefine su postura ideológica, adoptando un discurso mucho más radical y llamando abiertamente a «todas las fuerzas políticas y a los grupos o gremios profesionales y de trabajadores para defender la unidad nacional contra la lucha de clases propiciada por el marxismo»[60].

Este discurso es el reflejo de los sentimientos de una clase patronal que organiza su respuesta al gobierno pero, por sobre todo, en contra de la agitación obrera en las empresas. Los grandes capitalistas del país como Agustín Edwards o Juan Yarur han mostrado el camino, abandonando el país y transfiriendo sus capitales hacia el extranjero. La Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), sindicato patronal de la burguesía industrial se pone en la primera línea de la escena política, organizando una intensa campaña de prensa en contra del gobierno a partir del tema del caos económico que amenazaría al país. Otra línea de acción es la organización en el Frente Nacional del Área Privada (Frenap) de la pequeña y mediana burguesía que ve con terror el desarrollo de las requisiciones de los comercios y la toma de fábricas. Estas maniobras conducen a una de las primeras movilizaciones de masas organizada por la oposición: la «marcha de las cacerolas vacías», el primero de diciembre de 1971. Convocada por mujeres del barrio alto que desfilan en varios miles, también participan otros tantos provenientes de los medios populares que se manifiestan a causa de los graves problemas de abastecimiento[61].

En esta marcha, se encuentran, codo a codo, militantes de la DC, del PN y también de la extrema derecha con la presencia de Patria y Libertad y en su transcurso se suceden numerosos enfrentamientos con militantes de la izquierda y Carabineros. Claramente, la burguesía chilena entra en una nueva fase que Armand Mattelart denomina como «línea de masas»[62].

Para estos sectores, se trata de pasar a la ofensiva y comenzar a ocupar la calle, participando activamente en el espacio público con el fin de disputárselo a los partidarios del proceso revolucionario[63].

Frente a esta situación, la coalición de gobierno y la izquierda extraparlamentaria adoptan posiciones esencialmente distintas dejando de manifiesto la polarización progresiva del campo político, bajo la presión del conflicto de clase. Por su parte, el PC sigue insistiendo en la responsabilidad que le incumbe al gobierno y a los trabajadores, y reitera su llamado a la «batalla de la producción» en un intento por seducir a los democratacristianos, a pesar de su posicionamiento cada vez más a la derecha. A partir de este análisis, los comunistas acusan al MIR de contribuir a la polarización política por sus acciones de «ocupación, sin discriminación, de tierras e industrias y por sus invocaciones a la lucha armada»[64].

La comisión política del PS, por su lado, llama más bien a radicalizar las reformas y al remplazo del Congreso por una cámara única, llamada «Asamblea del pueblo». Frente a una perspectiva juzgada demasiado legalista, militantes del PS plantean que la revolución armada es inevitable, afirmaciones que son condenadas públicamente por la dirección socialista[65].

Luis Corvalán Márquez, en su análisis de la posición de los partidos políticos durante la UP, ubica en este preciso momento, el surgimiento de una estrategia de poder alternativo. Según éste, es durante los meses de fines de 1971, que el MIR teoriza sobre la necesidad de la formación de un poder popular real y opera un «giro significativo»[66].

Un análisis de la declaración de principios del Frente de Trabajadores Revolucionarios (FTR) –frente sindical del MIR– permite darse cuenta que, a esta fecha (diciembre de 1971), el discurso sobre el «poder popular» ya había sido ampliamente desarrollado. Otras investigaciones muestran más bien una continuidad en la política del MIR sin que se puedan identificar verdaderos «giros teóricos» durante el período 1970-1973, aunque confirma que sólo a partir

de 1972, los miristas concentrarán su política en torno a la reivindicación del poder popular[67].

Para el militante mirista, Javier Bertín, el principal aporte de su organización es efectivamente haber percibido muy tempranamente la necesidad del desarrollo territorial del poder popular e igualmente, el rechazo a dejarse reducir a la sola perspectiva de reivindicaciones económicas[68].

Uno de los intelectuales del MIR, Nelson Gutiérrez, definía la constitución de ese poder obrero y popular como la afirmación de la «independencia de clase orgánica, ideológica, programática y política del proletariado en su lucha por el poder»[69].

Esta problemática toma forma y amplitud a medida que se multiplican las ocupaciones de fábricas. De hecho, si nos atenemos a la documentación interna de la comisión sindical del MIR, es a partir de mayo de 1972, después de las elecciones en la CUT, que el MIR decide lanzar un llamado a la constitución de los «Consejos Comunales de Trabajadores»[70],considerados como una extensión de la formación de los «Consejos Comunales Campesinos». Además, y de rebote, esta discusión produce también una agudización de las diferencias políticas dentro de la izquierda gubernamental. El MAPU es un ejemplo del acercamiento de ideas entre el MIR (fuera del gobierno) y la izquierda dentro de la coalición. A fines de 1971, la reivindicación del poder popular, progresivamente levantada por el MIR es –teóricamente– compartida por otros sectores de la izquierda.

El inicio del mercado negro y la especulación

Desde los primeros meses del nuevo gobierno se crea una verdadera psicosis en torno al fantasma de la escasez y del racionamiento, hábilmente mantenida por la prensa de oposición. Fenómeno que se va acentuando hasta 1973 con periódicos que, como El Mercurio, denuncian regularmente las inmensas colas que se deben hacer para poder adquirir algunos productos básicos: una espera interminable, que exaspera especialmente a las capas medias de la sociedad, habituadas a consumir sin mayores problemas y que no siempre tienen la posibilidad de

acceder a un mercado negro demasiado oneroso. ¿Cuál es realmente la situación y cómo intenta el gobierno responder a este fenómeno?

La economía chilena está marcada por la estigmatización clásica de una economía dependiente en fase de desarrollo repentino. El paso de una economía que se encuentra fuertemente deprimida a una en fase de expansión creciente, provoca inevitablemente nudos de estrangulamiento, lo que se traduce específicamente en formas de escasez pasajeras. El proletariado chileno, hasta ahora excluido de la posibilidad de consumir bienes tales como electrodomésticos (refrigeradores, lavadoras, televisores, etc.) o productos de consumo corriente (especialmente, carne, leche, pescado), de pronto es solvente y se «lanza» sobre estos artículos, duplicándose el consumo de productos nacionales en 1971[71].

El abastecimiento conoce entonces reiteradas perturbaciones. Por otra parte, los profundos cambios económicos y desequilibrios estructurales que se desencadenan acentúan la presión inflacionaria, el déficit de la balanza de pagos y el déficit fiscal. La UP, con la idea de responder a lo más urgente, tiende a escoger soluciones de emergencia, basadas en la capacidad financiera del Estado, al mismo tiempo que mantiene una política de aumento de la demanda. Sin embargo, esta política distributiva de tipo neokeynesiana es, en esta coyuntura, parcialmente contraproducente. En lugar de mantener una reorientación de los ingresos, favorable a los asalariados, tiende paradójicamente a beneficiar prácticas especulativas de las capas sociales de altos ingresos, como lo es la tendencia al acaparamiento de mercaderías. Finalmente, el aumento de la demanda favorece indirectamente la acumulación de capital en manos de los empresarios del sector privado, tendencia acentuada por el bloqueo en el Congreso de las iniciativas del Ejecutivo destinadas a modificar el sistema fiscal (bloqueo que se mantiene hasta el golpe de Estado).

Así, el beneficio productivo resultante de la «batalla de la producción» se ve ampliamente neutralizado. En ese marco, uno de los talones de Aquiles de la UP es el abastecimiento y la distribución de mercaderías. Ante la ausencia de una transformación drástica de las redes de comercialización, las prácticas especulativas y los canales de distribución fuera de control tienden a multiplicarse; y esto, esencialmente, en manos de una «oligarquía del comercio» que vende sus productos –a precio de oro–, a las capas medias y altas[72].

El gobierno, consciente de estos efectos negativos, intenta llevar a cabo una

planificación del consumo, del abastecimiento y también tener un mejor control de los precios[73].

Sin embargo, la UP actúa desde una posición de debilidad. A pesar de los esfuerzos realizados, las estimaciones a fines de 1971 muestran que el control de la distribución por parte del Estado alcanza apenas, un 15%, esencialmente gracias a la creación de empresas de distribución nacional. Entre ellas, la Dinac (Dirección Nacional de Abastecimiento y Comercialización), que opera en el comercio de la alimentación, se ocupa del comercio detallista y de la compra de la producción artesanal y de la pequeña industria[74].

El mayor nivel de control de la distribución se concentra principalmente en los sectores textil, de la producción metalúrgica, de minerales no metálicos y productos del mar. Así, cuando el tema del mercado negro y de la especulación se convierte en un conflicto abiertamente político, el Ejecutivo se enfrenta a sus propios límites en el control de la economía. Patricio Palma, encargado de Dirinco (Dirección Nacional de la Industria y el Comercio, dependiente del Ministerio de Economía), al tiempo que defiende la política gubernamental, reconoce hoy que:

El control que ejercía el gobierno sobre el proceso productivo era bastante limitado […] a nivel de la circulación interna, ni los procesos de distribución ni los de producción estaban controlados de manera importante. Esto iba a cambiar un poco en la medida que comenzó el proceso de creación del Área Social de Producción […]. Sin embargo, no fueron paralelamente los avances en el área de la distribución mayorista y por cierto, nada en la minorista, procesos que acompañaran esta toma de control de la producción…[75]

Este problema se vuelve cada vez más relevante en la medida que rápidamente las dificultades en el abastecimiento son aprovechadas también políticamente por una parte de los comerciantes y de las clases acomodadas. Según Patricio Palma, existieron dos períodos de mercado negro en Chile: el primero, principalmente como consecuencia estructural de los cambios económicos; y posteriormente, un segundo período, que se consolida desde mediados de 1972 y que combina la búsqueda de sacar provecho económico con el factor político:

Detectamos a muchas de estas redes y detrás de las redes había algunos

personajes bastante conocidos del mundo político e incluso en algunas operaciones que tuvimos que hacer de detección de mercado negro no aparecían productos de consumo, pero aparecían radiotransmisores, aparecían armas de fuego […]. Se produjo la imbricación entre la actividad contrarrevolucionaria, ya con fines de derribar el gobierno de la Unidad Popular, entre los sectores políticos que la impulsaban […] con los que ganaban dinero con el mercado negro[76].

Si bien es cierto que dichas prácticas se consolidan mayormente en el último año de la UP, los efectos de la especulación sobre los productos alimenticios se pueden constatar desde fines de 1971, inicios de 1972. De hecho, no faltan los ejemplos sobre esta situación[77].

La revisión de los archivos de Dirinco demuestra que esta administración es regularmente demandada para intentar responder a las denuncias. Desde fines de 1971, el gobierno trata de frenar el acaparamiento ilegal: es el inicio de una forma original de control popular de la distribución a través de las «Juntas de Abastecimiento y control de Precios» (JAP).

Las JAP: ¿entre «poder popular» y «dictadura del hambre»?

La iniciativa de creación de las Juntas de Abastecimiento y control de Precios (JAP) se puede fechar el 29 de julio de 1971 durante un encuentro de «dueñas de casa» en el Estadio Chile, a propósito de los crecientes problemas de abastecimiento. Esta reunión fue organizada por militantes de izquierda de los barrios populares, quienes invitan al ministro de Economía, Pedro Vuskovic. A mediados de octubre, Luis Corvalán (secretario general del PC), durante una conferencia del Partido en el teatro Caupolicán, llama a acelerar su desarrollo. El 19 de ese mismo mes, el PC sostiene una reunión con funcionarios y dirigentes de base relacionados con el problema del abastecimiento. En esta ocasión, Corvalán señala que se han creado sólo diez JAP y, como es claramente insuficiente, invita al Partido a orientar sus esfuerzos en ese sentido. Los otros partidos de la UP siguen oficialmente esta indicación. Pero, es principalmente

desde las bases, y particularmente gracias a las mujeres militantes de los barrios populares, que surgen las JAP[78].

Patricio Palma quien, antes de dirigir Dirinco, es un cercano consejero de Vuskovic, recuerda «la JAP iba a trabajar hacia la producción buscando regular el canal de abastecimiento y hacia el consumidor buscando regularizar la cuestión del precio»[79].

De hecho, la JAP es inicialmente pensada como un medio de presión local, destinado a controlar la llegada de mercaderías y la aplicación, por parte de los comerciantes, de los precios de los productos de consumo básico fijados por el Estado. El objetivo es también integrar a los pequeños comerciantes a la red de producción y distribución estatal. Pero –y es aquí donde reside la originalidad de esta organización– se trata de transferir una parte de esta responsabilidad a los habitantes de un barrio, de algún modo, una suerte de deslocalización del control estatal a una escala local y participativa. El discurso oficial es entonces: «es el pueblo que debe cooperar, es quien se debe organizar y comprender, quien debe denunciar y actuar, quien debe tomar esta responsabilidad»[80].

Según los sociólogos Ernesto Pastrana y Mónica Threlfall, las JAP sirven para la UP de complemento a la política económica gubernamental («Su tarea consistiría en amortiguar los efectos a nivel popular de la política inflacionaria en general, y de los problemas en el sistema de comercialización en particular») y para ampliar base social y organizativa:

Aunque no tiene una política poblacional muy clara, en la práctica, en vez de solamente pelear por la influencia y el control de las organizaciones ya existentes, la UP opta por crear nuevos organismos funcionales con tareas concretas más vinculadas a la política del gobierno y con distintas reglas de juego, pero potencialmente con la misma base que las tradicionales[81].

La JAP es formada por representantes de las juntas de vecinos, elegidos en asamblea, representantes de los centros de madres, sindicatos, clubes deportivos y de los pequeños comerciantes organizados. En el caso de que estas organizaciones no existan en la zona, el comité director puede formarse con sólo cinco habitantes del barrio. Cualquier vecino está habilitado para solicitar la creación de una JAP (pero debe ser legitimada por un secretario de Dirinco)[82].

Luego, se realiza una asamblea con todos los vecinos inscritos, en el curso de la cual se constituyen diferentes comisiones (control de precios, control del abastecimiento, difusión de información,…). Estos cargos debían ser rotativos. Con el fin de demostrar su buena voluntad hacia los comerciantes, la UP ofrece incluso la presidencia de las JAP a aquellos que se integren. A nivel superior, las JAP locales dependen de un «comité coordinador comunal», compuesto por al menos, dos representantes de las JAP comunales, un representante de la CUT, de Carabineros, de la Cámara de Comercio Detallista, de Dirinco y finalmente, un representante de Consejo Nacional de Desarrollo Social. Este comité coordinador debe registrar los problemas que se plantean a nivel local, intentar darles solución y, en caso de no lograrlo, intervenir ante Dirinco[83].

El tenor legal de las JAP es confirmado sólo en abril de 1972, después de muchas polémicas con la derecha en cuanto a sus facultades:

La resolución trae consigo algunas limitaciones en cuanto a los alcances y fines de las JAP, que son utilizadas por la oposición como fuente de controversias en cuanto a que la Contraloría General de la República delimita el accionar de las JAP: «debe hacer presente que entiende que esas atribuciones que competen a las Juntas tienen un carácter meramente asesor y cooperador a la función pública que corresponde legalmente a la Dirección de Industria y Comercio y, por ende, que carecen de toda facultad ejecutiva o decisoria, en los términos precisados por la jurisprudencia de este organismo contralor»[84].

Es decir, la Controlaría insiste en confirmar que no tienen ningún derecho a proceder al abastecimiento directo, ni a la comercialización de productos básicos. Según estadísticas oficiales, el desarrollo de las JAP, aunque relativamente limitado, fue bastante rápido. 60 JAP funcionan a fines de octubre de 1971 y en marzo de 1972 ya se cuentan 416[85].

A esa fecha, se estima que semanalmente las JAP reparten en los barrios periféricos, alrededor de 300 toneladas de carne, cifras que permiten hablar de una gestión promedio ligeramente superior a 240 personas por Junta. Si nos atenemos a las estadísticas publicadas en la revista Chile Hoy, sólo unos meses más tarde, existen 988 JAP en todo el país, de las cuales, 675 en Santiago (la capital cuenta entonces con 10 JAP comunales)[86].

La extensión a todo el territorio nacional puede ser apreciada en el anexo 9 (Número de JAP constituidas por regiones en mayo de 1972). Las JAP de Santiago se reúnen en una asamblea provincial el 5 de marzo de 1972, en el Teatro Municipal. Los delegados del «gran Santiago» así como los representantes de varios organismos de distribución y del APS también participan. Esta reunión permite medir el avance del mercado negro[87].

En julio de 1972, se desarrolla en el teatro Caupolicán la segunda asamblea nacional de las JAP, la que es presidida por Salvador Allende, quien declara en un arranque de entusiasmo, que si las JAP fuesen capaces de organizar directamente a cien mil habitantes en Santiago, la especulación dejaría de existir. En esta ocasión, un dirigente de la JAP comunal de San Miguel señala la importancia de la relación entre el APS, la distribución pública y las JAP para realmente poder controlar el abastecimiento. En efecto, a pesar de que algunos productos de consumo básico como el azúcar (60%) o la carne (85%) y los productos del mar (50%) logran ser controlados por el Estado, la gran mayoría de bienes esenciales siguen siendo distribuidos por privados[88].

Pero también es cierto que existen vínculos entre las industrias nacionalizadas y las JAP (en el sector textil, por ejemplo), aunque a comienzos del año 1973, éstas sólo trabajan en colaboración estrecha con 8 mil pequeños comerciantes[89], lo que finalmente es muy poco si se compara esta cifra con los 300 mil comercios existentes en ese entonces. Como en la esfera de la producción, en el conflicto social la UP juega un difícil rol de árbitro. Es lo que pone de manifiesto el testimonio de Palma, quien, a pesar de todo, realiza un balance altamente positivo de esta experiencia y no duda en calificar a estas Juntas como «primer elemento de poder popular» y como «forma diferente de hacer la política del Estado» que iba incluso a «contribuir al cambio de carácter del Estado»[90].

Sin embargo, las Juntas, creadas y coordinadas por el gobierno, a menudo son vistas como instrumentos políticos en manos de los militantes de la UP. Así lo reconoce una dirigente de la JAP de la población José María Caro: «tuvimos dificultades para integrar a los comerciantes a esta entidad, pues, creían que las JAP eran instrumentos del Gobierno Popular para controlarlos y no para beneficiarlos»[91].

Por otra parte, una revisión de la prensa muestra el profundo rechazo que provocan las JAP en la pequeña burguesía comerciante y en la derecha partidista[92].

La postura general de la oposición es la de presentar a las JAP como organismos totalitarios e ilegales, partidarios de la «dictadura del hambre». Por ejemplo, el diario La Segunda del 15 de marzo 1972 presenta estos organismos como meros «comisarios de control político»[93] y el 20 de abril de 1972, Rafael Cumsille, presidente de la Confederación de la Pequeña Industria y del Comercio, denuncia que la finalidad de las JAP es impedir la «libertad del comercio» y establecer un «control absoluto sobre todos los chilenos»[94].

La mujeres antiallendistas, a través de la organización Poder femenino (creada a principios de 1972), también se movilizan, desde una perspectiva de género transclasista, en contra del gobierno en base a una denuncia sistemática del desabastecimiento y del papel de las JAP[95].

Tanto en la oposición como en las filas de la UP, se les da una importancia enorme a las JAP, consideradas como verdaderos órganos de doble poder que tenderían a tomarse atribuciones hasta entonces ejercidas a nivel central. Hay aquí una deformación evidente de la realidad, ya que las JAP, bajo control de la burocracia estatal, se ven limitadas en su desarrollo por los mismos objetivos que les fueron asignados y por la resolución de la Controlaría. No poseen reales atribuciones de control «desde abajo». Según varios testimonios, son, por lo demás, víctimas de estas limitaciones desde el principio. Las JAP comunales, por ejemplo, tienen un desarrollo extremadamente parcial y funcionan de manera superestructural y burocrática, estableciendo poco contacto con los habitantes de los barrios. Un periódico como Las Noticias de Última Hora, aunque favorable a las posiciones gubernamentales, lo destaca en varias oportunidades. Así, a nivel de la unidad comunal de La Cisterna (compuesta por 40 JAP), los representantes se quejan de que, a pesar de la eficacia del censo realizado, las mercaderías básicas se demoran entre 15 a 20 días en ser distribuidas por la Dinac… Paralelamente, los comerciantes más acomodados, que no participan en las JAP y que tienen sus propios medios de transporte, son reabastecidos inmediatamente[96].

Según Threlfall y Pastrana

La oposición denuncia que el gobierno está tratando de crear un «monopolio estatal» de la distribución, lo que en realidad nunca superó a un 30% de los productos. El estado había formado la Empresa Nacional de Distribución y Comercialización (DINAC) a partir de la quiebra de una empresa distribuidora de capitales ingleses. Con la adquisición de varias otras empresas medianas

(también con participación de capitales ingleses) el control estatal de la distribución se expandió, pero el gran monopolio de la distribución, CENADI (ex CODINA), con más de 30% de la distribución, quedó en el área privada. Esta empresa fue «adquirida» por la Confederación de Comercio Detallista Establecido y Pequeña Industria, negociación que significó posteriormente eliminarla de la lista de las 91 industrias monopólicas destinadas al Área de Propiedad Social[97].

Además, en cuanto a las JAP, ciertas críticas de la oposición se basan en parte, sobre prácticas y desviaciones reales. Entre ellas, el poder de corrupción que el control de una JAP puede otorgar, fenómeno difícil de medir hoy. Patricio Palma reconoce que hubo una «corrupción mínima», pero que globalmente es el bien colectivo el que primó en una distribución que se hace enfrente de todos[98].

Luciano, obrero de una empresa privada mediana en Santiago y militante trotskista del PSR, insiste, por el contrario, que habría habido «mucha corrupción, es decir, los dirigentes a cargo de la JAP no repartían todo, sino algunas cosas»[99] y agrega que a nivel de la población La Bandera, «[los dirigentes de] la JAP no repartían toda la mercadería, la repartían a la gente que era de su militancia»[100].

Más allá de estas consideraciones centradas sobre comportamientos individuales «normales» en tales períodos de cambios profundos, el elemento central en la evaluación de las JAP es que no logran constituirse en organismos de lucha eficaz frente a la amplitud de la especulación y del acaparamiento cuando su acción es débil en una amplia gama de productos esenciales para las capas populares. Las JAP, en lo que podemos llamar «su primera versión», es decir, hasta la gran huelga patronal de octubre, mantienen solamente su rol como órgano de presión sobre fracciones reducidas de la distribución. Si son «la expresión de la actividad de las masas» como lo piensa Patricio Palma, su existencia no permite hablar todavía de un verdadero «poder popular constituyente». Sin embargo, ellas siembran los gérmenes de una interesante movilización de los barrios populares en torno al problema del abastecimiento, tema que no tardará en resurgir con fuerza a partir de mediados de 1972.

1 Insunza, Jorge, «Informe a la reunión plenaria del CC del Partido Comunista», El Siglo, 7 de febrero de 1970.

2 En su discurso del 5 de septiembre de 1970, Salvador Allende llama a los CUP a mantenerse en «actitud vigilante». Discurso del 4 de septiembre (madrugada del 5 de septiembre) en la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECH). En: [http://salvador-allende.cl/Discursos/1970/Victoria.pdf].

3 Oyarce, José, «Intervención en el pleno del CC del Partido Comunista», El Siglo, 8 de febrero de 1970.

4 Entrevista realizada en Santiago, mayo de 2002.

5 La mayoría de los autores cifran entre 14.500 y 15 mil la cantidad real de CUP.

6 Corvalán, Luis, «Informe al pleno del Comité Central del Partido Comunista», Santiago, 7 de mayo de 1970. En: Farías, Víctor, La izquierda chilena…, op. cit., T.I, pp. 250-263.

7 Ibid.

8 Álvarez V., Rolando, «La Unidad Popular y las elecciones presidenciales de 1970 en Chile: la batalla electoral como vía revolucionaria», op. cit.

9 MIR, «Tarea de los Comités de la Unidad Popular», Punto Final, 13 de octubre de 1970.

10 Ibid.

11 Citado por Cancino, Hugo, La problemática…, op. cit., p. 128.

12 Álvarez V., Rolando, «La Unidad Popular y las elecciones presidenciales de 1970 en Chile: la batalla electoral como vía revolucionaria», op. cit.

13 Entrevista realizada en Santiago, 1 de mayo de 2002.

14 Winn, Peter, Tejedores de la revolución, op. cit.

15 Ver las anotaciones de Najman, Maurice en «Comment s’organisaient les bases du pouvoir populaire», Le Monde Diplomatique, París, octubre 1973.

16 Castillo, Fernando; Larraín, Jorge, «Poder obrero-campesino y transición al socialismo en Chile», op. cit., p. 163.

17 Oficina de informaciones y radiodifusión de la presidencia de la República, Calendario del Área Social, Santiago, 1972.

18 Garcés, Joan E., «El modelo de participación de los trabajadores en el gobierno popular. Algunos factores condicionantes». En: Seminario ODEPLAN-Universidad de Sussex, La Vía Chilena al Socialismo, México, Siglo XXI, 1973 (en: [www.blest.eu/biblio/via_chilena/index.html]).

19 Novoa, Eduardo, «Aspectos constitucionales y legales de la UP». En: Seminario ODEPLAN-Universidad de Sussex, La Vía Chilena al Socialismo, México, Siglo XXI, 1973 (en: [www.blest.eu/biblio/via_chilena/index.html]).

20 De hecho, existen cinco mecanismos: 1. La creación de nuevas empresas (se crean 8 entre los años 1971 y 1972); 2. La reforma constitucional (para el caso de los recursos naturales y mineros nacionalizados por el Congreso); 3. La negociación de los activos con los propietarios (en total, el gobierno negocia hasta 1973 la participación en 58 compañías de las cuales una veintena ha sido anteriormente «intervenida» o «requisada»), y finalmente 4. y 5. La «intervención» y la «requisición» (casos que nos interesan aquí particularmente pues concierne sobre todo el sector industrial y manufacturero).

21 Así, cuando en el curso de este estudio hablamos de «empresas estatizadas» por el gobierno es sobre todo con el objetivo de dar un término genérico a un complejo proceso de intervención, expropiación o «nacionalización» de empresas: la estatización definitiva, en la mayoría de los casos, no es regularizada desde un punto de vista jurídico por falta de consenso en el parlamento hasta el golpe de Estado.

22 Novoa, Eduardo, «L'utilisation de la loi sous le gouvernement Allende», op. cit.

23 Para una historia detallada de la estatización del sector textil: Cajdler, Barros, Estatización de la industria textil durante el gobierno de la Unidad Popular: (1970-1973), Memoria para optar al grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas, Facultad de derecho, Universidad de Chile, 2013.

24 Winn, Peter, Tejedores de la Revolución…, op. cit., p. 215.

25 El Siglo, 25 de mayo de 1971.

26 Espinoza, Juan G.; Zimbalist, Andrew, Economic Democracy: worker’s participation in Chilean industry 1970-1973, London, Academic Press Inc., Studies in social discontinuity, 1978 (traducción utilizada: Democracia económica. La participación de los trabajadores en la industria chilena, 1970-1973, México, Fondo de Cultura Económica, 1984,

p. 67).

27 Ver capítulo sobre los límites del Área de Propiedad Social.

28 El Mercurio, Santiago, 9 de agosto de 1971 y 13 de agosto de 1971.

29 Corvalán M., Luis, Los partidos y el golpe del 11 de septiembre: contribución al estudio del contexto histórico, Santiago, Cesoc, 2000, pp. 121-124.

30 Se consideraban «monopolísticos» los establecimientos cuyo capital, reservas y beneficios superan un millón de dólares, al cambio oficial de la época (es decir, 14 millones de escudos).

31 Sader, Eder, «Chili: la transition manquée», Critique de la économie politique, París nº16-17, avril-septembre 1974,

p. 252. Ver también la entrevista a Carlos Altamirano (realizada en Santiago, 11 de marzo de 2002).

32 Ver el testimonio de Patricio Palma, a la cabeza de la Dirección de Industria y Comercio (Dirinco) del gobierno. Entrevista realizada en Santiago, 28 de noviembre de 2001.

33 Una revisión de los archivos desclasificados de la CIA permite medir la amplitud de este sabotaje coordinado por el «Comité de los 40» y por Henry Kissinger. Ver: Senado de los Estados Unidos (Informe Church), Acción encubierta en Chile, 1963-1973, Informe de la comisión designada para estudiar las operaciones gubernamentales concernientes a actividades de inteligencia, Washington, 18 de diciembre de 1975 (publicado en español en [http://www.derechos.org/nizkor/chile/doc/encubierta.html]) y Corvalán M., Luis, La secreta obscenidad de la historia de Chile, Santiago, Ceibo, 2012.

34 Corfo, Área Social: la justicia pierde el juicio, Santiago, Quimantú, Documentos especiales, 1973.

35 Sobre esta base, el PC realiza un balance altamente positivo del año transcurrido (Cf. El Siglo, 2 de enero de 1972).

36 Vuskovic, Pedro, «La política económica del gobierno de la Unidad Popular». En: Seminario ODEPLAN-Universidad de Sussex, La Vía Chilena al Socialismo, México, Siglo XXI, 1973 (en: [www.blest.eu/biblio/via_chilena/index.html]).

37 Castillo, Fernando; Larraín, Jorge, «Poder obrero-campesino...», op. cit., p. 179.

38 Normas básicas de participación de los trabajadores en la dirección del área social y mixta, Santiago, CUT, 1972.

39 Los comités de producción existen en todas las empresas del APS y entre sus principales funciones están: elaborar normas de producción, reglamentos de autodisciplina, vigilar la normalidad del proceso productivo y también pueden hacer propuestas de mejoras en la cadena productiva.

40 En efecto, en la mayor parte de las 35 empresas seleccionadas al azar por Espinoza y Zimbalist, los trabajadores logran constituirse como mayoría en el Consejo de Administración (Espinoza, Juan G., Zimbalist, Andrew, Democracia económica, op. cit., p. 76).

41 Entrevista realizada en Santiago, mayo de 2002.

42 Para una historia de la participación desde el estudio de las relaciones laborales: Wilson, James W., Freedom and Control: Worker's Participation in Management in Chile, 1967-1975, Ph. D. diss., Cornell University, 3 vols., 1979.

43 Farías, Víctor, La izquierda chilena (1969-1973): documentos para el estudio de su línea estratégica, op. cit., Introducción al capítulo I del tomo I.

44 La realidad social de Chile, Oficina de informaciones y radiodifusión de la presidencia de la República, Santiago, 1972, p. 44.

45 Vuskovic, Pedro, «La política económica del gobierno de la Unidad Popular»,

op. cit.

46 Odeplan, Informe económico anual 1971, Santiago, Ed. Universitaria, 1972, p. 77.

47 Central Única, junio de 1971.

48 Central Única, junio de 1971.

49 Central Única, septiembre de 1971.

50 Principios, marzo-abril de 1972.

51 Entrevista realizada en Santiago, 29 de marzo de 2002.

52 El periódico El Rebelde, órgano oficial del MIR, trata regularmente esta temática.

53 Entrevista realizada en Santiago, 20 de noviembre de 2001.

54 Castells, Manuel, La lucha de clases en Chile, op. cit., pp. 207-208.

55 Smirnow, Gabriel, Le développement de la lutte pour le pouvoir…, op. cit., pp. 173-174.

56 Cf. Allende, Salvador, Un Estado democrático y soberano. Mi propuesta a los chilenos (texto póstumo), Ed. Centro de Estudios Políticos Simón Bolívar y Fundación Presidente Allende (España), 1993. En: [www.salvador-allende.cl/Documentos/1970-73/proyecto_constitucion.pdf] y Magasich, Jorge, «El proyecto constitucional del Gobierno de Allende», Le Monde Diplomatique, Santiago, agosto del 2013.

57 La derecha logra proponer un candidato único que obtiene la victoria en estas elecciones.

58 El 7 de junio de 1971, el grupúsculo de extrema izquierda Vanguardia Organizada del Pueblo (VOP) asesina al ex ministro del Interior de Eduardo Frei, responsable de la masacre de Puerto Montt en 1969. Las circunstancias de esta acción aún se mantienen poco claras y tras la cual la VOP desaparece de la escena política.

59 Cf. capítulos VI y VII de Verónica Valdivia Ortiz de Zárate, Nacionales y gremialistas: el «parto» de la nueva derecha política chilena, op. cit.

60 El Mercurio, Santiago, 7 de junio de 1971.

61 Eugenia Palieraki insiste que esta manifestación no puede ser reducida sólo a las mujeres de los barrios altos y a sus empleadas, ya que también participan mujeres de los barrios periféricos de Santiago, lo que probaría una cierta desconexión entre esos sectores populares y el gobierno (Palieraki, Eugenia, Manifestations de rues à Santiago durant l'Unité Populaire, mémoire de maîtrise d'histoire, Paris I, 2001). Cf. también: Power, Margaret, La mujer de derecha: el poder femenino y la lucha contra Salvador Allende, op. cit.

62 Mattelart, Armand, «La bourgeoisie à l'école de Lénine», Politique aujourd'hui, Paris, enero-febrero 1974, pp. 23-46.

63 Ver la primera parte del trabajo de tesis de Camilo Trumper sobre este tema: A ganar la calle. The politics of public space and public art in Santiago Chile (1970-1973), Ph. D. of philosophy in history, Berkeley, University of California, 2008.

64 Ver la declaración política del PC del 9 de junio de 1971, en la revista teórica Principios.

65 Corvalán M., Luis, Los partidos y el golpe, op. cit., p. 93.

66 Ibid., p. 126.

67 Leiva, Sebastián, Neghme, Farah, La política del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) durante la Unidad Popular…, op. cit., pp. 54-76.

68 Entrevista realizada en Santiago, 6 de agosto de 2003.

69 El Rebelde, 17 de noviembre de 1972.

70 Comisión Nacional Sindical del MIR (compañero Víctor), Octubre. Comités coordinadores y poder dual, Santiago, noviembre de 1972 (Documentos internos 2A - 1973).

71 La realidad social de Chile, op. cit.

72 Rodríguez, Felipe, Crítica de la Unidad Popular, Barcelona, Fontamara, 1975, p. 213.

73 La realidad social de Chile, op. cit., pp. 14-17.

74 Vega, Héctor, L'économie du populisme, op. cit., p. 393.

75 Entrevista realizada en Santiago, 28 de noviembre de 2001.

76 Ibid.

77 Un ejemplo simbólico es el del Nescafé, producto apreciado por parte de la población y cuya escasez es ampliamente aprovechada por la oposición.

78 Ver el relato de Pío García en Chile Hoy, nº3, 30 de junio al 6 de julio de 1972.

79 Entrevista realizada en Santiago, 28 de noviembre de 2001.

80 La realidad social de Chile, op., cit., p. 21.

81 Pastrana, Ernesto, Threlfall, Mónica, Pan, techo y poder: el movimiento de pobladores en Chile (1970-1973), Buenos Aires, SIAP-Planteos, 1974.

82 Para la constitución de una JAP, debían estar presentes un representante del Estado, y al menos 100 personas de cada unidad vecinal. En caso contrario, la JAP se constituía provisoriamente hasta una segunda reunión, en la que el número mínimo de participantes era de 50 personas.

83 El Siglo, 6 de marzo de 1972 y Las Noticias de Última Hora, 19 de enero de 1973.

84 Melo C., Leonardo, Las juntas de abastecimiento y precios: historia y memoria de una experiencia de participación popular Chile 1970-1973, Tesis para optar al grado de Licenciado en Historia, Universidad Academia de Humanismo Cristiano, 2012, p. 42.

85 Calendario del Área Social, op. cit., p. 6.

86 Chile Hoy, nº3, 30 de junio al 6 de julio de 1972.

87 El Siglo, 6 de marzo de 1972.

88 El Mercurio, Santiago, 5 de julio de 1972 y Chile Hoy, nº3, 30 de junio al 6 de julio de 1972.

89 Castillo, Fernando, Echeverría, Rafael, Larraín, Jorge, «Las masas, el Estado y el problema del poder en Chile», op. cit., p. 17.

90 Entrevista realizada en Santiago, 28 de noviembre de 2001.

91 Las Noticias de Última Hora, 1 de agosto de 1972.

92 Revisar el diario El Detallista es muy ilustrativo a este respecto.

93 La Segunda, 15 de marzo de 1972

94 La Segunda, 20 de abril de 1972.

95 Power, Margaret, La mujer de derecha…, op. cit., p. 217-220.

96 Las Noticias de Última Hora, 1 de agosto de 1972.

97 Pastrana, Ernesto, Threlfall, Mónica, Pan, techo y poder… op. cit.

98 Entrevista realizada en Santiago, 28 de noviembre de 2001.

99 Entrevista realizada en Santiago, 13 de marzo de 2001.

100 Ibid.

Capítulo 5

Tensiones políticas y radicalización del movimiento obrero

Tensiones en el seno del Área de Propiedad Social (APS)

División de la izquierda y difícil puesta en marcha de la participación

de los trabajadores

El Área de Propiedad Social entra rápidamente en conflicto con los estrechos límites de la estrategia de la Unidad Popular[1].

En el corazón de este lento agotamiento se encuentran las deficiencias de la política económica del gobierno –a mediano plazo– y la agudización de las diferencias entre los dos polos de la izquierda chilena. El polo «rupturista» que reitera sus llamados a ampliar el APS y a las intervenciones económicas del gobierno; el gran capital privado es denunciado como el enemigo central y las consignas de control obrero estallan desde las bases críticas del PS, MAPU y cristianos de izquierda; y fuera de la UP, desde el MIR y otras pequeñas organizaciones. El polo «gradualista», por su parte, subraya nuevamente el necesario realismo político que se debe tener así como el peligro de acelerar el proceso generando más «enemigos de clase» y desestabilización[2].

Según el sociólogo Tomás Moulian,

El drama consistía en que ni una ni otra tuvo consciencia de sus dificultades efectivas y el proceso total fue vivido entre medio de una doble retórica. Por un

lado, estaba la retórica de los «moderados» que se hacían la ilusión (con Allende y el PC a la cabeza) de la posibilidad de controlar sin costos, la dinámica desplegada. Por el otro, estaba la retórica de los maximalistas que creían que se podía, con muy pequeños costos, realizar el slogan de «avanzar sin transar»[3].

Desde fines de 1971, el APS es presa de las dificultades financieras y productivas que amplifican un sentimiento de frustración por parte de los trabajadores comprometidos en cuerpo y alma en la «batalla de la producción». El procedimiento clásico para la nacionalización de las empresas llamadas a formar parte del APS es igual al del otorgamiento de un préstamo por el Banco del Estado, es decir, éste contrae un acuerdo de pago con el antiguo propietario. El pago de esta deuda, sumado al financiamiento de las importaciones a las tasas de amortización del capital fijo se transforma, durante todo el período, en un peso que el gobierno no logra superar. De hecho, el Estado transfiere este endeudamiento a las empresas del APS y sus empleados. Al cabo de algunos meses, la deuda está fuera de todo control, los trabajadores del APS no pueden cubrir los costos de amortización, ni los de producción[4].

A estas dificultades, se agrega la inercia del aparato estatal y la dificultad de administrar «por arriba» fracciones tan vastas y diversificadas de la economía. Por otra parte, gran parte del dinero desembolsado por el Estado para indemnizar a los dueños de las fábricas expropiadas, se orienta progresivamente hacia el mercado financiero y las operaciones especulativas. Desde 1971, se aprecia una disminución importante (entre un 25% a 30%) de las inversiones privadas[5].

A esta coyuntura se agrega la fuerte baja del precio del cobre en el mercado mundial, el peso creciente de la injerencia imperialista en el país, la cancelación de las líneas de crédito internacionales y la dependencia tecnológica de Chile (en el sector de la electrónica, maquinaria, química…). Se mantiene así el déficit de la balanza de pagos. Los dirigentes de la UP están conscientes de estas dificultades en aumento e intentan rectificar la orientación de su política, al menos, la pone en discusión, aunque las diferencias de apreciación se mantienen[6].

Esta ausencia de consenso dentro de los principales partidos de izquierda es un factor decisivo. El PS, por ejemplo, reafirma «el Estado burgués en Chile no sirve para construir el socialismo y su destrucción es necesaria»[7].

Desde esta óptica, las posiciones reformistas del PC son, aunque de manera implícita, duramente criticadas. Al mismo tiempo, el gobierno sigue en discusiones interminables con la DC, delegándole esta tarea a su representante más «diestro», el ministro de Justicia, Manuel Sanhueza (miembro del Partido Radical)[8].

No es casualidad que el punto central de conflicto se sitúe en la amplitud y extensión del Área de Propiedad Social. La DC busca, por todos los medios, limitar el poder de intervención del gobierno como lo recuerda hoy Carlos Altamirano.

lo que yo pensaba entonces y lo que pienso hoy, 30 años después, es que jamás la DC iba a llegar a un acuerdo con el PC o con alguna fuerza en que estuviera el PC. La DC había nacido para oponerse a la expansión del comunismo en el mundo y hasta el día de hoy se niega a llegar a un pacto electoral siquiera que nos podría dar mayoría en el Congreso a nosotros. Con distintos argumentos la DC no acepta a los comunistas[9].

Es sin embargo, sobre este «diálogo de sordos» que la UP basa varias de sus esperanzas. Este intento de búsqueda de consensos a nivel institucional, entre la dirección de la UP y los democratacristianos, cuyo objetivo es encontrar un centro político estable, constituye un fracaso evidente hasta el golpe de Estado. En los hechos, la DC se convierte en el portavoz de la burguesía industrial y combate la extensión del APS que considera –con razón– una base posible para la profundización de las movilizaciones obreras. Paralelamente, el fracaso de las negociaciones acentúa los llamados a la ruptura por parte de organizaciones como el MIR y une, en la base, a los militantes que se encuentran más a la izquierda (los del PS, MAPU y de la IC con el MIR).

En lo relativo a la puesta en marcha de un sistema de participación, se puede observar su lentitud inicial[10].

La cantidad de trabajadores involucrados en el proceso de participación varía considerablemente según los sectores económicos: menos del 2% de los trabajadores de la pesca, la industria química o de la construcción, mientras que los sectores más implicados son la energía (20,8%, es decir, más de 40 mil empleados), minería (18,9%, más de 37 mil trabajadores) y textil (11%, 21 mil

empleados)[11].

Sin embargo, progresivamente y gracias a las movilizaciones obreras, este sector se va a expandir notablemente en algunos campos: así, en 1973, el Área social representa 30% de la fuerza de trabajo industrial (es decir, no menos de 140 mil personas), 95% del crédito bancario y 90% de la producción minera.

Uno de los símbolos en la lucha por la expropiación sigue siendo el caso de la fábrica Yarur (más de cuatro mil trabajadores). Peter Winn mostró cómo, no sólo bajo la presión de los asalariados, sino también de una parte del pueblo chileno, esta importante industria pudo ser requisada. Como lo recuerda Sergio Aguilar, militante obrero del MAPU, el movimiento sindical de Yarur en 1970 es todavía joven y bastante inexperimentado[12].

La ocupación y la huelga general son el punto culminante de un movimiento político, canalizado y polarizado al interior de la empresa, gracias especialmente a una nueva generación de militantes sindicalistas. Las elecciones sindicales que se realizan a fines de diciembre de 1970, confirman la presencia de un gran contingente de obreros simpatizantes de la izquierda: los candidatos de la UP obtienen 1.200 votos, contra 2.900 para la oposición, más cercana a las ideas de J. Yarur[13].

En sus asambleas, los trabajadores exigen la expropiación de la empresa sin compensación para sus antiguos propietarios, famosos por sus prácticas que alternaban el autoritarismo con el paternalismo[14].

Llamando a «liberar su fábrica», la ocupación es decidida el 25 de abril de 1971, no sin conflictos internos. Es la nueva generación de militantes obreros, especialmente del MAPU y PS, la que conduce este movimiento, en contra de la oposición pero también en contra de los militantes comunistas (entre los cuales, el dirigente sindical Jorge Lorca). Esta movilización a favor de la requisición de Yarur, se realiza sobre la base de un claro desbordamiento del gobierno y de las direcciones de los partidos de la izquierda. El 28 de abril de 1971, representa, aún hoy, en la memoria militante de Yarur «el día de la liberación». La especificidad y el carácter radical de esta movilización reside en el hecho de que se trata de una requisición cuya motivación fundamental no es económica sino política. Según Peter Winn, el conflicto por la estatización de Yarur simboliza, él sólo, la lucha por la «revolución desde abajo» (revolution from below) y el tenor del enfrentamiento en curso entre capital y trabajo. A partir de la intervención,

logran además poner en marcha formas de control obrero que superan con creces las normas de participación del gobierno, donde manda la asamblea general, donde los representantes de los trabajadores en los diferentes consejos son elegidos a través de una votación secreta, donde se decide reorientar las líneas de producción hacia productos baratos y formas de distribución directa adosadas a las JAP.

En solo cinco meses de gobierno de la UP, el movimiento de trabajadores de la industria Yarur había cumplido su agenda histórica y lo había superado para plantear cuestiones del poder trabajador que desafiaron al control de Amador Yarur sobre su propia fábrica[15].

Se puede encontrar una situación parecida de «desalienación obrera» en la conservera Perlak, en la comuna de Maipú. Se trata de una empresa mediana (160 obreros, más de la mitad siendo mujeres), pero con un lugar económico estratégico, ya que pertenece al restringido grupo de 260 empresas del país que tienen un capital superior a 14 millones de escudos (en 1969). Esta fábrica nace en 1958 de la fusión de dos industrias de conservas y su propiedad está mayormente en manos de capitales extranjeros. Las relaciones sociales internas están marcadas por el autoritarismo de la dirección y los bajos salarios. Los rencores, injusticias y vejaciones acumuladas, articulados con la politización de una fracción combativa de los trabajadores, permiten que Perlak se convierta en uno de los símbolos de lo que algunos periodistas llamaron en la época un proceso de «participación ampliada»[16].

A pocos meses de que la empresa pasara a manos de los trabajadores, una verdadera gestión obrera se instala progresivamente en esta empresa y, al mismo tiempo, se logra aumentar la producción de un 50%, en particular a través del trabajo voluntario y de las mejoras en maquinaria e infraestructura (con un casino nuevo, por ejemplo). Incluso la fábrica se hace popular por inventar nuevos productos alimenticios, nutritivos y baratos, en particular las sopas para niños «Caldos Witt».

Esta pequeña revolución a escala local es favorecida por las múltiples «tomas» previas a la intervención de junio de 1972, por la presencia de reconocidos dirigentes sindicales como Santos Romeo (secretario del sindicato profesional) y también por el nombramiento de un interventor socialista, Fernando Reveco.

Este joven funcionario de Dirinco de 24 años es abierto a la idea de construir una gestión bajo control de los trabajadores, con el apoyo sindical.

Las primeras medidas impulsadas por el interventor, quien desde un primer momento consideró la opinión trabajadora, son la formación del aparato administrativo de la empresa con participación obrera, y la nivelación de salarios y beneficios (bonos de vestuario, asignación familiar, etc.) de los trabajadores. «Con los sueldos que se les pagaban a los gerentes que se fueron, se nivelaron los salarios», así todos los trabajadores «tuvieron un aumento grueso, importante. La idea era ir siempre nivelando», afirma (hoy) Reveco. En esta misma lógica, dentro de la primera semana se decide que no exista más la división de empleados y obreros. En Perlak solo debían haber trabajadores[17].

Otro símbolo de esta dinámica de ruptura es la empresa Cristalerías de Chile, que en 1970 tiene 3 fábricas y 800 empleados. Un estudio monográfico muestra que es ilusorio querer ver aquí la encarnación de la «vanguardia obrera», ya que en este caso también se trata de un proceso de lenta politización que se ve acelerado en los años setenta y que se traduce en la llegada de un nuevo contingente de dirigentes sindicales, provenientes especialmente del PS (quienes participan en la creación de la Federación Sindical del Vidrio), como Ismael Ulloa O.[18].

La requisición de la empresa, aceptada por la UP, se produce en julio de 1972, después de una huelga. La participación es vivida de forma contradictoria por los empleados «cristaleros» y muchos de ellos se oponen al paso al APS, pero en términos económicos es un gran éxito, ya que la producción aumenta progresivamente durante todo el período[19].

Durante una visita a la empresa, en enero de 1973, Salvador Allende reconoce públicamente las dificultades del funcionamiento de los mecanismos de participación dentro de la empresa[20].

Aquí no existe una politización masiva de los asalariados, sino más bien «un instinto de clase y no una consciencia clara de lo que estaba pasando», donde se confunden intereses personales (conservar el empleo en un período agitado) y una adhesión relativa a un proyecto colectivo[21].

En otras fábricas textiles, el paso al APS y la implementación de los organismos

de participación encuentran más dificultades aun. En julio de 1972, 600 delegados de las 20 empresas del sector textil estatizado organizan una importante reunión en Santiago junto a los ministros Mireya Baltra y Carlos Matus, del Trabajo y de Economía, respectivamente. Este encuentro tiene como objetivo evaluar el progreso de la participación y sus conclusiones muestran un descontento real en contra del fenómeno burocrático[22].

Se solicita que los Consejos de Administración rindan cuentas, al menos cada dos meses, del funcionamiento de la empresa (prueba que no es el caso) y que la Asamblea de Trabajadores tenga poder para sancionar y revocar a los interventores designados por el Estado[23].

De hecho, la crítica al «cuoteo», es decir, el reparto de los cargos de dirección de los establecimientos expropiados siguiendo la lógica política clientelista, es recurrente. Tomás Inostroza recuerda que en la gran industria textil Paños Continental es nombrado interventor después que sus dos antecesores militantes fuesen denunciados y destituidos por los trabajadores de la empresa. Como el mismo lo reconoce, él también es acusado de ser un «dictador»[24] y la prensa de la época presenta su gestión como autoritaria. Esta acumulación de tensiones lleva incluso a la ocupación de la fábrica con el apoyo de Luis Peña, uno de los dirigentes del Cordón Industrial Macul. La acción se termina con varios heridos a bala cuando el presidente del sindicato dispara con su pistola sobre el grupo que pretende invadir la fábrica[25].

En su testimonio, Inostroza intenta demostrar que incidentes tan graves son provocados por «enemigos de la UP» dentro de la empresa; sin embargo el artículo citado del periódico militante La Aurora de Chile parece indicar lo contrario… Lúcidos, gobierno y partidos de la UP, tienen conciencia de los numerosos problemas de participación así como de las –a veces– difíciles relaciones entre las nuevas direcciones y los trabajadores. En algunos casos, la instalación del sistema de participación está en las antípodas de toda perspectiva de autogestión o control obrero y se acerca más bien a diversas formas de heterogestión, es decir, relaciones sociales y de trabajo que se desarrollan «en un encuadre jerárquico, autocrático, autoritario, contradictorio con todo concepto que se reclame de la democracia»[26].

Caricatura denunciando la actitud de algunos interventores


DIANEGATIVAS
INTERVENTOR DANDO LA BATALLA PRODUCCION

Fuente: Futuro, N°3, 24 de junio de 1973

En agosto de 1973, Luis Corvalán, secretario general del PC, reconoce públicamente que en el Área de Propiedad Social y Mixta «no se ve cambio real de las relaciones de producción: de 267 empresas, sólo 112 han constituido un Comité de Administración y en sólo 12 de ellas el mecanismo de participación funciona formalmente»[27].

La afirmación demuestra la profundidad del problema a pocas semanas del golpe de Estado. Allende tenía un ambicioso proyecto de «Sistema Nacional de Autogestión» (SNA) para enfrentar con decisión estos problemas: el SNA tenía que ser discutido en asambleas por los trabajadores del APS y estaba destinado a mejorar con más democracia directa el modelo de participación en el ámbito productivo, pero a falta de mayoría parlamentaria y luego por el advenimiento del golpe, éste jamás pudo ver la luz[28].

Estas dificultades merecerían, por lo demás, un estudio comparado a escala internacional con otros procesos históricos[29].

En efecto observamos este fenómeno en otras experiencias de participación de los trabajadores como en el Perú del general Velasco, por ejemplo[30].

Una mirada a través de las experiencias más recientes, como las de Argentina en tiempos del neoliberalismo, podría ser también muy fructífera[31].

La participación considerada desde el campo político

Juan Espinoza y Andrew Zimbalist han trabajado ampliamente el tema de la participación de los trabajadores durante la UP y han intentado medirla lo más objetivamente posible a través de una multitud de índices y estadísticas. Para ello, se apoyaron en una muestra de 35 establecimientos del APS escogidos al azar, cuyo funcionamiento desmenuzaron después de la implementación de la

participación[32].

Definieron varios factores esenciales que impactan la participación e influencia real de los trabajadores en el funcionamiento de las empresas. Su estudio prueba que una gran presencia de capital fijo en detrimento del capital variable y una fuerte mecanización de una unidad de producción, tienen un efecto negativo en el nivel de participación de los asalariados. Asimismo, el modo de administración de los interventores, también es un factor que influye favorable o negativamente en el nivel de participación: el PC –por ejemplo– pareciera que privilegia la designación de interventores de extracción obrera, a veces, escogidos en la empresa, como es el caso de uno de nuestros entrevistados, Neftalí Zúñiga[33]. Al contrario, el PS designa a jóvenes militantes estudiantes o diplomados, como Pablo Muñoz, con poca experiencia práctica, lo que inevitablemente genera una cierta distancia entre la base y la nueva administración[34].

Pero finalmente, este trabajo muestra de modo axiomático que es la orientación de los sindicatos, el apoyo de los partidos políticos y la ideología compartida dentro de las industrias la que determina, en gran parte, el nivel de participación y control real de los trabajadores sobre la empresa[35].

Peter Winn, por su parte, ha subrayado la enorme diversidad de posicionamientos ideológicos que existen dentro de las empresas, más allá incluso de las etiquetas partidarias. Su clasificación va desde el grupo de obreros fieles al patrón, los «apatronados» hasta el de los «revolucionarios» (definidos por Winn como los más radicales y favorables al cuestionamiento de la propiedad privada), pasando por los «populistas» (que sobre todo creen en el rol de un líder más que en la acción colectiva), los «comunitaristas» (que cifran sus esperanzas en el rol negociador del sindicato para obtener ventajas económicas) y los «reformistas radicales», que buscan combinar la negociación sindical con una presión social respetuosa de las normas legales[36].

Esta variedad de factores políticos dentro de los trabajadores explicaría también el aspecto multiforme del establecimiento del sistema de participación. Según Espinoza y Zimbalist, el mayor grado de participación popular habría sido impulsado por los militantes del «polo rupturista», es decir, por la izquierda del PS, MAPU, la Izquierda Cristiana y los militantes de la izquierda extraparlamentaria. Al contrario, organizaciones como la DC y el PC habrían contribuido a frenar la constitución de una movilización a favor de la

participación activa de los asalariados debido a una visión, que se opone a ésta (la DC), o favorable a una participación «bajo control» de los sindicatos y del gobierno (el PC). Sin embargo, las afinidades políticas de los trabajadores no pueden explicar por sí solas la complejidad del movimiento social urbano[37].

Más aun, el espectro político tradicional fue en gran parte, puesto «patas arriba» durante este período y las subjetividades o las culturas obreras se mostraron en varias oportunidades en desfase con las expectativas de los partidos o de los sindicatos acostumbrados a una cierta rutina en su relación con las bases. En otras palabras, el signo partidista de tal o cual trabajador y su lugar en el espectro del campo político no permiten definir de manera cierta cuál fue su posición en relación al sistema de participación de los trabajadores o su opción frente al gobierno de Allende.

Por lo demás, tener hoy una visión crítica del sistema de participación de los trabajadores bajo la Unidad Popular, no debe ser un impedimento para describir todo el potencial, creatividad y la profunda dinámica social que éste desencadenó. En las fábricas donde hay un nivel de participación relativamente alto, donde la actividad política y el sectarismo no vienen a cortocircuitar esta «revolución desde abajo», se producen importantes transformaciones en las formas y relaciones de trabajo, lo que tiene un impacto en varios aspectos, que van desde el mejoramiento de las condiciones inmediatas de los asalariados hasta el control obrero en la marcha de la empresa. Comienza a gestarse una nueva relación de los individuos con el trabajo basada en la cooperación y la participación. Zimbalist y Espinoza describen un mejoramiento evidente en términos de desarrollo humano y social reforzado gracias a un nuevo acceso a la formación, lectura y salud en varias fábricas.

Tomemos algunos ejemplos concretos. En la importante Compañía de Cervecerías Unidas (CCU), la instalación del sistema de participación provoca efectivamente cambios relevantes[38].

Es, al menos, lo que piensa Facundo Ríos, presidente del sindicato (13 años en esta fábrica), Luis Godoy (29 años como obrero) o Alfredo Neira, tesorero del sindicato (20 años en la fábrica). Este último recuerda el control social que reinaba antes: «Yo entré por el año 53. El trabajo era mucho más pesado, sonaba el pito y todo el que no llegaba a su hora tenía que quedarse afuera […] Además de eso se trabajaba con mayordomos por todos lados»[39].

Los empleados de la CCU logran, en el curso de los años que precedieron a la UP, conquistar varias mejoras significativas: atención dental, casino, visitas de asistentes sociales, cabañas de veraneo, etc. Según Luis Godoy, el principal aporte del paso al APS fue el avance en las condiciones de trabajo y remuneración. Facundo Ríos subraya que las conquistas se expresan también en términos de participación en la dirección de la fábrica:

Los Comités de Producción y de Fábricas canalizan todas las proposiciones que los compañeros hacen, y saben por qué están produciendo, por qué están embotellando y a dónde llegan y con qué precio a las poblaciones, y lo que cuesta conseguir la materia prima. Los compañeros están conscientes […] de la responsabilidad y de las dificultades de este proceso[40].

La entrevista oral permite aproximarse a la «geografía social» de cada empresa. Los testimonios aportan detalles de situaciones concretas, hacen posible esbozar el paisaje individual de una dinámica social, permitiendo confirmar que la efectividad de la participación, más allá de las fallas intrínsecas del proyecto inicial, depende también de la relación de fuerzas internas dentro de la empresa. En estos relatos se descubre una verdadera «epopeya» obrera, una batalla librada en condiciones adversas y bajo gran presión político-social. Estamos aquí en el corazón de lo que el sociólogo Tomás Moulian llama la transgresión microsocial del orden establecido o también la dimensión molecular del conflicto social[41].

Estas luchas cotidianas son, a su vez, producto y consecuencia –a nivel local– del enfrentamiento de clases global (tensiones confirmadas por el testimonio de Juan Alarcón, obrero-mecánico y sindicalista de la gran industria textil Sumar-Algodón, donde sólo el sindicato obrero cuenta con más de 1.500 afiliados)[42].

Una vez que la empresa es estatizada, los trabajadores se enfrentan a otras pruebas, como es mantener una disciplina de trabajo y la adhesión de la mayoría de los asalariados, técnicos incluidos.

Fachada de la empresa Sumar a un año de su estatización

ANUFACTURAS SUMAR S.

Fuente: suplemento revista Punto Final, N°168, 10 de octubre de 1972.

El sociólogo estadounidense Joël Stillerman explica este problema y la sensación de muchos militantes obreros de izquierda que sienten no haberlo logrado: «no estábamos preparados» le señalan[43].

Cita el relato de un obrero textil de la provincia de Concepción que critica a los nuevos empleados que traen «malos hábitos» y falta de saber hacer. Este tipo de problemas se produce a gran escala en todo el país. La UP tuvo que incorporar un «ejército de reserva» todavía poco formado y muchas veces marginalizado, para responder al aumento de la producción. El proyecto topa con la ausencia de «disciplina industrial» de esta nueva fuerza de trabajo, proceso de aprendizaje que duró, por ejemplo, más de un siglo en Inglaterra.

Sin embargo, las entrevistas destacan sobre todo una época de real aumento de la producción y participación que no provoca –en contrapartida– una baja en la productividad, lo que sólo es posible con la ayuda de los técnicos. Se trata de lograr neutralizar políticamente a estos sectores, la mayor parte del tiempo, no militantes o en la oposición, para mantenerlos en la fábrica una vez expropiada. Sergio Aguilar, militante del MAPU que trabaja en Yarur, rememora la importancia de dicho personal:

En Yarur, el sindicato de los empleados era un sindicato […] más bien de tecnócratas; y por esta razón, lo que les importaba principalmente era que esto volviera a funcionar! Es lo que nos permitió, más tarde, mantener la fábrica con las mismas personas de derecha, durante la Unidad Popular[44].

Sin embargo, en muchos casos, los directivos se muestran hostiles a la participación de los trabajadores para lo cual cuentan, a veces, con el apoyo financiero, de la oposición o de los antiguos propietarios[45].

Como una forma de paliar dicha hostilidad, se plantea la alternativa de poner a la cabeza de la fábrica a un interventor de izquierda pero muy a menudo, éste llega sin tener necesariamente los conocimientos requeridos. Miguel R., ex militante

del MIR, insiste en esta dimensión: «A menudo, nombraron por razones estrictamente políticas, a un interventor que no sabía estrictamente nada!»[46].

Y, en el caso en que el interventor es obrero, esto puede ser visto por algunos, como un privilegio inadmisible. Joël Stillerman cita así a un trabajador metalúrgico de Santiago, contrario a la UP, que declara: «el administrador de la fábrica era un obrero, y no había nadie que quería recibir órdenes de un simple obrero como uno»[47].

Neftalí Zúñiga hace parte de esos obreros (PC) que se convirtieron en interventores en una empresa textil de más de dos mil asalariados. Dice que tuvo la confianza de todos los trabajadores de Pollak por su eficacia en la gestión, que considera entonces como su principal «trabajo político»[48].

Pero ese buen funcionamiento «participativo» no fue la regla en todas las fábricas. Por ejemplo, Rodrigo[49], militante del MAPU y obrero de la industria electrónica IRT, señala:

El interventor era un profesional, suponíamos que era de izquierda, pero [sobre todo] un profesional […]. Pero un defecto de este concepto es que la gente no sintió la diferencia de una fase a la otra, ya que seguíamos trabajando con el mismo salario, los mismos horarios y comenzaron a darse cuenta que los que tenían una cierta importancia política podían levantarse e irse a una reunión. Ellos [los asalariados] empezaron entonces a mirar a la gente de izquierda con desconfianza[50].

Esta crítica a los «privilegios» y al modo en que son administradas desde la dirección de los partidos las industrias estatizadas es posible encontrarla en varios testimonios. La división política de la unidad de clase en el seno de la empresa provoca permanentemente graves tensiones entre los trabajadores. Sin embargo, todos los militantes entrevistados insisten en la dinámica liberadora que pudo significar la participación. Y, si el sistema de participación no logra encarnar una transformación global de las relaciones de producción, es de todos modos, un ejemplo formidable para miles de asalariados y sus familias. Indirectamente, la bandera de la participación y la real posibilidad de mejorar las condiciones de vida, se encuentran en la base de una dinámica de lucha mucho más amplia que la sola cogestión propuesta por la Unidad Popular a ciertos

agentes sociales.

Una estructura de oportunidad política favorable a las movilizaciones colectivas de los trabajadores

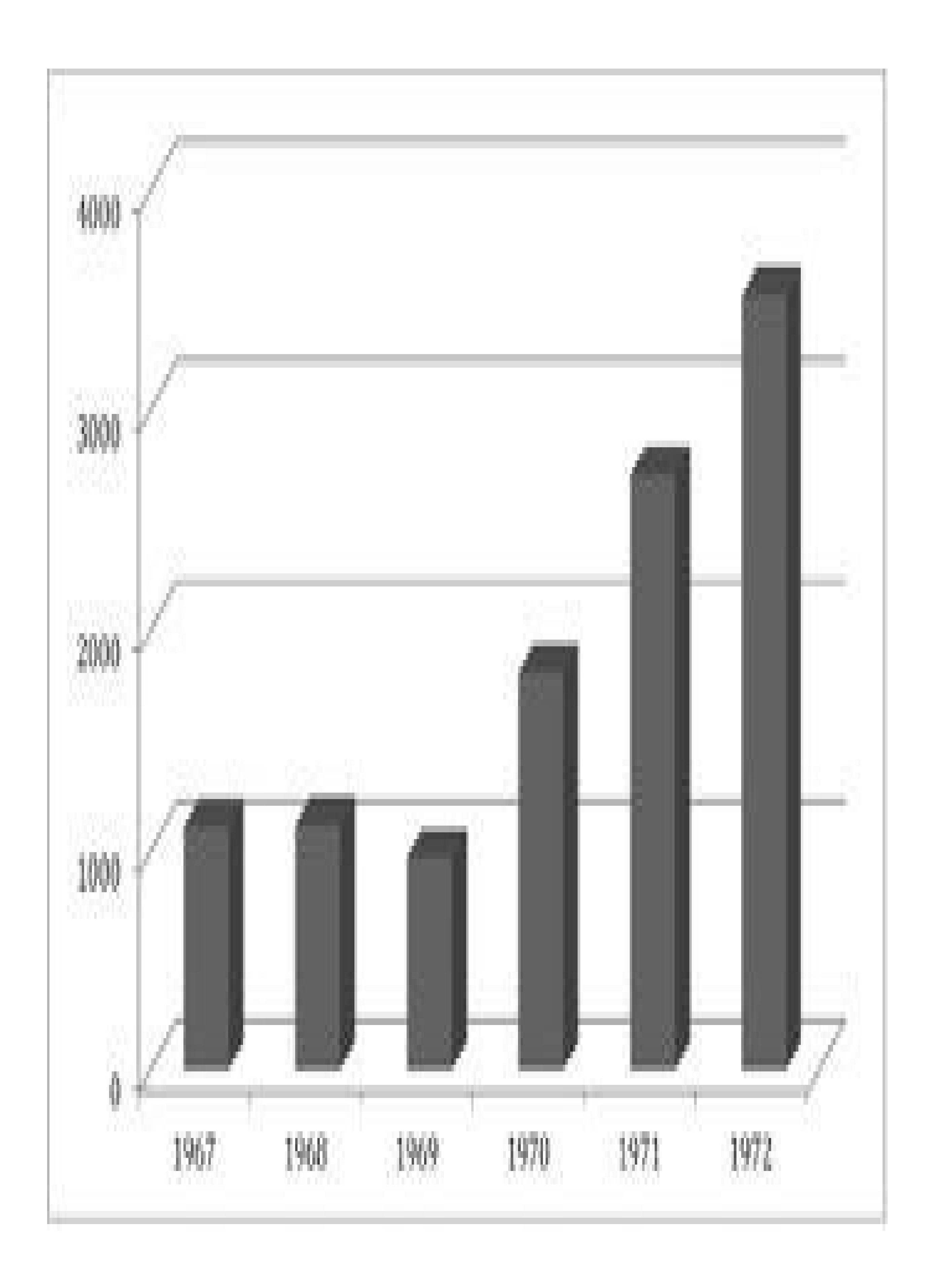
El análisis estadístico de los conflictos laborales y huelgas revela que los trabajadores aprovechan las nuevas condiciones sociopolíticas y la llegada de Allende al gobierno, para intensificar sus movilizaciones colectivas[51].

Frente a esta constatación, un análisis en términos de estructura de oportunidad política como ha sido desarrollado particularmente por Doug McAdam, Charles Tilly y Sidney Tarrow es una aproximación interesante[52].

Encontramos los diversos ingredientes propuestos por esta grilla de lectura: grado de apertura del sistema político; división de las élites; presencia de aliados importantes, especialmente dentro de las instituciones que apoyan las movilizaciones; capacidad del Estado para el control social y su propensión a la represión. En el caso que nos ocupa aquí, el movimiento obrero parece aprovechar el viento a favor que representa el gobierno de izquierda para acentuar sus movilizaciones: los agentes sociales entienden que hay una baja significativa de los «costos de la contestación» y se movilizan entonces para instalar sus reivindicaciones. La drástica reducción del nivel de represión ejercida por el ejecutivo, la existencia de importantes aliados que están a favor de la radicalización dentro del sistema partidario (incluso dentro del gobierno), la división de las clases dominantes y de la derecha, los llamados oficiales a la construcción del socialismo, etc., constituyen elementos para una entrada «política» que debe ser, a nuestro juicio, combinada con una lectura más «económica», en términos de desarrollo de las fuerzas productivas chilenas al alba de los años setenta, factor esencial para tomar en cuenta ese famoso «en sí» de la lucha de clases.

Destaquemos, en primer lugar, que se produce un aumento considerable en la cantidad de huelgas, pasando de 977 en 1969 a 3.526 en 1972.

Cuadro nº 3. Aceleración de movilizaciones colectivas obreras entre 1967 y 1972


4000
3000
2000
1000
0
1967
1968
1969
1970
1971
1972

Fuente: elaboración propia a partir de estadísticas de Marini, Ruy Mauro, El reformismo y la contrarrevolución, op. cit., pp.152-185

Se asiste evidentemente a un mecanismo clásico de difusión (entendido por Tilly y Tarrow, como la «propagación de un sitio a otro de una representación conflictual, de un tema en disputa o de una interpretación») dentro de una secuencia conflictiva más amplia. Impulsados por el torbellino del movimiento social, los trabajadores de la pequeña y mediana industria (tradicionalmente sometidos al patronazgo más conservador y con poca influencia política) se lanzan a la agitación y la huelga. Otro dato relevante es el uso masivo de la huelga ilegal. Esta estadística muestra el total desborde de la legislación vigente, pero también indica que el proyecto de transición «legalista» de la UP entra en fricción con la actividad real del movimiento social urbano: solamente 3,4% de las huelgas son legales durante el primer semestre de 1972. Entre el primer semestre de 1971 y de 1972, en el seno de los tres sectores claves de la economía (minería, industria y construcción) se produce un aumento de la cantidad total de huelgas así como de la proporción de las ilegales[53].

Se sabe que después de las nacionalizaciones, el sector minero frena inicialmente sus demandas, para luego, frente al deterioro de los salarios, inclinarse hacia una postura más reivindicativa, lo que abre un terreno a la penetración ideológica por parte de la Democracia Cristiana, siendo la gran huelga del El Teniente (entre abril y mayo de 1973) el símbolo de esta desconexión entre una parte de los trabajadores de la minería y el gobierno popular[54].

Por otra parte, el sector de la construcción es una rama económica que tiene una tasa de sindicalización muy baja y donde la cesantía es frecuente, pero también es un sector del movimiento obrero con una larga tradición anarcosindicalista. Este conjunto de datos explica la radicalidad de las luchas de los obreros de la construcción[55], y especialmente los intentos de coordinación con los cordones industriales después de la gran huelga de octubre de 1972. Finalmente, en lo relativo a la industria (sector que proporcionalmente emplea la mayor cantidad de asalariados), podemos constatar que las movilizaciones colectivas se desarrollan principalmente en las pequeñas y medianas empresas para extenderse a continuación, hacia los grandes conjuntos del sector privado. Los trabajadores

integrados al APS responden mejor a la consigna de la «batalla de la producción» ya que perciben su interés inmediato y además están más encuadrados por la CUT. Esta tendencia general es reforzada por el aumento global de la tasa de sindicalización, a su vez favorecida por la política legislativa del gobierno: aumento de 3,4% en 1971 y de 18,8% durante el primer semestre de 1972[56].

En resumen, la coyuntura económica positiva y sobre todo el nuevo contexto político y social del país generan una nueva relación de fuerzas entre capital y trabajo, la que es utilizada por los asalariados para levantar numerosas reivindicaciones salariales y económicas. La revisión de los archivos del Departamento de Negociaciones Colectivas del Ministerio de Economía (Dirección del Trabajo) muestra hasta qué punto el gobierno estuvo sometido a una formidable presión social[57].

Juan Alarcón, militante comunista y dirigente sindical de la importante fábrica textil Sumar-Algodón, recuerda con amargura:

[…] los dirigentes del partido tuvimos muchas veces que enfrentar a la gente, nos «quemamos». Es que en el gobierno de la UP los trabajadores entendieron mal el proceso, en algún sentido […]. Los compañeros querían obtener todo, en ese lapso de tiempo muy difícil para el gobierno popular [...]. [Y agrega,] … eso ya no vale la pena decirlo, pero en los períodos difíciles ya en el gobierno popular, nosotros fuimos perdiendo dirigentes. Nuestras fuerzas fueron disminuyendo…[58]

Según Alarcón, esta pérdida de influencia es aprovechada por los militantes más a la izquierda (a quien llama los «populachos»). En 1972, el sociólogo Manuel Castells se pregunta entonces:

¿Cómo reprochar a la clase obrera su desbordamiento reivindicativo, cuando los interventores del área social y funcionarios ganan 10, 20 veces más, cuando su nivel de vida sigue siendo bajísimo, cuando las ganancias capitalistas aumentan y la especulación se desarrolló, cuando se pagan cuantiosas indemnizaciones a las empresas expropiadas y se mantiene un costoso aparato burocrático […][59]?

En ese contexto, la forma que toma una parte de las movilizaciones colectivas obreras sufre un salto cualitativo orientándose hacia la «toma», es decir la ocupación de las empresas, incluso si esto representa en la mayor parte de los casos, un control transitorio, de algunas horas o días, a la espera de la intervención del gobierno. En 1969, hubo 24 ocupaciones de fábricas; en 1970, 137; en 1971, 378 y 299 durante los cinco primeros meses de 1972[60].

Durante la huelga de octubre de 1972, este repertorio de la acción colectiva de los trabajadores se generaliza[61].

Primero, la ocupación se lleva a cabo para oponerse a prácticas patronales como la no respuesta a los petitorios sindicales, el boicot económico o el lock out. Luego, representa un acto político de algunos militantes obreros que consideran la toma como un apoyo al gobierno o para acelerar la ampliación del APS. Estas dos formas pueden también combinarse: militantes de izquierda impulsan demandas reivindicativas –a veces deliberadamente exageradas– frente a una clase patronal reticente, con el objeto de movilizar a los trabajadores y ganarlos a la idea de la ocupación de la fábrica.

El testimonio de Luciano demuestra que esta agitación se realiza incluso a contrapelo de la opinión mayoritaria de los trabajadores[62].

Se trata de luchas ilegales según el Código del Trabajo y, a menudo, son recibidas reticentemente por los cuadros sindicales. Además, después de una toma de fábrica, la relación de fuerzas políticas dentro de la empresa no siempre va en el sentido de una radicalización política. Tomemos por ejemplo, el caso de la industria de zapatos Bata, localizada en Peñaflor. Esta fábrica es uno de los bastiones del MIR gracias a su Frente de Trabajadores Revolucionarios (FTR) que logra tomar la dirección del sindicato obrero. En septiembre de 1972, el presidente del sindicato mirista desarrolla una importante agitación en la fábrica, que lleva a su ocupación durante un mes e incluso, durante algunos días, a tomar como rehenes al personal ejecutivo de la empresa. Los trabajadores finalmente salen victoriosos. Sin embargo, si se le cree al relato que hace El Mercurio, los dirigentes sindicales del MIR se ven debilitados[63].

Por una parte, debido a que la justicia rápidamente los acusa de atentar en contra de la propiedad privada y toma de rehenes (el presidente del sindicato y el abogado de la organización fueron detenidos y luego liberados bajo fianza), y por la otra, pareciera que este conflicto en lugar de permitir acumular fuerzas

hace perder terreno al FTR. Este debilitamiento lleva a que en febrero de 1973, el sector democratacristiano obtenga la mayoría absoluta en las elecciones sindicales y tres de los cinco miembros de la directiva (entre ellos al presidente) provengan de sus filas.

En la empresa Cecinas-Loewer, el triunfo electoral del «compañero presidente» fomenta el resurgimiento de problemas latentes desde hace varios años en esta fábrica de cecinas y embutidos: descontento por las condiciones de trabajo, atraso en el pago de remuneraciones, leyes sociales incumplidas… Entonces, los dos sindicatos (de obreros y empleados) organizan 24 horas de «brazos caídos», una suerte de huelga preventiva. Luego, y frente a la ausencia de respuesta por parte de la dirección, ambos sindicatos ocupan la fábrica. Esta acción deja en evidencia que se ha mantenido un nivel de producción artificialmente bajo. Los sindicatos exponen el problema al Ministerio del Trabajo sin éxito, lo que hace que uno de los dirigentes exprese: «No sirve de nada tener un retrato del Che Guevara si ustedes hacen lo mismo que los antiguos funcionarios y no comprenden el problema de los trabajadores»[64].

Después de una petición a Pedro Vuskovic, quien rechaza cualquier intervención directa, juzgada peligrosa por razones políticas, se llega a un acuerdo de compra de la empresa. El 28 de diciembre de 1970, comienza a ser gestionada por dos funcionarios y dos sindicalistas de la fábrica, a la espera de la realización de un consejo de dirección. Esta medida relanza la actividad de la industria, la que aumenta su producción diaria en un 35% (de 6 a 9 toneladas) y permite además la reducción de los precios de fiambres y cecinas elaborados.

Esta ocupación data del año 1970, multiplicándose las acciones de este tipo a continuación. La prensa y los testimonios de la época están llenos de historias de tomas de fábricas. Algunas se transformaron en simbólicas, como la de Fensa, gran empresa con 1.800 trabajadores ubicada en la comuna de Maipú, zona del futuro desarrollo del Cordón Industrial Cerrillos-Maipú.

Fensa, «definitivamente en manos de sus trabajadores»


Fensa
DEFINITIVAMENTE
DE SUS TRABAJADORES

Fuente: Izquierda cristiana, Nº 34, 10 de agosto de 1973

Es una dinámica que involucra progresivamente a varias centenas de industrias y explica de qué manera el programa inicial de constitución del APS fue rápidamente desbordado por la praxis del movimiento obrero. Originalmente limitado a 90 empresas (y así propuesto al Parlamento), el APS poco a poco, incluirá, bajo el impulso de esta formidable presión, un conjunto de varios centenares de industrias, cuya mayoría no había sido incluida en el programa inicial de la UP. Así, previo al 11 de septiembre, el Estado chileno es propietario o administrador de 420 empresas, entre las cuales 200 manufactureras no inscritas en el programa[65].

260 empresas del APS fueron entonces intervenidas o requisadas (aunque se trata, en su inmensa mayoría, de pequeñas y medianas empresas con menos de 300 empleados). Finalmente, la cantidad de entidades que pertenecen al APS o aquellas ocupadas por los trabajadores se modifica permanentemente, sufriendo avances y retrocesos a lo largo de los mil días y al vaivén de la marea agitada de la relación de fuerzas políticas y sociales. Es aquí donde se encuentra toda la riqueza de la experiencia chilena, bien lejos de un proceso lineal o mecánico.

Carlos Altamirano, secretario general del PS, recuerda las importantes polémicas que las «tomas» desataron en el seno de la dirección de la Unidad Popular. Afirma que se trata de un falso problema y marginal, por lo demás. Sin embargo, reconoce que

nuestros partidos se encontraban en gran medida sobrepasados. El que sorpresivamente hubiera trabajadores de una industria pequeña, modesta, que se tomaban la empresa no significaba que nosotros los alentáramos a hacerlo, sino que la atmósfera que había en ese momento llevaba a […] [que ocurrieran] situaciones de ese orden[66].

La misma Mireya Baltra acusa, en su testimonio, al PS de haber alentado lo que llama «desbordes». Según la dirigente comunista

operaban en la práctica lo que yo denomino los desbordes, o sea, la toma indiscriminada de pequeñas fábricas con viejas maquinarias y con altas deudas previsionales, tal fue el caso de la toma de la fábrica de salsa de tomates «Perlak», donde al empresario se le resolvían sus problemas. Insisto. No hay que generalizar sobre estos fenómenos, pero es de responsabilidad política, señalarlos[67].

La ministra Baltra durante el gobierno de Allende



Fuente: La Fiemc, N°9, noviembre de 1972.

Finalmente, en gran parte de los casos, la ocupación de las industrias se hace con la perspectiva de su incorporación al Área Social y a partir de la reivindicación del derecho a compartir las numerosas ventajas que esto representa en relación al sector privado. Cada toma es un momento colectivo intenso, de enfrentamientos y alegrías, de ruptura de la gris cotidianidad y del orden establecido. Los trabajadores que participan se sienten dueños del lugar, de su herramienta de trabajo y, de algún modo, de su destino. Acompañados por la imagen estereotipada del asalto al Palacio de Invierno, la ocupación de la fábrica es un momento clave en la vida de los militantes de izquierda. Es esta «gesta heroica» de la toma la que permanece en las memorias y corazones. Una experiencia que recuerda otros episodios similares del movimiento obrero internacional, como por ejemplo los que aparecen en las descripciones realizadas por Daniel Guérin y Simone Weil sobre el Frente Popular en junio de 1936 en Francia[68].

A menudo, la toma se desarrolla con el apoyo de activistas externos a la fábrica, algunos incluso no pertenecen a la clase obrera. Vienen a apoyar las rondas nocturnas, a montar guardia para identificar posibles grupos de choque de Patria y Libertad o represalias del patrón desplazado.

Los testimonios de Carlos Mujica y de Mario Olivares permiten apreciar toda la dimensión épica de estas movilizaciones. El primero es militante del MAPU en Alusa, empresa metalúrgica que emplea cerca de 300 trabajadores. Alusa hace parte de las fábricas consideradas «estratégicas» por el gobierno, por lo que los militantes de la UP se movilizan para permitir su rápido paso al APS. Mujica recuerda que la célula del MAPU llega incluso a inventar una historia para convencer a los trabajadores de la DC de aceptar la toma: los trabajadores de la gran industria vecina, Comandari, habrían amenazado con ocupar la fábrica si no lo hacían ellos mismos…[69]

Para su partido, esta mentira es una cuestión de táctica política para apoyar al gobierno popular «lo primero que hicimos, le quitamos las llaves al que estaba a cargo de la empresa esa noche». El dirigente de su célula, Arturo Martínez[70] saca una pistola para recuperarlas. Esta ocupación recibe el apoyo activo de los

trabajadores de las dos grandes empresas vecinas, ya estatizadas (Comandari y Lucchetti), que vienen a respaldar a sus compañeros: «… y ahí nace la toma. Pusimos la bandera, al otro día llegó la gerencia y no los dejamos entrar». Alusa es rápidamente «intervenida» por el Estado para ser nacionalizada. Según Mujica «al final éramos como una familia adentro y empezamos a trabajar». Mario Olivares, en Muebles Easton, rememora

La empresa en que yo trabajaba no estaba dentro de las empresas estratégicas que estaban dentro del programa que tenía de las 40 medidas de la UP, pero como habían fuerzas, como te digo más de izquierda por aquella época, pedíamos que había que profundizar el proceso y ampliarlo. Pero en conjunto con los compañeros del PC, del PS y estos grupos que habían, acordamos y la empresa finalmente se toma y conseguimos la expropiación de la Easton Chile (400 trabajadores), de parte del gobierno de Salvador Allende, el mismo año 71. Y la empresa es intervenida por el gobierno y pasa al control de los trabajadores. Después se decreta la intervención, después de la toma, que fue una toma que duró como un mes, muy combativa…[71]

Esta nueva subjetividad liberadora, la de la dignidad obrera y de una conciencia de clase reivindicada, parece inundar el país. Como lo resume Carlos Mujica:

Los trabajadores empezamos a crear esa fuerza que era el poder popular y a tomarnos las empresas, pero no para llenarse los bolsillos sino para hacerlas producir y dar a saber que los trabajadores también éramos capaces de manejar una empresa[72].

La CUT en la tormenta

El aumento exponencial de la agitación obrera y de la tasa de sindicalización, la multiplicación de las tomas de fábricas y el desarrollo de la lucha de clases no pueden dejar de impactar los cimientos de la central sindical, que es atravesada por tendencias contradictorias transformándose en un buen termómetro de la evolución del movimiento obrero.

La acción del Frente de Trabajadores Revolucionarios (FTR)

El inicio del trabajo sindical del MIR se localiza, a nivel de Santiago, principalmente en las pequeñas y medianas empresas del cinturón industrial de Macul y Santa Rosa. Paralelamente, el movimiento obtiene cierto éxito en la zona del carbón, en la provincia de Concepción, a pesar de que allí existe una fuerte presencia comunista. Hacia mediados de 1971, el MIR funda el Frente de Trabajadores Revolucionarios (FTR), concebido como un punto de convergencia de los obreros más radicalizados. El FTR no pretende crear sindicatos independientes sino más bien participar como tendencia sindical «roja» dentro de las estructuras nacionales existentes, a nivel local (sindicatos de empresa) y a nivel nacional (dirección de la CUT). El FTR se desarrolla en algunas grandes industrias de Santiago, como los monopolios textiles Hirmas, Yarur, Sumar y también más puntualmente en la mediana industria[73].

En la comuna de Maipú de Santiago, Javier Bertín y Guillermo Rodríguez recuerdan que existía una importante implantación en fábricas como Perlak y principalmente Fensa (con la presencia de una célula del FTR que agrupaba alrededor de 80 miembros). Definen a Perlak como la «base de funcionamiento» del MIR en la zona de Cerrillos y señalan también que en su calidad de militantes del MIR, a menudo duermen y comen en la fábrica, lo que termina por molestar a algunos trabajadores[74].

Desfile del FTR de la empresa Muebles Easton (con cartel sobre la CUT)

POR UNA CUT
QUE VAYA
CON NOSOTROS
Y DELANTE
DE NOSOTROS

CTR
E ISTON

Fuente: Archivos del CEDETIM-París (sin fecha)

¿Cuáles son las propuestas del FTR? Su programa saluda la victoria electoral de la UP y de Allende, aunque condena las «vacilaciones del gobierno» y específicamente su legalismo. Propone un plan de transición destinado a «luchar por conquistar todo el poder para los trabajadores, y restituir las riquezas a mano de todo el pueblo, como única forma de destruir el régimen capitalista y marchar resueltamente hacia la construcción del socialismo en nuestro país»[75], involucrando numerosas expropiaciones de empresas y una reforma agraria radical. El control obrero también es considerado como un elemento fundamental. Se pueden señalar varias contradicciones en dicho programa, el cual fue vigorosamente denostado por la dirección de la UP. Así, si el FTR llama en su «Declaración de principios» a una expropiación general sin indemnización de los grandes medios de producción, en su «Programa de lucha» se contenta con la definición de la economía en tres áreas, tal como lo propone la UP y como es parcialmente aceptado por la Democracia Cristiana. De este modo, el FTR se ubica, en varios aspectos, en el mismo terreno político que la UP. Pero, por otro lado, una de sus originalidades reside en una concepción propia del «poder popular» en tanto

constitución de organismos a nivel local y/o comunal que, bajo la conducción política de los trabajadores revolucionarios, agrupan a los diferentes sectores de explotados y dirigen las luchas del conjunto de los trabajadores inscribiéndolos en la lucha por la conquista del poder[76].

Este concepto se acerca al que utiliza el MIR para reivindicar los «Consejos Comunales de Trabajadores».

Buscando a todo precio crear un frente sindical «rojo» bajo su dirección, el MIR toma el riesgo de acentuar las diferenciaciones en el seno de la clase obrera y dentro de los mismos sindicatos existentes. Por lo demás, tal actitud seguramente frena el desarrollo de la organización e incluso la potencial cooperación con las otras tendencias revolucionarias de la izquierda (maoístas, trotskistas, izquierda del PS, etc.). Esta debilidad del FTR es reconocida abiertamente y el MIR la

explica por la ausencia de un programa sindical propio, aprovechando de hacer una autocrítica a la «confusión» ideológica que existe entre los militantes de base, que no distinguen los «objetivos de lucha» de las «formas de lucha»[77].

Javier Bertín lo reconoce hoy en el mismo sentido: «la concepción original era un frente amplio, pero terminó como el brazo sindical del MIR. No crecía mucho más allá porque no era un organismo social, sino un organismo político y por lo tanto se quedó como tal»[78].

Las tensiones dentro del aparato sindical

En febrero de 1971 se reúne la IX Conferencia nacional de la CUT, que convoca a delegados de todo el país. Sus resoluciones sirven para preparar el Congreso que tiene lugar el mismo año, a comienzos de diciembre. Esta conferencia es la ocasión de la CUT para reiterar su apoyo a la política de estatización impulsada por la UP y el llamado a la movilización de la clase obrera en torno a la «batalla de la producción». En sus reflexiones sobre las tareas a desarrollar, es significativo constatar que los delegados votan a favor de la creación de nuevas estructuras territoriales. Se propone la creación de «organismos coordinadores» con el objetivo de establecer lazos entre la CUT y la población local, organizada a través de las juntas de vecinos,

centros de madres, organizaciones juveniles, comités de pobladores y cualquier otro organismo que «se pueda crear en el futuro»[79].

Esta preocupación de los representantes sindicales indica una toma de conciencia dentro de la CUT de la falta de lazos orgánicos entre la dirección y la base.

Un año después del comienzo del gobierno de Allende, el congreso proclama la necesidad de cambiar las viejas estructuras de la CUT, evaluadas como obsoletas. Al comenzar, Luis Figueroa, presidente de la Central y dirigente comunista, intenta reafirmar la responsabilidad que les incumbiría a los trabajadores de defender la acción de la UP: «Los trabajadores son, sin ninguna duda, los principales responsables del éxito del gobierno popular y del proceso revolucionario» y agrega, «nosotros, los trabajadores, como es natural, hemos

elegido y apoyamos sin tapujos el programa de Unidad Popular»[80].

Con tales afirmaciones, se confirma la hegemonía de las organizaciones políticas ligadas al gobierno sobre el movimiento obrero. Frente a un apoyo sin reservas, nos podemos preguntar ¿qué lugar se le reconoce a uno de los componentes esenciales del movimiento trabajador: la Democracia Cristiana? Tanto el Partido Socialista como el Comunista no son capaces de darse cuenta que una gran parte de los trabajadores chilenos no se identifica automáticamente con el nuevo ejecutivo e incluso que algunos de ellos se encuentran en la oposición. Así lo reconoce hoy Pablo Muñoz, militante socialista que trabajaba en la CUT:

La CUT, a pesar de su fortaleza, a esa altura creo que tenía rasgos de burocratización y, desde luego, muy controlada por los partidos de la UP (principalmente el Comunista y también el Partido Socialista). En el momento, entonces, se requería una organización más ágil, territorial y que se hiciera cargo de los problemas en la calle…[81]

No obstante, es con una mayoría aplastante que se reafirman las orientaciones generales y los acuerdos establecidos con el nuevo gobierno.

El desarrollo y resultado de las elecciones del comité de dirección de la CUT es, sin embargo, representativo de la crisis que vive el movimiento sindical. Esta elección es producto de un acuerdo parcial entre la UP y la DC para mantener su funcionamiento a pesar de los enfrentamientos políticos internos. La DC critica duramente los mecanismos de elección que la desfavorecen: la izquierda aprueba entonces la elección directa y universal, a cambio del voto favorable de la DC para el proyecto de reconocimiento legal de la CUT, presentado por Allende (la Central a esta fecha aún no es reconocida legalmente!)[82].

Las elecciones se desarrollan el 30 y 31 de mayo de 1972 y gracias a un democrático sistema de representación proporcional, dan cabida y espacio a todas las listas que se presentan, por pequeñas que sean. La forma misma que toma la elección es simbólica del deseo de los militantes de una democratización de la Central. El conjunto de trabajadores involucrados es invitado a elegir a sus representantes de manera directa, con voto secreto y en el lugar de trabajo mediante una cédula única que contiene el total de las listas presentadas a nivel nacional y provincial. Juan Alarcón, dirigente sindical de Sumar y militante del

PC, declara en esa época: «esta elección es un ejemplo que se les da a los trabajadores de que son ellos los que determinan la política a seguir»[83].

Las principales tendencias políticas que aspiran a la dirección del movimiento obrero se enfrentan: los sindicalistas de la UP que buscan ratificar la política del gobierno; la DC intentando demostrar que la mayoría de los trabajadores no se identifica con Allende; y el FTR,[84] además de su oposición radical a la DC, ahonda en sus críticas en contra de la orientación reformista del gobierno. El potencial electoral es de casi un millón de votantes y ya para la preparación de las jornadas de votación, la CUT demuestra la magnitud de sus dificultades de funcionamiento puesto que paraliza casi completamente toda su actividad durante cuatro meses, siendo incapaz de mantener el seguimiento de los problemas de los sindicatos de base[85].

El resultado de esta elección permite sacar varias conclusiones[86].

Los votantes efectivos fueron un poco más de 560 mil trabajadores y la cantidad de dirigentes elegidos se fija en 55: es decir, casi la mitad de los electores no van a votar. Los periódicos, según su orientación, interpretan de manera muy diferente esta elección. Los de oposición como El Mercurio, o los críticos de izquierda como Punto Final, primero denuncian una elección manipulada por la UP para luego insistir sobre una baja de la influencia de los partidos de gobierno. Por su parte, los periódicos más gobiernistas como El Siglo, confirman la mantención de la mayoría absoluta a favor del PS y PC, con más del 57% de los votos (estos partidos eligen 16 y 18 representantes respectivamente, sobre un total de 55)[87].

En perspectiva, estos resultados permiten establecer ciertas líneas generales[88].

Primero, numerosos afiliados no sienten el «deber» de ir a votar, prueba de que la CUT no representa para ellos una cuestión esencial en ese momento preciso de la lucha social chilena. Luego, en relación con los resultados por tendencia: la DC es la tercera fuerza política en la CUT (obtuvo el cargo de primer vicepresidente) y refuerza su penetración al elegir 16 delegados, el mismo número obtenido por el PS. Además, gana las elecciones en Santiago donde conquista el codiciado puesto de secretario general provincial. Esto implica que la asimilación mecánica hecha por Luis Figueroa entre «trabajadores» y «gobierno popular» no es para nada evidente. Por lo demás, el PC pierde un porcentaje significativo de su representación.

Este avance de la DC ofrece una óptica de doble filo. Por una parte, demuestra la oposición de ciertos asalariados (sobre todo empleados y personal técnico) a la política del gobierno. Pero, al mismo tiempo, considerando la popularidad del programa de la UP dentro del movimiento obrero, este voto es la prueba de una reacción a las deficiencias de la política gubernamental, sin que pueda ser considerado automáticamente como una oposición al proyecto de transición al socialismo. La izquierda de la DC se identifica entonces como anticapitalista aunque desaprueba el estatismo de la UP: pareciera que esta crítica tuvo un eco real a pesar de la demagogia democratacristiana. El PS, por su parte, confirma su presencia en los sectores obreros y si se le suma el voto a favor del MAPU, se puede apreciar que las tendencias llamadas «rupturistas» de la UP están en una fase ascendente en la opinión de los trabajadores organizados. Sin embargo, lo que podría ser interpretado como una baja de la influencia de la línea moderada de la UP, no se traduce en una votación a favor de las posiciones más radicalizadas. El FTR obtiene un solo representante, no alcanza el 2% y se mantiene como una fuerza extremadamente minoritaria. En otros términos, a pesar de una cierta fuerza local [89]y de la importancia de su imagen mediática y simbólica nacional, el FTR no logra cuestionar la hegemonía de los partidos tradicionales dentro de la clase obrera. En ese sentido, es exagerado, como lo hacen algunos autores, hablar de una explosión de la presencia obrera del MIR, incluso aceptando que no debemos olvidar que la CUT no representa a numerosas pequeñas industrias donde el MIR sí tiene un eco político relativamente más elevado[90].

La línea político-sindical del MIR propuesta para estas elecciones es compartida en una plataforma común con la Izquierda Cristiana (IC) que tiene como consigna «Ocupar, expropiar, avanzar»[91]. Sin embargo, ésta no logra convocar masivamente el voto proletario. Es aún menos el caso de los maoístas y anarquistas, que obtienen 3.330 y 673 votos respectivamente…

Para concluir, la radicalización o el descontento obrero se traducen fundamentalmente en un refuerzo del PS y de la DC a costa del PC y de los sectores de la izquierda extraparlamentaria, aunque no por ello se deben olvidar dos datos relevantes: en primer lugar, la importancia de la abstención, ya que casi un 50% de los afiliados no fue a votar. Luego, la consolidación de un posicionamiento «ofensivo» de una fracción importante de trabajadores, a pesar de los llamados a la moderación por parte del gobierno. Pero, los intentos de reorganizar al movimiento obrero sobre bases externas a la UP (MIR, PCR, PSR, anarquistas, etc.) entran en conflicto con la coyuntura nacional. Los trabajadores

votan a favor del fortalecimiento de su unidad de clase y de un realismo político a corto plazo y, en ese sentido, esta elección refleja –de modo indirecto y deformado– la gran agitación en las bases que anuncia los primeros desbordes de la izquierda.

1 Samaniego, Augusto, «Los límites de la estrategia de la Unidad Popular y el Área de Propiedad Social», Contribuciones Científicas y Tecnológicas, nº 109, Santiago, Usach, agosto 1995, pp. 21-35.

2 La tipología gradualista/rupturista es la más usada por los investigadores.

3 Moulian, Tomás, Conversación…, op. cit., pp. 97-101.

4 El déficit programado como gasto total del presupuesto del Estado es de 25,5% en 1971, 23,6% en 1972 y 17,9% en 1973 (Vega, Héctor, La economía del populismo, op. cit., p. 399).

5 Sader, Eder, «Chili: la transition manquée». Critique de la économie politique, nº 16-17, París, abril-septiembre de 1974, p. 251.

6 Bitar, Sergio, Chile 1970-1973: asumir la historia para construir el futuro, Santiago, Pehuén, 1995.

7 El Mercurio, Santiago, 12 de marzo de 1972.

8 Corvalán M., Luis, Los partidos políticos…, op. cit., pp. 158-159.

9 Entrevista realizada en Santiago, 11 de marzo de 2002. Esta opinión es también confirmada por varios testigos privilegiados como Rafael Gumucio, dirigente del MAPU (Apuntes de medio siglo, Santiago, Chile América – Cesoc, 1994).

10 Ver las conclusiones de Espinoza y Zimbalist (Democracia económica, op. cit., p. 231).

11 Zapata, Francisco, «Las relaciones entre el movimiento obrero y el gobierno de Salvador Allende», Cuadernos del Centro de Estudios Sociológicos, nº 4, México, CES, 1974.

12 Entrevista realizada en Santiago, mayo de 2002.

13 Cifras obtenidas de El Clarín, Santiago, 22 de diciembre de 1970.

14 Ver: «La negra historia de los Yarur», Central Única, Santiago, julio-agosto de 1972.

15 Winn, Peter, Tejedores de la revolución, op. cit., p. 199. Ver también el testimonio de Sergio Aguilar (entrevista realizada en Santiago, mayo de 2002).

16 El presidente del sindicato de empleados, Santos Romeo identifica en la acumulación de injusticias y en el trato degradante de parte de la dirección, el origen de las movilizaciones de trabajadores de la empresa (carta de Santos Romeo publicada en Chile Hoy, nº 5, 14 al 20 de julio de 1972).

17 Henríquez G., Renzo, «Industria Perlak "dirigida y controlada por los Trabajadores". Desalienación obrera en los tiempos de la Unidad Popular, 1970-1973», Revista Izquierda, Nº 20, septiembre 2014, [http://www.revistas.usach.cl/ojs/index.php/izquierdas/article/view/1959]. Cf. también los testimonios de Guillermo Rodríguez y Javier Bertín (entrevista realizada en Santiago, 6 de agosto de 2003).

18 Ver Rojas, Jorge, Rodríguez, Cinthia, Fernández, Moisés, Cristaleros, recuerdos de un siglo. Los trabajadores de Cristalerías Chile, Santiago, Sindicato nº 2 y PET, 1998.

19 A fines de 1972, el sindicato de profesionales decide retirarse de la administración, luego de un conflicto con los sindicalistas obreros.

20 A esta fecha, aún no existen los Comités de participación por sección, ni el Consejo de Administración…

21 Rojas, Jorge, Rodríguez, Cinthia, Fernández, Moisés, Cristaleros, recuerdos de un siglo, op. cit.

22 Chile Hoy, 17 de julio de 1972 y Punto Final, suplemento al nº 168, 10 de octubre de 1972.

23 Encuentro de Trabajadores Textiles, Santiago, Quimantú, 1972.

24 Entrevista realizada en Santiago, 4 de julio de 2002.

25 La Aurora de Chile, 2 de agosto de 1973.

26 Cf. Iturraspe, Francisco, (coord.), Participación, cogestión y autogestión en América Latina, op. cit., t.I, Introducción.

27 Samaniego, Augusto, «Los límites de la estrategia de la Unidad Popular y el Área de Propiedad Social», op. cit.,

p. 35. Corvalán menciona en sus memorias, «debilidades serias en la participación, falta de control respecto a los interventores y de la burocracia estatal, casi nulo trabajo en los Comités de Vigilancia del Área Privada (gérmenes de control obrero, que hubieran permitido combatir el boicot patronal e imponer metas económicas del Gobierno Popular)» (El Gobierno de Salvador Allende, op. cit., p. 339).

28 Ver el estudio del militante trotskista Michel Raptis (1972): Quel socialisme au Chili? Étatisme ou autogestion. Dossier de la participation des travailleurs au processus révolutionnaire du pays, París, Éditions Anthropos, 1973.

29 Cf. Brown C., Jonathan, Workers' Control in Latin America, op. cit. y Azzellini, Dario (ed.), An Alternative Labour History: Worker Control and Workplace Democracy, London, Zed Books, 2015.

30 A pesar de las numerosas diferencias que los separan, el caso del Perú del general Velasco es igualmente significativo ya que se trata de una participación impulsada desde el aparato estatal (en este caso, además, gobierno militar). Meister, Albert, L'autogestion en uniforme: l'expérience péruvienne de gestion du sous-développement, Toulouse, Privat, 1981.

31 Quijoux, Maxime, Néolibéralisme et autogestion. L'expérience argentine, París, éditions de l'Iheal, col. «Travaux et mémoires», 2011.

32 Varias de estas empresas hacen parte del cinturón industrial de Santiago y más adelante participarán en la formación de los Cordones Industriales.

33 Entrevista realizada en Santiago, 29 de marzo de 2002.

34 Cf. testimonios de Pablo Muñoz, Interventor de la fábrica Lucchetti

(entrevista realizada en La Serena, 24 de junio de 2002) y de Hernán Ortega, Interventor de Fantuzzi (entrevista realizada en Iquique, 6 de noviembre de 2001).

35 Zimbalist, Andrew, «The dynamic of worker participation: an interpretative essay on the Chilean and others experiences». Administration and Society, nº 7, New York, mayo de 1975, pp. 43-54.

36 Winn, Peter, «Loosing the chains labor and the Chilean Revolutionary Process, 1970-1973», Latin American Perspectives, january 1976, vol. 3, p. 70-84.

37 Rojas F., Jorge, «Los trabajadores chilenos, desde la colonia hasta 1973», ICAL, Santiago, 28 de diciembre de 2004.

38 La Aurora de Chile, 26 de julio de 1973.

39 Ibid. (el destacado es del original).

40 Ibid. (el destacado es del original).

41 Moulian, Tomás, Conversación…, op. cit., p. 86

42 Durante la UP, Textil Sumar emplea en su conjunto a 4.390 asalariados. Entrevista realizada en Santiago, 11 de junio de 2002.

43 Stillerman, Joël, «No estábamos preparados: trabajadores chilenos recuerdan la Unidad Popular», Alameda, nº 1, Santiago, abril-junio de 1997, pp. 59-66.

44 Entrevista realizada en Santiago, 29 de mayo de 2002.

45 Así, Armando Cruces, presidente del sindicato industrial de una fábrica estatizada (Elecmetal) llama a los empleados a recuperar la fábrica, a través de la prensa militante (La Aurora de Chile, nº 16, 29 de marzo de 1973).

46 Entrevista realizada en Pessac (Francia), 25 de enero de 2001.

47 Stillerman, Joël, «No estábamos preparados…», op. cit.

48 Entrevista realizada en Santiago, 29 de marzo de 2002.

49 El entrevistado prefiere mantener el anonimato.

50 Entrevista realizada en Santiago, 17 de mayo de 2002.

51 Ver el análisis detallado de Marini, Ruy Mauro, El reformismo y la contrarrevolución, op. cit., pp. 152-185.

52 Recordemos que Tarrow y Tilly definen la estructura de oportunidad política como un «conjunto de características de un régimen o de sus instituciones que, en un momento dado, facilitan o al contrario dificultan, la acción colectiva de ciertos actores políticos» (Politiques du conflit, op. cit., p. 335).

53 Para el siguiente análisis, ver las consideraciones de Wallon, Alain, «Perspectives actuelles du mouvement ouvrier au Chili», Les Temps Modernes, Paris, junio de 1973, pp. 1997-1998.

54 Bitar, Sergio, Pizarro, Crisóstomo, La caída de Allende y la huelga de El Teniente, Santiago, Las Ediciones del Ornitorrinco, 1986.

55 Un análisis de prensa del periódico La Fiemc de la federación sindical del sector (Federación Industrial de Edificación, Madera y Materiales de Construcción) es muy ilustrativo sobre este tema.

56 Castells, Manuel, La lucha de clases…, op. cit., p. 215.

57 Ministerio de Economía, Dirección del Trabajo, Departamento de Negociaciones Colectivas, Minutas, 1972 (archivos del siglo XX, Santiago).

58 Entrevista realizada en Santiago, 11 de junio de 2002.

59 Castells, Manuel, La lucha de clases…, op. cit., p. 216

60 Cifras citadas por Cancino, Hugo, La problemática…, op. cit., p. 219.

61 En lo que se refiere a la noción de repertorio de acción colectiva, consultar el capítulo doce de la Cuarta parte en este mismo libro.

62 Entrevista realizada en Santiago, 13 de marzo de 2002.

63 El Mercurio, Santiago, 2 de enero de 1973.

64 El Compañero, nº 9, diciembre de 1970.

65 Espinoza, Juan G., Zimbalist, Andrew, Democracia económica, op. cit., p. 67-70.

66 Entrevista realizada en Santiago, 11 de marzo de 2002.

67 Entrevista realizada en Santiago, 22 de febrero de 2003. Ver también el testimonio del cuadro del PC Patricio Palma, que va en el mismo sentido: «si no tenemos el control de la banca, si no tenemos mecanismos de crédito disponibles, si no hemos logrado aún la nacionalización de las empresas telefónicas o de la electricidad, ¿debemos darle prioridad a Perlak o a Aluminos el Mono? ¿No será que el beneficio para el proceso revolucionario es muy poco o es muy negativo si es que el gobierno prioriza aquello que no estaba en su programa?» (Entrevista realizada en Santiago, 22 de noviembre de 2001).

68 Guérin, Daniel, Front Populaire, révolution manquée?, París, Julliard, 1963 y Weil, Simone, Écrits historiques et politiques. L'expérience ouvrière et l'adieu à la révolution (juillet 1934 – juin 1937), Œuvres complètes, t.II, París, Galllimard, 1991.

69 Entrevista realizada en Santiago, 14 de mayo de 2002.

70 Martínez, durante los años de transición democrática, desarrolla una larga carrera sindical (incorporado al PS). Después de haber sido el presidente nacional de la «nueva» CUT de 2002 a 2012, fue electo secretario general durante el año 2013.

71 Entrevista realizada en Santiago, 1 de mayo de 2002.

72 Entrevista realizada en Santiago, 14 de mayo de 2002.

73 FTR/MIR, «Concepción, organización, funcionamiento y desarrollo orgánico del Frente», Santiago, junio 1972. En: Farías, Víctor, La izquierda chilena…, op. cit., t.V, pp. 2611-2621.

74 Según estos dos militantes, es en Fensa donde el FTR tiene su mayor desarrollo. Paralelamente, en Perlak, el MIR logra controlar la presidencia del sindicato de empleados y del sindicato industrial, gracias a la elección de Mario Ramos y Santos Romeo. Entrevista realizada en Santiago, 6 de agosto de 2003.

75 FTR, «Programa. Documento confidencial de discusión interna», Santiago, diciembre 1971. En: Farías, Víctor, La izquierda chilena…, op. cit., t.III, pp. 1510-1521.

76 «Declaración de principios y programa del FTR», Resoluciones del Congreso Nacional FTR in Poder Obrero, N°9, 1-15 de marzo de 1972

77 FTR/MIR, «Concepción, organización, funcionamiento y desarrollo orgánico del Frente», op. cit.

78 Entrevista con Javier Bertín, en 1996. En: Silva, Miguel, Los Cordones Industriales y el socialismo desde abajo, Santiago, s/e, 1999, p. 155.

79 CUT, «Resoluciones de la novena Conferencia nacional», Santiago, CUT, junio de 1971.

80 CUT, Memoria del consejo directivo al VI Congreso nacional, Santiago, 8 al 12 de diciembre de 1971.

81 Entrevista realizada en La Serena, 24 de junio de 2002.

82 Samaniego, Augusto, «Les stratégies syndicales de la Centrale Unique des Travailleurs» et l'action sociopolitique des salariés (1953-1973), Tesis de doctorado en sociología, Université Paris VIII, 1998, p. 464.

83 Central Única, nº 9, junio-julio 1972. Juan Alarcón hace parte de las personas entrevistadas durante nuestra investigación oral (Santiago, 11 de junio de 2002).

84 El FTR cuenta con el prestigioso apoyo del ex presidente de la CUT, Clotario Blest y presenta a sus dirigentes más conocidos, como Gladys Días y Luis Vitale.

85 Samaniego, Augusto, Les stratégies syndicales de la «Centrale Unique des Travailleurs», op. cit., p. 465.

86 CUT, «Resultados oficiales sobre la elección de la CUT», julio de 1972. En: Farías, Víctor, La izquierda chilena, op. cit., t.V, p. 2862-2868.

87 Chile Hoy, 22 de junio de 1972.

88 Zapata, Francisco, «Las relaciones entre el movimiento obrero y el gobierno de Salvador Allende», Cuadernos del Centro de Estudios Sociológicos, nº 4, México, CES, 1974.

89 Es el caso, por ejemplo, en la industria Schwager de extracción de carbón.

90 Alain Wallon describe un crecimiento obrero «vertiginoso» del MIR, «por fuera y por dentro del movimiento sindical» («Perspectives actuelles du mouvement ouvrier», op. cit., p. 1991).

91 FTR-IC, Unidad revolucionaria a la CUT: ocupar, expropiar, avanzar, Santiago, Lista I, Ed. Rebelde, 1972.

Capítulo 6

Los primeros signos de desbordamiento

¿Dos polos en el seno de la «vía chilena»? «Avanzar sin transar» versus «Consolidar para avanzar»

Sin duda alguna, la coyuntura de fines de 1971 e inicios de 1972 está marcada por la irrupción cada vez más fuerte de las movilizaciones colectivas en la escena política nacional. Desde ese punto de vista, diciembre de 1971 corresponde al término de un período de «violencia política popular en las grandes alamedas» (según Gabriel Salazar[1]) y al inicio de otro momento, caracterizado por la preponderancia de la ocupación de la calle por parte del movimiento social, tanto por los partidarios de la derecha como de la izquierda[2].

En esta misma fecha, el comité político de la UP convoca a dos reuniones cuyo objeto es hacer un balance y sobre todo intentar reafirmar sobre bases sanas una coalición que permanece dividida entre dos polos: uno, bajo la hegemonía del PC, otro, bajo la del PS[3].

La primera reunión se lleva a cabo en El Arrayán, a principios de febrero de 1972. Los temas giran en torno a la necesidad de mantener los avances obtenidos en relación con la redistribución de la riqueza y el refuerzo del APS sin que ello provoque el aumento de la inflación y evitando confrontar directamente a la pequeña y mediana burguesía, supuestamente aliadas del proceso. Con el objetivo de atraer nuevamente el favoritismo de las capas medias, los sectores más moderados del PS y PC, aunque reconociendo las grandes dificultades económicas del momento, reiteran su llamado a buscar, a cualquier precio, el diálogo con la Democracia Cristiana y, por lo tanto, a evitar la aceleración de las expropiaciones y ocupaciones fabriles. El objetivo declarado del PC es aumentar la productividad del APS y alcanzar, al mismo tiempo, una mejor participación de los trabajadores en la distribución de la riqueza nacional. A nivel de la dirección económica nacional, se pone el acento en la centralización y

planificación[4]. En el otro polo, el PS y Pedro Vuskovic insisten sobre la necesidad de que el Estado intensifique el control directo sobre la economía, que acelere las estatizaciones o expropiaciones de empresas y mantenga la presión sobre el gran capital[5].

Finalmente, los acuerdos de El Arrayán se ubican entre estas dos posiciones. Se decide aumentar sólo el precio de la producción proveniente del APS con el fin de disminuir las pérdidas que sufre dicho sector. A nivel de la participación, el estilo burocrático de la UP y la incapacidad de «incorporar a las masas populares» son abiertamente reconocidos y criticados[6].

Las diferencias políticas, acentuadas durante la reunión en El Arrayán, salen a la luz pública durante la segunda reunión del comité político de la UP, el 5 de junio de 1972, en Lo Curro. Resumiendo, se consolidan dos consignas que se volverán famosas. Una, la del PC y el ala moderada del PS (entre ellos Allende) y del MAPU, «consolidar para avanzar» se sostiene sobre la constatación de que a pesar de los importantes avances en la realización del programa de la UP, en la coyuntura de mediados de 1972, la correlación de fuerzas es desfavorable para el gobierno y la clase obrera. En consecuencia, el PC plantea la idea de una «consolidación» del proceso, es decir, un congelamiento de las conquistas sociales. Según esta óptica, se debe estar dispuestos a realizar concesiones a la oposición y a ciertas fracciones de las clases dominantes, especialmente a los dueños de las pequeñas y medianas empresas. De ahí la condena permanente a toda ocupación de fábrica no planificada por el gobierno. Es esta «NEP a la chilena[7]» (en palabras de Manuel Castells) la que se impone en junio de 1972 y desplaza a los adeptos del ministro de Economía, Pedro Vuskovic, quien debe dejar su cargo. Esta política implica, en primer lugar, un alza en los precios para restringir el aumento del consumo, lo que –en consecuencia– debería permitir controlar la inflación y los problemas de abastecimiento[8].

Paralelamente, el PC propone un reajuste salarial de 100% del alza del costo de la vida, pero éste beneficia automáticamente en mayor medida a los altos ingresos y fragiliza aún más a la tercera parte de la población activa que no es asalariada (subproletariado urbano y rural, trabajadores independientes). El objetivo explícito es restablecer una relación precios/salarios más «exacta» de acuerdo a los criterios del mercado y generar excedentes en las empresas.

La otra línea –desplazada– es la del «avanzar sin transar». Por cierto una consigna tan reduccionista como la anterior, como lo admiten hoy varios

militantes. Patricio Palma califica este debate como una de las «antinomias más falsas» que se hayan podido inventar en un proceso revolucionario[9].

Es también el análisis que realiza el sociólogo Tomás Moulian en varios de sus escritos. Sin embargo, tras este falso dualismo entre dos consignas claramente simplificadoras, se esconden diferencias reales en el ritmo y la concepción estratégica del proceso de transición al socialismo. Según los partidarios de una «aceleración», como el socialista Hernán Ortega, la consolidación en aquel momento podría dar aire a la oposición y por lo mismo, provocar un mayor distanciamiento con las fracciones de las clases populares más movilizadas y organizadas[10].

Como lo recuerda Pablo Muñoz, la idea de los militantes tras esta consigna, es también hacer bascular las capas medias hacia su lado desde «una posición de fuerza […] y no desde una posición de concesiones»[11].

Puesto que se constata que el 70% de la población chilena tiene acceso sólo al 26% del consumo total, Vuskovic plantea una rápida reorientación de los excedentes que se acumulan en manos de la población más rica mediante una reforma fiscal radical y la eliminación de los impuestos indirectos (excepto para los productos suntuarios). Igualmente, los partidarios de esta opción, sostienen que el reajuste salarial no debe aplicarse a los altos ingresos y reivindican el «control de los trabajadores» en las empresas estatizadas[12].

Esta táctica del PS entra en resonancia con el MIR y la izquierda extraparlamentaria, quienes señalan al proyecto de Allende como el de un «capitalismo de Estado» y llaman a la cancelación, pura y simple, de la deuda externa. Pero si los socialistas desaprueban explícitamente el «reformismo», también es cierto que su dirección se muestra bastante indecisa sobre las alternativas concretas que deben defender. Según Maurice Najman, observador comprometido, «no basta con decir que hay dos ‘concepciones’ del proceso, hay que caracterizarlas. No basta con apuntar al reformismo, su rol debe ser aclarado»[13].

Es precisamente a estas contradicciones a las que se deben enfrentar los militantes y clases populares organizadas, en su búsqueda de un «poder popular constituyente».

Así como lo sintetiza el historiador Julio Pinto:

Había, en suma, entre los partidarios chilenos de la revolución, bastante concordancia respecto a los fines últimos que se perseguían, y al tipo de sociedad que se aspiraba a construir. Ésta debía ser socialista, anti-imperialista (por tanto, genuinamente nacional), humanista e igualitaria. El capitalismo, por tanto, como orden imperante, debía ser derrotado y destruido, aboliendo así el individualismo, la explotación y la propiedad privada[14].

No obstante,

El debate de la izquierda, entonces, se caracterizó por hacer mucho más hincapié en los medios que en los fines, dando lugar a una serie de «ejes polémicos» que terminaron absorbiendo el grueso de sus energías y debates. […] El primero, y sin duda el más estudiado, de los ejes polémicos que separaron a gradualistas de rupturistas, y que hasta cierto punto da cuenta de esa misma denominación («gradualistas»/»rupturistas»), es el que tenía que ver con las «vías» para llegar desde el capitalismo al socialismo. Al hablar de vías, la discusión hacía también referencia al tema de los ritmos y los tiempos, íntimamente asociado al anterior[15].

A fines de agosto, casi la totalidad de los precios aumentan bruscamente, incluidos los productos de primera necesidad, medida que provoca desconcierto en los barrios populares, pero también violentas manifestaciones de estudiantes y comerciantes. Políticamente, se produce la crisis más grave desde la elección de Allende, mientras la derecha denuncia al gobierno como «hambreador del pueblo»[16].

Este clima abre la puerta a la multiplicación de los atentados, demostraciones de fuerza de la extrema derecha y crea las condiciones para la tentativa abortada de golpe de Estado el mes siguiente, conocido como «Plan septiembre». En un contexto más extendido, este tipo de crisis refleja el desbordamiento social en curso y aunque va en todas las direcciones, se expresa en un primer momento, especialmente en las poblaciones de Santiago, donde florecen ricas experiencias de poder popular local.

Pobladores y poder popular local: un verdadero laboratorio de experiencias

La izquierda y las movilizaciones de los «pobres de la ciudad»

Hemos visto que uno de los importantes componentes del movimiento social urbano es el de los pobladores, es decir, aquellos sectores con problemas de vivienda, un precario «derecho a la ciudad» y, en los casos más extremos, que se encuentran sin casa. Hemos podido apreciar la gran heterogeneidad del universo «pobladores», pero también su potencial movilizador en torno a problemáticas como la vivienda, transporte e incluso salud. Aquí también con la victoria de Allende, la estructura de oportunidad política parece favorable a las movilizaciones de los pobladores[17].

Durante y después de la elección de Salvador Allende, el aumento de las tomas de terrenos urbanos es espectacular (en 1969, 29 tomas; 1970, 352; 1971, 560)[18].

Determinar con exactitud el número de tomas en el periodo sigue siendo difícil por razones de fuentes. Según Boris Cofré, en 1973, 430 mil pobladores habrían participado en tomas de terrenos en la capital.

En Santiago, entre 1964 y 1973, se produjeron 402 tomas exitosas y de ellas 344 ocurrieron de forma explosiva entre 1970 y septiembre de 1973. Estas tomas dieron origen a un número indeterminado, pero similar, de campamentos, que producto de la construcción de viviendas definitivas y otros factores, llegaron a ser 388 en 1973[19].

Más allá de las cifras, sin duda, las formas del repertorio de las acciones colectivas de estos «pobres de la ciudad» se multiplican y las movilizaciones son masivas, tanto que Vicente Espinoza califica este período de la historia de los pobladores como la del «poder popular»[20].

Se observan también transformaciones importantes en diversos ámbitos, en salud

con la aparición de las «brigadas sanitarias»; en el de la educación, con el intento de modificar los programas escolares en algunos campamentos o poblaciones, o incluso con tentativas de implementar experiencias de educación autogestionada. En el campo de la justicia, surgen experiencias parciales de autoadministración y de «justicia comunitaria». De hecho, se trata de diferentes «frentes» de movilización social que se organizan en torno al acuciante problema de vivienda y que, poco a poco, amplían el marco de su intervención[21].

Según una encuesta realizada a fines de 1971 en varias poblaciones y campamentos, sus habitantes confían en una justicia comunitaria autogestionada para enfrentar diferentes problemas de disciplina y de control social (más del 50% es favorable). Se considera válida esta autogestión para temas como el alcohol dentro de la población, la violencia intrafamiliar, los padres que no envían a sus hijos a la escuela, el rechazo a cooperar en las tareas comunitarias. En estos casos –como lo veremos– son aplicadas sanciones por la colectividad de pobladores organizados, sin embargo, globalmente y a pesar de un discurso más radical y de una lógica de aparente ruptura, las acciones de los pobladores se mantienen casi siempre circunscritas dentro del modelo del «populismo urbano», es decir, en una relación de dependencia y de clientelismo con el Estado y los partidos institucionales[22].

Sociólogos realizaron una tipología de las diferentes «líneas» de acción del movimiento pobladores durante la Unidad Popular. Aíslan los diferentes comportamientos de lucha, los que serían el reflejo de las diversas formas de inserción de los partidos políticos en su seno[23], aunque el importante desarrollo de la actividad poblacional los obliga a operar cambios en sus relaciones con este sector del espacio del movimiento social urbano. Es particularmente el caso del PS y PC que son parte del gobierno, mientras las expectativas del movimiento poblacional sobrepasan, a veces, las posibilidades legales que éste puede ofrecer (como lo demuestran los límites del plan de construcción de viviendas de la UP)[24].

Estos dos partidos tienen una presencia real en este medio gracias a la Central Única de Pobladores y al Comando Nacional de Pobladores sin Casa[25].

Los pobladores se convierten en un actor central del conflicto político: si bien la DC sigue siendo el partido más hegemónico en el movimiento de pobladores, seguido del PC y del PS, fracciones de izquierda más radicalizadas buscan favorecer la auto-organización de este sector de la población. Es especialmente

el caso del MIR, que asienta sus esperanzas de transformar la sociedad en el sector más explosivo de la población, por ser el más dominado y precario[26].

El MIR es el principal promotor de la idea del poder popular en el marco del movimiento poblacional, a pesar de su posición minoritaria también en este sector. Se trata, de algún modo, de la búsqueda del ethos revolucionario de los más pobres, de una violencia elemental no «contaminada» por los partidos obreros tradicionales o los aparatos burocráticos sindicales[27].

En esta perspectiva, las tomas de terreno conducidas por el MIR comienzan a inicios de 1970 y se extienden hasta 1972.

Este trabajo militante debuta con el campamento «26 de enero» en Santiago, que nace de una toma de terrenos el 26 de enero de 1970. Es una ocupación de un nuevo estilo que surge en la periferia de la población La Bandera[28].

La novedad reside no tanto en el carácter masivo de la ocupación, sino más bien en su combatividad, su grado de organización y por la aparición de dirigentes como Víctor Toro (obrero del mercado central de Santiago y miembro del Comité Central del MIR)[29].

Como lo declara luego Edgardo Enríquez, miembro de la Comisión Política, esta toma de terrenos marca el afianzamiento de los lazos del MIR «con las masas urbanas pobres a través de formas de lucha de masas en tanto tales, aunque novedosas en su contenido y método»[30].

Según Enríquez, es el ejemplo de la «26 de enero» lo que le permite al Movimiento de Pobladores Revolucionarios (MPR, uno de los «frentes» de masas del MIR) organizar progresivamente a unas 20 mil personas en todo Santiago. Es también el tipo de acción que partidos tradicionales como el PC consideran una provocación originando los virulentos ataques en contra de las acciones del MIR. Este último impulsa una importante organización al interior de los campamentos: inmediatamente se implementan grupos de defensa –llamados «milicias populares»– que posteriormente se encargan de la disciplina interna y del respeto de un estricto reglamento redactado en acuerdo con los habitantes. De este modo, se favorece una dinámica de distanciamiento de las autoridades estatales[31].

Asimismo, se constata la conformación sistemática de varios frentes: defensa, salud, justicia interna y disciplina, educación y formación política, cultura, etc.[32].

Después de la toma del 26 de enero de 1970, el MIR multiplica sus proezas: campamentos «La Unión», «Ranquil», «26 de julio», «Elmo Catalán», «Magaly Honorato», «Rigoberto Zamora», «Luciano Cruz», «Fidel Ernesto», «Lo Hermida»…[33]

Estas tomas corresponden a un momento fundamental en el desarrollo de una conciencia colectiva en los pobladores. Se puede hablar de una transformación profunda en la vida cotidiana del poblador:

Este se ve confrontado sin ninguna transición, a un tipo de vida colectivo totalmente nuevo para él. Debe participar con una cierta cantidad de horas de trabajo colectivo, comer, él y su familia en torno a la olla común. Desde ahora, para una cierta cantidad de problemas, la solución ya no es individual sino colectiva[34].

Paralelamente, estos cambios provocan a veces el estallido del modelo rígido de la vida familiar, de las relaciones de género y los esquemas morales dominantes. Muchas mujeres participan en cursos de entrenamiento físico y de autodefensa, dejan a sus niños en una sala cuna autogestionada, adquieren una formación convirtiéndose en «milicianas» de la salud o parvularias. Sin embargo, más allá de una visión mitificada, la mayor parte del tiempo el peso de la dominación sigue siendo central dentro de los campamentos, incluso en los más politizados, especialmente en lo que se refiere al machismo y a las relaciones entre los sexos.

Entre las múltiples experiencias lideradas por el MIR, el campamento «Nueva Habana» es, sin duda, el símbolo de esos ensayos de poder popular constituyente poblacional.

La experiencia de «Nueva Habana»

El campamento «Nueva Habana» nace a inicios de noviembre de 1970, a partir de la relocalización de los campamentos «Ranquil», «Magaly Honorato» y «Elmo Catalán» sobre una extensión de tierra entre las avenidas Departamental y

Américo Vespucio. Uno de los mejores estudios, hasta ahora, sobre esta experiencia sigue siendo la tesis doctoral en sociología sobre las luchas urbanas de Christine Castelain, al cual se debe agregar el trabajo más reciente y sólidamente documentado del historiador Boris Cofré[35].

Esta toma se coronó victoriosa gracias a las intensas manifestaciones que impulsa, desde agosto de 1970, el Movimiento de Pobladores Revolucionarios (MPR) y a la hábil gestión del trigo que había sido sembrado en este territorio. El trigo es cosechado y luego vendido para, con estos fondos, financiar la construcción de viviendas sólidas, un pequeño policlínico, un casino popular y una sala cuna. En este campamento son albergadas entre 1.400 y 1.500 familias. El promedio de edad se sitúa entre los 20 y 30 años, el 28% de los jefes de familia son obreros y el mismo porcentaje corresponde a trabajadores de la construcción.

Tal como lo subraya Abraham Pérez (participante de la toma de «Nueva Habana» y obrero de la construcción), la originalidad de esta toma reside principalmente en que los pobladores exigen que las viviendas e infraestructura sean construidas bajo su control por una empresa pública (Departamento de Ejecución Directa de la CORVI, Corporación de la Vivienda) y no por privados o por una cooperativa de autoconstrucción. La característica de esta organización es que ella responde al intento de romper un esquema político-administrativo burocrático, para tratar de incorporar al mayor número posible de familias en el proceso de participación[36].

Pero también obliga al propio MIR y a los dirigentes locales a aceptar la auto-organización «desde abajo» de los pobladores, a contrapelo de una estructuración dirigida «desde arriba» por los miristas.

El primer dirigente del campamento fue el «Oso Pedro» (Pedro Torres) designado por el MIR, quien tuvo este cargo sólo hasta que los pobladores se organizaron. Entre enero y marzo de 1971 se generó una discusión entre los pobladores y los dirigentes respecto del tipo de organización permanente que se establecería en el campamento. Este debate constituyente tuvo como marcos de referencia las orientaciones políticas del MIR y las experiencias sociales y políticas acumuladas durante 1970 de los pobladores, ambas entrelazadas. En este momento, se decidió que la dirigencia debía ser elegida[37].

El obrero José Moya, que también vive en «Nueva Habana», señala:

Es lo más democrático que yo he conocido en mi vida en la forma de elegir a los dirigentes tanto de jefatura como a los dirigentes de base de manzana. «Nueva Habana» eran 1.500 pobladores divididos en 24 manzanas, y cada manzana estaba compuesta por 64 sitios, pero de ellos, 63 eran de familias y los otros eran la sede de la manzana. En esa sede se daba toda la vida de la manzana: todas las tardes los pobladores se reunían ahí, discutían sobre los problemas de la salud, de la vigilancia, sobre el abastecimiento, la educación[38].

En esta organización es la Asamblea General la última y más importante instancia de decisión, en particular para la toma de decisiones sobre los principales temas del campamento. Según Castelain, la participación en el funcionamiento democrático del campamento se construye de manera progresiva, y conocerá varios altibajos y crisis internas. No obstante, según ella –y gracias a su observación participante durante estos años– se puede describir el «nacimiento de un sentimiento de poder, creador de un nuevo orden moral»[39].

Hoy, la historia del campamento «Nueva Habana» nos es también accesible gracias a estudios elaborados por los mismos pobladores con la ayuda de estudiantes (en 1972) y mediante el documental Nueva Habana de Tom Cohen[40].

El frente de salud, animado por «milicianos de la salud», constituye uno de los elementos motores de este proceso participativo. Como lo señala José Moya, cada manzana tiene su equipo de salud que trabaja con el policlínico instalado en el centro del campamento y con el «hospital para niños»[41].

Estos equipos de salud tratan las enfermedades más frecuentes y se preocupan de cuidar la higiene de las familias. Después de una serie de tomas de los locales del Servicio Nacional de Salud (SNS) logran obtener la ayuda de doctores voluntarios, medicamentos y el reconocimiento legal de este servicio vecinal, en colaboración con el Hospital Sótero del Río[42].

El frente cultural es uno de los primeros en organizarse, a mediados de noviembre de 1970. Su objetivo no es sólo la autocreación de espacios de diversión y actividades artísticas[43], sino también la concientización y educación, la que es calificada por José Moya como una rica experiencia de educación popular[44].

Se pueden citar también el frente de madres que organiza a las mujeres del campamento en torno a su problemática específica en tanto mujer y el frente de trabajadores. Este último nace de la alta presencia de cesantes en «Nueva Habana». Se organiza entonces un comité de trabajos voluntarios que se coordina con los trabajadores del campamento, en particular, con aquellos que, como Abraham Pérez, hacen parte de la CORVI. Estos cesantes participan en la construcción de las viviendas y se forman para futuros trabajos. Sobre un total de 500 personas involucradas en la construcción, alrededor de 300 son pobladores de «Nueva Habana». Como lo declara un poblador a los estudiantes de arquitectura, la creación del frente de trabajadores tiene por objetivo que el «compañero cesante no pierda de vista su condición de proletario»[45].

Finalmente, otro ámbito de participación fundamental en «Nueva Habana» es el de la seguridad del campamento, a través de la creación de un «frente de vigilancia». Cada manzana envía un delegado voluntario que recibe una mínima formación en autodefensa. Esta organización deriva de la «comisión de disciplina» que existe al momento de la creación del campamento. Se trata de luchar contra los «clandestinos» (vendedores ilegales de alcohol), contra la prostitución, el robo y alcoholismo pero también contra la policía y los comandos de extrema derecha. Este tipo de actividad confluye también con formas de autoadministración de la justicia que ya mencionamos:

Este frente prepara el terreno para una justicia popular interna, encargada de resolver algunos problemas de injusticia cotidiana. De hecho, este frente interviene sobre todo en los conflictos conyugales, donde la desigualdad y dominación de una de las partes sobre la otra es flagrante: el caso de los hombres ebrios que les pegan a sus mujeres e hijos[46].

Los «jueces» son miembros del frente de vigilancia y es junto a la dirección del campamento que se dictan las sanciones: en general, trabajos voluntarios o incluso lecturas de obras marxistas, con examen final (sic!). Esta justicia interna posee incluso una sala propia donde pueden ser encerrados los acusados. La manzana Z representa la última sanción antes de la expulsión definitiva de la familia[47].

Uno de los juicios más famosos es el de mayo de 1972, cuando después de una violación, los dirigentes del campamento tuvieron grandes dificultades para

contener la cólera de una minoría presta a castrar a su «compañero» violador. Finalmente, este incidente terminó demostrándole al MIR los efectos potencialmente «peligrosos» de estas iniciativas de justicia popular, ya que el tribunal de mayo de 1972 terminó volviéndose en contra de los dirigentes del campamento, acusados por una parte de la asistencia de monopolizar el poder. Esta es también una señal de la dificultad por parte de los pobladores para enfrentar la justicia realmente según criterios renovados. En efecto, la mayoría después de dudar, decide entregar al culpable a un psiquiatra que lo trataba desde hacía un tiempo. Por supuesto, la prensa de derecha –como El Mercurio, La Prensa o Tribuna– no deja de denunciar esta justicia por fuera del aparato estatal y que representaría según ésta, el «fin de la libertad personal e, incluso, de la vida íntima de cada uno»[48].

«Nueva Habana» representa una tentativa concreta de poder popular local, bajo la égida del MIR. Sin embargo, aquí también la participación de la base se revela rápidamente insuficiente y es posible identificar una clara desmovilización durante el año 1972, luego del «giro obrero» del MIR[49].

Así, en «Nueva Habana» numerosos frentes entran en aletargamiento:

La jefatura, el frente de salud, de vigilancia, de educación se transforman en instituciones locales, reguladoras con el objetivo de cumplir mínimamente con las funciones específicas pero cuyas relaciones con las luchas se interrumpen, […] convirtiéndose en pequeños aparatos burocráticos encargados de hacer funcionar el campamento[50].

La misma constatación es realizada por algunos sociólogos. Según Threlfall y Pastrana existe incluso cierta «mistificación» sobre el grado de poder popular que representa el campamento, entre otros por su exposición mediática nacional e internacional: «Para la derecha representaba el ejemplo de la subversión a la legalidad institucional. Para la izquierda y para el movimiento poblacional, a pesar de diferencias partidarias, su organización y sus conquistas servían como modelos para otros campamentos»[51].

Es justamente sin olvidar esos matices que podemos comprender la dinámica irregular y agitada del poder popular. Como lo veremos, después de una etapa de fluctuación y de reflujo, «Nueva Habana» retoma su vigor y durante el año 1973

sus habitantes se ubican nuevamente a la vanguardia del movimiento social urbano en la lucha por el «abastecimiento directo»[52].

La Asamblea de Concepción: revuelta en la revolución

El manifiesto de mayo y la «Asamblea popular»

Los eventos que tienen lugar en la ciudad de Concepción entre mayo y julio de 1972 confirman la intensificación de las diferencias dentro de lo que Tomás Moulian llamó el «itinerario de la crisis de los discursos estratégicos» de la izquierda[53].

Se ha escrito mucho sobre lo que quedó grabado como la «Asamblea Popular» en la tercera ciudad del país, corazón de una región económica importante, cuna del MIR y provincia donde Allende saca un voto de más del 48% en las presidenciales de 1970.

Sin duda, factor importante en el triunfo del candidato de la izquierda fue el gran apoyo recibido especialmente en la provincia de Concepción, específicamente en las localidades de Penco, Tomé, Coronel y Lota; la primera vinculada a la industria de la loza, la segunda a la industria textil y las dos últimas a la minería del carbón. El fuerte componente de conciencia de clase vinculado al mundo político y social de la izquierda en aquellas localidades permitió indudablemente inclinar la balanza a favor del candidato de la Unidad Popular[54].

Recordemos rápidamente los hechos[55].

En mayo de 1972, la derecha intenta realizar una nueva manifestación en esta ciudad, como lo había hecho cuando fue la marcha de las «cacerolas vacías». Frente a esta decisión, la izquierda organiza una contramanifestación en la que participan numerosas organizaciones sociales locales, entre ellas la CUT

provincial. El MIR es formalmente invitado por la UP local, mientras que, detalle sintomático, la dirección provincial del PC decide retirarse. Finalmente, ante el peligro de enfrentamientos, y por expresa petición del mismo Allende, las dos marchas son prohibidas por el Intendente de la provincia, Wladimir Lenin Chávez (militante comunista). No obstante, el 12 de mayo, varios miles de personas y militantes de izquierda se reúnen en asamblea en la Universidad, foro convocado por los partidos de izquierda. Participan obreros, pobladores y estudiantes que durante más de dos horas escuchan las intervenciones de 35 oradores. Luego, se lleva a cabo una manifestación hacia el centro de la ciudad a la que acuden alrededor de 10 mil personas, donde se producen numerosos enfrentamientos con las fuerzas policiales, los que culminan con decenas de heridos y la muerte de un estudiante, Eladio Caamaño Sobarzo. Esta violencia extrema provoca la ira de muchos dirigentes de la UP penquista, algunos pidiendo incluso la dimisión del Intendente.

Después de esta primera acción común se instala una suerte de unidad local entre el PS, MAPU, IC y el MIR, la que se establece sobre la base de una crítica abierta a las deficiencias de dirección de la izquierda gubernamental[56].

Este frente unitario convoca a la «Asamblea popular de Concepción» prevista para el 26 de julio de 1972 (una de las fechas que conmemora la revolución cubana). El llamado es dirigido a los partidos de izquierda y al movimiento social y los organizadores convocan a «discutir, analizar y denunciar, directa y democráticamente, la función y carácter contrarrevolucionario del Parlamento» y de otras instituciones como el Poder Judicial[57].

El PC la condena inmediata y terminantemente: «ésta es una maniobra que la reacción y el imperialismo están impulsando, valiéndose de elementos de ultraizquierda y en particular del MIR», maniobra destinada «a dividir la Unidad Popular». Ante esta fuerte acusación, el PS reacciona: «Creemos que es grave que un partido de la UP desautorice a la Asamblea del Pueblo con un lenguaje que lo confunde con el Partido Nacional…»[58].

El «Manifiesto de Concepción», hecho público el 24 de mayo de 1972, intenta explicitar los objetivos buscados[59] y señala que este llamado se inscribe dentro de las reivindicaciones del programa de gobierno, con el proyecto de formación de una «Asamblea del Pueblo» unicameral. Asimismo la actitud de rechazo del PC en contra de la «ultraizquierda» es fuertemente criticada. En efecto, Luis Corvalán, en un discurso en la radio, el 19 de mayo de 1972, reacciona

violentamente en contra de los «grupos aventureros de la ultraizquierda», puestos al mismo nivel que la «ultraderecha»[60].

El PC subraya que la idea del establecimiento de una cámara única se inscribe efectivamente dentro del proyecto de reforma constitucional del gobierno, pero que esta propuesta presentada en 1971 ha sido rechazada en la cámara baja y que, por lo tanto, es ilegal[61].

En sus «perspectivas futuras», el manifiesto de Concepción concluye que dos políticas se enfrentan dentro de la izquierda: una, en una clara alusión al PC, que afirmaría la posibilidad de «condescender con los enemigos del pueblo» y la otra, que reivindicaría medidas destinadas a reforzar la lucha de clases. Para luego señalar «que es necesario apoyarse en la fuerza y movilización organizada de las masas, rechazando toda expresión de dogmatismo y sectarismo en el seno del pueblo».

Finalmente, la Asamblea resulta ser un éxito ya que es apoyada por 60 sindicatos, 31 campamentos, 16 organizaciones estudiantiles, 27 centros de madres. El Surazo, periódico de Osorno, redactado por estudiantes de la Universidad de Chile, nos entrega una descripción muy elocuente. La principal característica es la intervención de militantes de base que expresan su deseo de participación y justicia social en el lenguaje del pueblo[62].

Sube a la tribuna un gordo. Es un obrero de mezclilla. Viene recién del trabajo. Lleno de aceite. Lleva un gorro que no alcanza a taparle la cabeza y el pelo le cuelga por los lados. Es un «roto». Tiene cinco minutos para hablar. Golpea estrepitosamente la tribuna, Coge el micrófono y grita: ‘Hay que dejarse de palabrería… Hay que dejarse de creer que las cosas son fáciles. No. No son fáciles para nadie. Ni para el Gobierno, ni para nosotros. Y por eso estamos aquí […] no vamos a responder a nuestro compromiso con la revolución con aplausos y gritos. Lo vamos a hacer en las fábricas, en los fundos, en las minas. Y cuando llegue la hora, lo haremos también el enfrentamiento final con los ricos[63].

En la plaza, en las afueras del teatro Concepción, una masa compacta escucha las intervenciones que se difunden desde los altoparlantes. La Asamblea se termina a medianoche con un desfile por el centro de la ciudad.

Las dos posiciones presentes (la del MIR y de la UP) se concretan en dos

mociones sometidas a votación que son incluso, publicadas por El Mercurio[64].

Finalmente, es la propuesta del MIR la que es adoptada. Este hecho contribuye a acentuar la formidable polémica que desencadena esta reunión, abusivamente llamada «Asamblea popular» cuando no es más que un gran meeting unitario de amplios sectores de la izquierda rupturista penquista. De hecho, en ningún momento el MIR se pronuncia por la creación de un «poder dual» e incluso afirma claramente que lo «fundamental» sigue siendo el apoyo al programa de la Unidad Popular[65].

En ese sentido, lo que ha sido llamado «Asamblea popular» no debe confundirse con una experiencia de poder popular constituyente o de dualización de poder dentro de la «vía chilena» como se ha podido presentar dentro de la historiografía[66].

Su alcance es mucho más limitado, ya que en ningún momento se transforma en una praxis de poder desde abajo o expresión genuina de democracia directa: su eco transitorio tiene que ver con la interpelación del gobierno y la denuncia del sector gradualista o «conciliador» de la UP.

A pesar de ello, al día siguiente, La Prensa, periódico de oposición, declara con un gran titular: «Conmoción en Concepción: Asamblea del pueblo es acto de sedición». Esta preocupación se traduce también en una viva reacción del gobierno y una larga polémica en el seno de la izquierda. En una «carta abierta a los partidos de la UP», publicada por El Mercurio, Salvador Allende expone su posición frente a la «Asamblea del pueblo». Globalmente, se trata de un documento histórico esencial para comprender el proceso de la UP, ya que desarrolla la visión del primer mandatario chileno en lo que concierne a las relaciones entre gobierno, partidos de izquierda y movimiento social[67].

Allende condena secamente la Asamblea y la actitud de los partidos que participaron. Según él, se trata de «un fenómeno de tendencia divisionista que atenta contra la homogeneidad del movimiento» y que posee «una potencialidad perturbadora de la más extrema gravedad». Agrega «El poder popular no surgirá de la maniobra divisionista de los que quieren levantar un espejismo lírico surgido del romanticismo político al que llaman, al margen de toda realidad, ‘Asamblea Popular’» y afirma:

No vacilo en calificarlo como un proceso deformado que sirve a los enemigos de

la causa revolucionaria. […] Una Asamblea Popular auténticamente revolucionaria concentra en ella plenitud de la representación del pueblo. Por consiguiente, asume todos los poderes. No sólo el deliberante sino también el de gobernar[68].

Encontramos aquí la idea de que la izquierda de la UP y el MIR servirían indirectamente al «enemigo de clase». Por lo demás, es impactante el hecho de que el Presidente de la República le haya dado tanta importancia a este evento en Concepción. En realidad, tras las preocupaciones presidenciales, se incuba –teóricamente aún, por cierto– la cuestión del doble poder. Es por esta razón, que Allende condena nuevamente de forma pública, en el primer diario del país y con tanta vehemencia, todo poder popular no controlado por la UP. El PC y los sectores más moderados de la UP son oficialmente reconfortados. Esto le permite a Luis Corvalán responder a la carta del Presidente, el 29 de agosto, retomando su argumentación en contra de la «ultraizquierda». Repite que el objetivo central es el aumento de la producción y que uno de los peligros de la «Asamblea de Concepción» es justamente fragilizar la estrategia de alianza con las capas medias y una parte de la burguesía[69].

Por su parte, la Izquierda Cristiana en su respuesta, confirma que para ellos, «la UP es el mejor y más acerado instrumento revolucionario que el pueblo se haya nunca», aunque se deban corregir varias deficiencias[70].

La IC recuerda que la coyuntura es la de una notable desmovilización de los sectores populares mientras que las clases dominantes pasan a la ofensiva. Desmovilización que sería el fruto de los errores de dirección política de la UP. El documento menciona las prácticas sectarias de los partidos y defiende la idea de que hay que lograr canalizar la movilización popular. La respuesta del PS, por su parte, es parecida. En su prensa, el partido insiste en rechazar la «imagen de la Asamblea del Pueblo, como un poder paralelo al legalmente constituido» y se manifiesta en oposición a la creación de un supuesto «poder alternativo al del Congreso o al del propio Poder Ejecutivo»: al contrario para Guaraní Pereda Da Rosa, miembro del comité central del PS:

Sus tareas son las de dar solución, MEDIANTE LA ORGANIZACIÓN DE LAS MASAS, a los problemas más candentes que éstas enfrentan a diario, y que el Gobierno Popular, mediante los mecanismos institucionales existentes, se ve

imposibilitado de cumplir eficientemente. Y más aún cuando muchas de esas instituciones (como el Parlamento y el aparato judicial) entorpecen y boicotean las iniciativas del Gobierno[71].

Aunque algunos de los que comentan esta polémica (como la publicación Punto Final) diagnostican que la izquierda de la UP no reniega completamente de la Asamblea, estas declaraciones parecen ser un mea culpa ofrecido al gobierno. Por su parte, el MIR valida completamente los eventos de Concepción, llamando a que el pueblo genere su propio poder creando los «Consejos Comunales de Trabajadores». Sin embargo, Miguel Enríquez también aporta un bemol a las declaraciones emitidas en favor del remplazo del Parlamento, recordando que la «Asamblea de Concepción» sólo fue un acto de «agitación y propaganda», y confirma su llamado a la constitución de un poder popular autónomo del Estado burgués. Según el secretario general del MIR, son los Consejos Comunales de Trabajadores la base sobre la cual se asentará este nuevo poder alternativo al «Parlamento, a la justicia patronal y a la burocracia»[72].

¿Qué balance se puede hacer del impacto que tuvo la «Asamblea de Concepción»? Señalemos para empezar, que ella se queda en el estado de asamblea local deliberativa bajo la égida de una parte de la izquierda partidista. Posee, sin embargo, un significado importante en tanto espacio de expresión de miles de trabajadores organizados. Por otra parte, en lo que se refiere al campo político, esta reunión masiva pone de relieve las incomprensiones y las críticas subterráneas de los militantes de izquierda a la dirección que la UP le ha dado a las reformas. La idea del «poder popular» comienza a tomar peso en esta época. Una de las pruebas de este fenómeno es el debate que se desarrolla sobre el tema del «doble poder», debate retomado por varios intelectuales. Es por ello, que la «Asamblea popular», «marca fecha» en el desarrollo de la UP. Hay aquí un «evento histórico», es decir, «una ruptura sistémica –en el sentido de la dialéctica hegeliana–, o al menos una discontinuidad –al decir de Foucault–, hendiendo la fisura de un corte cronológico, la marca de una nueva fase»[73].

Una nueva etapa efectivamente se abre.

1 Salazar, Gabriel, Violencia política popular en las «grandes alamedas», op. cit.

2 Palieraki, Eugenia, Manifestations de rues à Santiago durant l'Unité Populaire, op. cit.

3 Este tipo de tensiones atraviesa al conjunto de la UP y a cada partido.

4 Principios, nº 144, 1972.

5 Sobre la visión económica de Pedro Vuskovic, consultar sus Obras escogidas sobre Chile (1964-1992), Santiago, Cepla, 1993.

6 Unidad Popular, «La Declaración de El Arrayán», Santiago, 9 de febrero de 1972. En: Farías, Víctor, La izquierda chilena…, op. cit., t.IV, pp. 1976-1993.

7 La NEP hace referencia a los debates de la izquierda a la «nueva política económica» emprendida por Lenin a partir del año 1921 en la Rusia Bolchevique y que consistió en reintroducir ciertos niveles de liberalización, después de las políticas colectivistas que siguieron a la revolución de 1917.

8 Así, si el acuerdo CUT-gobierno consideraba un aumento de los salarios de un 22% máximo en 1972, la multiplicación de las huelgas, tomas de fábricas y de la tasa de sindicalización hacen que durante el primer semestre de 1972, el incremento monetario de los salarios sobrepase el 40%. Sin embargo, este importante crecimiento del poder adquisitivo se ve progresivamente anulado por la inflación galopante.

9 Entrevista realizada en Santiago, 28 de noviembre de 2001.

10 Entrevista realizada en Iquique, 6 de noviembre de 2001.

11 Entrevista realizada en La Serena, 24 de junio de 2002.

12 Posición, nº 9, 14 de junio de 1972.

13 Najman, Maurice, Le Chili est proche: révolution et contre-révolution dans le Chili de l'Unité Populaire, París, F. Maspero, coll. «Cahiers libres», 1974, p. 36.

14 Pinto, Julio, «Hacer la revolución en Chile», op. cit.

15 Ibid.

16 Castells, Manuel, La lucha de clases en Chile, op. cit., pp. 240-242.

17 Garcés, Mario, «Construyendo las poblaciones: el movimiento de pobladores durante la Unidad Popular». En: Pinto, Julio (ed.), Cuando hicimos historia, op. cit., pp. 57-79.

18 Cifras oficiales citadas por Garcés, Joan, El Estado y los problemas tácticos en el gobierno de Allende, op. cit., p. 151.

19 Cofré, Boris: «El movimiento de pobladores en el Gran Santiago: las tomas de sitios y organizaciones en los campamentos. 1970-1973», Tiempo Histórico, nº 2, primer semestre de 2011, pp. 133-157.

20 Espinoza, Vicente, «Historia social de la acción colectiva urbana; los pobladores de Santiago, 1957-1987», EURE, vol. 24, nº 72, Santiago, septiembre 1998.

21 Alvarado, Luis, Cheetham, Rosemond, Rojas, Gastón, «Movilización social en torno al problema de la vivienda», EURE, vol. 3, nº 7, Santiago, abril 1973, pp. 37-70.

22 Espinoza, Vicente, «Historia social de la acción colectiva urbana», op. cit.

23 Sader, Eder, Quevedo, Santiago, Algunas consideraciones en torno a las nuevas formas de poder popular en poblaciones, Documento de trabajo nº 57, Santiago, CIDU, PUC, 1972.

24 El gobierno depende en gran parte del sector privado de la construcción.

25 CIDU, «Reivindicación urbana y lucha política. Los campamentos de pobladores en Santiago de Chile», EURE, vol. 2, nº 6, Santiago, noviembre de 1972, pp. 55-81.

26 Cofré, Boris: «El movimiento de pobladores en el Gran Santiago: las tomas de sitios y organizaciones en los campamentos. 1970-1973», op. cit.

27 Cancino, Hugo, Castro, Cecilia, Poder obrero y popular en Chile, 1970-1973, ISA, Romansk Institut, 1981.

28 Mensaje, nº 193, octubre de 1970.

29 Punto Final, nº 185, 5 de junio de 1973 y Garcés, Mario, La lucha por la casa propia y una nueva posición en la ciudad, El movimiento de pobladores en Santiago, Santiago, Pontificia Universidad Católica de Chile, Doctorado en historia, 1999.

30 Enríquez, Edgardo, «Entrevista a un miembro de la Comisión Política del MIR», Santiago, 1972. En: MIR, Documentos internos, 1972, Archivos del CEDETIM, pp. 183-191.

31 Espinoza, Vicente, Para una historia de los pobres de la ciudad, op. cit., pp. 302-328.

32 Duque, Joaquín, Pastrana, Ernesto, «La movilización reivindicativa urbana de los sectores populares», op. cit.

33 Neghme, Farah, Leiva, Sebastián, La política del MIR…, op. cit., pp. 120-182.

34 Castelain, Christine, Enquête sociologique sur le bidonville Nueva Habana, Chile, 1970-1973. Rapports entre transformations des pratiques sociales, des représentations idéologiques et intervention politique dans un mouvement revendicatif urbain, thèse de troisième cycle, París, École Pratique des Hautes Études, 1976.

35 Castelain, Christine, Enquête sociologique sur le bidonville Nueva Habana, op. cit. y Cofré, Boris, Campamento Nueva La Habana. El MIR y el movimiento de pobladores 1970-1973, Santiago, Escaparate, 2007.

36 Alvarado, Luis, Cheetham, Rosemond, Rojas, Gastón, «Movilización social en torno al problema de la vivienda», op. cit.

37 Cofré, Boris, Campamento Nueva La Habana, op. cit.

38 Entrevista realizada en Santiago, 20 de noviembre de 2001. Otros hablan de 64 familias por manzana.

39 Castelain, Christine, «Histoire du campamento Nueva Habana», Espaces et Sociétés, nº 15, París, abril 1975, pp. 117-131.

40 Cohen, Tom, Campamento Nueva Habana, Amram Nowak Production, New

York, 1975. Ver también este documental excepcional: Congregación Católica Maryknoll, Campamento Nueva La Habana, Chile-EEUU, 1971

41 Entrevista realizada en Santiago, 20 de noviembre de 2001.

42 Consultar el testimonio de Manuel Paiva en Leiva, Sebastián, Neghme, Farah, La política del MIR…, op. cit.

43 El documental de Tom Cohen muestra claramente este tipo de actividades, como el teatro popular por ejemplo, realizado con el apoyo de estudiantes de la Universidad de Chile.

44 Entrevista realizada en Santiago, 20 de noviembre de 2001.

45 Pastrana, Ernesto, Threlfall, Mónica, Pan, techo y poder: el movimiento de pobladores en Chile (1970-1973), op. cit.,

p. 82.

46 Castelain, Christine, Enquête sociologique sur le bidonville Nueva Habana, op. cit., pp. 141-151.

47 Ver el testimonio de Manual Paiva. En: Leiva, Sebastián, Neghme, Farah, La política del MIR…op. cit.

48 Tribuna, 23 de abril de 1971.

49 Este cambio de táctica es ratificado durante el primer congreso del campamento «Nueva La Habana», en febrero de 1972.

50 Castelain, Christine, «Histoire du campamento Nueva Habana», op. cit., p. 125.

51 Pastrana, Ernesto, Threlfall, Mónica, Pan, techo y poder: el movimiento de pobladores en Chile (1970-1973), op. cit.

52 Sobre este tema, Boris Cofré propone tres etapas: formación (1970), consolidación (1971-1972), profundización (1973), op. cit.

53 Moulian, Tomás, «La vía chilena al socialismo: Itinerario de la crisis de los

discursos estratégicos de la Unidad Popular». En: Pinto, Julio, Cuando hicimos historia: La experiencia de la Unidad Popular, op. cit., pp. 41-46.

54 Monsálvez, Danny G., «La Asamblea del Pueblo en Concepción. La expresión del poder popular», Revista de historia, Universidad de Concepción, Vol. 16, Nº. 2, 2006, págs. 37-58.

55 Ver la cronología detallada de los eventos presentada en Chile Hoy, nº 8 y nº 12, 1972.

56 Desde el «Manifiesto de Linares» que, en diciembre de 1971, criticaba la debilidad del gobierno, sus retrocesos y llamaba a una reforma agraria radical, es la segunda vez que se produce una convergencia de este tipo entre el MIR y ciertos sectores de la UP (cf. Seguel-Boccara, Ingrid, Les passions politiques du Chili durant l'Unité Populaire, op. cit. pp. 331-334).

57 Firman militantes de la CUT provincial, del Comando provincial de pobladores, federaciones de estudiantes de Concepción. Todos pertenecen al MAPU, MIR y PS.

58 Chile Hoy, nº 8, 4 al 10 de agosto de 1972 y nº 12, 1 al 7 de septiembre de 1972.

59 PS, MAPU, MIR, IC, Documento de Concepción, Concepción, mayo de 1972.

60 El Siglo, 19 de mayo de 1972.

61 Como bien lo recuerda Joan Garcés, este proyecto de reforma constitucional es finalmente retirado por Allende en diciembre 1971 frente a la violenta oposición del PN y de la DC en el Congreso (Garcès, Joan, Allende y la experiencia chilena, op. cit.).

62 Parece que la intervención de estos últimos se obtuvo tras la presión de militantes del FTR presentes en la sala.

63 El Surazo, Osorno, 15 de agosto de 1972.

64 El Mercurio, Santiago, 29 de julio de 1972.

65 Santa Cruz, Eduardo, «Órganos de poder del pueblo», suplemento al nº 189, Punto Final, Santiago, 31 de julio de 1973.

66 El historiador Danny Monsálvez afirma, por ejemplo, que «la Asamblea del pueblo se constituyó en una manifestación innegable de organización de poder popular paralelo a la institucionalidad imperante» («La Asamblea del Pueblo en Concepción. La expresión del poder popular», op. cit.).

67 Carta publicada en El Mercurio, 1 de agosto de 1972.

68 Ibid.

69 El Siglo, 31 de agosto de 1972.

70 IC, Testimonio de Hernán Mery, 31 de agosto de 1972.

71 Citado en Punto Final, nº 164, 15 de agosto de 1972 (mayúsculas en el texto original).

72 Chile Hoy, 31 de agosto de 1972.

73 Illanes, María Angélica, La batalla de la memoria, op. cit., p. 17.

Tercera parte

De los cordones industriales en sí a los cordones industriales para sí

Un día, me encuentro que estaban en huelga en Aluminios El Mono. Entonces yo me bajo y converso con los trabajadores, tenían una olla común. [...] Compramos un saco de porotos y llegamos al sindicato. Preguntamos por los dirigentes y nos dijeron que estaban en el sindicato de Policron y ahí estaban los dirigentes de Perlak, de Policron y Aluminios El Mono y nos presentamos a los dirigentes y les planteamos nuestra solidaridad.

Entrevista con Edmundo Jiles, sindicalista del Cordón Industrial

Cerrillos-Maipú, Santiago, 6 de mayo de 2002.

A mediados de 1972, el movimiento social y la lucha de clases entran en una nueva fase ascendente y es ese «despertar de un pueblo» lo que algunos cineastas latinoamericanos supieron poner en imágenes[1].

Mientras la UP comprende que se encuentra cada vez más desfasada de su base social, los conflictos obreros así como las tomas de fábricas se incrementan. El movimiento de pobladores realiza varias acciones radicales en el centro de Santiago, movilizaciones dirigidas principalmente por el Movimiento de Pobladores Revolucionarios (MPR), bajo influencia del MIR. Se bloquean algunos caminos y las movilizaciones tienen en la mira la expropiación de los terrenos ocupados. Asimismo, ciertos edificios administrativos son tomados en protesta por la lentitud del gobierno para solucionar la situación de estos habitantes sin vivienda[2].

En ese marco se crea, a un nivel local, una coordinación entre el espacio de las luchas obreras y el de los otros sectores movilizados. Es de esta conjunción que surge uno de los principales cordones industriales de Santiago, el de Cerrillos en la comuna de Maipú.

Los grandes cinturones industriales de Santiago se transforman bruscamente en verdaderos «cinturones rojos» en lucha. Para aprehender este episodio del conflicto social, proponemos el uso del concepto de cordón industrial en sí o (cordón «probable»), diferenciándolo de la hipótesis del cordón industrial para sí (o cordón «movilizado»). El Cordón en sí representa la concentración industrial, los barrios obreros y populares establecidos de manera lineal y concéntrica en el espacio urbano: los «cinturones industriales». Se trata de un dato objetivo y estructurante del universo cotidiano de las clases populares de la capital y de varias grandes ciudades. El cordón para sí se entendería, entonces, como la coordinación consciente y movilizada, una unificación transversal –a nivel territorial– de ciertos sectores de la clase obrera organizada, que trabaja y/o vive en este cinturón industrial. En tal perspectiva, encarna un organismo de poder popular constituyente potencial. Esta noción hace explícitamente referencia a la noción marxiana de clase en sí y clase para sí, transpuesta aquí al caso del poder popular chileno[3].

Se refiere también a los aportes críticos de Pierre Bourdieu a la teoría de las clases sociales, quien llama a no confundir la clase probable, teórica –o «clase en el papel»– (a veces entendida como un dato objetivo por los marxistas), con la clase real y concretamente movilizada, resultante de las interacciones y representaciones de los agentes en lucha en un espacio social multidimensional. Bourdieu llama a descifrar la «misteriosa alquimia» por la cual «un ‘grupo en lucha’, colectivo personalizado, agente histórico que se asigna a sí mismo sus propios fines, surge de las condiciones económicas objetivas» y logra «producir, sino la clase movilizada, sí la creencia en la existencia de clase que funda la autoridad de sus portavoces». Señala entonces, que es indispensable analizar la «cuestión misma de lo político, de la acción propia de los agentes que, en nombre de una definición teórica de la ‘clase’, asignan a sus miembros los fines oficialmente más conforme a sus intereses ‘objetivos’»[4].

Asumiendo esta hipótesis, en los siguientes capítulos nuestra preocupación será precisamente intentar evaluar los modos de organización, movilización y representación colectivas que se desarrollan en el seno de estas periferias urbanas y que permiten forjar estos cordones movilizados. Más ampliamente,

nuestra ambición es restituir los impulsos creativos de esta «experiencia de clase» (en el sentido del historiador Edward P. Thompson) de algunas periferias industriales, sus valores, su territorio y el espacio de las luchas en las que interactúa. Retomamos aquí a nuestra cuenta, las enseñanzas del enfoque magistral de Thompson sobre la formación de la clase obrera inglesa, en las que afirmaba:

La experiencia de clase está ampliamente determinada por las relaciones de producción en que los hombres nacen o en las que entran de manera involuntaria. La consciencia de clase es la forma en que se expresan estas experiencias en términos culturales: encarnadas en tradiciones, sistemas de valores, ideas y formas institucionales[5].

1 Además del trabajo de Patricio Guzmán, ver: Colectivo de cineastas latinoamericanos, Cuando despierta el pueblo, Nueva York, Tricontinental Film Center, 1973, 60 min. y Marker, Chris, Littin, Miguel, On vous parle du Chili, Paris, Iskra, 1973.

2 Pastrana, Ernesto, Threlfall, Mónica, Pan, techo y poder: el movimiento de pobladores en Chile, op. cit., p. 110.

3 Ver sobre este tema, la obra ineludible de Lukacs, György, Historia y consciencia de clase, México, Grijalbo, 1969.

4 El sociólogo subraya, por otra parte, la importancia de la «cuestión de las relaciones entre las clasificaciones que tienen pretensión de objetividad producidas por el sabio, parecido en ello al zoólogo, y las clasificaciones que los agentes mismos producen sin cesar en la existencia ordinaria» (Bourdieu, Pierre, «Espace social et genèse des ‘classes’», Actes de la recherche en sciences sociales, nº 52-53, 1984, pp. 3-14).

5 Thompson, Edward P., La formación de la clase obrera en Inglaterra, Barcelona, T.I, Editorial Crítica, 1989, p. XIV.

Capítulo 7

Maipú-Cerrillos: esbozo de las condiciones de una experiencia de clase

Los cordones en sí o la columna vertebral de Chile

Los grandes cinturones industriales de Santiago son la herencia de la importante modificación de acumulación capitalista que tuvo lugar en los años cincuenta y sesenta, marcada por una fuerte industrialización, impulsada parcialmente desde el exterior y por un masivo éxodo rural que hace que –literalmente– la capital «explote»: el «gran» Santiago pasa de albergar alrededor de 1.400.000 habitantes en 1952 a 2.860.000 en 1970 (es decir, pasa del 23,4% al 32,2% de la población nacional)[1].

En 1970, Chile ha dejado de ser un país rural, el 75% de la población vive en ciudades[2].

La capital es la principal zona de concentración industrial del país, antes que Concepción y Valparaíso. En la época de la Unidad Popular, el «gran Santiago» concentra alrededor de un tercio de la población del país, con 3,2 millones de habitantes. Casi la mitad (47%) de la población de la capital trabaja en la industria, cifra considerable, más aún cuando se sabe que el 70% de esas industrias se ubican en sólo cuatro comunas[3].

Es durante este período que se dibuja el «cordón en sí» en el paisaje urbano. Las vías de comunicación y su accesibilidad juegan un rol decisivo, ya que es gracias a estos grandes ejes estructurantes que la implantación industrial toma la forma de «cordones».

El eje norte-sur de la comuna de Santiago, las futuras «Panamericana norte» y «Panamericana sur», une la capital de Chile con el resto del país. Muy temprano,

a lo largo de esta carretera, que constituye la columna vertebral del país, se articulan grandes conjuntos que serán conocidos bajo el nombre de «cordones industriales». La extensión de la Alameda, la ruta 68 que lleva hacia el poniente y al principal puerto chileno, Valparaíso, así como la ruta 78, que se dirige hacia Melipilla y San Antonio, también fueron testigos de la organización de «cordones industriales» en los tramos que se sitúan al interior del «gran Santiago»[4].

Las empresas se instalan siguiendo la linealidad de las vías de acceso y, a partir de comienzos de los años cincuenta, este tipo de instalación industrial se consolida alrededor de grandes ejes como Vicuña Mackenna, Cerrillos y Macul. Se llega así a una configuración espacial industrial «estrellada» que parte del hipercentro de Santiago (ver anexos nº 11, 12 y 13). Por lo general se puede observar esta distribución siguiendo el Plan Intercomunal de Santiago: una zona industrial mixta con fábricas localizadas en un espacio predominantemente residencial; una zona industrial exclusiva; y finalmente un área declarada «congelada» por las autoridades públicas, debido a la saturación de industrias[5].

Estos tres tipos de espacios fabriles permiten apreciar la dimensión espacial del «Cordón en sí», así como las características específicas potenciales de cada uno de ellos (según se trate de una zona casi exclusivamente industrial, de una zona mixta con presencia o no de numerosas poblaciones y campamentos – ver anexos nº 11 y nº 12).

Es lo que recuerda en su testimonio, Tomás Inostroza, sindicalista del sector bancario, dirigente socialista del regional Cordillera de Santiago y uno de los fundadores del Cordón Industrial Macul. Inostroza insiste sobre el importante rol estructurante de la línea del ferrocarril que alimenta de materias primas a numerosas fábricas[6].

Así, si la comuna de Maipú atrae a tantas industrias y empresas, se debe a que esta zona tiene la ventaja de tener una vía rápida para la distribución, como son las rutas a los puertos de San Antonio y Valparaíso, encontrándose al mismo tiempo muy próxima al centro de la capital y del aeropuerto de Cerrillos, construido en 1936[7].

Este proceso es profundizado por la política municipal y en el año 1959 con la

construcción de un oleoducto de una extensión de 120 kilómetros, cuyo terminal radica en el Camino a Melipilla y trae productos tales como gasolina, kerosene, petróleo diésel y propano líquido desde la refinería de Concón.

Según un historiador local, Camilo Montalbán:

En resumidas cuentas, facilidades tributarias municipales, vías camineras, vía férrea, aeropuerto, terminal de combustibles, perfilan a Maipú, a partir de la década del cuarenta al ochenta, como una comuna industrial más que agraria[8].

Maipú: comuna pionera del poder popular

Estudio de las condiciones favorables al desarrollo de un «cordón para sí»

Después de la Segunda Guerra Mundial, Maipú se convierte en el bastión de la clase obrera manufacturera de Chile (industria textil, metalúrgica, automóviles, conserveras de productos agrícolas provenientes de Melipilla). Entre las primeras industrias llamadas a jugar un rol clave durante las movilizaciones del Cordón, podemos citar a INSA que produce su primer neumático en septiembre 1944, Indura (soldaduras) y la conservera Copihue, que se instalan en 1948; Fantuzzi (ollas y cuchillerías) en 1949, Cobre Cerrillos en 1951, Rayón Said (textiles) en 1953, Fiat Chile en 1954, CIC (muebles) y Fensa (línea blanca) en 1955, así como American Screw (pernos y tornillos) en 1957. El «período de consolidación» cubre varios años, en donde la comuna ve instalarse más de 23 industrias (1962, 1964, 1965 y 1969). Es también en esta época que la estructuración lineal se confirma: el «cordón en sí» se vuelve predominante en el espacio urbano de la comuna[9].

Las condiciones de desarrollo del primer y más poderoso cordón industrial del país, el cordón Cerrillos-Maipú, se pueden entender hoy gracias al excelente trabajo de terreno realizado en 1972 por Eder Sader y el equipo de sociólogos del CIDU (ver anexos nº 9 y nº 10)[10].

En 2008, la investigación de Renzo Henríquez permite afinar y completar este estudio, especialmente gracias a las entrevistas que incorpora[11].

Maipú es, entonces, la comuna de la gran industria con un promedio de asalariados por empresa que sobrepasa los 100 trabajadores y numerosos sindicatos que cuentan con más de un centenar de adherentes. Este «cordón de la rebeldía», como lo llamó un periodista en la época, toma forma en un sector de la ciudad que dispone de la mayor concentración de industrias modernas del país, es decir alrededor de 250 empresas que emplean a unos 46 mil asalariados[12].

De acuerdo al censo de 1970, en Maipú viven un poco más de 40 mil habitantes[13]. La comuna se caracteriza por una clara diversificación productiva a la que se agrega el centro de distribución de combustible de la capital. Doce empresas del Área Social (que hacen parte de la lista de las 91) se encuentran aquí y emplean alrededor de 10 mil trabajadores. Como lo muestra el anexo nº 10, son los distritos cinco y seis los que concentran la gran mayoría de las industrias, de manera que se puede hablar de la presencia de dos cordones: uno, en el eje de la avenida Pajaritos en el distrito cinco y que tiene la más fuerte densidad de fábricas[14]; y el otro, el cordón Cerrillos, que atraviesa el distrito seis, donde existe una importante diversificación productiva (destacándose la producción metal-mecánica, química y materiales de transporte).

Es, sin embargo, el nombre del cordón Cerrillos el que la historia retiene, ya que es allí donde se produce la mayor parte de los conflictos sociales. Se debe destacar una importante presencia campesina en este sector, ya que sólo entre las comunas de Maipú y Barrancas, que se encuentran sobre algunas de las tierras más fértiles del país, se produce el 70% de las hortalizas que se consumen en Santiago. También en esta zona, constatamos la presencia de industrias importantes y combativas, como Gasco, Rayón Said, Indubal, Carrocerías Franklin, entre otras. La mayoría se ubica en el camino que conduce a la zona de producción agrícola a Melipilla y que une el centro de la capital con el puerto de San Antonio. Esto explica por qué el camino de Melipilla es uno de los ejes estratégicos del Cordón, un lugar ideal para levantar barricadas y hacer hablar de sí. Lo mismo es válido para la línea férrea que recorre la comuna, con la presencia «estratégica», por ejemplo, del «complejo Lo Valledor» –que comprende entre otros un importante matadero de animales– que pertenece a Socoagro (700 trabajadores).

Si revisamos la distribución de la población en función de su actividad profesional, es sorprendente constatar que los obreros no viven en el sector inmediato a su trabajo. En efecto, es en el distrito número uno donde reside la mayor parte de los obreros ligados a la industria moderna. Asimismo, es en este sector de la comuna donde existe un núcleo importante de campamentos (Comando El Despertar de Maipú) y varias industrias tradicionales, algunas con presencia sindical combativa, como es el caso de la conservera Perlak o de Sindelen[15]. No obstante, si adicionamos los diez mil trabajadores de la industria y de la construcción que provienen de otras comunas, se puede diagnosticar un importante desfase entre la población que reside en los alrededores del Cordón Industrial y la que allí trabaja[16].

Sobre la base de esta distribución socioeconómica, el CIDU constata una cierta «atomización del frente obrero» fuera del lugar de trabajo. Se trata de un dato esencial, ya que viene a dificultar la coordinación de las movilizaciones entre pobladores y obreros, más aun cuando en la comuna no se ha instalado ninguno de los campamentos con origen en las tomas de terreno combativas. En contraparte, podemos mencionar la hipótesis de Miguel Silva, según la cual el hecho de que la fuerza de trabajo provenga del exterior de la comuna, facilita la difusión de las luchas que se desarrollan en Maipú[17].

Esta hipótesis parece confirmarse con el testimonio de Edmundo Jiles, quien trabaja tanto en las comunas de Maipú como en la de Renca[18].

Una fuerza latente. Las bases de la experiencia del poder popular en la comuna de Maipú

En la comuna de Maipú, el nudo gordiano de la «experiencia de clase» es la tradición sindical, la fuerza de las luchas obreras y sobre todo las tendencias, ya experimentadas, a la organización territorial e interprofesional de los asalariados[19]. Más de 37 sindicatos industriales agrupan a más de cien afiliados cada uno, con un total superior a los 10 mil miembros que trabajan en la industria química, metalúrgica, de la alimentación y textil[20].

En medio del torbellino de la coyuntura nacional, las organizaciones sindicales florecen por todas partes en la comuna: 20% de los sindicatos se crean en el transcurso de los años 1971-1972. Las categorías llamadas «profesionales» viven, además, una incorporación sin precedentes al movimiento social, dotándose también de nuevos sindicatos. Al sindicalismo de los trabajadores industriales, se suma el del campesinado de Maipú. Estos trabajadores rurales se organizan en tres sindicatos, dos de los cuales tienen más de 400 miembros: el «Rinconada de Maipú», donde predomina el PS, y «El Abrazo de Maipú», controlado por los democratacristianos. La multiplicación de las tomas de terrenos, a inicios de 1972, coincide con aquellas de la vecina comuna de Melipilla, lo que –según E. Sader– refuerza las luchas colectivas de Maipú (hecho que no se ha podido comprobar hasta el momento a través de las entrevistas)[21].

El estudio de terreno realizado por el CIDU permite identificar, aunque sólo parcialmente, la orientación política de dichas agrupaciones. Los socialistas son la fuerza mayoritaria en los grandes sindicatos industriales y aventajan al PC en este sector. Este dato ha sido ampliamente confirmado con las entrevistas realizadas. Así, Fernando Quiroga, secretario, entre 1971 y 1972, de la sección de Maipú del PS, testimonia sobre el importante trabajo de inserción sindical de los socialistas en la comuna. Según Quiroga, se habría producido, en esta época, un desplazamiento de las fuerzas comunistas a favor de los socialistas dentro de las fábricas[22].

Destaquemos también la presencia de militantes del MAPU y del MIR/FTR, aunque mucho más limitada, pero en plena expansión. Incluso, hacia el año 1972, se produce una salida de militantes de las juventudes del Partido Socialista hacia el MIR local (según testimonio de Leopoldo Osorio, regidor PS de la comuna de Maipú en aquellos años)[23].

En esta zona, el MIR cuenta con el Grupo Político Militar (GPM) número 4, que cubre un área geográfica bastante más grande que Maipú, así como diversos frentes sociales: campesino, sindical y pobladores (con dos comités locales de pobladores)[24].

Javier Bertín estima que el FTR posee, en el cordón Cerrillos-Maipú, alrededor de 150 militantes y el MIR 200 miembros (con un núcleo duro de 30 militantes, reconocidos como tales por la organización)[25].

Es en la fábrica Fensa donde el MIR tiene la mejor inserción en el sector, con una célula de entre 15 y 20 militantes y un FTR en el que participan no menos de 80 miembros. Este desarrollo se hace en detrimento del PC, ya que el sindicato de Fensa históricamente ha estado en manos de militantes de este partido. Otro «bastión» del MIR en Maipú es la industria Perlak, donde obtiene incluso la presidencia del sindicato profesional, pero sin conseguir la integración a la organización de Jaime Ramos (presidente del sindicato industrial).

Se puede pensar que el particular dinamismo de los sindicatos del Cordón proviene de la presencia de organizaciones muy activas en algunas grandes industrias, como Gasco, Fensa, CIC, American Screw, SEG o SABA. Tomemos el caso de una gran empresa como Gasco. Alrededor de 1.100 empleados trabajan para producir gas líquido y gas de ciudad. Legalmente, se trata de una sociedad anónima de 21 mil accionistas, donde sólo 233 de ellos poseen el 52% del capital. Durante la UP, rápidamente la dirección detiene las inversiones, reduce los stocks de materias primas y boicotea la producción. El sindicato entra en conflicto el 11 de enero de 1972: la huelga (ilegal) involucra inicialmente a 120 obreros y 50 empleados, quienes solicitan la intervención del Estado y expropiación de la empresa a causa del boicot. El comité director y los accionistas se oponen tenazmente a esta acción. Frente a la situación de bloqueo, el 30 de marzo de 1972, la Corfo compra el 10% de las acciones y la empresa es finalmente estatizada por el gobierno.

Sin embargo, no se deben establecer relaciones mecánicas entre filiación partidaria «de izquierda» y combatividad de clase en las fábricas. Ciertamente, como lo recuerdan Zimbalist y Espinoza, las actitudes en el seno de la izquierda se diferencian claramente según los partidos y, según este estudio, los trabajadores de los sectores moderados de la UP tienen una actitud menos dinámica y participativa[26].

Citemos el caso de INSA, gran industria de Maipú cuyo sindicato de izquierda (con una fuerte presencia del PC) se caracteriza por su pasividad política, según estudio del CIDU[27].

Al contrario y paralelamente, muchos obreros democratacristianos y asalariados sin partido se incorporan activamente a la lucha en favor de un control real de las empresas o contra la restitución de las fábricas ocupadas, a nivel nacional y local. Así, en julio de 1972, un obrero DC de Fensa manifiesta al diario El Siglo su rechazo a devolver la fábrica ocupada: «Por ningún motivo permitiremos la

vuelta de los que fueron nuestros explotadores»[28] señala, para luego explicar que su partido claramente no comprende los problemas de los trabajadores. Es precisamente esta unidad obrera en la base, más allá de las etiquetas políticas y teniendo como referente los intereses de clase, lo que constituye la fuerza potencial del cordón para sí: que se sienta cercano a la UP o a la oposición al gobierno, el movimiento obrero rompe, en ciertos momentos, las fronteras de la afiliación partidista o el legalismo que se le intenta imponer, para reencontrarse sobre nuevos fundamentos de la lucha de clases. En Maipú, existe una acumulación de este tipo de experiencias compartidas que favorece estos fenómenos. Al lado de los obreros combativos de la gran industria, entran en la movilización colectiva empresas medianas que son, en perspectiva, las verdaderas animadoras del cordón, como Maestranza Cerrillos, Rayón Said, Copihue y Aluminios El Mono. La fábrica Perlak es una de ellas también.

Como lo subraya con, justa razón, Renzo Henríquez (y como ya lo hemos mencionado más arriba), los trabajadores de esta empresa conservera y su rápida politización interna, ayudada por la presencia de dirigentes sindicales como Santo Romeo, serán la punta de lanza del poder popular local de la comuna[29].

De acuerdo a las cifras entregadas por Carabineros durante el año 1972, se organizan más de 63 huelgas en Maipú, es decir, 9% del total de las realizadas en Santiago (ver anexo nº 2). Las grandes empresas contribuyen de manera importante al total de huelgas (24% del total), aunque sólo representan el 10% del conjunto de empresas de la comuna. Si se consideran los motivos de los conflictos, constatamos que el 60% de las huelgas están asociadas a reivindicaciones económicas. Menos del 10% de entre ellas, se originan en solidaridad con otras reivindicaciones de las empresas vecinas y 20% con miras a la integración al Área de Propiedad Social (APS). Así, casi una huelga sobre tres, está determinada por una articulación entre reivindicaciones económicas y exigencias de orden político. En enero de 1972, las huelgas ponen a la orden del día la demanda de nacionalización. Sin embargo, es durante los meses de marzo, abril y mayo con el recrudecimiento de las luchas económicas, que se genera una base sólida para mantener la reivindicación del paso al APS. Esta articulación de los campos económico y político alcanza su apogeo en junio, y en la coyuntura de octubre las movilizaciones retoman toda su amplitud, demostrando la potencia de las reservas políticas de la clase obrera de la comuna[30].

Para terminar, se debe sumar a este movimiento sindical combativo, la presencia limitada de campamentos, en parte debido al extenso uso agrícola de los suelos y

la presencia del aeropuerto Cerrillos. Previo a la ola de ocupaciones de terreno, que es contemporánea a las importantes movilizaciones obreras durante la UP, existían cuatro «poblaciones callampas» en Maipú según la encuesta del Servicio Social de 1949[31].

En 1970, se producen 11 tomas, 9 en 1972 y 5 en 1973. Es durante este año que se crea el «Comando El Despertar de Maipú», formado por seis campamentos que reúnen alrededor de 650 familias. En abril y junio de 1972, estos habitantes pobres se movilizan activamente en torno al problema del transporte. La movilización colectiva es especialmente deficiente en la comuna y tiene la particularidad de depender de la Municipalidad (y no del sector privado)[32].

Cuando el PS local se pone a la cabeza del movimiento, ya se habían producido varias protestas de los usuarios, por lo que las condiciones son favorables para una acción colectiva masiva. Varias reuniones son encabezadas por trabajadores socialistas de la zona, realizándose una gran manifestación en la que participan pobladores, pero también vecinos de los barrios más residenciales, el consejero municipal socialista, otros militantes del PS e incluso algunos representantes de la DC. El PS local logra canalizar este descontento en la idea de «crear el Consejo Comunal de Trabajadores» destinado a denunciar todos los problemas de la comuna. Sin embargo, esta idea de un poder popular sostenido por una organización de tipo horizontal y territorial ya ha sido levantada por el MIR y los militantes del FTR a través de los comités locales. Esta concepción se enmarca en la estrategia de poder popular alternativo del MIR, partido que, durante el año 1971, realiza varias reuniones transversales entre sindicalistas y militantes del FTR con hasta 20 dirigentes, principalmente de la pequeña y mediana industria[33].

A inicios de 1972, Javier Bertín se convierte en presidente de un primer y minúsculo «cordón industrial», limitado a la coordinación territorial de algunos dirigentes sindicales apoyados por militantes de la extrema izquierda[34].

A mediados de mayo o principios de junio[35], se lleva a cabo una segunda reunión, llamada «cabildo abierto» en referencia a la primera junta de gobierno de 1810 que inicia el proceso de independencia de Chile. La consigna lanzada es radical, pero nuevamente poco realista si se considera la real amplitud de la movilización: «la comuna al poder del pueblo!». Alrededor de 500 personas se reúnen, particularmente los pobladores del Comando El Despertar, militantes de toda la izquierda (especialmente del PS) y delegados sindicales. El alcalde no acepta la invitación, la Municipalidad dirigida por la DC es denunciada

públicamente y se proclama la necesidad de crear un organismo paralelo bajo control de los trabajadores. Con esta movilización se logran algunas conquistas parciales como por ejemplo, a nivel del consejo local de salud, el que logra reunir temporalmente a 30 sindicatos. Sin embargo, este Consejo Comunal no tiene efectos inmediatos.

En el marco de las luchas en curso a nivel del escenario político nacional, que giran en torno a la gestión de las empresas y a la ampliación del APS, el epicentro del movimiento social pasa de un sitio de conflicto a otro: de la población a la fábrica, de los pobladores a la clase obrera. La temática del «consejo comunal de trabajadores» toma entonces forma: son los primeros pasos del «cordón para sí» de Cerrillos-Maipú.

El cordón de la rebeldía

El nacimiento del cordón Cerrillos-Maipú

Desde junio a septiembre de 1972 tiene lugar la gestación del cordón Cerrillos-Maipú en tanto embrión de un «cordón para sí» en Santiago. En el mes de junio se reanima el activismo obrero. Esta reactivación se inicia en la comuna en torno a tres industrias: Perlak (conservera de alimentos), Polycron (química industrial, fibras sintéticas) y Aluminios El Mono (aluminio). Los dirigentes sindicales de estas empresas comprenden que la posición adoptada por el gobierno (de negociación a todo precio con la DC) juega en contra de sus reivindicaciones e intereses de clase. Con la experiencia de organizaciones transversales recién pasadas (entre las cuales el llamado de mayo del Consejo Comunal de Trabajadores), poco a poco se empieza a conformar el «cordón de la rebeldía»[36].

El 12 de junio comienza la huelga en las industrias El Mono e Indubal. Casi paralelamente, en Fensa, dirección y dirigentes sindicales se enfrentan a propósito de la expropiación de la fábrica, la que se llevó a cabo a inicios del mes: el 14 de junio.

El ministro Vuskovic visita la empresa buscando encontrar una solución al conflicto entre el Estado y sus antiguos propietarios. En respuesta, el 15, la dirección de Fensa decide despedir a los dirigentes sindicales en el mismo momento en que el poder judicial no reconoce la estatización. Paralelamente, ese mismo día, la industria CIC (más de 1.300 trabajadores) entra en un ciclo de repetidas huelgas[37].

En este caso, el conflicto es legal y afecta a más de 800 obreros.

Nace el cordón Cerrillos-Maipú en Santiago



Fuente: El Mercurio, Santiago, junio de 1972.

Como sucede a menudo en este tipo de movilizaciones obreras, aparecen numerosas contradicciones tácticas y políticas en el seno mismo de los huelguistas. Aquí, se enfrenta la posición asumida por los trabajadores socialistas que se pronuncian a favor del método de ocupación directa, con la postura de la sección metalúrgica dominada por el PC y la DC, que busca la negociación. Es finalmente, la alianza PC-DC la que obtiene más votos en la asamblea[38].

Cuatro días más tarde, Perlak entra en conflicto a causa del boicot a la producción, acaparamiento y la venta en el mercado negro. Sobre esta base, los trabajadores solicitan el paso al Área Social, pero bajo control obrero[39].

Al día siguiente, Polycron declara la huelga por el incumplimiento de los acuerdos firmados entre sindicatos y patrones, en 1971.

Finalmente, frente a lo que es considerado como una vacilación inaceptable del gobierno (que se demora en intervenir a favor de los huelguistas), un pequeño grupo de trabajadores de Perlak, conducidos por Jaime Ramos, presidente del sindicato industrial, decide ir al Ministerio del Trabajo para exigir una solución a sus problemas, encontrándose por casualidad con los asalariados de Aluminios El Mono que están en la misma situación, y juntos deciden tomarse el Ministerio del Trabajo. Mireya Baltra, militante comunista y titular de este Ministerio desde hace algunos días, nos entrega su testimonio durante nuestra investigación oral[40].

Al día siguiente de la ocupación, se dirige directamente a la fábrica Perlak para constatar la realidad de los hechos denunciados a viva voz en su oficina, la tarde anterior. La ministra es acompañada por varios funcionarios y por Octavio González, dirigente de la CUT local. Su llegada provoca un enfrentamiento directo entre, por un lado, los representantes del gobierno y la CUT y, por el otro, los trabajadores en lucha: el ingreso a la fábrica del representante de la CUT local es impedido por el dirigente sindical Santos Romeo, que lo declara persona non grata en Perlak por no haber apoyado nunca el conflicto. Según este último,

Esto no le agradó a la compañera ministro, quien expresó airadamente que no entraría a la industria si no se aceptaba al compañero de la CUT. En ese momento, ella dijo algo sobre los burgueses, a lo cual respondí, «usted es burguesa». Esto provocó en la compañera una airada reacción que se materializó hacia mí, en un golpe propinado con diarios que tenía bajo su brazo. En los compañeros presentes, el incidente tuvo como respuesta una airada y general protesta contra la compañera ministro, quien de inmediato se retiró […][41]

A pesar de divergencias en los recuerdos, por su significado este incidente permanece hasta hoy grabado en la memoria de los militantes de izquierda[42].

Hernán Ortega, futuro dirigente del cordón, militante socialista y sindicalista de Sindelen, hoy día ve en ese «incidente» un símbolo del desfase creciente entre la CUT (incluso a nivel local) y los trabajadores, pero también un hito representativo de la posición del PC en relación con la de los trabajadores movilizados[43].

No es casual que al momento del conflicto, la CUT local sea presidida por un militante comunista, sindicalista de Fensa, que luego condena duramente la creación del cordón industrial[44].

De hecho, existe ahí una gran contradicción que emerge con más y más fuerza. Numerosos militantes y dirigentes sindicales buscan sobrepasar primero las limitaciones de la CUT, incapaz de responder a las exigencias del movimiento, pero también las deficiencias del gobierno, especialmente en lo que se refiere a la constitución del Área Social. Es sobre esta base que varios dirigentes sindicales de los cordones industriales se acercan a las posiciones más radicales del MIR o de la izquierda de la UP. Santos Romeo encarna ese proceso de radicalización, ya que pasa del ala izquierda del PS al MIR[45].

En la época, la ministra Baltra se refiere al dirigente de Perlak como teniendo «una actitud anticomunista, por lo tanto, antiobrera» y declara públicamente que los trabajadores de Perlak habrían «insultado a la Central Única de Trabajadores». Según Baltra, se trataría de militantes «insolentes y provocadores, especialmente a quien le pegué el bofetón. Abrieron un día a golpazos la puerta del gabinete del ministro»[46].

Encontramos aquí el vocabulario en contra de la extrema izquierda típico del PC,

pero más fundamentalmente, estas declaraciones reflejan el temor del gobierno de verse completamente desbordado por luchas sociales que quisiera controlar. Como lo recuerda con razón la ministra, no es solamente la posición del PC la que está en cuestión a través de este conflicto (como lo parece recordar hoy Hernán Ortega), sino más bien la estrategia del gobierno en su conjunto.

La comuna de Maipú vive nuevamente una explosión social a fines de mes, proceso que culmina con la creación formal del Cordón Cerrillos-Maipú. El 28 de junio los trabajadores de Maestranza Maipú (metalurgia) se declaran en huelga para protestar en contra de la mala administración de la empresa y por el retraso en su incorporación al Área de propiedad mixta. Al mismo tiempo, se desarrollan dos importantes reuniones en la comuna. La primera, impulsada por obreros de Perlak, Polycron y Aluminios El Mono convoca alrededor de diez empresas con el objetivo de discutir el problema de la integración al APS. Según el equipo del CIDU, durante esta asamblea, los trabajadores hablan de la voluntad de unir sus fuerzas para presionar por su integración al APS mientras que los empleados de las otras fábricas presentes se muestran dispuestos a solidarizar con esta demanda. Es esta solidaridad intersalarial el cimiento de todo el edificio del cordón. Constituye, por cierto, un rasgo destacado de toda huelga masiva, y en Chile esta unidad se encarna en la «olla común», que permite a los obreros en huelga resistir y difundir el eco de sus luchas en su entorno[47].

Como lo prueba el testimonio de Edmundo Jiles, esta solidaridad se extiende hasta los sectores productivos marginales. Este último recuerda muy bien las primeras reuniones del cordón, en las cuales participa junto a los dirigentes sindicales de Perlak, Polycron y Aluminios El Mono, y propone la solidaridad de su sindicato para la «olla común»[48].

Un segundo encuentro se lleva a cabo el 29 de junio de 1972. Se reúnen esta vez alrededor de treinta industrias. Participan militantes de toda la izquierda, desde maoístas hasta el PC. Sin embargo, el representante comunista se retira rápidamente denunciando que se trata de una acción en contra del gobierno, lo que provoca los abucheos de los otros militantes. Se decide finalmente, la ocupación de las principales vías de acceso a la comuna, en solidaridad con las tres fábricas. Es en esta asamblea que se constituye formalmente el Comando de Trabajadores de Cerrillos-Maipú, lo que corresponde a un momento de ascenso de las movilizaciones colectivas de la población de Maipú en el plano industrial, pero también del movimiento de pobladores[49].

Este «Comando coordinador de trabajadores del cordón Cerrillos-Maipú», luego toma el nombre, más simple, de «cordón Industrial Cerrillos-Maipú». Se articula en torno a una plataforma de lucha común que demuestra una fuerte radicalización política. El 30 de junio de 1972 es, de algún modo, el día «d» del Cordón, el día en que se transforma en un referente político nacional y adquiere un eco mucho más allá de su importancia a nivel local. Es el día de una movilización masiva que hace temblar a toda la comuna, a la prensa nacional, a la dirección de los partidos políticos, al gobierno y a los propietarios de fábricas de Maipú[50].

La base organizadora de la movilización es una coordinación de 18 sindicatos de diferentes industrias de la zona. Se levantan barricadas en varios puntos de acceso, el primero, en el sector de Pajaritos a nivel del puente «La Aguada». Participan trabajadores de Perlak junto a pobladores y campesinos del sector. Otro puente bloqueado es el de «Lo Errázuriz»[51].

Paralelamente, el camino a Melipilla es cortado frente a la fábrica Ralco: obreras de esta industria, acompañadas de otros trabajadores, impiden la circulación. Lo mismo ocurre frente a Carrocerías Franklin.

Esta acción logra desencadenar una sinergia de unidad. Rápidamente se reparten panfletos invitando a los obreros del vecindario a participar en las asambleas que se organizan. Santos Romeo recuerda que:

ya no sólo estaban en las barricadas los del Comando, industrias como Fantuzzi, Fensa, Sindelen, Mapesa, Polycron… se nos fue agregando mucha gente […] Más tarde, el Ministro de Economía, Carlos Matus, y el Director de Dirinco, Patricio Palma, anunciaron a los trabajadores la requisición de Perlak y la pronta intervención de Aluminios El Mono y Polycron […] sólo se opusieron [a las barricadas] dirigentes comunistas del sector […] muchos comunistas de base estuvieron con nosotros[52]

La primera movilización del «cordón para sí» es todo un éxito. Sus reivindicaciones se convierten, en ese momento, en tema de política nacional. El Mercurio, el primero de julio, cubre su portada con fotos de las movilizaciones del cordón para alertar a la población en contra del ascenso del extremismo marxista. Sin embargo, la partida aún no ha sido ganada por los trabajadores,

incluso en lo que se refiere al paso de Polycron y Aluminios El Mono al APS. Una semana más tarde, esta incorporación aún no se lleva a cabo. Los militantes que participan en la coordinación multiplican entonces las reuniones y deciden organizar una gran marcha que vaya hacia el centro de la ciudad, no sólo en apoyo a las fábricas en conflicto, sino también en solidaridad con los campesinos de Melipilla, que tienen a varios de sus dirigentes en prisión. Esta gran movilización concluye en una plaza en el centro de la ciudad frente a los tribunales de justicia, al Congreso y a El Mercurio. La manifestación es una iniciativa del cordón y toma un giro mucho más amplio, tal como lo declara un obrero a la revista Chile Hoy: «la movilización se originó para protestar contra todo el aparato burgués»[53].

La prensa de derecha no se equivoca y el 13 de julio de 1972, El Mercurio condena nuevamente la acción del «cordón Industrial Cerrillos-Maipú» (denominación que reemplaza desde ahora a la de «Comando Coordinador»). Los meses de agosto y septiembre son, sin embargo, meses de reflujo del «cordón para sí», mientras que paradójicamente las estadísticas muestran un número importante de huelgas. Este desfase entre la combatividad en la base y la incapacidad coordinadora del cordón es claramente el fruto de las debilidades intrínsecas de esta organización embrionaria de poder popular.

Características del primer embrión de cordón movilizado

¿Cuáles son los orígenes del cordón industrial Cerrillos (CI Cerrillos) en tanto embrión de un «cordón para sí», tal como lo hemos intentado definir? La investigación oral demuestra que cada uno de los testigos, en función de la posición que ocupaba en la época, pero seguramente también de su ubicación social actual, tienen diferentes consideraciones sobre el origen de los cordones. Edmundo Jiles, por ejemplo, insiste sobre el hecho de que el «cordón para sí» no es el fruto de una intencionalidad política, sino más bien de la conciencia de clase de los trabajadores de Maipú:

Nació un poco así de forma espontánea tratando de dar respuesta a los problemas existentes en ese momento, no más. Después cuando empieza el debate político nosotros invitamos a los distintos partidos políticos de izquierda que componían

la Unidad Popular y la izquierda que no estaba en la Unidad Popular a conversar con nosotros […] lo que queríamos era defender los derechos de los trabajadores […][54].

La acumulación de esta «experiencia de clase» dentro de la fábrica pero también fuera de ella, desemboca en este intento de organización. En ese sentido, el peso de la sociabilidad obrera en el cinturón industrial y en los barrios aledaños es ciertamente importante. El rol de los clubes deportivos ligados a los sindicatos (por ejemplo el deportivo de INSA, de Pizarreño y los partidos de «baby fútbol» de Perlak), las canastas familiares, los aniversarios sindicales, de las juntas de vecinos o incluso las festividades populares barriales facilitan la cristalización de tal identidad sociopolítica y cultural (ver capítulo sobre poder popular y cultura). Permite la emergencia de solidaridades y «sociabilidades obreras»[55] más allá del fraccionamiento económico en el cual cada trabajador está inserto. Sin duda, esta experiencia de clase es también adquirida en el curso de las acciones colectivas pasadas. Partiendo desde ahí, el trabajo militante, la difusión de las ideas políticas, los repetidos intentos organizativos juegan un rol esencial en la preparación de la movilización y más tarde, le dan contenido y producen una inflexión en tales movimientos.

La reivindicación de un «Comando» territorial de los trabajadores de Maipú sólo se transforma en realidad cuando los obreros de algunas industrias importantes de la zona entran simultáneamente en huelga. Es en esta ocasión que el PS local pone sus fuerzas en la balanza e intenta catalizar políticamente el movimiento hacia la formación del «cordón para sí». Esta táctica es planificada desde el Departamento Nacional Sindical de ese partido (Denas) y es impulsada por socialistas tales como Rafael Kries, Rafael Valverde o Enrique Morales. Estos dirigentes del Denas comprenden el potencial presente en dichas movilizaciones. Invitan, primero, a los sindicalistas socialistas locales a participar y «envían» también militantes, generalmente estudiantes, a los cordones industriales (CI) para apoyarlos[56].

Recuerda Rafael Kries:

El DENAS era una dirección política sindical, donde había confluido por casualidad varias tendencias del PS […], ese Denas era un centro de discusión, donde se definían políticas pero también donde se discutían con la dirección

política de los socialistas y con estas direcciones nacionales de la CUT… En algunos gremios donde los socialistas tenían influencia, fue una bisagra muy importante, porque ahí por primera vez se habló de los cordones industriales, y de los meses anteriores obviamente al fin del 71 y el 72, algunos discutíamos sobre el tema del poder dual, una estrategia, en qué punto podía seguir por el cauce simplemente institucional, sin que se planteara el problema de fondo, y entonces había una discusión bastante abierta, respetuosa, pero firme pues, no solo de argumentos, sino también de las fuerzas visibles a partir de experiencias y nexos que eran distintos en que se recogía esa información[57].

Si el FTR local y los maoístas sólo logran movilizar a algunos centenares de personas a nivel de Maipú antes de junio de 1972, más tarde son varios miles de trabajadores los que responden al llamado del cordón. A partir de esa fecha, sobre los 46 mil trabajadores de la comuna, el cordón se apoya en un pequeño grupo muy activo y movilizado, presto a responder a una acción en apoyo a las otras empresas o a participar en una manifestación. Este núcleo duro está compuesto por 300 a 400 personas y entre 2 mil y 5 mil personas en los momentos más importantes[58].

Y es efectivamente en este período que el PS toma el control del CI Cerrillos, movilizando masivamente a sus militantes. Hernán Ortega, sindicalista socialista es entonces elegido presidente del cordón[59].

Luego es designado administrador por el gobierno y su inserción «desde arriba» por parte del PS es criticada por trabajadores y el MIR, pero también por militantes socialistas. Tomás Inostroza, por ejemplo, habla pestes de sus compañeros, militantes que no provienen de la clase obrera[60].

En esos días, Fernando Quiroga es responsable de la sección del PS en Maipú y hace parte del ala «gradualista» de la UP. Según su testimonio, algunos de sus camaradas socialistas «equivocaron el rumbo», ya que la creación del cordón industrial significó «generar conflictos, claro, al Estado, al gobierno»[61].

Invocando esta misma razón, los militantes del PC, con gran presencia en fábricas como Sindelen o Fensa, también se oponen a este tipo de coordinación territorial.

Este debate atraviesa al conjunto de la UP y particularmente al PS, como bien lo

reconoce Hernán Ortega[62].

Quiroga, por su parte, señala que la ocupación e intervención de la industria metalúrgica Fantuzzi, a la cual él mismo se opone firmemente, constituye un punto de inflexión en esta disputa dentro de la sección local del PS de Maipú. El 17 de agosto de 1972, 340 obreros de esta fábrica declaran la huelga, la que finalmente durará 10 días, debido al no respeto de las demandas obreras y a la espera de la requisición que fue finalmente aceptada[63].

Hernán Ortega, a favor de la toma, es designado interventor de esta empresa. Quiroga que presenta a Ortega como su «segundo», señala que incluso lo hizo pasar a control de cuadros del partido, donde es sancionado «por no haber respetado los acuerdos políticos que nosotros teníamos»[64].

Algunos militantes socialistas de base, involucrados en estas luchas obreras, se acercan entonces un poco más al MIR. Esta convergencia parcial es en cambio evidente si se presta atención a los postulados del manifiesto del cordón Cerrillos, texto fundador difundido a fines de junio de 1972[65].

Allí encontramos varias de las reivindicaciones del MIR, las mismas que, semanas más tarde, tienen repercusión nacional cuando se lleva a cabo la Asamblea de Concepción. En primer lugar, este manifiesto declara que el cordón está listo para «apoyar al gobierno y al presidente Allende en la medida que éste interprete las luchas y movilizaciones de los trabajadores». El objetivo es insistir sobre el hecho de que el cordón no puede dar un apoyo a priori al gobierno. Por otra parte, el documento exige un plan de expropiación de empresas más amplio, ya que se incluyen no sólo las fábricas «estratégicas» sino también todas aquellas donde se realiza boicot a la producción o donde existe conflicto con los sindicatos, exigencia que entra directamente en contradicción con los límites fijados al APS. Esta plataforma demanda también la instauración del «control obrero de la producción a través de consejos de delegados revocables por la base, en todas las industrias, fundos, minas, etc.» Lo mismo se exige para campesinos y pobladores. El cordón incorpora así las reivindicaciones habitacionales de los habitantes de la comuna, la expropiación de los terrenos no agrícolas y la creación de una empresa de construcción pública bajo control de obreros y pobladores. Para terminar, llama a «repudiar a los patrones y a la burguesía refugiados en el poder judicial, la Contraloría, el Parlamento y a los burócratas del Estado» y a instaurar la «Asamblea Popular en reemplazo del Parlamento burgués». El manifiesto se convierte así en referencia obligada para

todos aquellos que más adelante reivindican el poder popular. Edmundo Jiles recuerda precisamente la redacción colectiva de un documento que abre «perspectivas hacia otros sectores de sindicatos, como el Cordón Vicuña Mackenna y el resto de la sociedad»[66].

Sin embargo, el discurso muy radical del manifiesto no debe enceguecernos sobre la realidad de la movilización de las bases. Este texto ha sido incluso calificado por los sociólogos del CIDU como producto de la «ingenuidad espontaneísta» del Partido Socialista. A partir de 1972, dentro del PS se desarrollan tendencias que empíricamente buscan salidas por fuera del aparato burocrático, sin por ello romper con el gobierno. A los ojos del Denas, las bases obreras de Maipú podrían ofrecer tal posibilidad. Esta disposición de los militantes a crear teóricamente un poder popular, esconde las dificultades para llevar a cabo resoluciones concretas que permitan enfrentar, en el terreno político, los numerosos obstáculos que se presentan, y –en primer lugar– aquellos provenientes del mismo gobierno. Hoy en día, Rafael Kries insiste a posteriori en que

Los cordones no surgieron del pensamiento reflexivo o especulativo de intelectuales, sino como producto de la práctica colectiva de trabajadores en un período de enfrentamiento social en Chile que había alineado a las clases sociales fundamentales y obligado a éstas a reconocer articulaciones políticas, más o menos representativas de su historia, luchas e intereses. Surgieron también en el terreno concreto, cuando ante un problema de fábrica, que enfrentaba a los trabajadores de una empresa con los empresarios de la misma, la solidaridad de clase se expresó por lado y lado, buscando una resolución favorable a sus intereses[67].

En la comuna de Maipú, el MIR no logra competir con el peso que tienen los socialistas y se mantiene bastante encerrado en una lógica político-militar que perjudica su desarrollo en el seno de los trabajadores movilizados. Finalmente, los maoístas del PC Bandera Roja provocan una reacción general de rechazo ante la distribución de panfletos que llaman a la insurrección obrera inmediata.

Este cuadro general, así como la dificultad para dotarse de una estructura estable, explica la gran desmovilización del cordón en los meses de agosto y septiembre de 1972. En un primer balance de esta complicada gestación del cordón

Cerrillos-Maipú, podemos señalar que finalmente éste adquiere un peso político y una figuración nacional distinta de lo que en realidad es. Su cobertura mediática y la imagen que un partido importante como el PS intenta darle, se encuentran en desfase con su estabilidad organizacional y su verdadero poder. En resumen, el cordón representa sobre la escena nacional mucho más de lo que objetivamente es, incluso localmente. Este análisis es esencial para comprender no solamente la historia de este primer cordón industrial, sino también la de los otros intentos que le siguen en octubre de 1972.

1 La noción de gran Santiago se entiende como el «gran núcleo urbano formado por las comunas interiores y por la parte urbana (construcción continua) de las comunas periféricas» (Instituto Nacional de Estadísticas, Evolución de la mano de obra chilena, Santiago, 1970)

2 Gutiérrez Roldán, Héctor, La población de Chile, París, Cicred, 1974.

3 Cordero, María Cristina, Sader, Eder, Threlfall, Mónica, Consejo comunal de trabajadores y Cordón Cerrillos-Maipú: 1972. Balance y perspectivas de un embrión de poder popular, Santiago, CIDU, Documento de trabajo nº 67, agosto 1973, p. 58.

4 Palieraki, Eugenia, Manifestations de rues à Santiago durant l'Unité Populaire, op. cit., pp. 12-13.

5 Minvu, Ordenanza Plan Intercomunal de Santiago, Santiago, documento nº 69, 1974.

6 Entrevista realizada en Santiago, 4 de julio de 2002.

7 Alarcón S., Cecilia, El sector industrial en la estructuración del espacio urbano de las comunas de Maipú y Cerrillos, período 1944-1990, Memoria de licenciatura, Santiago, Pontificia Universidad Católica de Chile, 1995.

8 Montalbán, Camilo, «Alcances sobre el origen histórico de Maipú». En: Ensayos de la Historia de Maipú, Santiago, Codeduc – ECO, 1996.

9 Alarcón S., Cecilia, El sector industrial en la estructuración del espacio urbano…, op. cit., pp. 108-118.

10 Cordero, María Cristina, Sader, Eder, Threlfall, Mónica, Consejo comunal de trabajadores y Cordón Cerrillos-Maipú, op. cit.

11 Henríquez G., Renzo, Cordón Cerrillos-Maipú. Experiencia en movimiento y ejercicios de poder popular (1972-1973), Memoria de licenciatura en Historia, Santiago, Universidad Arcis, 2008.

12 Mödinger, Jorge, «Cerrillos Maipú: el Cordón de la rebeldía», Chile Hoy, nº6, 20 al 27 de julio de 1972.

13 De acuerdo al Atlas comunal de Maipú (2015). En: [www.municipalidadmaipu.cl/wp-content/uploads/2015/12/Atlas-2015.pdf]. El estudio del CIDU menciona la presencia este mismo año (1970) de 117.000 habitantes, lo que parece ser un error.

14 Más de 5.500 asalariados trabajan para la industria en este sector que alberga a un poco más de 44 mil habitantes (Instituto Nacional de Estadísticas, Censo de población de 1970, Santiago).

15 En esta empresa, según recopilación de datos realizada por Renzo Enríquez, hay evidencia de pliegos de peticiones desde 1964 y conflictos laborales en 1969 (con persecución empresarial contra sus dirigentes sindicales).

16 Sader, Eder, «Cordons industriels et pouvoir populaire au Chili en 1972», Les Temps Modernes, París, junio de 1975, p. 1782

17 Silva, Miguel, Los cordones industriales y el socialismo desde abajo, op. cit., p. 136.

18 Entrevista realizada en Santiago, 6 de mayo de 2002.

19 Un trabajo de investigación en curso de Sebastián Leiva y Renzo Enríquez demuestra evidencia de tradición y repertorios de lucha sindical desde el año 1947 en adelante (por ejemplo con la formación de un sindicato industrial en INSA en 1947).

20 Estadísticas de la Municipalidad de Maipú de 1972, presentadas por el equipo del CIDU (op. cit., pp. 82-93).

21 Sader, Eder, «Cordons industriels et pouvoir prolétaire au Chili en 1972», Les

Temps Modernes, op. cit., p. 1782.

22 Entrevista realizada en Santiago, 1 de diciembre de 2001.

23 Entrevista realizada por Renzo Henríquez, Santiago, 22 de enero de 2015.

24 El GPM 4 corresponde a la zona Cerrillos, Las Rejas, José María Caro y su dirección está compuesta por 6 miembros, entre los cuales Javier Bertín (responsable sindical) y Guillermo Rodríguez (encargado político-militar).

25 Entrevista realizada en Santiago, 6 de agosto de 2003.

26 Ver los capítulos consagrados a este tema en la segunda parte.

27 Cordero, María Cristina, Sader, Eder, Threlfall, Mónica, Consejo comunal de trabajadores y Cordón Cerrillos-Maipú, op. cit., p. 92. No obstante, otros datos permiten relativizar esta aserción tajante, e INSA es recordada hoy en la comuna como una empresa de importantes luchas obreras, y en particular con dos grandes huelgas en 1956 y 1969 (Archivos de R. Henríquez G.).

28 El Siglo, 11 de julio de 1972.

29 Henríquez G., Renzo, Cordón Cerrillos Maipú, op. cit. pp. 18-58.

30 Sader, Eder, «Cordons industriels et pouvoir prolétaire au Chili en 1972», Les Temps Modernes, op. cit., p. 1784.

31 Garcés, Mario, Tomando su sitio…, op. cit., p. 438.

32 Pastrana, Ernesto, Threlfall, Mónica, Pan, techo y poder, op. cit., p. 111.

33 Entrevista a Javier Bertín realizada por Miguel Silva en Santiago, 1996 (op. cit., pp. 154-157).

34 Entrevista realizada en Santiago, 6 de agosto de 2003.

35 La fecha exacta varía según la prensa consultada, los autores y testimonios.

36 Mödinger, Jorge, «Cerrillos-Maipú: el Cordón de la rebeldía», Chile Hoy, nº 6, 21 al 27 de julio de 1972.

37 El Mercurio, 18 de junio de 1972.

38 Ver el relato de esta huelga en Punto Final, 26 de junio de 1972.

39 El Mercurio, Santiago, 22 de junio de 1972.

40 Consultar la entrevista realizada en Santiago, 22 de febrero de 2003 a esta dirigente de la CUT y diputada PC, nombrada por Allende en el Ministerio del Trabajo.

41 Carta de explicación de Santos Romeo publicada en Chile Hoy, nº 6, 21 al 27 de julio de 1972

42 La mayoría de los artículos de la prensa o testimonios hablan de una bofetada dada por la ministra.

43 Entrevista realizada en Iquique, 6 de noviembre de 2001.

44 Trinchera, 29 de noviembre de 1972.

45 Según Guillermo Rodríguez, Romeo se está incorporando al MIR en el momento del conflicto en Perlak (entrevista realizada en Santiago, 6 de agosto de 2003).

46 Chile Hoy, nº 6, 21 al 27 de julio de 1972.

47 Jorge Magasich menciona por su parte las «campañas del kilo» donde los obreros de las empresas de una zona aportan un kilo de cualquier mercadería a sus compañeros en huelga (Magasich, Jorge, Pouvoir formel, pouvoir réel…, op. cit., pp. 108-109).

48 Entrevista realizada en Santiago, 6 de mayo de 2002.

49 Cordero, María Cristina, Sader, Eder, Threlfall, Mónica, Consejo comunal de trabajadores y Cordón Cerrillos-Maipú, op. cit., p. 26.

50 La descripción de esta jornada se basa, excepto indicación contraria, sobre el reportaje de Sepúlveda, Lucía «Maipú: recado con barricadas», Punto Final, año VI, nº 162, 18 de julio de 1972 y Cordero, María Cristina, Sader, Eder, Threlfall, Mónica, Consejo comunal de trabajadores y Cordón Cerrillos-Maipú, op. cit.

51 Ver el testimonio de Edmundo Jiles sobre esta jornada (entrevista realizada en Santiago, 6 de mayo de 2002).

52 En Sepúlveda, Lucía, «Maipú: recado con barricadas», Punto Final, año VI, nº 162, 18 de julio de 1972.

53 Relato de esta manifestación en Chile Hoy, nº6, 21 al 27 de julio de 1972.

54 Entrevista realizada en Santiago, 6 de mayo de 2002.

55 Castillo, Sandra, Cordones industriales. Nuevas formas de sociabilidad obrera…, op. cit.

56 Ver los relatos de Luis Ahumada y Pablo Muñoz (entrevistas realizadas en La Serena, 24 de junio de 2002), y de Carmen Silva (entrevista realizada en Santiago, 20 de noviembre de 2001).

57 Entrevista realizada en Santiago el 23 de octubre del 2013. En: [http://cordonesindustriales.cl/los-protagonistas/#top]. Ver también: López D., Ana, Aguiar, Santiago, Yáñez, Valeria, Muñoz, Gabriel, Testimonios de los Cordones Industriales op. cit. y Kries, Rafael, El ABC del poder popular…, op. cit.

58 Javier Bertín habla de 2 mil personas, Edmundo Jiles de alrededor de 5 mil y Fernando Quiroga declara que atribuir 20 mil trabajadores movilizados en el CI sería completamente errado. Estas cifras de entre dos y cinco mil trabajadores movilizados son confirmadas por la prensa de la época, aunque la investigación del CIDU indica que durante las primeras movilizaciones exitosas del Cordón son sólo algunos centenares de asalariados los que se movilizan (ver Cordero, María Cristina, Sader, Eder, Threlfall, Mónica, Consejo comunal de trabajadores y Cordón Cerrillos-Maipú, op. cit.).

59 Entrevista realizada en Iquique, 6 de noviembre de 2001.

60 Ver el testimonio en Silva, Miguel, Los Cordones Industriales y el socialismo desde abajo, op. cit., pp. 154-157.

61 Entrevista realizada en Santiago, 1 de diciembre de 2001.

62 Entrevista realizada en Iquique, 6 de noviembre de 2001.

63 Datos basados en los documentos entregados en Cordero, María Cristina, Sader, Eder, Threlfall, Mónica, Consejo comunal de trabajadores y Cordón Cerrillos-Maipú, op. cit.

64 Entrevista realizada en Santiago, 1 de diciembre de 2001.

65 Ver el texto en Anexo nº 3.

66 Entrevista realizada en Santiago, 6 de mayo de 2002.

67 Kries, Rafael, El ABC del poder popular…, op. cit.

Capítulo 8

El «Octubre Rojo» chileno: una profunda crisis política

La «revolución desde arriba» en el impasse

La burguesía a la ofensiva

En los meses anteriores a la crisis de octubre de 1972, la inflación se duplica. La falta de repuestos industriales y la explosión del mercado negro debilitan los proyectos de reformas de la UP. Mientras que la inflación alcanza al 3,7% en enero de 1972, en septiembre llega a un 22,7%[1].

El Mercurio titula en su portada del 7 de octubre de 1972: «Alza del costo de la vida de 99,8%!». Esta tasa particularmente elevada sólo les conviene a las clases acomodadas que tienen los medios para especular y a los comerciantes que organizan el mercado negro. Un mes antes, el gobierno intentó restituir el poder de compra a los trabajadores, autorizando el reajuste de los salarios en un 100%. La vida cotidiana se ve marcada por interminables colas para ir en búsqueda de todo tipo de productos de consumo básico. Este estado de cosas provoca la exasperación, especialmente de las capas medias que no tienen los ingresos suficientes para acceder a los alimentos en el mercado negro y, al contrario de las clases populares, están menos organizadas y sobre todo menos acostumbradas al «racionamiento de hecho» que viven desde hace décadas importantes sectores del pueblo chileno[2].

Por otra parte, tal como lo señalan los sociólogos Manuel Garretón y Tomás Moulian, el estilo político de la UP, su discurso obrerista entra en conflicto con el universo cultural y subjetivo de la pequeña burguesía y de los intelectuales.

Pero, más que una cuestión de «estilo político», este distanciamiento progresivo de los sectores medios del proyecto de la UP, que culmina con su adhesión masiva a la huelga de octubre, demuestra la incapacidad de la izquierda chilena para crear una relación de fuerza capaz de mantener este apoyo social. Ya que si el sectarismo y los discursos de la izquierda pudieron jugar un rol en este alejamiento[3], es más bien la obsesión por la negociación con un centro político que ya no existe, lo que permite a la oposición concitar un apoyo en aumento de las capas intermedias de la sociedad. Después del fracaso de las conversaciones con la Democracia Cristiana, el gobierno continúa, a pesar de todo, con los llamados a la moderación. Allende decide incluso de romper las relaciones con el MIR.

Antes de la crisis de octubre, la UP se encuentra sometida a una fuerte presión por parte del movimiento obrero. Así sucede, por ejemplo, en la mina de cobre de Chuquicamata, la más grande del mundo a tajo abierto y símbolo de las luchas obreras en Chile[4].

La visita a este yacimiento por parte del carismático Allende permite calmar los ánimos, pero esto sólo hasta la explosión del conflicto en El Teniente, en 1973. En el sector industrial, los signos de agitación de la clase trabajadora también se multiplican. Es el caso de la fábrica Bata, en Peñaflor, tomada el 14 de septiembre de 1972 y donde Luis Torres, presidente del sindicato industrial y militante del FTR, solicita el aumento de los salarios y el desarrollo del control obrero[5].

En ese marco, y a pesar de las dificultades internas, el cordón Cerrillos-Maipú retoma el camino de la movilización colectiva. La administración Allende intenta responder a esta presión de la clase obrera del sector privado con una extensión del Área Social de Producción y nuevas estatizaciones de empresa. Sin embargo, esta dinámica no siempre encuentra una salida positiva como, por ejemplo el 7 de octubre, cuando gracias a una resolución del juzgado de Maipú, los carabineros desalojan violentamente la fábrica Carrascal perteneciente a las industrias químicas Hoescht hasta entonces ocupada por sus obreros[6].

Al mismo tiempo, las clases dominantes continúan haciendo esfuerzos para conseguir su unidad. El objetivo es intervenir en todos los frentes sociales según la táctica llamada de «resistencia civil»[7], línea de acción activamente apoyada por los servicios secretos del gobierno de los Estados Unidos y por varias multinacionales, quienes apoyan a los camioneros que se declaran en huelga

gracias al aporte de decenas de miles de dólares. Lo que explica, en parte, la capacidad del movimiento para mantener la paralización durante varias semanas: se entregan cerca de 100 mil dólares (USD) como parte de un fondo de más de un millón y medio de dólares destinado a terminar con la «vía chilena al socialismo»[8].

Desde el 14 de septiembre de 1972, el presidente Allende denuncia públicamente el «plan septiembre», destinado a desestabilizar a corto plazo al gobierno. Al mismo tiempo, oficiales de alto rango, como el general Canales, se pronuncian abiertamente en contra de la UP. Es la misma época en que la DC y el Partido Nacional organizan importantes manifestaciones encuadradas de manera paramilitar por el grupo fascista Patria y Libertad. Se organizan atentados en contra de las industrias del APS y las sedes de los partidos de izquierda. El «plan septiembre» sólo es frenado por la presión de la calle, después de que se lleva a cabo una de las más importantes manifestaciones de apoyo al gobierno. El proceso de polarización de la sociedad parece ineluctable mientras que la iniciativa es ampliamente cedida a la oposición.

El 10 de octubre, León Vilarín, presidente de la Confederación de Dueños de Camiones (Coduca), anuncia un paro de actividades ilimitado. El origen de este conflicto se encontraría en la oposición de los transportistas terrestres al proyecto gubernamental de formación de una Sociedad Nacional de Transportes, en el sur del país. En realidad, Vilarín no hace más que responder a la convocatoria de la oposición: de los siete puntos de las reivindicaciones de los camioneros, seis se refieren a temas de política nacional. Sin embargo, el desafío es mayor ya que la Confederación agrupa a cerca de 169 sindicatos de dueños de camiones (desde el chofer independiente hasta empresas con más de 30 camiones de alto tonelaje)[9].

En un país donde la red ferroviaria es casi inexistente y donde la carretera se despliega sobre más de tres mil kilómetros de norte a sur, el bloqueo tiene consecuencias inmediatas: combustibles, materias primas, productos alimentarios y cargas marítimas se encuentran en gran parte inmovilizadas[10].

La oposición aprovecha la ocasión, sobre todo cuando el desplazamiento a la derecha de la DC ha permitido el nacimiento de un movimiento unificado: la Confederación Democrática (CODE) que aglutina principalmente a la DC, al Partido Nacional y al Partido de la Democracia Radical. El 13 de octubre, otros gremios adhieren a la huelga. Ese mismo día, la Sofofa es decir, los grandes

patrones, decide «instruir a los industriales para que procedan a paralizar sus actividades en forma indefinida»[11].

Al día siguiente, los partidos de oposición declaran unánimemente su apoyo al movimiento. Los estudiantes de la Universidad Católica se unen a la huelga, luego los médicos, ingenieros y conductores de la locomoción colectiva[12].

Poco a poco, la oposición y los grandes propietarios industriales logran arrastrar a su molino a la pequeña burguesía industrial, comercial y artesanal, a importantes sectores de las capas medias así como a los representantes del gran comercio[13].

El país se encuentra dividido en dos grandes bloques, dejando muy poco lugar a los indecisos. En esta batalla, los grandes medios de comunicación dominados por la derecha chilena juegan un rol que la Unidad Popular subestima. Masivamente, la prensa y las radios, especialmente Radio Agricultura, preparan el terreno para un eventual golpe de Estado. El 25 de octubre de 1972, el llamado «Pliego de Chile» pretende reunir al conjunto de los descontentos con la política de Allende.

El gobierno en la tormenta de octubre

Frente a la ofensiva, el gobierno hace todo para permanecer dentro de los marcos legales. El 13 de octubre de 1972, Allende se dirige al país por radio y televisión e invita al pueblo a la «cordura» y a la «reflexión» en un momento en que la lucha de clases adquiere la forma de un enfrentamiento directo y violento. El país es dividido en ocho zonas de estado de emergencia y son los «altos jefes del Ejército los que tienen la responsabilidad de imponer el orden en sus zonas al lado de las autoridades civiles, es decir los intendentes». El presidente desea que los trabajadores se mantengan «en la más absoluta tranquilidad y calma». Les pide «producir y trabajar para el país», se opone a todo tipo de «acciones esporádicas o espontaneístas». Incluso exige «que no haya caminos ocupados, ni predios ni edificios públicos» con el fin de evitar toda «provocación». Reitera, por el contrario, su llamado a la colaboración con las Fuerzas Armadas. Poniendo como ejemplo el caso de las JAP, el gobierno se opone a toda

movilización destinada a abrir por la fuerza los comercios involucrados en la huelga: «las JAP no tienen esas facultades»[14].

El discurso es claro: los militantes de izquierda y los trabajadores no pueden organizarse para resistir por todos los medios a esta ofensiva, ya que para garantizar la estabilidad del país se debe confiar en las Fuerzas Armadas.

Mireya Baltra, ministra del Trabajo, comunista, recuerda que el paro de octubre generó numerosas discusiones dentro del gobierno: «la huelga de los camioneros, la veíamos venir y se discutió en el gabinete. Yo tenía una posición cerrada: quitarle la personalidad jurídica a la Confederación de Camioneros y crear una paralela inmediatamente. ¡Estás loca!, es lo que me dijeron»[15].

Puede ser que Mireya Baltra se otorgue hoy un rol más crítico, firme y previsor que el que realmente haya tenido en medio de la crisis. Sin embargo, es cierto que los dirigentes de la Unidad Popular parecen rendirse ante la evidencia: la única posibilidad de supervivencia del régimen se basa precisamente en el mantenimiento, cueste lo que cueste, de la producción y distribución, incluso utilizando la requisición forzada. De hecho, asistimos a un fenómeno de desarticulación del aparato estatal y del gobierno[16].

Este fenómeno es combatido con la creación, el 13 de octubre, de un «comando único» formado por los partidos de la UP, la CUT provincial y la Intendencia de Santiago. Este coordina tres frentes de acción: el abastecimiento, transporte y salud. La desarticulación es tal que organismos estatales como Dinac o Dirinco, incluso las Intendencias son directamente utilizadas por los militantes de los partidos de la UP, en apoyo a la importante resistencia que se organiza en la base. En algunos momentos, se asiste incluso a una cierta subordinación de los organismos estatales a las iniciativas tomadas por el movimiento social, lo que prueba que el centro de decisión política está basculando desde el aparato institucional y gubernamental hacia la sociedad civil y al movimiento obrero organizado, con una pérdida muy grande de autonomía del campo político. Un fenómeno ya observado en otros lugares, durante las grandes crisis políticas y coyunturas de fuerte «fluidez» (según la terminología de Michel Dobry), «con la emergencia coyuntural, al interior de ciertos sistemas institucionales, de ‘órganos’ que en las coyunturas ordinarias, sólo tienen un margen de autonomía muy reducido al interior de esos sistemas»[17].

Esto es cierto en lo que se refiere al abastecimiento. En numerosos casos, las

JAP o algunos funcionarios de Dirinco actúan a favor de la apertura de los comercios, bajo la presión de los habitantes, a pesar de las consignas oficiales. El 17 de octubre, El Mercurio titula en su portada «Dirinco descerrajó tiendas» con la ayuda de «Carabineros […] provistos de cascos». Se organizan también «frentes de la patria» para articular al personal técnico y profesional no huelguista. El trabajo voluntario, sobre todo de estudiantes, alcanza una magnitud nacional hasta entonces desconocida. El 16 de octubre de 1972, Carlos Lorca, secretario general de las Juventudes Socialistas informa a la prensa que miles de voluntarios trabajan en la carga y descarga de los camiones[18].

Este trabajo en el puerto de Valparaíso permite que se entreguen en Santiago más de 200 toneladas de leche en polvo[19].

Como lo muestran las imágenes de La Batalla de Chile, estas movilizaciones se hacen en un marco de gran entusiasmo y con la sensación de luchar colectivamente por una causa justa.

Según testimonio de Luis Ahumada:

[En el paro de octubre] hicimos unas demostraciones de fuerza para lograr organizar la movilización concreta de la gente hacia su casa y los lugares de trabajo; en ese tiempo los camiones, las micros estaban parados, entonces nosotros nos tomábamos un camión y le decíamos al dueño que lo devolveríamos apenas terminado el conflicto. Eso lo hacíamos para distribuir alimentos, para movilizar a los trabajadores y para que el país marchara...[20]

Transportes «alternativos» durante el paro de octubre de 1972



Fuente: IC. Testimonio H. Méry N° 18, 31 de octubre de 1972

El 16 de octubre, la coalición de la UP llama a una conferencia de prensa. Luis Corvalán declara que «la razón, la legalidad, la Constitución y el pueblo al lado del gobierno han tomado todas las medidas para enfrentar esta situación»[21].

A fines de octubre, los «Propósitos de ofensiva política» emitidos en conjunto por el PS y el PC son elocuentes de la radicalización en curso. Este texto pone de manifiesto su deseo de que se extienda el APS y se creen «Comandos Comunales» «entendidos como organismos de poder en el seno de la masa, que sin entrar a suplir los organismos de poder del Estado, canalicen las inquietudes y problemas de los trabajadores y del pueblo en general»[22].

En medio de la crisis de octubre, las direcciones de los dos principales partidos de izquierda perciben el desbordamiento en curso. Su preocupación para encauzarlo es, al parecer, tan grande que retoman la terminología, que hasta entonces sólo usaba el MIR, de «Comandos Comunales». Estas propuestas son sin embargo, rápidamente desterradas una vez pasada la crisis. Al mismo tiempo, el Secretariado Nacional del MIR lanza nuevamente su llamado a la constitución de los «Comités Coordinadores Comunales» para unificar obreros, juntas de vecinos, centros de madres y JAP con el objeto de organizar comisiones de transporte, autodefensa, abastecimiento, etc. Esta consigna levantada por el MIR desde inicios del año, se supone debe permitir «poner en actividad a las masas y desarrollar su iniciativa política, bajo la dirección de la clase obrera y los revolucionarios»[23].

Por su parte, las Fuerzas Armadas juegan un rol de intervención creciente. El 17 de octubre, en su diario el embajador de México en Santiago se pregunta «¿Dónde está el presidente Allende? Sólo se escucha la voz del comandante en jefe de la Zona de Emergencia […] ¿Comenzará a escucharse la voz militar con cada vez mayor frecuencia»[24].

La magnitud del desafío lanzado por las clases dominantes tiene gran repercusión en las fábricas y la consecuencia es que favorece la reactivación de una dinámica real de «poder popular constituyente». Sin embargo, esto no impide que el gobierno siga intentando mantener su táctica de integración

creciente de los militares, lo que conduce a la constitución del gabinete cívico-militar.

La «crisis sin retorno» del movimiento sindical

Al poner las esperanzas de estabilización del país en las Fuerzas Armadas, la dirección de la UP deja de manifiesto la gran debilidad intrínseca de su proyecto de transición. En esas condiciones, son los sectores militantes de base y más ampliamente, los pobladores organizados y las JAP, los trabajadores rurales y los obreros movilizados de los cinturones industriales que aplican, sin planificación, una praxis de lucha activa en contra de la huelga patronal. Este fenómeno de autoorganización ha sido reconocido por la mayor parte de los estudios recientes como una característica específica del «octubre rojo» chileno. En efecto, las acciones directas y a veces, violentas para acelerar las requisiciones, ocupar las fábricas o abrir los comercios se multiplican. Este movimiento de desarrolla fuera de todo esquema preconcebido por las direcciones de los grandes partidos, sobrepasando ampliamente a la Dirección Nacional de la CUT y más allá de las divergencias políticas del movimiento social. En la prensa encontramos numerosos ejemplos de la riqueza creativa de este desborde multiforme. Por ejemplo, el 26 de octubre, El Mercurio informa de la acción en Antofagasta de las «brigadas socialistas de obreros de la Industria Nacional del Cemento (Inacesa)» que «lanzaron piedras contra vehículos y carabineros […]. [Al mismo tiempo que] intentaron actuar en el descerrajamiento del comercio». Luego, el periodista señala «a las milicias obreras se han agregado los grupos de choque de comunistas, socialistas y miristas». Los militantes sociales y/o políticos escogen la acción directa. Como lo describe Hugo Cancino, es el conjunto del «sistema de consenso» y el marco institucional el que está en crisis[25].

¿Cuál es el rol de la CUT? Algunos autores han afirmado que habría permanecido impasible[26].

Este análisis es claramente exagerado. La dirección de la Central entrega inmediatamente instrucciones generales, llama a la movilización y al trabajo voluntario, pero tiene dificultades para una acción eficaz en la base, por el mismo hecho de la debilidad de su estructura territorial. El 21 de octubre, ante

tres mil delegados y el presidente Allende, se desarrolla en Santiago un pleno de las federaciones sindicales. En esa oportunidad, el primer mandatario Insiste de nuevo, en «la responsabilidad» de los trabajadores con Chile y en la imperiosa necesidad de «trabajar y producir más». En su conclusión llama a crear «Comités Coordinadores a nivel de cordón industrial para encarar el abastecimiento en materia prima, combustible y funcionamiento normal de todas las actividades»[27].

De hecho, se trata de un reconocimiento a posteriori de la necesidad de una coordinación que ya existía en el terreno en los cordones industriales. Siguiendo al historiador Samaniego, octubre de 1972 puede ser caracterizado como el momento de la «crisis sin retorno» del sindicalismo chileno[28].

Aparte de algunas iniciativas a nivel local, los comités coordinadores que nacen en los cordones industriales y los barrios populares lo hacen fuera de todo marco preestablecido por la CUT. El surgimiento de embriones de poder popular en la periferia industrial de la capital actúa como un catalizador de esta crisis que conduce al cuestionamiento de las capacidades de dirección de la Central. Como lo recuerda Hernán Ortega,

las estructuras tradicionales de la clase trabajadora son como todas las estructuras de la sociedad; o sea, las estructuras son tan antiguas, están anquilosadas en sus formas de funcionamiento; estaban, quizás, muy influenciadas por las corrientes políticas, eran verdaderos cuoteos las dirigencias, y los Cordones Industriales eran mucho más democráticos y mucho más directos en la elección de sus dirigentes[29].

No obstante, algunas secciones provinciales de la CUT muestran una mayor actividad en octubre de 1972 que la CUT de Santiago. En el caso de la CUT provincial de Valparaíso se ha visto que, desde mediados de octubre, impulsa la formación de cordones en todos los sectores industriales. Sin ninguna duda, este llamado oficial juega un rol importante de legitimación de la acción de los militantes. Sin embargo, incluso en Valparaíso, el papel de la central es ambiguo ya que una vez que pasa la urgencia, rechaza participar en los cordones. En otras regiones, las secciones provinciales de la CUT son sobrepasadas desde el inicio de la ofensiva patronal. Se sabe, por ejemplo, que a nivel de Santiago, las delegaciones obreras del cordón Cerrillos-Maipú logran modificar

completamente el contenido de los temas puestos en discusión por la dirección regional. En pleno desarrollo del paro patronal, la CUT provincial organiza reuniones-debates que dejan de lado la referencia a la paralización en curso (se propone una reflexión sobre las elecciones internas). Los delegados del Cordón, por su parte, ponen por delante la necesidad inmediata de organizar la resistencia y exigen rechazar la devolución de cualquier empresa estatizada, lo que finalmente es aprobado por la asamblea. Los obreros de la empresa Calvo ofrecen, en esta ocasión, 50 camiones de su fábrica para organizar el transporte y solicitan el apoyo de la asamblea, en contra del decreto de evacuación de su empresa ocupada. Las propuestas iniciales de la dirección local de la CUT son modificadas radicalmente por la intervención del Cordón[30].

Finalmente, durante octubre de 1972, 65 nuevas empresas son integradas al sector estatizado como consecuencia de las tomas, llegando así a un total de 232. Inicialmente, de estas fábricas sólo nueve estaban previstas en el plan del gobierno. Podemos estimar que del total de empresas nacionalizadas durante los mil días de la Unidad Popular, alrededor de un 20% lo fue durante la crisis de octubre[31].

Este movimiento de toma de fábricas concierne principalmente a empresas medianas y se complementa con el combate, que se lleva a cabo dentro de las principales empresas del APS, para mantener la producción.

La efervescencia proviene también de los barrios populares. Formas de abastecimiento directo son organizadas por coordinaciones entre las JAP locales, el movimiento pobladores, los centros de madres, los campamentos más organizados y los estudiantes que participan en los trabajos voluntarios. Se asiste, de algún modo, a un despertar popular, una explosión autogestionaria que permanece en las memorias militantes como un momento importante, intenso, vivido colectivamente.

Coyuntura fluida, movilizaciones multisectoriales e intentos de coordinación de clase…

Los comités coordinadores del poder popular urbano

El paro de octubre se caracteriza por una tendencia –transitoria– a la unificación de las clases dominadas y por la confluencia que se produce entre la praxis de las luchas del movimiento obrero y las de los pobladores movilizados, dentro de las coordinaciones de resistencia al paro patronal. Esta unidad temporal y parcial es una de las características destacadas de esta crisis de hegemonía (en el sentido en que la entiende Gramsci). En términos sociológicos, asistimos a mecanismos clásicos de emulación, intermediación y difusión de las luchas, comprendidos como la propagación y producción de nuevas conexiones entre varios sitios sociales de conflicto[32].

Estamos frente a una coyuntura política fluida y a movilizaciones multisectoriales, tales como las descritas por el politólogo francés Michel Dobry en su interpretación –ya clásica– de las grandes crisis políticas. Encontramos aquí los principales componentes del cambio de estado de los conjuntos sociales complejos en tales coyunturas. Entre estos, reducción de la autonomía de los sectores concernidos por las movilizaciones (desectorización del espacio social), ruptura del aislamiento (desenclavement) de los espacios de confrontación, gracias a lo que Dobry denomina «evasión de los cálculos», es decir que, en ese momento de gran movilidad y de generalización de las luchas, se pasa de una lógica de movimiento sectorial, corporativista, circunscrita a ciertos agentes sociales movilizados a una «disminución de la autorreferencia» de cada sector para hacer prevalecer consignas mucho más amplias y generales[33].

Hoy día, hacer un balance realista sobre el tipo de coordinaciones territoriales que surgen al calor de esta gran crisis política es una tarea de gran dificultad. En efecto, la prensa de izquierda de la época que se dedica a describir el fenómeno, a menudo lo hace condescendientemente cuando se refiere a estos «comités coordinadores», el mínimo esbozo discursivo de una coordinación de las bases es presentado como una coordinación efectiva. En otros términos, existe el peligro real de dejarse engañar por la propaganda de la época y tomar por una organización masiva de trabajadores una coordinación de algunas decenas de militantes de izquierda. Es decir, confundir los cordones en sí con verdaderos cordones para sí.

Si cruzamos las informaciones, pareciera que existen, en octubre de 1972,

algunas decenas de coordinaciones a través de todo el país (más certeramente 52, en lugar de un centenar, como muchos lo han afirmado hasta ahora)[34].

Las coordinaciones que existen antes de octubre, como en Cerrillos-Maipú, toman un carácter permanente, mientas que otras se forman en la emergencia. Algunas son el resultado de una toma de contacto entre diferentes dirigentes sociales, sobre todo sindicales; otras nacen en el curso de asambleas más masivas y bajo el impulso de las bases[35].

Según la amplitud de los grupos sociales que logran reunir, su grado de existencia real y la orientación política que le dan los militantes de izquierda, estas organizaciones adoptan nombres y características diferentes. Aunque, poco a poco, se imponen dos denominaciones que corresponden de hecho a dos formas de coordinación distintas: los «Cordones Industriales», que son una organización de la clase obrera y las «Coordinaciones Comunales» llamadas más tarde «Comandos Comunales» que agrupan a sectores sociales más heterogéneos. Angélica Silva y Patricia Santa Lucía proponen dos definiciones, los cordones industriales serían:

organismos de coordinación de todas las empresas de una zona o localidad (unidad territorial), constituidos por delegados elegidos por la asamblea de la empresa, exista o no un sindicato e independientemente del sector económico al cual pertenece cada empresa; mientras que los Comandos Comunales representarían organismos formados por todas las organizaciones de un sector o comuna. En ellos participan dirigentes sindicales o representantes de empresa, delegados de las juntas de vecinos y de los centros de madres, delegados de las JAP, de los estudiantes y según las comunas, delegados de organizaciones campesinas, además de otros delegados según las características propias del territorio[36].

Gracias a ciertos estudios realizados in situ, se pueden identificar efectivamente diferentes tipos de coordinación[37].

El primero corresponde a la unidad territorial de varios sindicatos de una zona industrial donde la clase obrera es hegemónica: los sociólogos a cargo de las investigaciones señaladas más arriba, los denominan «Comandos locales industriales», aunque en la práctica los militantes los llaman «Cordones

Industriales», como el de Cerrillos-Maipú ya descrito. Estas coordinaciones son, la mayor parte del tiempo, fruto del trabajo de los sindicatos de las fábricas más modernas y están animados por los sectores más jóvenes y radicalizados del movimiento obrero, especialmente las bases del PS, tal como sucede en Cerrillos, Vicuña Mackenna y Conchalí[38].

Otro tipo de coordinación está ligada a las luchas urbanas de los pobladores, recibiendo el nombre de «Comandos locales poblacionales» por parte de los mismos sociólogos ya citados. Incorporan a varias fracciones de las clases populares, así como a diversas organizaciones sociales (juntas de vecinos, centros de madres, clubes deportivos, JAP) y se agrupan en torno a objetivos relacionados con el abastecimiento y la distribución. Sin embargo, la unificación de estos diversos agentes sociales les otorga a los Comandos de Pobladores una connotación amplia que va más allá de su función específica, como es el caso, por ejemplo, de las juntas de vecinos, organismos creados por la DC.

Estas organizaciones, con una «naturaleza netamente vertical y circunscrita a funciones de orden secundario», asumen en la práctica tareas como el abastecimiento o la seguridad interna de un barrio[39].

Se debe añadir, además, que estos comandos de pobladores establecen relaciones con los sindicatos de fábricas para enfrentar el problema del abastecimiento y, por lo tanto, proyectan las posibilidades de una intermediación entre el sitio obrero y el sitio poblador. De ahí el tercer tipo de coordinación, aunque más bien parece ser un organismo coordinador potencial, incluso soñado por los militantes de izquierda. Este lograría sobrepasar el carácter territorial o local de estas organizaciones, para incorporar a varios sectores sociales en el seno del «Comando Comunal». Corresponde, en teoría, al esquema del poder popular que propone entonces el MIR (que habla de «Comando Comunal de Trabajadores»), es decir, la incorporación del conjunto de las clases dominadas en una praxis global, consciente y coordinada, que agrupa a obreros, pobladores y campesinos, así como a intelectuales y estudiantes.

Los cordones industriales y el poder popular como respuesta al paro de octubre según periódico del MAPU (Comité regional de Valparaíso)

EL COMBATE

ON LAS MASAS TODO SE PUEDE

MAPU

N° 1 VALPARAISO NOVIEMBRE

RDONES

USTRIA-

LES.

COMITES COORDINADO-RES DE PO-BLADORES

PODER POPULAR

CONSEJOS COMUNALES PESINOS

LA LUCHA POR EL PODER SE LIBRARA FINALMENTE EN EL ENFRENTAMIENTO IRRE-DUCTIBLE ENTRE DOS PODERES"

R. AMBROSIO

Fuente: El Combate, N°1, Valparaíso, noviembre de 1972

Existe entonces una suerte de polimorfismo de las coordinaciones populares durante octubre de 1972, aunque comparten características comunes. A nivel de Santiago, este tipo de organizaciones surge en las comunas de Macul (suroeste), Renca, Conchalí y Barrancas (norte y norponiente), San Miguel (sur), Estación Central y Santiago centro. Pero son, principalmente, con las coordinaciones de los cordones industriales de Maipú–Cerrillos y Vicuña Mackenna que surgen las iniciativas más importantes[40].

Asistimos igualmente a una propensión a la autoorganización en la mayoría de las ciudades y centros industriales del país. Así, en la provincia de Concepción se producen intentos de coordinaciones en Chiguayante y Tomé (centros textiles), Penco (industrias del vidrio y materiales de construcción), en el puerto de Talcahuano (centro siderúrgico, pesquero y metalúrgico); igualmente en el puerto de Valparaíso con diferentes experiencias; en el Norte Grande en torno a las empresas electrónicas y de montaje automotriz en Arica, o en el extremo sur del país, en la Patagonia –Punta Arenas–, alrededor de la importante empresa Lanera Austral[41].

De norte a sur, el país es recorrido por una onda que hace levantarse y organizarse a importantes sectores sociales movilizados para defender el proceso de conquistas sociales en curso: la acción colectiva alimenta una poderosa respuesta popular para oponerse al paro patronal.

Los Comandos Comunales y la coordinación de las clases dominadas: entre mito y realidades

En el gran Santiago, una veintena de comités coordinadores, aunque desigualmente, funcionan durante el paro de octubre y en las siguientes semanas[42].

Entre ellos, varios no sólo surgen de la clase obrera organizada en los cordones industriales. En esta coyuntura, un elemento aparece claramente: la colaboración de lucha, por cierto parcial, entre diferentes componentes de los agentes sociales movilizados. Así, participan organizaciones sociales provenientes de los barrios populares en quince de estos comités coordinadores: nueve están compuestos de modo mixto, aunque bajo la dirección de la clase obrera industrial organizada, entre los cuales cinco están exclusivamente ligados al movimiento de pobladores, sin relación con los sindicatos. Un décimo comando está vinculado principalmente a los sectores de empleados públicos del centro de la ciudad (administración, sector bancario) así como a organizaciones de la salud. Es esta coordinación la que, algunos meses más tarde, constituye la base del denominado «cordón Santiago Centro»[43].

Finalmente, los otros cinco comités coordinadores son cordones industriales en el sentido estricto, es decir, impulsados territorialmente por los sindicatos industriales.

Actualmente, es difícil evaluar la cantidad de militantes y la calidad exacta de las organizaciones sociales y políticas ligadas a esas coordinaciones. Tomemos un ejemplo de la zona norte de Santiago. Según un reportaje publicado en diciembre de 1972, una de las coordinaciones que habría alcanzado el grado más importante de diversidad social –y por lo tanto de coordinación entre los diferentes grupos sociales– sería el Comité Coordinador de Conchalí Área Norte. Llamado a veces cordón Conchalí o también comando comunal Conchalí Área Norte. Sus delegados declaran representar a 21 organizaciones sociales, de las cuales cuatro provienen del movimiento pobladores, dos de los sindicatos de empresas de gran tamaño, dos de organizaciones estudiantiles, dos de organizaciones de trabajadores agrícolas y el resto de pequeñas empresas y diversos talleres[44].

A pesar de su importancia –destacada por la prensa de izquierda– este dato debe ser relativizado, ya que este comité no parece contar con tal capacidad organizadora. Por lo demás, no ha quedado registrado en las memorias militantes y los pocos artículos que lo relevan tienen dificultad para dar ejemplos concretos de su accionar. En el curso de las entrevistas, es a veces confundido con el cordón Panamericana Norte, ubicado en una avenida paralela (pero que sólo surgió en 1973)[45].

Si se busca evaluar la cantidad promedio de organizaciones sociales que

participan, incluso puntualmente, en los comandos coordinadores más importantes, se puede hablar de un promedio de diez. Esta cifra parece bajar luego, ya que varias coordinaciones no pasan de ser simples tentativas, rápidamente abortadas[46].

Globalmente, estos intentos se traducen en una multiplicidad de experiencias. De hecho, existieron varios tipos de estructuraciones, impulsadas por dirigentes sociales locales y militantes de izquierda (principalmente del PS, MIR, MAPU e IC). Estos últimos a menudo toman la dirección, sin que sea siempre el fruto de elecciones en la base, sino más bien, y en general, de un acuerdo político en la cima[47].

De aquí surge la constatación –sobre la que volveremos más adelante– de un movimiento social cuyo espacio permanece muy débilmente autónomo del campo político partidario.

Antes de abordar más detalladamente los Cordones Industriales, revisemos los Comandos Locales Poblaciones que durante la UP son llamados Comandos Comunales. Según Sebastián Leiva y Fahra Neghme, sólo a nivel del gran Santiago podemos contar, entre la crisis de octubre y junio-julio de 1973, más de 30 Comandos Comunales o Coordinaciones Comunales[48], a los que habría que agregar siete Comandos Comunales compuestos exclusivamente por pobladores. Más allá de las confusiones posibles, creer que este impresionante cúmulo de organizaciones es capaz, en esa época, de articular territorialmente al conjunto de las clases dominadas sería caer en una visión falseada del poder popular urbano. Como lo constatan, desde 1973, los sociólogos del CIDU en el balance de su investigación en terreno: «fue imposible establecer el número exacto de Comandos creados en Santiago, debido a que un buen número de ellos tuvo una existencia efímera o no pasó más allá de la declaración de los partidos…»[49].

Como lo ha escrito Jorge Magasich a propósito de los Comandos Comunales y de la unidad obrero/pobladores, la «mistificación ha sido enorme»[50], un análisis crítico a posteriori que es compartido por ex militantes como Mario Olivares, por ejemplo[51].

El MIR es la principal organización que ha levantado la consigna de los Comandos Comunales (CC). Nelson Gutiérrez, después de la huelga de octubre, declara que éstos representan los «órganos embrionarios de un poder alternativo»[52].

Utilizando su inserción relativamente importante dentro de algunos campamentos, los militantes miristas trabajaron, mucho antes del paro de octubre, para favorecer la movilización de los pobladores. Hemos revisado el ejemplo del campamento

Nueva Habana. En torno a esta experiencia ejemplar, se forma el Comando Comunal de La Florida, creado a fines de 1971, y que juega a continuación un rol activo en la promoción del «poder popular»[53].

Esta coordinación es dirigida por Guillermo Farías y según éste reagrupa principalmente a los pobladores del campamento Nueva Habana (alrededor de 10 mil habitantes) y de San Rafael (18 mil personas)[54].

Para este militante, «los Cordones Poblacionales […] constituyen fuerzas de apoyo integradas por hombres, mujeres y jóvenes, para proteger los Cordones Industriales. Son los nuevos gérmenes del Poder Popular destinados a instaurar la sociedad socialista»[55].

Varios testigos –entre los cuales Abraham Pérez, miembro de la directiva de Nueva Habana– recuerdan que efectivamente los militantes de este campamento prestan ayuda y respaldo al Cordón Industrial vecino. Otro intento del MIR de creación de un Comando Comunal fue el de Estación Central, cuyo presidente es Juan Olivares (militante del MIR). En este sector, el GPM8 del MIR es muy activo y orienta el trabajo política zonal: además del papel relevante de Olivares (asalariado de la empresa estatal Seam Corfo), se puede citar a Fernando Ibarra que, quien trabajaba en la estatal IANSA e integra también el GPM8. La investigación de Sebastián Leiva confirma que este CC es uno de los principales organismos territoriales de este tipo liderado por el MIR[56].

Situado alrededor de la estación de ferrocarriles en el centro de Santiago, reúne a varios sindicatos industriales (empresas Enafri, Montero, El Agarga, Endesa), junto a las JAP, centros de madres, juntas de vecinos, CUP, etc.[57].

Ibador Castro, militante del MIR y del FTR, recuerda que las primeras reuniones destinadas a su formación se llevaron a cabo durante el mes de septiembre de 1972[58].

Aquí también se trata de la iniciativa de algunos militantes de izquierda (principalmente del MIR y del PS) y que parte en la industria Enafri, siendo el paro de octubre el que permite su reactivación.

El proceso fue reunir todos los sindicatos de una zona […] y no trabajar solamente con las industrias sino también con las organizaciones vivas del sector, como las JAP, los comités de la UP que había dentro de la empresa, los comités de producción también. Todos reunidos[59].

Podríamos citar también otra coordinación que el MIR llega a dirigir, el Comando Comunal de Barrancas[60] así como el Comando Comunal de Las Condes, creado a inicios de 1972 y que desarrolla una fuerte praxis relacionada con el abastecimiento[61].

El surgimiento de este tipo de coordinaciones es también producto de otras organizaciones situadas a la izquierda de la UP. Sergio Aguilar trabaja, a esa fecha, en Yarur, es dirigente regional de la zona sur de Santiago del MAPU[62] y recuerda cómo participó en la organización del Comando Comunal de San Miguel, el cual supo integrar, según Aguilar, a varias organizaciones sociales del sector. Se fijó como objetivo la requisición de vehículos para asegurar la distribución de las mercaderías, la vigilancia del barrio y el apoyo a las empresas ocupadas del sector[63].

En primer lugar, la idea es crear lazos entre las clases populares movilizadas a nivel local, permitir que se expresen las discusiones y solidaridad, es decir, y retomando sus palabras, obtener «la articulación de la sociedad que llamaremos sociedad civil y generar los mayores canales de participación»[64].

Por ejemplo, intentar unir a los pequeños sindicatos del calzado o de la industria textil de la avenida Santa Rosa, durante reuniones comunes con las organizaciones sociales y también con los estudiantes de la zona. Pero el proyecto y la perspectiva política se mantienen imprecisos. Su testimonio también confirma que a estas organizaciones les falta mucha autonomía en relación a los partidos y al gobierno. Además, para Sergio Aguilar, el primer objetivo de los Comandos Comunales es la defensa del gobierno y, sobre todo, la difusión de la propaganda del MAPU «hasta el último de sus habitantes»[65].

Su testimonio prueba que la organización de los Comandos Comunales está en estado embrionario en varios lugares. Los CC que comienzan a formarse, gracias a la efervescencia de octubre y durante el año 1973, tienen dificultades para consolidarse como reales canales de participación popular y, en consecuencia,

para alcanzar ese modelo «movilizador» definido por los sociólogos Pastrana y Duque, como también esa «lógica de ruptura» de la que habla Vicente Espinoza[66].

A pesar de todas sus limitaciones, las coordinaciones se desarrollan, al menos, durante todo el tiempo del paro de octubre y, en general, permiten apoyar la acción extrainstitucional de las JAP más radicales, la requisición de camiones, la autodefensa de los barrios, la coordinación del trabajo voluntario, etc. Durante octubre de 1972, la ofensiva de los «grandes» dueños de negocios es enorme (especialmente de la Cámara de Comercio), a tal nivel que incluso organizan violentas represalias en contra de aquellos que se atreven a abrir sus negocios (en Viña del Mar, los locales son destruidos o incendiados)[67].

La respuesta de algunos CC consiste en organizar «piquetes» de vigilancia para apoyar a los comerciantes no huelguistas. Una experiencia interesante es la de un comando de pobladores de Santiago que se enfrenta con la dirección de un supermercado. En este caso, esta lucha les permite aliarse con los pequeños comerciantes que se integran finalmente al Comando en tanto «Frente de comerciantes patrióticos». Se produce aquí un ejemplo concreto de una alianza social posible con la pequeña burguesía sobre la base de una relación de fuerza y de reivindicaciones inmediatas comunes, ligadas a la esfera de circulación del capital[68].

La distribución de mercaderías, el abastecimiento, el transporte, el apoyo a las fábricas ocupadas no son los únicos campos de acción de este movimiento poliforme. Por ejemplo, una de esas dimensiones notables es la de la «batalla de la salud»[69].

Durante el paro de octubre, la mayoría de los médicos y personal directivo dejan de trabajar. En esas circunstancias, con un intenso trabajo voluntario, estudiantes de medicina, trabajadores de base y voluntarios mantienen en funcionamiento los servicios de urgencia[70].

Así, se podrían multiplicar los estudios de casos. Es entonces correcto afirmar que la coyuntura de octubre es un momento en que se concretiza una tendencia de articulación entre la clase obrera organizada y el movimiento de pobladores. Aunque se posea poca información sobre lo que sucede en las provincias, podemos señalar que esta dinámica se percibe a lo largo del país. Se sabe por ejemplo, que coordinaciones equivalentes surgen en Penco, Tomé, Talcahuano y

Chiguayante[71].

Por otra parte, comandos como los que nacen a nivel de la conurbación Valparaíso-Viña del Mar, tales como los CC Reñaca Alto y Nueva Aurora podrían haber tenido su origen en las luchas de octubre[72].

Este tipo de coordinación sin embargo sólo se formaliza mucho más tarde, en el curso del año 1973. No se debe, entonces, sobreestimar esta conjunción de las clases dominadas y darle un aspecto orgánico y masivo. Abraham Pérez estima que en realidad se debe incluso relativizar la potencia de un CC como el que se formó en torno a Nueva Habana, aunque sea uno de los campamentos más organizados de Santiago[73].

Es también la opinión de Mario Olivares y Miguel R., ambos militantes del MIR: «Los Comandos Comunales existían en la cabeza de la gente, en la mía incluso, pero nunca funcionaron realmente»[74].

Estos testimonios concuerdan parcialmente con las evaluaciones críticas y autocríticas realizadas a posteriori por la dirección del MIR[75]. De hecho, la unidad de los sectores de las clases subalternas movilizadas y la formación de una coalición o intermediación entre varios sitios de conflicto tienen dificultades para consolidarse[76].

Esta falta de unidad es también y en parte, fruto de una táctica –histórica– del conjunto de la izquierda chilena que siempre ha considerado a los pobladores como una base de apoyo poco fiable[77].

Paralelamente, a medida que las reivindicaciones más urgentes son, en parte, reconocidas por el gobierno, que los campamentos se consolidan y transforman poco a poco en poblaciones, se constata una declinación de la lógica de ruptura desplegada anteriormente[78].

Es fundamentalmente después de diciembre de 1972, que aparece nítidamente una nueva «división de las tareas en el seno del movimiento de masas» entre clase obrera y movimiento de pobladores: este último se reorienta entonces hacia reivindicaciones más específicas y limitadas[79].

Este aspecto coyuntural del fenómeno de la desectorización del espacio social es por lo demás una cualidad característica de las crisis políticas, según Michel Dobry:

Es coyuntural en el sentido que no se cristaliza en instituciones que unifiquen duraderamente el espacio social […] Esta cuestión y esta distinción no deben, sin embargo, conducir a la idea equivocada de que las coyunturas fluidas no pueden dar lugar, en ningún caso, al nacimiento de instituciones o cristalizaciones institucionales originales que pueden eventualmente sobrevivir a una reabsorción de la fluidez en la cual aparecieron[80].

Es precisamente en ciertos cinturones industriales del país y en torno a la clase obrera organizada, que nacen los principales gérmenes de poder popular constituyente del país, formaciones que sobreviven después del fin de la crisis de octubre.

Las respuestas de la base: autoorganización obrera

La formación de nuevos cordones para sí

Entre los múltiples comités coordinadores que surgen durante el «octubre rojo» algunos se convierten efectivamente en Cordones Industriales (CI), es decir, en organismos que intentan articular territorialmente a la clase obrera y que son encabezados principalmente por dirigentes sindicales. Sin embargo, pareciera que solamente unos pocos llegan a funcionar realmente de manera estable y continua. A nivel del gran Santiago (ver anexos nº 12 y nº 13), sólo cuatro o cinco cordones son los que animan este movimiento y no varias decenas como ha sido, a veces, escrito: el Cordón Industrial Cerrillos-Maipú y el de Vicuña Mackenna, a los que se pueden agregar el CI O'Higgins y el de Macul.

Hemos visto que más allá del mito de decenas de miles de trabajadores respondiendo a su convocatoria, el CI Cerrillos-Maipú coordina realmente una treintena de empresas y moviliza algunos miles de personas durante sus más grandes manifestaciones (ver capítulo VI). En lo relativo al CI Vicuña Mackenna, su dirigente socialista, Armando Cruces, habla de cinco mil a siete

mil trabajadores movilizados[81].

En cuanto al CI O'Higgins, Sergio Chávez, trabajador de Indugas y militante del PS, estima que a mediados de 1973, habrían sido unas cinco mil personas las movilizadas en el Cordón[82].

Luego vienen, la coordinación de Conchalí-Área norte, el CI Macul, el Cordón Santa Rosa-Gran Avenida (que dibuja un tímido intento de coordinación en octubre y reaparece nuevamente en junio de 1973)[83].

El departamento sindical del PS (Denas), en el balance que realiza sobre el paro de octubre, subrayando la importancia de este fenómeno, reconoce indirectamente el carácter limitado de las formas de coordinación obreras[84].

Rafael Kries afirma en sus memorias lo siguiente:

Puede afirmarse que en su momento de mayor expansión, los Cordones fueron cerca de 110 organismos a lo largo del país, con una clase obrera aglutinada y organizada en sindicatos, grupos y en algunos de ellos en escuadras. En Santiago estas fuerzas estaban dispuestas en 5 cordones fundamentales, capaz de responder con una movilización orgánica del orden de 100.000 trabajadores[85].

No obstante, basándose en la revisión de prensa de este período y también analizando los eventos de fines de junio sobre los cuales volveremos, se pueden entregar algunas cifras menos masivas. Es posible estimar en 30 mil personas la cantidad de asalariados y militantes que se identifican con la acción colectiva de los CI y se movilizan en el gran Santiago, mientras que a nivel nacional y considerando todas las provincias, esta cifra puede llegar a duplicarse, incluso Jorge Magasich adelanta una hipótesis «alta» con un total de cien mil personas de norte a sur[86].

Pero la mayor parte del tiempo, son sólo algunas decenas de personas las que participan en las asambleas de los Cordones y discuten sus orientaciones. Por ejemplo, Eugenio Cantillana, presidente del CI Macul, describe reuniones en los locales del sindicato de la fábrica Rittig, que convocan entre 100 y 150 personas como máximo[87].

Como se ha explicado a propósito de Cerrillos-Maipú, si la coyuntura de octubre

de 1972 acelera la tendencia a la organización territorial de los trabajadores, son múltiples factores históricos los que entran en juego en la formación de cada Cordón. Podemos destacar sin embargo que varios intentos de coordinación tuvieron lugar antes de octubre de 1972 en cada uno de los Cordones Industriales. Por ejemplo, el Cordón Macul tiene orígenes anteriores, ya que en esta comuna un «Comando Coordinador de Macul» (Cocoma) se organizó durante el año 1969, con el objetivo de apoyar al movimiento estudiantil y unirse a los trabajadores y pobladores. Eugenio Cantillana, dirigente sindical de Rittig y militante maoísta del PCR y Manuel Valdivieso, también dirigente sindical del sector textil (industria Pichara) y miembro del PCR, están a la cabeza de este movimiento[88].

Rigoberto Quezada, militante socialista y administrador del monopolio textil Sumar Poliéster en la zona del Comando Comunal San Miguel, recuerda la tendencia «natural» a la coordinación entre sindicatos. Según éste, la idea de un Cordón habría surgido en el año 1968[89].

En Vicuña Mackenna, una suerte de Unión de los sindicatos también existe desde antes de octubre de 1972[90].

En efecto, la década de los años sesenta fue la de una maduración, lo que explica el surgimiento de los Cordones Industriales a mediados de 1972. De hecho, la aparición de los CI se debe sobre todo a que una fracción minoritaria de los asalariados organizados perciben, en la coyuntura de octubre, el potencial movilizador que representan tales articulaciones territoriales. Los trabajadores y militantes de la coordinación de Conchalí, el 13 de octubre, ocupan la avenida Independencia y movilizan las industrias de toda la comuna para exigir la libertad de los dirigentes detenidos en la fábrica Bata y para rechazar la devolución de la empresa Deva a sus propietarios[91].

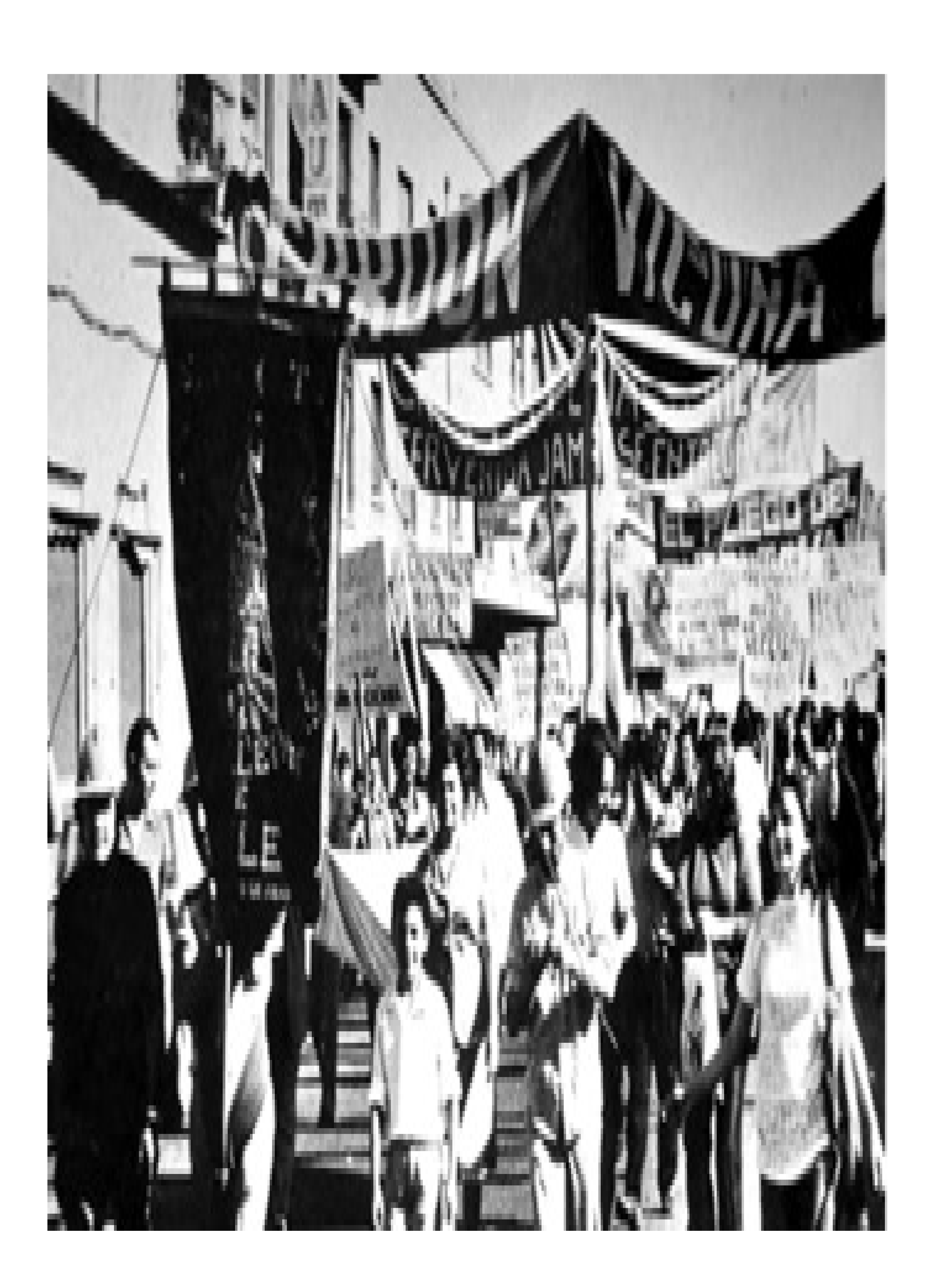
En lo que se refiere al CI Vicuña Mackenna, la iniciativa nace en Cristalerías de Chile[92].

Por supuesto, en esas empresas, no es el conjunto de asalariados los que participan en el CI, sino a menudo una minoría activa de sindicalistas, de militantes de izquierda. En relación a Cristalerías de Chile, José Moya señala que, según él, se trataba de un bastión del MIR, pero que, a pesar de existir un gran contingente del FTR, el presidente del sindicato industrial, también mirista, «nunca logró arrastrar al conjunto de su empresa al Cordón»[93].

Al contrario, Rafael Kries o los testimonios de Luis Ahumada y Pablo Muñoz subrayan la presencia de dirigentes obreros socialistas como Ismael Ulloa, muy reconocido como dirigente sindical de Cristalerías pero también ante los asalariados de la zona, para explicar las primeras dinámicas de formación del CI:

El cordón [Vicuña Mackenna] no nació de un conflicto determinado; no es que los obreros se hayan organizados principalmente por solidarizar sino que surge por iniciativa de los sindicatos más fuertes del sector (el sindicato de Cristalerías Chile y Elecmetal). El primer referente fue el de Cristalerías Chile, además que las reuniones, en un principio, se hacían en ese sindicato; posteriormente se hicieron en Elecmetal y otros sindicatos. Porque después se fueron incorporando muchos más sindicatos y en la medida en que habían más industrias en conflicto, más industrias intervenidas, también la participación de los trabajadores empezó a ser mucho más amplia. Se puede decir que nosotros, los activistas, lo impulsamos pero en verdad los que se organizaron fueron los trabajadores[94].

Movilización del CI Vicuña Mackenna con importante presencia de lienzos y trabajadores de Cristalerías de Chile


VICUNA

Fuente: Archivo personal de Ismael Ulloa O. (Cristalerías de Chile).

En: [www.laizquierdadiario.cl/Cordon-Industrial-Vicuna-Mackenna-formado-a-mediados-del-ano-1972?id_rubrique=1201]

Igualmente, para el cordón Vicuña Mackenna, la ocupación de la fábrica Elecmetal es uno de los elementos de cristalización. Esta es una industria ligada a un grupo financiero dominado por «grandes familias» de la burguesía chilena y en particular a los Matte-Alessandri, y es una fábrica ultramoderna para la época, con 180 obreros y 120 empleados que producen materiales y repuestos para las grandes minas de cobre. Según un reportaje realizado por el diario La Aurora de Chile, la dirección de la empresa intenta paralizar la producción, razón por la cual la fábrica es ocupada el 19 de octubre a las 21 horas. Este acuerdo ocurre «después de informar de todos los problemas a los trabajadores, quienes unánimemente votaron a favor de la toma», aunque sólo dos tercios de entre ellos respalden la demanda de traspaso al Área Social[95].

Elecmetal ocupada por sus trabajadores

POR EL FRENTE PATRIOTA
ECMETAL AL AREA SOCIAL

TRABAJADORES
MANO FIRME
Y AL ATAQUE!

Fuente: Posición, N°31, 1 de noviembre de 1972.

Esta ocupación de la industria provoca la previsible reacción de sus dueños, quienes intentan recuperarla por la fuerza la noche del 23 de octubre. La actitud combativa de los trabajadores que permanecen al interior así como la solidaridad del cordón impiden finalmente que se lleve a cabo esta recuperación, y la fábrica es rápidamente estatizada y un administrador público es designado[96].

Se coordinan entonces entre 30 a 40 industrias (y no 350 como lo declara el presidente del cordón, Armando Cruces, a la prensa militante argentina!)[97].

Los testimonios de Carlos Mujica (Alusa), Mario Olivares (Muebles Easton) y José Moya (IRT) confirman la importancia de este cordón industrial. Según Olivares, las primeras reuniones se desarrollan en el sindicato de Elecmetal con la presencia de unos treinta sindicalistas, principalmente vinculados al MIR y al PS. La conformación de esta coordinación, provoca inmediatamente una división de los militantes de izquierda al interior de su empresa, Muebles Easton: por una parte el PC, y por la otra el MIR y el PS, «muchas veces terminamos a puñetazos, discutiendo posiciones. Pero bueno, es la democracia»[98].

Por su parte, el cordón O'Higgins es liderado por la fábrica ex-Yarur, o más exactamente por algunos militantes de la izquierda de la UP y del FTR de esta empresa, como Armando Carrera (izquierda del PS), ya que aquí –como en todo el país– una fuerte proporción de obreros militantes del PC y de la DC se oponen terminantemente a la idea del cordón. Desde antes de octubre, ex-Yarur juega un rol de apoyo a las otras pequeñas fábricas de los alrededores[99].

Otra empresa activa del CI O'Higgins es Salfa (importadora de materiales agrícolas). Octubre –en palabras de un dirigente sindical de esta empresa– significa «un combate decisivo», ya que la fábrica es ocupada y continúa produciendo bajo control obrero. Se designa como interventor a un joven dirigente de la fábrica, Gabriel Loza, quien luego se afirma como uno de los fundadores de la coordinación del cordón. Poco a poco, el CI intenta coordinar a varias otras empresas del sector[100].

La primera tarea que los militantes se fijan es la defensa de las tomas de Indugas

y Salfa, pero incluyen también la organización de una cooperativa de consumidores así como la realización de un campeonato de fútbol de los cordones (sic)[101].

La empresa Salfa «tomada»


SACI SALINAS Y

Fuente: La Aurora de Chile, N° 30, 5 de julio de 1973

El «cordón rojo de Macul» se ubica en la comuna de Ñuñoa, sector que se caracteriza por la presencia de alrededor sesenta medianas y pequeñas empresas, entre las cuales, las más importantes son Pollack, Paños Continental, Rittig y Supertex[102].

Por su parte, el CI Cerrillos-Maipú también se moviliza y recupera una capacidad de reacción que parecía haber perdido. Durante la primera semana de octubre, como hemos visto, logra convocar a miles de asalariados a una marcha en el centro de Santiago para demandar el paso al APS de las fábricas Bata y Calvo[103].

El 17 de octubre, una asamblea de trabajadores y sindicalistas de varias fábricas de la zona se proponen varias tareas concretas (con un fuerte acento en el abastecimiento de la población): refuerzo del poder de las JAP y conexión de éstas con la Dinac, requisición de comercios cerrados y protección para los que abren… Por otra parte, el desafío también es lograr hacer avanzar las formas de participación en las industrias manteniendo la producción (sea en el sector privado o en el público).

Esta tendencia se da principalmente en la capital, aunque también en algunas provincias. Varias ciudades conocen una dinámica similar, pero en una escala mucho más reducida. Como lo hemos mencionado ya, Arica, en la frontera con Perú y con una fuerte concentración de industrias electrónicas, conoce un inicio de Cordón Industrial. Por lo demás, en un balance sobre el paro de octubre, un boletín del Comité Central del PC menciona esta experiencia como una de las más dignas de atención. Este documento constata que «doce industrias en Arica, cuyos patrones intentaron paralizar, han sido ocupadas y puestas en funcionamiento por sus trabajadores, luego requisadas por el gobierno»[104].

En el otro extremo de Chile, en Punta Arenas –en plena Patagonia– la resistencia se organiza en torno a la gran empresa de producción de lana, Lanera Austral. Pero sobre todo, es Concepción, segunda ciudad del país, la que sigue el camino organizativo de Santiago. Aquí también, se puede constatar un pasado de luchas en la gran concentración industrial de Hualpencillo, cerca de Huachipato. En

1969, se multiplican las ocupaciones de terrenos y las movilizaciones por agua o vivienda son apoyadas por los sindicatos de la zona. La sinergia obreros/pobladores es facilitada, los contactos establecidos[105].

El gran puerto de Talcahuano también es un sector combativo, cuyos trabajadores no dudan en hacer presión sobre la CUT y los partidos de izquierda[106].

El cordón del sector de la pesca de Talcahuano busca su formalización y su asamblea constituyente se realiza después de octubre, el 2 de noviembre en el local del sindicato Ebner[107].

Luego, las dos coordinaciones forman el «Cordón Industrial y de la Pesca» Talcahuano. Por otra parte, también se forman cordones industriales en el puerto de Valparaíso, el único puerto de gran tamaño próximo a la capital, y en el balneario vecino, Viña del Mar. Aquí, es la CUT provincial, en manos del PS, la que emite una declaración –el 19 de octubre– y llama a constituir inmediatamente siete grandes CI clasificados por sectores geográficos, precisando su composición, estructura y función. Los cordones son definidos como «organismos de Defensa de la Clase» y órganos de «Información y apoyo interior y organismos de Movilización efectiva y de Coordinación con la Central Única de Trabajadores»[108].

En este caso particular, encontramos organismos públicos, bancos y empresas de la zona. Varios otros cordones, como lo veremos, toman cuerpo al año siguiente y sólo tienen unas semanas de existencia antes del golpe de Estado.

Más globalmente, lo que se requiere determinar es saber en qué medida estos cordones en formación efectivamente lograron mantener la producción y establecer el control obrero. ¿Cómo fueron capaces de asegurar el abastecimiento y la vigilancia de las fábricas? ¿De qué modo pudieron –o no– apoyar la praxis de abastecimiento directo en los barrios populares?

Los Cordones Industriales y la producción

Carmen Silva, que milita entre los cordones Cerrillos y Vicuña Mackenna, insiste sobre la ebullición por la que atraviesa la sociedad durante octubre 1972. Si nos atenemos a su testimonio, el grado de organización adquirido en el seno de los CI (en ausencia de toda planificación previa) es espectacular:

Fue una cosa maravillosa ¡casi todas las fábricas de Santiago funcionando sin patrones! Los obreros poniendo a andar las cosas más sofisticadas, diseñando zapatos, y vendíamos las cosas en la feria. A mí me tocó llevar los productos, ver cuántos obreros había en las fábricas e ir a buscarlos y dejarlos, íbamos con los basureros a buscar gas a Maipú y los llevábamos a todo Santiago. Los estudiantes iban a la estación a buscar verduras y las distribuían en las poblaciones, en las poblaciones había de todo[109].

Ciertamente, la resistencia obrera a la huelga de octubre surge primero en las grandes empresas del Área Social. En el caso de Sumar-Algodón, Juan Alarcón, recuerda:

... la empresa era un monopolio, no había problemas, estábamos preparados […] en un paro de los camioneros, donde paran las micros y toda la movilización, la gente llega atrasada o no va tal vez a sus lugares de trabajo. Pero nunca la empresa paró, siempre estuvimos en producción[110].

Neftalí Zúñiga, obrero comunista y administrador de Pollak, testimonia en el mismo sentido e insiste sobre la dimensión épica de esta resistencia de los trabajadores:

… nosotros tuvimos seis personas ausentes, nada más, todo el mundo llegó a trabajar. De Renca, de Puente Alto, de San Bernardo llegaron a trabajar, hacían su jornada y se iban a su casa. Nosotros procurábamos entregarles una buena alimentación, para poder venirse caminando a las cinco de la mañana, para llegar aquí a las ocho…[111]

Los asalariados de ese sector, más allá de las divisiones políticas, logran mantener la producción haciendo funcionar las fábricas del APS.

En el CI O'Higgins, los trabajadores de la ex-Yarur luchan también para mantener la producción. Estimulan la solidaridad con las pequeñas y medianas empresas, facilitan la reparación de los vehículos dañados por el sabotaje y prestan su inmenso garaje para proteger a los camiones del Cordón. Según Peter Winn, testigo de los hechos, ex-Yarur es capaz de movilizar en sólo algunos minutos a más de mil obreros armados de coligües (únicamente) para proteger la fábrica en caso de asalto. Una de esas brigadas, además actúa como grupo de choque para defender un local de la UP amenazado por las bandas de Patria y Libertad[112].

En todos los cinturones industriales del país, el movimiento obrero debe también combatir contra bandas armadas y bien estructuradas, financiadas por los grandes patrones, que intentan impedir toda resistencia a la paralización del país[113].

Los testimonios abundan sobre estos enfrentamientos y la revista Punto Final publica en noviembre una lista impresionante de todos los atentados que se llevaron a cabo durante el mes precedente. Tomás Inostroza recuerda que toda salida a la calle necesita un mínimo de preparación defensiva, usando linchacos, coligües, incluso algunas pistolas.

El Cordón Industrial juega un importante rol de apoyo a las movilizaciones. Como lo recuerda Luis Ahumada, militante del PS del regional Santiago centro y activista del CI Vicuña Mackenna:

Yo pienso que lo más importante que nosotros impulsamos a través del Cordón Vicuña Mackenna, fue llevar la solidaridad de pared a pared, de fábrica a fábrica. Eso era una cosa que, si bien es cierto, es innata en los sectores obreros, nosotros contribuimos a que esa solidaridad se manifestara en términos concretos: una fábrica solidarizaba con las luchas de otra fábrica vecina, no como anteriormente en que había casos en que una industria estaba con problemas y las industrias que quedaban alrededor no tenían a veces ni siquiera idea. Nosotros contribuimos a materializar esa solidaridad de obrero a obrero. Y, como estos cordones, llegaron a tener una expresión popular bastante amplia, posteriormente se fue tomando también como referente entre los pobladores de los sectores, de tal manera que cuando había una empresa en conflicto también recibía la solidaridad de organizaciones poblacionales de los alrededores[114].

Es también la opinión de Mario Olivares:

…armados con armas de puño, con pistolas, con revólveres y salíamos a expropiar las micros y esas micros las expropiábamos y las llevábamos al interior de las empresas que estaban en manos de los trabajadores, y con eso permitíamos, garantizábamos, que la producción no se parara; íbamos a buscar a los trabajadores, los llevábamos y los traíamos al lugar de trabajo[115].

¿Y cómo se movilizó el Cordón Industrial Cerrillos-Maipú? Hernán Ortega, entonces presidente del Cordón, califica las asambleas del CI realizadas durante octubre como «históricas»[116].

Al inicio de la huelga, las movilizaciones del Cordón logran imponer la intervención de empresas como Salinas, CIC y Codina. En CIC, los trabajadores mantienen la producción a pesar de la deserción de una parte de la dirección técnica, mientras que en Indura, los obreros obligan a los técnicos a quedarse bajo amenaza de despido[117].

Según la investigación en terreno del equipo de Eder Sader, CIC realmente funciona durante algunos días bajo control obrero. Es también el caso de algunas empresas como INSA (neumáticos), Sindelen o Fensa. Así como CIC, Desco y American Screw, después de ser tomadas, son requisadas por el gobierno. En varias fábricas del sector, el CI Cerrillos-Maipú facilita la instalación de comités de vigilancia y de producción en las industrias privadas[118].

Paralelamente, en todo Santiago y en algunas grandes ciudades, varias pequeñas empresas dinámicas, abandonadas por sus patrones, también intentan reorganizar la producción, el abastecimiento y su defensa. No se puede negar que, durante el «octubre rojo» chileno, mientras se multiplican las tomas y, en algunas fábricas, tienen lugar tímidas formas de control obrero, varios de los fundamentos de la acumulación del capital y de la propiedad privada de los medios de producción son puestos en discusión, transitoriamente. La alienación y la reificación que representa hasta entonces el trabajo asalariado, la separación entre el trabajador y el objeto de su trabajo, la creación de la plusvalía, todo esto es ampliamente cuestionado. La acción fundamental de los CI durante octubre de 1972 consiste en apoyar las tomas desde el exterior, facilitar el transporte de los trabajadores, organizar brigadas débilmente armadas y que pueden requisar algunos buses o

comercios cerrados, pero sobre todo capaces de informar y promover el encuentro de los dirigentes sindicales. En ningún momento, intervienen en tanto cordones en la gestión de la producción. Según Fernando Quiroga, sería incluso un error importante creer que todos los trabajadores se movilizaron en contra del paro patronal, incluso dentro del CI Cerrillos. Subraya, por el contrario, que la movilización fue insuficiente y que sólo una minoría se autoorganiza y «frena el paro»[119].

Para Neftalí Zúñiga, no solamente los CI no jugaron el que debería haber sido su rol (es decir, para él, la gestión y el mejoramiento de la producción), sino más bien al contrario, según este sindicalista comunista, contribuyeron a perturbar el buen funcionamiento de las empresas, multiplicando los llamados a las marchas y acentuando lo que denomina como un «vicio de ausentismo» (problema presente en varios testimonios): «Defender las empresas no era sacar a la gente a la calle a desfilar, porque parábamos las máquinas […]. Salían 200 trabajadores y a la marcha iban 50 y los otros 150 se iban para la casa, no sé si me entiende…»[120].

Se podrá objetar que estas opiniones son de militantes que se mostraron hostiles a la idea de los cordones. Sin embargo, incluso las de los militantes del MIR de Cerrillos, favorables a los cordones, reconocen que su capacidad de respuesta en términos de control de la producción es muy débil y que tuvieron que enfrentar importantes déficit en términos de participación de los trabajadores de «base»[121].

Desde la empresa IRT (con 800 asalariados en Santiago), José Moya (MIR) subraya que la participación real de los trabajadores a las convocatorias del cordón Vicuña Mackenna o a sus asambleas fue muy minoritaria, esencialmente restringida a los militantes de partidos: en los momentos de movilización del Cordón, «no éramos más de 100 y el resto se restaba o se quedaba en la empresa…»[122].

Los cordones industriales y la batalla de la distribución

En el llamado que realizan varias decenas de dirigentes sindicales socialistas en octubre de 1972, se señala que «los Comandos Comunales a través de las JAP

deben convertirse en organismos de control de la distribución y del abastecimiento»[123].

Este documento insta a seguir el ejemplo de empresas que hacen parte de los CI, como ex-Yarur, Fensa, Fabrilana y Comandari, que han sabido poner en funcionamiento un sistema de venta directa de su producción. En efecto, la resistencia obrera involucra también la distribución y comercialización de los productos. La pregunta al interior de las fábricas es la siguiente: ¿a quién se le va a distribuir? y ¿cómo se hará, si el conjunto del transporte está bloqueado y los comercios cerrados? La respuesta surge, nuevamente, de la inventiva militante y de diversas formas de autoorganización. A partir del tercer día de la huelga patronal, los obreros de Soprole (CI Vicuña Mackenna) se toman la empresa para mantener la distribución de la leche. En colaboración con organismos estatales, la producción aumenta y la leche se distribuye, mientras que el 18 de octubre la fábrica es intervenida por el Estado[124].

En la fábrica ex-Yarur, una asamblea de trabajadores decide no entregar telas a los comerciantes partidarios del paro patronal y eliminarlos de la lista de clientes de la empresa. Los trabajadores de Paños Continental, Pollak y Fanaloza toman la misma medida[125].

Paralelamente, se decide vender directamente la cuota de tela a la que tienen derecho los asalariados a pobladores y campesinos de la zona[126].

En el cordón Industrial San Joaquín, comités de trabajadores de la fábrica Sumar requisan camiones para organizar la distribución en San Miguel[127].

Asimismo, el cordón Vicuña Mackenna organiza todos los domingos una «feria popular». Varias empresas venden aquí directamente su producción a la población. A fines de octubre, los compradores de este mercado autogestionado sobrepasan las 600 personas diariamente[128], donde –según Mario Olivares– todas las empresas presentes venden casi a precio de costo sus artículos[129].

Otro ejemplo es el de los obreros de Fensa, Mademsa y de otras industrias de productos de línea blanca, quienes deciden vender directamente, para lo cual abren las bodegas y distribuyen sus productos a través de los sindicatos, centros de madres y juntas de vecinos. Los trabajadores de varias fábricas textiles hacen lo mismo con las telas, creando nuevos puntos de venta. En cuanto a los obreros del monopolio del gas doméstico, Gasco, con la ayuda del cordón Cerrillos,

utilizan los camiones para realizar jornadas de trabajo voluntario (carga, descarga y reparto de los balones de gas) bajo la protección del movimiento de pobladores organizado[130].

En Maipú, la distribución realizada por Dirinco se ve limitada por los estrictos principios de la distribución burocrática y del control policial de las largas colas ante los pocos comercios abiertos. Así, son los trabajadores movilizados de Perlak, Fensa, Indura, Fantuzzi e Insa los que abren los negocios y expropian los camiones paralizados. Posteriormente, como en Vicuña Mackenna, se organiza un mercado popular gracias a las industrias Fantuzzi y Perlak (conserveras). En la primera, se realiza la distribución de alimentos y en la segunda se inventa y produce una sopa especial para los niños[131].

Javier Bertín y Guillermo Rodríguez recuerdan las nuevas raciones de pollo, producidas y distribuidas a las familias gracias a Perlak. Incluso, en el ámbito político-militar, una empresa como Silleros empieza a fabricar cascos para los combates callejeros así como partes de granadas, proyecto que se ve interrumpido por el golpe de Estado…[132]

Por otra parte, en colaboración con los campesinos de Melipilla, productos frescos y conservas son directamente encaminados a los barrios populares de la zona. Cada industria de productos básicos lleva su producción (como Polycron, que distribuye papel higiénico). El CI tiene el proyecto de organizar una «feria popular» de mayor envergadura en el centro de la comuna, pero el alcalde (DC) apoyado por comerciantes y una banda de matones hacen fracasar –por la fuerza– esta idea[133].

A pesar de todo, varias industrias de Maipú continúan distribuyendo sus productos directamente. Incluso el cordón Cerrillos había previsto una segunda feria, pero el término del paro y la normalización cívico-militar ponen un fin abrupto a este tipo de iniciativas. Respecto de lo que sucede en el centro de la ciudad, una industria textil como Montero, que pertenece al cordón Estación Central, trabaja directamente con las JAP del sector. Muchas veces, el cordón trabaja con las mujeres de los asalariados de las fábricas, que son miembros activos de las JAP locales[134].

En Macul, el CI presiona a los comercios cerrados abriéndolos (violentamente si es necesario), tal como al supermercado Almac, en la población Santa Julia: una vez rotas las cadenas, el supermercado pasa a ser controlado por el comité de

pobladores y la junta de vecinos presentes[135].

El documental de Patricio Guzmán muestra bien el vigor de las medidas tomadas por los CI de Santiago para asegurar la distribución.

Otra dimensión de estos intercambios es el trueque organizado por los trabajadores del APS. Este sistema existe entre las empresas de esta Área –se intercambian, por ejemplo, neumáticos por conservas o un refrigerador– y también entre empleados del Área social y las poblaciones de sus alrededores. Teresa Quiroz recuerda que estas formas de distribución alternativa se desarrollan ampliamente debido a la escasez y que, en algunos cordones, se estructura un sistema de intercambio directo entre campesinos, las industrias y los pobladores de cada zona:

Había contacto con industrias; el azúcar se traía de Valparaíso. Primero empezó con los propios cordones, pero después se fueron buscando mecanismos. Por ejemplo, al final del periodo, cuando vino la huelga de los camioneros, lograron establecer contacto con el campesinado, entonces ellos llevaban sus productos y los campesinos traían... Por esta razón se venció la huelga de los camioneros, porque a los camioneros ya no les quedaba trabajo: había zonas que se juntaban los domingos, los sábados, donde el campesinado viajaba con sus productos y se hacía trueque[136].

Además se instalan economatos, una especie de pequeñas cooperativas internas a las empresas. Por ejemplo en Alusa, que hace parte del cordón Vicuña Mackenna, se compran productos básicos como el azúcar, que viene de Valparaíso, el té o varios miles de kilos de pastas de la vecina Lucchetti, para luego revenderlos muy baratos entre los mismos trabajadores[137].

El conjunto de estas prácticas permite combatir puntualmente la escasez en los barrios que tienen la suerte de tener importantes industrias del APS o una coordinación que realmente funcione. Sin embargo, ante la ausencia de una planificación nacional y de un control democrático en todos los niveles, estas formas de abastecimiento muestran también sus límites. Primero, son casi únicamente las empresas estatizadas o intervenidas las que tienen la capacidad para organizarse de este modo. Por otra parte, si creemos en los datos entregados

por la Comisión de Investigación de la Cámara de Diputados, algunos trabajadores y dirigentes sindicales se aprovechan de esta oportunidad para aumentar sus ingresos e involucrarse en la especulación[138].

Juan Alarcón reconoce que efectivamente hubo algunos «aprovechadores» de este tipo a los que se tuvo que combatir[139].

Por su parte, los partidos de izquierda también critican estos abusos, ya que tienden a acentuar las diferencias en el seno de la clase obrera y acrecientan los privilegios de los trabajadores del APS con respecto de la gran mayoría. Se asiste así a experiencias extremadamente ricas pero parciales, que tienen grandes dificultades para estructurarse. Estas iniciativas demuestran todas las potencialidades de los cordones industriales si hubiesen logrado tejer lazos sólidos con las comunidades aledañas, en particular con los pobladores y campesinos, y si hubiesen sido capaces de integrar más firmemente al proletariado del sector privado. Entre los intentos de aproximación del movimiento campesino con los cordones industriales se puede citar el encuentro que es organizado, en abril de 1973, entre los dirigentes del cordón Cerrillos-Maipú y el Consejo Comunal Campesino de Cautín[140].

Sin embargo, si se sigue el relato que hace La Aurora de Chile, no pareciera que se hayan tomado muchas medidas concretas en este encuentro.

1 Cifras citadas por Garcés, Joan en Allende y la experiencia chilena, op. cit., pp. 194-195.

2 Ver el testimonio de Teresa Quiroz. Entrevista realizada en Santiago, 18 de marzo de 2002.

3 Es la idea propuesta por el historiador Hugo Cancino y por Ingrid Seguel-Boccara en su estudio de las «pasiones políticas» chilenas (Seguel-Boccara, Ingrid, Les passions politiques au Chili durant l’Unité Populaire (1970-1973): un essai d’analyse systémique, París, L’Harmattan, 1997).

4 El Mercurio, Santiago, 5 de octubre de 1972.

5 El Siglo, 23 de septiembre de 1972.

6 El Mercurio, Santiago, 8 de octubre de 1972.

7 Mattelart, Armand, «La bourgeoisie à l'école de Lénine», Politique aujourd'hui, París, enero-febrero 1974.

8 Senado de los Estados Unidos, Acción encubierta en Chile 1963-1973, op. cit.

9 El sector privado controla 30 mil camiones contra sólo 17 mil del sector público.

10 Samaniego, Augusto, «Octubre al rojo: fulgor y agonía de la unidad de los trabajadores», Contribuciones científicas y tecnológicas, Santiago, Usach, Área de ciencias sociales y humanidades, nº 130, abril de 2002, pp. 1-22.

11 El Mercurio, Santiago, 13 de octubre de 1972.

12 El Mercurio, Santiago, 14 de octubre de 1972.

13 El Mercurio del 19 y 20 de octubre publica la lista del conjunto de organizaciones sociales que participan en el paro.

14 El Mercurio, Santiago, 13 de octubre de 1972.

15 Primera versión de la entrevista realizada en Santiago, el 22 de febrero de 2003, con Mireya Baltra.

16 Concepto tomado del análisis de la huelga de octubre realizado por un grupo de sociólogos de la Universidad Católica (Cheetham, Rosemond, Rodríguez, Alfredo, Rojas, Gastón, Rojas, Jaime, Comandos urbanos: alternativa de poder socialista, Documento de trabajo nº 65, CIDU, Pontificia Universidad Católica, Santiago, marzo 1973).

17 Dobry, Michel, Sociologies des crises politiques, op. cit., p. 127.

18 Comité Central del PC, Suplemento del boletín informativo del Comité Central del Partido Comunista de Chile, Santiago, 1 de noviembre de 1972.

19 El Combate, Valparaíso, nº 1, noviembre de 1972.

20 Entrevista realizada a La Serena, 14 de junio del 2002.

21 Comité Central del PC, Suplemento del boletín informativo…, op. cit.

22 PS y PC, «Propósitos de ofensiva política, Santiago», octubre de 1972. En: Farías, Víctor, La izquierda chilena…, op. cit., t.V, pp. 3306-3312.

23 MIR, Frente al paro patronal, Santiago, 18 de octubre de 1972 (Documentos internos, 1972).

24 Martínez, Gonzalo, Instantes de decisión: Chile 1972-1973, México, Grijalbo, 1998, p. 61.

25 Cancino, Hugo, La problemática del poder popular, op. cit., pp. 288-289.

26 Es el caso del historiador Jorge Magasich: Pouvoir formel, pouvoir réel…, op. cit., p. 135

27 CUT, «Resoluciones del plenario, Santiago», 21 de octubre de 1972, Chile Hoy, nº20, 27 de octubre al 2 de noviembre de 1972.

28 Cf. En tesis doctoral sobre Les stratégies syndicales de la «Central Única de Trabajadores», op. cit.

29 Entrevista realizada en Iquique, noviembre de 2001.

30 Cordero, María Cristina, Sader, Eder, Threlfall, Mónica, Consejo comunal de trabajadores y Cordón Cerrillos-Maipú, op. cit., p. 34.

31 Najman, Maurice, Le Chili est proche…, op. cit. Augusto Samaniego, por su parte, habla de un centenar de empresas integradas durante octubre de 1972 («Octubre al rojo», op. cit.)

32 Tilly, Charles, Tarrow, Sidney, Politique(s) du conflit, op. cit., pp. 351-353.

33 Dobry, Michel, Sociologies des crises politiques, op. cit.

34 Marta Harnecker habla de cien coordinaciones (Chile Hoy, nº26, 8 al 14 de diciembre de 1972). Estas cifras han sido retomadas por la mayoría de los autores. Sin embargo, si nos atenemos a los documentos internos del MIR, bastante fiables ya que no están destinados a la propaganda, habría 52 comités coordinadores en todo el país. MIR, Informe de la Comisión Política al Comité

Central restringido sobre la crisis de octubre y nuestra política electoral, Santiago, 3 de noviembre de 1972 (Documentos Internos – 1972).

35 Chile Hoy, nº20, 27 de octubre al 2 de noviembre de 1972 y Samaniego, Augusto, «Octubre al rojo», op. cit.

36 Silva, Angélica, Santa Lucía, Patricia, «Les Cordons Industriels: une expression de pouvoir populaire au Chili», Les Temps Modernes, París, enero 1975, pp. 675-847. Esta definición corresponde a la que utilizaba, por ejemplo, el departamento sindical del PS (Trinchera, nº 2, diciembre de 1972).

37 Investigación realizada en torno a 13 de estas coordinaciones territoriales en Valparaíso y Santiago (Cheetham, Rosemond, Rodríguez, Alfredo, Rojas, Gastón, Rojas, Jaime, Comandos urbanos…, op. cit.).

38 Ver el informe interno de la comisión sindical nacional del MIR: Octubre. Comités coordinadores y poder dual, Santiago, noviembre de 1972 (Documentos internos 2-A – 1973).

39 Ibid.

40 Ver anexos 12 y 13.

41 Chile Hoy, nº20, 27 de octubre al 2 de noviembre de 1972. Ver también los textos de Miguel Silva, Jorge Magasich y Hugo Cancino ya citados.

42 Pastrana, Ernesto, Threlfall, Mónica, Pan, techo y poder…, op. cit., pp. 120-121

43 El Cordón Santiago Centro corresponde esencialmente a una coordinación de trabajadores de los servicios y administración, especialmente funcionarios del sector público del centro de Santiago. La fecha en que surge este cordón ha sido fijada por la prensa en junio de 1973, cuando se produce el Tancazo.

44 Chile Hoy, 14 de diciembre de 1972.

45 Según Fernando Quiroga, responsable del PS en esta zona a partir de 1972, este cordón tampoco tuvo un desarrollo extremadamente importante (entrevista realizada en Santiago, 1 de diciembre de 2001). Es también la opinión de Jorge Magasich.

46 Reportaje publicado en la revista Punto Final, 21 de noviembre de 1972.

47 Ver el balance realizado sobre la estructuración y organización interna de los organismos de poder popular en la Tercera parte de este libro.

48 Estos Comandos Comunales o Coordinaciones Comunales (CC), serían los siguientes: Vicuña Mackenna, Macul, Panamericana Norte-Renca, San Miguel, Cerrillos, Estación Central, Conchalí – Área norte, Plaza Italia, Santiago Centro, Vizcachas-Open Door, La Granja, CC de la 5º y 6º comuna, Maipú, San Bernardo, Carrascal, CC de Trabajadores de Colina, de La Florida, Las Condes, de Lampa y Batuco, de la 2ª comuna, CC de trabajadores de Barrancas, de Quilicura, de María Pinto, La Cisterna, CC provisorio de la 8ª comuna, Quinta Normal, Ñuñoa Centro, Ñuñoa Oriente, Parque O'Higgins (Neghme, Farah, Leiva, Sebastián, La política del MIR…, op. cit., p. 219).

49 Cheetham, Rosemond, Rodríguez, Alfredo, Rojas, Gastón, Rojas, Jaime, «Estrategias de investigación». En: Comandos urbanos…, op. cit., anexo nº1.

50 Magasich, Jorge, Pouvoir formel, pouvoir reel… op. cit., p. 202.

51 Entrevista realizada en Santiago, 1 de mayo de 2003.

52 Chile Hoy, nº26, 8 al 14 de diciembre de 1972.

53 El Rebelde, 22 de diciembre de 1972.

54 Según su dirigente, en 1973, incluye a las poblaciones Pablo de Rokha, La Bandera, O'Higgins, 6 de mayo, Raúl del Canto y Santa Elena.

55 La Aurora de Chile, 2 de agosto de 1973.

56 Leiva, Sebastián, Teoría y práctica del poder popular… op. cit., pp. 147- 148.

57 O'Brien, Philip, Allende's Chile, Santiago, New York, Praeger Publishers, 1976, pp. 126-166 y Punto Final, 31 de julio de 1973.

58 Entrevista con Ibador Castro en 1996 (en Silva, Miguel, op. cit., pp. 221-222).

59 Ibid.

60 Según Christian Desbois, habría reagrupado hasta 10 mil personas, cifra muy exagerada (Desbois, Christian, Chili, 1970-1974, Réforme ou Révolution?, París, Gilles Tautin, 1974, p. 54).

61 El Rebelde, 7 de enero de 1972.

62 Durante la dictadura, fue miembro de su dirección.

63 Según Leiva y Neghme, el Comando Comunal de San Miguel también estableció contactos con grandes empresas como Sumar Polyester, Silberman y con organizaciones juveniles. Este último dato es confirmado por el testimonio de Sergio Aguilar (entrevista realizada en Santiago, 29 de mayo de 2002).

64 Entrevista realizada en Santiago, 29 de mayo de 2002.

65 Ibid.

66 Duque, Joaquín, Pastrana, Ernesto, «La movilización reivindicativa urbana de los sectores populares en Chile. 1964-1972», op. cit. y Espinoza, Vicente, «Historia social de la acción colectiva urbana», op. cit.

67 Cheetham, Rosemond, Rodríguez, Alfredo, Rojas, Gastón, Rojas, Jaime, Comandos urbanos…, op. cit., p. 46.

68 Ibid., p. 47.

69 Sobre el nacimiento de un «poder popular» en el campo de la salud, ver Bernauer, Ursula, Freitag, Elisabeth, Poder popular in Chile – am Beispiel Gesundheit, Freiburg, Laetare/Imba, Stichwörter zu Lateinamerika, 1974.

70 Joxe, Alain, Le Chili sous Allende, op. cit., pp. 178-179.

71 El Rebelde, 23 de octubre de 1972.

72 Tarea Urgente, 10 de agosto de 1973.

73 IC, Testimonio de Hernán Mery, 22 de diciembre de 1972.

74 Entrevista realizada en Santiago, 25 de enero de 2001.

75 Moreno, Roberto (Comisión Política del MIR), Consejos comunales de

trabajadores y dualidad de poder. Análisis y evaluación, Santiago, diciembre de 1972 (Documentos internos 2-a – 1973).

76 Tilly y Tarrow definen la formación de una coalición como el «establecimiento entre dos o varios actores hasta entonces distintos, de una coordinación visible y directa de reivindicaciones»; y una intermediación como la «producción de una nueva relación entre dos sitios hasta entonces separados o débilmente conectados» (Politique(s) du conflit, op. cit., p. 335 y p. 353).

77 Ya vimos cómo el MIR actúa del mismo modo, ya que desde 1971, después de un giro táctico hacia los sectores industriales, el campamento Nueva Habana deja de ser una de sus prioridades (ver capítulo seis, segunda parte).

78 Espinoza, Vicente, «Historia social de la acción colectiva urbana», op. cit.

79 Sader, Eder, Quevedo, Santiago, Algunas consideraciones en torno a las nuevas formas de poder popular en poblaciones, Santiago, CIDU-U, Pontificia Universidad Católica, Documento de trabajo nº 57, 1972.

80 Dobry, Michel, Sociologie des crises politiques, op. cit., p. 131.

81 Al cual se puede añadir el CI San Joaquín en torno a la fábrica textil Sumar, y que de hecho es una excrecencia del de Vicuña Mackenna (ver anexos 12 y 13).

82 De Frente, 6 de julio de 1973.

83 Balance realizado sobre la base de la revisión de la prensa del período, trabajos existentes y confirmado durante la recopilación de testimonios.

84 Trinchera, 29 de noviembre de 1972.

85 Kries, Rafael, El ABC del poder popular…, op. cit.

86 Magasich, Jorge, Pouvoir formel et pouvoir réel au Chili 1972-1973, mémoire de Licence d'histoire, Bruxelles, Université Libre de Bruxelles, 1980, p. 189.

87 Entrevista telefónica realizada desde Francia, 25 de julio de 2005.

88 Entrevista telefónica realizada desde Francia, 25 de julio de 2005.

89 Entrevista a Rigoberto Quezada en 1995 (Silva, Miguel, op. cit., p. 226)

90 Punto Final, 7 de noviembre de 1972.

91 El Rebelde, 30 de octubre de 1972 y 20 de noviembre de 1972.

92 Ver el testimonio de Arturo Martínez, dirigente de Alusa y delegado del Cordón (De Frente, 10 de agosto de 1973) y Rojas, Jorge, Rodríguez, Cinthia, Fernández, Moisés, Cristaleros, recuerdos de un siglo…, op. cit.

93 Entrevista realizada en Santiago, 20 de noviembre de 2001.

94 Entrevista realizada en La Serena, 24 de junio de 2002.

95 La Aurora de Chile, 25 de octubre de 1972.

96 La Aurora de Chile, 2 de noviembre de 1972.

97 Aquí también el peligro de extrapolación es importante entre el «cordón en sí» (alrededor de 350 empresas) y «cordón para sí» (algunas decenas). Cf. Cruces Armando, «Habla la revolución chilena», Avanzada Socialista, Buenos Aires, año II, nº 72, 22 de agosto de 1973, pp. 2-3.

98 Entrevista a Mario Olivares (en Silva, Miguel, op. cit., pp. 210-220).

99 Winn, Peter, Tejedores de la revolución, op. cit., p. 315.

100 Tarea Urgente, 23 de junio de 1973.

101 Trinchera, nº 2, diciembre de 1972.

102 Ver el testimonio de Tomás Inostroza (Santiago, 14 de julio de 2002) y Tarea Urgente, 3 de agosto de 1973.

103 El Mercurio, Santiago, 6 de octubre de 1972.

104 PC, Suplemento del boletín informativo del Comité Central del Partido Comunista de Chile, 1 de noviembre de 1972. Según El Rebelde, serían once las empresas ocupadas (11 de diciembre de 1972).

105 Lo que se corona con la formación de los campamentos Lenin, Esfuerzo

Unido y San Miguel.

106 Entrevista con Sixto Iturra realizada en 1979 por Magasich, Jorge, op. cit., pp. 133-134.

107 Trinchera, 29 de noviembre de 1972.

108 El Combate, Valparaíso, nº 1, noviembre de 1972. Destacados en el original.

109 Entrevista realizada en Santiago, 20 de noviembre de 2001.

110 Entrevista realizada en Santiago, 11 de junio de 2002.

111 Entrevista realizada en Santiago, 29 de marzo de 2002.

112 Winn, Peter, Tejedores de la revolución, op. cit., pp. 314-315.

113 Además de los fascistas de Patria y Libertad, la burguesía urbana organiza milicias paramilitares extremadamente bien estructuradas, en particular en el «barrio alto» (Punto Final, suplemento al nº 170, 7 de noviembre de 1972).

114 Entrevista realizada en La Serena, 24 de junio de 2002.

115 Entrevista realizada en Santiago, 1 de mayo de 2002. Es probable que este testimonio se refiera a la experiencia del 29 de junio de 1973, día en que efectivamente hay una movilización en todo el Cordón y no a lo sucedido durante el paro de octubre de 1972. (ver la cuarta parte, capitulo once).

116 Entrevista realizada en Iquique, 6 de noviembre de 2001. Ver también Henríquez, Renzo, Cordón Cerrillos Maipú…, op. cit., pp. 76-136.

117 Chile Hoy, 27 de noviembre de 1972.

118 Cordero, María Cristina, Sader, Eder, Threlfall, Mónica, Consejo comunal de trabajadores…, op. cit., p. 34.

119 Entrevista realizada en Santiago, 1 de diciembre de 2002.

120 Entrevista realizada en Santiago, 29 de marzo de 2002.

121 Javier Bertín y Guillermo Rodríguez. Entrevista realizada en Santiago, 6 de

agosto de 2003.

122 Entrevista realizada en Santiago, 20 de noviembre del 2001.

123 Manifiesto de los trabajadores socialistas, Para avanzar hay que destruir el poder burgués, Santiago, 23 de octubre de 1972.

124 Soprole hace parte de la lista de las 91 empresas «nacionalizables» y es el dirigente sindical Hernán Urra quien es nombrado Interventor (Chile Hoy, nº 21, 3 al 9 de noviembre de 1972).

125 Punto Final, 7 de noviembre de 1972.

126 Winn, Peter, Tejedores de la revolución, op. cit., p. 315.

127 Chile Hoy, 27 de noviembre de 1972.

128 Trinchera, 29 de noviembre de 1972. Hechos confirmados por el testimonio ya citado de Carmen Silva.

129 Silva, Miguel, Los Cordones Industriales…, op. cit., p. 267.

130 Trinchera, 29 de noviembre de 1972. Hechos confirmados por el testimonio ya citado de Carmen Silva.

131 Chile Hoy, 27 de noviembre de 1972.

132 Entrevista realizada en Santiago, 6 de agosto de 2003.

133 Cordero, María Cristina, Sader, Eder, Threlfall, Mónica, Consejo comunal de trabajadores…, op. cit., p. 35.

134 Silva, Miguel, Los Cordones Industriales…, op. cit., p. 268.

135 Es Tomás Inostroza quien toma la responsabilidad por esta «violación a la propiedad privada» (ver su entrevista realizada en Santiago, 4 de julio de 2002).

136 Entrevista realizada en Santiago, 18 de marzo del 2002.

137 Silva, Miguel, Los Cordones Industriales…, op. cit., p. 267.

138 Carta Informativa, nº 3, enero de 1973.

139 Entrevista realizada en Santiago, 12 de junio de 2002.

140 La Aurora de Chile, 19 de abril de 1973 y Chile Hoy, nº 48, 11 al 17 de mayo de 1973.

Capítulo 9

La normalización cívico-militar

¿Hacia la desmovilización de los cordones industriales?

La izquierda y el gabinete cívico-militar

La crisis de octubre representa una fase crucial en la evolución de las relaciones entre el gobierno de Salvador Allende y el movimiento social. Se produce, a partir de esta fecha, una fisura en el precario equilibrio existente entre la clase obrera, sus militantes y «su» gobierno, mientras que este último es empujado a tomar opciones decisivas a raíz de la parálisis económica del país. Se trata claramente de una crisis sistémica que, en el marco de esta coyuntura, pone en el centro del debate la cuestión de la relación entre el espacio de los movimientos sociales y el campo político-institucional. Siguiendo a Gramsci, podemos hablar de una crisis de hegemonía.

Este momento crucial de la UP demuestra las capacidades de la movilización colectiva que permitió el «fracaso del poder patronal»[1].

Existe en ese entonces una tendencia clara a la ruptura de los esquemas tradicionales de «hacer política». El término «poder popular», reivindicado por toda una fracción de la izquierda chilena, aparece como una realidad transitoria[2].

Podemos hablar del nacimiento de un «poder popular constituyente» o incluso de los antecedentes de una «dualización» del poder. La multiplicación de los intentos de coordinación de las clases dominadas, fuera de todo modelo preestablecido, responde también a un profundo vacío de dirección política de parte de los grandes partidos de izquierda. Sin embargo, la especificidad chilena es que esta experiencia, no prevista por los partidos políticos, se instala no contra

el gobierno, sino en la óptica de su defensa ya que éste todavía encarna, a nivel subjetivo, el proyecto de transición para la mayoría del movimiento obrero[3].

Es entonces exagerado hablar de generalización de Comandos Comunales en el sentido de verdaderos órganos de poder, pero en cada avance realizado por el «poder popular constituyente» se amplifica el desborde del gobierno y la relativa autonomización del espacio del movimiento social frente a los grandes partidos. Cada paso importante que realiza el poder popular es acompañado de una ruptura, incluso limitada, con la Unidad Popular[4].

Una fuerte solidaridad obrera, ganada codo a codo en el torbellino de la movilización colectiva, multiplica los acercamientos de las posiciones en el seno de las fábricas e interrumpe temporalmente, las divisiones políticas fratricidas.

¿Cómo el gobierno de la Unidad Popular hará uso de estas múltiples formas de autoorganización que lo respaldan? El 30 de octubre, el gabinete dimite y al día siguiente se publican las condiciones de los camioneros para llegar a un acuerdo. Entre ellas, ausencia de represalias y limitación institucional del Área Social (proyecto de ley Hamilton-Fuentealba)[5].

Allende, que durante todo el período del conflicto ha tratado de negociar con los huelguistas y la oposición, muestra que está dispuesto a realizar concesiones: el 2 de noviembre de 1972, forma un nuevo gabinete, dirigido por el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Carlos Prats, que es un militar constitucionalista bastante próximo a Allende. Con este cambio se incorporan tres altos dignatarios de las Fuerzas Armadas[6].

Los militares comienzan así a ocupar la primera línea de la escena política. La integración creciente del aparato sindical en el Estado tiene también su máxima expresión con la entrada de dos de los principales dirigentes nacionales de la CUT: Luis Figueroa (PC, en el Ministerio del Trabajo) y Rolando Calderón (PS, en el Ministerio de Agricultura). En lugar de profundizar el proceso, las primeras medidas del ejecutivo están claramente destinadas a tranquilizar a la clase patronal. Prats anuncia que la empresa de distribución privada (Cenadi) no será intervenida por el Estado. A continuación, este tipo de «contrarreforma» a contrapelo de los progresos obtenidos por la clase obrera durante octubre, se multiplican en cascada: desalojo del diario El Sur en Concepción, llamado a la restitución de los bienes ocupados después del 10 de octubre sin autorización del gobierno, desalojo de la fábrica Ferriloza y de las industrias electrónicas de

Arica, aplazamiento para marzo de 1973, de los «decretos de insistencia» para la estatización de las empresas previstas en la lista de las 91, etc.[7].

Todas estas medidas llevan a la elaboración del proyecto Prats-Millas, entre finales de 1972 y principios de 1973. Este plan elaborado por el entonces ministro de Economía (comunista) y el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas –ministro del Interior– prevé la devolución a sus antiguos dueños de numerosas empresas y una negociación con la DC sobre la extensión del APS. Durante el paro, más de 65 empresas fueron tomadas, puestas parcialmente bajo control de los trabajadores y, finalmente, requisadas por el gobierno (de las cuales sólo nueve formaban parte del programa de la UP). Después de la huelga, más de 232 empresas hacen parte del APS[8].

El objetivo explícito del plan Prats-Millas aprobado por el gobierno el 5 de enero de 1973, es encontrar una salida constitucional al duro conflicto existente en el parlamento desde 1971 sobre la definición de las tres aéreas de la economía, tensión aún más candente después del paro de octubre. Durante el año 1972, el gobierno multiplica las negociaciones hasta llegar a un primer acuerdo, al otoño de 1972, como lo recuerda Orlando Millas, en sus memorias[9].

El anteproyecto de ley prevé expropiar o requisar unas 49 empresas todavía no integradas al APS o mixta de la lista inicial de las 91; integrar 32 otras empresas consideradas como «estratégicas para la economía nacional, de acuerdo con la experiencia recogida en el paro de octubre» y, finalmente, que

Las empresas requisadas o intervenidas, pero que no revisten carácter monopólico, serían devueltas a sus propietarios, previo estudio de una comisión de casos de los problemas que podrían suscitarse al levantarse la requisición o intervención[10].

Finalmente, el proyecto enviado por el ejecutivo el 24 de enero de 1973 establece una primera lista de 54 empresas que pasarían al área social o mixta (entre las cuales Yarur algodón, Sindelen o Sumar) y una lista de 38 empresas «sujetas a acuerdos» en el parlamento antes de integrar el APS o mixta (donde destacan entre otras Comandari, la textil Polar o Paños Continental)[11].

El 25 de enero, Orlando Millas emite una declaración donde subraya:

El Gobierno reafirma su decisión de constituir el área social, insiste en el proyecto de ley sobre expropiación o nacionalización de las 90 empresas y agotará sus esfuerzos por integrarlas a esta área, poniendo término con ello a la dominación monopólica de la oligarquía financiera. En cuanto a aquellas empresas que están requisadas o intervenidas y que técnicamente corresponden a la definición del área social, el Gobierno, además de proponer una solución a través del proyecto de ley para el que solicitamos una tramitación más urgente, manifiesta, sin perjuicio de ello, su voluntad de negociar directamente con los propietarios.

No obstante, este proyecto si bien –como lo subraya de inmediato el PC– consiste en consolidar la conquistado, también deja en suspenso la situación de decenas de empresas «estratégicas» y sobre todo significa concretamente amenazar con devolver al sector privado –después de un estudio en comisión– no menos de 123 empresas que fueron tomadas o temporalmente requisadas al calor de las luchas de los últimos meses. En esta lista de 123[12], se encuentran pequeñas y medianas fábricas muy combativas y organizadas, como por ejemplo Perlak y Aluminios Las Américas a nivel del CI Cerrillos-Maipú.

En este sentido, el gabinete cívico-militar expresa la voluntad de Allende de dar muestra de moderación a ciertos sectores de la oposición (la DC), a las clases dominantes y a las capas medias, al mismo tiempo que busca salir del impasse jurídico-político en el cual se encuentra. En la mira del gobierno están también las elecciones parlamentarias de marzo de 1973. Paralelamente, este plan implica una desautorización a todos aquellos que entonces gritan en las calles, en las fábricas y pintan en los muros la consigna «crear, crear, poder popular!»[13].

En un primer momento, numerosos militantes y la mayoría de la clase obrera no lo perciben de este modo. Al contrario, este gabinete es presentado por los militantes de izquierda como el de la «mano dura» contra los sediciosos, como el del retorno a la estabilidad del gobierno para poder llevar a cabo su programa[14].

Pero la voluntad del gobierno de reposicionar el conflicto social dentro de los estrechos márgenes del sistema político tradicional, hace que el movimiento obrero retorne a sus antiguas divisiones. Con la distancia, se puede compartir el balance que hace Peter Winn, en el sentido de que la «revolución desde abajo» es entonces sacrificada por Allende en favor de un proceso de reformas

«pacíficas» controlado desde el Estado y su legalidad (al que denomina «revolución desde arriba»)[15].

Este ajuste ministerial provocará múltiples reacciones en el seno de la izquierda y de los Cordones Industriales.

Para el MIR, esta decisión del ejecutivo no hace más que confirmar su creciente debilidad así como su carácter «centrista» y reformista. El movimiento llama a «rechazar categóricamente la devolución de las empresas requisadas y nacionalizadas durante la huelga»[16].

El 24 de enero, con la presencia de delegaciones del Partido Socialista y de la Izquierda Cristiana (IC), el MIR y sus simpatizantes llenan el teatro Caupolicán. Miguel Enríquez realiza largas acusaciones en contra del gobierno, señalando que el nuevo gabinete es «la reafirmación del orden burgués. El respeto de la legalidad de los patrones». Y agregando que:

las masas populares buscan y no encuentran la conducción en el reformismo y, más aun, sufren los golpes de los retrocesos que les impone el gobierno. Comienzan entonces a organizarse autónomamente […] y así comienza a crear embrionariamente órganos de poder popular: los Comandos Comunales[17].

El MIR invita a la IC y al PS a participar en esta creación, recordando que ambos partidos «ya han manifestado su apoyo y han comprometido su esfuerzo en estos nacientes órganos de poder popular»[18].

Sin embargo, la dirección del PS rechaza categóricamente los llamados a la ruptura con el gobierno[19].

Aunque –de hecho– varios militantes socialistas se oponen abiertamente a esta salida de la crisis. El 10 de enero de 1973, Carlos Altamirano pronuncia un largo discurso sobre la situación política nacional. Desde la introducción, insiste en que «nada ni nadie será capaz de devolver los bancos e industrias que pasaron al Área Social» y que «nada ni nadie será capaz de suprimir los Comandos Comunales de las ciudades, los Cordones Industriales y los Consejos Comunales Campesinos»[20].

El 24 de enero, la Comisión Política de este partido, revela públicamente que no

han sido consultados para la elaboración del proyecto Prats-Millas y que no «comparte su contenido»[21].

Esta opinión es también la de la Izquierda Cristiana y del MAPU. «El proyecto de Millas es una transacción entre el gobierno y la burguesía» afirma tajantemente la IC[22].

Así, finalmente tres partidos de la UP se pronuncian en contra del proyecto gubernamental. En el intertanto (el 6 de diciembre de 1972), el gobierno ha sin embargo exigido a todos los miembros de la coalición, su colaboración explícita para que los trabajadores garanticen la restitución de las empresas tomadas…[23]

Para Allende, de nuevo, el único pilar político estable del ejecutivo, contra viento y marea, sigue siendo el Partido Comunista. Este partido es el principal promotor de la política de repliegue y negociación con las Fuerzas Armadas, sectores de la clase patronal y con la DC. En términos de historia comparativa, el rol del PC chileno es, en parte, similar al que –en 1936– jugó su homólogo en la España revolucionaria y, en ese sentido, un análisis paralelo de estos dos períodos podría abrir pistas de investigación interesantes[24].

Al mismo tiempo, algunos dirigentes comunistas reconocen explícitamente el rol de las nuevas coordinaciones de poder popular que surgieron durante octubre. Es el caso de Volodia Teitelboim, quien en su informe al pleno del partido, a fines de noviembre, los destaca y llama abiertamente a su desarrollo[25].

Allende se encarga de acallar los disensos. Según la expresión del periódico Clarín, le da «un duro tirón de orejas» al MAPU, cuyos militantes «desconocen la unidad de las actuaciones del Gobierno»[26].

También se produce un intercambio público de cartas con su propia familia política, donde el presidente reafirma:

que el contenido del Proyecto de Ley sobre definiciones del Área Social es absolutamente fiel al Programa de Gobierno y conforme con los principios que sobre la dimensión y función del Área de Propiedad Social ha venido sustentando la Unidad Popular desde el primer momento[27].

Finalmente, después de una reunión maratónica en La Moneda con todas las

direcciones políticas, la UP anuncia, el 29 de enero a las 22 horas, el fin de la polémica sobre los límites del APS[28].

Luis Corvalán triunfante, declara a la prensa, que hubo «un problema de interpretaciones, que felizmente está superado»[29].

Las movilizaciones de las bases y sobre todo de una parte de los obreros de los cordones industriales, rápidamente contradijeron esta evaluación.

El MIR y el «manifiesto del pueblo» del cordón Vicuña Mackenna

A inicios de noviembre de 1972, el cordón Vicuña Mackenna publica en algunos periódicos militantes de Santiago un largo manifiesto que ha sido aprobado en asamblea, en nombre de «la clase obrera, los pobres del campo y la ciudad» y de «todos los trabajadores de Chile»[30].

Reproducción del Manifiesto del pueblo en La Aurora de Chile

MANIFIESTO DEL CORDON VICUÑA MACKENNA

DESDE LA JOSE MARIA CARO

Fuente: La Aurora de Chile, N°4, 9 de noviembre de 1972.

Una breve búsqueda permite confirmar que se trata de una reproducción parcial del Pliego del Pueblo, difundido a fines de octubre en los cinturones industriales de la capital por los militantes del FTR, como respuesta al Pliego de Chile, presentado por la clase patronal, algunas semanas antes. Después del golpe de Estado, Edgardo Enríquez reconoce que

la iniciativa provenía del partido, pero el programa del pueblo no fue firmado por el MIR, para hacerlo fácilmente accesible […] Ese programa fue presentado por movimientos como el MCR o el FTR; fue discutido en los Comandos Comunales y en los Cordones Industriales y fue bien recibido por el pueblo y los sectores centristas, ya que el PS lo publica en sus propios órganos[31].

Una vez más, vemos la enorme importancia de las organizaciones partidarias en el espacio del movimiento obrero y en el establecimiento, tanto de sus orientaciones ideológicas como tácticas.

El manifiesto declara que

La experiencia de estos días ha demostrado que los trabajadores no necesitan de los patrones para hacer funcionar la economía. En sus desesperados intentos por paralizar el país, sólo han conseguido mostrar su carácter parasitario ante los ojos de todo el pueblo. Todavía más, se han quedado aislados, junto al puñado constituido por aquellos sectores medios privilegiados. La conclusión es clara: sobran los patrones[32].

Entre las «reivindicaciones del pueblo» enunciadas se encuentra, en primer lugar, el problema de la distribución. Se pide específicamente que las JAP tengan poder de control pero también de sanción y que los sindicatos tengan el derecho a participar. En su largo desarrollo, el texto abarca todo un abanico de reivindicaciones, especialmente relacionadas con la gran industria y el comercio.

Se exige el paso al Área Social de las empresas involucradas en el paro de octubre, de todas aquellas que tienen el monopolio de la producción y de la distribución así como la no restitución de las empresas ocupadas; el racionamiento del combustible y una mejor planificación de la economía; la aplicación del control obrero en la industria privada y la abolición del secreto bancario y comercial; la expropiación de las grandes empresas del transporte, de la construcción y de los fundos de más de 40 hectáreas de riego básico. Asimismo, se abordan los temas de salud, educación, vivienda, medios de comunicación e incluso del rol de la mujer en la sociedad. El último punto abordado por el manifiesto es el del imperialismo, con el rechazo al pago de la deuda externa.

En conclusión, se enumeran –uno a uno– los «derechos y tareas del pueblo». Entre los objetivos inmediatos fijados por el MIR, está la organización de los comités de autodefensa y el reforzamiento de las coordinaciones surgidas durante octubre. El propósito explícito es transformar las coordinaciones territoriales en Consejos Comunales de Trabajadores mediante la «incorporación activa» de las clases dominadas y, en los lugares donde éstos no existan, se debe comenzar por formar comités que puedan coordinar a los sindicatos, la CUT local, juntas de vecinos, a los pobladores, campesinos y estudiantes. En una segunda fase, la dirección de dicho comité debería promover la discusión en las asambleas de base y la elección de un consejo de delegados y finalmente, en una tercera fase, desarrollar formas de poder popular y «la democracia directa a través de las asambleas de base y la asamblea popular de la comuna» para «establecer definitivamente el Consejo Comunal de Trabajadores»[33].

Este programa es difundido masivamente en los barrios populares por los militantes del MIR/FTR y el 3 de noviembre de 1972 es adoptado por el cordón Vicuña Mackenna, como documento de discusión[34].

Sin embargo, los principales cordones industriales de Santiago se mantienen durante todo el período bajo la hegemonía incontestada del PS: los presidentes de los CI Vicuña Mackenna, Cerrillos, O'Higgins y San Joaquín, son, respectivamente, Armando Cruces, Hernán Ortega, Sergio Chávez y Víctor Muñoz, todos sindicalistas y militantes socialistas. La misma configuración, con algunas diferencias, es identificable en la mayoría de las coordinaciones territoriales más importantes del país (ver organigrama en la IV parte, capítulo doce).

Tres presidentes socialistas de los CI de Santiago



Armando Cruces (CI V. Mackenna), Hernán Ortega (CI Cerrillos), Sergio Chávez (CI O'Higgins)

Esta constatación es objeto de varias autocríticas internas por parte de la dirección del MIR. En un informe confidencial al Comité Central, nuevamente se destaca la distancia que existe entre el partido y el movimiento social. Algunos meses antes, un estudio interno solicitado por la dirección revela que sólo el 25% de los militantes del Secretariado Regional de Santiago tiene un contacto regular con los «frentes de masas»[35].

Además, en la base de la organización, es decir a nivel de los GPM, se identifica otra importante debilidad: aunque los «frentes de masas» crecen sin cesar, la cantidad de militantes se mantiene limitada. Este fenómeno acentúa diversas deformaciones –orgánicas y militantes– que afectan profundamente al MIR: la exageración del centralismo, las prácticas burocráticas, los rasgos de verticalismo. Por otra parte, favorece la aparición de un «militante deformado» (según la expresión utilizada en el informe) que hace activismo político desde fuera del movimiento social, como un profesional[36].

Es a partir de esta constatación que un militante como Enrique Ramírez pasa del MIR al PS para unirse, en el seno del CI Cerrillos, a Hernán Ortega y sus compañeros[37].

Javier Bertín y Guillermo Rodríguez, responsables del GPM4 en pleno cordón Cerrillos, se ven enfrentados a este problema cotidianamente. Según recuerdos de Guillermo Rodríguez:

La unidad operativa, así como la de «Informaciones» y de «Talleres» sentían que no aportaban en nada a la lucha política. Se dedicaba a prepararse técnicamente, sin incidir en la lucha política que arreciaba. La discusión daba vueltas y vueltas y no encontrábamos fórmula alguna para proponer un quehacer que nos permitiera ligarnos a las dinámicas de la lucha de masa[38].

Es lo que explica que a inicios de 1973, y en contra de la opinión de la dirección

regional, el GPM4 adopte una estructura más amplia, llamada Comité Local Cerrillos Maipú, que se propone romper la excesiva compartimentación de este organismo[39].

Finalmente, la dirección del MIR reconoce no haber sido capaz de proponer a los embriones de «poder popular», objetivos programáticos alternativos a los de la UP. No obstante, insiste más sobre el aspecto táctico y orgánico sin llegar a cuestionar su orientación política, especialmente aquella que consiste en «invitar» al gobierno a apoyarse «en las masas». En una evaluación confidencial fechada en diciembre de 1972, Roberto Moreno, miembro de la Comisión Política del MIR, señala que

mientras lo trabajadores no cuenten con los instrumentos orgánicos, concretos y reales a través de los cuales puedan ejercer directamente el poder en contra de sus enemigos, no abandonarán jamás el único instrumento –el gobierno– que existe en el terreno del ejercicio parcial del poder[40].

El Pliego del Pueblo no pasó de ser una proclamación y no logró constituirse en una alternativa política real a la dirección de los grandes partidos de la izquierda tradicional.

Se asiste entonces a un lento período de reflujo de los órganos embrionarios de poder popular. A nivel del CI Cerrillos, el equipo de Eder Sader constata que, después del anuncio del gabinete cívico-militar, sus miembros paulatinamente van desertando de las reuniones del cordón. Como lo admite Armando Cruces, lo mismo ocurre en el cordón Vicuña Mackenna[41].

Otro equipo del CIDU verifica similar fenómeno en Valparaíso[42].

En la nueva coyuntura impuesta por el gobierno, las bases socialistas de los CI tampoco empujan a su dirección para mantener en actividad las coordinaciones construidas. Si estos militantes demostraron durante octubre una fuerte decisión de lucha, su afiliación política no los incita a mantenerse en esta dinámica. Sin embargo, y en contra de la decisión del ejecutivo, varias fábricas siguen aún tomadas por los trabajadores: es el caso, por ejemplo, de Elecmetal, Salinas y Fabres, Coresa[43].

Es también el caso de varias empresas del sector textil que rechazan devolver las

fábricas. La prensa que apoya los CI, como La Aurora de Chile (PS), acompaña también a este movimiento con portadas de denuncia:

Portada de La Aurora de Chile, 1 de febrero de 1973

LA AURORA DE CHILE

Empresas al Area Social:

NI UNA MENOS, PERO SI MUCHAS MAS

En el norte grande, en Arica, estalla el descontento en las empresas electrónicas: los trabajadores rechazan el retorno a la normalidad y exigen la reintegración de los huelguistas[44].

El nuevo gabinete encuentra aquí una resistencia imprevista. A raíz de esta movilización, en la frontera con Perú, se realizan varias reuniones ministeriales y se envía una comisión –en la que participan generales y representantes de la CUT– a dialogar con los obreros[45].

A pesar de que a fines de noviembre se llega a un acuerdo, algunos asalariados mantienen la ocupación y es el ministro José Tohá quien debe viajar esta vez a Arica, el 8 de diciembre. Frente a una presión permanente del gobierno y ante la ausencia del apoyo resuelto de los partidos de la UP, las últimas empresas son devueltas a mediados de diciembre[46].

El conjunto de estas tensiones y conflictos entre el gobierno y una parte de la clase obrera –a pesar del reflujo de los embriones de poder popular–, anuncian las resistencias colectivas al plan Prats-Millas, a partir de enero de 1973.

¿Hacia el enfrentamiento entre el poder popular y el gobierno?

Rechazo del plan Prats-Millas y reconocimiento oficial de los cordones

El plan Prats-Millas –cuyo contenido hemos revisado– tiene como objetivo hacer retroceder al movimiento obrero para darle un aire a la clase patronal y poder comprometerse, nuevamente, en el terreno de la conciliación parlamentaria, antes de las elecciones de marzo. En lo que concierne a las relaciones entre el campo partidario y el movimiento sindical, esto conduce a situaciones extremadamente difíciles. A menudo, son los sindicalistas y militantes de la UP los encargados de transmitir a las fábricas las instrucciones de restitución de las

empresas ocupadas y de moderar el conflicto social[47].

Teresa Quiroz rememora que

En Cerrillos, definitivamente el gobierno no aceptó que todas las industrias fueran del área social, los obreros se tomaban el camino que daba a Valparaíso y se interrumpía el tráfico presionando. Era difícil entender que sus compañeros y compañeras que estaban en la fábrica del lado sí tenían guardería, estaban alfabetizándose, podía hacer trueque de productos y ellos no…[48]

Finalmente, la consigna no logra convencer y a mediados de enero, y bajo la presión de los trabajadores, los CI se movilizan en contra del plan Prats-Millas[49].

En el CI de Vicuña Mackenna se realizan varias reuniones para discutir sobre los conflictos en curso en Textil Andina y Ready Mix. Los sindicatos de Elecmetal, Corfan, Mellafe y Salas y Cristalerías de Chile forman el Frente Único de Lucha para el paso al APS[50].

El 25 de enero, el cordón Cerrillos-Maipú toma la iniciativa bloqueando el camino de Pajaritos y el que lleva a Melipilla. Las primeras acciones nacen en torno a la industria Copihue, con la presencia de los trabajadores de Perlak, Aluminios Las Américas, Fantuzzi, Policron, Fensa y otros. El Mercurio habla de la presencia de un centenar de personas[51] pero las barricadas son de un tamaño suficiente para que el intendente de Santiago y el subsecretario del Ministerio del Trabajo se desplacen.

Perlak en lucha para «no devolver su fuente de trabajo»


DEVOLVERA SU
DE TRABAJO POR
SIMPLES DECRETOS DE LEYES
A SARCOFAGO
PATRONAL
RIOS

Fuente: La Aurora de Chile, N°9, 8 de febrero de 1973.

Eran las 15 pm del 25 de enero de 1973. Las barricadas cubrían las entradas de acceso a la comuna de Maipú. Los trabajadores del Comando, nuevamente se habían tomado las principales arterias de ingreso a la comuna. Maipú estaba aislado. El objetivo de la acción: la eliminación del Proyecto de Ley sobre Área Social y la intervención de la conservera Copihue. La lucha por defender (Ej. Perlak) y aspirar (Ej. Copihue) a ejercer el Poder Obrero era evidente. La tensión con la política impulsada por la UP era concreta. Al día siguiente los obreros, nuevamente, se toman las calles de Maipú. Autos, neumáticos, y árboles eran las trincheras de los trabajadores. Palos y fierros en la mano eran las armas para vigilar la situación[52].

El cordón Cerrillos se moviliza en contra del plan Prats-Millas (1973)


-Exigimos
1º LA EXPROPIACION DE
CENADI
2º LA NO-DEVOLUCION
DE LAS EMPRESAS EN
MANOS DE SUS

Fuente: La Aurora de Chile, N°9, 8 de febrero de 1973.

El gobierno promete una respuesta rápida que no llega y reaparecen las barricadas. El 30 de enero, una marcha coordinada entre los CI Cerrillos, Vicuña Mackenna y Macul avanza hacia La Moneda, al ritmo de la consigna «trabajadores al poder!»[53].

Los asalariados de la construcción se movilizan con el cordón Cerrillos[54].

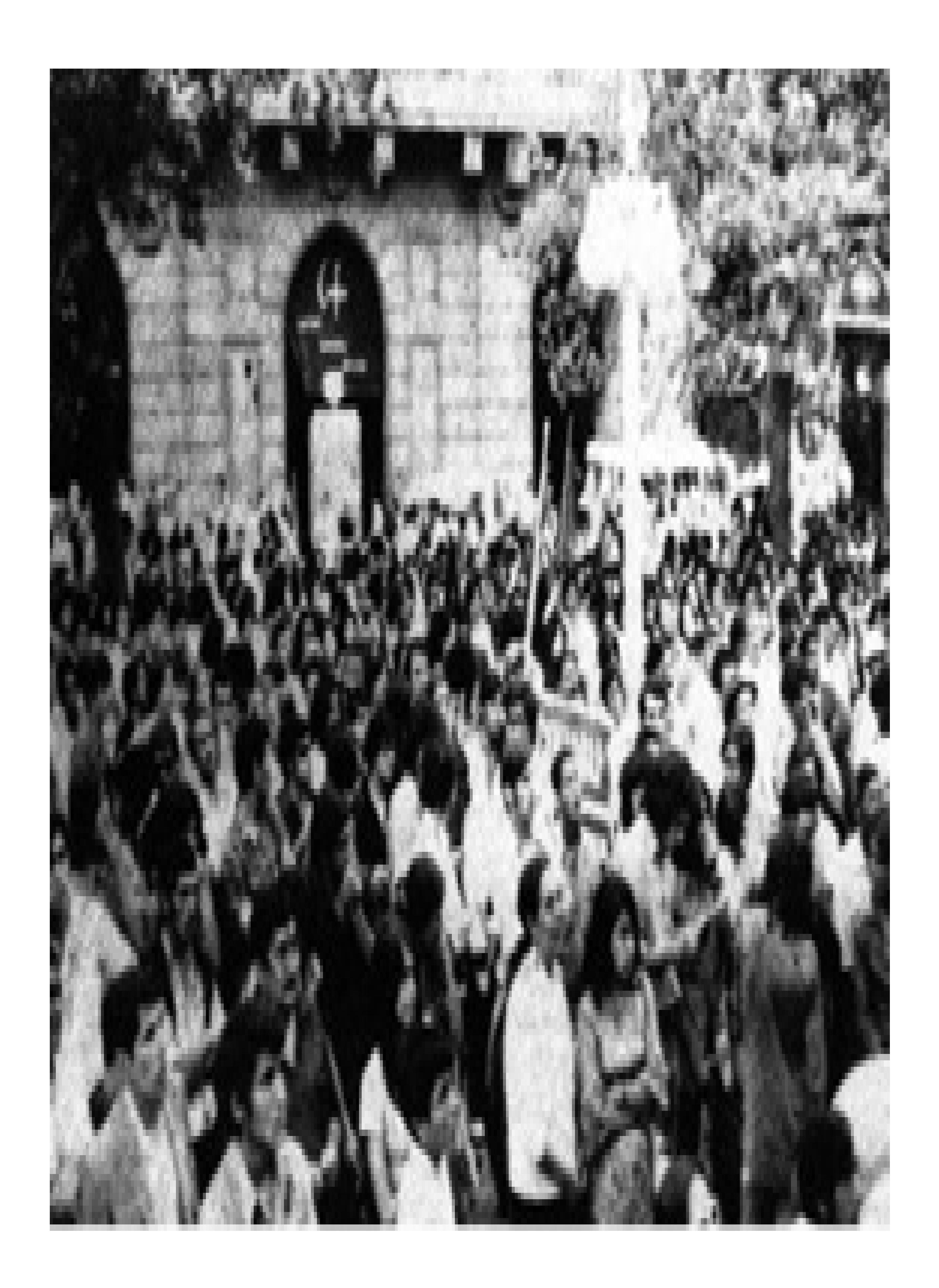
En la convocatoria a la protesta, el cordón Cerrillos declara: «Los trabajadores no devolveremos ninguna industria en este país. Queremos socialismo y no reformismo»[55].

El mismo día, el CI Cerrillos denuncia las «vacilaciones reformistas del gobierno», invita a la multiplicación de los CI y les pide a todas las coordinaciones de Santiago mantenerse en alerta[56].

En esta ocasión, Allende acepta recibir oficialmente a una delegación de los CI. Después de la CUT, es el gobierno quien hace un importante gesto de «certificación[57]» de la legitimad de los cordones. No obstante este reconocimiento en la cima del Estado no significa un apoyo. Enrique Ramírez, presente en esta ocasión, recuerda que la conversación fue muy dura y se hace bajo la presión de las movilizaciones. En esta reunión, el presidente invoca al boicot internacional y muestra su desdén hacia Hernán Ortega, a quien considera un «infiltrado» en las filas del PS[58].

El cordón Cerrillos-Maipú movilizado en la Plaza de Armas el día de las conversaciones

de sus dirigentes con Allende



Fuente: Izquierda Cristiana, N° 23, 17 de febrero de 1973.

Según Armando Cruces, presidente del CI Vicuña Mackenna y obrero de Elecmetal, Allende habría garantizado la normalización de la situación de Copihue y, sobre todo, se habría comprometido a explicar el proyecto Prats-Millas en una asamblea de trabajadores, promesa que sin embargo no se cumplió[59].

Para el cordón Vicuña Mackenna, el plan Prats-Millas es un «proyecto de ley que no representa la opinión ni el sentir de la mayoría de los trabajadores, los cuales están dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias en defensa de sus legítimos derechos»[60].

Paulatinamente, son todos los cordones industriales los que critican duramente la voluntad de devolver una parte de las empresas ocupadas, pero sin oponerse jamás globalmente a la política del gobierno. En el mismo momento, el debate entre la dirección del PS y el presidente Allende, a propósito de la extensión del APS, sale a la luz pública. Después de la reunión del 30 de enero, algunos dirigentes de CI realizan una conferencia de prensa en Radio Corporación, en donde incluso declaran que Allende les habría dicho que, si sólo dependiera de él, disolvería el Congreso, las Fuerzas Armadas y el poder judicial! Esto obliga a la Presidencia a emitir un desmentido oficial. Por primera vez, un comunicado es dirigido directamente a los dirigentes de los Cordones (ver el texto en anexo nº4). El gobierno rápidamente insiste en recordar su legalismo, el lugar que le otorga a las Fuerzas Armadas y reafirma su apoyo al plan Prats-Millas. Finalmente el texto, dirigido a los militantes de los Cordones, termina haciendo un tajante llamado al orden:

El presidente de la República reiteró a los dirigentes su respeto y aprecio por los cordones industriales, pero les manifestó también que hay un Gobierno que es el que toma las decisiones y su política está al servicio del país y de todo el pueblo y no de un sector determinado[61].

La advertencia es clara: el poder de decisión se mantiene en las manos del

Estado y no en las de un hipotético poder popular constituyente. Algunos días más tarde, durante la proclamación de los candidatos de la UP a las elecciones parlamentarias, Allende nuevamente hace referencia «a las organizaciones de poder popular», pero insistiendo en el hecho de que éstas no pueden ser pensadas al margen del gobierno[62].

Gran acto público del cordón Cerrillos en el teatro Caupolicán, Santiago, febrero de 1973



Fuente: La Aurora de Chile, N° 13, 8 de marzo de 1973

Canasta popular y recuperación del control de las JAP

Como lo hemos explicado más arriba, durante la huelga de octubre la movilización popular en torno al problema del abastecimiento es fundamental para el fracaso de la estrategia de la oposición. En esta contraofensiva, las JAP desarrollan un conjunto de acciones «espontáneas» que van mucho más allá de sus prerrogativas legales[63].

Así, muchos militantes proceden a descerrajar y abrir los comercios[64].

Paulatinamente, algunas JAP con el apoyo de los habitantes de los barrios pobres se lanzan en una práctica autónoma en relación al Estado[65].

Esta apertura de los almacenes se realiza en un ambiente de verdadera furia popular. Por su parte, el diario oficial de los comerciantes, pequeños industriales y artesanos de Chile, se manifiesta en contra de lo que considera un ataque a la libertad de comercio, recuerda que casi 500 mil chilenos viven de esta actividad y acusa a las JAP de ser las responsables del mercado negro[66].

Esta propaganda busca ante todo combatir la naciente autoorganización en torno al abastecimiento, un tipo de praxis que es impulsada por los activistas más radicales. Miguel R., joven militante del MIR en aquellos años, recuerda cómo, a una escala local (en este caso al norte de Santiago, en La Calera), llegan militantes para orientar a las JAP:

Nosotros, no como militantes del MIR –aunque todo el mundo lo sabía– sino como jóvenes organizadores de la vida del barrio, fuimos requeridos para regular el funcionamiento de la JAP. Así, nos encontramos gestionando a nivel de dos barrios, por lo menos, la relación con los comerciantes. [Y agrega:] Finalmente, ya que teníamos nuestra política de información, […] donde había almacenamiento ilegal, nosotros lo liberábamos ilegalmente[67].

Después de las jornadas de octubre, la UP es acorralada y debe reformular su táctica, en el sentido de que se ve obligada a profundizar el control en el ámbito de la circulación. La pregunta fundamental es ¿quién será el encargado de ejercer este control? Para los sectores «moderados» de la UP, la única vía posible es la que ya ha sido utilizada: la coordinación entre el Estado, las JAP y la pequeña burguesía comerciante. De ahí, la insistencia para oponerse a todo intento de distribución directa, a través de las JAP o de otros organismos como los Comandos Comunales o los «almacenes populares»[68].

Paralelamente, los miembros del nuevo gabinete deben aplicar un plan de reformas rigurosas para asegurar un abastecimiento normal y retomar las riendas de la situación. El «plan Flores», llamado así por el nuevo ministro de Economía, Fernando Flores (MAPU), contempla algunas medidas enérgicas para combatir el mercado negro[69].

El objetivo es ampliar las relaciones entra las JAP y el Área Social, tener un mejor control sobre los precios y «extender y fortalecer la organización de las masas»[70].

Desde ahora, los productos provenientes del APS deben ser obligatoriamente entregados a las empresas de distribución estatales. A continuación, para la distribución, las empresas privadas son invitadas a firmar contratos con el sector estatal. Se confirman las atribuciones de las JAP en tanto funciones de vigilancia del comercio detallista, pero Fernando Flores deja una puerta abierta para la extensión de sus prerrogativas. En primer lugar, las JAP deben organizarse más restringidamente, esto es por cuadra, es decir en torno a un conjunto reducido de inmuebles, que les permita fijar y evaluar las necesidades detalladas de cada familia[71].

Luego, el Ministro desliza en su discurso:

Las JAP, tal como lo han venido haciendo, denunciarán en el vecindario a los comerciantes inescrupulosos, evitarán la presencia generalizada en las poblaciones de afuerinos que se aprovisionan para especular y acaparar, y denunciarán a las autoridades cualquier infracción. Las denuncias deberán dirigirse siempre a través del canal más expedito. La denuncia no excluye la acción directa organizada y responsable para impedir la especulación, el

mercado negro y demás infracciones de este tipo[72].

Finalmente, Flores anuncia la adopción de un racionamiento de hecho, controlado por el Estado y la puesta en marcha de una «canasta popular» de 30 productos de primera necesidad, distribuida bajo control de las JAP. Esta medida tiene el efecto de una bomba en las clases altas y la oposición la utiliza para denunciar el «dramático racionamiento socialista»[73].

Para El Mercurio, «la solución marxista a los mercados negros, que son la tarjeta de racionamiento y el control policial sobre personas e instituciones, implica un grado insoportable de pérdida de libertad»[74].

El 21 de enero de 1973, la Secretaría General Comercialización y Distribución crea un sistema público único de distribución[75].

Este organismo es presidido por el general de aviación Alberto Bachelet, y teóricamente debería permitir una mejor centralización de las informaciones sobre las necesidades en abastecimiento, el estado de la producción y el funcionamiento de las JAP[76], las que ahora están presentes en todo el territorio, aunque predominantemente en las grandes ciudades. A comienzos de enero de 1973, existen 2.195 JAP (925 en Santiago, 393 en Valparaíso y 114 en Concepción)[77].

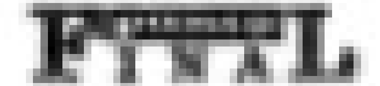
De hecho, la nueva Secretaría juega un rol político clave en la canalización y limitación de las formas de abastecimiento directo existentes en los barrios pobres, fuera de los canales legales de distribución.

Finalmente, este conjunto de medidas le permite al gobierno realizar una mejor evaluación de las necesidades y tener un control creciente sobre la circulación de productos provenientes del APS. No obstante, esta ampliación no puede ocultar el hecho de que el 70% de la distribución permanece en manos del sector privado, a través de la Central Nacional de Distribución (Cenadi, ex-Codina). En los hechos, el éxito de este plan de normalización depende del control real del Estado sobre la producción, control que, en lo que se refiere a los bienes de consumo, sigue siendo débil (sólo un 34,8% en agosto de 1973). Sin embargo, a mediados de enero, El Mercurio inicia una verdadera cruzada en contra de la

política gubernamental de reorganización del abastecimiento. Esta arremetida, calificada como «campaña del terror» por la prensa de izquierda, provoca la reacción enérgica de Salvador Allende, quien se opone a toda idea de dictadura o de racionamiento[78].

El gobierno, en lugar de intentar orientar a los organismos de base existentes hacia formas de autoorganización del abastecimiento, retrocede frente a la ofensiva ideológica de la clase patronal y ante el tamaño del desafío. Rápidamente, la actitud «más dura» del ministro Flores es desautorizada y, en una práctica que se repite, son los militares los que quedan a cargo del abastecimiento: el general Prats, en un informe a Carabineros, les recuerda que la «institución participará en la lucha contra la especulación y velará por evitar los excesos de las JAP»[79].

En este contexto, para la revista Punto Final, la pregunta clave es saber si la distribución es «tarea de masas o de las fuerzas armadas»:



DOCUMENTOS

LA DISTRIBUCION ¿Tarea de masas o de las FF.AA.?

Por HECTOR SUAREZ BASTIDAS



Fuente: Punto Final, N° 182, 24 de abril de 1973

El 19 de febrero de 1973, los dirigentes de la JAP comunales de Santiago se reúnen con Allende, el ministro del Interior y el de Economía, el director de Dirinco y el general Bachelet[80].

El ejecutivo impone su punto de vista: son las Fuerzas Armadas incorporadas al gobierno las únicas que pueden garantizar el control de la distribución y del abastecimiento; medida que es recibida con descontento[81].

Progresivamente la profundización de los disensos entre el gobierno y una parte del movimiento social, favorece la aparición de un espacio para formas de abastecimiento directo, no controladas por las instituciones.

Autogestión y abastecimiento directo

De hecho, algunas de las medidas propuestas por Fernando Flores (y desacreditadas por Allende) se inspiran en prácticas que ya están en curso. Es lo que indica el religioso Gonzalo Arroyo, miembro de la organización Cristianos Por el Socialismo (CPS). En su barrio, los pobladores controlan y distribuyen los alimentos básicos mucho antes de que el ministro propusiera la «canasta popular»[82].

Se verifica que las zonas más avanzadas en esta práctica de distribución directa son, en primer lugar, aquellas en las que el comercio establecido está poco desarrollado, y sobre todo en los campamentos más organizados. Es el caso de Lo Hermida y Nueva Habana. En éstos, un conjunto de medidas han permitido, gracias a la disciplina política y movilización colectiva, obtener resultados concretos en el combate contra el mercado negro. Después de constatar la inutilidad de las JAP puesto que los comerciantes rechazan integrarse, en diciembre de 1972, se ideó una suerte de «canasta popular»[83].

En estas poblaciones, a inicios de enero de 1973, funcionan los «almacenes populares» de manera coordinada con dos supermercados Monserrat (en poder del Estado). Alimentan, en un primer momento, a 1.200 familias y luego a 1.600 cada semana, con una «canasta popular» compuesta por entre 15 y 20 productos[84].

El conjunto es controlado por una tarjeta de racionamiento y los productos se ofrecen a un precio cinco veces inferior al del mercado negro. En cada sector, los habitantes con la ayuda de la junta de vecinos, se instalan en un local donde reciben las mercaderías distribuidas por Agencias Graham. Se elige un delegado por manzana, quien está encargado de contabilizar las necesidades y distribuir las tarjetas, las cuales son nominativas. Para evitar las colas, el orden de distribución se determina por sorteo, con un delegado para 25 familias en promedio. El control del buen desarrollo de la distribución se realiza bajo la vigilancia de un «guardia» elegido por cada manzana[85].

Evidentemente, este tipo de «almacenes populares» entra en contradicción con los intereses de la pequeña burguesía comerciante que, por lo demás, amenaza regularmente con la destrucción de los locales y obliga a los pobladores a contar con una vigilancia permanente[86].

Un supermercado «Almac» transformado en centro de abastecimiento popular



Fuente: IC. Testimonio H. Méry, Nº 19, 1 de diciembre de 1972

Según La Aurora de Chile, «puede afirmarse sin temor a equivocarse, que en Lo Hermida y Nueva La Habana no existe el mercado negro»[87].

Esta opinión es confirmada por el testimonio de Abraham Pérez, dirigente de Nueva Habana, quien incluso habla de 1.800 canastas populares entregadas en el campamento. Para Pérez, el «abastecimiento popular» significa «saltarse los intermediarios» incluidas las JAP. Son las organizaciones del campamento las que retiran y distribuyen directamente los productos, a través de un «almacén popular» controlado por los pobladores[88].

En ese marco, el campamento también está en contacto con organizaciones campesinas que venden sus productos directamente: los pobladores les ayudan a construir un camino para asegurar el transporte e incluso participan en la cosecha. Pérez también admite que «no todo era color de rosa» y que seguramente hubo casos de enriquecimiento personal de algún dirigente. Sin embargo, en su opinión, todo depende de la honestidad de los militantes y del control democrático que se ejercía sobre ellos, así es que según su información, en Nueva Habana no hubo casos de malversación[89].

Para José Moya, el abastecimiento directo en Nueva Habana también es un ejemplo de organización y de conciencia colectiva, sobre todo en los difíciles momentos que vivía el país[90].

La observación participante de Christine Castelain muestra incluso que esta práctica social de abastecimiento autogestionado le permite al MIR recobrar la confianza de la inmensa mayoría del campamento y renovar el funcionamiento democrático de las relaciones entre dirección del partido y base social. Según Castelain, la distribución efectiva de la «canasta» «se convierte en el símbolo de la igualdad de las necesidades, de la nivelación de las desigualdades económicas» y «anima una relación de confianza que, en parte, había desaparecido» entre los dirigentes del campamento y sus habitantes[91].

Además, esta experiencia permite el rápido despertar de los pobladores hasta entonces poco politizados, ya que a través de su interés personal pueden sentir la

necesidad del control de las otras empresas de distribución. Otro signo de transformación muy importante es la gran participación de las mujeres. Ellas se involucran activamente en la lucha por el abastecimiento directo, cuestionando –aunque sólo transitoriamente debido a la falta de un apoyo político claro– la dominación masculina sobre el conjunto de las actividades sociales del campamento. La comparación con otros campamentos vecinos, a veces controlados por partidos de la UP y que no se inscriben en esta perspectiva autogestionaria, es también muy favorable al MIR. En Nueva Habana, la distribución en manos de algunos en provecho de una minoría e incluso las largas filas de espera en frente del local de la JAP, han desaparecido[92].

Abastecimiento directo en una población de Santiago (junio de 1973)


LISTA DE
PRECIOS
TO DIRECTO
ACHICORIA 4
ACELGAS 6
REPOLLOS 6
BETERRAGA
APIO 9
LECHE 10
ZAPALLO 10

Fuente: La Aurora de Chile, N° 29, 28 de junio de 1973

La acción reivindicativa de los pobladores desborda ampliamente el cuadro de esas dos «vitrinas políticas» del MIR que son Lo Hermida y Nueva Habana, para replicarse –a partir de octubre de 1972– en numerosas otras comunas de Santiago y ciudades del país. Por ejemplo, la distribución de la «canasta popular» se extiende a poblaciones como la Elmo Catalán y Manuel Rodríguez (en la comuna de Conchalí), Che Guevara (en Barrancas) o Elmo Catalán de Peñaflor. En total, más de nueve mil familias serían así abastecidas[93].

Este sistema de aprovisionamiento directo se ve favorecido principalmente por el apoyo de Agencias Graham. A inicios de 1973, existen 70 «almacenes populares» en todo el país (de ellos, 40 en Santiago) y no son menos de 20 mil, las «canastas populares» así distribuidas[94].

Esta batalla del consumo es retomada por una parte de la izquierda de la UP, que critica la gestión burocrática, llama a la expropiación inmediata de la Cenadi y a una distribución bajo control de los Comandos Comunales. La respuesta de los militares a cargo de la distribución no se hace esperar: en febrero, Inostroza, el gerente de Agencias Graham es destituido de sus funciones y el general Bachelet reafirma su posición contraria a la «canasta popular» y más aún, al «abastecimiento directo». Paralelamente, fábricas como Perlak o los supermercados Monserrat son descalificados financiera y políticamente por su opción respecto del aprovisionamiento[95].

Por otra parte, en una reunión realizada en La Moneda, en presencia de Bachelet y de dirigentes de varias organizaciones de pobladores, Allende condena los riesgos de «anarquía» que podría provocar el suministro directo y reafirma que las JAP «son órganos de poder popular, en colaboración con el Gobierno Popular»[96].

Esta actitud del gobierno, al tiempo que se multiplica la agitación obrera en contra del plan Prats-Millas, provoca la reacción del movimiento de pobladores. Por ejemplo, el 22 de febrero, habitantes de Nueva Habana ocupan Agencias Graham en protesta por la destitución de Inostroza y a favor de la extensión de la canasta popular[97].

Este tipo de movilización colectiva que respalda el abastecimiento directo y autogestionado, se ve reforzado en los meses que siguen hasta confluir en la demanda de creación de una verdadera «central proletaria de distribución», que permitiría integrar a los obreros y pobladores en la perspectiva de un aprovisionamiento controlado por ellos mismos. En tales condiciones, el funcionamiento de una canasta popular en campamentos como Nueva Habana puede ser efectivamente calificado como una praxis autogestionaria, ya que esta lucha por el abastecimiento, en varios barrios populares de las grandes ciudades del país, entra en contradicción con las intenciones de un control por arriba, propuesto por las Fuerzas Armadas y el gobierno. Como lo abordaremos en la cuarta parte de este trabajo, esta disputa deriva en un aumento de la movilización y de la participación popular, cuyo objetivo es instalar verdaderos ensayos de «poder popular».

Organización, representaciones y lugar del poder popular en el seno de la «vía chilena»

El sociólogo Michel Vakaloulis con razón insiste en el hecho de que toda movilización colectiva es, necesariamente, sometida al examen de lo político[98].

Por otra parte, en su análisis de los procesos revolucionarios, el sociólogo Guy Rocher subraya la interacción necesaria, pero a menudo caótica, entre la base social y las organizaciones partidarias que pretenden representarla[99].

Sin ninguna duda, durante la Unidad Popular, la relación entre el espacio de los movimientos sociales, la clase obrera organizada y el campo partidario fue estrecha, a veces sinérgica pero también a menudo tensa y contradictoria. La cuestión del «poder popular» generó agitación y debates ideológicos en el universo de los partidos políticos. Antes de abordar la constitución interna de los organismos de poder popular y su dimensión subjetiva o cultural, trataremos este aspecto central de la «vía chilena al socialismo».

¿El fantasma del soviet? Los partidos de izquierda y su visión del

poder popular

El análisis de las representaciones colectivas y de las prácticas discursivas del poder popular, permite comprender mejor los debates que animaron a la izquierda chilena durante los mil días de la UP. Sin duda, el tema del poder popular también puede ser considerado como una de las «pasiones políticas» de este período[100].

Así, sin entregarnos a un enfoque sistémico de los discursos de los militantes, queremos destacar algunas «imágenes» y representaciones que recorren las discusiones de la izquierda sobre este tema. Una de ellas es precisamente lo que llamaría el «fantasma de la revolución rusa» y la figura del soviet como doble poder. Hugo Cancino ha demostrado la importancia de ese «discurso político-ideológico»[101].

Históricamente, el marxismo de la izquierda chilena ha sido fuertemente marcado por su interpretación soviética, leninista y también –y a veces sobre todo– estalinista[102].

Esta matriz ideológica impregna el pensamiento de la izquierda y su visión del mundo[103].

El fantasma de la revolución rusa ronda los debates de la vía chilena, tal como lo demuestran –entre otros– las conversaciones entre Régis Debray y el presidente de la República en 1971[104].

La necesidad de justificar su praxis a través del espejo de la historia soviética es uno de los datos constantes en numerosos periódicos de la UP.

Aunque atraído por el guevarismo, el MIR igualmente realiza una buena cantidad de sus análisis a la luz de los «diez días que conmovieron al mundo». Miguel R., en una entrevista a posteriori, señala:

Había que empujar al gobierno para transformar las estructuras del Estado. Esta política tenía un nombre: «todo el poder a los soviets», es decir, traducido al chileno, poder a los Comandos Comunales. Y los Cordones Industriales podían entrar en concordancia con los Comandos Comunales […] pero los soviets eran los Comandos Comunales. No es más complicado que eso[105].

Sin embargo, Miguel Enríquez declaraba en enero de 1973 que:

Santiago no era Petrogrado, ni el año 72 tenía mucho que ver con 1917, pero algo tenía que ver. No había acá una crisis general del sistema en la cual las tareas que los bolcheviques entonces se plantearon estuvieran a la orden del día[106].

Cuando se le pregunta hoy a Carlos Altamirano, se manifiesta de acuerdo con Allende: «Yo me oponía absolutamente a la idea de crear un poder dual. Porque ¿para qué crear un poder alternativo a un presidente que era socialista, que era nuestro?... No, el poder dual, no… Era una simple terminología, absurdo»[107].

Enrique Ramírez, cercano a Altamirano y militante en el CI Cerrillos, lo recuerda de otro modo. Rememora que el secretario general del PS, en reunión privada, empuja a los militantes «a impulsar las tomas, impulsar los cordones, impulsar el poder dual», pero evitando aparecer como el autor intelectual de esta política[108].

Globalmente, la dirección socialista, a pesar de su discurso revolucionario, siempre se opuso a toda forma de autoorganización popular que pudiera fragilizar al gobierno.

En esas condiciones, surge una de las contradicciones centrales de la teoría del «poder popular» de la UP: ¿cómo sus militantes pueden defender la formación de un poder popular constituyente y, al mismo tiempo, oponerse a toda dinámica del conflicto social que pueda cuestionar las instituciones? Según Fernando Mires,

la adhesión al Estado y a la revolución de los partidos de la UP, estaría en el origen –en muchos militantes de la izquierda– de una extraña ideología, mezcla de la idea leninista de la toma del poder y del respeto más estricto a las instituciones gubernamentales. Buscando conciliar lo irreconciliable, los consejeros del gobierno de Allende lanzan la idea descabellada de constituir un doble poder ¡en el seno mismo del Estado! Según esta tesis, el poder revolucionario era representado por el gobierno, la contrarrevolución por el Parlamento[109].

Es efectivamente este difícil «equilibrismo» el que encontramos en numerosos intelectuales próximos al ala izquierda de la UP o militantes del PS, como las reflexiones sobre la «dualidad del poder» del marxista Theotonio dos Santos, en las columnas de Chile Hoy[110].

Esta teoría de una dualidad de poder que

se expresa en una línea demarcatoria al interior del propio aparato estatal existente, más que en el enfrentamiento al aparato estatal de la burguesía […], como era el caso, por ejemplo, de los soviets frente al Gobierno Provisional [de Kerensky][111].

Es también la tesis del PC (en este caso a través de la pluma de Sergio Ramos). El presidente Allende, sensible a este argumento, en su mensaje al Congreso en mayo de 1971, se refiere al «segundo modelo de transición a la sociedad socialista»[112].

En trasfondo, es este doble poder híbrido y fantaseado el que alimenta las discusiones, a menudo duras, en los partidos de la izquierda[113].

La polémica se muestra a veces estéril y abstracta, muy alejada de las preocupaciones concretas de los asalariados. En el trabajo de investigación oral, entre líneas pudimos encontrar los grandes ejes de las diversas concepciones del «poder popular»: ¿qué tipo de relación se debe establecer entre el movimiento revolucionario y un gobierno progresista como el de Allende? ¿Cuál es el lugar de los embriones de «poder popular» en un proceso de transición al socialismo? ¿Hasta qué punto –y cómo– el gobierno de Allende puede ser considerado como un instrumento al servicio de la lucha de clases?[114]

La discusión, que involucra al campo partidario desde la base hasta la cima, se desarrolla bajo variadas formas: mesas redondas y foros; artículos en la prensa; documentación interna de los partidos y de las organizaciones del movimiento social[115].

Entre los debates públicos, cuatro se convirtieron en «clásicos», ya que en ellos se identifica una buena muestra del arcoíris ideológico respecto del «poder

popular». Uno de ellos, es organizado por el sindicato de trabajadores de la revista Clarín (enero de 1973); otro por el movimiento Cristianos Por el Socialismo (fin de noviembre de 1972) –prueba del involucramiento de una parte de los cristianos en este debate–; el tercero, se trata de una mesa redonda en la que participan varios dirigentes de base y que es realizada por la revista Chile Hoy en junio de 1973. Finalmente, una cuarta reunión del mismo tenor se realiza en agosto de 1973[116].

Foro político en torno al poder popular (enero de 1973)

FINAL

DOCUMENTOS

FORO POLITICO

EL PODER POPULAR Y LOS COMANDOS DE TRABAJADORES



Fuente: Punto Final, 18 enero de 1973

El PC participa a regañadientes en estos debates. Así, si Mireya Baltra se presenta en el primer foro organizado por CPS, rápidamente se retira –molesta– ante los argumentos defendidos por Miguel Enríquez. A medida que se aproximan las elecciones parlamentarias de marzo de 1973, los ataques del PC en contra del MIR y su concepción del poder popular se hacen cada vez más duros (los miristas son calificados con epítetos tales como «termocéfalos» y «provocadores»). Como lo destaca el movimiento de Miguel Enríquez, «el recrudecimiento de los ataques de la dirección del PC en contra del MIR ha correspondido siempre a períodos en los que esta dirección ha comenzado o intentado comenzar conversaciones con el Partido Demócrata Cristiano»[117].

Pero las críticas son igualmente duras en contra de todos los representantes de organizaciones que se reclaman del «polo revolucionario», especialmente del PS. Así lo confirma el tenor de la correspondencia que intercambian Carlos Altamirano y Luis Corvalán previo a las elecciones parlamentarias de marzo de 1973, en donde las descalificaciones ocupan el lugar de la argumentación política. En el curso de esta disputa, el secretario general del PC escribe:

[…] quien está […] bajo el fuego graneado del imperialismo y la oligarquía de los Jarpa y de los Frei, y a quien éstos quieren derrocar, no es el fantasmagórico poder popular independiente del Gobierno de que habla el MIR y que sólo existe en la cabeza calenturienta de sus dirigentes, sino el Gobierno del Presidente Allende, que es un hecho real, concreto, una conquista del pueblo […]. Naturalmente, nosotros los comunistas, estamos por reforzar todas las formas de poder popular y por la creación de nuevas formas que nazcan de la iniciativa de las masas, a condición, como es lógico, de que ellas tiendan a fortalecer al gobierno popular y no a debilitarlo[118].

En el terreno, el PC observa con animosidad las expresiones de «poder popular constituyente» tales como los cordones industriales, prefiriendo formas de participación popular más controlables. En un primer momento, la opción escogida es una suerte de política del avestruz, en la cual los CI no merecen

siquiera ser mencionados por la prensa partidaria. Luego, el secretario general se refiere en varias oportunidades a los CI y a otras coordinaciones, reconociéndoles incluso un cierto derecho de «independencia». El 6 de abril de 1973, por ejemplo, en la revista Chile Hoy, declara:

somos partidarios de los Comandos Populares, de los Consejos Campesinos, de los Cordones Industriales y de las JAP […]. Pero en este terreno estimamos que estas nuevas organizaciones, que son formas de poder popular, manteniendo su independencia, no pueden sin embargo ser concebidas y orientadas en oposición al gobierno del presidente Allende[119].

En los balances realizados durante la dictadura, el PC revela que consideraba los CI como organismos problemáticos ya que eran manipulados por la «ultraizquierda» y «apuntaban a la división de la UP, creando un ‘poder popular’ que se enfrentaba al gobierno por pretendidas posiciones de ‘izquierda’»[120].

El trabajo de los militantes del PC es transmitir a sus bases esta óptica y así lo realizan, por ejemplo, Galvarino Escorza, dirigente sindical de la fábrica Textil Progreso (CI Vicuña Mackenna) y Gustavo Cerda, dirigente del comité local del PC a nivel del CI Cerrillos-Maipú[121].

Esta actitud del principal partido obrero del país es evidentemente esencial para comprender el desarrollo limitado de los cordones.

En su respuesta al PC, el Partido Socialista insiste sobre el hecho de que los organismos de poder popular «nacen no dependientes del gobierno como tampoco en contra del gobierno»[122].

Para Hernán Ortega, «se trata de aprovechar el trampolín que significa el Gobierno para ir acelerando las medidas que le den más poder a los trabajadores de manera que tenga una participación más directa y más real»[123].

Pero, incluso si podemos multiplicar las declaraciones de buenas intenciones del PS en relación a la autonomía de los cordones, es necesario recordar que en octubre de 1972, el PS y el PC se apuran en emitir una declaración común (hecho excepcional), en la cual los cordones industriales son llamados a ponerse rápidamente bajo la autoridad de los intendentes o gobernadores provinciales para lograr «una correcta canalización»[124], un llamado que luego será reiterado,

con algunos matices, por ciertos dirigentes, incluidos el mismo intendente, en febrero de 1973[125].

Tales declaraciones no dejan de generar cierta agitación en el seno del arcoíris político que constituye el PS, como se expresa, en primer lugar, en un texto confidencial del regional Cordillera del PS destinado a la discusión interna[126].

Ese sector del ala izquierda critica abiertamente al gobierno y la táctica de Allende. El documento llama a «desarrollar los Comandos Comunales, como gérmenes del poder popular alternativo al poder burgués» y agrega «debe impedirse la institucionalización de los Comandos Comunales, los cuales no pueden estar subordinados ni al gobierno ni a la UP»[127].

En ese texto, el regional Cordillera también critica por su «reformismo» al regional Centro, que está a cargo del periódico La Aurora de Chile. Este debate se prolonga y toma la forma de violentas diatribas entre esas dos fracciones del PS, aunque ambas reivindican el «poder popular»…[128]

A pesar de las posiciones críticas, en la base como en la dirección, en ningún momento, ese «polo revolucionario» que existe dentro de la UP se constituye como tendencia organizada, en torno a una plataforma de lucha común que pueda ofrecer una orientación nueva a los otros embriones de poder popular constituyente. En esas condiciones, es de facto la opción táctica del PC –ratificada por Allende– la que prevalece, sin que los sectores contrarios a ésta puedan encarnar una opción alternativa clara y creíble a la vista del movimiento social.

En cuanto al MIR, libre de toda la carga de la participación gubernamental (y de sus pesadas responsabilidades) tiene todo el espacio para insistir sobre su concepción de un poder popular alternativo, pero sin jamás cruzar la línea sin retorno que implicaría una oposición frontal a Allende. «Nosotros no estamos llamando ni a luchar contra el gobierno –declara Miguel Enríquez– ni a hacer caer el gobierno, ni colocar los Comandos Comunales en contradicción fundamental con el gobierno. Pero sí con el aparato del Estado»[129].

Por cierto, esos enfrentamientos ideológicos son el reflejo de las contradicciones en curso dentro del movimiento obrero y del desfase creciente entre la base militante y la dirección de los partidos. Sin embargo, las largas polémicas sobre el lugar del poder popular surgen en el mismo momento en que numerosos

organismos realmente existentes están en fase de repliegue por falta de perspectiva política. A tientas y en medio de una gran confusión, sectores militantes buscan las puertas de salida. Las definiciones esbozadas por la izquierda en lo que concierne al rol de los comandos comunales o el lugar de la CUT y de los cordones industriales, prolongan esta desorganización.

La polémica en el movimiento obrero sobre el rol de los cordones industriales

Comandos comunales contra cordones industriales

Hemos visto que en lo relativo a los comandos comunales (CC), las exageraciones son a veces importantes y las fuentes de confusión enormes entre coordinaciones que existen realmente y aquellas enunciadas por la izquierda (o la oposición). Es, sin duda, el MIR quien inicialmente es el «campeón» del comando comunal, cuyo objetivo final sería transformarse en «Consejo Comunal de los Trabajadores». En su presentación sobre el «poder popular» realizada durante el foro organizado por el periódico Clarín, Miguel Enríquez, sólo hace referencia a los «Consejos Comunales de Trabajadores» y a los «Comandos Comunales», en tanto organismo «unificador de todo el pueblo»[130].

En ese discurso, como en la mayoría de las comunicaciones del MIR, los cordones industriales casi no existen, y cuando son mencionados, es para indicar sus debilidades intrínsecas. El MIR no cree que la clase obrera presente en los CI pueda sola constituirse en la dirección del movimiento revolucionario. Sobre todo, considera que estos sectores ya están organizados y condena incluso la acción de grupos del PS, que se entregan «en alma y cuerpo» a la dirección de los CI, considerándolo una «deformación» y «desviación» del poder popular, tan criticable –a sus ojos– como aquellos que «con espíritu sectario o con el propósito de mantener niveles de hegemonía o de monolitismo burocrático en el movimiento de masas» se oponen al poder popular[131].

Así, el PS y el PC son puestos en el mismo saco. Sin embargo, 1972 fue para el

MIR el año del «giro» obrero, expuesto en el congreso del Campamento Nueva Habana: la organización, analizando la nueva coyuntura, desea consagrar la mayoría de sus fuerzas al mundo asalariado industrial[132].

El MIR afirma que en el seno de ese «bloque de clases» a construir es la clase obrera la que debe ejercer la hegemonía, pero organizando Comandos Comunales capaces de articular a todos los sectores oprimidos.

En nuestra perspectiva, esta línea directriz los lleva a tener una óptica deformada de las movilizaciones colectivas realmente existentes, en donde se omite parcialmente el principal órgano de poder popular organizado: el Cordón Industrial. El partido se concentra más bien en los «Comandos Comunales» que a menudo, sólo tienen el nombre, ya que siguen siendo –a pesar de la «reorientación obrerista»– conglomerados de pobladores y estudiantes (como en La Florida, Barrancas o en Las Condes). Finalmente, el análisis del MIR se basa sobre un dato objetivo indesmentible: los cordones tienen la debilidad de ser organizaciones que sólo estructuran a una parte de la clase obrera y dejan fuera a grandes fracciones de las clases dominadas. Se trata, en consecuencia, de evitar que tomen el lugar de los CC, en tanto base organizacional del «poder dual». Sin embargo, más prosaicamente, la posición de esta organización parece también la de un partido que, frente a su relativa débil inserción en el movimiento obrero, busca proclamar que la revolución vendrá desde otra parte. Detectamos en ello cierta ceguera del MIR, mientras que la crisis de octubre y luego la del 29 de junio de 1973, demuestran que son los CI los que se mantienen como verdaderos órganos de resistencia y de autoorganización. Pero, sin lugar a duda, en los lugares con más fuertes niveles de organización y donde el MIR tiene influencia, se comenzó también a forjar esta alianza de los «pobres de la ciudad». Así lo recuerda Mario Olivares:

Hubo vinculación [entre cordones y comandos comunales] y empezaron a participar [los comandos] en esta dirección y en estos ambientes ampliados que convocaba el cordón Vicuña Mackenna, empezaron a participar sectores poblacionales, básicamente el campamento Nueva La Habana, básicamente organizaciones poblacionales vinculadas al MPR, Movimiento Poblacional Revolucionario, que era el brazo poblacional del MIR[133].

En contrapartida, la izquierda de la UP, mejor implantada en la clase obrera,

parece medir la importancia de los cordones, lo que puede explicar el apoyo que les otorgan. En general, si el MAPU, el PS o la IC no niegan la necesidad de la alianza de clases dentro del Comando Comunal, insisten en reforzar los CI en un primer momento, para que jueguen el rol de «locomotora» del proceso: es en el seno del CC que los Cordones Industriales ocuparían un lugar de dirección para «asumir la vanguardia de las otras organizaciones de base»[134].

La cuestión del lugar que deben ocupar los CI tiene sin duda repercusiones en las fábricas. Así, a nivel de Cerrillos-Maipú, una de las polémicas es saber cuáles serían los sectores sociales que se deben invitar al encuentro comunal de trabajadores del cordón, previsto para fines de junio de 1973. El impasse es tal que los participantes de una reunión –a fines de mayo de 1973– llegan a proponer la votación para dirimir si pobladores y campesinos deben participar, intervenir o incluso decidir. Los militantes del PS insisten sobre el hecho de que los CI deben ser formados principalmente por la clase obrera organizada. No obstante, la presencia «fraternal» de los otros sectores es deseada por algunos, «con derecho a voz durante las asambleas plenarias»[135].

La discusión termina en un diálogo de sordos, ya que ninguna de las tendencias militantes presentes parece ser capaz de fijar una posición común sobre la calidad requerida y las condiciones de participación de las otras fracciones del movimiento popular…

Hoy día, en los testimonios de los militantes socialistas, la referencia al Comando Comunal casi no aparece. Dichos relatos subrayan aún más el desfase entre la propaganda del MIR sobre los CC en tanto «soviets» y su ausencia en la realidad concreta como organismos de lucha. Por otra parte, la investigación oral muestra igualmente que aunque las direcciones de los partidos de la izquierda de la UP adoptan la idea del CC, esto no apareció como algo tangible para los militantes. Para estos, la prioridad siguió estando en los cordones industriales. Cuando insistimos, Pablo Muñoz finalmente exclama: «los comandos comunales…¡ahí estaba el MIR![136].

Según Muñoz, deformando así los propósitos de este partido, los CC se reducen a una agrupación de juntas de vecinos o de pobladores. Para Luis Ahumada, los CC nunca tuvieron un peso real y por el contrario, hicieron correr el riesgo de que la actividad sindical perdiera fuerza en el seno de los cordones industriales[137].

Esta falta de visión compartida dentro del «polo revolucionario» también alimentó el debate sobre el «paralelismo» sindical y debilitó a los cordones realmente existentes.

Los cordones industriales, la CUT y el movimiento sindical

Hemos visto cómo la CUT es puesta en aprietos por las turbulencias generadas por la lucha de clases, fenómeno que es acentuado por la incorporación de algunos miembros de la dirección sindical al aparato estatal, junto a los generales[138].

El surgimiento de embriones –incluso limitados– de poder popular en el seno del movimiento obrero cuestiona los límites de la CUT y de la organización sindical en su conjunto. Con una visión crítica de los comunistas y de Allende, José Moya, entonces militante del MIR y obrero de una industria electrónica de casi mil empleados, confirma:

fue un período muy rico, en que mucha gente que simpatizaba con la UP se rebeló en contra de ella y se incorporó a la organización de los cordones […] Yo recuerdo haber estado en asambleas donde venía gente de la CUT a discutir con los cordones y tenía que irse, al final, con la cola entre las piernas…[139]

La formación de los cordones industriales ilustra también el potencial desbordamiento de la estructura sindical, de su burocracia. Como lo recuerda Marta Harnecker, la formación de los CI pone en cuestión directamente a la central sindical y la organización tradicional de los trabajadores[140].

Numerosos sindicalistas vieron con temor la entrada de los cordones a la arena del movimiento obrero. Los hábitos cotidianos, la rutina de los aparatos, la institucionalización de las prácticas y de los poderes, pero también el trabajo militante –a menudo difícil en el plano personal– de varios años corría el riesgo de venirse abajo por una nueva organización, más horizontal y territorial, aunque todavía frágil. Entonces, la consigna levantada por la Central es la del combate a

todo «paralelismo» a la CUT, apuntando específicamente a los cordones industriales, considerados como simples coordinaciones sindicales.

Podemos identificar dos posiciones sobre este tema dentro de la izquierda. La primera, proclama que la CUT es la organización suprema de los trabajadores y que, por esa razón, la táctica correcta es transformarla desde el interior si fuese necesario, sin crear otros organismos. El PC se inscribe claramente en esta perspectiva: los cordones «deben ser dirigidos por la CUT y orientados por la Central»[141].

Esta posición es públicamente apoyada por Salvador Allende, durante el pleno de las Federaciones de la CUT, celebrado el 25 de julio de 1973. El Presidente declara en esta ocasión: «no puede haber, compañeros, paralelismo sindical [...] como no puede haber dualidad de mando en la dirección política económica del país»[142].

Paradójicamente, el MIR (muy crítico del «reformismo» del PC) comparte el punto de vista de los comunistas sobre las relaciones entre la CUT y los cordones. En efecto, el MIR llama a la institucionalización de los CI bajo la dirección de la CUT lo que –según este partido– permitiría una democratización de la Central. Durante todo el período, el MIR califica a los cordones industriales como un conjunto territorial de algunos sindicatos y rechaza considerarlos como posibles embriones de un poder popular autogestionado. El MIR no tiene ninguna objeción a que se sometan a la conducción de la CUT, incluso manifiestan su apoyo, en nombre de la unidad de la clase obrera. Esta táctica contribuye a frenar la centralización de los CI y las iniciativas autogestionadas surgidas durante octubre, haciéndole indirectamente el juego al PC, que busca frenar la formación de los cordones industriales.

El Partido Socialista, y más precisamente su ala izquierda, defiende una posición alternativa: la tesis de la necesaria autonomía de los CI. Son estos militantes los que mantienen mayor influencia a nivel de la dirección de los cordones. En 1973, todos los presidentes de los CI son socialistas[143].

La gran flexibilidad de este partido y su receptividad a las presiones de las bases, favorecen este posicionamiento. Así, el departamento sindical del PS (Denas) juega la carta de la demarcación[144].

El mejor ejemplo es el de Manuel Dinamarca, secretario general de la CUT en

1973 y miembro del PS. Dinamarca en varias oportunidades reconoce públicamente las vacilaciones del gobierno y el importante aporte que hacen los CI para combatirlas[145].

Sin embargo, los dirigentes socialistas de los cordones se esfuerzan por aparecer en oposición al paralelismo sindical. Víctor Muñoz, obrero sindicalista de la gran fábrica textil Sumar Nylon y dirigente del cordón San Joaquín, declara que el cordón «no es un organismo paralelo a la CUT», aunque a continuación subraya que:

Muchos no reconocen que la CUT ha sido incapaz de movilizar a los trabajadores tras los objetivos estratégicos, fuera del marco reivindicativo coyuntural. Pensamos […] que en esos sectores reticentes existe como un temor a perder la conducción de los trabajadores[146].

A pesar de toda la energía que los militantes socialistas invierten en defenderse de las acusación de paralelismo sindical, no siempre resultan muy convincentes. De hecho, existen dos estructuras paralelas más allá de los evidentes vínculos orgánicos entre la CUT y los CI, ya que muchos de los sindicatos que participan en las reuniones de los cordones están también afiliados a la Central y sus dirigentes son casi siempre, miembros de ella. Por lo demás, varios cordones de provincia surgen de la misma iniciativa de dirigentes provinciales de la CUT, a menudo, militantes de la izquierda del PS[147] que en la práctica, buscan utilizar la CUT como fachada y sin romper con su dirección, siguen organizando CI. Maurice Najman cita una anécdota en relación al cordón de Talcahuano, que ilustra bien este estado de ánimo:

A mi pregunta sobre las relaciones entre el cordón de Talcahuano (uno de los más poderosos del país) y la CUT, su secretario, miembro del PS, me respondió con un guiño que no había problemas, ya que él también era dirigente provincial de la CUT[148].

Insertos en ese doble juego, no es sorprendente que numerosos militantes finalmente admitan la necesidad de integrar los CI a la CUT, incluso se manifiestan dispuestos a abandonarlos en caso de que ésta tenga una evolución positiva. Hernán Ortega, por ejemplo, último presidente del cordón Cerrillos

declara: «en la misma medida en que la CUT se dé una nueva estructura y se plantee nuevas tareas, nuestra Coordinadora no tendrá razón de existir»[149].

En la misma línea, la revista La Aurora de Chile recuerda que «la CUT muestra una imagen subordinada al gobierno cuestión que provoca algunos niveles de suspicacia en la clase», a pesar de lo cual el periódico socialista propone hacer participar a la CUT en la dirección de éstos[150].

¿Qué conclusiones se pueden sacar de este debate? Más allá de las diferencias políticas, pareciera que la izquierda no tiene una posición realmente clara sobre el rol preciso que deben jugar los CI y menos aún sobre el hecho de que, en tanto embriones de poder popular, se supone deben encarnar formas de organización con funciones radicalmente distintas a las de los sindicatos. Casi todos concuerdan en que la CUT debería ser el órgano supremo de dirección, que tendría que participar, incluso dirigir los cordones… al mismo tiempo que reconocen que este no es el caso. Tal ecuación es sin embargo –en esta coyuntura– ampliamente ilusoria, ya que la CUT es una instancia que está más lejos que nunca de la concepción territorial del Cordón Industrial. En febrero de 1973, el viejo Clotario Blest fustiga a una izquierda que no lo escucha:

En realidad el papel de la CUT actual ha sido muy pobre, porque no es una CUT independiente del gobierno, la CUT debe ser independiente de los gobiernos, representante de los trabajadores como clase explotada y, en realidad, no podemos decir ahora que la CUT sea independiente de los gobiernos, forma parte del gobierno y tiene que estar sometida a todas las directivas del gobierno. Las consecuencias las estamos viendo[151].

Cordones soñados y cordones movilizados: organización, participación

y caudillismos militantes

Recordemos que hemos podido identificar tres grandes tipos de coordinación: el «Cordón Industrial» (o Comando local industrial), el «Comando local poblacional» (que en el lenguaje cotidiano de la izquierda es a menudo,

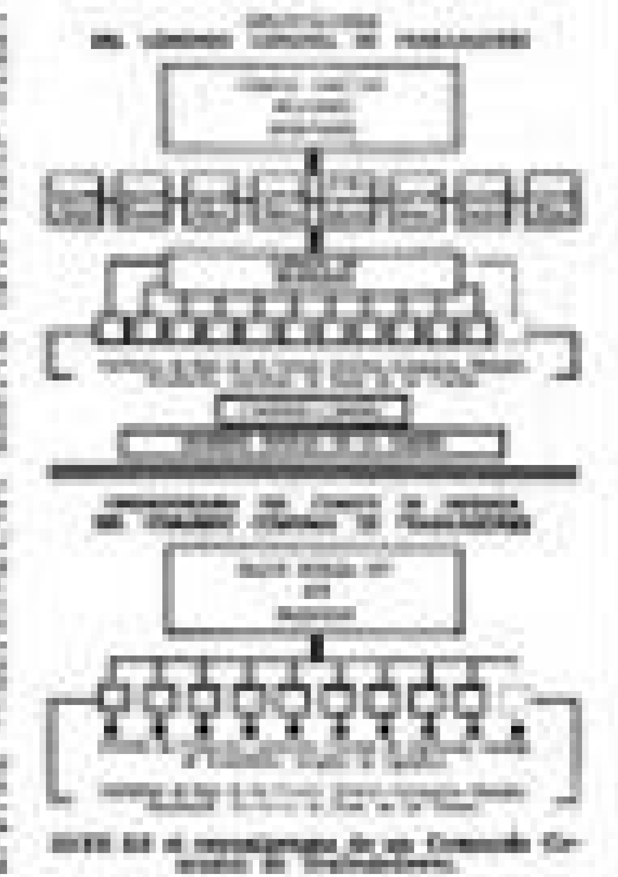
mencionado como «Comando Comunal», a pesar de un carácter restringido) y, finalmente, el «Comando Comunal», el que se supone ser el verdadero organismo de poder popular, que articula al conjunto de las clases dominadas (sectores obreros, pobladores, campesinos y capas media). A pesar del hecho de que son, sin duda, los Cordones Industriales (CI) los que muestran la mayor capacidad de movilización, algunas organizaciones políticas centran su propaganda en torno a la constitución de los Comandos Comunales (CC). Es particularmente el caso del MIR, cuyas propuestas de estructuración son retomadas en un suplemento de la revista Punto Final:

FINAL

DOCUMENTOS

COMANDOS COMUNALES:

ORGANOS DE PODER DEL PUEBLO



Fuente: Suplemento a la edición nº189 de Punto Final, 31 de julio de 1973

En esta publicación, se precisa que el Comando Comunal de Trabajadores (CCT) tendría como célula la «asamblea de base» organizada por «frentes» de lucha. Estos frentes deberían representar a los sindicatos obreros y profesionales, las organizaciones de pobladores (juntas de vecinos, JAP, campamentos, centros de madres, almacenes populares), las organizaciones estudiantiles y de la «pequeña burguesía propietaria y del campesinado». Esta asamblea designa a los representantes ante el «Consejo de Delegados» revocables en todo momento. El Consejo de Delegados nombra a un Comité director, también revocable, y un presidente, representante oficial del CCT. El Consejo es pensado como una institución que combina poderes legislativos y ejecutivos: «se trata de que el pueblo, a través del Comando Comunal de Trabajadores, se convierta en su propio legislador y empiece a ejercer esta función en el nivel comunal»[152].

El Comité de Defensa recibe una atención especial, ya que posee una dirección propia (proveniente del Consejo de Delegados). Una vez que el CCT se organiza a nivel comunal, está previsto que se extienda a escala provincial para que asuma «funciones y tareas de poder y de gobierno más amplias»[153].

De este modo, considerando muchos detalles es que se ha previsto la estructuración de los CCT en tanto órganos de «democracia directa». El organigrama propuesto sólo incluye un hipotético «frente sindical», del cual se puede suponer que los CI harían parte, a pesar del hecho de que teóricamente los miristas reconocen el rol dirigente de la clase obrera para «organizar el gobierno local de las masas»[154].

En el curso del período 1972-1973, el conjunto de los partidos pertenecientes al polo rupturista se esfuerza en realizar propuestas de una estructura ideal de los Comandos Comunales. El PS lo hace desde diciembre de 1972, aunque insistiendo en que no se trata de remplazar a los organismos existentes. El Comando Comunal es considerado como una dirección unificada de las diversas organizaciones sociales de la comuna para encontrar soluciones tanto a sus propias tareas como a las del mismo gobierno. Para el departamento sindical de este partido (Denas), el objetivo explícito es que se constituya en un «organismo

centralizador y coordinador superior de la comuna»[155].

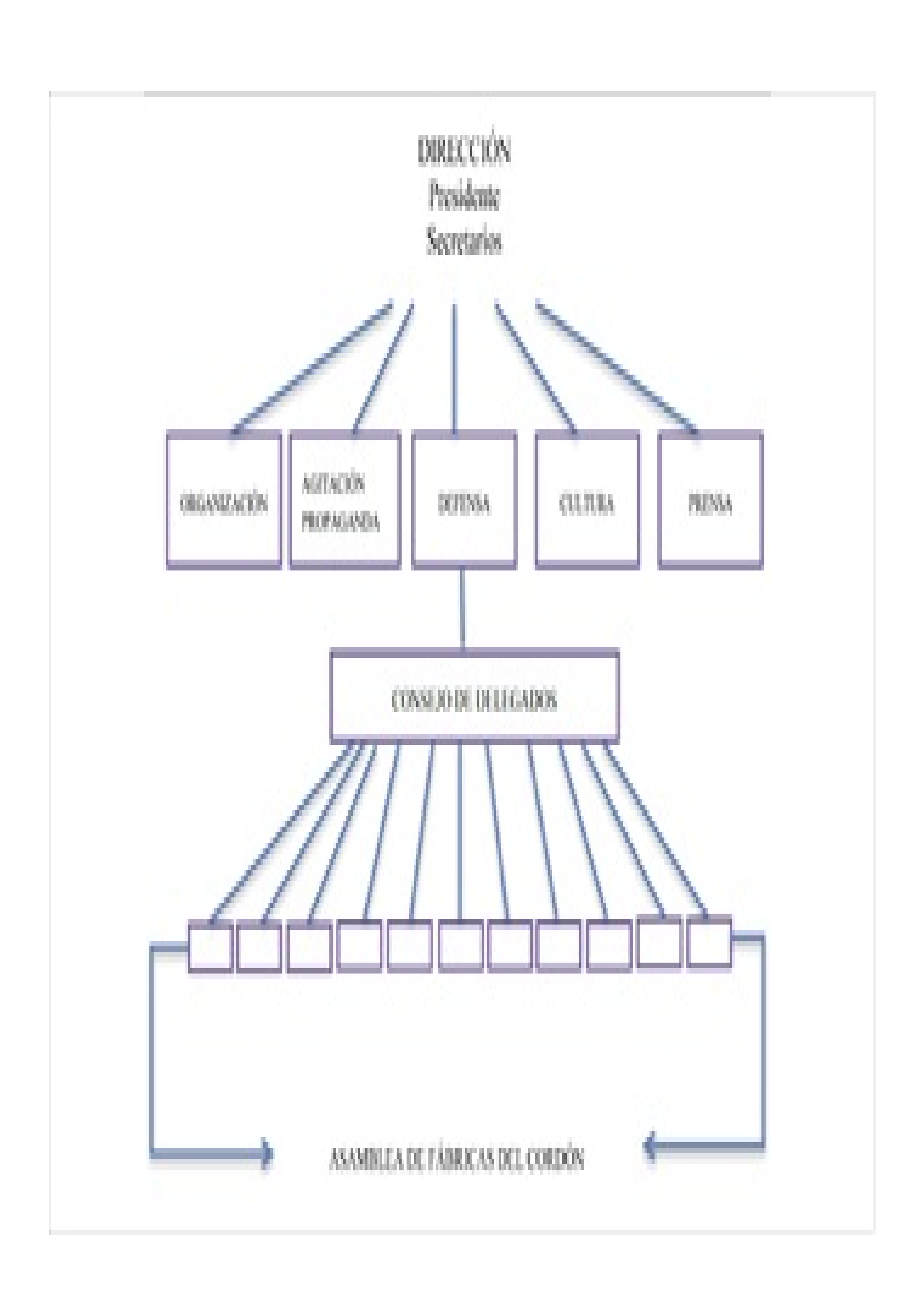
La estructura propuesta es bastante detallada y retoma ideas cercanas a las del MIR. Por su parte, el MAPU prefiere hablar de «Comandos Coordinadores Comunales». En un extenso documento elaborado por la dirección regional de la zona norte de Santiago y del litoral central, este partido propone también una estructura extremadamente precisa. Resumiendo, estos organismos deberían poseer diferentes niveles de representación y participación, divididos entre la esfera comunal y provincial. En el primer ámbito, la Asamblea Comunal estaría constituida por los delegados elegidos de «cada uno de los organismos territoriales de base de la Comuna», es decir, las JAP, las juntas de vecinos, campamentos, centros de madres, sindicatos, etc. En esta propuesta, no existe una asamblea permanente, sino solamente una reunión plenaria bianual en donde se fija el trabajo del secretariado y se elige a sus representantes. En segundo nivel, estaría el Consejo Comunal de delegados y luego el Secretariado Comunal, único organismo ejecutivo, compuesto por 12 miembros elegidos anualmente. El MAPU atribuye cierta prioridad a los delegados de los cordones industriales. Más arriba, se ubica un organismo provincial que sigue la misma lógica[156].

Más allá de estas diversas propuestas teóricas, los cordones industriales son, sin embargo, las organizaciones que se mantienen más sólidas. Para analizar sus dinámicas y modos de articulación, es necesario diferenciar los CI para sí, tal como son imaginados –incluso soñados– en el plano teórico por los militantes, de los CI en sí, tal como realmente se movilizaron y organizaron en el espacio social del poder popular[157].

Según Angélica Silva y Patricia Santa Lucía, en el curso del primer semestre de 1973, los CI habrían logrado adoptar un modelo común: «a partir de esta fecha, los delegados de los cordones son elegidos por las bases, contrariamente a lo que pasó en octubre. No es necesario que los delegados del Cordón sean dirigentes sindicales»[158].

Su arquitectura orgánica sería la siguiente:

Cuadro 4: Estructura teórica de un Cordón Industrial



DIRECCIÓN
Presidente
Secretarios
ORGANIZACIÓN
AGITACIÓN
PROPAGANDA
DEFENSA
CULTURA
PRENSA
CONSEJO DE DELEGADOS
ASAMBLEA DE FÁBRICAS DEL CORDÓN

Fuente: Adaptado a partir de Hugo Cancino, La problemática del poder popular…,

op. cit., p. 336.

En este esquema, los dirigentes departamentales o comunales de la CUT pueden ser elegidos. Sin embargo, esta sistematización sociológica, realizada inmediatamente después del golpe de Estado, propone una visión mitificada de la frágil situación de los CI en 1973. Silva y Santa Lucía admiten, no obstante, la existencia de CI (sin precisar la cantidad) en los cuales la dirección nunca habría sido elegida por las bases. El estudio de terreno realizado principalmente en el puerto de Valparaíso es, por su parte, mucho menos categórico sobre la existencia de un modelo común de CI. Éste sobre todo revela el déficit de participación y de representatividad de numerosas coordinaciones. La estructura adoptada por los cordones industriales implica una intervención fuerte de los partidos políticos, comúnmente mediatizada por los sindicatos y sus dirigentes. Es decir, los partidos de izquierda están presentes y dirigen los cordones, pero gracias a su implantación en el seno del movimiento obrero. En teoría, los militantes del poder popular argumentan en favor de la elección de los delegados en asamblea de empresa, esto es de forma directa e independiente tanto de los sindicatos como de los partidos. Los testimonios recogidos, el examen de la prensa o los debates en la izquierda ilustran que el esquema propuesto por Hugo Cancino es más bien idealista. No existió elección sistemática de los delegados en asamblea plenaria de los trabajadores, y menos aún de modo autónomo de las direcciones sindicales y regionales de los partidos implicados en los CI. Esta democratización total de los CI no se alcanzó en ningún momento. Aunque sí es correcto afirmar que en las fábricas más movilizadas son los delegados elegidos en asamblea los que participan en las reuniones del CI y que, la mayor parte del tiempo, la dirección es elegida a través de la votación de los sindicalistas presentes en la asamblea del cordón. El testimonio de Carlos Mujica demuestra la ambigüedad de la táctica de los partidos (en este caso, el MAPU). Al momento de elegir a un representante de la empresa Alusa al cordón Vicuña Mackenna y ante el temor de cómo votarían los trabajadores democratacristianos, es casi a escondidas que Carlos Mújica es elegido delegado del CI. En Cerrillos[159], un documento interno del MIR revela un proyecto de

«comité ejecutivo» del CI que sería directamente nombrado «por arriba» por los partidos (fórmula que, al parecer, fue rechazada por los miristas)[160].

Hoy, por lo tanto, es necesario desprenderse de la imagen mítica de una supuesta democracia directa encarnada por los CI, incluso si algunos agentes sociales de la época continúan alimentando tal visión, como es el caso de Hernán Ortega, quien, en relación al CI Cerrillos, habla de una asamblea de delegados elegidos directamente por los trabajadores de cada empresa y reivindica la representación de 192 industrias y de ¡alrededor de 500 mil asalariados. Según Ortega, las reuniones de asamblea se realizan regularmente, al menos una vez al mes (a veces, incluso cada dos días), y esto con más del 70% de los representantes de la zona. Las reuniones, como para todos los CI, se llevan a cabo en la sede de un sindicato importante del cordón, en fábricas como Fensa o Fantuzzi[161].

Javier Bertín y Guillermo Rodríguez recuerdan –al contrario– que si en algunas empresas efectivamente se realizan elección de delegados en las bases, en la mayoría de los casos, son dirigentes sindicales, a menudo enviados directamente por sus partidos, los que componen la dirección del CI. Edmundo Jiles, sindicalista sin filiación partidaria, lo confirma sin dudar[162].

Por su parte, el CI centro combina elecciones de delegados por parte de los trabajadores y cooptación de representantes de las organizaciones «revolucionarias» para formar el ejecutivo del cordón (ver anexo nº 5).

Finalmente, es a través de sus dirigentes sindicales pero también mediante el envío de «militantes-consejeros» que una parte de la izquierda dirige los CI sin pasar por una elección directa en asamblea de trabajadores. Por lo demás, el flujo de activistas políticos no obreros hacia los cordones genera, a veces, descontento entre los obreros sindicalistas. Edmundo Jiles, Mario Olivares y también Carmen Silva admiten que, a menudo, estos últimos, deben recordar que son ellos, y solamente ellos, los que poseen una legitimidad frente a los trabajadores y que, en consecuencia, son los únicos habilitados para decidir en última instancia. Por su parte, Tomás Inostroza, se enorgullece al declarar que la dirección del cordón Macul estaba constituida solo por dirigentes sindicales y que siempre excluyó a los militantes «no obreros»[163].

En lo que se refiere al CI Vicuña Mackenna, el testimonio de la socialista Carmen Silva es iluminador sobre la tentación de los partidos políticos de instalar a sus militantes (en general, estudiantes) a la cabeza de estos

organismos:

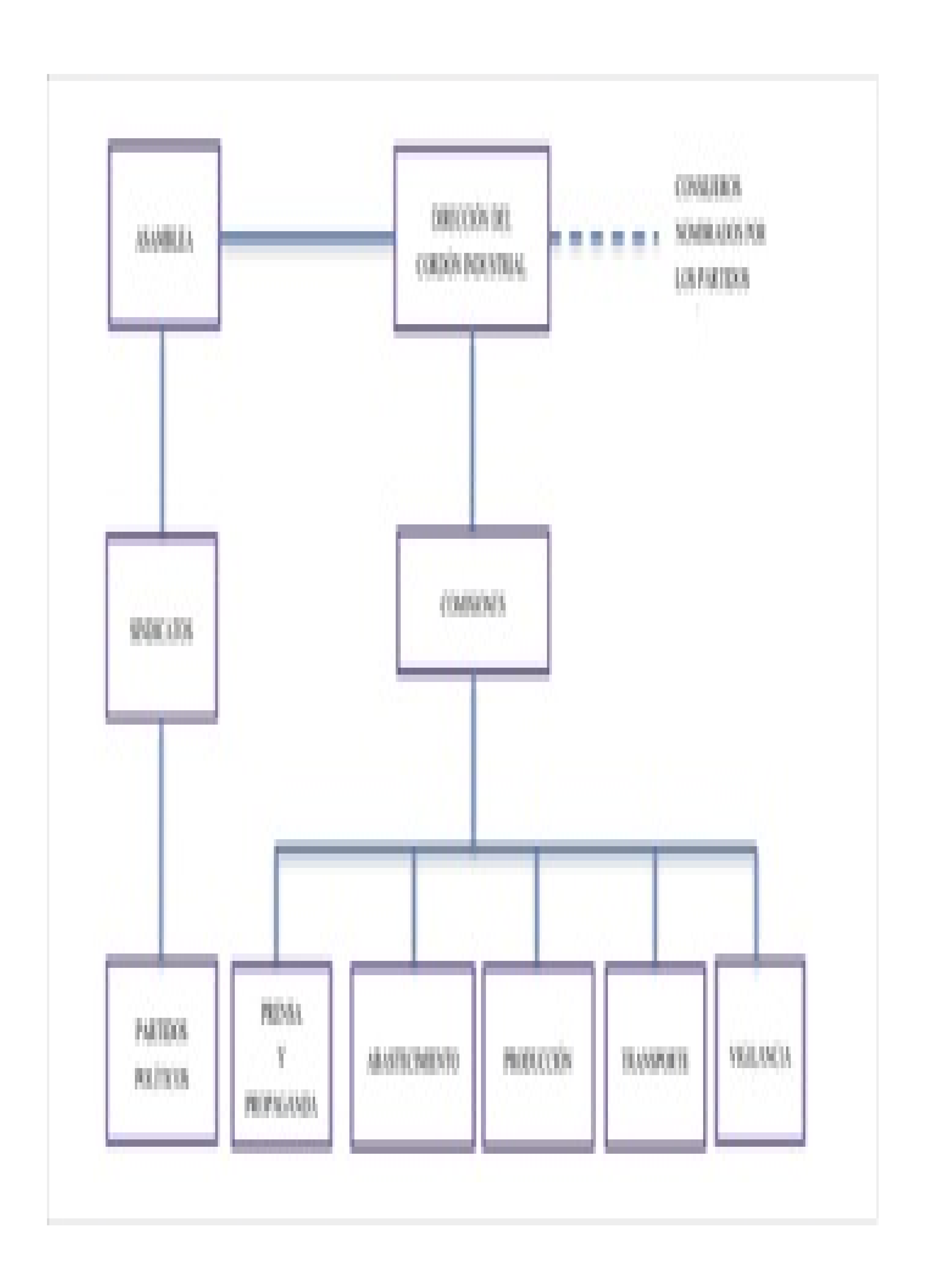
Nosotros, la gente de la dirección del cordón, éramos casi todos estudiantes de economía o de ingeniería, nadie mayor de 25 años. […] El esquema era este: la estructura del partido se armaba desde el regional Cordillera, pero mi jefe político no era el del regional sino el que se mandaba desde el partido, ese era Rafael Kries. El otro jefe del partido, era Enrique Morales…[164]

Luego, ante el asombro del entrevistador, Silva reconsidera: «después venía la estructura del cordón, en que se elegía, en asamblea, al presidente»[165].

A pesar de todo, Mario Olivares, sindicalista mirista de Muebles Easton, describe una estructura «horizontal» donde el presidente es elegido por los dirigentes sindicales de manera rotativa (lo que parece ser efectivamente el caso en la mayoría de los CI)[166].

Sobre esta base, podemos suponer que el siguiente esquema es más cercano a la realidad (los «cordones movilizados»).

Cuadro nº 5: Estructura de los Cordones Industriales movilizados



ASAMBLEA
DIRECCIÓN DEL CORDÓN INDUSTRIAL
CONSEJEROS NOMBRADOS POR LOS PARTIDOS
SINDICATOS
COMISIONES
PARTIDOS POLÍTICOS
PRENSA Y PROPAGANDA
ABASTECIMIENTO
PRODUCCIÓN
TRANSPORTE
VIGILANCIA

Fuente: Adaptado a partir de Cheetham, Rosemond; Rodríguez, Alfredo; Rojas, Gastón; Rojas, Jaime, Comandos urbanos: alternativa de poder socialista, op. cit., pp.37-38.

De hecho, en la mayoría de los casos, son los partidos políticos –a través de sus representantes sindicales– los que conforman la Asamblea, de la cual surge una dirección colectiva obrera, la que es aconsejada y orientada por los «activistas» de izquierda (a menudo, provenientes de las capas medias diplomadas). La dirección designa entonces varias comisiones de trabajo, compuestas por responsables que vienen de la asamblea. Si los CI son efectivamente el lugar de grandes movilizaciones a favor del poder popular y de una estructuración territorial de algunas fracciones más politizadas del movimiento obrero, esto no se traduce mecánicamente en una organización próxima a la democracia directa, ni siquiera en una participación permanente de las bases. Al contrario, estas organizaciones muestran numerosas carencias en términos de representatividad de las capas sociales que pretenden encarnar.

Los testimonios recopilados confirman que es principalmente, en torno a un pequeño grupo de personas, de fuerte capital militante[167] y con una verdadera experiencia de organización, que se articula la dirección de los cordones industriales y de los comandos comunales. Hoy día, Hernán Aguiló, quien fuera dirigente sindical de la CUT y cuadro del MIR, reconoce que el comando Estación Central nunca logró reunir más de 60 militantes organizados a nivel de su núcleo duro. Según Aguiló, existió en todo el país una cierta «política de ciencia ficción» del poder popular[168].

El objetivo de los partidos llamados «rupturistas» fue conquistar la dirección de los cordones, a veces, al precio de la real participación de los trabajadores. El gran acto público del CI Cerrillos, realizado el 28 de febrero de 1973, en el teatro Caupolicán lo demuestra. En esta ocasión, estalla un nuevo enfrentamiento entre socialistas y el MIR sobre la prioridad que deben tener –o no– los sindicalistas por sobre los militantes políticos[169]. La documentación interna del MIR refleja también la preocupación de ver su influencia disminuida por la llegada de los «reformistas» a los comandos comunales: «vamos a ser minoría en los C.C. si estos siguen el ritmo de desarrollo que tienen hasta ahora[170]». La

ausencia de representatividad de la dirección de los cordones es un problema ampliamente debatido. Cada uno admite a regañadientes una débil participación de las bases y el efecto devastador de las luchas intestinas de la izquierda. Los CI no escapan al fenómeno típico del «caudillismo militante» y a las prácticas verticalistas del campo partidario en el espacio del movimiento social. Podemos entonces hablar de una forma sustitutiva de hacer política (tal como E.P. Thompson lo ha descrito). Mario Olivares relata la exasperación que, a veces, les provocan a los obreros (como él mismo) esos jóvenes cuadros del MIR «en un 95% estudiantes universitarios», que vienen a dar lecciones de revolución a la clase obrera de los cordones[171]. En Nueva Habana,

Christine Castelain establece el mismo diagnóstico[172]. Si retomamos la clasificación realizada por Peter Winn, el poder popular chileno demuestra –en diferentes grados– una mezcla original entre las figuras del líder sindical «populista», el «reformista radical» y el «revolucionario[173]».

Pero esta constatación no es sólo válida para el MIR, como lo sugieren varios autores. Al contrario, según la tesis de Marie-Noëlle Sarget, el verticalismo es incluso una de las características culturales del conjunto del sistema político chileno de los años sesenta-setenta, incluida la izquierda parlamentaria y la oposición[174]. Se trata de un esquema cultural dominante que se verifica durante los mil días de la Unidad Popular y que sería, por lo demás, ilusorio de restringir a este sólo período o área cultural. Numerosos escritos de Pierre Bourdieu sobre el campo político (de otros países) y su representación, muestran hasta qué punto éste es atravesado por diversas dominaciones y cómo se sostiene sobre la voluntad de imposición de una visión legítima del mundo social, así como sobre la lucha por el «monopolio de la violencia simbólica legítima[175]». En el seno de la izquierda revolucionaria de este período, se traduce a menudo en la figura del militante «iluminado» por la teoría marxista y por las enseñanzas de los dirigentes o de algunos intelectuales orgánicos del partido, desde donde muchas veces se tiene la impresión que debería venir la «luz» de la conciencia política que luego bajaría hacia el pueblo. De ahí, esa permanente tentación de que el militante o el partido sustituyan a la clase, incluso corriendo el riesgo de ir precisamente en contra de la idea autogestionaria del «poder popular» y de ahogarlo antes de que nazca.

Sin embargo, lejos de la imagen de la «masa» amorfa y desorganizada que aparece en el libro de Vayssière sobre los procesos revolucionarios latinoamericanos[176], o de la inquietud de encontrarse frente a una clase popular

inevitablemente –y fuertemente– dominada (inspirada de la sociología bourdieusiana), muchos son los militantes obreros y trabajadores chilenos que tienen conciencia de los graves defectos del verticalismo y de aquellas prácticas sustitutivas provenientes desde el campo partidario. Así lo confirman, por ejemplo, las duras críticas de un militante fabril de la industria Textil Caupolicán del «Cordón rojo de Macul» que, en mayo de 1973, señala: «es tan difícil de entender que el germen de Poder Popular sean 10 ó 20 compañeros que se reúnen sin que las bases los eligieran[177]». Este «desfase» entre las bases y la dirección también es producto de la ausencia de una dirección política estable y de una adhesión mayoritaria del movimiento obrero a la idea del poder popular. Apenas seis meses antes del golpe de Estado, «la falta de definición de los partidos sobre los cordones y una base, aún débil, a favor de la unidad indispensable» menoscaban la reivindicación de un poder popular realmente constituyente[178].

Campo cultural y poder popular

¿Una mini «revolución cultural»?

Estudiar y analizar la dinámica del poder popular urbano lleva permanentemente a navegar en varios campos sociales así como a través de varias disciplinas académicas, confirmando así una evidencia: un proceso de transformación como el de la Unidad Popular no podría ser reducido a una acción colectiva situada solamente a nivel de la fábrica o de la esfera productiva. El fenómeno revolucionario debe ser considerado también como un hecho cultural y subjetivo, puesto que «el compromiso revolucionario no depende sólo de lo político; presupone además en los militantes, motivaciones personales más o menos conscientes –creencias íntimas en relación al futuro, sueños, emociones reprimidas– enmascaradas tras las palabras del discurso político[179]». Uno de los campos sociales especialmente concernido por la dinámica social de la UP es el de la cultura, en el amplio sentido del término. La diversidad de lazos que unen cultura, identidades colectivas y contestación, es decir las relaciones que operan entre el campo cultural y las movilizaciones colectivas, han sido muchas veces

destacadas por la sociología[180]. Durante la UP, esta conexión es facilitada por una política voluntarista del gobierno, que enfrenta con éxito la apuesta por una democratización de la cultura sin precedentes en Chile[181].

En ese sentido, nos podemos preguntar si en realidad existe una práctica cultural del poder popular y si se produjo un cambio radical de las mentalidades o un desmoronamiento de los modelos culturales dominantes. Rápidamente, en línea con las luchas de los «pobres de la ciudad», sean pobladores u obreros, se plantea el tema de la creación de una nueva cultura popular que sería la expresión –y al mismo tiempo, producto– de ese poder popular en gestación. El conjunto de actores o testigos de la época concuerda con el hecho de que esos mil días son los de una verdadera «explosión» subjetiva y simbólica. Una parte de las clases dominadas toma conciencia de sí misma y su creatividad no es sólo política u organizacional, también se expresa en nuevas prácticas culturales: la canción, el teatro, el dibujo, la poesía, los murales ocupan ahora la ciudad. En esta época, en Chile pero también en otros países latinoamericanos, se asiste al nacimiento de un nuevo arte popular y de una estética revolucionaria, siendo uno de los símbolos, las brigadas de muralistas y sus pinturas que colorean todas las ciudades y pueblos del país. Según Valérie Joubert, éstas asumen un acto de orden político que vinculan la acción militante con la manifestación artística, uniendo revuelta y esperanza sobre los muros de la ciudad[182]. Este movimiento es acompañado, guiado y estimulado por numerosos estudiantes, intelectuales y artistas. Basta con evocar el nombre de Víctor Jara y el movimiento de la «nueva canción chilena» para convencerse[183]. Pero este florecimiento surgió sobre todo «desde abajo». Se nota hasta en las formas de intervención política durante las manifestaciones callejeras, en las fábricas: «asistí a casi todas las manifestaciones de la Unidad Popular que eran fiestas del pueblo y, al mismo tiempo, un estallido político», recuerda un intelectual. «La mayoría de los afiches y pancartas no eran impresos, estaban escritos a mano […] Hacia el final, era muy refinado. Era una manifestación cultural de los obreros, de las masas[184]». Del mismo modo, un sindicalista de un cordón de Santiago, insiste algunos días antes del golpe de Estado, sobre las múltiples «expresiones del pueblo obrero» que acompañaban las tomas de fábricas[185].

La lectura y la cantidad de lectores viven enormes progresos gracias a una editorial estatizada, Quimantú. En las fábricas, los obreros instalan pequeños negocios provisorios donde venden libros de Gorki, Jack London, Lenin, Marx, Marta Harnecker, novelas chilenas y otros… Un obrero de un cordón industrial entrevistado por el sociólogo Armand Mattelart señala que, en su fábrica, cuando

Quimantú presenta una gran cantidad de libros, el «obrero compra, en el 90% de los casos, los libros de educación política. En dos horas, todo se ha ido. Se recomienza la operación y nuevamente todo se agota[186]». Mario Olivares señala el «gran impulso cultural» en el cordón Vicuña Mackenna. Recuerda también la creación de una biblioteca detrás de los muros de su fábrica, Muebles Easton y los grupos de teatro obrero. Actividades en las cuales no sólo participan los trabajadores sino también sus familias[187]. La fábrica se convierte en un espacio de creación artística y de difusión cultural, por y para los asalariados, puesto que «de esta forma el trabajador se siente ser humano y no sólo un perno o un rodamiento más de la inmensa máquina productiva[188]». Al mismo tiempo del cuestionamiento de las jerarquizaciones sociales, es una revolución simbólica muy colorida la que se despliega. Se trata también de la afirmación de una identidad colectiva, fundamental para la acción común en el momento de definir las fronteras simbólicas del movimiento. Las representaciones de los grupos y agentes en lucha se constituyen haciendo sentido común, facilitando así el proceso de transición de la «clase en el papel» a la «clase movilizada». Esta construcción hace parte también de una identidad popular valorizada, que permite la confluencia entre los compromisos individuales y la acción colectiva así como la generación de vínculos sociales renovados[189]. El politólogo Robert J. Alexander señala: «Había casos en los cuales simpatizantes comprensivos se esforzaron en ayudar los miembros del cordón, estableciendo centros comunitarios, organizando actividades educativas y recreativas e impulsando a los trabajadores para hacer el mejor uso posible de su tiempo[190]». También, junto con el desarrollo de los jardines infantiles y comisiones de bienestar social, apoyadas por profesores de la Universidad de Chile y estudiantes, Teresa Quiroz subraya el lento cambio de la mentalidad patriarcal y el trabajo de concientización realizado en cuanto al papel de la mujer, tanto en la empresa como en la casa. Asimismo insiste en la reflexión iniciada sobre la participación de las mujeres en las asambleas sindicales y la doble jornada de trabajo:

las asambleas sindicales eran después de las horas de trabajo, y eran una instancia importante, entonces empezaron a reclamar que las mujeres no iban, y ahí se empezó a dar toda una cosa interesante, porque las mujeres decían que ellas no iban porque las ponían a tomar el acta y ellas no sabían leer o escribir… El segundo argumento que daban era que ellas tenían que irse a la casa porque tenían que hacer la comida, entonces ahí salió como solución la famosa «vianda» que empezó a ser una cosa que se vio en todos los cordones. Se organizó las empresas junto con el sindicato para que, al salir del trabajo, la mujer llevara de acuerdo al número de personas que había en su grupo familiar un número de

«viandas», que eran raciones... Así llegaban [a la casa] y calentaban, entonces la vianda fue aprobada como un apoyo a la mujer para que no llegara, después de andar una hora en una micro, o más, a hacer comida[191].

En el plano artístico, un ejemplo de esta mini «revolución cultural» es el festival de la canción organizado por la fábrica textil ex Hirmas a inicios de octubre de 1971 y que se extiende durante tres días[192]. En la empresa Textil Progreso, con el apoyo del departamento de cultura de la empresa, se crea un grupo de teatro, una revista (Testimonio), el programa de radio «Producir cantando» y un conjunto folclórico. En este contexto creativo, se monta la obra «Un día de mayo», sobre la estatización de la fábrica. Un reportaje de 1973 sobre Textil Progreso destaca que «durante el paro de octubre, los conjuntos artísticos realizaron una gira a la zona salitrera. Habitualmente, actúan en poblaciones, sindicatos, escuelas y hospitales[193]». Una situación similar sucede en el complejo industrial Sumar, donde Juan Alarcón recuerda con emoción las actividades culturales impulsadas por el sindicato:

… bastante bien hechas, bien organizadas, con artistas de la empresa y con invitados especiales. Los parques de la empresa, que antes eran adornos simplemente, los ocupamos para que la gente descansara, disfrutara […] Hicimos un festival de la canción, hicimos candidaturas a reinas[194]…

Los poemas y la poesía popular también se hacen presentes, relatando las tomas o la represión. Así, en un tono premeditadamente irónico y «en medio del conflicto surgió la nota alegre entre los compañeros de los Laboratorios GK, quienes crearon y contaron la historia de su movimiento, en los siguientes versos[195]»

Pobrecito patrón

Estábamos en una noche

toditos en una reunión,

acordamos una huelga

y la cual nos resultó.

Solicitamos el apoyo

de las industrias del cordón,

acudiendo todas ellas

como un solo escuadrón.

Cuando llegamos aquí

algo malo sucedió:

estaban los momios arriba

y el fascismo los apoyó.

Por los tejados vecinos

a la industria se entró,

pretendiendo los amarillos

recibir su billetón.

El juez llegó en la mañana

y a toditos desalojó,

con la cola entre las piernas

mientras me estrujaba yo.

Qué momios tan vivarachos

que el mercado negro creó,

ya que con sus compadrastros

el Odontine[196] *fondeó.*

Aquí seguimos toditos,

esperando intervención,

junto con María Eugenia

que está por dar solución.

Aquí termina el corrido

del pobrecito patrón:

se llevó toda la plata

y le tocó la requisición.

Ahora mis compañeros

derechito a trabajar,

con el apoyo de todos

y del cordón industrial.

En los grandes monopolios como Madeco o Mademsa, junto a lo cultural se impulsan las actividades de entretención y campamentos de vacaciones populares, bajo la administración directa de los sindicatos.

El conjunto de estos avances beneficia principalmente a los trabajadores de las empresas que pertenecen al Área Social, lo que excluye, de entrada, al gran grupo de pequeñas y medianas unidades productivas[197]. El campamento Nueva Habana y sus dirigentes también intentan facilitar el desarrollo de una cultura participativa. El MIR crea entonces una importante animación cultural y organiza varias actividades. El documental de Tom Cohen muestra una de estas manifestaciones en donde alternan discursos de dirigentes políticos, canciones populares y representaciones teatrales, otorgándole amplio espacio de participación a los niños[198]. El objetivo es combinar diversión, cultura y propaganda política:

Las pancartas políticas daban un aire festivo y de kermesse revolucionaria al campamento, como el retrato del Che que medía más de doce metros de largo, instalado detrás del estrado, dándole la espalda a una nevada Cordillera de los Andes[199].

Aprovechando estas actividades, se realizan campañas de información sobre los problemas de vivienda, salud, sobre la prensa y las luchas en curso. Sin embargo, si consideramos los balances realizados posteriormente, los esfuerzos del MIR no siempre tienen una respuesta sustancial en cuanto a la participación, y los pobladores, muchas veces, asisten como espectadores pasivos, puesto que se trata de mensajes demasiado politizados y «prefabricados». De hecho, se asiste a una verdadera transformación lingüística de los pobladores militantes que dirigen el campamento, quienes, adoptando mecánicamente los conceptos y la forma de hablar de los intelectuales de su partido, se alejan de sus bases y terminan, a menudo, con un discurso hermético para la mayoría. La entrevista realizada a Abraham Pérez (miembro de la dirección del campamento hasta el golpe de Estado) confirma esta constatación sociológica in situ realizada por Christine Castelain[200]. Pero este período representa una importante evolución, donde paulatinamente se imponen los modos de comunicación populares, especialmente con diarios nacionales como Clarín.

La ideología dominante y la prensa del poder popular

El sociólogo Erik Neveu en numerosas ocasiones ha subrayado la importancia de los medios de comunicación en la construcción simbólica y estratégica de las luchas colectivas: el movimiento social debe, casi siempre, enfrentarse a los medios de comunicación dominantes, puede buscar utilizarlos o incluso convertirse él mismo en productor y difusor de información[201]. Los trabajos pioneros de Armand Mattelart, conducidos por una observación participante, han probado que tal fue el caso durante la Unidad Popular. Su encuesta sobre este tema a varias decenas de obreros de los CI de Santiago, constituye una fuente de información invaluable[202]. El control que posee la oposición es una herramienta de lucha poderosa en contra del proceso revolucionario. En ese sentido, la

izquierda y los promotores del poder popular demuestran una gran debilidad frente a la ofensiva ideológica de la burguesía[203]. En 1972, la izquierda sólo posee tres periódicos con un tiraje total de 140 mil ejemplares, mientras que la oposición tiene cuatro (más de 425 ejemplares), controla la totalidad de los 35 periódicos de provincia y la inmensa mayoría de las radios del país. Recordemos que sólo el banco Edwards, mandatario del grupo Rockefeller, es dueño de El Mercurio y también de siete diarios de provincia y de una de las más grandes casas editoriales de fotonovelas (muy populares en esa época). En 1973, por cierto, el paisaje de la prensa ha evolucionado, ya que la izquierda posee cinco títulos importantes en Santiago (entre los cuales Clarín, recientemente comprado por el PS). Pero la oposición sigue manteniendo la hegemonía. En tales condiciones, no es sorprendente que Christine Castelain constate en su análisis de discurso de una veintena de habitantes del campamento Nueva Habana, la fuerte penetración de la ideología dominante entre los pobladores[204]. Más globalmente, la propaganda de derecha tiene además efectos polarizadores sobre las divisiones ya existentes en el seno de las capas populares. Por otra parte, la oposición supo renovar su universo simbólico e incluso utilizar recursos, hasta entonces propios de la izquierda, para imponerse en la calle mediante manifestaciones masivas y regulares a partir de 1972.

Estos datos están presentes en numerosos militantes de izquierda, particularmente en aquellos que trabajan para la prensa[205]. Para algunos de entre ellos, el periodismo debe ser «la artillería del pensamiento» que arme teóricamente a la clase obrera[206]. Esto explica las movilizaciones colectivas apoyando la apropiación social de los medios informativos, como es el caso, por ejemplo, de El Sur, diario de Concepción, que fue expropiado durante un tiempo por sus trabajadores para convertirse en El Surazo; o también el largo conflicto en torno al Canal 9, cadena televisiva ocupada en enero de 1973 para disputar su orientación de derecha. Sin embargo, en este caso también y a pesar del apoyo de los sindicatos y de los partidos de izquierda, después de varios meses de titubeos, el gobierno decide desalojar por la fuerza a los trabajadores movilizados. Por otra parte, ya en el «manifiesto del pueblo» del CI Vicuña Mackenna, se podía leer la reivindicación de poner a los medios de comunicación «al servicio de los trabajadores» y la necesidad de tomar el control de las radios «al servicio de la burguesía». Paralelamente, durante este período, se multiplican numerosas formas básicas de prensa, fruto directo del impulso autogestionario que siguió a los eventos de octubre de 1972. Se trata de un militantismo informativo que intenta construir herramientas de comunicación al servicio del poder popular emergente. Pequeños periódicos de algunas páginas,

confeccionados con medios artesanales florecen en todo el país.

Cada cordón intenta dotarse de uno propio, algunos dirigidos por obreros, otros realizados por periodistas militantes. Los medios técnicos utilizados son muy dispares: hojas a roneo, imprentas de barrio o del diario gubernamental (La Nación), las que se pueden utilizar después del horario laboral[207]. Entre los periódicos «obreros» citemos El Vanguardia, financiado por el sindicato en el que participa Edmundo Jiles, en cooperación con el CI Cerrillos. Jiles recuerda que en el comité editorial participa incluso un cura progresista y que este pequeño diario reproduce las actas de las reuniones, las declaraciones del Cordón así como artículos redactados por diferentes sindicatos[208]. Por su parte, Tomás Inostroza subraya que fue fundador del periódico Poder popular, distribuido en los sindicatos del CI Macul y que trata de los problemas de las empresas, de los sindicatos pero también del campesinado de la comuna:

Yo era propietario, el responsable ante el Ministerio del Interior y los dirigentes eran unos compañeros obreros textiles, el director del periódico era un compañero obrero textil que vivía por allá por una toma de terrenos[209].

Otra publicación es El Cordonazo, nombre adoptado en referencia al movimiento semiinsurreccional que tuvo lugar en Córdoba (Argentina) en 1969 llamado «Cordobazo». En el mismo sentido, se puede observar que en términos de historia comparada, el nacimiento de esta prensa obrera recuerda, en numerosos puntos, la publicación de Electrum, en Córdoba, durante la «rebelión popular[210]». Como su homólogo argentino, El Cordonazo anuncia que «defiende los intereses de los trabajadores» y que «está hecho por ellos». Nació de la iniciativa de la comisión de propaganda del Cordón Vicuña Mackenna y fue aprobado en asamblea del CI a fines de junio de 1973, fecha en que aparece su primer número[211].

Portada del número 4 de El Cordonazo

ORGANO OFICIAL DEL CORDON INDUSTRIAL VICUÑA MACKENNA

el cordonazo

JUEVES 19 DE JULIO DE 1973 VALOR: Eº 2 EDICION Nº 4

[illegible]

El golpe fallido, que costó varias vidas y muertes, a manos de un grupo de [illegible] del ejército, con el apoyo de los [illegible] y con los [illegible], [illegible], con el fin de derrocar al Gobierno Popular elegido por el pueblo.

[illegible]

Porque ellos [illegible] la clase obrera [illegible] por la clase trabajadora.

[illegible]

[illegible] en Chile es la clase obrera, [illegible] el 29 de Junio, [illegible] del Poder Popular [illegible] al socialismo.

[illegible]

[illegible] el Poder Popular [illegible] al socialismo.

[illegible]

Nota:

Este periódico defiende los intereses de los trabajadores y está hecho por ellos. [illegible]

A. Mattelart, Mass Média, Idéologies et Mouvement Révolutionnaire, op. cit.,

El Cordonazo se define como el órgano de prensa oficial del Cordón y aparece todos los jueves. En la editorial de su primer número, sus redactores insisten sobre su rol de coordinación: «Actualmente existe un desconocimiento por parte de la mayoría de los trabajadores de las industrias de nuestro sector sobre las tareas del Cordón Industrial Vicuña Mackenna […]. A través de nuestras publicaciones daremos a conocer todas esas respuestas[212]». Es interesante notar que dentro de sus fundadores y animadores se encuentra el líder revolucionario peruano Hugo Blanco, en ese entonces exiliado en Chile[213]. Blanco no es el único revolucionario latinoamericano internacionalista que es activo en los CI, en particular en el frente cultural y partícipe de la batalla de la información. De hecho, Rafael Kries señala:

Las revistas estudiantiles fueron reemplazadas por periódicos y gacetillas en los que se articulaban, en oportunidades, diversas organizaciones e intelectuales. Entre ellas se hacía presente una juventud latinoamericana exiliada de sus países de origen, entre los cuales cabe destacar a militantes del VAR [Vanguarda Armada Revolucionaria], Palmares de Brasil, del PS de Ecuador, del partido trotskista de Hugo Blanco de Perú, de militantes revolucionarios de Guatemala, así como de países de Europa[214].

Por su parte, el cordón O'Higgins –a partir de julio de 1973– también decide publicar su periódico El Combatiente[215]. Podemos subrayar también la existencia de otros diarios de los CI, tales como Orden del día y Correo Proletario, cuyo primer número aparece en agosto de 1973. El CI Lo Espejo parece que también tuvo su periódico semanal y un taller de «periodismo popular[216]». Ciertamente, son una multitud de otros boletines obreros los que igualmente florecen en provincia. Un documento de los archivos judiciales de la ciudad de Concepción permite suponer que en el cordón del puerto se publicó un pequeño periódico llamado Barricada de los trabajadores, seguramente impreso por militantes de la izquierda revolucionaria[217]. Armand Mattelart cita la presencia, en los alrededores de la ciudad de Puerto Montt, de La Picana, diario que se plantea

coordinar las luchas campesinas con las JAP y los cordones industriales[218]. A nivel del APS, las principales industrias publican sus propios periódicos. Citemos, entre ellos, a Crea, de los sindicatos de la industria textil Sumar, que relatan la vida interna de la empresa, su situación económica, la participación de los trabajadores, pero también las actividades culturales o deportivas.

Número 5 de Crea (empresa Sumar-1972)





A CUESTION PLATAS

…ador General se confiesa con Crea (Pág. 4)



EX-SUMAR CAMPEON

Juegos Televisivos Canal 13

Campeonato Juvenil 197?







Fuente: Crea, N°5, 15 de agosto de 1972.

Destaquemos finalmente, las publicaciones que defienden la idea del poder popular y que son producto de algunas secciones regionales de los partidos de izquierda, cuentan con más recursos que los periódicos obreros, tanto materiales (imprentas del Estado) como intelectuales, y en consecuencia logran una realización y difusión acorde a ello. La Aurora de Chile o Tarea Urgente se autoproclaman «diario de los cordones industriales» pero, en realidad, son órganos de prensa del PS. El primero, es realizado por el Comité Regional Centro y aparece regularmente a partir de noviembre de 1972. Este semanario tiene un tiraje de 20 mil ejemplares aproximadamente. Todos los periodistas son voluntarios, desde el director-editor (Tito Drago) hasta el representante legal (Juan Bustos), pasando por los reporteros. La secretaria y un miembro de las Juventudes Socialistas son los únicos permanentes[219]. En cuanto a Tarea Urgente, son los militantes del Regional Cordillera quienes lo editan bajo la conducción de Osvaldo Chandía (a partir del 16 de febrero de 1973).

Portada de Tarea Urgente en 1973

tarea urgente

9

NUESTRA TAREA:

¡ORGANIZAR LA OFENSIVA FINAL!

LOS CORDONES INDUSTRIALES, VANGUARDIA DEL PODER POPULAR

TAREA URGENTE ES:

1

2

3



Fuente: Tarea Urgente, 20 de julio de 1973

Ambos periódicos emergen a partir de la constatación de la «necesidad de una prensa obrera», que sea –por lo menos, en parte– escrita por cronistas obreros[220], un sentimiento que es compartido por el conjunto de la izquierda. Así, el diario El Compañero del MAPU invita a sus lectores a talleres de creación y publica en sus páginas las consignas a seguir[221]. Tarea Urgente y La Aurora de Chile pretenden formar «reporteros populares» que puedan informar de la actualidad en curso en los cordones industriales.

INSTRUCCIONES PARA CORRESPONSALES POPULARES Y OBREROS:

*** En cada fábrica, en cada empresa, en cada población, campamento y barrio, deben designarse por los propios trabajadores y vecinos, los corresponsales populares y obreros.

*** Estos corresponsales serán LOS PERIODISTAS DEL PUEBLO REVOLUCIONARIO. Deberán coordinarse entre los periódicos de izquierda y mantener contacto con los siguientes medios:

LA AURORA DE CHILE
TAREA URGENTE
EL SIGLO
PURO CHILE
CLARIN
ULTIMA HORA
SEMANARIO PONCHO
SEMANARIO CHILE HOY
SEMANARIO PLAN
PUNTO FINAL
RADIO CORPORACION
RADIO PORTALES
RADIO MAGALLANES
RADIO LUIS EMILIO RECABARREN
RADIO NACIONAL
RADIO CANDELARIA
CANAL 9 TV
CANAL 7 TV.

Deben informar a toda la prensa popular, sobre los triunfos, éxitos y tareas que cumplen los trabajadores de su zona o empresa.

*** TODAS LAS EMPRESAS TOMADAS, EXPROPIADAS, ESTATIZADAS O INTERVENIDAS, deben estar informadas regularmente a la prensa popular, A TRAVES DE SUS CORRESPONSALES OBREROS.

*** Informar sobre creación de Comités de Control, creación de Consejos Comunales y JAP, aumentos de producción en la empresa, Control de la Distribución. Informar también sobre maniobras de los ricos y momios.

*** NO SE DEBE ENTREGAR INFORMACION PUBLICA SOBRE COMITES DE DEFENSA Y VIGILANCIA, NI SOBRE LAS MEDIDAS DE PROTECCION QUE TOMAN LOS TRABAJADORES Y VECINOS.

*** Toda experiencia positiva, que pueda ser útil para el trabajo de organización del pueblo, debe ser transmitida, por pequeña que parezca y por simple que sea.

*** No inventar. No "cachurear". Decir la verdad en forma clara, sencilla, y sin pretensiones de hacer una obra literaria.

*** No hacer uso de RUMORES ni de SUPOSICIONES. Entregar información previamente verificada.

Fuente: Orden del día, N°1, sin fecha (En: A. Mattelart, Mass Média, *Idéologies et Mouvement Révolutionnaire, op. cit.,)*

Según Luis Ahumada, Carmen Silva o Pablo Muñoz, militantes socialistas, ese tipo de publicaciones, así como el boletín sindical publicado por el PS, Trinchera Sindical (publicado entre marzo y septiembre de 1973), a cargo de Rafael Kries y Rubén Escribano, gozan de una gran simpatía en los CI[222]. Otros testimonios de obreros de los cordones confirman esta percepción positiva[223]. Rafael Kries anota que

La expansión de los cordones hizo posible el acceso a las altas reuniones del PS de líderes sindicales que no habían hecho su desarrollo al interior del partido, sino en las luchas de la clase obrera, como es el caso de Manuel Dinamarca. Un segmento de la dirección canalizó recursos a Trinchera Sindical, periódico del Departamento Nacional Sindical (DENAS) y ésta se vinculó con CONAS, la Comisión Agraria de ese partido, que había sido la primera estructura política chilena con nexos con el guevarismo[224].

La pretensión de la prensa del PS de representar al poder popular demuestra nuevamente esta visión sustitutiva de la izquierda. Los trabajadores más conscientes critican abiertamente este elitismo revolucionario. Tomás Inostroza, dirigente del Cordón Macul, no oculta su sarcasmo en contra de sus camaradas de La Aurora de Chile[225]. En Nueva Habana, se puede detectar el mismo tipo de tensiones en torno al diario El grito del pueblo, que vincula a los diferentes campamentos bajo la égida del MIR. En total, se editan unos sesenta números del Grito con 300 ejemplares cada uno: al principio, 250 logran ser vendidos, pero luego la venta decae. Ahora bien, ¿cómo lograr la participación real de los habitantes en la redacción, si la tasa de analfabetismo es considerable[226]?

Finalmente, si podemos hablar del tímido surgimiento de una prensa del poder popular y por lo tanto, efectivamente de la «emergencia de un militantismo productor y difusor de información[227]», hay que saber distinguir entre los periódicos realizados por el movimiento social y aquellos teleguiados por los

partidos. Por otra parte, estos trazos de la prensa del poder popular dibujan, más globalmente, la envergadura del desafío al que se enfrentan las clases populares chilenas cuando no necesariamente tienen todas las herramientas intelectuales y materiales para hacerlo. Según el obrero del Cordón de Santiago entrevistado por Mattelart, el objetivo final de la gesta autogestionaria del poder popular es «que sean los trabajadores los que lleguen a razonar, pensar, a determinarse por ellos mismos[228]». El violento final de la Unidad Popular no permite decir si esta preocupación, expresada por varios sindicalistas, de entregar armas intelectuales y mediáticas por y para los asalariados, habría podido modificar –aunque sea lentamente– algunos rasgos del caudillismo que reinaba entonces en el movimiento obrero.

1 Chile Hoy, nº 21, 3 al 9 de noviembre de 1972.

2 Cruz Salas, Luis, «Estado, partidos y movimiento obrero». En: Para recuperar la memoria histórica, op. cit., pp. 411-412.

3 Un paralelo y enfoque comparativo se podrían realizar con las huelgas obreras de 1936, en Francia, durante el Frente Popular. Concordamos con Hugo Cancino quien rechaza las interpretaciones que se hacen de octubre como el nacimiento de una «vía insurreccional» (La problemática…, op. cit, p. 303).

4 Ver el análisis de Magasich, Jorge, Pouvoir réel, pouvoir formel, op. cit., p. 136.

5 El Mercurio, Santiago, 31 de octubre de 1972.

6 El Mercurio, Santiago, 3 de noviembre de 1972. Señalar que entre los militares que entran al gobierno se encuentra el contraalmirante Ismael Huerta (en Transporte y Obras públicas), que luego será un ferviente servidor de la dictadura de Pinochet.

7 Ver Magasich, Jorge, Pouvoir réel, pouvoir formel, op. cit., pp. 139-147 y Silva, Miguel, Los Cordones Industriales, op. cit., pp. 240-252.

8 Cifras tomadas de Bitar, Sergio, Transición, Socialismo y Democracia: la experiencia chilena, México, Siglo XXI, 1979, p. 171 y Prats, Carlos, Memorias: testimonio de un soldado, Santiago, Pehuén, 1985, pp. 340-348.

9 Millas, Orlando, Memorias, 1957-1991. Una digresión, op. cit.

10 Citado en Luis Corvalán L., El Gobierno de Salvador Allende, op. cit., pp. 182-183.

11 Estas listas no mencionan los bancos o las empresas que ya se habían estatizado por ley, como en el caso del cobre, las empresas mineras de hierro, carbón o cemento y otras que pasaron a manos del Estado por acuerdo mutuo mediante la adquisición de sus acciones. Cf; Presidencia de la República, Proyecto de Ley sobre el Área de Propiedad Social (24 de enero de 1973).

12 «Las 123 que serían devueltas», Las Noticias de Última Hora, Santiago, 29 de enero de 1973.

13 En este caso también, la tercera parte del documental de Patricio Guzmán, La Batalla de Chile, op. cit. es un buen referente.

14 El 28 de noviembre de 1972, Prats es aclamado por una masa en júbilo durante una gran manifestación de apoyo a la Unidad Popular.

15 Winn, Peter, Tejedores de la revolución, op, cit., p. 316.

16 El Mercurio, Santiago, 9 de noviembre de 1972.

17 Clarín, 28 de enero de 1973.

18 Ibid.

19 El Mercurio, Santiago, 15 de noviembre de 1972.

20 La Aurora de Chile, 18 de enero de 1973.

21 Chile Hoy, nº 34, 2 al 8 de febrero de 1973.

22 IC, Testimonio Hernán Mery, 17 de febrero de 1973.

23 El general Prats es el encargado de hacer este llamado al orden (El Mercurio, Santiago, 7 de noviembre de 1972).

24 Cf. Broué, Pierre y Témime, Émile, La révolution et la guerre d'Espagne, Paris, Éditions de Minuit, 1961 (reed.1996) y Godicheau, François, La guerre

d'Espagne. République et révolution en Catalogne, París, Odile Jacob, 2004.

25 Declaración de Teitelboim citada en Harnecker, Marta, La lucha de un pueblo sin armas (Los tres años de gobierno popular), septiembre de 2003 en [www.rebelion.org/hemeroteca/harnecker.htm].

26 Clarín, 30 de enero de 1973.

27 Chile Hoy, nº 34, 2 al 8 de febrero de 1973.

28 Ibid.

29 Ibid.

30 «El Pliego del Pueblo», Santiago, octubre de 1972. En: Farías, Víctor, op. cit., t.VI, pp. 3272-3288.

31 Entrevista con Edgardo Enríquez, «Pourquoi nous avons échoué? Le MIR devant l'expérience de l'UP», Archives du CEDETIM, outil nº 25, s/f.

32 «El Pliego del Pueblo», Santiago, octubre de 1972. En: Farías, Víctor, op. cit., t.VI, pp. 3272-3288.

33 Ibid.

34 Chile Hoy, 27 de octubre de 1972.

35 MIR, Informe de la Comisión Política al Comité Central restringido sobre la crisis de septiembre, Santiago, 3 de octubre de 1972 (Documentos Internos - 1972).

36 Así, en Santiago, cada sector que compone un GPM está formado por alrededor de 18 miembros (3 militantes y 15 aspirantes). Son ellos los que deben organizar los frentes sociales formados -en promedio- por 50 personas y hacer agitación en un radio de alrededor de 500 personas movilizadas.

37 Ver su testimonio en Silva, Miguel, op. cit., p. 310.

38 Rodríguez, Guillermo, De la brigada segundaria…, op. cit., cap. «GPM4».

39 Entrevista realizada en Santiago, 6 de agosto de 2003.

40 Moreno, Roberto, (Comisión Política del MIR), Consejos Comunales de Trabajadores y dualidad de poder. Análisis y evaluación, Santiago, 3 de diciembre de 1972 (Documentos Internos 2ª - 1973).

41 Tarea Urgente, 3 de agosto de 1973.

42 Cheetham, Rosemond, Rodríguez, Alfredo, Rojas, Gastón, Rojas, Jaime, Comandos urbanos…, op. cit., pp. 49-52.

43 El Rebelde, 11 de diciembre de 1972.

44 El Mercurio, Santiago, 9 de noviembre de 1972.

45 El Mercurio, Santiago, 17 de noviembre de 1972. Como lo subraya Jorge Magasich, uno de los militares que se desplaza a Arica, es el general Odlanier Mena, futuro director de la Central Nacional de Informaciones (CNI).

46 El Mercurio, Santiago, 15 de diciembre de 1972.

47 El Compañero, nº 9, 1972 y Las Noticias de Última Hora, 29 de enero de 1973.

48 Entrevista realizada en Santiago, 18 de marzo de 2002.

49 Clarín, 27 de enero de 1973.

50 El Rebelde, 2 y 9 de enero de 1973.

51 El Mercurio, Santiago, 26 de enero de 1973.

52 Henríquez, Renzo, Cordón Cerrillos Maipú…, op. cit., p. 137.

53 El Mercurio, Santiago, 31 de enero de 1973.

54 Los trabajadores de la construcción tienen una cultura militante muy combativa, históricamente marcada por el anarcosindicalismo (La Aurora de Chile, 8 de febrero de 1973).

55 La Aurora de Chile, 8 de febrero de 1973.

56 Comando del Cordón Cerrillos-Maipú, «Llamado del Cordón Cerrillos»,

Maipú, 30 de enero de 1973, IC, Testimonio Hernán Mery, 17 de febrero de 1973; Comando del CI Cerrillos-Maipú, «Declaración de los cordones frente al Área Social y el abastecimiento», Maipú, 30 de enero de 1973, Tarea Urgente, 16 de febrero de 1973.

57 Certificación entendida como la «señal emitida por una autoridad exterior que demuestra que está dispuesta a reconocer la existencia y reivindicación de un cierto actor político», en Tilly, Charles y Tarrow, Sidney, Politique(s) du conflit, op. cit., p. 353.

58 Testimonio recopilado por Silva, Miguel, op. cit., p. 316. Ver El Mercurio, Santiago, 4 de febrero de 1973.

59 Punto Final, 13 de febrero de 1973. Para un análisis detallado de estos eventos, ver Henríquez, Renzo, Cordón Cerrillos Maipú…, op. cit., pp. 136-178.

60 La Aurora de Chile, 8 de febrero de 1973.

61 Presidencia de la República, «Declaración sobre el proyecto relativo al Área de Propiedad Social ante dirigentes de los Cordones Industriales de Santiago», 31 de enero de 1973. En: Farías, Víctor, op. cit. T.VI, pp. 3944-3945).

62 El Mercurio, Santiago, 11 de febrero de 1973.

63 Punto Final, 27 de marzo de 1973.

64 IC, Testimonio Hernán Mery, 12 de enero de 1973.

65 Sobre estas prácticas y su recuperación por parte del Estado, ver Melo, Leonardo, Las JAP. Historia y memoria de una experiencia de participación popular. Chile 1970-1973, Tesis de Licenciatura en Historia, Santiago, Universidad Academia de Humanismo Cristiano, 2012, cap. 2 y 3.

66 Carta Informativa, nº 3, diciembre de 1972-enero de 1973.

67 Entrevista realizada en Pessac (Francia), 25 de enero de 2001.

68 Ver el artículo de José Cademartori en El Siglo, 28 de noviembre de 1972.

69 Chile Hoy, 17 de noviembre de 1972 y La Nación, 11 de enero de 1973.

70 La Nación, 11 de enero de 1973

71 Las Noticias de Última Hora, Santiago, 9 de enero de 1973. Consultar también el documento oficial: Dirinco y Secretaría General de Distribución, «Marco de acción de las JAP», enero de 1973. En: Farías, Víctor, op. cit., t.VI, pp. 3772-3780.

72 La Nación, 11 de enero de 1973

73 Ver los periódicos La Prensa, La Segunda y El Mercurio del 11 de enero de 1973.

74 El Mercurio, Santiago, 16 de diciembre de 1972.

75 Presidencia de la República, Decreto nº 41, 18 de enero de 1973. En: Farías, Víctor, op. cit., t.VI, pp. 3788-3790.

76 El Siglo, 23 de enero de 1973.

77 Chile Hoy, 25 de enero de 1973.

78 Clarín, 14 de enero de 1973.

79 Punto Final, 13 de marzo de 1973.

80 La Prensa, 20 de febrero de 1973.

81 Suárez, Héctor, «¿La distribución. Tarea de las masas o de las FFAA?», Punto Final, suplemento de la edición nº 182, 24 de abril de 1972.

82 Las Noticias de Última Hora, 16 de enero de 1973.

83 El Rebelde, nº 66, enero de 1973.

84 Esta canasta popular contiene, entre otros: 2 kg de azúcar, leche, 1 kg de porotos verdes, 1 kg de harina, de tallarines, de arroz, 1 litro de aceite, fósforos, pasta de dientes, cochayuyo, mantequilla, sal, detergente… Chile Hoy, 25 de enero de 1973.

85 La Aurora de Chile, 1 de febrero de 1973.

86 Las Noticias de Última Hora, 17 de enero de 1973.

87 La Aurora de Chile, 11 de enero de 1973.

88 Entrevista a Abraham Pérez, realizada en Santiago el 6 de mayo de 2002. Ver también el testimonio de una pobladora de Nueva La Habana en Chile Hoy, nº 32, 22 de febrero de 1973.

89 Entrevista realizada en Santiago, 6 de mayo de 2002.

90 Entrevista realizada en Santiago, 20 de noviembre de 2001.

91 Castelain, Christine, Enquête sociologique sur le bidonville Nueva Habana, op. cit., p. 186.

92 Es la gran diferencia que identifica Castelain, especialmente con el campamento vecino, dirigido por la UP y cuyo sistema de distribución lo califica de «abastecimiento caudillista» (Ibid., pp. 189-190).

93 La Aurora de Chile, 25 de enero de 1973.

94 Punto Final, 13 de marzo de 1973. Castelain entrega la cifra de 30 mil canastas (op. cit., p. 185).

95 Suárez, Héctor, «¿La distribución. Tarea de las masas o de las FFAA?», op. cit.

96 Chile Hoy, nº39, 9 al 15 de marzo de 1973.

97 El Mercurio, Santiago, 24 de febrero de 1973.

98 Cours-Salies, Pierre, Vakaloulis, Michel, Les mobilisations collectives…, op. cit., pp. 81-106.

99 Rocher, Guy, Le changement social, op. cit., pp. 277-278.

100 Seguel-Boccara, Ingrid, Les passions politiques au Chili durant l’Unité Populaire…, op. cit.

101 Cancino, Hugo, La problemática del poder popular…, op. cit.

102 Ullianova, Olga, «La Unión Soviética y la izquierda chilena durante la guerra fría. Construcción de imágenes mutuas», Medio siglo de debates tácticos y estratégicos en la izquierda chilena. 1950-2000, Santiago, Usach, notas del autor, noviembre de 2002.

103 Vergara, Jorge, «El pensamiento de la izquierda chilena en los sesenta. Notas de investigación». En: Varas, Augusto (comp.), El Partido Comunista en Chile. Estudio multidisciplinario, Santiago, Cesoc-Flacso, 1988, pp. 261-341. Ver también Löwy, Michael, (Antología), Le marxisme en Amérique Latine, París, Maspero, 1980.

104 Debray, Régis, Conversación con Allende, México, Siglo XXI, 1974.

105 Entrevista con Miguel R. realizada en Pessac (Francia), 25 de enero de 2001.

106 Enríquez, Miguel, «El poder popular y los comandos comunales», Intervención en el foro organizado por el sindicato de trabajadores del diario Clarín, Edificio Gabriela Mistral, Santiago, enero de 1973 (Documentos Internos 3-A- 1973).

107 Entrevista realizada en Santiago, 11 de marzo de 2002.

108 Testimonio recopilado por Silva, Miguel, op. cit., pp. 465-466.

109 Mires, Fernando, «Les contradictions de l'Unité Populaire». En: Pozo, José del, Jacob. André, Le Chili de 1970 à 1990. De l'Unité Populaire à l'après Pinochet, Montréal, ULB Éditeur, 1994, pp. 31-48.

110 Chile Hoy, nº8, 4 al 10 de agosto de 1972. Ver también, García, Pío, «El poder popular», Chile Hoy, nº31, del 12 al 17 de enero de 1973

111 Ramos, Sergio, Chile: ¿una economía de transición?, Santiago, CESO-PLA, Universidad de Chile, 1972, p. 74. (cursivas en el original).

112 Allende, Salvador, «Primer mensaje al Congreso nacional», 21 de mayo de 1971. En: Farías, Víctor, op. cit., t.III, p. 803.

113 Zavaleta, René, El poder dual en América Latina, op. cit., p. 126.

114 Harnecker, Marta, «Los comandos comunales y la polémica en el seno de la izquierda», Chile Hoy, nº28, 22 al 28 de diciembre de 1972.

115 Cancino, Hugo, La problemática del poder popular…, op. cit., pp. 330-336.

116 La primera reunión, organizada por CPS se desarrolla entre el 24 y 26 de noviembre de 1972 con la participación de Mireya Baltra (PC), Miguel Enríquez (MIR), Hernán del Canto (PS), Bosco Parra (IC), José Antonio Viera-Gallo (MAPU). Ver Punto Final, suplemento al nº 172, 5 de diciembre de 1972. La segunda es organizada por el sindicato de Clarín, a principios de enero de 1973 y cuenta con la participación de Luis Maira (IC), Víctor Barbieris (PS), Pablo Richard (CPS), Miguel Enríquez (MIR). Ver Foro Político, «El poder popular y los comandos de trabajadores», Punto Final, suplemento al nº 175, 16 de enero de 1973. En la tercera, coordinada por Faride Zerán, participan Juan Olivares (MIR), presidente del Comando Estación Central; Hernán Ortega (PS), presidente del CI Cerrillos-Maipú; Gustavo Cerda (PC), dirigente del Comité Local de Maipú. Ver Chile Hoy, 21 de junio de 1973. Y, finalmente, la cuarta reunión también organizada por Chile Hoy, con Juan Olivares (MIR), Patricio Romo (MIR), Víctor Muñoz (PS), Arturo Martínez (MAPU), Hugo López (MAPU-OC), Alan Marchant (PS). Ver Chile Hoy, 3 de agosto de 1973 y Chile Hoy, 10 de agosto de 1973.

117 MIR, «Respuesta a los ataques del secretario general del PC», El Rebelde, febrero de 1973 (obtenido de la versión francesa: MIR, Recueil de textes 1970-1973, París, Politique Hebdo, trad. Anne Valier, 1974).

118 Corvalán, Luis, «Carta a Carlos Altamirano, secretario general del Partido Socialista», Santiago, 6 de febrero de 1973. En: Corvalán, Luis, Chile: 1970-1973, Sofía, Sofía Press, 1978, pp. 160-168.

119 Entrevista citada en Harnecker, Marta, La lucha de un pueblo sin armas, op. cit.

120 Ver Yáñez, A., «Algunos problemas de la estrategia y de la táctica de la revolución chilena», PCC, Boletín exterior, nº 24, julio-agosto de 1977 y Labarca, Eduardo, «Apuntes sobre los Cordones Industriales», PCC, Boletín exterior, nº 43, septiembre-octubre de 1980, pp. 49-74. El secretario general del PC de la época, Luis Corvalán, no le presta ninguna atención a los CI en sus memorias, prueba de una suerte de amnesia «oficial» del PC. Ver Corvalán L.,

Luis, De lo vivido y lo peleado, Santiago, Lom ediciones, 1997.

121 Zerán, Faride, «Los Comunistas y los Cordones», Chile Hoy, 16 de agosto de 1973 y Chile Hoy, 21 de junio de 1973.

122 Altamirano, Carlos (secretario general del PS), «Carta a Luis Corvalán, secretario general del PC», Santiago, 13 de febrero de 1973, El Siglo, 15 de febrero de 1973.

123 Posición, nº 41, 16 de marzo de 1973.

124 PS y PC, «Propósitos de ofensiva política», Santiago, octubre de 1972. En: Farías, Víctor, op. cit., t.VI, pp. 3306-3312.

125 La Aurora de Chile, 8 de marzo de 1973.

126 PS (regional Cordillera-Santiago), «Definir e impulsar una política revolucionaria», documento confidencial, marzo de 1973. En: Farías, Víctor, op. cit., t.VII, pp. 4450-4468.

127 Ibid.

128 Ver el capítulo consagrado a la última fase del debate sobre el poder popular, después de junio de 1973.

129 Enríquez, Miguel, «Intervención en el foro organizado por el sindicato de trabajadores del diario Clarín», Edificio Gabriela Mistral, Santiago, diciembre de 1972 (Documentos Internos 3ª-1973).

130 Ibid.

131 Chile Hoy, 27 de julio al 2 de agosto de 1973.

132 Castelain, Christine, Enquête sociologique sur le bidonville Nueva Habana, op. cit.

133 Entrevista realizada en Santiago, 1 de mayo del 2002.

134 La Aurora de Chile, 16 de agosto de 1973 y 26 de julio de 1973. Posición, 24 de octubre de 1972.

135 La Aurora de Chile, 31 de mayo de 1973.

136 Entrevista realizada en La Serena, 24 de junio de 2002.

137 Ibid.

138 Joxe, Alain, «Le Chili entre le freinage et l'affrontement», Politique Hebdo, París, 1972, pp. 71-95.

139 Entrevista realizada en Santiago, 20 de noviembre de 2001.

140 Harnecker, Marta, «Los Cordones Industriales y la CUT», Chile Hoy, 2 de agosto de 1973.

141 Chile Hoy, 10 al 16 de agosto de 1973.

142 Citado por Cancino, Hugo, La problemática…, op. cit., p. 376.

143 Esta influencia es evidente si recordamos que todos los presidentes de los Cordones que firman la declaración de la «Coordinadora provincial de Cordones Industriales de Santiago» son militantes del PS (Tarea Urgente, 27 de julio de 1973).

144 Los testimonios de Carmen Silva, Pablo Muñoz y Pablo Ahumada destacan la importancia del Denas en esta táctica político-sindical.

145 Trinchera, nº 2, diciembre de 1972.

146 La Aurora de Chile, 29 de marzo de 1973.

147 Ver por ejemplo, los intentos de un Cordón Industrial en Talca (Tarea Urgente, 27 de julio de 1973) o también su conformación en Valparaíso, bajo la égida de la CUT local (Cheetham, Rosemond, Rodríguez, Alfredo, Rojas, Gastón, Rojas, Jaime, Comandos urbanos…, op. cit.)

148 Najman, Maurice, Le Chili est proche, op. cit., p. 168.

149 Chile Hoy, 27 de julio al 2 de agosto de 1973.

150 La Aurora de Chile, 26 de julio de 1973.

151 El Pueblo, nº 28, febrero de 1973.

152 Santa Cruz, Eduardo, «Comandos comunales: órganos de poder del pueblo». En: Farías, Víctor, op. cit., t.VIII p. 4869.

153 Ibid, p. 4870.

154 Buró Político del MIR, Los Comandos Comunales, órganos de poder, órganos de combate de las masas (folleto), Santiago, julio de 1973.

155 Trinchera, nº3, 19 de enero de 1973.

156 Poder, 12 de mayo de 1973.

157 Reenviamos a nuestra distinción entre Cordones en sí y Cordones para sí, en parte inspirada en los trabajos de Pierre Bourdieu sobre las clases sociales movilizadas (Bourdieu, Pierre, «Espace social et genèse des 'classes'», Actes de la recherche en sciences sociales, op. cit.).

158 Silva, Angélica, Santa Lucía, Patricia, «Les Cordons industriels: une expression de pouvoir populaire au Chili», op. cit.

159 Entrevista realizada en Santiago, 14 de mayo de 2002.

160 MIR, Informe de la Comisión Política al Comité Central restringido sobre la crisis de octubre, Santiago, 3 de noviembre de 1972 (Documentos Internos – 1972).

161 Entrevista realizada en Iquique, 6 de noviembre de 2001.

162 Entrevista realizada en Santiago, 6 de mayo de 2002.

163 Entrevista realizada en Santiago, 4 de julio de 2002.

164 Entrevista realizada en Santiago, 20 de noviembre de 2002.

165 Ibid.

166 Entrevista realizada en Santiago, 6 de mayo de 2002.

167 Sobre la noción de capital militante, consultar Matonti, Frédérique;

Poupeau, Franck, «Le capital militant. Essai de définition», Actes de la recherche en sciences sociales, nº 155, diciembre de 2004, pp. 5-12: «Se trata aquí particularmente de interesarse en los aprendizajes que el militantismo entrega, en las competencias traídas desde el exterior así como en las que se aprenden sobre la marcha, lo que hemos escogido llamar, al menos, provisoriamente, capital militante. Un capital militante que se adquiere entonces, y esto, en gran parte, en el campo político, donde además se valoriza, aunque también se reconvierte fuera de él, en caso de salida».

168 Ver su testimonio en Leiva, Sebastián, «Entrevista a Hernán Aguiló Martínez», Las historias que podemos contar, Santiago, octubre de 2005, [www.lashistoriasquepodemoscontar.cl/nancho.htm].

169 La Aurora de Chile, 8 de marzo de 1973.

170 MIR, Informe de la Comisión Política al Comité Central restringido sobre la crisis de octubre y nuestra política electoral, 3 de noviembre de 1972 (Documentos internos 1972).

171 Entrevista realizada en Santiago, 1 de mayo de 2002.

172 Castelain, Christine, Enquête sociologique sur le bidonville Nueva Habana, op. cit., pp. 239-241.

173 Winn, Peter, Tejedores de la revolución, op. cit.

174 Sarget, Marie-Noëlle, Système politique et Parti Socialiste au Chili, op. cit., y «Rétroactions positives aux interventions du système politique sur les autres systèmes sociaux et invention de la société: l'exemple du Chili de l'Unité Populaire», L'invention de la société, Evora, XV Congreso de la AISLF, julio 1996.

175 Bourdieu, Pierre, «La représentation politique. Éléments pour une théorie du champ politique», Actes de la recherche en sciences sociales, nº 36/37, pp. 3-24; y Propos sur le champ politique, Lyon, PUL, 2000.

176 Vayssière, Pierre, Les Révolutions en Amérique Latine, op. cit.

177 La Aurora de Chile, 3 de mayo de 1973.

178 La Aurora de Chile, 12 de abril de 1973.

179 Vayssière, Pierre, Les Révolutions en Amérique Latine, op. cit., p. 289.

180 Sobre las relaciones entre arte y contestación, ver por ejemplo: Balasinski, Justyne, Mathieu, Lilian (dir.), Art et contestation, Rennes, PUR, 2006.

181 Catalán, Carlos; Guilisasti, Rafael; Munizaga, Giselle, «Transformaciones del sistema cultural chileno entre 1920-1973», Ceneca, Santiago, 1987.

182 Joubert, Valérie, Je te nomme liberté: fresques populaires à Santiago du Chili, Tesis de doctorado en Études ibériques, Bordeaux, Université Bordeaux III, 1997. Ver también la segunda parte de Trumper, Camilo, A ganar la calle. The politics of public space and public art in Santiago Chile (1970-1973), op. cit.

183 Barraza, Fernando, La nueva canción chilena, Santiago, Quimantú, col. «Nosotros los chilenos», 1972.

184 Le Chili d'Allende: témoignages de la vie quotidienne, Coopératives Albert Saint Martin, 1978, p. 174.

185 Mattelart, Armand, Mass Média, idéologies et mouvement révolutionnaire, París, Éditions Anthropos, 1974.

186 Ibíd., p. 62.

187 Entrevista realizada en Santiago, 1 de mayo de 2002.

188 Central Única, nº 5, octubre-noviembre de 1971.

189 Voegtli, Michael, «Identité collective». En Fillieule, Olivier; Mathieu, Lilian; Péchu, Cécile, Dictionnaire des mouvements sociaux, París, Presses de Sciences Po, 2009, pp. 292-299 y Tilly, Charles, Identities, boundaries and social ties, Boulder, Paradigm, 2005.

190 Alexander, Robert J., The tragedy of Chile, Westport, Connecticut, Greenwood Press, 1978, p. 315

191 Entrevista realizada en Santiago, 18 de marzo de 2002.

192 Participan alrededor de una treintena de cantantes, obreros de la industria ex-Hirmas al lado del conjunto folclórico de otra fábrica textil: Sumar-Algodón y de artistas profesionales.

193 Revista Quinta Rueda, N°9, Santiago, agosto 1973 [www.memoriachilena.cl/archivos2/pdfs/MC0013711.pdf]. Ver también López, Ana (coord.), Testimonio de la Cordones industriales…, op. cit., p. 108.

194 Entrevista realizada en Santiago, 11 de junio de 2002.

195 Tarea Urgente, 15 de junio de 1973.

196 Marca de pasta de dientes muy popular en la época.

197 Castelain, Christine, Enquête sociologique sur le bidonville Nueva Habana, op. cit., pp. 152-153.

198 Cohen, Tom, Campamento Nueva Habana, op. cit.

199 Castelain, Christine, Enquête sociologique sur le bidonville Nueva Habana, op. cit., p. 155.

200 Entrevista realizada en Santiago, 6 de mayo de 2002.

201 Neveu, Erik, Sociologie des mouvements sociaux, La Découverte, coll. «Repères», Paris, 1996, pp. 90-99.

202 Mattelart, Armand, Mass Média, idéologies et mouvement révolutionnaire, op. cit.

203 Mattelart, Armand, «La prensa de izquierda y el poder popular», Punto Final, suplemento al nº 128, Santiago, 13 de abril de 1971.

204 Castelain, Christine, Enquête sociologique sur le bidonville Nueva Habana, op. cit., pp. 251-310.

205 Sobre este tema, se puede consultar con interés el punto de vista de la revista teórica del PC: Principios, nº 139, junio de 1971.

206 Expresión utilizada por La Aurora de Chile, 3 de mayo de 1973.

207 Mattelart, Armand, Mass média, idéologies et mouvement révolutionnaire, op. cit., p. 233.

208 Desgraciadamente, esta formidable fuente de información es hoy inaccesible: Edmundo Jiles recuerda que al momento del golpe de Estado, escondió en un muro una colección de El Vanguardia, pero que a esta fecha no la ha podido recuperar. Entrevista realizada en Santiago, 6 de mayo de 2002.

209 Entrevista realizada en Santiago, 4 de julio del 2002.

210 Cena, Juan Carlos (comp.), El Cordobazo. Una rebelión popular, Buenos Aires, La rosa blindada, 2000.

211 La Aurora de Chile, 5 de julio de 1973.

212 Citado en Tarea Urgente, nº7, 3 de julio de 1973.

213 Entrevista con Hugo Blanco realizada en Lima, 13 de julio de 2010.

214 Kries, Rafael, El ABC del poder popular, op. cit.

215 La Aurora de Chile, 5 de julio de 1973.

216 La tragedia chilena: testimonios, Buenos Aires, Merayo, 1973, pp. 177-122.

217 República de Chile, Corte de Apelaciones de Concepción, sumario nº 69-73, Sección general de investigaciones-Prefectura de Concepción, Oficio nº 18, Talcahuano, 18 de octubre de 1973.

218 Mattelart, Armand, Mass Média, idéologies et mouvement révolutionnaire, op. cit., p. 245.

219 La Aurora de Chile, 17 de mayo de 1973.

220 Ver por ejemplo: «Cordones Industriales: necesidad de una prensa obrera», La Aurora de Chile, 22 de marzo de 1973.

221 «Prensa popular: nueva tarea del pueblo», El Compañero, nº 12, octubre de 1972.

222 Ver los relatos de Luis Ahumada, Pablo Muñoz (entrevistas realizadas en La

Serena, 24 de junio de 2002) y de Carmen Silva (entrevista realizada en Santiago, 20 de noviembre de 2001).

223 Mattelart, Armand, «Presse et ligne de masse dans les Cordons industriels de Santiago», Mass Média, idéologies et mouvement révolutionnaire, op. cit.

224 Kries, Rafael, El ABC del poder popular, op. cit.

225 Entrevista realizada en Santiago, 4 de julio de 2002.

226 Castelain, Christine, Enquête sociologique sur le bidonville Nueva Habana, op. cit., pp. 85-86.

227 Granjon, Fabien, «Médias». En: Dictionnaire des mouvements sociaux, op. cit., pp. 349-356.

228 Mattelart, Armand, Mass Média…, op cit., p. 243.

Cuarta parte

Repertorios del poder popular, territorios movilizados y amenazas de golpe de Estado

¿Que no ve, don Manuel, que el pueblo es invencible, que somos millones, que cómo van a matarnos a todos. Y algunos milicos patriotas habrá pues, don Manuel no me diga que hoy día le bajó el indio? que anda con la depre. Y el Don Manuel: que no, hijito, que no es eso, que es que los veo aquí en mi casa como pichones en la palomera y no me gustaría que les cortaran las alitas cuando comiencen a volar…

Antonio Skármeta, Soñé que la nieve ardía, Santiago,

Random House Mondadori, 2012, pp.196-197.

Capítulo 10

¿Movilizaciones colectivas radicales sin alternativa política?

Aceleración de la crisis de la Unidad Popular

¿Un «polo revolucionario» en las elecciones legislativas?

Hemos intentado explicar que, a partir de octubre de 1972, se abre un período de acentuación de las diferenciaciones en curso en el seno de la izquierda chilena e incluso de enfrentamientos esporádicos entre el movimiento obrero y el gobierno de Allende, con un conflicto importante en torno a la cuestión de la ampliación del Área de Propiedad Social (APS). En febrero de 1973, varios indicadores permitían pensar que la nueva coyuntura facilitaría un reforzamiento de los lazos entre los organismos de poder popular emergentes y el gobierno, especialmente gracias a su reconocimiento oficial, incluso al más alto nivel del Estado. En efecto, el mismo Salvador Allende en un discurso titulado «Plataforma de la victoria», les rinde un homenaje por su capacidad de resistencia durante el paro patronal[1]. Este nuevo reconocimiento y legitimación de parte de la presidencia de la República es además refrendado algunas semanas más tarde, durante el tercer discurso presidencial ante el Congreso[2]. Así, el ejecutivo chileno se encuentra cada vez más atrapado en medio de lo que Tomás Moulian llama una «doble incapacidad»: por una parte «la ineficacia de la estrategia 'moderada', dirigida por Allende, para conseguir negociaciones viables [con la DC]», y por la otra, «la incapacidad del 'polo revolucionario' para proponer soluciones radicales verosímiles[3]». Esta situación, en parte, se debe a las diferencias internas de la izquierda, mientras que las tensiones sociales se acumulan y que la famosa «muñeca» de Allende no basta para llevar a cabo una política gubernamental consecuente.

Frente a las incoherencias gubernamentales y a la presión del movimiento social, los sectores llamados «rupturistas» recuperan fuerzas. El «polo revolucionario», calificado por algunos autores (entre los cuales Tomás Moulian y Luis Corvalán M.) como «irresponsable» y «maximalista» apuesta finalmente a la unidad electoral: con ocasión de las elecciones legislativas, el MIR y el PS embarcan parte de sus fuerzas en un campo institucional en plena descomposición, con el objeto de intentar crear un polo unitario, después de haber sido incapaces de hacerlo en el espacio de las luchas sociales. El MIR, para las elecciones de marzo de 1973, aprueba de este modo, un pacto con el PS y decide apoyar a Carlos Altamirano y las listas presentadas por la Izquierda Cristiana[4]. Para quienes sostienen esta táctica, las fuertes contradicciones que vive el PS serían síntomas de un proceso de diferenciación al interior del movimiento obrero y de la posible aparición de una dirección revolucionaria dentro de la misma ala izquierda de la UP, en alianza con la izquierda extraparlamentaria. Después del paro de octubre de 1972, el MIR espera una ruptura socialista con la línea política reformista, asumida por la mayoría de la UP[5]. La organización de Miguel Enríquez dentro del movimiento social ya ha logrado articular alianzas con algunas fracciones del PS, como fue el caso durante la Asamblea de Concepción, o más regularmente, al participar en conjunto en las reuniones de los cordones industriales (CI). La formalización de este apoyo electoral del MIR al PS se realiza después de una serie de cartas públicas entre Altamirano y la dirección mirista[6]. El MIR entonces se dispone a poner sus capacidades militantes al servicio de esta ala de la UP (PS-IC) en el marco de las elecciones de marzo, en lugar de presentar un programa independiente[7]. Internamente, esta orientación no es compartida por todos, así el «camarada Gonzalo» (miembro de la dirección del MIR) rechaza enérgicamente este proyecto de alianza, el cual juzga oportunista y que sirve para alimentar la confusión, y solicita que el MIR presente un programa revolucionario alternativo e independiente al de la UP[8]. En efecto, la dirección socialista nunca consideró romper con el programa gradualista de la Unidad Popular, pero la apuesta que hace el MIR es profundizar la división entre los dos «polos» para reforzar su ala izquierda. El episodio de la reciente escisión del MAPU (un bloque moderado y una fracción radical) unos días después de las elecciones, permite creer temporalmente en la validez de este análisis.

Los resultados de las elecciones parlamentarias del 4 de marzo de 1973 son finalmente una sorpresa. La derecha, reagrupada en la Confederación Democrática (CODE), alcanza un poco más del 54% de la votación (con un 29% para la DC), lo que no es suficiente para derrocar constitucionalmente al

gobierno de Allende, ya que para ello se requieren los dos tercios de los cupos en el Parlamento: el «golpe de Estado» legal que la derecha venía considerando durante largo tiempo no es factible. La única táctica posible es entonces, facilitar abiertamente la intervención de las Fuerzas Armadas, opción activamente apoyada por la CIA, y públicamente reivindicada como tesis política central por hombres como Sergio Onofre Jarpa (líder del Partido Nacional, PN). Las Memorias del general Prats, comandante en jefe del Ejército, demuestran el eco –en aumento– que estas tesis tienen dentro de la oficialidad[9]. Por otra parte, el 28 de mayo aparece en la portada de El Mercurio, un «cierto» general Pinochet, encargado temporalmente de la comandancia en jefe del Ejército, mientras el general Prats se encuentra en el extranjero. Sólo algunos días después de haber tomado conocimiento de los resultados de las elecciones, el presidente de la DC (primer partido del país) hace saber que toda posibilidad de entendimiento con el gobierno es imposible[10]. Ahora es el ala derecha de este partido el que dirige su política, con Patricio Aylwin a la cabeza.

En revancha, a pesar de los pronósticos pesimistas, la Unidad Popular, con más del 43% de los votos, logra buenos resultados. Después de más de dos años de gobierno, en medio de las dificultades económicas y de un terrible asedio político, la UP demuestra que sigue siendo representativa y legítima a los ojos de amplias fracciones de las clases populares. Pero si estos resultados son recibidos con entusiasmo por el conjunto de los partidos de izquierda[11], dificultan la estrategia sostenida con fuerza y convicción por Allende. Sin mayoría parlamentaria, las reformas graduales propuestas por la UP se mantienen en un impasse. A inicios de junio, el presidente de la República, consciente de estar en un callejón sin salida, propone la organización de un plebiscito que le permitiría disolver el Parlamento y llamar a una asamblea constituyente, propuesta que es rechazada por los líderes de la izquierda parlamentaria con el pretexto de que las condiciones no son favorables[12]. Finalmente, la táctica de la formación de un polo revolucionario facilitado por un acuerdo electoral PS-MIR es también puesta en cuestión. Por cierto, el PS y sus potenciales aliados (MAPU e IC) obtienen mejores resultados que el ala moderada dirigida por el PC (22,37% versus 20,73%, respectivamente). Sin embargo, el desplazamiento a la izquierda que busca el MIR no se produce y más aún, en la circunscripción senatorial de Santiago el dirigente comunista Volodia Teitelboim le gana al socialista Carlos Altamirano, candidato que tuvo el mayor respaldo mirista. Globalmente, la DC y la UP se mantienen hegemónicos en el seno de las clases populares e influyen en el conjunto del espacio del movimiento obrero. Además, el PS rechaza la eventual constitución de un «polo revolucionario» como lo demanda Miguel

Enríquez y, en julio de 1973, los socialistas del Regional Centro denuncian el llamado a «crear un Frente de clase revolucionario que sobrepase la perspectiva de la UP» que circula a nivel de los cordones industriales de Santiago, y que ha sido retomado por Tarea Urgente[13]. Militantes socialistas como Pablo Muñoz y Luis Ahumada señalan que nunca los militantes de la UP de los cordones industriales tuvieron la voluntad de superar al gobierno, sino más bien apoyar «los avances que podían darse al interior de la UP[14]». Después de las elecciones, Allende propone crear un partido unificado de la UP cuya función «debería ser la de dirigir la acción conjunta del Gobierno y de las masas» y que tendría entre sus tareas «desarrollar las instituciones del poder popular[15]». Altamirano, por su parte, llama a estimular «los cordones industriales, los consejos campesinos, las JAP, que son verdaderos gérmenes del poder popular[16]», pero sin oponerse a la gestión gubernamental.

Dividida y debilitada, la UP se enfrenta a un dilema profundo: ¿cómo mantener sus llamados a la negociación con la DC (por lo demás, rechazados) sin perder el contacto con las fracciones más organizadas del movimiento obrero que reclaman la radicalización del proceso? Como lo reconocerá más tarde Joan Garcés, asesor personal de Allende, a mediados de 1973 la «fase político-institucional» de la transformación social parece ya poco factible[17].

Se mantienen las movilizaciones obreras y la «estrategia de invierno»

de la oposición

La gran movilización obrera frente a la amenaza de golpe de Estado de fines de junio de 1973, es precedida por numerosas movilizaciones colectivas y conflictos salariales en varias industrias del país. Muchas de entre ellas –hecho muy significativo– se llevan a cabo en sectores obreros integrados al APS y bajo fuerte control de la CUT. En paralelo, se multiplican las intervenciones del movimiento de pobladores en relación con los problemas de abastecimiento y de vivienda. Los Cordones Industriales siguen movilizándose a favor del aumento salarial y del paso al APS de las pequeñas y medianas empresas. Así, para la dirección del CI O’Higgins,

los trabajadores de nuestras Empresas, sean grandes o pequeñas, tienen el mismo derecho, ya que han aportado con sacrificio en esta lucha de clases, para seguir avanzando con el proceso revolucionario pese a las persecuciones patronales y judiciales[18] [...].

Para este cordón industrial, la toma es «UN DERECHO DE LUCHA en contra la explotación, de los abusos patronales y un ARMA DE LUCHA por sus reivindicaciones económicas y sociales[19]».

Movilización del cordón O'Higgins en Santiago (marzo de 1973)

CORDON O'HIGGINS
PRESENTE

Fuente: Posición, 30 de marzo de 1973

Por su parte, el presidente del CI Cerrillos, Hernán Ortega, interpreta los resultados de las elecciones legislativas como favorables a la movilización[20]. Encabezando esta misma dinámica se encuentran los cordones Vicuña Mackenna y Maipú-Cerrillos.

El 3 de abril de 1973, Salvador Allende a través de un discurso difundido por radio y televisión, denuncia esta vez directamente a los CI, rechazando el plan «de tomas y barricadas de un sector de pobladores y trabajadores». Paternalista, llama a «evitar un enfrentamiento con el Gobierno[21]». Al día siguiente, sin embargo, los cordones realizan los bloqueos previstos y paralizan los caminos de su zona. La policía interviene rápidamente y, en el caso del cordón Vicuña Mackenna, violentamente. La afluencia en torno a la barricada es relativamente débil, se ven pocos trabajadores de base, siendo la mayoría militantes políticos y dirigentes sindicales. En Cerrillos, sólo participan unos 300 obreros que representan a seis empresas del sector, aunque en la asamblea de la noche anterior participaron delegados de más de 20 fábricas. El objetivo es solidarizar con la empresa Silleros, cuyos trabajadores están en huelga desde hace más de 20 días[22]. En relación con este conflicto (iniciado a causa del boicot de la producción por parte del dueño), los dirigentes del CI son finalmente recibidos por el ministro del Interior, quien anuncia la requisición de la empresa. Esa misma tarde, Hernán Ortega anuncia el «gran triunfo de los trabajadores». A fin de mes, es delante de la fábrica de pistones Inapis que el CI Cerrillos levanta su barricada y finalmente, gracias a este apoyo, los 17 días de ocupación terminan con una nueva requisición[23]. En el Cordón Vicuña Mackenna, se desarrollan luchas similares, especialmente en solidaridad y apoyo a los empleados de la fábrica de muebles Galaz[24].

En provincia también florecen las barricadas: el 7 de junio de 1973, el cordón Industrial Talcahuano organiza una manifestación, mientras algunos días antes en Temuco, son los pobladores los que ocupan el centro de la ciudad. Como vemos, a pesar de todo, se mantienen las acciones colectivas protestatarias: una simple mirada a la lista de conflictos registrados por el Ministerio del Interior revela el grado de movilización de los bastiones obreros de la Unidad Popular,

tales como INSA, Mademsa, CCU, Sumar, Hirmas, etc. Estamos lejos de la «acción anárquica» que describe la historiografía dominante[25]. Según el historiador Jorge Magasich, la consigna «crear, crear, poder popular!» hasta entonces proclamada casi esencialmente por el MIR, gana terreno y se hace escuchar en los desfiles[26]. La jornada del primero de mayo de 1973 es, sin embargo, moderada y El Mercurio concluye entonces que se trata de la prueba fehaciente del «cansancio de las masas». De hecho, el día mundial del trabajador, está marcado por la división política y el boicot de la Democracia Cristiana (DC)[27]. Allende llama a la «responsabilidad» y a la «disciplina»; pero, y como signo de los tiempos, también convoca a vitalizar los cordones industriales en coordinación con la CUT y con el «poder organizado de los trabajadores en el Gobierno[28]». En esta ocasión, Jorge Godoy –presidente de la CUT– también admite públicamente que «los cordones industriales pueden constituir una forma eficaz de dirección y orientación adecuada» pero, «a condición de que estén enmarcados en una estructura orgánica y bajo dirección de la CUT[29]».

Por otra parte, al sur de Santiago, la dureza de la huelga de los mineros de El Teniente, segunda mina de cobre de Chile, acentúa la división entre el gobierno y el movimiento obrero. El conflicto, iniciado a fines de abril, tiene su origen en reivindicaciones salariales estimadas desmedidas por el ejecutivo (41% de aumento además del 100% ya acordado a todos los trabajadores). La huelga toma un cariz abiertamente político, a partir del momento en que la DC –con fuerte presencia en este sector– atrae a las otras fuerzas opositoras para instrumentalizar el conflicto. En paralelo a las acusaciones constitucionales y a la multiplicación de atentados, la derecha marcha en las calles al lado de los mineros, provocando una pérdida económica para el gobierno de un millón de dólares diarios. Aquí, nuevamente, más que el estado de emergencia decretado en la provincia de Rancagua, son los trabajadores movilizados, específicamente los de los CI y de la CUT, los que impiden (a veces, violentamente) que se lleve a cabo la gran marcha que sale desde Rancagua el 12 de junio. De manifestaciones en contramanifestaciones, la «huelga sediciosa» (en palabras del PC) que termina a inicios de julio, contribuye ampliamente a debilitar a la UP[30].

La tesis de la «desobediencia civil» pregonada por el movimiento de extrema derecha «Patria y Libertad» es ahora asumida por toda la oposición parlamentaria. El Partido Nacional declara sin ambigüedad «nadie está obligado a obedecer a un gobierno que ya no es legítimo[31]». Un mes antes, era el «poder popular» el señalado en una editorial de El Mercurio: «El Poder Popular no es

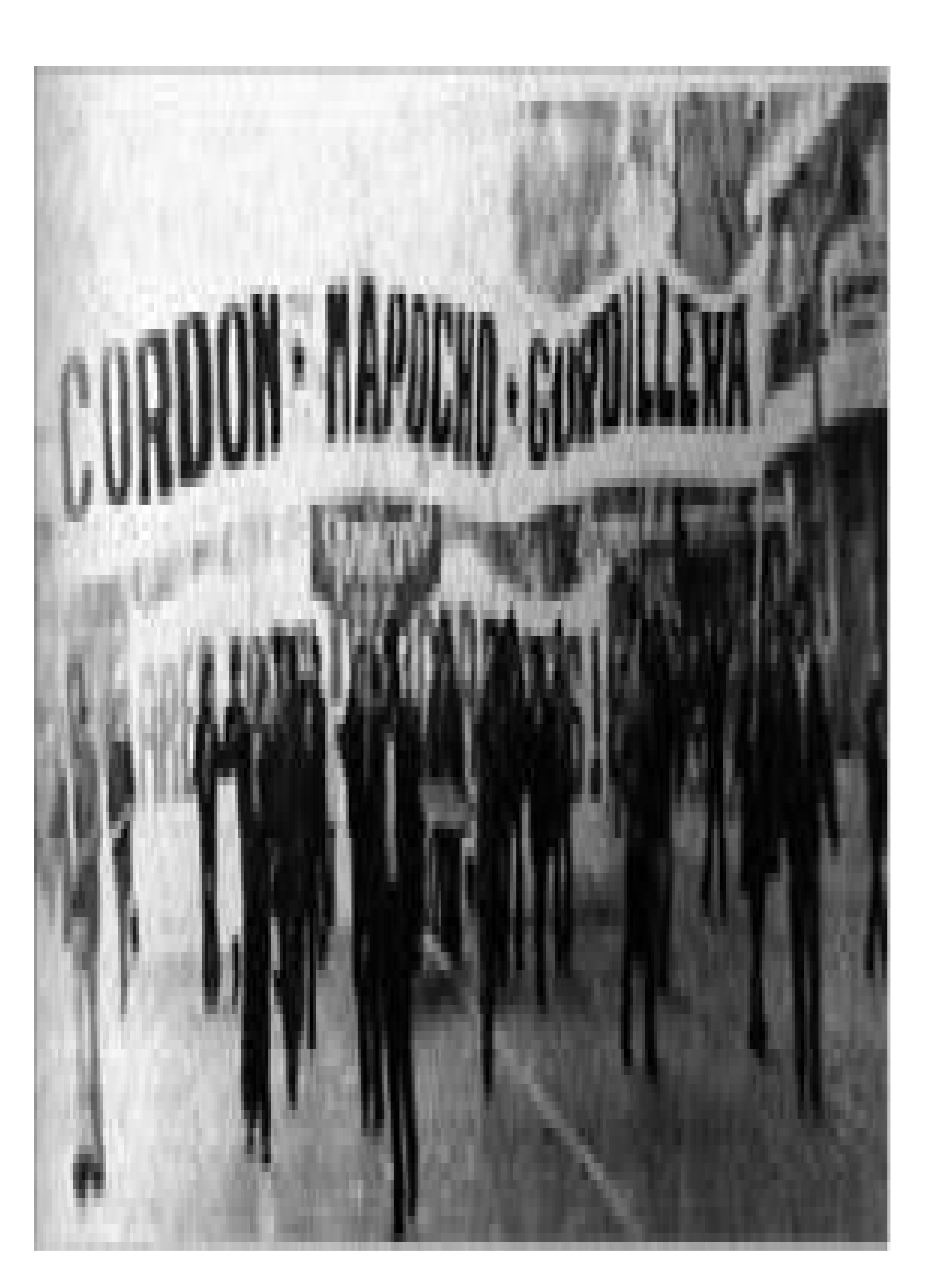
pues sólo un tema conflictivo, sino una iniciativa sediciosa destinada a poner en jaque a la institucionalidad de la República[32]». La vía parece abierta para que la «ofensiva de invierno» de la oposición termine con la intervención de las Fuerzas Armadas.

El poder popular, un movimiento de alcance nacional

Santiago: «la fuerza del pueblo»…

Como lo hemos visto, varias semanas después de la revuelta de los CI en contra del plan Millas y tras un claro período de reflujo, nuevamente aparecen barricadas en la periferia de la capital chilena. En Santiago, los cordones industriales logran mantener sus reivindicaciones y es en ese mismo impulso que surgen, aunque con dificultad, algunas nuevas coordinaciones. Es el caso del Cordón San Joaquín, que se crea durante el mes de febrero de 1973. El núcleo central de este cordón está formado por nueve empresas, entre ellas Sumar, Andina, Famasol y una bodega de la Dinac[33]. Su dirección está compuesta por seis miembros, de los cuales tres son militantes socialistas, dos del Frente de Trabajadores Revolucionarios (FTR) y –hecho interesante– un militante comunista, el dirigente sindical de Famasol. El cordón Mapocho-Cordillera surge, por su parte, a fines de marzo en torno a Cervecerías Unidas (CCU), al hospital y a la editorial e imprenta Quimantú. Hacen parte, como en muchos otros cordones, trabajadores de la construcción, sensibilizados con los argumentos del poder popular[34]. Este cordón es conducido principalmente por empleados municipales, personal del hospital y asalariados que trabajan para la televisión o las imprentas nacionales, aunque se aprecia también el peso de los pobladores. Por ello se entiende la insistencia en torno a los problemas de la salud y de aprovisionamiento, en tanto que la lucha por la extensión del APS es eludida. Se trata de una coordinación del centro de la ciudad con una débil presencia de la clase obrera industrial.

Desfile del CI Mapocho-Cordillera en las calles de Santiago (agosto de 1973)


CORDON • MAPOCHO • CORDILLERA

Fuente: Poder Popular, N°8, agosto de 1973.

El comando comunal Estación Central organiza una gran reunión en marzo, en el teatro Monumental: obreros, comerciantes, empleados del sector público y dueñas de casa se suman. Por el tenor de los compromisos tomados durante este acto, se vislumbra la influencia del MIR en su dirección. Los oradores proclaman que un «verdadero poder popular» no puede hacer concesiones al reformismo[35]. Paralelamente, el «combativo cordón O'Higgins» vive una dinámica de revitalización a partir de febrero[36].

Las acciones colectivas de los principales cordones, CI Cerrillos y Vicuña Mackenna, tampoco se hacen esperar en marzo-abril de 1973. Esta dinámica se mantiene y amplifica en los días y semanas que siguen. En lo que concierne al CI Vicuña Mackenna, el conflicto que se cristaliza en torno al laboratorio de productos cosméticos GEKA es el más notorio. Esta empresa posee varias unidades de producción y su mano de obra está compuesta mayoritariamente por mujeres. El sindicato agrupa a más de 180 obreras. María Eugenia Farías, joven militante comunista y presidenta del sindicato, lidera la huelga y permite la integración de GEKA al Cordón. En el marco de un sindicato que es dirigido por militantes del PC, DC y PS, esta batalla que dura más de un mes, es sintomática de los reposicionamientos en curso en el seno del movimiento obrero[37]. Durante junio, varias coordinaciones esbozadas en octubre se reactivan, pero sin ninguna duda, es el cordón Cerrillos el que muestra el mayor grado de movilización. Las declaraciones de Hernán Ortega, a principios de mes, ilustran la radicalización de los militantes socialistas, ya que respondiendo a las acusaciones de «espontaneísmo» lanzadas por el gobierno, manifiesta «cuando no se ha querido escuchar el planteamiento de las bases de los trabajadores, es lógico que surja el espontaneísmo», y al mismo tiempo lamenta «la falta de banderas de lucha que unan a la clase obrera[38]». Javier Bertín (del MIR) recuerda precisamente que esta evolución data de junio de 1973:

Por mucho tiempo teníamos mucho lío con este compadre Hernán Ortega, porque estaba en el cordón, impulsaba movilizaciones, pero era socialista y por lo tanto mantenía la línea que a él le entregaron del partido, la línea de la UP. Pero el año 1973, como todo el proceso se fue radicalizando tan fuertemente,

también le tocó a él[39].

Este nuevo impulso de los cordones se manifiesta el 15 de junio de 1973, durante la gran marcha para enfrentar a la derecha y a los mineros en huelga. Los CI se toman efectivamente gran parte del centro de Santiago, en lo que El Mercurio califica de «batalla campal[40]». Tal como lo informa el diario Las Noticias de Última Hora,

Los cordones industriales de Santiago desfilaron por las calles de la capital […] Premunidos de gorros y capas de material plástico, y sin inmutarse pese a la intensa y prolongada lluvia, los trabajadores ocuparon el perímetro de la plaza Constitución y las calles céntricas de la capital[41].

En esta ocasión, los trabajadores del CI Cerrillos desfilan bajo la consigna de «trabajadores al poder» y declaran a la prensa su voluntad de formar brigadas de autodefensa. Un obrero del cordón O’Higgins, por su parte, anuncia: «nuestra tarea de hoy ha sido combatir el fascismo en las calles; esta tarea sigue vigente[42] […]». Los cordones se declaran «en pie de guerra» y el CI Cerrillos-Maipú muestra una gran determinación al declarar:

El cordón Cerrillos se prepara a organizar las brigadas de trabajadores que cumplirán diversas tareas relacionadas no solo con la defensa y protección de las fuentes productivas, servicios de utilidad pública, sino también en resguardo de la seguridad de los sectores habitacionales, ubicados en el territorio del cordón. Para esta función tanto los pobladores organizados como la clase obrera, entrarán a estrechar aún más sus relaciones en los Comandos Comunales, organismos de la clase obrera y el pueblo que el presidente Allende llamara a formar en su último mensaje presidencial[43].

Esta demostración de fuerza de la clase obrera es ampliamente confirmada el 21 de junio, cuando, siguiendo el llamado de la CUT, alrededor de 800 mil personas salen a las calles a desfilar, mientras que más de un millón de trabajadores se suman a la huelga:

De hecho, fue una fiesta alegre y popular en las calles. La CUT había querido organizar «la marcha más grande de la historia de Chile». […] Por todas partes, aparecían consignas «duras» a menudo gráficas expresando la voluntad de «cortar el camino al fascismo y a la guerra civil» y sobre todo –y esto era lo más nuevo– de «crear un poder popular[44]».

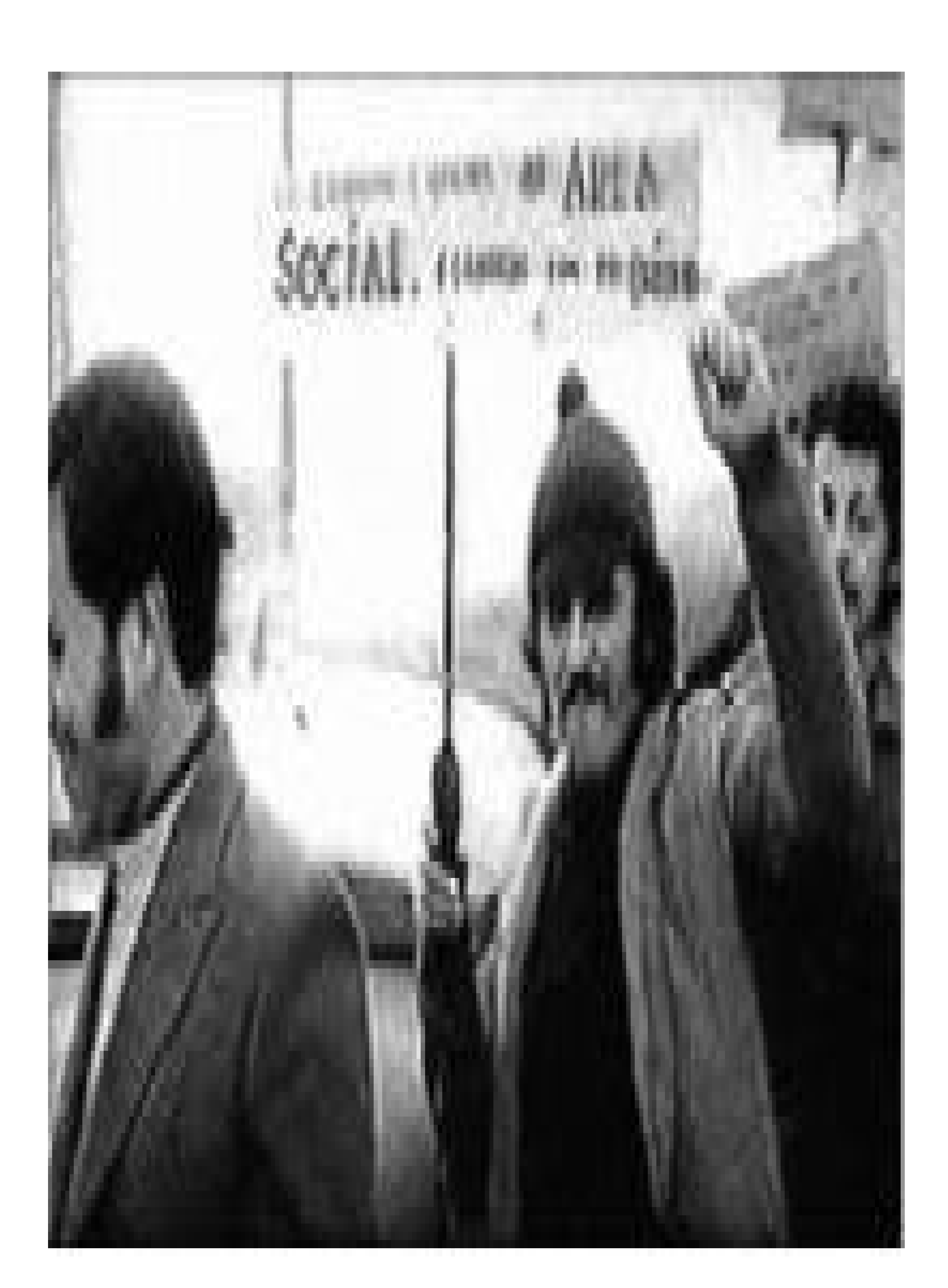
En ambos extremos del país, se realizan entusiastas marchas y huelgas masivas (200 mil personas en Concepción, 40 mil en Valparaíso, etc.); y son 3.500 trabajadores los que desfilan detrás del lienzo del cordón Vicuña Mackenna hasta el centro[45]. En los días previos y celebrando su primer año de existencia, el cordón Cerrillos también ha multiplicado las iniciativas[46]. Se organizan talleres de reflexión así como una gran asamblea del cordón el 17 de junio, que concluye con una extensa declaración junto a la Federación de la Metalurgia (Femet) y a los campesinos organizados de la comuna[47]. Dos días más tarde, a este documento le siguen hechos concretos: en una acción concertada, votada en asamblea, el Consejo campesino de Maipú, el cordón Cerrillos, militantes y trabajadores de la zona se toman decenas de predios agrícolas de la comuna. Analiza, en su estudio, Renzo Henríquez:

Maipú, madrugada del martes 19 de junio de 1973. Cientos de obreros, campesinos y pobladores proceden a la ocupación de 39 predios de la comuna. Activistas políticos y estudiantes los apoyan en la acción. Lo primero: izar la bandera de Chile y bloquear las puertas de entrada a los predios. Lo segundo: montar guardia en cada fundo tomado. Cascos obreros y cáñamos campesinos vigilan atentamente la situación. El objetivo inmediato de la acción: tomar posesión de todos los predios tomados. O sea: ejercer el poder en cada fundo ocupado. Paralelo a la acción se toma el matadero municipal. Carretones y camiones repletos de tomates, zapallos y lechugas recorren la calle Pajaritos en dirección al nuevo centro de abastecimiento. El objetivo inmediato de la acción: crear un mercado popular. O sea, ejercer el poder de distribuir y abastecer directamente en el antiguo matadero municipal. La mancomunión de obreros, campesinos y pobladores[48]…

Imágenes de la toma de los predios en el documental La Batalla de Chile






SOCIAL.

Fuente: Guzmán, Patricio, La Batalla de Chile, op. cit.

Tras la demanda de ayuda por parte de los campesinos dirigidos por el socialista Jaime Barrera, se instala una suerte de «Comando unificado» para apoyar las movilizaciones campesinas de Maipú. La operación es centralizada en Perlak y permite ocupar, por un tiempo, tierras que suman un total de cinco mil hectáreas, destinadas principalmente a la producción hortícola para Santiago. La reivindicación central es la expropiación de estas tierras, fundamentales para el aprovisionamiento de la capital y cuya mala gestión es denunciada por los campesinos[49]. Esta movilización colectiva en la comuna de Maipú fue inmortalizada por la cámara de Patricio Guzmán y Jorge Müller[50], gracias a lo cual se pueden ver las imágenes de la toma, los rostros campesinos, la intervención de Hernán Ortega y de representantes del Consejo Comunal Campesino como Rigoberto Cortés, así como la actitud incómoda –cabeza gacha frente a las críticas– de los funcionarios que fueron enviados al lugar.

Toma de predios en Maipú: Rigoberto Cortés increpa a los funcionarios

(a su lado Hernán Ortega)



Fuente: Guzmán, Patricio, La Batalla de Chile, op. cit.

Javier Bertín y Guillermo Rodríguez recuerdan con emoción estos días de lucha y solidaridad, jornadas –según ellos– de una «realización plena de la política del poder popular, una movilización conjunta de obreros, estudiantes, pobladores, campesinos[51]». De hecho, transitoriamente la concepción fundamental de una territorialización del poder popular toma forma. Los terrenos designados se distribuyen en torno a tres puntos distintos de la comuna: uno, en El Descanso, camino a Pajaritos, otro en La Farfana y el tercero en el camino La Rinconada (donde se sitúa la sede del Consejo Comunal Campesino). El cordón envía «brigadas» de trabajadores, apoyados por contingentes de estudiantes que parten a ocupar los puntos estratégicos de la comuna.

Este enfoque territorial y sobre todo el amplio espectro social que interviene representa perfectamente la estrategia de poder popular promovida por el MIR. Una parte del aparato militar de esta organización, la famosa «Fuerza Central», es llamada a prestar apoyo en esta acción de gran envergadura y Guillermo Rodríguez, responsable político-militar del MIR en Maipú, es el encargado de su conducción:

Hay dos escuadras que llegan a reforzar la toma de los fundos, porque particularmente en los lugares donde pusimos las escuadras, hubo enfrentamientos y uno se produce en Rinconada y otro en la parcela Las Flores, porque llegan fuerzas reaccionarias a intentar el desalojo y hay intercambio de balazos y finalmente nos mantuvimos con los fundos tomados[52].

Como lo recuerda Javier Bertín, este despliegue del MIR a plena luz del día no es evidente, demuestra una cierta apertura de la organización, acostumbrada a las prácticas semiclandestinas. Aparatos hasta entonces mantenidos en reserva ahora son utilizados para ofrecer su apoyo logístico. Además del armamento, el MIR provee equipos de comunicación y controla el sector gracias a transmisores instalados en puntos clave. Una vez ocupados los terrenos, el deseo manifiesto

de los campesinos de ver su producción vendida directamente también es acompañada por el CI. Se instala entonces un mercado popular en Maipú: con ayuda de los pobladores, un viejo matadero municipal es transformado en mercado de productos locales, en pleno centro de la comuna[53]. Después de varias reuniones en los pasillos de los ministerios,

las orgánicas populares prefirieron seguir potenciando sus ejercicios de poder en la base. La negociación no traía los frutos esperados y las prácticas de autonomía en el territorio traían mejores resultados. Así, en esta disyuntiva, las clases populares ya habían comenzado a privilegiar sus propias acciones: se tomaron un bus del estado, coordinaron el mercado popular independiente de su ilegalidad y encararon a los funcionarios de gobierno que «apernaban al revés» realizando un verdadero juicio popular[54].

Pero, a pesar del éxito real de la movilización y de las promesas del ministro de Agricultura sobre expropiación de los fundos y legalización del mercado popular, el conflicto termina con tensiones y nuevas desilusiones en cuanto a la institucionalidad: el gobierno reacciona rápidamente y exige a los militantes del Partido Socialista que desocupen los fundos. De hecho, una parte de estas tierras pertenece a importantes hombres políticos ligados a la DC[55], partido con el cual el gobierno todavía aspira a encontrar puntos de consenso. Hernán Ortega y los suyos se ven obligados por la dirección de la UP a desperfilarse y defender un plan de desocupación en orden. Frente a esta presión, algunas tierras son devueltas, lo que genera rabia en los militantes y campesinos que estaban completamente comprometidos con la acción. En paralelo, el proceso de expropiación es tramitado sin encontrar solución hasta el golpe.

El desarrollo de los cordones industriales en provincia

Santiago no es el único lugar en que se desarrollan formas de poder popular. Más arriba ya mencionamos el nacimiento de coordinaciones durante el paro de octubre de 1972, en ciudades como Tomé, Penco, Chiguayante, Punta Arenas y también en Arica, Talcahuano y Valparaíso. A menudo, estos comités –que

coordinan la mayor parte del tiempo algunos sindicatos con otras organizaciones sociales de la zona– se estructuran alrededor de alguna de las industrias importantes de la ciudad (como en Punta Arenas, en torno a la empresa Lanera Austral) o también sobre la base de una actividad específica del sector: la industria electrónica en Arica o la pesca en Talcahuano, importante puerto de la ciudad de Concepción. En cuanto al cordón industrial de Talcahuano, después de largos meses de aletargamiento, su organización se ve reforzada a inicios de 1973. Aquí también, la situación parece ser bastante diferente de la que se vive en Santiago, ya que es la CUT local la que apoya su formación. Este cordón está compuesto por trabajadores industriales (especialmente de la industria química) y asalariados de la industria pesquera. Se integran también algunos empleados del sector de los servicios ligados a la actividad portuaria, de ahí su nombre «Cordón Industrial Pesquero y de Servicios». Como en la mayoría de los casos, la iniciativa proviene de un puñado de militantes motivados más que de la voluntad popular expresada masivamente. Este CI recibe importante influencia de los activistas de extrema izquierda y, si se consideran algunos testimonios, en primer lugar del MIR. De hecho se encuentra próximo al campamento «Lenin», dirigido por este movimiento. Militantes obreros como Máximo Neira (el «Moncho») o el «Chico» Astete, dirigente sindical de la fábrica Sigdo Koppers, son al mismo tiempo cuadros del campamento y figuras del cordón industrial. Por su parte, la prensa local considera el campamento Lenin como un nido revolucionario que alimentaría la ciudad de subversión[56]. Los archivos judiciales de Concepción confirman esta presencia activa de militantes del MIR y quizás incluso del Partido Comunista Revolucionario (PCR) –maoísta[57]–. En este cordón participa también un pequeño grupo de militantes ligados al trotskismo, organizados en torno a las empresas Pesquera Iquique, Sigdo Koppers y Rucán[58]. Como sea, la historia del CI Talcahuano demuestra la pluralidad del fenómeno del poder popular y las diversas sensibilidades políticas que allí se confrontan. Varias ciudades, pequeñas y grandes, fueron alcanzadas de diverso modo por esta dinámica de la movilización colectiva[59].

En Osorno, al sur del país, nace un cordón en una zona principalmente vinculada a la economía rural y a fábricas, como por ejemplo Maderas Puyehue. Es un sector con gran presencia de población mapuche y que tiene a varios de sus representantes afiliados al cordón. El Cordón Osorno es presidido por un militante del MIR, Héctor Vega, a quien tuvimos la suerte de encontrar y poder entrevistar. En esa fecha, Vega trabaja para el Ministerio de Agricultura en la región, lo que le permite tener gran influencia sobre el conjunto del movimiento social de la zona. Se integra al MIR sólo en 1971:

El cordón Osorno se formó a partir de la CUT, o más bien hay que puntualizar, a partir de sindicatos que eran miembros de la CUT […]. Lo que sucedió es que los obreros desbordaron la dirección de la CUT y se vinieron al cordón[60].

Osorno es una pequeña ciudad en contacto directo con el campo.

Había un hogar mapuche hacia la costa, un centro universitario, por lo tanto estudiantes como elemento dinámico, y luego los obreros, las fábricas: un matadero, una fábrica de leche (CALO), una cervecería y numerosos empleados públicos (cuya actividad estaba estrechamente ligada a la agricultura) y muchas mujeres también[61].

Para Héctor Vega, además de los sindicatos, esta diversidad constituye la riqueza del CI de Osorno[62]. Finalmente esta coordinación, por su alcance social, está muy cerca de la idea del Comando Comunal, lo que por lo demás se ve confirmado en la prensa[63]. Pero, como lo reconoce el mismo Vega, sólo unas semanas antes del golpe de Estado este CI comienza a ganar amplitud, sin representar jamás una «fuerza organizada»: «era un poco confuso, había demasiadas cosas para hacer funcionar todo eso en una sola línea, como un ejército en marcha, es fácil de decir pero difícil de hacer. Se necesita conciencia y [comprender] los problemas de los otros[64]…». A pesar de sus debilidades, el cordón Osorno tiene la originalidad de introducir en el debate sobre el poder popular, la dimensión específica de las luchas del pueblo indígena mapuche y combinar las reivindicaciones del proletariado urbano con las del campesinado sobre la base de una ruptura con el legalismo de la UP. Tales pretensiones provocan la ira del intendente socialista, así como de varios funcionarios locales. Este descontento se ve seguramente reforzado por el hecho de que es el MIR y la izquierda «rupturista» quienes catalizan políticamente el movimiento.

Más cerca de Santiago, se encuentra el importante puerto de Valparaíso, donde ya hemos citado la existencia de los CI El Salto y 15 Norte, así como los intentos de constitución de comandos comunales tales como Reñaca Alto o Nueva Aurora. Progresivamente, sea en el puerto industrial de Valparaíso o en el balneario vecino de Viña del Mar, varias tentativas de coordinaciones hacen su

aparición (como el Cordón Quilpué, organizado en torno a la industria KDP o el CI Las Habas alrededor de la fábrica del mismo nombre[65]). Si nos atenemos al balance realizado por Patricia Santa Lucía en los años setenta, aparecen coordinaciones también en Llanquihue, Chillán, Coquimbo, en La Serena y también comandos comunales en Linares, Temuco y Concepción[66]. Pero a menudo se trata de formas embrionarias: más cerca de cordones en el papel que de cordones movilizados. Luis C., militante del MIR en Valparaíso, recuerda: «En mi opinión, el cordón industrial en tanto tal no funcionó en Valparaíso[67]», impresión que es también confirmada por Ezequiel E., militante comunista de la ciudad[68]. Estos aportes provenientes de la historia oral avalan los supuestos que a fines de los años ochenta propone el historiador Hugo Cancino, según los cuales en provincia el proceso de constitución de cordones industriales es mucho más lento y dificultoso que en la capital (especialmente por el hecho de la menor concentración de proletariado industrial[69]). Sin embargo, y es la riqueza de la historia del poder popular, algunas de estas experiencias muestran la diversidad de las praxis sociopolíticas en curso. En ese sentido, la toma de la ciudad de Constitución constituye un símbolo.

La toma de Constitución: ¿un doble poder local?

En febrero de 1973, el pequeño balneario de Constitución (en la región del Maule, al centro del país) demostrará temporalmente las potencialidades concretas de la consigna del poder popular en provincia. Este episodio es bastante conocido gracias a un reportaje realizado en terreno por la revista Punto Final[70]. A esa fecha, Constitución es una ciudad con alrededor de 25 mil habitantes y que posee una importante clase obrera: 10% de la población es empleada por la empresa de transformación de la madera, Celco (Celulosa Constitución); 500 asalariados trabajan en aserraderos y astilleros, y algunas centenas, en las faenas del puerto. El motivo inicial del conflicto social que luego involucra a toda la ciudad es el problema de la vivienda. La gobernadora de Constitución (que también es militante del Partido Radical y de la UP) habría –según los pobladores– ignorado durante dos años las reivindicaciones de los «sin casa», mientras unos tres mil de entre ellos –la mayoría obreros– viven en condiciones de extrema precariedad en el campamento «Vietnam heroico» (dirigido entre otros por Nelson Luna Vera, del MIR). Infraestructura, transporte,

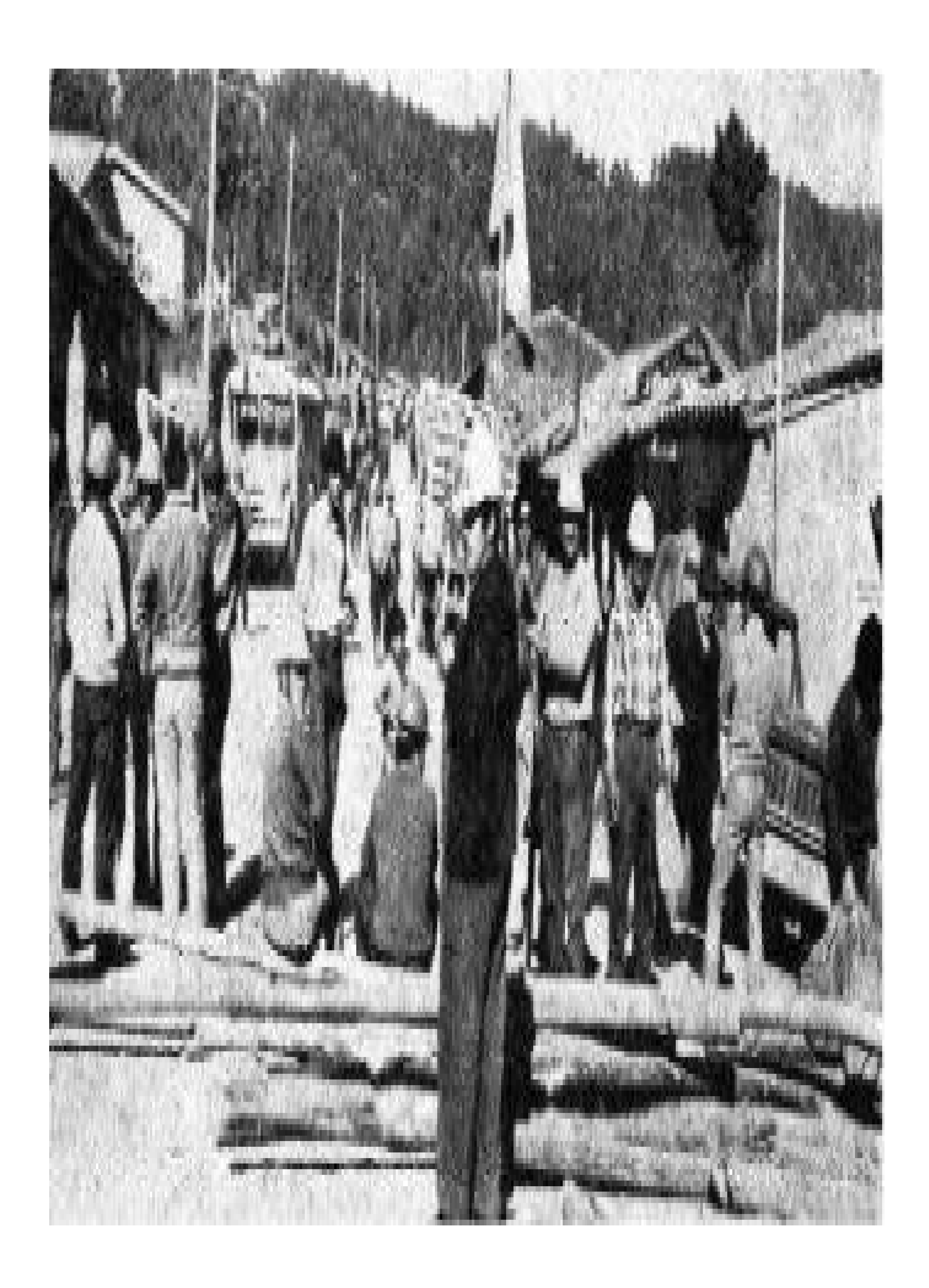
mercado negro, desabastecimiento: los estigmas del maldesarrollo se acumulan en una ciudad que alberga lujosas residencias secundarias de la burguesía local, desocupadas la mayor parte del año. Nelson Luna Vera agrega un factor agravante a este escenario: el de la especulación en torno a la vivienda:

Los maulinos de Constitución estábamos pagando 1.500 y 2.000 escudos de arriendo por casuchas, con gran sacrificio. Pero los dueños de las casas vieron la oportunidad de especular cuando llegaron los compañeros de CELCO a trabajar en la construcción de la planta. Había sobrepoblación y se carecía de viviendas. Nos echaron de las casas y las volvieron a arrendar en cuatro o cinco mil escudos mensuales. Ciento cincuenta familias quedamos en la calle[71].

Según Punto Final, durante el invierno de 1972, los resentimientos contra las autoridades son avivados por varias prohibiciones de manifestaciones de pobladores y por la represión ante la ocupación de terrenos abandonados. Finalmente, el 21 de febrero de 1973, una asamblea (llamada «Asamblea del pueblo») es convocada, agrupando rápidamente a una decena de organizaciones sociales: sindicatos obreros (especialmente los de Celco), centros de madres, comités de sin casa, pobladores de «Vietnam heroico», estudiantes. Esta iniciativa recibe el apoyo de un amplio abanico político de izquierda: PS, MAPU, IC, MIR y radicales (PR) todos juntos, a la cual hay que añadir la notable presencia de sindicalistas anarcosindicalistas de Celco, como José Saavedra Betancourt y José Manquilef Torres. Respaldados por esta amplia representación, la Asamblea proclama la formación del Comando Comunal de Trabajadores (CCT) de Constitución, presidido por Luna Vera, pero bajo el impulso de Saavedra Betancourt[72]. El CCT elabora un documento en donde se exige una rápida solución a los problemas de vivienda, de mercado negro y el fin a toda persecución judicial por usurpación de tierras en contra de los dirigentes de «Vietnam heroico». Dos meses más tarde, la gobernadora María Tejo San Martín sigue sin ceder y rechaza de plano el diálogo en torno a estas reivindicaciones. El asunto se complica, ya que rápidamente debe enfrentar una verdadera insurrección popular. El 10 de abril, alrededor de tres mil personas se reúnen nuevamente en la plaza principal, donde están presentes todos los partidos de izquierda, con la notable excepción del PC, que ve en esta manifestación una provocación izquierdista. Los manifestantes demandan la demisión de la gobernadora y también del inspector local de Dirinco, incapaz –según ellos– de resolver los problemas de abastecimiento. En caso de rechazo, el

CCT amenaza con tomar el control de la ciudad. Por otra parte, se exige que Arturo Riveros –dibujante industrial de Celco, militante de la Izquierda Cristiana y presidente del CCT– sea nombrado gobernador. Finalmente, el Comando llama a formar brigadas de vigilancia, abastecimiento, salud, aseo y organización de tareas. Frente al rechazo de María Tejo, quien no acepta ceder ante este chantaje, el Comando Comunal lleva a cabo sus amenazas: toma el edificio de la Gobernación, bloquea las principales vías de acceso y la línea férrea, y controla la radio local, que difunde permanentemente las reivindicaciones del CCT, el cual comienza a administrar de manera incipiente la ciudad.

Ocupación del centro de Constitución (abril de 1973)



Fuente: Punto Final, Suplemento del nº 183, 8 de mayo de 1973

La venta de alcohol es prohibida y los comerciantes que acaparan son obligados a abrir y vender sus mercaderías a los precios oficiales. Según Punto Final, «La ciudad permaneció dos días controlada totalmente por el poder popular, en una experiencia planificada y dirigida por la clase obrera, que triunfó sobre la inoperancia burocrática y el reformismo[73]». Al contrario El Mercurio se alarma por el actuar de «elementos extremistas» que se permiten tomar los espacios institucionales, provocando el «deterioro progresivo del principio de autoridad[74]».

Al día siguiente, por la fuerza de la movilización y después de una efectiva intervención del intendente del Maule Serafín Soto (que también frena la intervención de la fuerzas represivas), la presidencia de la República cede y nombra a Riveros en remplazo de María Tejo San Martín, por lo que el CCT vota el fin de la ocupación. El nuevo gobernador inicia su mandato con una acción enérgica a favor del abastecimiento popular, apoyándose en las JAP y con la ayuda de voluntarios provenientes del Comando. Esta designación provoca grandes tensiones y enfrentamientos dentro de las filas de la izquierda local: algunos sectores de la Juventud Comunista se plantean incluso organizar una «retoma» violenta de la gobernación para sacar del puesto a Riveros, ya que, según su análisis, esta acción del CCT fue ante todo «un acto contra el gobierno, así derechamente[75]».

La experiencia de Constitución permite sacar varias enseñanzas[76]. Primero, el reducido tamaño de esta localidad tiene como efecto minimizar la dispersión de las acciones colectivas y maximizar el impacto de la coordinación. Esta acción moviliza conjuntamente a obreros y pobladores, acercamiento favorecido por la proximidad geográfica entre el sector habitacional y el lugar de trabajo. Finalmente, el éxito de esta movilización es el resultado de varios campos de lucha (vivienda, abastecimiento, conflicto con las instituciones). La toma de Constitución hace aparecer al Comando Comunal como un verdadero contrapoder que desafía la autoridad local y que incluso se substituye a ella durante algunas horas. Sin duda, asistimos a un ejercicio parcial de democracia directa, en la misma línea que la reivindicada por los seguidores del poder

popular. Por cierto, la prensa conservadora utiliza la toma de Constitución para agitar la bandera del extremismo. El Mercurio ve aquí la prueba de un «poder paralelo que el marxismo quiere imponer en Chile a la brevedad[77]». Algunos autores quisieron incluso identificar un verdadero doble poder:

El éxito de la lucha deriva del hecho de que el Comando logra constituirse en un primer momento, en tanto autoridad paralela a la de la burguesía […]. El Comando logra momentáneamente tener un poder local, mientras que controla el flujo de la ciudad y sus actividades, haciendo triunfar el reino del criterio de clase de las brigadas obreras y de pobladores[78].

De hecho, esta ocupación, aunque efímera, es un momento transitorio de poder popular en provincia. Sobrepasa el estado de la simple presión social sobre una autoridad local para desembocar, durante algunas horas, en la toma del control de la ciudad. Sin embargo, este activo contrapoder se queda más bien como base de apoyo una vez que uno de los suyos es mandatado para dirigir las instituciones locales. Hugo Cancino, llama así a la «precaución» para que la experiencia de Constitución no sea sobredimensionada, ni interpretada «como un elemento de prueba del protagonismo de los Comandos Comunales, o de la implementación generalizada de formas de democracia directa[79]». Si posteriormente el CCT propone acompañar al nuevo gobernador, nunca considera transformarse en un organismo de poder paralelo o alternativo.

Luego de la designación de Arturo Riveros Blanco como Gobernador subrogante del Departamento de Constitución se produce una cierta calma nebulosa. Son tan solo cinco meses de gestión los que alcanza a realizar la nueva directiva que se constituyó en la Gobernación antes del desenlace fatal del Gobierno Popular. Estos cinco meses no serían suficientes para marcar significativamente la historia de Constitución y más bien, son solo fragmentos, de una cinta que se perdió en la memoria de la represión, los que quedan atesorados por las personas que vivieron este proceso[80].

Encontramos aquí, en un contexto específico, algunas problemáticas que plantea la delegación (y la fetichización de lo político), temas abordados entre otros, por la sociología de Bourdieu: para hacerse entender los dominados deben

movilizarse, pero también deben tomar el necesario riesgo de la alienación institucional, despojándose parcialmente a favor de un representante, proceso que lleva también en parte al término del potencial autogestionario de su movilización[81].

Los pobladores y el movimiento social urbano en 1973

¿Son una excepción las movilizaciones colectivas de «Nueva Habana»?

Hemos explicado que el gran paro de la oposición de octubre de 1972 es un momento clave en la historia de la Unidad Popular, particularmente porque es un catalizador que acelera la autoorganización de las clases dominadas y permite esbozar una posible unidad de los asalariados de industrias de todos los tamaños y de los habitantes de las poblaciones[82]. Sin embargo, como lo hemos precisado más arriba, a este período excepcional le sigue una nueva «división de tareas» en el seno del movimiento social urbano entre, por un lado, el movimiento obrero y por el otro, las reivindicaciones de los pobladores. Esta falta de unidad de las capas populares puede explicarse de varias maneras, y en particular por el peso de una historia de luchas separadas entre un movimiento obrero nacido a inicios del siglo XX y movilizaciones colectivas de los «sin casa», que sólo debutan en los años sesenta. Son también producto de condiciones materiales, acceso al trabajo diferenciado y presencia de una pluralidad de actores populares, con intereses no siempre coincidentes. Como lo anota el historiador Mario Garcés:

Que los pobladores son los trabajadores del barrio se puede sostener sin mayores dificultades; que son lo mismo que la clase obrera en su lugar de residencia, coloca más de un problema en el sentido de la heterogeneidad de la clase obrera chilena –y más ampliamente de la noción de «trabajadores» en América Latina–. En este sentido, en la «población» hay trabajadores «formales», pero también muchos trabajadores «informales», que nunca alcanzaron, ni alcanzarán la condición de «proletarios» en sentido estricto. Por otra parte, en la población han adquirido visibilidad y actoría otros sujetos colectivos, otras identidades

colectivas, que para nuestras sociedades son muy importantes: las mujeres, los jóvenes[83].

A pesar de ello, varios índices muestran que esta fragmentación –incluso división– de los sectores subalternos no representa una característica insoslayable del proceso revolucionario. En 1972-1973, en el conjunto de las poblaciones organizadas del país, se asiste a un renacimiento de las movilizaciones en torno a la «batalla del consumo» y del abastecimiento popular autogestionado: hay más de 52 movilizaciones de pobladores en la ciudad de Concepción relativas al abastecimiento en estos dos años y son 38 en Santiago y 21 en Valparaíso para el mismo periodo[84]. En «Nueva Habana» toman la dirección del campamento los cuadros pobladores y simpatizantes del MIR[85], lo que favorece la apertura hacia otros sectores sociales, entre ellos los trabajadores del Cordón Vicuña Mackenna vecino y también la conformación del Comando Comunal de La Florida[86]. Un rasgo sobresaliente de ese momento de la historia del campamento es el importante ascenso de los trabajadores de la construcción, representados por Abraham Pérez, en el directorio de «Nueva Habana[87]». Estos asalariados del «frente de la construcción» toman más y más iniciativas y tienden a remplazar a los «jefes» históricos del campamento (la jefatura), en general cesantes o trabajadores temporales de la pequeña industria, cada vez más demandados por sus responsabilidades militantes. Esta evolución se puede observar desde 1972: en la medida que el trabajo voluntario decae, son los trabajadores de la construcción (la mayoría vive en «Nueva Habana») quienes realizan las guardias nocturnas, vigilan el material, preparan los equipos de autodefensa en caso de ataque de las fuerzas policiales o de la extrema derecha[88]. Políticamente, estos trabajadores en general se distancian del MIR, ya que, como el conjunto de sus compañeros de Corvi[89], se sienten más cercanos al discurso del Partido Socialista. La tendencia a una mejor sinergia pobladores-obreros de la construcción así como un desplazamiento político desde el MIR hacia el PS, habría sido seguramente confirmado en las elecciones de la «jefatura», abortadas por el golpe de Estado. En sentido contrario, la división existente entre los trabajadores de la gran industria que viven en el campamento y el resto de los pobladores sigue siendo importante, incluso se ve acentuada.

La falta de generalización de las medidas sociales tomadas por el Estado a favor del conjunto de las capas desfavorecidas profundiza la división del movimiento social urbano entre algunos sectores de la clase obrera, por un lado, y los

pobladores movilizados, por el otro: «esta diferenciación, que se traduce por programas sociales que favorecen una categoría social a costa de otra, repercute en la movilización, en la orientación de la lucha de clases, en la cohesión social interna del campamento[90]». Además, esta división refuerza los métodos verticalistas de la izquierda chilena y el modo de dirección partidaria «caudillista». Sobre este tema, Castelain señala que si bien la organización del MIR en diferentes «frentes de lucha» es bastante eficaz para la distribución del trabajo entre militantes, «se opone en parte a la concientización de las masas populares no politizadas y favorece la parcelación según el sexo[91]». El MIR, por lo demás, parece estar bastante consciente de estos defectos: desvinculación entre los diferentes frentes de lucha, apatía de la base y falta de participación, distancia entre base y dirección, dominación masculina y descontento de las mujeres, falta de compromiso por parte de la juventud, etc. Los militantes miristas trataron de corregir estos rasgos negativos a partir de una nueva experiencia, la del campamento «Yolanda Schwartz», fundado en abril de 1973. Campamento más pequeño y resultado de la organización de 50 familias (más de 100 al momento del golpe de Estado), es mucho más fácil de gestionar que «Nueva Habana» (1 600 familias). Además, gracias al trabajo cultural que se convierte en un polo centralizador/descentralizador de las acciones colectivas y de la información, se impulsa una importante coordinación, ya que cada manzana debía estar articulada con éste. En «Yolanda Schwartz», la animación es tarea de pobladores que tienen una larga experiencia personal en los campamentos y no de militantes exteriores (a menudo estudiantes) como en «Nueva Habana». En 1973, el MIR ya cuenta con la capacidad humana para llevar a cabo este tipo de experiencias. La participación de los pobladores es tanto más fácil en cuanto los cuadros deben pertenecer obligatoriamente a las manzanas y que la problemática del machismo y de la incorporación de las mujeres es enfrentada desde el principio. Otra ventaja es que, en esta experiencia, el MIR le otorga toda su dimensión al aspecto psicológico de tales prácticas sociales y estudiantes consagran su tiempo libre para ayudar a la cohesión interna del grupo mediante discusiones colectivas e individuales. Este ensayo sólo tuvo unos meses de existencia y no permite sacar conclusiones que no sean prematuras. De todos modos, merece ser mencionado como una mejora posible de las formas de autoorganización de los pobladores. Más globalmente, el año 1973 es también el de importantes movilizaciones colectivas en torno al abastecimiento, aunque estas van más allá de una problemática específicamente ligada a los pobladores, ya que afectan al conjunto de la sociedad. Es precisamente la reivindicación del abastecimiento directo la que genera una dinámica unitaria en el seno del espacio del movimiento social.

«¡Abastecimiento para los pobres y racionamiento para los ricos!»

Durante el año 1973, la batalla por el abastecimiento remueve la sociedad chilena. Ya vimos cómo la propuesta de la «canasta popular» del ministro Fernando Flores, con la consigna del «abastecimiento directo», pudo ser implementada, en una perspectiva de ruptura, por ciertos sectores sociales. Este llamado, apoyado por el ala rupturista de la UP y la izquierda extraparlamentaria, es contrario a la táctica legalista del gobierno. Es también por esta razón que Allende, con la preocupación de reafirmar el poder estatal, entrega la gestión de esta delicada cuestión a los militares, como lo hizo con el general Bachelet. Después de constituirse en los garantes de la propiedad privada de una parte de las industrias tomadas (plan Prats-Millas), los altos dignatarios militares son invitados por el gobierno para reorganizar la esfera de la circulación de mercaderías. De este modo, se encuentran aún más implicados en el rol de garantes del orden social y progresivamente tendrán como su bestia negra a esta «revolución desde abajo» que brota desde todas partes[92].

Sin embargo, el gobierno –en razón de su débil poder de control sobre las empresas de distribución– se muestra, la mayor parte del tiempo, incapaz de responder al conjunto de necesidades urgentes de la población. Algunos hablan incluso de «repartir la miseria», ya que en agosto de 1973, el Secretariado Nacional de Distribución debe abastecer a más de 167 mil familias (de las más pobres) con una cantidad de mercaderías prevista normalmente para un máximo de 80 mil[93]. Las críticas militantes son aún más ácidas para las agencias de distribución estatal que no siempre entregan el conjunto de productos y que se permiten alimentar a los barrios ricos de Santiago, o incluso, bajo las órdenes del general Bachelet, abastecer a la Fuerza Áerea[94]. En estas condiciones, los partidarios del «poder popular» dan a conocer su descontento y en «Nueva Habana», los pobladores proponen generalizar su método de abastecimiento directo a otros barrios de la ciudad. El 27 de marzo de 1973, el directorio del campamento se reúne para hacer un análisis de la situación[95]. Se anuncia que el nuevo plan del general Bachelet consiste en «racionalizar» la entrega de los productos básicos, es decir disminuir a la mitad la distribución de la «canasta» efectuada por los supermercados Montserrat y remplazar a todos los gerentes civiles por oficiales. A pesar de la baja en la movilización del campamento, se

decide la realización de varias acciones en coordinación con otras poblaciones. Entre el repertorio de acciones colectivas evocadas, destacan la instalación de puestos de guardia en los supermercados Montserrat, el uso de la marcha callejera e incluso el secuestro durante algunas horas del gerente de una agencia de distribución. En la misma época, otra coordinación aparece regularmente: el Comando provincial de abastecimiento directo, dirigido por el sindicalista Luis Cáceres.

[…] nosotros planteamos la necesidad a nivel comunal, en Las Condes, comuna reaccionaria donde se formó el primer comité local de abastecimiento con 200 mujeres. […] Con 2 delegados por comuna sobre las 12 que participaron, formamos el Comando Provincial […]. En la actualidad se abastecen más de 200 mil familias inscritas[96].

Como lo subraya Jorge Magasich, estas cifras han sido seguramente abultadas. Podemos, sin embargo, suponer que varios miles de personas están en contacto con este tipo de distribución directa a través de diferentes organismos. Luis Cáceres se manifiesta incluso en oposición a la canasta popular tal como ha sido propuesta por el gobierno y adelanta que, en su opinión, la solución pasaría por constituir una central nacional de compras «controlada directamente por los pobladores», y bajo la dirección y planificación económica del gobierno. Cáceres se queja precisamente del abandono de sectores enteros de la población que deben asumir formas precarias de autoorganización: «no podemos estar permanentemente los pobladores haciendo trabajos voluntarios como lo estamos haciendo desde el mes de octubre [1972][97]».

Movilización del Comando provincial de abastecimiento directo-Santiago (sin fecha)


COMANDO PROVINCIA
ABASTECIMIENTO DIREC
CHILE
Y CUBA
COMITE ABAST. DIRECTO
CAMILO TORRE

Fuente: Joxe, Alain, Le Chili sous Allende, op. cit.

La plataforma de lucha del primer encuentro provincial que tuvo lugar en Santiago (200 delegados), a mediados de marzo, afirma la necesidad del control obrero de la producción y del control popular de la distribución, así como de la constitución de una sola y única central de distribución, que incluiría al conjunto de las empresas de productos de primera necesidad. Una de las consignas desplegadas es «abastecimiento para los pobres y racionamiento para los ricos![98]». A inicios de abril de 1973, los pobladores pasan a la ofensiva y deciden ocupar los locales de la Cenadi para protestar ante la falta de aprovisionamiento de los campamentos. Numerosos habitantes de los barrios pobres, venidos de «Lo Hermida», «Yolanda Schwartz», «Nueva Habana»… están presentes, siendo este último campamento quien, una vez más, lidera la organización. Finalmente, el objetivo que consiste en ocupar los locales de la Cenadi fracasa, ya que los empleados de esta empresa (entre los cuales se encuentran algunos militantes del PC y del PS) se oponen, bloqueando la entrada, y el Grupo Móvil de Carabineros dispersa violentamente la manifestación ante la resistencia de los pobladores[99].

En provincia, el problema también es grave y al parecer se realizan intentos –aunque frágiles– de unificar obreros y pobladores que se han mantenido dispersos. Estas luchas continúan esporádicamente en todo el país, incluso con la voluntad de unir las JAP, el mundo campesino y los Cordones Industriales. En la comuna de Maipú, este tema se plantea regularmente: en mayo de 1973, el nuevo secretario general de la JAP comunal (militante del MAPU) convoca a que se establezcan tales vínculos. Jaime Cataldo señala que, gracias a la JAP, se ha llegado a un acuerdo con un Consejo campesino para comercializar directamente sus productos; y agrega que este tipo de conversaciones están en curso con el cordón Industrial Cerrillos[100]. En julio aparece un «Comando único de abastecimiento» en Maipú, con la ambición de reunir la JAP comunal y las diferentes organizaciones de pobladores. El objetivo prioritario de este Comando es aliarse con el cordón Cerrillos y el Consejo Comunal Campesino de Maipú «para enfrentar de una forma coordinada y unida la ofensiva de la derecha armada y presentar una plataforma de lucha revolucionaria de toda la clase trabajadora[101]». La sinergia, entre dinámica de los cordones y abastecimiento directo, es uno de los desafíos de este período para el movimiento social. Sin

embargo, la apuesta está parcialmente perdida: la confluencia de un sitio de conflicto al otro no ocurre. De hecho, a fines de agosto de 1973, los militantes de Santiago favorables al abastecimiento directo todavía mantienen entre sus objetivos «que se creen las condiciones necesarias para forjar la unidad de los pobladores, trabajadores de la Dinac y cordones industriales[102]».

Por otra parte, si la ampliación de los comandos de abastecimiento permiten vislumbrar en trasfondo alguno de los contornos de estos «Comandos Comunales de trabajadores» tan destacados por el sector «rupturista» de la izquierda, sus capacidades de acción efectiva siguen siendo muy limitadas, tanto en el espacio como en el tiempo[103]. De hecho, este tipo de comando parece actuar concretamente en los campamentos de algunas comunas, pero sobre todo se queda en el estadio de organismo de presión sobre el aparato gubernamental: la iniciativa es dejada al gobierno, el cual rechaza toda acción que pueda parecer ilegal o contraria a los intereses de la pequeña burguesía comerciante. Según Michel Raptis, los Comandos encierran la misma ambigüedad que las JAP, la que emana de su composición interna. A veces están formados por representantes elegidos por las bases; pero en general, provienen de los partidos gubernamentales que cogestionan estos organismos: así, de un modo u otro, permanecen bajo la tutela del Estado[104]. En junio de 1973, el gobierno envía al Parlamento un proyecto de ley cuyo objetivo es mejorar la centralización de la producción del APS así como imponer a los intermediarios el respeto de los canales legales de distribución y los precios oficiales. El proyecto prevé asegurar a cada familia un volumen de artículos básicos en los lugares de comercialización tradicionales donde existen, y donde no los hay, apoyándose en los organismos de venta directa. Sin sorpresa, este proyecto de ley es rechazado por la oposición, mayoritaria en el Congreso: la UP nuevamente choca contra los límites que les imponen las instituciones de la oligarquía chilena[105]. A pesar de todo, el gobierno intenta encontrar una salida constitucional al problema del abastecimiento. A inicios de septiembre de 1973, el ministro de Economía, José Cademartori (PC) anuncia, con gran propaganda, la inauguración de «cooperativas de consumidores». La idea es entregar, mediante cooperativas de trabajadores de diferentes industrias o de pobladores de un barrio, los artículos esenciales para las familias. El ministro reconoce el peso creciente que representan para la población, las interminables colas y la amplitud del mercado negro. Algunas decenas de horas antes del golpe de Estado, frente a una asamblea de pobladores, el ministro admite que «si tuviéramos las armas legales necesarias, en seis meses terminaríamos con estos delincuentes económicos[106]». Dos días después, la violencia de la intervención armada pone de manifiesto la

dimensión trágica de tales declaraciones, que todavía quieren creer en la posibilidad de reformas institucionales mientras el terrorismo de Estado, con el apoyo activo de la CIA, está a un paso de tomar el poder.

1 Allende, Salvador, «Plataforma de la victoria», 29 de febrero de 1973.

2 Allende, Salvador, «Tercer Mensaje ante el Congreso nacional», 21 de mayo de 1973. En: Farías, Víctor, op. cit., t.VII, pp. 4535-4671. Volvemos sobre este discurso en el capítulo doce de la cuarta parte.

3 Moulian, Tomás, Conversación con Allende, op. cit., p. 88.

4 Enríquez, Miguel (MIR), «Discurso en apoyo de los candidatos del Partido Socialista y la Izquierda Cristiana», 24 de enero de 1973. En: Farías, Víctor, op. cit., t.VII, pp. 4165-4170.

5 MIR, «Informe de la Comisión Política al Comité Central restringido sobre la crisis de octubre y nuestra política electoral», 3 de noviembre de 1972 (Documentos internos 1972).

6 MIR, «Carta al Partido Socialista apoyando a sus candidatos» y PS, «Respuesta a la carta del Secretariado Nacional del MIR», Punto Final, 30 de enero de 1973.

7 Esta condescendencia hacia el «reformismo» es inmediatamente criticada por algunos grupúsculos de la izquierda extraparlamentaria. Ver: Trinchera, nº 4, Concepción, abril de 1973.

8 MIR, «Informe de la Comisión Política al Comité Central restringido sobre la crisis de octubre y nuestra política electoral», 3 de noviembre de 1972 (Documentos Internos 1972).

9 Prats, Carlos, Memorias: testimonio de un soldado, Santiago, Pehuén, 1987.

10 El Mercurio, Santiago, 17 de marzo de 1973.

11 Allende, Salvador, «Discurso por radio y televisión sobre los resultados electorales», 4 de marzo de 1973 y UP, «Declaración pública sobre los resultados

de la elección», 4 de marzo de 1973. En: Farías, Víctor, op. cit., t. VII, pp. 4323-4325.

12 Garcés, Joan, Allende y la experiencia chilena, op. cit.

13 Ver la dura polémica a este propósito –a fines de julio de 1973– entre La Aurora de Chile y Tarea Urgente, ambos periódicos socialistas que reivindican el poder popular.

14 Entrevista realizada en La Serena, 24 de junio de 2002.

15 El Mercurio, Santiago, 17 de marzo de 1973.

16 El Mercurio, Santiago, 19 de abril de 1973.

17 Garcés, Joan, El Estado y los problemas tácticos en el gobierno de Allende, México, Siglo XXI, 1974.

18 Cordón O'Higgins, «El Cordón O'Higgins a la opinión pública, trabajadores y cordones industriales», La Aurora de Chile, 12 de abril de 1973.

19 Ibid. (Mayúsculas en el original).

20 Posición, 16 de marzo de 1973.

21 La Aurora de Chile, 12 de abril de 1973.

22 El Rebelde, 11 de abril de 1973.

23 El Mercurio, Santiago, 26 de abril de 1973.

24 La Aurora de Chile, 12 de abril de 1973.

25 Tesis también presente en términos próximos por historiadores progresistas como Luis Corvalán Márquez (Los partidos y el golpe del 11 de septiembre, op. cit., pp. 286-287).

26 Magasich, Jorge, Pouvoir formel et pouvoir réel, op. cit., pp. 170-171.

27 En este primero de mayo, por lo demás, hubo incidentes graves, como la muerte de un joven obrero comunista, herido mortalmente por un balazo

proveniente desde la sede del Partido Demócrata Cristiano.

28 Allende, Salvador, «Discurso del primero de mayo de 1973», El Mercurio, Santiago, 2 de mayo de 1973.

29 Magasich, Jorge, Pouvoir formel et pouvoir réel, op. cit., p. 171.

30 Bitar, Sergio y Pizarro, Crisóstomo, La caída de Allende y la huelga de El Teniente, op. cit.

31 Citado por Kalfon, Pierre en Le Monde, París, 19 de junio de 1973.

32 El Mercurio, Santiago, 3 de mayo de 1973.

33 La Aurora de Chile, 29 de marzo de 1973.

34 Tarea Urgente, 15 de junio de 1973.

35 CC Estación Central, «Primer derecho del pueblo es el derecho a la comida», Encuentro en el teatro Monumental, Posición, 30 de marzo de 1973.

36 Cordón O'Higgins, «El Cordón O'Higgins a la opinión pública», La Aurora de Chile, 12 de abril de 1973; Cordón O'Higgins, «Lucha con los trabajadores de Maestranza Jemo y Distribuidora Distra», La Aurora de Chile, 26 de junio de 1973.

37 Tarea Urgente, 15 de junio de 1973.

38 Ibid.

39 Testimonio de Javier Bertín, en 1996. Recopilado por Miguel Silva, op. cit.

40 El Mercurio, Santiago, Chile, 16 de junio de 1973

41 Las Noticias de Última Hora, 16 de junio de 1973.

42 Ibid.

43 «Cordones industriales en pie de Guerra», Las Noticias de Última Hora, 16 de junio de 1973.

44 Le Monde, París, 23 de junio de 1973.

45 Las Noticias de Última Hora, 21 de junio de 1973.

46 Cordón Cerrillos, «¡Un año de lucha!, ¡Un año de victoria!», Tarea Urgente, 3 de julio de 1973.

47 Cordón Cerrillos, Consejos Comunales campesinos, Femet, «El Cordón Cerrillos: los trabajadores, sus organizaciones y el gobierno», 17 de junio de 1973, Tarea Urgente, 23 de junio de 1973.

48 Henríquez, Renzo, Cordón Cerrillos Maipú, op. cit., p. 180.

49 Punto Final, 3 de julio de 1973.

50 Ver la tercera parte de Guzmán, Patricio, La Batalla de Chile, op. cit.

51 Testimonio de Javier Bertín en 1996, citado por Silva, Miguel, op. cit., pp. 385-386.

52 Entrevista realizada en Santiago, 6 de agosto de 2003.

53 Testimonio de Javier Bertín en 1196, citado por Silva, Miguel, op. cit., pp. 385-386.

54 Henríquez, Renzo, Cordón Cerrillos Maipú, op. cit., p. 209.

55 El fundo Santa Carolina es propiedad de Edmundo Pérez Yoma, militante demócrata cristiano e hijo del exministro E. Pérez Zujovic.

56 Ver el testimonio de Eduardo Agustín Cruz Farías, 23 de marzo de 2005, en [www.memoriamir.cl].

57 Esto si se consideran las estimaciones de una encuesta iniciada en agosto de 1973 (y retomada durante la dictadura) a propósito de un panfleto distribuido en el Cordón y que llamaba a la autodefensa obrera (República de Chile, Corte de Apelaciones de Concepción, sumario nº 69-73, Sección general de investigaciones, Prefectura de Concepción, Comisaría de Talcahuano, 18 de octubre de 1973).

58 Trinchera, nº 4, Talcahuano, abril de 1973.

59 En Antofagasta (cuarta ciudad del país por el tamaño) también habrían surgido dos Cordones, uno en el norte y otro en el sur (El Mercurio, Santiago, 9 de mayo de 1973).

60 Entrevista realizada en Santiago, 5 de diciembre de 2001.

61 Ibid.

62 Ibid.

63 IC, Testimonio Hernán Mery, 6 de septiembre de 1973.

64 Entrevista realizada en Santiago, 5 de diciembre de 2001.

65 Tarea Urgente, 10 de agosto de 1973 y Combate, Valparaíso, nº 2, noviembre de 1972.

66 Santa Lucía, Patricia, «The industrial class and the struggle for power in Chile». En: O'Brien, Philip, Allende's Chile, op. cit., pp. 161-165.

67 Entrevista realizada en París, marzo de 2001.

68 Entrevista realizada en Talence, Francia, 24 de octubre de 2000.

69 Cancino, Hugo, La problemática del poder popular, op. cit., p. 339.

70 Suárez, Héctor, «Poder popular en la toma de Constitución», Punto Final, suplemento al nº 183, 8 de mayo de 1973. Consultar también dos estudios de grado más recientes: Reyes, César y Saavedra, Víctor, Poder Popular en la Vía Chilena al Socialismo: Aproximaciones Teóricas y Prácticas. Dos Experiencias Locales, Constitución y Tomé (1970-1973), tesis para obterner el grado de profesor de historia y geografia, Universidad de Concepción, 2011, y Menares Díaz, Guillermo, «Se nos presentó un sólo camino». Estudio de Caso del movimiento social popular en la localidad de Constitución, Región del Maule (1970-1973), tesis de Licenciatura en Historia, Universidad Academia de Humanismo Cristiano, Santiago, 2015.

71 Ibid.

72 Según testimonio de Luna Vera, el verdadero dirigente del CCT era Saavedra Betancourt: «Eran otros los dirigentes pero yo aparecía como presidente del Comando Comunal de Constitución y eso me trajo muy malas consecuencias». Entrevista realizada por Guillermo Menares Díaz, Constitución, 10 de Junio de 2015.

73 Ibid.

74 El Mercurio, Santiago, 20 de abril de 1973.

75 Testimonio de Carlos Zúñiga (militante de las JJCC). Entrevista realizada por Guillermo Menares Díaz, Constitución, 4 de junio de 2015.

76 Ver un balance en Pastrana, Ernesto; Threlfall, Mónica, Pan, techo y poder, op. cit.

77 El Mercurio, Santiago, 20 de abril de 1973.

78 Pastrana, Ernesto; Threlfall, Mónica, Pan, techo y poder, op. cit., p. 130.

79 Cancino, Hugo, Chile: la problemática…, op. cit., pp. 343-344.

80 Menares Díaz, Guillermo, «Se nos presentó un sólo camino»... op. cit., p. 72.

81 Bourdieu, Pierre, «La délégation et le fétichisme politique», Actes de la recherche en sciences sociales, nº 52-53, 1984, pp. 49-55.

82 Una misma persona puede, por supuesto, pertenecer a ambas categorías.

83 Garcés, Mario, «Los años de la Unidad Popular. Cuando los pobladores recreaban las ciudades chilenas». En Pinto, Julio (ed.), Fiesta y drama. Nuevas historias de la Unidad Popular, op. cit., p. 73.

84 Ibid, pp. 58-62.

85 Castelain, Christine, «Histoire du campamento Nueva Habana», op. cit., pp. 117-131.

86 Ver los testimonios de Abraham Pérez y Mario Olivares (entrevistas realizadas en Santiago, 6 de mayo de 2002 y 1 de mayo de 2002,

respectivamente). Consultar también Cofré, Boris, Campamento Nueva La Habana, op. cit.

87 Entrevista realizada en Santiago, 6 de mayo de 2002.

88 Castelain, Christine, Enquête sociologique sur le bidonville Nueva Habana, op. cit., pp. 97; 164-168.

89 Corporación de la Vivienda. Organismo público dependiente del Ministerio de la Vivienda, encargado de elaborar todos los planes y la coordinación de las construcciones a cargo del Estado.

90 Castelain, Christine, Enquête sociologique sur le bidonville Nueva Habana, op. cit., p. 104.

91 Ibíd., p. 237.

92 El Rebelde, 11 de abril de 1973.

93 Chile Hoy, 13 de septiembre de 1973.

94 Castelain, Christine, Enquête sociologique sur le bidonville Nueva Habana, op. cit., p. 192.

95 Esta reunión convoca a una cuarentena de pobladores, delegados de manzana, y a miembros de la «Jefatura».

96 Tarea Urgente, 10 de agosto de 1973.

97 Tarea Urgente, 25 de febrero de 1973.

98 La Aurora de Chile, 22 de marzo de 1973.

99 Castelain, Christine, Enquête sociologique sur le bidonville Nueva Habana, op. cit., p. 193.

100 El 1 de abril de 1973, un congreso de todas las JAP locales de la zona designó una dirección de 15 personas para formar la JAP comunal (Poder, 12 de mayo de 1973).

101 Tarea Urgente, 27 de julio de 1973.

102 Tarea Urgente, 6 de septiembre de 1973.

103 Magasich, Jorge, Pouvoir reel, pouvoir formel, op. cit., pp. 100-101.

104 Raptis, Michel, Quel socialisme au Chili?, op. cit., pp. 129-131.

105 Puro Chile, 11 de junio de 1973.

106 El Siglo, 9 de septiembre de 1973.

Capítulo 11

El «Tancazo» y sus consecuencias

Un ensayo general

Sublevación militar y reanudación del diálogo con la Democracia Cristina

Previo al desenlace que pone fin a la Unidad Popular, el ruido de sables se hace cada vez más presente. Sin embargo, seguros de su teoría de la «constitucionalidad de las fuerzas armadas chilenas», las direcciones de la izquierda parlamentaria siguen confiando en la lealtad de una mayoría de los oficiales. Como lo recuerda Alain Joxe, un análisis sereno de la historia chilena lleva más bien a poner en duda tal mitificación, en vista del rol político reaccionario que los militares regularmente jugaron a lo largo del siglo XX[1]. Allende, sin embargo, no se atreve a «limpiar» los altos mandos de las Fuerzas Armadas, temiendo aumentar el descontento en el seno de estas instituciones. Pero sobre todo, no se decide llevar a cabo –lo que el MIR reclama con fuerza– una democratización de las Fuerzas Armadas, otorgar el derecho a voto para los soldados y permitir del debate político en sus filas. En las altas esferas del Estado, es el general Prats –comandante en jefe del Ejército– quien tiene mayor conciencia de los errores en la teoría de la izquierda chilena. Aunque Prats es un ferviente legalista y está de acuerdo en realizar todo lo que sea necesario para buscar un consenso en el marco institucional, en su diario íntimo escribe que, para la derecha, después de las elecciones legislativas del mes de marzo de 1973, la suerte del gobierno está sellada:

El fracaso [para la oposición] de este último recurso constitucional –que habría podido manejarse con elegancia democrática– despejaba ahora todas las dudas de la oposición sobre lo fundamental: el gobierno debía caer en 1973. Faltaba

por dilucidar el ‘cómo’: si empujando a las FFAA a tomarse lisa y llanamente el poder en forma transitoria, […] o creando una situación de «pera madura», que obligara al Presidente Allende a renunciar[2].

Algunas semanas más tarde, anota: «El tiempo dirá si las Fuerzas Armadas van a mantenerse unidas. En su interior, cada día se hace más evidente un proceso de polarización[3]». Efectivamente, a esta fecha, el golpe de Estado está en curso y Prats es cada vez más criticado por la oposición, incluso injuriado en la prensa y en las calles, al punto de ser atacado por parte de la extrema derecha, en razón de su respeto de la política gubernamental. La conspiración –subterránea aún– es lentamente preparada con el apoyo intelectual, logístico y financiero del gobierno de Estados Unidos, como ha sido abundantemente probado[4]. El 28 de junio, el general Sepúlveda, encargado militar de la capital, anuncia que se ha procedido al arresto de miembros del Ejército, dándole validez al estado de emergencia, decretado el día anterior en Santiago: un intento de golpe es inminente. La mañana del viernes 29 de junio, efectivos de la unidad militar dirigida por el teniente coronel Souper, compuesta por varios tanques, vehículos blindados y más de 400 soldados, se lanzan al asalto del Ministerio de Defensa y rodean La Moneda. Allende llama por la radio a sus partidarios a ocupar inmediatamente las fábricas y salir a las calles. En la urgencia, el presidente pronuncia algunas frases, que luego le serán reprochadas:

Llamo al pueblo a que tome todas las industrias, todas las empresas, que esté alerta; que se vuelque al centro, pero no para ser victimado; que el pueblo salga a las calles, pero no para ser ametrallado; que lo haga; que lo haga con prudencia con cuanto «elemento» tenga en sus manos. Si llega la hora, armas tendrá el pueblo[5].

Este discurso es uno de los pocos en que Allende sugiere sin rodeos la posibilidad de armar a sus partidarios ante una intervención militar aunque, algunos momentos más tarde, se desdice llamando a los obreros a permanecer en las fábricas. El intento de golpe es abortado fundamentalmente gracias a la acción decisiva del general Prats, quien logra detener la rebelión[6].

Esta insurrección de las tanquetas, que quedó en las memorias con el nombre de

«Tancazo» aparece más como una prueba de la resistencia popular que como un verdadero ensayo general del futuro golpe de Estado. Es un punto de referencia para los militares y que le permite al sector progolpista evaluar los obstáculos. Un oficial como el general Pinochet, siempre considerado por la UP como leal, participa incluso del aplastamiento del regimiento de blindados[7]. El apoyo más visible al Tancazo es el que le otorga el grupo de extrema derecha Patria y Libertad, cuyos dirigentes –una vez refugiados en la embajada de Ecuador– se lamentan de haber sido «abandonados» por una parte de los oficiales. Para el Partido Comunista, el intento fracasado del coronel Souper sería la prueba de que «los planes de la derecha para implicar a las FFAA en una aventura partidista han fracasado» y de la «solidez de nuestras instituciones armadas que cumplieron con patriotismo e intransigencia la misión que les confiere la Constitución». El periódico no ahorra elogios para aquel que será finalmente el verdugo de la revolución chilena, el general Pinochet, señalando su «dignidad y firmeza»… El artículo concluye diciendo que «los trabajadores tienen plena confianza en los soldados de la patria y respetan su sobriedad, disciplina, honestidad y patriotismo. Los que atacan a las FFAA son aventureros reaccionarios y fascistas[8]». Lo que hoy podríamos calificar de ceguera dogmática de una parte de la izquierda chilena explica por qué para una gran mayoría del movimiento social, una de las consignas claves hasta el golpe de Estado, era «No a la guerra civil»… mientras ésta se encontraba en plena preparación.

A pesar de los esfuerzos de la Iglesia Católica para jugar el rol de intermediarios, en ese momento, los llamados de la UP y de Allende al «consenso nacional» para evitar un enfrentamiento sangriento se ven totalmente sobrepasados. Si la Democracia Cristiana, finalmente acepta el diálogo no lo hace más que para reconocer, a fines de julio, que toda conversación con el gobierno «llegó a un camino sin salida». En su intercambio epistolar con Allende, Patricio Aylwin precisa sus exigencias: prohibición de toda ocupación de fábricas y otras formas de acción directa, reducción y delimitación estricta del sector nacionalizado e integración reforzada de los militares en la administración del país. En su respuesta, el «compañero-presidente» reafirma su táctica político-institucional contenida en el programa de la UP: respeto de la autoridad gubernamental y del estado de derecho, rechazo de todo proceso insurreccional o anticonstitucional y la promesa de una delimitación clara del Área Social. No obstante, en esta misiva, el primer mandatario del país subraya su adhesión «al desarrollo del poder popular, vinculado al gobierno y sin producir antagonismos con el régimen institucional[9]». Pero, aunque importantes, los compromisos presidenciales

siguen siendo insuficientes. A lo que le teme la dirección de la DC es a la dinámica de la lucha de clases en curso, que ni la UP ni el gobierno parecen capaces de controlar totalmente[10]. Sintomáticamente, a inicios de agosto, la DC durante el último intercambio de cartas antes de la ruptura definitiva del diálogo, insiste sobre el peligro de la aparición del poder popular, «'poder de hecho' armado, manifiestamente inconstitucional[11]». Como lo veremos más adelante, esta presentación de un poder popular de tipo paramilitar es un elemento de la ofensiva ideológica de la oposición en la preparación del golpe de Estado.

El MIR, por su parte, desde el 29 de junio saca lecciones del intento de golpe y subraya la necesidad de lanzar «una gran contraofensiva revolucionaria y popular» para instalar una política de ruptura:

[…] crear y fortalecer el poder popular, creando los Comandos Comunales de Trabajadores en todas las comunas del país […]; luchar por la democratización de las Fuerzas Armadas y Carabineros y por la vigilancia y encarcelamiento de la oficialidad reaccionaria y golpista; […] impulsar de esta forma con más fuerza que nunca la lucha por sustituir el Parlamento burgués por la Asamblea del Pueblo y por imponer el establecimiento de un verdadero Gobierno de los Trabajadores[12].

Para el secretario general del MIR, el diálogo que el gobierno busca con la dirección de la DC debilita el proceso revolucionario. Ve en la respuesta de Allende, las premisas de la capitulación definitiva del gobierno frente a la clase patronal[13]. Aunque menos radicales, el PS y la Izquierda Cristiana son también muy críticos. Y es desde el sindicato Elecmetal que Carlos Altamirano elige pronunciarse, en un discurso que dirige a los cordones industriales el 13 de julio de 1973.

Carlos Altamirano (PS) pronuncia su discurso desde Elecmetal



Al lado de C. Altamirano (derecha), está sentado Armando Cruces, presidente del CI V. Mackenna

Para el secretario general del Partido Socialista, «el pueblo en overol y el pueblo uniformado forman uno solo», y la única forma de ganarle a la reacción es el poder popular:

los trabajadores de todo el país se han organizado en los Cordones Industriales, Comandos Comunales, Consejos Campesinos, Comités de defensa y vigilancia y otros organismos, que constituyen los gérmenes de un incipiente pero ya poderoso poder popular, y configuran una barricada inexpugnable ante cualquier tentativa insurreccional de la burguesía[14].

El tono de esta intervención es muy cercano al del MIR y se puede legítimamente cuestionar la responsabilidad política de tal lirismo romántico revolucionario, cuando el poder real de los CI sigue siendo muy limitado, sin perspectivas y desarmado, incapaz en esas condiciones de resistir seriamente cualquier nuevo intento de sublevación militar.

La reacción del poder popular

Uno de los primeros aspectos que llaman la atención cuando se realiza el balance de la intentona golpista del Tancazo, es la completa ausencia de reacción político-militar por parte del poder popular o de los partidos de izquierda. En efecto, durante las pocas horas de fuertes tensiones en que el Regimiento de Blindados nº 2 amenaza con ocupar el palacio presidencial, no se vislumbra ningún «poder popular armado» –fantaseado por la derecha– como tampoco ningún dispositivo de resistencia estructurado por parte de las organizaciones de izquierda. El coronel Souper pudo ocupar las calles de la capital con toda tranquilidad hasta que otros oficiales decidieran detenerlo. Esta ausencia casi

total de reacción, aunque hubiese sido dispersa, confirma la inexistencia de dispositivos político-militares masivos dispuestos a movilizarse en algunas horas. Esta lección es crucial para el futuro, y ni la derecha como tampoco los oficiales lo olvidarán. Así, el 29 de junio, en el curso de una reunión del alto mando castrense, el general Pinochet señala como uno de los elementos positivos del Tancazo el hecho de que «los extremistas han mostrado los dispositivos que tienen en el cordón central y exterior de la ciudad y las armas que poseen[15]». Cuando se aproxima el enfrentamiento, son los militares quienes aparecen como los dueños del juego político, y en particular los oficiales, tradicionalmente vinculados a la oligarquía chilena. Sin embargo, la investigación oral permite pensar que en el seno de los cordones industriales más organizados, particularmente el de Cerrillos, un plan de defensa armada fue deseado, incluso imaginado, por numerosos obreros. Por otra parte, sería completamente errado afirmar que no hubo reacción alguna del movimiento obrero frente al golpe. Muy por el contrario, la intentona golpista produce un profundo electrochoque en los sectores populares organizados, pero fundamentalmente en una base a la defensiva y desarmada.

El viernes 29 de junio, a las 9 de la mañana, los obreros de los cordones de Santiago comienzan a escuchar con estupor los anuncios radiales de un inminente peligro de golpe de Estado y luego –a lo lejos– el ruido de la metralla. Al mismo tiempo, la CUT publica un comunicado llamando a ocupar las fábricas, paralizar la producción y organizar los comités de defensa y vigilancia por sectores[16]. Lo mismo hacen los partidos de izquierda. Así, en su declaración pública, el PS llama –siguiendo las órdenes de Allende– a ocupar todas las industrias, pertenezcan al APS o al sector privado[17]. Las instrucciones del cordón Cerrillos también coinciden con las de la central sindical: un primer llamado es lanzado a las 9.25 y un segundo a las 11 horas[18].

Reunión del cordón Cerrillos el 29 de junio de 1973



Fuente: Temple, N° 6, agosto de 1973

Progresivamente, a nivel de todos los cordones, la resistencia se organiza. Los cinturones industriales de Santiago están en plena efervescencia, los locales de los sindicatos son el objeto de incesantes idas y venidas, las reuniones son permanentes, entrecortadas por el turno de las guardias y la toma de contacto con las otras fábricas, con la dirección de los partidos políticos, etc. En relación con el cordón Vicuña Mackenna, Luis Ahumada señala:

Los obreros se fueron a sus fábricas y se las tomaron todas. En ese momento ocurrió un nivel de comunicación que nunca habíamos tenido y nunca volvimos a tener. En esa coyuntura, estuvimos todas las fábricas comunicadas, todo el mundo alerta, todos atentos y esperando instrucciones[19].

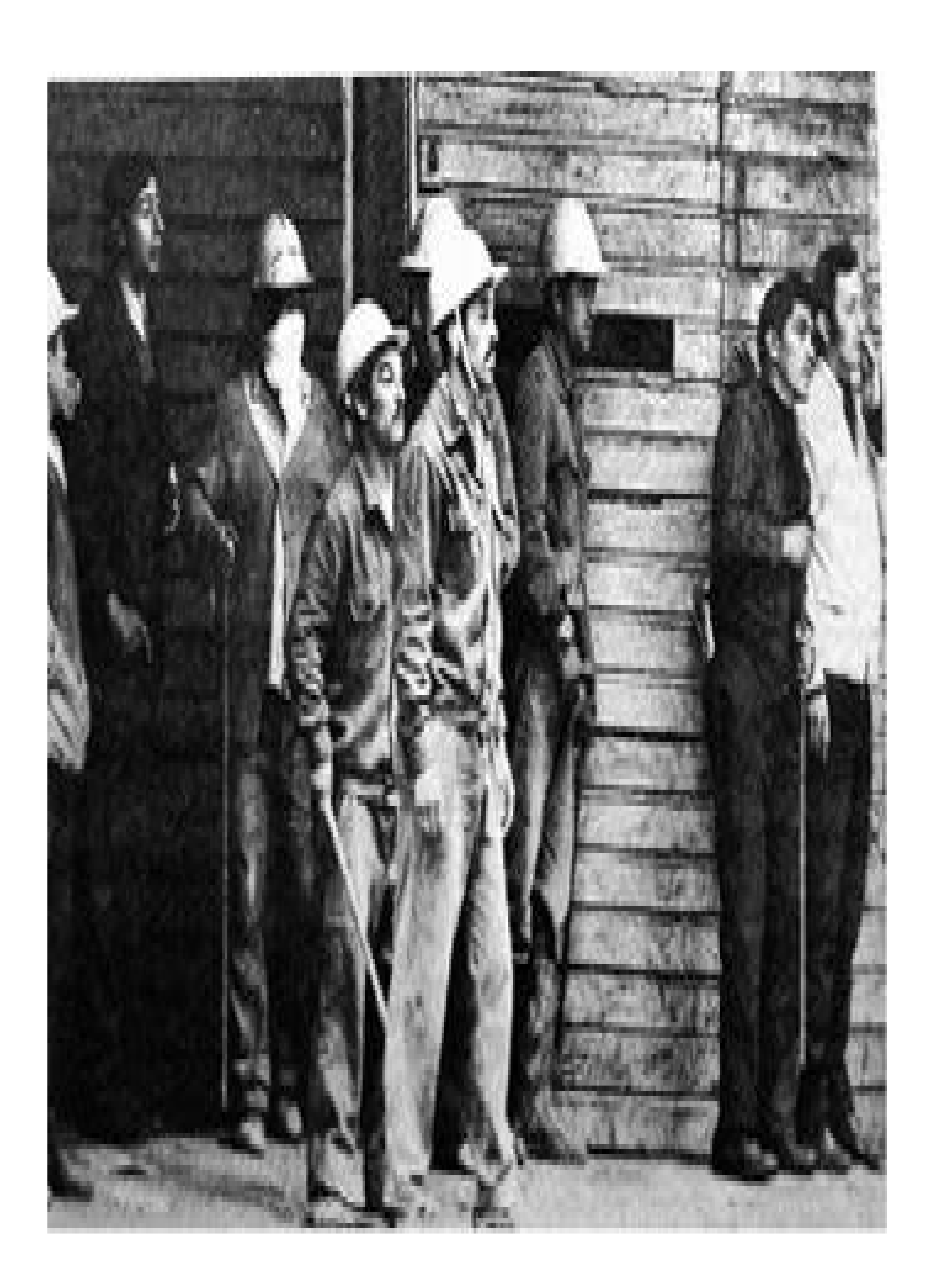
Según La Aurora de Chile, durante esa mañana el cordón Cerrillos logra convocar a delegados de 80 fábricas del sector[20]. Esta fuerte movilización también se da en provincia, como por ejemplo, en Valparaíso. Pierre Dupuy recuerda:

El trabajo se paraliza inmediatamente. Reunimos a los camaradas y les damos la consigna de ir a montar guardia en todos los lugares de trabajo. Corremos a la CUT. A todos los trabajadores se les da la orden de tomarse sus empresas. Volvemos a nuestros talleres e izamos la bandera en el techo […] Se organizan guardias nocturnas en todas las fábricas y refinerías para impedir los sabotajes y atentados[21].

En Arica, el CI de las industrias electrónicas se reactiva; en Concepción, se promueve la formación de los Comandos Comunales[22]. De hecho, las iniciativas de los trabajadores organizados se multiplican, para lo cual recurren a sus recientes experiencias, especialmente las de octubre de 1972. Algunos, en la urgencia, se preparan incluso para una eventual lucha armada: cascos, escudos artesanales, elementos para las barricadas y se hace acopio de todo tipo de

material que pueda servir de combustible. Pero principalmente es el «arma» de la toma la que nuevamente se encuentra al centro del repertorio de la acción colectiva. Asistimos a un verdadero desfile de ocupaciones de fábricas en todo el país[23].

Movilización obrera en los cordones durante el Tancazo



Fuente: El Mercurio, Santiago, 2 de julio de 1973

En Cobre Cerrillos (con más de 300 empleados), los trabajadores controlan la empresa, mantienen la producción y trabajan codo a codo con los ejecutivos, que no han objetado esta acción. En la empresa Lucchetti, después del voto de la asamblea y en respuesta al llamado de la CUT, 502 asalariados asumen el control de la fábrica[24]. Sin embargo, como en muchos otros casos, esta ocupación no se realiza sin que se produzcan enfrentamientos, incluso entre los mismos militantes de izquierda.

La empresa metalúrgica Alusa es tomada por 200 trabajadores, quienes mantienen la producción y el personal ejecutivo es expulsado de la fábrica. El dirigente sindical declara a El Mercurio que la toma responde a la convocatoria de la CUT, pero subraya que se trata de que «la empresa pase a poder de los trabajadores» y que, en ese sentido, todo llamado de la CUT a levantar la ocupación será rechazado[25]. Paralelamente, un grupo de obreros requisan –a veces con violencia– una decena de buses. Los reúnen en Fabrilana para luego usarlos para transportar a los trabajadores del CI hacia la concentración organizada enfrente del palacio presidencial. Como más tarde lo reconoce uno de los responsables del CI, la organización de los obreros se realiza «improvisando en muchos aspectos», aunque para este mismo dirigente, este tipo de experiencia deja «una enseñanza mayor a los trabajadores para el día en que tengamos que defender nuestro Gobierno con las armas en las manos[26]». A mediodía, la coyuntura se aclara y el fracaso del golpe de Estado del comandante Souper es evidente. A las tres de la tarde, con la presencia de numerosos delegados, el cordón Cerrillos se reúne en Fantuzzi[27], algunos obreros increpan duramente a sus dirigentes, denuncian la debilidad de la UP y reclaman armas para poder defenderse por sí mismos: «¡No queremos ir al centro con el pecho desnudo!». Rigoberto Quezada, administrador de la importante industria Sumar-Poliéster y militante socialista recuerda el malestar obrero: «En esa reunión que se hizo en la tarde del golpe, todos se fueron, todos los obreros reclamando, no quedaron satisfechos con la participación del gobierno[28]».

La dirección de los CI debe nuevamente justificar, ante los trabajadores más combativos, la táctica defendida por la UP y la necesidad de confiar en el

gobierno y en las Fuerzas Armadas «constitucionalistas». Finalmente, la tarde del 29 de junio, una inmensa masa llega al centro de Santiago. Durante la marcha que termina bajo los balcones de La Moneda, los trabajadores de los CI levantan orgullosamente sus banderas, se trata de una manifestación combativa. Entre todas las consignas, dos ideas vuelven una y otra vez: distribuir armas al pueblo y sobre todo el cierre del «congreso burgués!». Gran tribuno y político, Allende enfrenta los gritos con calma, y asumiendo el riesgo de causar la decepción de los manifestantes, rechaza cerrar el Congreso, anuncia que siempre respetará la Constitución y rinde un importante homenaje a la lealtad de las Fuerzas Armadas. Después de admitir la necesidad de un plebiscito a corto plazo para garantizar la evolución institucional del país, invita a sus partidarios a regresar a sus casas («únanse a sus mujeres y a sus hijos », les dice) y para que mañana puedan ir «a trabajar más, a producir más, a sacrificarse más por Chile[29]». A pesar de la desilusión, los CI demostraron durante esta importante prueba un gran avance en su capacidad de reacción colectiva. Asistimos a la consolidación de un nuevo sujeto popular, donde la participación y el poder local se ven reforzados. A nivel de la conciencia política, podemos hablar de un progreso significativo: miles de personas se mostraron dispuestas a defender su lugar de trabajo, aunque a menudo desorganizadamente y con poca preparación previa. Más que algunos hipotéticos comandos comunales, son los cordones industriales los que constituyen la vanguardia de este proceso. Aún cuando se mantienen sumisos a la orientación legalista de la UP, sin duda han adquirido un relativo margen de autonomía, como lo demuestran las grandes movilizaciones de julio de 1973.

El Partido Comunista y los cordones industriales en 1973

El cambio de táctica del Partido Comunista

Hemos explicado que hasta mediados de 1973, la actitud del Partido Comunista, aunque no se opone en sí a la idea del poder popular, busca promover formas que sean fundamentalmente útiles a la política gubernamental y que faciliten la «batalla de la producción». En ese sentido, los CI movilizados, es decir tal como

existen, son permanentemente criticados por esta colectividad política que, en lo esencial, los considera como una aventura izquierdista[30]. Pero, a pesar de ello, el intento de golpe de junio de 1973 ha permitido demostrar claramente que los Cordones Industriales ya se han constituido como un dato central del espacio del movimiento obrero. En esa fecha, los dirigentes del Cordón Cerrillos evalúan su capacidad de movilización a cerca de 10 mil trabajadores activos, representando a varias decenas de fábricas. Incluso si estas cifras son difícilmente verificables, es evidente que ni la dirección de la CUT como tampoco el PC pueden seguir negando o descalificando abiertamente los cordones industriales. Por lo demás, el mismo Salvador Allende ha reconocido, en varias oportunidades, su valor en tanto apoyo indispensable para el gobierno en los momentos más duros de las crisis políticas. Como hemos visto, durante el levantamiento militar del coronel Souper, la CUT se ve obligada a llamar a los cordones, e incluso envía delegados a varios de ellos[31]. Así, es en junio de 1973 que el PC incita oficialmente a sus militantes para que se integren a los CI. Su propuesta consiste en que se hagan parte de la CUT y que su orientación sea dada por la dirección de la central sindical, aunque reconociendo –de mala gana– que eventualmente podrían conservar una estructura propia. Para La Aurora de Chile, uno de los eventos más relevantes de los últimos días del mes de junio es, precisamente, «la decisión del Partido Comunista de participar activamente en los cordones industriales». El periódico subraya que este cambio de táctica, probablemente tiene como objetivo poder controlar mejor estos órganos de masas y someterlos a la CUT, pero que «no es sano que la reacción frente a ello sea la aprensión o la reticencia a enfrentar abiertamente sus posiciones. Ello significaría eludir una discusión presente en todos los procesos revolucionarios conocidos hasta ahora[32]».

Uno de los factores que explican este cambio de actitud de los dirigentes comunistas es el temor de ver a su base obrera alejarse de los preceptos de la revolución pacífica. Efectivamente y al igual que el conjunto del espectro político, los militantes comunistas viven un proceso de radicalización. Javier Bertín, militante del MIR, recuerda las conversaciones en las cuales algunos dirigentes sindicales comunistas, le confiesan sus dudas y las contradicciones internas que atraviesan la base del partido, especialmente en lo que se refiere a las evidentes limitaciones del programa de la UP[33]. Según Hernán Ortega, es después de octubre de 1972 que –progresivamente– el PC comienza a comprender que los CI pueden «constituirse en organizaciones capaces de defender al gobierno[34]». Hoy día, Mireya Baltra, exministra y dirigente comunista, admite el «retraso» de su partido para captar la dimensión esencial

del poder popular[35]. Guillermo Rodríguez por su parte, considera que numerosos militantes comunistas participan en las movilizaciones del cordón, a pesar de la opinión negativa de su partido[36]. Evidentemente, los deseos de integración formulados por el PC no dejan de provocar reacciones en el seno de los CI, considerando que el objetivo de los dirigentes comunistas es conquistar la dirección de esos turbulentos cordones, para luego someterlos a la conducción de la CUT, en el marco del programa de la UP. Para Luis Corvalán, el objetivo principal es evitar cualquier acción colectiva que pudiese transgredir «el Programa de la Unidad Popular en el trato con los pequeños y medianos propietarios de la ciudad y del campo, empujándolos a la oposición[37]. Finalmente, cuando la dirección comunista asume unánimemente la necesidad de participar en los CI, lo hace con el objetivo de intentar revertir su autonomía creciente así como para reducir el peso de las críticas hacia la CUT o de las vacilaciones del gobierno. A fines de julio, se desarrolla el pleno de la dirección del PC, donde Orlando Millas, ex ministro de Economía, entrega su informe sobre la situación del país. Según este último, uno de los caminos a seguir debe ser desde ahora el reforzamiento a nivel local de los «consejos de la CUT por cordón industrial […], la Unión de Juntas de Vecinos, la Unión de Centros de Madres, las JAP comunal y las demás entidades representativas». Se trata efectivamente de la revitalización territorial de la CUT gracias a los CI. Según el PC, toda medida no estructurada desde la central tendería a «dividir al pueblo, […] contraponer un poder paralelo al Gobierno Popular o […] desconocer las organizaciones democráticas[38]». La táctica comunista rápidamente se traduce en numerosas fricciones dentro de los cordones. El 23 de mayo de 1973, durante una reunión del Cordón Cerrillos, Hernán Ortega interviene para oponerse a todo intento de subordinación de los cordones a la CUT invocando la «diferencia que existe entre ambas organizaciones, de acuerdo a su origen y a las tareas que cumplen». Por su parte, Julio López –del Comité Central del PC– afirma que existe «un acuerdo de la UP, en el sentido de que los Cordones Industriales se mantendrían como organismos dependientes de la CUT, subordinados a sus estatutos[39]». Así, a pesar de algunas declaraciones unitarias[40], los intentos de inserción del Partido Comunista provocan una competencia política feroz entre los diferentes componentes de la izquierda en los cordones industriales, y la autonomía relativa de los cordones industriales se ve amenazada por esta voluntad de subordinarlos forzosamente a la CUT. Los cordones industriales se constituyen entonces en sujeto de disputa y división del campo militante[41].

Las luchas por el control de los cordones industriales

Después del Tancazo, el consejo directivo de la CUT emite una declaración pública donde manifiesta su voluntad de superar sus propias deficiencias intentando buscar integrar en su órbita la fuerza potencial de los cordones industriales[42]. El comunicado destaca que la movilización del 29 de junio «se ha realizado dando especial énfasis a la organización sindical en cada zona o Cordón Industrial, y para ello la CUT ha constituido equipos de dirección en el que se integran consejeros nacionales y delegados de la dirección máxima en cada cordón». Se anuncia que «la CUT ha sido partidaria, desde hace mucho tiempo, de renovar su estructura orgánica, de tal manera que haya una directiva de la CUT operativa en cada Cordón Industrial. Es decir, entiende a esas organizaciones como directivas de base integradas a la CUT[43]». Algunos militantes se sorprenden. Un sindicalista del MAPU recuerda con resentimiento: «No está tan lejos el día (sólo antes de los sucesos del 29 de junio recién pasado) en que hablar de cordones industriales involucraba para algunos poco menos que una invocación a Satanás». Para estos sindicalistas, una coordinación, pero sin integración entre la CUT y los cordones, podría ser considerada como una solución más viable[44]. De hecho, desde 1972, varios dirigentes comunistas y delegados de la CUT han multiplicado las iniciativas –no siempre fraternales– para impedir el desarrollo de los CI. Edmundo Jiles recuerda que en los inicios del cordón Cerrillos, los sindicatos bajo la conducción del PC obstruyen voluntariamente las comunicaciones al interior del CI. Según Jiles, durante cerca de dos meses los militantes comunistas encargados en su sector de hacer circular la información, boicotean los acuerdos tomados con otros sindicalistas. Después de una investigación que se realiza en cada uno de los sindicatos, es toda la arquitectura de comunicaciones del cordón la que debe ser reorganizada para evitar que caiga en manos del PC, todavía contraria a este tipo de coordinación[45]. Durante los últimos meses de la UP, el PC comprendiendo la dificultad que tendría para conquistar –en un corto lapso de tiempo– las direcciones de los CI, se lanza en una empresa aún más aventurera: intentar crear cordones paralelos que estarían directamente bajo su influencia. Así aparece, en torno a la industria Textil Progreso, y sin gran éxito, un CI fantasma y paralelo al Cordón Vicuña Mackenna. Esta iniciativa es denunciada vigorosamente por la dirección del cordón como una «maniobra divisionista[46]». En su número 9, el periódico Tarea Urgente, presenta en portada dentro de sus prioridades «vigilar la creación de cordones paralelos»:

Los trabajadores no aceptaremos ahora que los cordones están reconocidos por la clase, por las direcciones políticas y por los momios, nos vengan a imponer criterios o políticas divorciadas de nuestras prácticas y de nuestra realidad[47].

En una entrevista con la periodista Faride Zerán, el sindicalista comunista Galvarino Escorza, encargado de esta azarosa operación, confirma la existencia de un intento de CI paralelo en torno a Textil Progreso y fracaso posterior ante la falta de trabajadores dispuestos a seguirlos en esta vía[48]. Por otra parte, según Carlos Valle, asalariado de la empresa Quimantú y delegado del cordón Mapocho-Cordillera, en mayo de 1973, la CUT designa algunos dirigentes sindicales para que formen un cordón paralelo en el mismo sector. Uno de esos sindicalistas designados por la CUT es Miguel Morales, también trabajador de Quimantú y militante comunista, según el cual esta iniciativa estaría fundamentada por el hecho de que los cordones existentes no serían suficientemente «disciplinados[49]».

Inesperadamente, esta idea de crear cordones «fantasmas» es cortada de raíz por la intentona de golpe de Estado de junio de 1973. La inminente amenaza obliga a la CUT a apoyarse en los CI ya estructurados y que poseen cierta legitimidad. Pero estas acciones permanecen en los espíritus y fomentan las divisiones. Hoy día, Hernán Ortega recuerda que «intentaron hacer cordones del PC pero no les resultó, sólo lograron hacer pequeñas expresiones, pero no lograron consolidarlas. Querían crear una suerte de cordones industriales dependientes de la CUT, pero la verdad es que el dinamismo era otro[50]». Como lo subraya con justeza Hugo Cancino en su balance: «El PC persistió hasta el final en su actitud tradicional de desconfianza hacia los movimientos populares de base, que excedían su control, esforzándose por integrarlos al cauce del movimiento sindical[51]». Frente a las dificultades para canalizar los embriones de poder popular, las prioridades del principal partido obrero chileno se mantienen fuera del desarrollo de los cordones y las grandes movilizaciones de julio no hacen más que confirmar esta desconfianza. Algunos documentos redactados por dirigentes comunistas, después del golpe de Estado, permiten constatar que todo un sector del partido está dispuesto a crucificar un movimiento que considera de «ultraizquierda» y «trotskista», «lanzando un asalto que apuntaba a dividir la UP, creando un ‘poder popular’ que se enfrentaba al gobierno por sus supuestas posiciones de ‘izquierda’[52]». Sobre estas bases fuertemente marcadas por las concepciones estalinistas, las relaciones entre la dirección del PC y los cordones

industriales sólo pueden ser tumultuosas, frenando, por lo mismo, su posible conducción bajo la dirección de la CUT pero también su capacidad de unificar al conjunto del movimiento obrero, bajo la bandera de un poder popular constituyente.

Últimas acciones de los cordones movilizados y gobierno cívico-militar

El intento de creación de nuevos cordones para sí

Sin lugar a dudas, el Tancazo precipitó el golpe de Estado profundizando la crisis política del país y permitiendo a las Fuerzas Armadas medir las resistencias. Tuvo además un efecto de electrochoque, no sólo durante la jornada del 29 de junio, sino también más adelante. Como lo señala El Mercurio, varios de los cordones industriales de Santiago sólo se crean realmente (o se reactivan) después de junio de 1973, como es el caso, en particular, de los cordones Santiago Centro, Macul y Manquehue. Así, el cordón Santiago Centro realiza su primera gran reunión en el edificio Gabriela Mistral, en pleno centro de la capital, el 25 de julio de 1973. Según el periódico, este CI «extenderá su radio de acción hasta plaza Italia, San Martín, Mapocho y Alameda[53]». La originalidad de este cordón es justamente su carácter mayoritariamente no industrial, prueba de que las reivindicaciones inicialmente levantadas por una fracción de la clase obrera ganan terreno en ciertas minorías activas y politizadas de las capas medias. Por otra parte, el CI Santiago Centro posee una ventaja estratégica importante: ha sido fundado por militantes de la UP que trabajan en la administración y los ministerios, y que tienen, por lo tanto, acceso a numerosa información. Se trata de militantes que están en el corazón de la máquina estatal. Este aspecto podría haber facilitado una mejor centralización de los CI y haberles entregado un valioso apoyo en caso de conflicto. Tal dimensión, por cierto, no pasó desapercibida y militantes anuncian orgullosamente su «gran importancia desde el punto de vista técnico-militar para el apoyo logístico de las acciones de defensa que realizarán los otros cordones industriales, especialmente

para proporcionar información, medios materiales, humanos y financieros[54]». En ese sentido, es interesante subrayar que los servicios de inteligencia de los militares aparentemente le otorgaron una trascendencia desproporcionada a este CI, o más bien intentaron hacer creer que la tenía[55]. Sin embargo, si se juzga a partir de los archivos que hemos podido consultar, este CI dirigido por el socialista Luis Inostroza, a pesar de sus grandes ambiciones, habría tenido poca influencia.

En Santiago, aparecen otras coordinaciones. Es el caso del cordón de la comuna de San Miguel, llamado cordón Santa Rosa-Gran Avenida y que pretende constituirse en el «primer paso para obtener el Poder Obrero en la Comuna[56]». Este CI que surgió la víspera del Tancazo, será frenado por la evidente mala voluntad del Partido Comunista que en esta zona controla grandes empresas como Madeco y Mademsa[57]. En efecto, las divergencias entre este partido, por un lado, y el PS y el MIR, por el otro, son enormes y sólo la inminencia del golpe de Estado permite la formación de una dirección provisoria unitaria[58], aunque ésta no tendrá larga vida, ya que rápidamente los comunistas se retiran de la dirección del cordón. Sin embargo, agrega un militante, «las bases del Partido Comunista están sobrepasando a su Directiva y con ellas no tenemos problemas y trabajamos unitariamente[59]». Después de la movilización de fines de junio, este Cordón se fija como tarea inmediata mejorar las medidas de defensa de la zona, específicamente con la creación de brigadas de vigilancia. Por supuesto, las provincias no se quedan atrás. En Concepción y Talcahuano, nace un nuevo cordón industrial el 11 de julio de 1973. Progresivamente, Talcahuano se va rodeando de varias coordinaciones: cordón El Andalién, cordón Ralco, cordón Penco-Lirquén[60]. Por su parte, el CI Osorno también se reafirma por efecto del Tancazo. Este robustecimiento permite que en las siguientes semanas se organice el abastecimiento y la vigilancia de las fábricas. Concretamente, este CI implementa formas de distribución directa de harina y leña gracias a los contactos con un molino y algunos sectores rurales, especialmente mapuche. Ahora bien, si se toma en consideración el testimonio de Héctor Vega y las cartas que hace llegar a periódicos santiaguinos, estas acciones colectivas son muy mal recibidas por las autoridades locales, especialmente por el «compañero Intendente», militante de la UP[61].

A través de estos ejemplos, se ve claramente que existe la voluntad –aunque de un modo difuso– en el seno del movimiento obrero, de seguir el ejemplo de Cerrillos y Vicuña Mackenna. Pero estos intentos ocurren tardíamente frente a una coyuntura cada vez más complicada y a veces sólo conciernen a algunas

centenas de asalariados realmente activos en los CI. Sin embargo, la existencia de estos cordones para sí, «en construcción» junto a CI que, a pesar de todo, están más estructurados, muestran tendencias claras en curso. Un sentimiento de pertenencia a un todo social y a una conciencia colectiva explican el posicionamiento radical de muchos trabajadores, incluidos democratacristianos, como el presidente DC del sindicato de una empresa de confección (El As), miembro del CI O'Higgins, quien después de haber participado en la toma de fines de junio de 1973, rechaza categóricamente los llamados de su partido y de la CUT, solicitando devolver la fábrica[62]. También es el caso del obrero DC que respondiendo a la revista Chile Hoy sobre la razón de su apoyo al cordón, afirma «estamos juntos por una razón muy sencilla, debido a la explotación que tenemos nosotros[63]». Más allá de los intentos de conducción política o de los múltiples sectarismos presentes en el espacio del movimiento obrero, las experiencias de movilización adquiridas hacen que la clase obrera gane en autonomía. Dentro de la multidimensionalidad del universo protestatario, los trabajadores se construyen en tanto clase movilizada y, en consecuencia, sus luchas son un factor determinante del conjunto del campo político. El pueblo reclama y el ejecutivo dirigido por Salvador Allende tiene mucha dificultad para montarse en un movimiento social cada vez menos dócil.

El «Cordonazo» de julio de 1973

Hemos visto cómo la resistencia al Tancazo se tradujo en un movimiento de ocupación masiva de cientos de fábricas y lugares de trabajo. Una vez estabilizada la situación –aunque muy frágilmente– y con el objeto de dar pruebas de buena voluntad a la DC, el gobierno y la CUT anuncian que probablemente será necesario devolver a sus propietarios algunas de las fábricas tomadas. Esta decisión aumenta la tensión entre el gobierno y la CUT, por un lado, y los cordones industriales por el otro. Inicialmente, la situación de las fábricas ocupadas debía ser discutida por una comisión tripartita integrada por la CUT, el Comité económico del Ministerio de Economía y los representantes de los CI. No es fortuito que finalmente los cordones sean excluidos de esta comisión[64]. Al mismo tiempo, como lo escribe Jaime Ruiz Tagle en la revista jesuita Mensaje, tanto la CUT como Allende están conscientes de que hay que evitar, a todo precio, el enfrentamiento:

Los trabajadores de los «cordones» parecen estar decididos a que ninguna empresa sea devuelta, y ya hemos visto que la CUT ya no controla esas bases. El gobierno confía en que el dinamismo de los «cordones» tienda a apaciguarse y a estructurarse, ya que la situación actual crea serios problemas, no sólo políticos, sino también productivos. Por lo demás, los dirigentes de la UP piensan que una política rígida frente a los cordones podría endurecerlos[65] [...].

Efectivamente, el gobierno se encuentra entre dos fuegos y su rol de árbitro es cada vez más el de un equilibrista sobre la cuerda floja. Allende decide que sólo será posible pasar al Área Social las 104 empresas incluidas en el proyecto de ley enviado al Parlamento antes del Tancazo (proyecto de ley cuya aplicación es rechazada indefinidamente hasta el golpe de Estado[66]). La UP parece no medir completamente el grado de movilización que momentáneamente han alcanzado los CI. «Los trabajadores deben comprender que es inconveniente estatizar por estatizar», declara entonces José Cademartori, dirigente del PC y ministro de Economía.

Cumpliendo la orden de la CUT, el 29 de junio muchos trabajadores se tomaron empresas pequeñas, incluso talleres. No creemos que sea conveniente pasar al Área Social esas pequeñas unidades, en muchas de las cuales ya la situación se normalizó automáticamente[67].

Durante una conferencia de prensa, los dirigentes de los ocho cordones industriales de la capital expresan su desconcierto. Sergio Chávez, del cordón O'Higgins, señala:

Frente a las empresas que están tomadas se han dado versiones que no compartimos. Desde el 29 se reconoció a los cordones como germen de Poder popular. Ahora no se ha tomado la opinión de los cordones, por lo tanto creemos que somos nosotros los que tenemos que decidir si devolvemos o no las industrias tomadas[68].

Después del plan Prats-Millas de enero, la consigna que nuevamente recorre los CI es «Las industrias tomadas no serán devueltas![69]». Armando Cruces,

presidente del cordón Vicuña Mackenna arenga así a los trabajadores de las fábricas ocupadas: «Compañeros, Uds. cuentan con todo nuestro apoyo. […] Todas las industrias del Cordón Vicuña Mackenna son bienvenidas y las defenderemos hasta con nuestra sangre si es preciso[70]». Este mesianismo obrerista entra en conjunción con la subjetividad de un orgullo reencontrado por miles de trabajadores. Pero el gobierno no lo comprende así y confía que el paso del tiempo calme el entusiasmo militante: veinte días después del golpe de Estado fallido, sólo se ha regularizado la situación de algunas pocas empresas, mientras el resto permanece en una situación expectante y difícilmente sostenible. El 18 de julio en la tarde, los dirigentes de los cordones O'Higgins, Cerrillos, Santiago Centro, Mapocho-Cordillera y Vicuña Mackenna realizan una larga asamblea. El ambiente general, sombrío, refleja el temor de que los problemas de cada empresa se mantengan indefinidamente, mientras la CUT y el PC se muestren tan poco entusiastas en apoyarlos[71]. Al día siguiente, los representantes de Isesa, Cristalerías, Toro, Artela y otras empresas se reúnen con funcionarios para reclamar la estatización, y es bajo presión que el ejecutivo –una vez más– responde positivamente. En la fábrica Cintac, este balance positivo de la movilización, se instala como el ejemplo a seguir[72]. El mismo día, el periódico del PC, El Siglo, publica una declaración firmada por la dirección de la CUT, que se opone a la persistencia de las acciones colectivas iniciadas por los CI: «La CUT rechaza, además, explícitamente el anunciado intento de provocar un paro con tomas en algunas fábricas, pues éste no obedece a ningún acuerdo actual emanado de nuestra organización[73]». La declaración, además, condena los llamados que realiza el CI Cerrillos a la coordinación provincial de los cordones industriales.

Sin embargo, este tipo de desaprobación ex cátedra no parece tener mucho efecto sobre aquellos que, en el fondo, consideran un fracaso rotundo los intentos de diálogo con la oposición o el proyecto de devolución de fábricas. Como lo estuvieron frente al plan Prats-Millas, los CI están en pie de guerra frente al gobierno. Es el caso del cordón Matucana-Mapocho, recientemente constituido en torno a la Fundición Libertad y que se implanta en una zona que cuenta con 58 industrias y más de 20 mil asalariados[74]. En julio y con la participación activa de obreros democratacristianos, esta coordinación se moviliza para exigir la estatización de las fábricas Chiteco, Caffarena y Cummins Diesel, la que finalmente es estatizada en los días siguientes[75]. Otro ejemplo es el del cordón Santiago Centro, el que se subleva en contra de la detención del interventor de un banco del centro de la ciudad y solidariza con sus trabajadores en huelga. En una nota que se hizo pública, el CI caracteriza esta detención como la prueba de

la que la justicia de clase se burla de los trabajadores[76]. A pesar de las invitaciones a la calma y los gestos de buena voluntad del gobierno, todo Santiago parece nuevamente en ebullición. Pablo Muñoz, militante socialista, recuerda cómo el ejecutivo es llevado a superar sus propias limitaciones, como sucede con Lucchetti, importante empresa alimentaria que inicialmente no estaba considerada en la lista de estatizaciones del gobierno:

Después del 29 de junio de 1973, se intervinieron muchas fábricas, entre ellas Lucchetti; muchas de ellas fueron tomadas por los trabajadores. El 29, en alerta de la asonada militar y, después del 29, Lucchetti no se devolvió a su dueño sino que se intervino. Y Lucchetti participaba desde mucho antes en el cordón[77].

Pablo Muñoz de 24 años, fue propuesto como interventor por el CI y confirmado por Allende[78].

Si la UP responde positivamente frente algunas reivindicaciones, también busca temporizar y negociar, al mismo tiempo que la oposición y los empresarios vociferan en contra de la dictadura marxista. La mayor parte de la izquierda y el gobierno rechazan las consignas rupturistas del poder popular y buscan entregarle algunas monedas de cambio a una Democracia Cristiana que hábilmente hace subir las apuestas, antes de romper el diálogo. Una buena ilustración de las formas de lucha social que llevan a cabo los CI es la que tiene lugar el 19 de julio en el cordón Vicuña Mackenna. Después de la gran movilización del cordón Cerrillos, es este cordón vecino el que toma el relevo[79]. Durante la mañana, los dirigentes recorren los cuatro sectores del CI y van informando a las empresas (alrededor de 90, según De Frente) con el objetivo de presionar para que las fábricas ocupadas no sean devueltas y, al mismo tiempo, exigir la expropiación de la Cenadi. Finalmente, varios miles de personas salen a la calle (quizás cuatro mil). A las 11 de la mañana, la zona controlada por el cordón es inmensa (desde Avda. Matta hasta Textil Progreso) y rápidamente protegida por cinco barricadas. Por un instante, los militantes del poder popular pueden proclamar que el CI Vicuña Mackenna es «territorio libre de los trabajadores». A mediodía, el Estado muestra su cara represiva a los manifestantes y Carabineros interviene, en tanto el ministro de Economía, José Cademartori (PC), desestima presentarse en el cordón. Hacia las 18.30 horas, comienza la represión. El balance es duro: varias personas resultan heridas y un militante muere[80].

De hecho, estas intensas jornadas de movilización de julio son las últimas acciones de envergadura realizadas por los Cordones y aunque posteriormente ocurrieron varias escaramuzas importantes, no tuvieron esta combatividad ni carácter masivo. A esta fecha, las situaciones más conflictivas se reducen a un grupo de alrededor de 30-40 empresas: una gota de agua en el océano de las 34 mil empresas del país, como lo subraya rápidamente Luis Figueroa, en el pleno de la CUT[81]. Incluso si una mayoría del movimiento obrero permanece sólido detrás de la UP y su gobierno, el divorcio entre una fracción de la sociedad civil y el campo institucional es patente. Seguramente,

la inactividad o el apoyo del resto de la izquierda frente a la política de restitución de las empresas ocupadas el 29 de junio marca el inicio del aislamiento de los cordones en relación a la gran masa de la izquierda[82].

Allende más que apoyarse en esta «revolución desde abajo» mal definida, decide apostar sus últimas posibilidades políticas en un gabinete que le otorga gran relevancia a los militares: es el gabinete llamado de «seguridad nacional».

Gobierno cívico-militar y parálisis de la izquierda

El sexto cambio ministerial de la UP y la constitución oficial de un gabinete cívico-militar el 9 de agosto de 1973, permite la irrupción de los más importantes responsables militares del país en el primer plano político. Estos generales son escogidos en las diferentes ramas de las Fuerzas Armadas y ubicados en puestos clave: Defensa (comandante en jefe del Ejército, general Carlos Prats); Economía (comandante en jefe de la Armada, general Raúl Montero); Obras Públicas (comandante en jefe de la Fuerza Aérea, general César Ruiz Danyau); Tierras y Colonización (director general de Carabineros, General José María Sepúlveda). Allende opta por poner al «pueblo de izquierda» y sobre todo a sus partidarios más radicales, decididamente hostiles a la participación de militares en el gobierno, ante el hecho consumado. Desde hace ya varias semanas se suceden en todo el país manifestaciones en las que se denuncia la actitud abiertamente represiva en contra de las fábricas movilizadas por parte de

las Fuerzas Armadas, las que se respaldan en la aplicación cínica y brutal de la Ley de control de armas (ver la parte IV, capítulo trece). Para Allende, este gabinete debería contribuir a calmar el enfrentamiento de clase: «no habrá en este país ni golpe de Estado, ni guerra civil porque la inmensa mayoría de los chilenos se opone patrióticamente a estas insensateces, conscientes de la responsabilidad histórica que todos tenemos[83]». Sin embargo, si la apuesta del «compañero presidente» es realizar un último repliegue táctico, no ofrece muchas perspectivas a las fuerzas revolucionarias. Al contrario, parecer darles la razón a los sectores que empujan abiertamente a los militares a intervenir y refuerza lo que podríamos llamar «la mano derecha del Estado» (parafraseando a Pierre Bourdieu[84]), es decir todo en lo que es el garante del orden social y el eventual adversario de quienes lo impugnarían.

Armando Cruces sin rodeos expresa:

Para los dirigentes del cordón, y todos los trabajadores, este gabinete fue mirado como una traición a la clase obrera, porque demuestra que el gobierno sigue vacilando y no confía en la clase obrera. Los militares en el gobierno, igual que en octubre, son una garantía para los patrones[85].

Otros dirigentes de los CI son mucho más moderados, subrayando con ello la falta de coherencia política dentro de la dirección PS de los cordones. Así, Víctor Muñoz (CI San Joaquín) declara, a título personal, que «sin entrar a justificar plenamente el gabinete, consideramos que es un paso táctico que se da en la perspectiva de acumulación de fuerzas que permita responder mañana en condiciones mejores […] a la reacción[86]». El 9 de agosto de 1973, los cordones industriales se manifiestan durante varias horas en el centro de Santiago bajo las consignas de «poder popular», pero es el desconcierto el que gana terreno. Desconcierto que finalmente es el reflejo de la confusión que reina en la dirección de los partidos de una izquierda más dividida que nunca. En efecto, desde fines de julio, Allende y el PC multiplican las declaraciones honrando el constitucionalismo de los militares, por un lado y, denunciando el izquierdismo de los activistas del poder popular, por el otro. Ya a fines de julio, durante el pleno de la CUT, el presidente de la República ha anunciado que las Fuerzas Armadas tienen un rol esencial que jugar en el desarrollo del país y critica fuertemente a los «ultras de derecha» pero también a los «seudorrevolucionarios de izquierda», «infiltrados» en las filas del pueblo. Y ¿quiénes son ellos, según el

primer mandatario? Los que alimentan el caos con «las tomas de caminos, en donde a veces, en la primera fila, están hombres de izquierda equivocados y detrasito (sic) militantes de la oposición que los utilizan[87]». Los cordones de Santiago son los directamente aludidos.

Allende en el pleno de la CUT, con Luis Figueroa (presidente de la CUT)

y Alejandro Rojas (vice-presidente)



Fuente: Clarín, 25 de julio de 1973.

En el mismo orden de ideas, durante la sesión plenaria de la dirección del PC de fines de julio, Orlando Millas afirma que «seguir el camino antipopular de los ultraizquierdistas, es hacerle el juego a los derechistas», «izquierdistas» que son identificados como militantes del Frente de Trabajadores Revolucionarios (FTR), sobre quienes sin dudar sugiere podrían «encubrir un disfraz de la CIA[88]». Este tipo de argumentación irracional y sectaria se multiplica durante los últimos debates sobre el poder popular que se realizan durante el mes de agosto. Si para el PC, una parte del PS y el MAPU Obrero-Campesino (dirigido por Jaime Gazmuri), el gabinete cívico-militar es lo correcto[89], no es la opinión del conjunto de la UP. Para Altamirano, el gobierno y la izquierda han cometido graves errores y no han sabido apoyarse en las organizaciones surgidas desde las bases. En un discurso radiodifundido desde el sindicato Cobre Cerrillos, el 14 de agosto, reconoce la «falta de audacia para reestructurar un aparato estatal que la burguesía creó en función de sus intereses de clase». Según Altamirano, la única solución sería

que la Unidad Popular y el gobierno sitúen en el centro de su atención, en cada iniciativa y en cada acción, el desarrollo y fortalecimiento del poder popular, y la instauración de un «nuevo Estado, donde los trabajadores y el pueblo tengan el ejercicio real del poder», como lo señala textualmente el programa de la Unidad Popular[90].

Y agrega, en un tono mesiánico «hemos despertado a un pueblo y lo hemos echado a andar, y ‘nada ni nadie podrá detener su marcha de gigante’[91]».

La condena del MIR es aún más dura: el gabinete cívico-militar sería el de «la capitulación» ya que la UP no habría hecho más que tender al «fortalecimiento del orden burgués y patronal, renunciando así al afianzamiento del gobierno mediante el aumento de la autoridad de la clase obrera y el pueblo». La organización de la bandera rojinegra predice las consecuencias: «división del pueblo y la izquierda, la confusión y desconcierto de las masas[92]». Las contradicciones entre los diferentes partidos de izquierda se acentúan hasta la

ruptura definitiva durante el mes de agosto, alimentando aún más la confusión en los militantes de base. El episodio de los marinos de izquierda confirma el grado de parálisis al cual llegó la UP, sin que ninguna organización parezca capaz de revertir la tendencia. En efecto, a inicios de agosto, los servicios de inteligencia de la Armada detienen –ante la sorpresa general– a marinos y trabajadores de astilleros y maestranzas de los puertos de Valparaíso y Talcahuano (Asmar), bajo el pretexto de que habrían organizado células militantes al interior de las Fuerzas Armadas[93]. Un centenar de personas son detenidas e incluso algunas torturadas, mientras que el día 24, el general José Toribio Merino (futuro miembro de la Junta Militar) exige la detención de los dirigentes de izquierda Oscar Garretón (MAPU), Carlos Altamirano (PS) y Miguel Enríquez (MIR) en tanto autores intelectuales de un trabajo de conspiración en el seno de la Armada. La carta pública enviada por los marinos a Allende explica, sin embargo, que no hay nada de ello y que han actuado con el único objeto de denunciar, con pruebas y nombres de oficiales como sustento, los preparativos de un golpe de Estado en Valparaíso[94]. Frente a hechos tan graves, el ejecutivo no se atreve a tomar una decisión política de envergadura y anuncia que se somete a la decisión de la justicia militar… Trabajando junto a los generales-ministros, la UP, con el supuesto objeto de «impedir el enfrentamiento entre chilenos[95]», rechaza, en los hechos, declararse solidaria de los marinos torturados. Allende, en nombre del «respeto al Estado de derecho» y de la unidad de las instituciones militares, imposibilita cualquier alianza entre la izquierda y los soldados o suboficiales que aún le son leales. Repitiendo «una vez más, se dan la mano los extremistas de izquierda con los de derecha», autoriza la represión y aplicación de la Ley de seguridad interior en contra de los marinos[96].

En esas condiciones, el camino parece abierto para el golpe de Estado y el tiempo histórico se acelera en ese sentido, mientras que las huelgas de los camioneros y de múltiples otras corporaciones están en su apogeo. El 17 de agosto, el general Ruiz Danyau renuncia a su cargo en el gobierno y a sus funciones como comandante en jefe de la Fuerza Aérea, creando gran expectación, ya que, según el MIR, éste estaría involucrado en la organización de un golpe de Estado militar. Ruiz Danyau es reemplazado por el general Gustavo Leigh, futuro miembro de la Junta Militar. El 25 del mismo mes, es el general Prats, uno de los apoyos fundamentales de Allende, quien entrega su carta de renuncia, temiendo que su presencia en el seno del gobierno sea un factor «de quiebre de la disciplina institucional y de dislocación del Estado de derecho[97]». En su remplazo en la Comandancia del Ejército, el presidente de la República designa al general Pinochet, el que es presentado por el mismo Prats

como un militar leal…

1 Joxe, Alain, «L'armée chilienne et les avatars de la transition», Les Temps Modernes, nº 323, París, junio de 1973.

2 Prats, Carlos, Memorias: testimonio de un soldado, op. cit., p. 219.

3 Citado por Vitale, Luis, «El gobierno de Salvador Allende». En Para recuperar la memoria histórica, op. cit., p. 219.

4 No podemos aquí detallar esta dimensión esencial de la historia chilena. Para acceder a los numerosos documentos secretos desclasificados sobre la intervención de Washington, se puede consultar el sitio del National Security Archive bajo la dirección de Peter Kornbluh: [www.gwu.edu/~nsarchiv/latin_america/chile.htm]. Ver también, Kornbluh, Peter, The Pinochet File. A declassified dossier on atrocity and accountability, op. cit.

5 Citado en: Breve historia de la Unidad Popular. Documento de «El Mercurio», El Mercurio, Santiago, mayo de 1974, p. 181.

6 Ver su relato en Prats, Carlos, Memorias: testimonio de un soldado, op. cit., pp. 417-426.

7 Pinochet, Augusto, El día decisivo, Santiago, Andrés Bello, 1980.

8 El Siglo, 29 de junio de 1973. Citado por Vitale, Luis, Para recuperar la memoria histórica, op. cit., p. 223.

9 Allende, Salvador; Aylwin, Patricio, «Las cartas del diálogo entre el gobierno y la Democracia Cristiana», 31 de julio y 1 de agosto de 1973. En: Farías, Víctor, op. cit., t.VIII, pp. 4842-4849.

10 Ver sobre este tema, las reflexiones de Touraine, Alain, Vie et mort du Chili populaire, journal sociologique, París, Le Seuil, 1973.

11 Allende, Salvador; Aylwin, Patricio, «Las cartas del diálogo entre el gobierno y la Democracia Cristiana». En: Farías, Víctor, op. cit.

12 Secretariado General del MIR, «Declaración», 29 de junio de 1973. En: Farías, Víctor, op. cit., t.VII, pp. 4777-4780.

13 MIR, «A pesar de la capitulación, el pueblo seguirá luchando», El Rebelde, 13 de agosto de 1973.

14 Altamirano, Carlos, «Nadie puede negarle al pueblo el derecho a su propia defensa», discurso pronunciado el 13 de julio de 1973 en el sindicato Elecmetal (La Nación, 14 de julio de 1973).

15 Pinochet, Augusto, El día decisivo, op. cit., p. 99.

16 CUT, «Orden del día del Comité directivo de la CUT», Santiago, 29 de junio de 1973, Punto Final, 17 de julio de 1973.

17 PS, «Orden del día del Partido Socialista», Santiago, 29 de junio de 1973, La Aurora de Chile, edición especial, junio de 1973 y Briones, A., «Instructiva», 2 de julio de 1973, La Prensa, 6 de julio de 1973.

18 Cordón Cerrillos, «Comunicado del Cordón Cerrillos», 29 de junio de 1973, Chile Hoy, 1 de julio de 1973.

19 Entrevista realizada en La Serena, 24 de junio de 2002.

20 La Aurora de Chile, 26 de julio de 1973.

21 Dupuy, Pierre, Chili 1967-1973: témoignage d’un prêtre ouvrier, París, L’Harmattan, 2000, p. 127.

22 Chile Hoy, 1 de julio de 1973.

23 Más de 400 ocupaciones según la prensa de oposición (La Prensa, 9 de julio de 1973) y 520 según un periódico del MAPU (De Frente, 20 de julio de 1973).

24 A pesar de su importancia económica, Lucchetti no hace parte de la lista de empresas a estatizar del gobierno.

25 El Mercurio, Santiago, 5 de julio de 1973.

26 La Aurora de Chile, 5 de julio de 1973.

27 De Frente, 20 de julio de 1973.

28 Testimonio de Rigoberto Quezada, citado por Silva, Miguel, Los Cordones Industriales y el socialismo desde abajo, op. cit.

29 Allende, Salvador, «Discurso al pueblo del 29 de junio de 1973», 30 de junio de 1973. En: Farías, Víctor, op. cit., t.VIII, pp. 4771-4776.

30 Así lo deja ver, la entrevista a Mireya Baltra, quien, hoy día todavía, describe los cordones industriales como un «invento del MIR»… Entrevista realizada en Santiago, 22 de febrero de 2003.

31 Chile Hoy, 27 de julio de 1973.

32 La Aurora de Chile, 26 de abril de 1973.

33 Testimonio de Javier Bertín, recogido en 1996. En Silva, Miguel, Los Cordones Industriales…, op. cit.

34 Entrevista realizada en Iquique, 6 de noviembre de 2001.

35 Entrevista realizada en Santiago, 22 de febrero de 2003.

36 Testimonio de Guillermo Rodríguez, recogido en 1997. En Silva, Miguel, Los Cordones Industriales…, op. cit.

37 Corvalán, Luis, Santiago-Moscú-Santiago: apuntes de medio siglo, Madrid, Coirón, 1983, p. 50.

38 Clarín, 27 de julio de 1973.

39 La Aurora de Chile, 31 de mayo de 1973.

40 Ver Bustos, Juan (PS); Muñoz, Jorge (PC), «Declaración conjunta de regionales Capital y Santiago centro de los Partidos Comunista y Socialista», 11 de junio de 1973, La Aurora de Chile, 14 de junio de 1973.

41 De Frente, 10 de agosto de 1973 y Lizarraga, Alberto, «La izquierda pugna por el control de los Cordones». En: La tragedia chilena…, op. cit., pp. 96-102.

42 A propósito de las deficiencias organizacionales de la CUT, ver la segunda

parte (capítulo cinco) de este trabajo.

43 CUT, «Comunicado», 18 de julio de 1973, Clarín, 20 de julio de 1973.

44 De Frente, 27 de julio de 1973.

45 Entrevista realizada en Santiago, 6 de mayo de 2002.

46 Cordón Vicuña Mackenna, «Alerta trabajadores: a parar las maniobras divisionistas», El Cordonazo, 12 de julio de 1973.

47 Tarea Urgente, nº9, Santiago, 20 de julio de 1973.

48 Chile Hoy, nº61, 10 al 16 de agosto de 1973.

49 IC, Testimonio Hernán Mery, 23 de agosto de 1973.

50 Entrevista realizada en Iquique, 6 de noviembre de 2001.

51 Cancino, Hugo, La problemática…, op. cit., p. 380.

52 Yáñez, A., «Algunos problemas de la estrategia y de la táctica de la revolución chilena», PCC, Boletín exterior, nº 24, julio-agosto de 1977 y Labarca, Eduardo, «Apuntes sobre los Cordones Industriales», PCC, Boletín exterior, nº 43, septiembre-octubre de 1980, pp. 49-74. Para una reevaluación autocrítica realizada tardíamente por un responsable del PC, consultar: Azócar, Oscar, «La transformación revolucionaria del Estado. La UP, el Estado y el poder popular», A 30 años de la Unidad Popular. El imperativo de la memoria, Santiago, ICAL, septiembre de 2000, pp. 177-190.

53 El Mercurio, Santiago, 24 de julio de 1973.

54 Tarea Urgente, nº 8, 13 de julio de 1973. En una conversación sostenida en el año 2003, un antiguo militante PS sugiere la existencia de un apoyo financiero a los otros cordones por parte de los militantes del CI Santiago Centro, ya que tienen influencia en los ministerios y un acceso directo a ciertos recursos institucionales…

55 Pinochet, Augusto, El día decisivo, op. cit., anexo 8.

56 De Frente, 3 de agosto de 1973.

57 De Frente, 24 de agosto de 1973.

58 Compuesta por cuatro comunistas, cuatro socialistas, cuatro miembros del MAPU. Domingo Cancino, presidente socialista del sindicato de Mademsa, es elegido a la cabeza de este cordón.

59 De Frente, 3 de agosto de 1973.

60 La Nación, 12 de julio de 1973.

61 Vega, Héctor, «Carta desde Osorno», julio de 1973, La Aurora de Chile, 19 de julio de 1973.

62 Citado por Joxe, Alain, Le Chili sous Allende, op. cit., p. 222.

63 Chile Hoy, nº 57, 13 al 19 de julio de 1973.

64 De Frente, 20 de julio de 1973.

65 Mensaje, nº 221, agosto de 1973, citado por Magasich, Jorge, op. cit., p. 216.

66 Chile Hoy, nº58, 20 al 26 de julio de 1973.

67 Citado por Silva, Miguel, Los Cordones…, op. cit., p. 440.

68 Temple, nº6, agosto de 1973.

69 Tarea Urgente, 13 de julio de 1973.

70 La Aurora de Chile, 5 de julio de 1973.

71 Clarín, 19 de julio de 1973.

72 De Frente, 27 de julio de 1973.

73 El Siglo, 19 de julio de 1973.

74 Clarín, 19 de julio de 1973.

75 Clarín, 20 de julio de 1973.

76 Cordón Santiago Centro, «Repudio a la justicia por arbitraria detención», Clarín, 19 de julio de 1973.

77 Entrevista realizada en La Serena, 24 de junio de 2002.

78 Ibid.

79 Tarea Urgente, 27 de julio de 1973; La Aurora de Chile, 26 de julio de 1973; De Frente, 27 de julio de 1973.

80 José Arroyo, 27 años y militante del MIR, semiasfixiado por los gases lacrimógenos, habría sufrido una caída que le provocó la muerte.

81 Clarín, 26 de julio de 1973.

82 Magasich, Jorge, Pouvoir réel, pouvoir formel, op. cit., p. 237.

83 Clarín, 9 de agosto de 1973.

84 Bourdieu, Pierre, Contrafuegos, Barcelona, Anagrama, 1999, pp. 11-22.

85 Chile Hoy, 17 de agosto de 1973.

86 Ibid.

87 Clarín, 26 de julio de 1973.

88 Clarín, 27 de julio de 1973.

89 Corvalán, Luis, «Del discurso en el acto de masas del PC en el teatro Caupolicán», 11 de agosto de 1973. En: Farías, Víctor, op. cit., t.VIII, pp. 4809-4811.

90 Altamirano, Carlos, «Discurso pronunciado en la industria Cobre Cerrillos», 14 de agosto de 1973. En: Farías, Víctor, op. cit., t.VIII, pp. 4953-4962.

91 Ibid.

92 MIR (Secretariado nacional), «Declaración sobre el nuevo gabinete y la

situación política», 13 de agosto de 1973. En: Farías, Víctor, op. cit., t.VIII, pp. 4963-4968.

93 Para una historia completa y apasionante de estos eventos, consultar Magasich, Jorge, Los que dijeron «No». Historia del movimiento de los marinos antigolpistas de 1973, Santiago, LOM ediciones, 2008.

94 «Carta de los marineros torturados en la Armada a Salvador Allende». En: Farías, Víctor, op. cit., t.VIII, pp. 4908-4911.

95 Allende, Salvador, «Declaración sobre la campaña contra las torturas en la Armada», 6 de agosto de 1973. En: Farías, Víctor, op. cit., t.VIII, p. 4904.

96 El Mercurio, Santiago, 10 de agosto de 1973 y El Rebelde, 23 de agosto de 1973.

97 Prats, Carlos (general), «Carta de renuncia al presidente Allende», 25 de agosto de 1973. En: Farías, Víctor, op. cit., t.VIII, pp. 5005-5006.

Capítulo 12

Cuando la ciudad está en lucha.

Territorios y repertorios del poder popular

Panorama del poder popular urbano a mediados de 1973

Es posible estimar entre 20 mil y 30 mil la cantidad de trabajadores que se identifican con la acción de los cordones industriales del gran Santiago y que responden a sus convocatorias. Si consideramos todo el territorio: de norte a sur del país, esta cifra debe acercarse al doble. A partir de la investigación oral y también de los archivos disponibles, hoy día no hay dudas de que las cifras informadas por algunos partidarios de los CI, o por la prensa, hayan sido deliberadamente exageradas. En razón de la confusión entre el cordón en sí y el cordón para sí, todavía es difícil hacer un balance objetivo del poder popular constituyente en vísperas del golpe de Estado. El cuadro a continuación es un recapitulativo de los principales organismos, acompañados de algunos datos específicos para cada uno de ellos.

Cuadro nº 6: Recapitulativo de los cordones industriales y diversas coordinaciones de poder popular en Santiago (agosto de 1973)

Denominación CI = Cordón Industrial CC = Comando Comunal	Fecha de creació
CI Maipú-Cerrillos	Junio de 1972
CI Vicuña Mackenna	Octubre de 1972
CI O’Higgins	Octubre de 1972
CI Macul	Octubre de 1972

CI San Joaquín	Febrero de 1973
CI Santiago Centro	Intento en octub
CI Mapocho-Cordillera	Fines de marzo d
CI Recoleta	Julio 1973
CI Matucana-Mapocho	Intento en marzo
CI Conchalí-zona Norte	Octubre de 1972
CI Lo Espejo	Julio de 1973
CI Santa Rosa-Gran Avenida	Intento en octub
CI Panamericana Norte	Intento en febrer
Comando provincial de abastecimiento directo de Santiago	Enero de 1973
CC Estación Central	Septiembre 1972
CC de La Florida	Fines de 1971
CC de Barrancas	1973
CC Segunda Comuna	Octubre de 1972
CC Quinta Comuna	Octubre de 1972

▪

Fuente: elaboración propia

Lista recapitulativa de cordones industriales y de diversas coordinaciones de poder popular urbano en provincias (agosto de 1973):

▪

1) Coordinaciones que adquirieron una cierta capacidad de movilización y repres
Arica
Provincia de Valparaíso
CI 15 Norte
CI El Salto
CI Almendral
CC «Reñaca Alto»
Provincia de Concepción
Constitución
Osorno
Punta Arenas
2) Coordinaciones provinciales existentes en estado embrionario
Antofagasta
La Serena
Coquimbo
Provincia de Valparaíso
Provincia de Concepción
Talca

▪

Fuente: elaboración propia

Topografía de un espacio de luchas: una ecología del poder popular urbano

Como lo destaca el sociólogo Choukri Hmed en el Dictionnaire des mouvements sociaux,

Así como el contexto histórico en el cual se desarrolla la acción colectiva, el contexto espacial juega un rol específico no solo en la determinación de la acción misma, sus modos y su salida, sino también en la estimulación y el mantenimiento del compromiso individual[1].

En el mismo sentido, Jérémy Sinigaglia a propósito de las luchas de los trabajadores del espectáculo sin empleo estable en Francia, afirma que:

los espacios ocupados son, tal como los registros de lucha, las identidades reivindicadas o las técnicas de lucha, elementos que contribuyen a definir un movimiento contestatario. Se puede así entonces, hacer corresponder ciertos espacios movilizados con ciertas maneras de enfrentar la lucha, con ciertas causas[2].

Hemos visto en varias oportunidades que la inscripción territorial de los cordones es un dato clave del poder popular chileno: los agentes que ahí se movilizan piensan espacialmente sus movilizaciones y están influenciados por el espacio urbano en el cual se ponen en movimiento. Esta interacción entre orden social y orden espacial determinan factores ecológicos de la acción colectiva que conviene destacar: la dimensión espacial se considera como una de las causas, pero también efecto y dinámica de la política del conflicto[3]. En nuestra

perspectiva, es muy interesante tomar en consideración lo que Pierre Bourdieu llama «efectos de lugar» y relacionarlos con las luchas sociales, es decir, develar la interacción entre espacio físico y espacio social en el seno de los movimientos sociales, partiendo de la constatación que esta relación no puede ser considerada como mecánica y transparente, y que

el espacio social se retraduce en el espacio físico, pero siempre de manera más o menos turbia: el poder sobre el espacio que da la posesión del capital en sus diversas especies se manifiesta en el espacio físico apropiado en la forma de determinada relación entre la estructura espacial de la distribución de los agentes y la estructura espacial de la distribución de los bienes o servicios, privados o públicos[4].

Cinturones urbanos rojos e identidades insurreccionales

La geografía de los «cinturones rojos» de la capital chilena nos cuenta la historia de una geografía social, simbólica y política de la movilización colectiva en medio urbano. Manuel Castells en varias oportunidades ha demostrado esta dimensión de los movimientos sociales[5]. Por su parte, Henri Lefebvre ha insistido sobre la producción del espacio urbano, sus efectos sociales pero también ha evocado la tridimensionalidad de estos espacios: espacio concebido, vivido y percibido por sus habitantes[6]. En tanto, desde 1973 Tilly y Shorter han explicado cómo la dinámica del movimiento obrero es profundamente marcada por su espacio. Estos autores, interesándose en el movimiento obrero francés, demuestran que los trabajadores más movilizados son aquellos que «viven en las regiones y comunidades más fuertemente industrializadas», y que «una ola de huelgas se irradiará desde ese grupo central hacia la periferia[7]». Esta afirmación se aplica también a los mecanismos de lucha de los cordones industriales: estos cordones en sí son el lugar donde vive una fuerza de trabajo muy joven y subempleada. La emigración que se produce hacia Santiago entre los años 1942 y 1962 se compone mayoritariamente de una población que tiene menos de 20 años y son principalmente las nuevas industrias las que absorben esta mano de obra barata. Estas fábricas introducen formas de producción modernas, altamente mecanizadas, que necesitan menos trabajadores, pero con mayor especialización. Más del 50% de estos jóvenes trabajadores se instalan en la

periferia de la metrópolis[8]; numerosos dirigentes obreros o militantes de los CI tienen menos de 25 años (es el caso, por ejemplo, de Armando Cruces, presidente del cordón Vicuña Mackenna o de Santos Romeo del cordón Cerrillos), aunque Edmundo Jiles, también sindicalista en Cerrillos, relativiza un poco esta situación: «la mayoría éramos jóvenes, o sea la gente mayor que había, era gente que sabía poner su experiencia, su sabiduría, para a veces hacer bajar un poco el nivel de adrenalina y morigerar un poco las acciones[9]».

La dinámica colectiva inducida por estos jóvenes trabajadores transforma las relaciones capital-trabajo de estos espacios de la ciudad. Según Luis Cruz,

Esta mano de obra está constituida, por lo general, por trabajadores jóvenes con un grado de escolarización mayor que sus predecesores y con una experiencia urbana de larga data. Son estos trabajadores los que desarrollan las luchas más radicales a partir de 1967 y que en 1972 se encontrarán a la cabeza de los «cordones industriales[10]».

Aunque Augusto Samaniego comparte la observación sobre la existencia de una ruptura generacional en la forma de «hacer sindicalismo», la atribuye más bien a la mano de obra recién llegada a la ciudad, quienes no tendrían prácticas tan institucionalizadas como la clase obrera instalada desde hace más tiempo[11], fenómeno que, por lo demás, es común a todos los grandes países de América Latina[12]. Mario Olivares y Carlos Mujica son ejemplos típicos de esta nueva fuerza de trabajo que se radicaliza en los años sesenta-setenta. Obligados a comenzar a trabajar desde los 18 o 20 años, en paralelo buscan adquirir una formación político-sindical y a veces, un cierto nivel escolar[13]. La construcción identitaria de los obreros de los CI se realiza en su lugares de residencia, de sociabilidad y de trabajo, a menudo ubicados en la periferia urbana y cercanos entre ellos: en esos espacios-rutina, entendidos por Javier Auyero como «las estructuras espaciales ordinarias de la vida cotidiana[14]».

Haciendo un paralelo con los mecanismos descritos por Robert Gould a propósito del París revolucionario, esta construcción también es la de la acumulación de experiencias cotidianas que favorecen, en esos lugares, la emergencia de «identidades insurreccionales» a favor de las grandes movilizaciones durante la Unidad Popular[15]. Asistimos al señalamiento del espacio de la ciudad:

A los espacios de la clase dominante, oponer los contraespacios de la clase dominada: las estrategias políticas de clase en los espacios urbanos sólo se comprenden en su relación con esas estrategias de clase en el espacio productivo. Es a partir de la fábrica que la clase se apropia de la ciudad, a riesgo de reapropiarse de la fábrica a partir de ésta[16].

Gabriel Salazar y Julio Pinto explican, integrándola en el tiempo largo, esta formación de la «conciencia de clase y orgullo obrero» en Chile. Señalan que, contrariamente a lo que habían previsto los sectores conservadores, la familia y el lugar de residencia obrera, situada a proximidad del lugar de trabajo –lejos de favorecer la moderación política– participan activamente en esta «autoafirmación identitaria[17]». Además, los espacios urbanos en donde se desarrollan estas experiencias son también los espacios de otros sectores populares, lo que permite la difusión de las luchas de un sitio social en conflicto a otro. Se pueden identificar claramente tres agentes sociales principales que están en la base de las diferentes formas de movilización durante la Unidad Popular:

1. La clase obrera organizada de la gran industria: a menudo integrada al APS, controlada por la CUT y principalmente involucrada en los intentos de participación institucionalizada impulsados por el gobierno, aunque, sin embargo, una fracción de ésta, especialmente la nueva generación de militantes sindicales, se compromete en la dirección de los cordones industriales.

2. La clase obrera de las pequeñas y medianas empresas: en general, menos controlada por la CUT, menos organizada y poco considerada en el proyecto de participación del gobierno. Este sector, apoya las movilizaciones colectivas y es más receptivo a las posiciones de los sectores «rupturistas», a la experiencia de los CI y a las formas innovadoras de poder popular constituyente.

3. El movimiento de pobladores: aquí encontramos una gran diversidad de posicionamientos según el nivel de ingresos, el lugar en el espacio urbano, la reciente llegada o no a la ciudad, la militancia partidaria, etc. Conviven las familias obreras, la pequeña burguesía urbana, los trabajadores temporales, los cesantes de los campamentos. Son algunos sectores organizados de los pobladores, a menudo en torno a reivindicaciones de vivienda y abastecimiento, especialmente en los campamentos nacidos de tomas de terreno combativas

(Nueva Habana, por ejemplo), quienes se muestran muy activos en los intentos de implementación del poder popular.

A estos tres elementos, en ocasiones se agrega la presencia campesina en las comunas que disponen aún de terrenos rurales; así como numerosos estudiantes y algunas fracciones de las capas medias acomodadas. En la experiencia chilena, esta diversidad de agentes movilizados explica que, en un espacio urbano muy delimitado, se encuentren algunas «combinaciones culturales de clase[18]». Estas dependen entonces de una ecología localizada, de las características propias de cada conjunto y ofrecen a ese movimiento social una polisemia, que identificamos en la diversidad de las movilizaciones y –en algunas ocasiones– hasta incluso en una aceptación diferenciada de la misma noción de poder popular. Los planos revelan la intrincación de los diferentes espacios sociales: obreros, pobladores y campamentos, sin que se pueda por ello concluir que existía una verdadera confluencia (ver los anexos nº 11 y nº 12).

A nivel del gran Santiago, el éxodo rural y la explosión demográfica de las comunas periféricas, que pasan de representar el 39,6% del total de la población de la capital en 1940, al 82,1% en 1970, es parte fundamental de la construcción de esta polifonía social. Este tipo de urbanización lineal (pero desequilibrada) en torno a grandes ejes fomenta en definitiva una estructuración de la ciudad que facilitó el paso del cordón para sí al cordón en sí: «más allá de un núcleo administrativo, las ciudades chilenas están rodeadas por hectáreas de poblaciones, a menudo y en parte, construidas por sus habitantes. Estas características de la vida urbana permiten el desarrollo de un tipo de relación social que favorece ‘la democracia directa’[19]». Sin embargo, esta descripción debe ser ampliamente relativizada puesto que fue siempre el Estado quien tuvo la última palabra en cuanto a la planificación urbana y quien supo mantener un cierto control sobre estas periferias populares. Por lo demás, es el Estado el que promueve, a partir de los años 40, la edificación de poblaciones obreras alrededor de las grandes concentraciones industriales. Lo que es seguro, es que la relación entre una población obrera joven, el dinamismo del movimiento de pobladores y los vínculos que se establecen entre el lugar de producción y el espacio de vida (en general, próximos) proporcionan el «carburante» para esta rebeldía que se expresa en el seno de algunos cordones industriales[20]. Jorge Rojas, Cinthia Toledo y Moisés Fernández demostraron claramente cómo se crea esta interconexión en el caso de Cristalerías Chile en la población Chile, barrio

obrero levantado específicamente con el fin de estabilizar la fuerza de trabajo[21], y es también el caso de la «fortaleza» obrera que constituye Madeco a nivel del CI Santa Rosa[22]. En el espacio urbano, existe así una relación dialéctica potencial entre el universo industrial y el universo pobladores, y ese cóctel sociocultural alimenta los movimientos protestatarios. Prácticas cotidianas, vida común en los barrios, trabajo colectivo, valores culturales: es toda una «economía moral» (en palabras de E.P. Thompson) la que forja una topografía compleja del poder popular. En resumen, encontramos aquí una doble dimensión, estructurada, y estructurante que facilita la constitución de espacios de luchas: «el espacio y el lugar determinan, favoreciéndolos también, la emergencia de los movimientos contestatarios; en contrapartida, éstos contribuyen a actualizar el potencial que ofrece el espacio, reestructurándolo al mismo tiempo[23]».

Territorios movilizados y repertorios de acción

Numerosos campamentos y poblaciones se ubican en los grandes ejes viales de Santiago, que son también redes estructurantes del espacio industrial y del espacio de vida obrera (ver anexos nº 8 a nº 14). En parte, la distribución de los campamentos también se imbrica con la linealidad de los cinturones industriales y con algunas poblaciones construidas por el Estado[24]. Existe una gran concentración de campamentos y de industrias en la zona poniente de la capital, particularmente en el norponiente. Pero, si el CI Cerrillos efectivamente se encuentra en la parte oeste de la ciudad, las dos más grandes experiencias como son el CI Vicuña Mackenna y el campamento Nueva Habana, se ubican lejos de las mayores concentraciones industriales, en una zona de barrios populares (actual comuna de La Florida) donde se encuentran numerosas poblaciones: de ahí las relaciones y ayuda mutua entre el cordón, el campamento y la población aledaña. En todos los casos, la relación con el espacio físico y simbólico es fundamental, un dato subrayado en varias investigaciones sobre la acción colectiva en otros países:

Los espacios públicos de participación y movilización adquieren existencia en una organización física de los lugares de la acción colectiva, la que puede depender de puesta en escena, y que a menudo reposa sobre la movilización de

símbolos. A través de ellos, las representaciones mentales de los lugares, su percepción por los diferentes actores son elocuentes sobre el sentido otorgado a la acción colectiva, así como sobre su alcance, sobre los procesos de identificación colectiva[25].

Por la misma importancia de la topografía urbana de los cordones, esas formas de reapropiación individual y colectivas del espacio físico son esenciales. Hemos visto que esta topografía posee características que varían de un CI a otro, según las empresas y sectores sociales que lo componen. Sin embargo en general, se dibuja una geografía del poder popular que permite delinear las fronteras físicas, pero también mentales e ideológicas del movimiento. Fronteras inscritas en el paisaje urbano y que jugando con su configuración, forman una oposición entre ellos y nosotros en el espacio de la capital. Por todas partes, se despliegan «políticas del espacio público» y una voluntad de «conquistar la calle» como lo demuestra Camilo Trumper. Tanto los opositores al proceso revolucionario como sus partidarios, buscan redibujar el espacio de la ciudad para ocupar y controlar esos territorios en función de sus objetivos políticos, y esto con más fuerza a partir de octubre de 1972[26].

Si hay algo que preocupó a la oposición y en general a la burguesía es precisamente esta dimensión territorial. Esta sensación de que las periferias donde habitan los «pobres de la ciudad» están a punto de conquistar –literalmente hablando– espacios urbanos hasta entonces reservados a las clases dominantes y a las capas superiores de la pequeña burguesía, se hace cada vez más apremiante. En Santiago, el hipercentro (lugar del poder institucional y económico) y también el «barrio alto» son a menudo mostrados en la prensa opositora como las presas fáciles de un peligroso poder popular, presto a desplegarse en la capital. En efecto, los barrios populares se distinguen claramente del nororiente de Santiago, reservado a las clases altas. De hecho, los barrios ricos como Las Condes o Vitacura no han visto «en persona» el desarrollo de estas coordinaciones obreras o campamentos autogestionados, sin embargo sus habitantes tiemblan frente a la perspectiva de ver un día a los cordones amenazar sus privilegios. Así, cuando los diarios anuncian, en agosto de 1973, la inminente aparición del CI Manquehue, la derecha se muestra muy preocupada, ya que este cordón –que no ha tenido la oportunidad de desarrollarse– se ubica en las proximidades de la comuna de Las Condes[27]. Más globalmente, en respuesta a la dinámica del poder popular urbano, una verdadera

psicosis del cerco es alimentada por la oposición y crece paulatinamente en el seno de la oligarquía chilena y de una parte importante de las capas medias. Es interesante remarcar que las clases dominantes tienen plena conciencia de esta dimensión espacial del movimiento revolucionario, así El Mercurio señala que

Estas bases de operaciones del marxismo están apoyadas por campamentos ubicados estratégicamente al lado de importantes arterias como las que conducen a Puente Alto, San Bernardo, Melipilla, Las Condes, Kennedy, Américo Vespucio, Vitacura, Vivaceta y Matucana, además del apoyo de los trabajadores izquierdistas de la construcción[28].

Y según un diario estudiantil de la Universidad de Chile, vinculado a la oposición, no hay dudas de que los CI «tienen capacidad de acción en el centro de la ciudad, pudiendo dividirla por sectores en caso de haber un enfrentamiento civil[29]». Este miedo de verse rodeados se apodera también de los oficiales.

En el cuartel general de la Comandancia de Guarnición –escribe Augusto Pinochet– íbamos ubicando en mapas las nuevas poblaciones que instalaban pobladores y cesantes y que, guiados por líderes marxistas, formaban alrededor de Santiago un cordón que crecía cada día[30].

Una mirada sobre el mapa podría sugerir que el cerco era real. Sin embargo, su imponente presencia en el espacio urbano y en el espacio social no puede llevarnos a pensar –mecánicamente– que hayan encarnado una fuerza de doble poder constituyente. En los hechos, estamos frente a gérmenes de poder popular que a pesar de su considerable presencia en el espacio de la capital y también a escala nacional, tienen incontables dificultades para poner en común su energía colectiva (ver anexos nº 12 y nº 13).

Después de revisar las diversas coordinaciones de poder popular, estudiado su topografía ¿es posible hacer un resumen de los modos de acción de estos organismos y de las vías escogidas para su movilización colectiva? Sobre este tema, la noción de «repertorios del conflicto» elaborada por Charles Tilly es útil para mostrar la diversidad de la gama de formas protestatarias, sin olvidar por ello que éstas son el producto de una lenta construcción histórica[31]. El repertorio es entonces comprendido como un conjunto de representaciones y modos de

movilización, que se ofrecen en un momento dado a un conjunto de agentes movilizados: repertorios a menudo heredados pero que también pueden ser inventados en el curso de la campaña del movimiento social[32]. Cada repertorio está más o menos codificado y es desigualmente accesible según la identidad e historia del grupo movilizado. En lo que se refiere a la dinámica del poder popular, podemos adelantar que se inscribe ampliamente en un repertorio de acción típico de la era del capitalismo industrial: el «modelo nacional autónomo de la acción colectiva[33]». En efecto, en el conjunto de las movilizaciones que nos interesan aquí, identificamos la mayoría de las herramientas colectivas tradicionales de una clase obrera moderna y organizada: asambleas sindicales, manifestaciones, huelgas, tomas de fábricas, petitorios, bloqueo de caminos, control obrero… El instrumento de la huelga se articula con otros tipos de acciones colectivas, también muy vinculadas a la ocupación de un territorio. Entre ellas, se destacan las diversas «estrategias callejeras» protestatarias: manifestaciones, desfiles y barricadas. El objetivo es interpelar directamente al campo político con «una ocupación momentánea, por varias personas, de un lugar abierto, público o privado y que conlleva –directa o indirectamente– la expresión de opiniones políticas» (como lo ha definido el investigador Olivier Fillieule[34]). Pero también existen otras prácticas privilegiadas por el poder popular, como la toma de fábricas (a veces incluso manteniendo la producción) o la de edificios públicos, las asambleas de los cordones industriales o el involucramiento militante en las diversas formas de abastecimiento directo. Existen así varias «gamas» o escalas de lucha utilizadas por el poder popular urbano en Chile. La documentación interna de las organizaciones de izquierda recuerda la importancia que tenía para estas últimas mantener la conducción y control de tales movilizaciones. Así, la Comisión Política del MAPU definía –en detalle– cuál debía ser el comportamiento individual y colectivo de sus militantes en toda «técnica de acción de masas[35]».

Como lo hemos explicado a propósito del CI Cerrillos, en general es la comuna el espacio privilegiado para este tipo de movilizaciones, ya que parece representar una escala adecuada, que sobrepasa el nivel demasiado restringido de la fábrica o del barrio, para servir de trampolín y conseguir un eco político nacional. Este anclaje local es perceptible desde el alba del movimiento obrero. Aquí tampoco estamos hablando de una especificidad chilena. En relación a Francia, Michel Verret escribe:

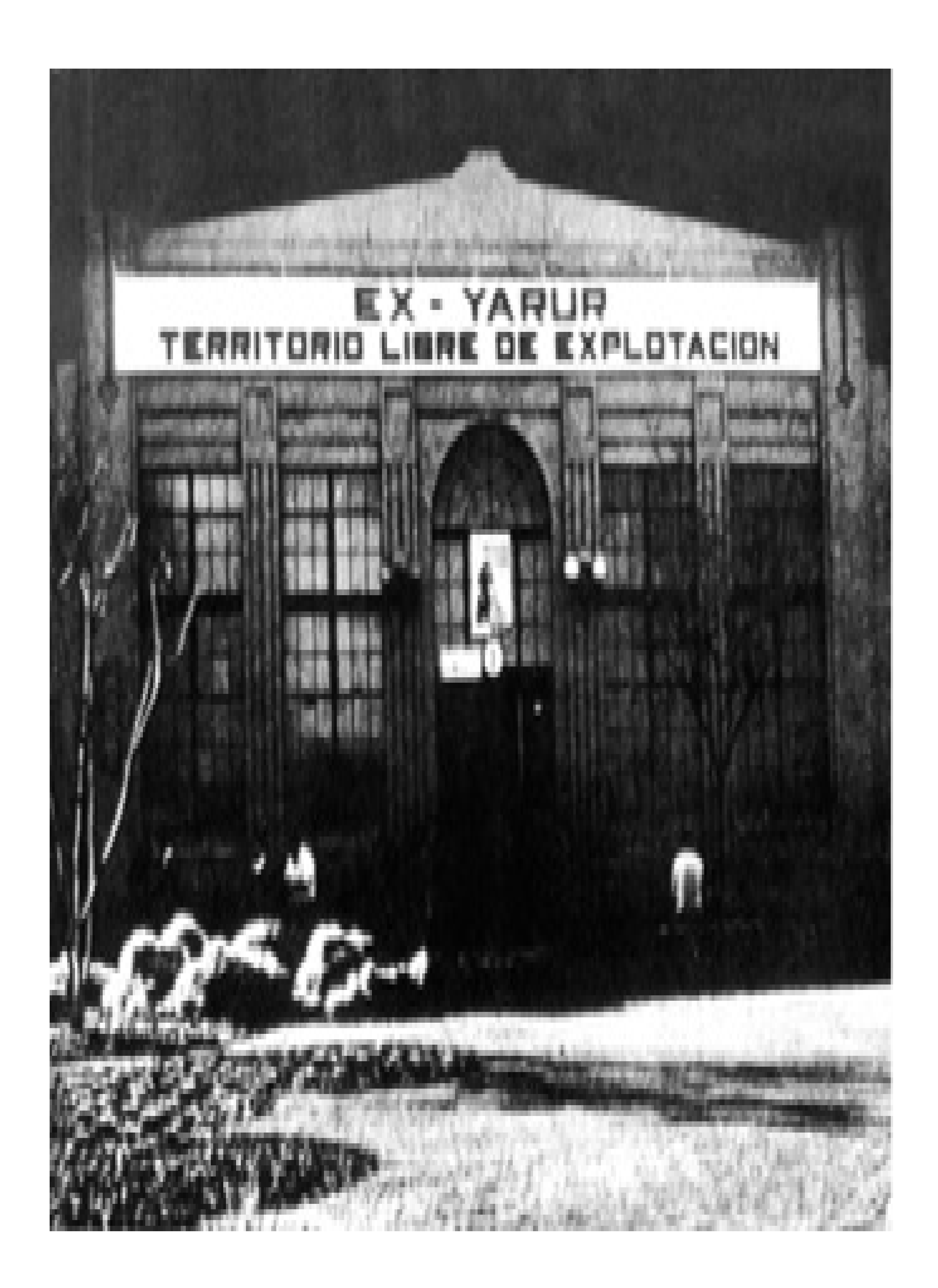
El espacio comunal, que fue para la burguesía el primer espacio político autonomizado de la dominación feudal, se convirtió para la clase obrera, en

pocas ocasiones al principio y más seguido en adelante, en el primer espacio de autonomización frente a la burguesía[36].

Evidentemente, en cada una de sus derivaciones, el repertorio de la acción colectiva del poder popular urbano es sometido a cuestionamientos y evaluaciones. Hemos visto que la decisión de tomar una industria no siempre es objeto de consenso, pero cuando una acción logra resultados tiende a generalizarse, en un mecanismo clásico de difusión y emulación de un sitio de conflicto a otro.

El lugar de trabajo sigue siendo un lugar estratégico. Permite bloquear la economía, tomar el control de la unidad de producción, enfrentar directamente al patrón y también encarna un espacio-atributo portador de sentido[37]. La toma fue una de las formas de acción colectiva más significativas del poder popular. Estas ocupaciones pueden ir desde la toma «pasiva» a la espera del paso al APS, hasta intentos de control de la producción y autodefensa del lugar por los trabajadores, quienes, a menudo, desplegarán con orgullo en el frontis de sus empresas lienzos declarándolas «territorio liberado», incluso, como en el caso de Yarur, «territorio libre de explotación»:

Ex-Yarur, declarada «territorio libre de explotación»


EX - YARUR
TERRITORIO LIBRE DE EXPLOTACION

Fuente: P. Winn, Weavers of revolution, op. cit., p. 210

El recurso de las barricadas es también ampliamente utilizado, los agentes movilizados sacan provecho de su situación geográfica: ubicados sobre las principales arterias de la ciudad, distribuidos a lo largo de los grandes ejes y controlando la vías de acceso a la capital (especialmente desde el puerto de Valparaíso), este repertorio es también ideal para seguir marcando un territorio en el plano simbólico:

Barricada en el cordón Vicuña Mackenna (agosto de 1973)


MACKENNA
RRITORIO DE

Fuente: La Aurora de Chile, N° 34, 2 de agosto de 1973

«Las barricadas son protecciones ligeras, de construcción rápida que interrumpen toda la circulación por la calle […]. Por la forma como desorganizan la circulación de vehículos en la ciudad, aumentan el impacto de otras acciones, especialmente marchas[38]». Su temible eficacia, impulsa su emulación en todos los CI. En julio de 1973 y después de la obtención de varias estatizaciones de empresas tomadas, un manifestante declara: «en los rostros había mezcla de satisfacción y desconfianza. Por ahí se comentaba '¡… será viejo el método éste de las barricadas…, pero siempre resulta!'[39]».

Otro repertorio: la marcha. También es considerada por los militantes como «la más dinámica de las acciones callejeras y la más impactante por su movilidad y la manera como interfiere la vida de la ciudad[40]». Es utilizada para difundir las consignas políticas en toda la ciudad y demostrar su fuerza. Los CI utilizan regularmente este modo de movilización para inundar el centro de la ciudad con sus pancartas y lienzos. En cada oportunidad, los organizadores consideran varios factores, entre los cuales, el principal es lograr reunir la mayor cantidad de personas. A partir de cálculos realizados en base a una revisión exhaustiva del periódico El Mercurio, son los obreros de los CI y los pobladores quienes, progresivamente, se convierten en los agentes principales de las estrategias callejeras de la izquierda. Entre abril de 1972 y septiembre de 1973, 52% de las manifestaciones se realizan por iniciativa de los obreros de los cordones industriales o pobladores, contando con más fuerza que la dirección de los partidos de la UP, de la extrema izquierda o de la CUT[41]. Estadísticas que demuestran el dinamismo del repertorio de acciones colectivas del poder popular. Además, los dirigentes de los CI se preocupan de que las marchas sean ordenadas y compactas, y que eventualmente en primera línea se desplieguen militantes armados de bastones.

Marcha obrera, con bastones, en Santiago durante la UP



Reproducido en: La Huella, Nº 12, septiembre 2002

En la mayoría de estas movilizaciones, el nombre del CI y las reivindicaciones del poder popular aparecen claramente identificados en banderas, lienzos, afiches, brazaletes… Las instrucciones del MAPU en ese sentido son muy precisas: selección de un equipo de conducción de la marcha, formación que se debe adoptar durante ésta según la situación política, ubicación de las banderas, etc.[42].

En todos los casos, la ocupación política y simbólica del territorio es enfrentada como uno de los objetivos centrales de la movilización y se sitúa en el centro del repertorio de estas «violencias políticas populares», analizadas en el tiempo largo por Gabriel Salazar[43]. Por lo demás, la originalidad de los cordones radica precisamente en su dimensión horizontal y territorial, en tanto coordinaciones de empresa a empresa, de sindicato a sindicato en un espacio dado. Dentro de estos espacios de lucha se configura lo que llamaremos territorios movilizados, luego apropiados, es decir, espacios no sólo de lucha sino en lucha, donde la movilización de la clase obrera se hace por y para el territorio[44]. Esta apropiación «por abajo» aparece claramente a través de las diversas acciones realizadas en estos territorios; no sólo en el ámbito productivo, en las estrategias callejeras utilizadas, sino también en el campo cultural (fiestas populares, festivales en las fábricas, teatros en los campamentos, etc.) así como en los intentos de autogestión del abastecimiento en algunos lugares. La especialización de los espacios de las periferias industriales de la ciudad (esos «espacios muertos» según Lefebvre) es entonces parcialmente cuestionada por una reapropiación espacial producto de movilizaciones colectivas radicales: el territorio recuperado está al centro del movimiento revolucionario.

En el siguiente cuadro, intentamos establecer un balance de los principales repertorios del poder popular:

Cuadro nº 7: Repertorios de acción colectiva del poder popular urbano

-

-

Campo de intervención	Forn
Esfera productiva	Llan
Esfera de la distribución y consumo	Requ
Campo político, institucional y partidario	Man
Esfera ideológica, debates dentro del movimiento social, críticas al gobierno	Asar
Campo cultural y mediático	Desa

▪

Fuente: elaboración propia

Hacia el golpe de Estado

El fracaso de la coordinación de los cordones de Santiago

A fines de julio, después de las grandes movilizaciones de los cordones industriales y en el curso del mes de agosto se desarrollan los últimos debates políticos en torno al tema del poder popular. Finalmente, en un contexto de divisiones fratricidas al interior –y entre– las organizaciones de izquierda, es el conjunto del proceso de transición al socialismo promovido por los principales partidos el que se pone en discusión. Así, retrospectivamente, el ímpetu unitario del discurso de Carlos Altamirano pronunciado el 12 de julio de 1973 desde el cordón Vicuña Mackenna parece poco creíble: «Nunca la unidad socialista-comunista ha sido más férrea, ni ha existido entre ambos partidos –vanguardias de la clase obrera– una mayor identidad de objetivos[45]». En el mismo momento de esta declaración, las dos formaciones se enfrentan a propósito de varios temas clave: participación de los militares en el gobierno, ritmo de las estatizaciones, rol de la CUT y del poder popular… El Partido Socialista a su vez está dividido entre un ala izquierda dirigida por militantes tales como Jorge Mac Ginty o Nicolás García, y los «allendistas» como Hernán del Canto o Clodomiro Almeyda que dominan la Comisión Política. Aunque el presidente de la República no se ha hecho parte directamente en las discusiones públicas sobre el poder popular, en los últimos meses de la UP se refiere a éste en varias oportunidades. En todas ellas, Allende intenta demostrar la ausencia de contradicciones entre la estrategia de transición pacífica de la izquierda y las tendencias a la autoorganización que existen en la sociedad civil. Como lo sintetiza el historiador Hugo Cancino, «para el presidente Allende, una nueva Constitución política debía canalizar e integrar las nuevas instituciones surgidas de la praxis social y hacerlas complementarias con las instituciones de la democracia representativa[46]». En el tercer mensaje presidencial al Congreso

nacional, a fines de mayo de 1973, el jefe de Estado hace referencia a su concepción del poder popular institucionalizado. Allende reitera su visión de una necesaria transferencia de poder político hacia las organizaciones populares con, como contrapartida, la integración de éstas a un nuevo «Estado popular» cuyos contornos exactos son difíciles de identificar. Apoyándose sobre este concepto de socialización del poder económico y también político, critica el «orden burgués» que habría «perdido su vigencia ante los trabajadores». En esta oportunidad también insiste sobre el hecho de que la transformación sólo podrá desarrollarse «dentro del régimen institucional del Estado y su normativa legal». Allende reconoce las múltiples tendencias del ejercicio de la democracia directa y percibiendo la importancia de la dimensión territorial de la construcción de poder popular, subraya que éste debe construirse sobre la base de la municipalidad, al mismo tiempo que se debe «hacer posible el control popular sobre las instalaciones administrativas, contribuyendo a combatir el lastre burocrático[47]». En ese sentido, llama a la formación a nivel comunal «de un centro de organización: los Comandos Comunales. Formados por representantes elegidos por las organizaciones comunitarias y de trabajadores[48]».

Pero el problema sigue siendo que este enfoque habría significado, por una parte, la posibilidad de instalar legalmente una nueva constitución, incluso un nuevo Estado, lo que la UP no pudo realizar a pesar del proyecto de plebiscito de septiembre de 1973[49]. Por otra parte, esto niega la posibilidad –sin embargo esencial para su dinamismo– de que el poder popular se mantenga independiente del gobierno. Finalmente, existe una tensión evidente entre el discurso de Allende y su política de integración de los militares al gobierno o su llamado a devolver parte de las fábricas ocupadas después de cada gran crisis. A pesar de todo, los líderes socialistas de los CI intentaron otorgarles más peso a sus organizaciones, sin esperar el consentimiento del gobierno. El 18 de julio de 1973, se lleva a cabo la primera reunión de la «Coordinación provincial de Cordones Industriales de Santiago» (CPCI)[50]. Participan los CI O'Higgins, Vicuña Mackenna, Mapocho-Cordillera, San Joaquín, Cerrillos, Santiago Centro junto a representantes del MAPU, MIR y del PS así como el delegado de un CI hasta entonces poco activo, el CI Recoleta (ciertamente con poca influencia real)[51]. La primera declaración de esta coordinación retoma reivindicaciones tantas veces repetidas: el rechazo a devolver las empresas tomadas, control obrero de la producción y de la distribución, ampliación del área estatizada, etc. En la segunda declaración de la CPCI (reproducida en el anexo 6), los siete dirigentes que firman, todos socialistas, se proponen explicar su proceder. Se constituyen –insisten– para la «ampliación de las conquistas del Gobierno y de la

clase». Al mismo tiempo, le hacen saber al ejecutivo que deben conservar «la autonomía necesaria para cumplir el papel de conductor de los diferentes sectores sociales aliados del proletariado en la lucha por el socialismo». Rechazando toda idea de paralelismo, reconocen a la CUT como la «máxima organización de los trabajadores», aunque demandan también una participación más libre de los asalariados, «la democracia proletaria» y critican el «burocratismo, empecinado en tomar acuerdos superestructurales y a espaldas de las masas[52]». Hernán Ortega, elegido presidente de esta coordinación, recuerda:

cada cordón tenía su propia dinámica y su propia organización, las comisiones de trabajo eran más o menos similares y la coordinación dentro de la comuna de Santiago fue para crear una instancia en que incluso nuestro trabajo en comisiones se pudiera coordinar de cordón a cordón[53].

Sin embargo, varios testimonios sugieren lo contrario. Según Tomás Inostroza, «la coordinación no existió jamás, no existió, si hubiera existido una verdadera coordinación de cordones, el golpe habría sido otra cosa[54]». Mario Olivares del CI Vicuña Mackenna también recuerda la Coordinadora de Cordones, pero sólo como una organización que habría funcionado «en el papel» y que no habría tenido el tiempo para constituirse[55]. Aparte de algunas pocas declaraciones públicas, todo parece confirmar esta impresión. Los últimos debates en torno al poder popular, entre los cuales el segundo foro organizado por la revista Chile Hoy en agosto, revelan que las diferencias sin resolver de la izquierda también contribuyen a sofocar desde el comienzo esta iniciativa[56]. Primero, hemos visto que la dirección socialista muchas veces se mostró hostil frente a una autonomía real de los CI y esto incluso, en su ala izquierda. Pero son el PC y el MIR los que se oponen más encarnizadamente a esta voluntad de coordinación. Siempre en nombre de la polémica sobre el paralelismo sindical, el MIR termina apoyando a los comunistas, que buscan impedir el surgimiento de la CPCI. Esta alineación del MIR es tal que Galvarino Escorza debe admitirla con sorpresa[57]. Obnubilados por la creación de Comandos Comunales que sin embargo seguirán siendo marginales y sin una mejor estructuración que los Cordones, el MIR prefiere apoyar los llamados para que los CI se sometan a la estructura burocrática de la CUT[58]. Este «frente común» PC-MIR, debilita considerablemente la CPCI. Así, el partido de Miguel Enríquez buscó restringir el rol que debían jugar los CI en tanto simple «organización sindical territorial, de algún modo, como ‘sindicatos de barrio’», ya que «evidentemente no podían

constituirse en la organización política alternativa que necesitaba la clase obrera. Este papel sólo le podía corresponder a los Comandos Comunales[59]» y es por esta confusión de roles que la izquierda extraparlamentaria tiende a favorecer que se atenúe un poco más «el filo revolucionario» (en palabras de Maurice Najman) de los cordones.

Para la dirección del PC, lo fundamental es hacer todo lo necesario para darle estabilidad al nuevo gabinete cívico-militar, aunque esto signifique combatir a los sectores más radicales del movimiento obrero. De este modo, el PC retoma sus virulentos ataques en contra del MIR. El 14 de agosto, El Siglo publica el artículo «La ultraizquierda busca dividir a los trabajadores», según el cual la reacción se deleitaría con los postulados del MIR en defensa de un «poder popular paralelo y alternativo al gobierno» y con «las proclamas incendiarias de las cuales hacen gala algunos autoerigidos dirigentes de ciertos cordones fantasmas[60]». La dureza de estas declaraciones lleva incluso a que algunos intelectuales se asombren antes tales prácticas sectarias. Marta Harnecker denuncia en las páginas de Chile Hoy, la actitud comunista y recuerda que, por el contrario, el MIR ha compartido con el PC la intención de limitar el rol de los CI… A fines de agosto de 1973, el ala izquierda de la UP cierra también sus puertas al MIR, reafirmando su alineamiento con el gobierno y haciendo énfasis en los errores de apreciación de este movimiento[61]. En estas condiciones podemos decir que los últimos debates sobre el poder popular, tuvieron un impacto negativo respecto de la búsqueda de alternativas y frenaron las tendencias de coordinación de los cordones industriales.

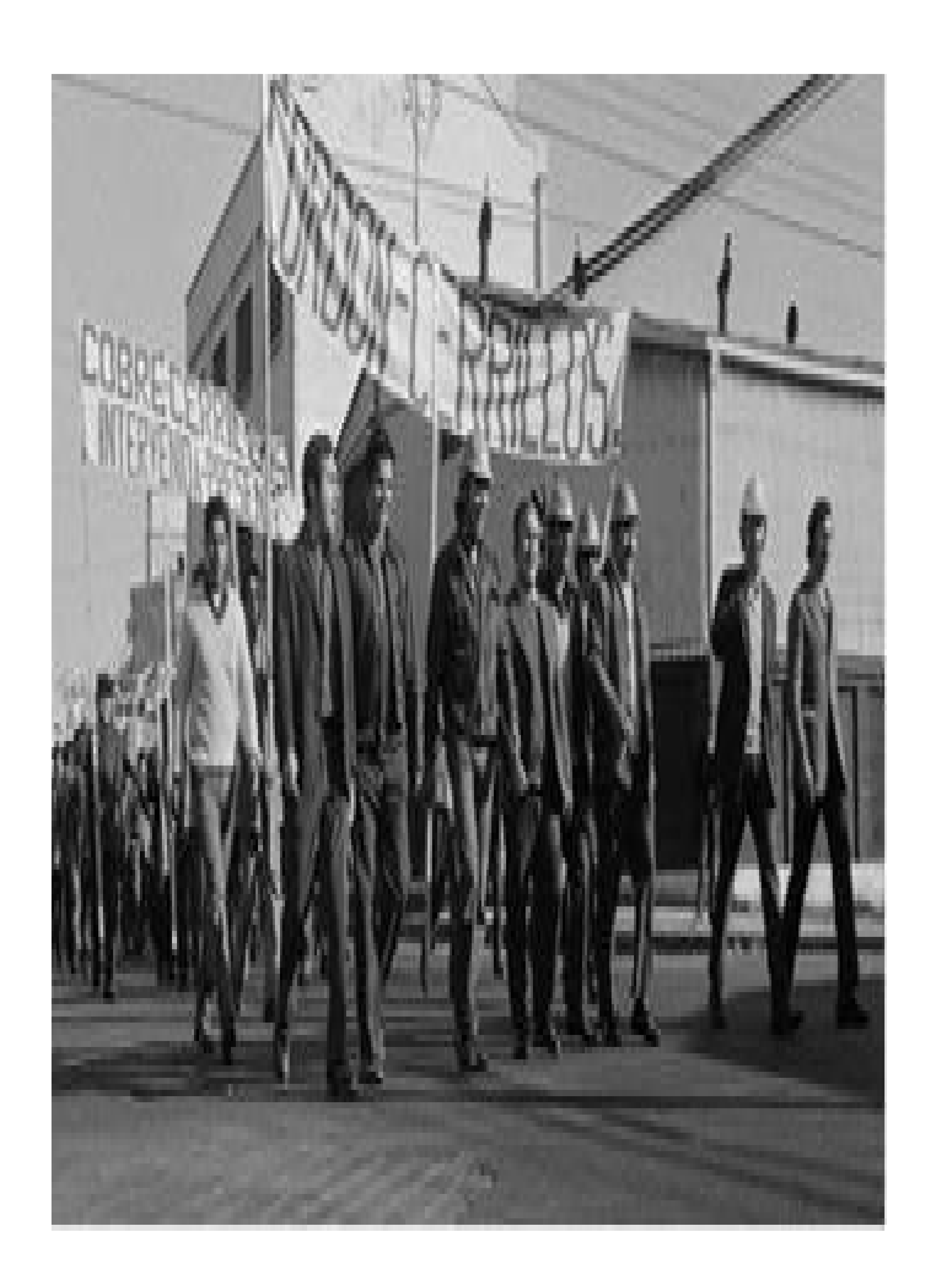
Los últimos combates del poder popular

Durante los meses finales de la UP, asistimos a lo que podríamos llamar los «últimos combates» del poder popular, de algún modo, su último respiro y en donde aparecen también todas sus contradicciones. Uno de los desafíos clave del momento es enfrentar con éxito el nuevo paro de camioneros que ahoga aún más una economía gangrenada por la inflación y el mercado negro. A pesar de la desmoralización general, varias coordinaciones intentan mantenerse activas, como es el caso de algunos comandos comunales (CC). A fines de julio –por ejemplo– el CC de Barrancas publica su programa de acción en la prensa[62]. Ese

mismo día, el CC Estación Central le pisa los talones, publicando su propia plataforma de lucha[63]. Además de las reivindicaciones específicas de su territorio, las ideas propuestas son las mismas que señala el MIR en el «Manifiesto de agosto de los Comandos Comunales»: expropiación de las grandes empresas, control obrero en las otras, control popular directo del abastecimiento, racionamiento de los productos básicos, preparación de brigadas de autodefensa[64]. El documento también retoma el llamado a que los soldados –«hermanos en uniforme»– se incorporen en la lucha social, así como la necesidad de una huelga general para combatir el paro patronal.

A nivel de los cordones industriales, sólo se llevan a cabo unas pocas acciones colectivas.

Movilización del CI Cerrillos en el centro de Santiago (agosto de 1973)


COBRE

Fuente: Chile Hoy, N° 62, agosto de 1973 (foto de A. Cardoso)

A fines de agosto, el cordón Vicuña Mackenna decide dotarse de un «Frente Único de Trabajadores» encargado de ocuparse exclusivamente de los conflictos sociales en el sector[65]. La dirección de este Frente está formada por dirigentes de cada una de las empresas involucradas y un representante del CI. Ante el nuevo paro patronal, el CI organiza piquetes de vigilancia de los caminos y algunos de entre ellos declaran con orgullo «la hora del combate llegó». A inicios de agosto, El Mercurio anuncia la formación del cordón Industrial Independencia, probablemente surgido durante una reunión en el Hospital Roberto del Río, con la presencia de dirigentes de la CUT y «elementos de la ultraizquierda[66]». También en provincia se pueden identificar algunos tímidos sobresaltos del poder popular. Por ejemplo, el cordón Osorno, a diferencia de los CI de Santiago, no parece sufrir la misma baja de actividad y el 10 de agosto realiza un positivo balance de las brigadas organizadas para la vigilancia de las fábricas en contra del paro patronal. La perspectiva de la unidad obrero-campesina y, particularmente, la solidaridad con las comunidades indígenas mapuche se mantiene, así como numerosas medidas para el abastecimiento directo. La actitud abiertamente represiva del intendente (militante de la UP) y de los militares es nuevamente denunciada[67]. Se decide incluso la formación de un novedoso «Comando operativo revolucionario», compuesto por las direcciones regionales del sector rupturista de la izquierda: principalmente MAPU, MIR, PS e IC[68]. Sin embargo, la esperanza que podría haber representado un frente revolucionario unitario ciertamente se quedó en una fase «experimental»: ni Héctor Vega en su testimonio, como tampoco la prensa dan cuenta de esta iniciativa. En el puerto de Valparaíso, los CI intentan coordinar sus actividades; se forma una suerte de comité ejecutivo en el que participan los cordones Industriales de El Salto, 15 Norte y Quilpué, y los comandos comunales de Reñaca Alto y Nueva Aurora, con la esperanza de poder llegar un día a una coordinación provincial[69]. El 3 de agosto de 1973, este comité organiza numerosos bloqueos de caminos con la presencia de miembros de la CUT y con el apoyo del PS, MAPU, MIR y de los trotskistas del Partido Socialista Revolucionario (PSR). El objetivo es demostrar la fuerza de los CI y exigir a las autoridades, la requisición de todos los vehículos de los transportistas en huelga. La manifestación termina con numerosas detenciones y la dirección local de la

CUT se desvincula del acto, insinuando incluso que habría sido organizado por la «ultraizquierda» y elementos «infiltrados de la derecha[70]».

Finalmente, aparte de algunos focos de revuelta rápidamente sofocados, es la desmovilización la que gana terreno a pasos agigantados, más aún cuando la división de la izquierda ahora parece irreversible. El MIR llama a la clase obrera a la huelga general y «a exigir del gobierno plenas garantías para que los trabajadores asuman por sí mismos la lucha abierta en contra del paro patronal» a través de los Comandos Comunales[71]. El PC le responde acusándolo de pertenecer a esas «tendencias extremistas del revolucionarismo pequeñoburgués, el ultraizquierdismo, factor que ha ayudado objetivamente a los reaccionarios» y que fragilizaría la alianza de la UP con los militares «legalistas[72]». Las dudas, la desorientación, invaden a los sectores más militantes y organizados del movimiento obrero, situación que queda de manifiesto durante una reunión de la Coordinación de los CI de Santiago, a mediados de agosto en Cobre Cerrillos[73]. Desde el mes de julio, los dirigentes de los CI constatan que su discurso está completamente desconectado de las bases[74]. Según un dirigente sindical, en agosto de 1973, el Cordón Cerrillos sólo se mantiene vivo gracias a un puñado de cinco empresas, mientras que se supone representa a doscientas[75]. La revista del MAPU, De Frente, se pregunta «¿Qué pasa en los cordones?[76]», aunque el punto de no retorno ya parece haber sido franqueado. Para el historiador Luis Corvalán Márquez, es desde mediados de agosto que la izquierda está derrotada y la contrarrevolución en marcha[77]. Los militantes más conscientes del desastre que se avecina, lanzan duros discursos contra el gobierno y buscan explicaciones. En vano… Así, algunas semanas antes del golpe de Estado, Armando Cruces declara en la prensa revolucionaria argentina:

El compañero Allende, presidente de la República, reformista, militante de mi Partido Socialista, en todo momento cede ante el enemigo. Hay numerosas vacilaciones. Además, el PC ha demostrado que está completamente por la «paz social» en Chile y en esto ha arrastrado al mismo presidente de la República[78].

Recordando quizás las advertencias del viejo Clotario Blest, algunos obreros le reclaman a voz en cuello a los cordones para que terminen su dependencia del gobierno[79]. Pero si estos llamados a mantener una independencia de clase por parte del poder popular existieron, lo fueron de manera aislada y no como una tendencia estructurada.

Sin embargo, el 4 de septiembre, con ocasión del tercer aniversario del triunfo del gobierno popular, fue una verdadera marea humana la que invadió la capital para saludar a Allende. Este último, desde el balcón de La Moneda, ve desfilar durante más de dos horas, 700 mil, quizás 800 mil personas que le gritan «Mano dura, presidente![80]». Se trata de una de las manifestaciones más grandes de la izquierda en toda la historia de Chile, aunque al mismo tiempo, la aviación continúa con los allanamientos en una actitud abiertamente provocadora: las fábricas Mademsa, Madeco y Rittig son tomadas por asalto. Es lo que denuncia la Coordinación de los CI de Santiago al día siguiente en una larga carta dirigida al presidente de la República. Este documento histórico

–que habría sido redactado por Carmen Silva y Carlos Altamirano, y aprobado por los CI[81]– es un análisis trágico de estos mil días. Es también la última declaración oficial de los cordones industriales (ver anexo nº 7).

Antes, teníamos el temor de que el proceso hacia el socialismo se estaba transando para llegar a un gobierno de centro, reformista, democrático-burgués que tendía a desmovilizar a las masas o a llevarlas a acciones insurreccionales de tipo anárquico, por instinto de conservación. Pero ahora, analizando los últimos acontecimientos, nuestro temor ya no es ése; ahora tenemos la certeza de que vamos en una pendiente que nos llevará inevitablemente al fascismo. […] Exigimos a usted, compañero Presidente, que se ponga a la cabeza de este verdadero Ejército sin armas[82] […].

Después de recordarle a Allende los compromisos incumplidos, la represión a los marinos de Valparaíso y a las fábricas de los cordones, la carta concluye «hacemos este llamado urgente, compañero Presidente, porque creemos que esta es la última posibilidad de evitar en conjunto la pérdida de vidas de miles y miles de lo mejor de la clase obrera chilena y latinoamericana[83]». Este documento es hoy día un símbolo de la historia del poder popular: a la vez muy crítico y a la defensiva. Reivindicando la aplicación integral del programa de la UP, sus autores se encomiendan finalmente a Allende y al gobierno para salvar el proceso, atribuyéndole toda la responsabilidad de una eventual «destrucción y descabezamiento» del movimiento revolucionario…

Algunos días más tarde, el PC y Allende siguen buscando la forma de llamar a un plebiscito negociado con la DC, cuyos términos puedan ser aceptados por

Eduardo Frei. El 9 de septiembre, el PS organiza su última gran manifestación. Carlos Altamirano pronuncia ese día un discurso radical, a veces sindicado –erróneamente– como uno de los detonadores del golpe de Estado y muy mal recibido por la izquierda moderada[84]. El secretario general del Partido Socialista reconoce explícitamente haber mantenido contacto con los marinos de izquierda y rechaza toda conciliación con la DC. Según Altamirano, en caso de golpe, Chile se transformaría indefectiblemente en un «Vietnam heroico»: «El golpe reaccionario se aplasta con la fuerza de los trabajadores, con las organizaciones de nuestros obreros, con los comandos comunales, con los cordones industriales[85]». Alain Touraine anota entonces en su diario sociológico:

Sé que será difícil para aquellos que no han vivido en Chile las semanas que han precedido al golpe de Estado, comprender estas páginas. ¿Cómo admitir –se dirá– que los principales actores de la izquierda hayan estado ciegos hasta ese punto? Sin embargo, hay que admitirlo: en vísperas del golpe de Estado, el Partido Comunista seguía buscando el diálogo y el Partido Socialista expresaba su voluntad revolucionaria, pero no se preparaba para enfrentar la acción contrarrevolucionaria[86].

1 Hmed, Choukri, «Espace géographique et mouvements sociaux». En: Dictionnaire des mouvements sociaux, op. cit., pp. 220-227. Sobre las movilizaciones actuales, consultar el dossier: Merklen, Denis; Pleyers, Geoffrey (coord.), «Mouvements sociaux et espaces locaux», Cahiers des Amériques Latines, nº 66, París, IHEAL, 2011.

2 Sinigaglia, Jérémy, «Les (dé-/re-)territorialisations de la lutte; occupations de l'espace et travail de la signification dans le mouvements des intermittents du spectacle (2003-2006)», coloquio internacional «Espaces de vie, espaces-enjeux. Entre investissements ordinaires et mobilisations politiques», Université Rennes 2 e IEP de Rennes, 5 y 7 de noviembre de 2008.

3 Tilly, Charles, «Spaces of contention», Mobilization, Berkeley, 5 (2), 2000, pp. 135-159. Martin, Deborah, Miller, Byron, «Space and contentious politics», Mobilization, Berkeley, 8 (2), 2003, pp. 143-156.

4 Bourdieu, Pierre, «Efectos de lugar», La miseria del mundo, Buenos Aires, FCE, 1999, p. 120.

5 Castells, Manuel, La question urbaine, París, F. Maspero, 1972 y Luttes urbaines, París, F. Maspero, 1975.

6 Lefebvre, Henri, La production de l'espace, Paris, Anthropos, 1974.

7 Tilly, Charles; Shorter, Edward, «Les vagues de grèves en France 1890-1968», Annales Économies, Sociétés, Civilisations, vol. 28, nº 4, París, 1973, pp. 857-887.

8 Elizaga, Juan, Migraciones a las áreas metropolitanas, Santiago, s/f (citado por Samaniego, Augusto, Les stratégies syndicales de la CUT..., op. cit., p. 451).

9 Entrevista realizada en Santiago, 6 de mayo de 2002.

10 Cruz, Luis, «Estado, partidos y movimiento obrero», op. cit., p. 388.

11 Samaniego, Augusto, Les stratégies syndicales de la CUT…, op. cit., p. 451.

12 Roxborough, Ian, «La clase trabajadora urbana y el movimiento obrero desde 1930», Historia de América Latina; política y sociedad desde 1930, Barcelona, Cambridge University Press/Critica, 1997, t. XII, pp. 132-192.

13 Entrevistas realizadas en Santiago, 1 y 14 de mayo de 2002, respectivamente.

14 Auyero, Javier, «L'espace des luttes. Topographie des mobilisations collectives», Actes de la recherche en sciences sociales, nº 160, 2005, pp. 122-132.

15 Gould, Robert, Insurgent identities: Class, Community and Protest in Paris from 1848 to the Commune, Chicago, University of Chicago Press, 1995.

16 Verret, Michel, L'espace ouvrier, París, L'Harmattan, 1995, p. 217.

17 Salazar, Gabriel; Pinto, Julio, Historia contemporánea de Chile, op. cit., t. II, pp. 177-184.

18 Verret, Michel, L'espace ouvrier, op. cit., pp. 207-222.

19 Najman, Maurice, Le Chili est proche, op. cit., p. 21.

20 Ver también las reflexiones de Sandra Castillo sobre la territorialidad y las

«nuevas sociabilidades populares dentro de los cordones en Castillo, Sandra, Cordones Industriales. Nuevas formas de sociabilidad obrera…, op. cit.,

pp. 215-274.

21 Rojas, Jorge; Rodríguez, Cinthia; Fernández, Moisés, Cristaleros, recuerdos de un siglo…, op. cit.

22 Stillermann, Joël, From solidarity to survival, op. cit.

23 Auyero, Javier, «L'espace des luttes…», op. cit.

24 Giusti, Jorge, «La formación de las poblaciones en Santiago», Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, agosto de 1971, pp. 93-99.

25 Coloquio «S'engager dans les espaces publics: participation politique et engagements multiples», Paris, CERI-Sciences Po, abril de 2012 (coord. Combes, Hélène; Garibay, David; Goirand, Camille).

26 Trumper, Camilo, A ganar la calle. The politics of public space…, op. cit. Capítulo III.

27 Además, el CI habría podido amenazar el buen funcionamiento del aeropuerto privado de este barrio, especialmente apreciado por la clase patronal rica de Santiago (Alberto Santana en La tragedia chilena, op. cit., pp. 117-122).

28 El Mercurio, Santiago, 24 de julio de 1973.

29 Periódico Universitario, nº 2, septiembre de 1973.

30 Pinochet, Augusto, El día decisivo, op. cit., pp. 57-58.

31 Tilly, Charles, From mobilization to revolution, op. cit. (consultar el capítulo «Changing forms of collective action»).

32 Tilly, Charles; Tarrow, Sidney, Politique(s) du conflit, op. cit., pp. 39-42.

33 Tilly, Charles, La France conteste de 1600 à nos jours, París, Fayard, 1986.

34 Fillieule, Olivier, Stratégies de la rue: manifestations en France, Presses de Sciences Po, 1997, pp. 44-86. Consultar también: Fillieule, Olivier;

Tartakowsky, Danielle, La manifestation, París, Presses de Sciences Po, 2008.

35 Comisión Política del MAPU, «Técnicas de acción de masas», Documento de estricta circulación interna, Cartilla 1 B 3. En: Farías, Víctor, op. cit., anexo 1.

36 Verret, Michel, L'espace ouvrier, op. cit., pp. 217-218.

37 «Porque son portadores de sentido, algunos lugares pueden convertirse tanto en el terreno como en la clave de las políticas contestatarias. Esos lugares simbólicos se inscriben en el espacio y son parte integrante de esas políticas», Auyero, Javier, L'espace des luttes, op. cit.

38 Comisión Política del MAPU, «Técnicas de acción de masas». En: Farías, Víctor, op. cit.

39 De Frente, 27 de julio de 1973.

40 Comisión Política del MAPU, «Técnicas de acción de masas», op. cit.

41 Palieraki, Eugenia, Manifestations des rues à Santiago durant l'Unité Populaire, op. cit., anexo p. B-11.

42 Comisión Política del MAPU, «Técnicas de acción de masas», op. cit.

43 Salazar, Gabriel, Violencia política popular en las «grandes alamedas», op. cit., pp. 245-255.

44 Nos referimos aquí a la noción de «espacio apropiado» de Lefebvre (La production de l'espace, op. cit.). Preferimos hablar de «territorios», ya que según la geografía crítica, más allá de su acepción jurídica, el territorio comprende una fuerte connotación social, una dimensión de pertenencia colectiva e individual (Cf. Brunet, Roger; Ferras, Robert; Théry, Hervé, Les mots de la géographie. Dictionnaire critique, París, Reclus, La documentation française, 1993).

45 Altamirano, Carlos, «Nadie puede negarle al pueblo el derecho a su propia defensa», discurso pronunciado el 13 de julio de 1973 en el sindicato Elecmetal, Santiago (La Nación, 14 de julio de 1973).

46 Cancino, Hugo, La problemática del poder popular…, op. cit., p. 336.

47 Allende, Salvador, «Tercer mensaje ante el Congreso Nacional», 21 de mayo de 1973. En: [http://www.archivochile.com/S_Allende_UP/doc_de_sallende/SAde0010.pdf].

48 Ibid.

49 El plebiscito a menudo discutido dentro de la dirección de la UP tiene como objetivo un cambio constitucional y fue pospuesto varias veces hasta el golpe de Estado.

50 Chile Hoy, 27 de julio de 1973.

51 Esta coordinación –dirigida por Hipólito Pizarro (MIR)– se encuentra geográficamente muy cercana al CI Matucana-Mapocho. Una reunión conflictiva entre un representante de la CUT y obreros del CI Recoleta es visible en el documental de Patricio Guzmán, La batalla de Chile, op. cit.

52 Tarea Urgente, 27 de julio de 1973.

53 Entrevista realizada en Iquique, 6 de noviembre de 2001.

54 Entrevista realizada en Santiago, 4 de julio de 2002.

55 Entrevista realizada en Santiago, 1 de mayo de 2002.

56 Chile Hoy, 3 y 10 de agosto de 1973.

57 Chile Hoy, nº 61, 10 al 16 de agosto de 1973.

58 Ver la intervención de Juan Olivares, presidente mirista del CC Estación Central en el foro sobre el poder popular, organizado por Chile Hoy (10 de agosto de 1973).

59 Es lo que Edgardo Enríquez –hermano de Miguel y miembro de la Comisión Política del MIR– explicó a su llegada a Francia como exiliado político («Pourquoi nous avons échoué? Le MIR devant l’expérience de l’UP», Archives du CEDETIM, outil nº 25, inédito, s/f.),

60 Citado en Chile Hoy, nº63, 24 al 30 de agosto de 1973.

61 MAPU, «Crisis política y lucha contra el enemigo principal», De Frente, 24 de agosto de 1973.

62 «Programa del Comando Comunal de trabajadores de Barrancas», 13 de julio de 1973, Clarín, 27 de julio de 1973.

63 «Plataforma de lucha del Comando Comunal de trabajadores Estación Central», 23 de julio de 1973, Clarín, 27 de julio de 1973.

64 CC Estación Central, CC de Barrancas, CC La Florida, Coordinación de los pobladores de Lo Hermida, JAP Comunal de Maipú, CC Campesinos de Lampa y Colina, «Manifiesto de los Comandos Comunales», Santiago, agosto de 1973. En: Najman, Maurice, Le Chili est proche, op. cit., pp. 271-274.

65 De Frente, 7 de septiembre de 1973.

66 El Mercurio, Santiago, 8 de agosto de 1973.

67 CI Centro Osorno, «Conclusiones de la Asamblea del Cordón», 11 de agosto de 1973, De Frente, 24 de agosto de 1973.

68 IC, Testimonio Hernán Mery, 6 de septiembre de 1973.

69 El general Prats es el encargado de hacer este llamado al orden (El Mercurio, Santiago, 7 de noviembre de 1972).

70 Cordón El Salto, «¡No a la represión!», Valparaíso, 3 de agosto de 1973, Tarea Urgente, 10 de agosto de 1973.

71 MIR, «A combatir el paro patronal», 18 de agosto de 1973, Clarín, 19 de agosto de 1973.

72 Insunza, Jorge (PC), «Ganar la mayoría para derrotar el golpe e impedir la guerra civil», 26 de agosto de 1973, Clarín, 31 de agosto de 1973.

73 Tarea Urgente, 22 de agosto de 1973.

74 La Aurora de Chile, 26 de julio de 1973, y Tarea Urgente, 3 de julio de 1973.

75 Poder Popular, agosto de 1973.

76 De Frente, 24 de agosto de 1973.

77 Corvalán M., Luis, Los partidos y el golpe del 11 de septiembre, op. cit., p. 352.

78 Cruces, Armando, presidente del Cordón Vicuña Mackenna, «Habla la revolución chilena», Avanzada socialista, op. cit.

79 De Frente, 10 de agosto de 1973.

80 Quiroga, Patricio, Compañeros, op. cit, p. 137.

81 Entrevista con Carmen Silva, realizada en Santiago, 20 de noviembre de 2001.

82 Carta de los Cordones Industriales a Salvador Allende, 5 de septiembre de 1973. Consultada en [http://www.socialismo-chileno.org/adonis/caja4f/cordones_sag_5_9_1973_a.pdf].

83 Ibid.

84 Ver sobre este tema, las memorias del dirigente comunista Orlando Millas (Memorias 1957-1992, op. cit.).

85 La Nación, 10 de septiembre de 1973.

86 Touraine, Alain, Vie et mort du Chili populaire, op. cit., p. 204.

Capítulo 13

La revolución desarmada

En Chile como en otras latitudes, la célebre frase de Carl von Clausewitz según la cual «la guerra es la continuación de la política por otros medios» parece verificarse[1]. Como lo subraya la historiadora María Angélica Illanes:

El tema de la historia de la Unidad Popular y de los cordones industriales debiera ser, más bien, el de la no-insurreccionalidad armada de la vía chilena. Tema que en realidad constituye la gran pregunta sobre la historia del movimiento obrero en Chile[2].

Comprender el fin del poder popular implica, entonces, interesarse en la ofensiva que llevaron a cabo la oposición, las Fuerzas Armadas y los grupos paramilitares durante los últimos meses de la UP, pero también en los preparativos de la izquierda y de los cordones industriales para enfrentarlos.

La contrarrevolución en marcha

«Si a usted le sobra una mano, amárrele los cordones a Allende»

Como lo subraya la sociología de los movimientos revolucionarios,

A las imágenes y a los símbolos revolucionarios, la contrarrevolución responderá con contraimágenes y contrasímbolos. Presentará la revolución inminente, o en curso, bajo rasgos amenazadores y sangrientos; describirá las consecuencias

nefastas; denunciará a los «agitadores», «provocadores», «revolucionarios utópicos» o «revolucionarios profesionales», etc. El lenguaje y el simbolismo de la contrarrevolución no son menos ricos que los de la revolución[3].

Después del Tancazo, la contrarrevolución chilena lanza una intensa campaña ideológica. El objetivo es acompañar «la estrategia de invierno» de la oposición y preparar el ambiente para una intervención militar. Esta ofensiva reivindica los valores nacionales e invoca el respeto de la democracia amenazada por la «dictadura marxista».

Se escoge con habilidad el ángulo de ataque, ya que busca atemorizar a una población cansada de las dificultades cotidianas. Se sugiere la existencia de un poder popular poderoso, organizado y armado. A fines de julio, Tribuna, periódico del Partido Nacional, publica en su portada «Si a usted le sobra una mano, amárrele los cordones a Allende[4]». Para esta prensa, los cordones industriales servirían para «establecer, como lo pide el MIR, la 'dictadura popular'[5]». Los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados, en nombre de la mayoría del Parlamento, emiten una larga declaración en julio de 1973:

Debemos señalar que se habla abiertamente por los más altos representantes del Ejecutivo de la constitución de un poder popular. Esto significa de hecho crear un ejército paralelo en el cual están interviniendo numerosos extranjeros, lo que resulta a todas luces intolerable[6].

Los diputados agregan «quien tiene la mayor responsabilidad de esta crítica situación es el gobierno[7]».

Declaración del presidente del senado, E. Frei M., en contra del poder popular (julio de 1973)

LA PRENSA

DE SANTIAGO

"PODER POPULAR" NO ES EL PUEBLO DE CHILE



DECLARACION DE LOS PRESIDENTES DEL SENADO Y LA CAMARA

Fuente: La Prensa, Santiago, 8 de julio de 1973

El tema de un mítico ejército de los cordones industriales es a menudo evocado y además combinado con otro temor: un posible cerco de las ciudades del país por el poder popular. Las capacidades de los CI se consideran gigantescas como «dispositivos de fuerza» a través de los cuales «el marxismo está en condiciones de ejercer el control sobre medios de producción, sectores residenciales, establecimientos de enseñanza y, en general, sobre toda la actividad ciudadana en el Gran Santiago[8]».

Portada del diario conservador La Segunda

Inquietante clima crean grupos ultras del PC, MIR y PS. Reparten armamento en fábricas y poblaciones.

PODER POPULAR DEBE ARMARSE

Fuente: La Segunda, 5 de julio de 1973.

En abril de 1973, la revista derechista Qué Pasa ya había publicado un alarmante informe especial cuyo título explícito es: «Pueden los ultras copar Santiago?» y que precisamente incluye un mapa detallado de los cordones industriales, «puntos clave» y campamentos de Santiago (ver anexo nº 13).

El copamiento, en verdad, ha sido ya planeado por la ultraizquierda –y se habla de él sin disimulo– como respuesta a una eventual «aventura sediciosa» de la oposición […]. En una emergencia, la ultra izquierda puede dejar a Santiago sin servicios públicos: agua, luz, correos, teléfono y telégrafos y locomoción del Estado. Ferrocariles y LAN no serán tan fácilmente paralizables, pero ello también se conseguiría en definitiva mediante la acción de los campamentos y cordones[9].

Este miedo a las clases peligrosas, inscrito espacialmente, subraya hasta qué punto el movimiento obrero ha comenzado a trastornar las jerarquías sociales y también las espaciales, al menos en el plano de las representaciones colectivas. Se trata en este caso de un «efecto de lugar» tangible del poder popular[10].

Reportaje de la revista Qué Pasa

Informe especial:

¿PUEDEN LOS ULTRAS COPAR SANTIAGO?



● Los grupos de choque

● ¿Política-ficción?

Fuente: Revista Qué Pasa, N° 104, 12 de abril de 1973

El ataque a los cordones industriales también proviene de los dirigentes sindicales de la DC, quienes –debemos recordarlo– representan una de las fuerzas dominantes del movimiento obrero y que bajo la conducción de Ernesto Vogel, vicepresidente de la CUT, y organizados en el Frente de Trabajadores Unitarios (FUT), se rebelan contra las movilizaciones del poder popular[11]. La idea del «desbordamiento» del gobierno por extremistas incontrolados es una constante. En su editorial del 5 de agosto de 1973, El Mercurio escribe que «la acción de grupos armados continúa, pese de los esfuerzos de los militares por contener esta acción subversiva[12]». El efecto buscado es claramente el de aterrorizar a la población. Para completar la embestida, el 23 de agosto de 1973, la Cámara de Diputados aprueba un proyecto de acusación constitucional en contra del gobierno por haber sobrepasado sus atribuciones. Este texto sirve para justificar el golpe militar al mismo tiempo que denuncia explícitamente el «llamado 'poder popular', cuyo fin es sustituir a los poderes legítimamente constituidos y servir de base a la dictadura totalitaria[13]». Para la revista Qué Pasa, frente a los cordones y el peligro de «copamiento» de la capital que representarían, la conclusión también parece obvia: «¿Quién resistiría? La respuesta es sencilla, solo las Fuerzas Armadas[14]».

El poder popular frente a las Fuerzas Armadas y a los paramilitares

Como lo señalaba, con justa razón, la revista jesuita Mensaje, nada es más ajeno a la psicología, a los valores y a la visión del mundo de la oficialidad que el poder popular constituyente naciente en Chile en este momento: «A las Fuerzas Armadas, acostumbradas a la disciplina y al orden, les resulta difícil comprender este anárquico movimiento social. Sin embargo, los oficiales más lúcidos parecen convencerse entonces de que el poder popular es una realidad dinámica, viva, que sólo una masacre podría aplastar[15]». Históricamente, el rol de las

Fuerzas Armadas chilenas ha sido estar al servicio de la conservación de los privilegios de la oligarquía, aún más durante la UP, período durante el cual los militares son regularmente entrenados y formados por Estados Unidos, siguiendo la doctrina de la «seguridad nacional». Los oficiales, estimulados por la propaganda de la oposición y apoyados por grupos paramilitares, viven los mil días de la UP (y la intensa movilización popular que representan) como un «gran trauma». Progresivamente se impone la idea en las filas del estado mayor que deben hacerse cargo de la dirección de la nación y del aparato estatal frente a un mundo político incapaz de asumir tal «misión histórica» y alejar así el peligro marxista y revolucionario[16]. Si la ilusión del constitucionalismo de las Fuerzas Armadas se mantiene firme en las filas de la izquierda, el 29 de junio de 1973 hizo dudar a más de un militante. Para aquellos que siguen activos en los cordones industriales o en algunos campamentos, la multiplicación de los actos represivos parece anunciar que el ejército chileno está listo para continuar con la tradición contrarrevolucionaria de sus vecinos latinoamericanos: Guatemala en 1954, Brasil en 1964, Bolivia en 1970…

Según los datos entregados por el general Pinochet –y a pesar de las numerosas falsificaciones que inundan su libro–, es probable que, desde muy temprano, la dirección de los servicios de inteligencia militar y la comandancia general de la guarnición de Santiago hayan acumulado informaciones sobre los intentos de autoorganización popular[17]. El general Prats confirma que a inicios de julio de 1973, se ve obligado a intervenir ante el ministro de Defensa para notificarle «que hay una indisimulable tensión institucional y preocupación entre la oficialidad por lo que se denomina ‘poder popular’[18]».

A inicios de septiembre, en las fuerzas políticas civiles conservadoras se yuxtaponen dos estrategias para incitar a los militares a intervenir[19]. La primera, encarnada por la DC y Eduardo Frei, cree en la posibilidad de que un golpe abriría la vía a un nuevo gobierno civil de unión nacional. La segunda, impulsada por el Partido Nacional, con el apoyo del grupo fascista Patria y Libertad, apuesta por el aplastamiento duradero de la izquierda y del movimiento obrero gracias a un régimen militar. De hecho, estas dos estrategias se combinarán para acelerar la caída de Allende con el intervencionismo activo del presidente Nixon, respaldado por el director de la CIA, Richard Helms, y el secretario de Estado, Henry Kissinger, quienes –desde Washington– están decididos a facilitar y financiar con millones de dólares el golpe de Estado[20].

Durante los últimos meses de la UP, se producen no menos de 25 atentados

diarios en la provincia de Santiago cuyos objetivos privilegiados son las torres de alta tensión, centrales de telecomunicaciones, puentes, vías férreas y las empresas tomadas. En el transcurso del paro de camioneros de julio de 1973, el país ve recrudecer este tipo de sabotajes[21] que tienen como prioridad atacar a los cordones industriales. Edmundo Jiles fue testigo y él mismo amenazado de muerte en varias oportunidades por individuos fuertemente armados[22]; el auto de Tomás Inostroza, interventor de Paños Continental, fue completamente baleado; y en algunos casos, es con dinamita que los grupos fascistas arremeten en contra de las industrias tomadas de los cordones[23]. Según las informaciones del MIR, Patria y Libertad, junto a oficiales reservistas de la Armada y suboficiales todavía en servicio activo, estarían organizados en una «Base Operacional de Fuerzas Especiales» (BOFE), específicamente destinada a realizar acciones terroristas de mayor envergadura.

Este contexto de violencia, le ofrece a los oficiales la ocasión perfecta para iniciar la represión y preparar el golpe antes del golpe. En varias oportunidades, Allende tiene que declarar el estado de emergencia en Santiago, e incluso el toque de queda en todo el país y el acuartelamiento de la policía, carabineros y del ejército. Siguiendo esta peligrosa pendiente, el 20 de octubre de 1972, se promulga una «Ley de control de armas», con el apoyo de la DC y de la derecha –y cierta inercia de la izquierda parlamentaria– cuyo objetivo es facultar ampliamente a las Fuerzas Armadas para la búsqueda de armamento ilegal[24]. En el proyecto inicial defendido por el gobierno, esta ley debía permitir desarmar –bajo control del Ministerio de Defensa– a los grupos civiles de extrema derecha y de la izquierda revolucionaria como el MIR, prohibir la tenencia de armas de guerras, al mismo tiempo que otorgarle al país una prueba del compromiso oficialista para impedir la guerra civil. Sin embargo, es el proyecto alternativo presentado por el senador DC Juan de Dios Carmona el finalmente aprobado, proyecto que profundiza la militarización de la política en Chile, transforma el estado de excepción en «normalidad» e inaugura el fin de la participación del poder civil en el control del orden público. Según la investigación de la historiadora Verónica Valdivia:

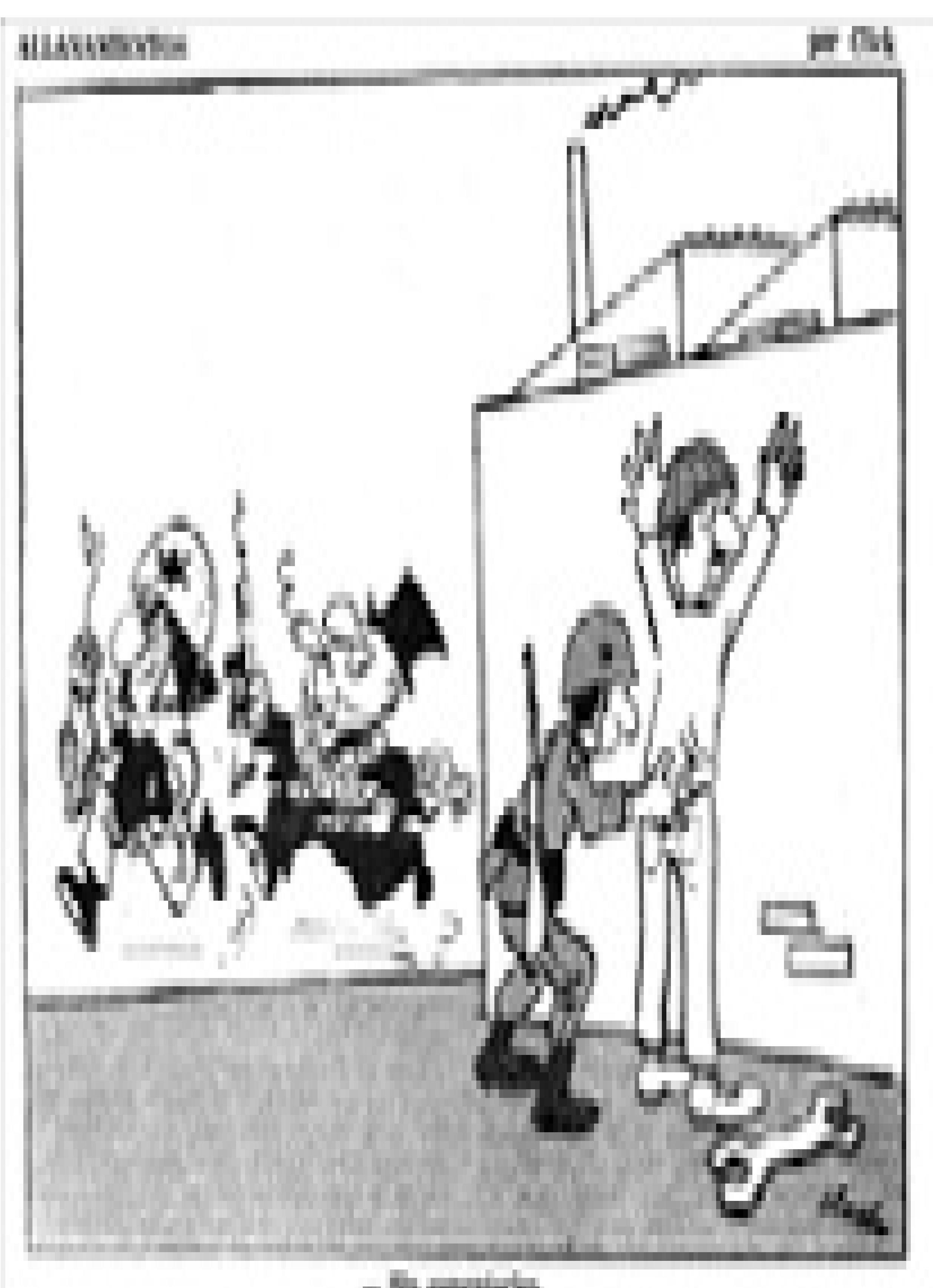
Que Allende también incorporó a las fuerzas armadas al conflicto político es indiscutible, tanto en su inclusión en el Área de Propiedad Social, como en los momentos de mayor crisis y la nominación de oficiales en su gabinete a partir de octubre 1972. Las diferencias con la propuesta de Carmona estaban tanto en el carácter ocasional que se pretendió darles y que tuvieron, como en sentido de su presencia: evitar una ruptura violenta y sin buscar ampliar sus facultades en

materia de orden interno[25].

Con su aplicación absolutamente unilateral bajo tutela militar, esta ley –rápidamente llamada «ley maldita» por militantes de izquierda– abre la puerta a una especie de guerra contrarrevolucionaria sui generis, llevada a cabo en contra del movimiento popular, antes incluso del golpe de Estado. Es entonces contando con el respaldo de este arsenal legislativo que son torturados los marinos de izquierda en agosto de 1973 y varias decenas de fábricas de los CI son brutalmente allanadas por los militares[26].

En esas condiciones, la aplicación violenta y dirigida de la Ley de control de armas es aplaudida, con entusiasmo, por las clases dominantes. El Mercurio la considera como una forma de combatir «el potencial ofensivo de ese 'Poder Popular'» y como «requisito mínimo para evitar un enfrentamiento grave y extenso[27]». Cuando, a fines de julio, soldados en carros blindados ocupan el local de la CUT en pleno centro de la ciudad de Santiago, para la derecha tiene «como consecuencia inmediata una mayor tranquilidad a la comunidad[28]». Para varios oficiales, el objetivo explícito es intervenir preventivamente ahí dónde juzgan que podría haber resistencia en caso de golpe de Estado. En términos de historia comparada, la revista Punto Final subraya –con razón– que es este tipo de represión militar «legal» (realizada entre 1968 y 1969) la que preparó la llegada de la dictadura en Uruguay[29].

Caricatura de Click denunciando el caracter antiobrero de la ley de control de armas



Fuente: Punto Final, N°191, 28 de Agosto de 1973.

El carácter represivo preventivo es evidente –por ejemplo– durante las acciones organizadas en contra del CI de Punta Arenas, en el extremo sur del país. En esta ciudad, la intervención combina efectivos del Ejército, de la Fuerza Aéreas y de la Armada bajo las órdenes del general Torres de la Cruz (futuro encargado de la represión en la provincia de Magallanes, a partir del 11 de septiembre). El 4 de agosto de 1973, vehículos blindados, ametralladoras montadas sobre jeeps, cañones de diverso calibre invaden el sector obrero de Punta Arenas. La operación es sobrevolada por un avión bimotor que cuadrilla la zona[30] y el ataque más violento se produce en la principal empresa del Cordón Industrial (Lanera Austral), provocando la muerte del obrero textil Manuel González Bustamante y la destrucción parcial de las herramientas de producción[31]. Dos días antes, había sido el turno de la industria Cobre Cerrillos. El interventor de la empresa, Jaime Flores, explica a la prensa la violencia del allanamiento, realizado por la Fuerzas Aérea (Fach) con ametralladoras y helicóptero: «Revisaron oficina por oficina, hicieron pedazos los muebles y se botaron los documentos. Aquí no encontraron ni una sola arma. Estuvimos media hora con los brazos en alto[32]».

En todos estos allanamientos, los soldados sólo encuentran bastones, bombas molotov, etc. y, en el mejor de los casos, algunas pistolas de bajo calibre (una veintena de pistolas en pésimo estado se encontraron, por ejemplo, en el CI Cerrillos, de acuerdo a Edmundo Jiles[33]).

Este tipo de intimidación se lleva a cabo en todo el país, incluidos locales de los partidos de gobierno, periódicos de izquierda, casas particulares de personajes públicos conocidos por su implicación política, en el campo (como en Nehuentue), etc. En Osorno, el 15 de julio de 1973, el local de la CUT es violentamente allanado[34]. Seis días más tarde, bajo la presión de los trabajadores del Cordón y de la CUT, Dirinco de Osorno procede a la reapertura de los comercios que participan en el boicot, momento en el cual intervienen más de cien soldados armados con ametralladoras que obligan a los funcionarios de Dirinco a retirarse. Los manifestantes son evacuados a punta de culatazos, y a la mañana siguiente se envían órdenes para detener a los dirigentes sindicales del

CI y responsables regionales de toda la izquierda, exceptuando al PC. Héctor Vega, presidente del CI, es encarcelado: «ya era el Ejército el que reinaba en las cuatro provincias de la zona: Cautín, Valdivia, Osorno, Llanquihue», recuerda[35]. También menciona que José Miguel Varas, director del Canal 9, le aconseja hablar con el comandante en jefe del Ejército, el general Pinochet, a quien presenta entonces como un oficial «apolítico». Vega le escribe una larga carta en la cual le solicita que se realice una investigación de la actitud inaceptable de los militares en la región[36]. Esta misiva dirigida a quien sería el sepulturero de la revolución chilena y considerando que proviene de un dirigente del CI es representativa de las ilusiones que aún, en agosto de 1973, mantiene el conjunto de la izquierda. «Tú sabes quién era el comandante en esa época: el general Pinochet!» exclama hoy Héctor Vega, y agrega «estábamos completamente equivocados[37]». A pocos días del golpe (el 4 de septiembre), la Fach allana Mademsa, Madeco, Sumar e Indugas, industrias clave de la combatividad obrera. En Sumar, rodeada de vehículos militares de la Fach, algunos obreros resisten a la violenta intervención y se produce un importante tiroteo, incluso con presencia de algunos «francotiradores» en la empresa, según versión de El Mercurio. El despliegue militar termina con tres heridos en las filas de los trabajadores, uno de ellos «en estado grave[38]». Igual que el caso de los marinos torturados, el gobierno parece impávido, como paralizado, respetuoso de una legalidad que estrangula progresivamente su capacidad de acción, y también la de sus apoyos dentro del movimiento popular. Los blancos de la represión militar son en este sentido claros:

El tipo de locales allanados estaba estrechamente relacionado con el conflicto político del momento y la presión ejercida por la oposición para el derrocamiento del gobierno socialista: la Dinac estaba en el centro de la disputa política del año anterior por el control de la distribución […]. La CUT, sinónimo de poder sindical y su presencia en el Estado; industrias estratégicas en manos de los trabajadores –los cordones– y del Estado, encarnación del poder obrero. Es decir, la amenaza al capital que significó la experiencia de la UP[39].

Para el historiador Patricio Quiroga, «la República asistía a un drama wagneriano. La simple militancia no podía entender cómo la dirección política de la UP asistía estupefacta a su desmoronamiento[40]».

El tema de la defensa armada

¡No a la guerra civil!

Hasta los últimos momentos de Allende, la mayoría de la UP moviliza sus tropas en torno a la consigna repetida hasta el cansancio de «No a la guerra civil!», sin darse cuenta de que ésta –en gran parte– ya había comenzado. Sólo unos días previos al golpe, la dirección del PC arenga a sus militantes afirmando que «así como la legalidad del Gobierno es una fuerza contra el golpe, así lo es también el predominio del espíritu profesional […] en las filas de las Fuerzas Armadas[41]».

Una de las mentiras más grandes de la Junta Militar fue hacer creer que la izquierda estaba extremadamente bien preparada desde el punto de vista militar y lista para organizar un «autogolpe» con el objetivo de terminar con las instituciones democráticas y las Fuerzas Armadas. Paralelamente a este supuesto «plan Z», los oficiales golpistas hablaban de la presencia de 15 mil peligrosos guerrilleros extranjeros. Esta imagen fantasmagórica es omnipresente en el «libro blanco» de la dictadura, cuya redacción es encargada al historiador reaccionario Gonzalo Vial[42]. Estos antecedentes han sido desestimados por todas las investigaciones serias que se han realizado posteriormente, incluida la comisión presidencial «Verdad y Reconciliación» (1990), que reconoce la ausencia casi total de resistencia armada el día del golpe de Estado[43]. La mayor parte de los testimonios señalan que ningún partido estimó realmente lo que podría significar la violencia del golpe de Estado. Hoy, Carlos Altamirano precisa: «Yo sostengo que, en lo fundamental, el gran vacío, el gran error de nuestro gobierno y de la experiencia de la UP fue haber pretendido realizar una “revolución” sin armas. Una revolución desarmada[44]». Este «vacío histórico» también ha estado en el centro de la autocrítica del Partido Comunista a partir de 1977[45], la opción táctica que realiza la izquierda antes de 1973 es respetar el funcionamiento de las instituciones militares. Allende y los «gradualistas» se proponen asegurar el monopolio de las armas para los militares y creen poder reforzar su cohesión, integrándolos al gabinete cívico-militar. Por su parte, el MIR y –en menor medida– el MAPU de Garretón y el PS, levantan la idea de la necesidad de armar al pueblo, aunque paralelamente llaman a los soldados y oficiales «honestos» a desobedecer a los generales «sediciosos». La organización

de Miguel Enríquez multiplicó los llamados en ese sentido[46].

El MIR –con fuerzas muy limitadas y bajo la conducción de Andrés Pascal Allende[47]– intentó realizar un trabajo político semiclandestino con soldados y suboficiales. El PC parece haber hecho lo mismo. Así como lo reconoce hoy Manuel Cabieses, existía en toda la izquierda la convicción de que amplios sectores militares estaban dispuestos a defender el gobierno[48]. Adonis Sepúlveda –senador socialista en 1973– también lo ha confidenciado: la UP puso todas sus esperanzas de resistencia en manos de los mismos militares.

El Partido Socialista no tenía –ni podía tener– una estrategia de combate para luchar solo. Su acción estaba encuadrada dentro de las medidas de defensa del gobierno. Pues bien, el gobierno preparó planes de defensa, pero esos planes los dirigía […] el general Pinochet, como comandante en jefe[49].

Por cierto, las direcciones de cada partido también han previsto una cierta cantidad de medidas. El Libro blanco de la dictadura habla de decenas de miles de revólveres y pistolas, metralletas, lanzallamas y otros cañones antitanques, pero la realidad es muy distinta. En su testimonio, Carlos Altamirano entrega sus cálculos: «No habrían, entre militantes comunistas, socialistas, del MAPU e incluso del MIR, más de 1 500 personas con una mínima formación militar. ¿Qué llamo «mínima formación militar»?, simplemente con capacidad de disparar armas livianas[50]». Hacen parte de los efectivos militares del PS la guardia personal de Allende –los GAP– (algunas decenas de hombres bien preparados) y unas 150 personas que pertenecen al aparato militar del partido[51]. Los «Grupos Especiales Operativos» (GEO) socialistas son los que se supone deben formar a los militantes para resistir los primeros momentos del golpe de Estado y quienes elaboraron un plan de defensa del gobierno, llamado «Plan Santiago». Este se basa sobre la teoría de los círculos concéntricos: se trata de desplazarse desde el centro hacia la periferia, amplificando el arco de la resistencia y retrasando el avance de los militares sediciosos. Para ello se contaba con la ayuda de los cordones industriales y de militares leales, así como con acciones subversivas militantes que tendrían lugar en las provincias[52]. La Fuerza Central del MIR y algunos miembros de los Grupos Político Militares (GPM, en la base de la organización) también habían accedido a cursos de entrenamiento paramilitar, a veces incluso en El Cañaveral, donde son formados los miembros del GAP[53]. Según Guillermo Rodríguez, la Fuerza Central del MIR

está compuesta por unos cuarenta hombres armados y divididos en dos unidades, equipados de fusiles e incluso lanzacohetes[54]. Miguel Enríquez, Andrés Pascal y Arturo Villabela redactan el «plan estratégico de lucha político-militar contra el golpe», el cual es aprobado en febrero de 1972. Para Pascal Allende, el plan vacila entre dos opciones, sin realmente decidirse entre, por un lado, la ocupación de territorios urbanos en la perspectiva de una acumulación de fuerzas junto a los militares de izquierda, y por el otro el repliegue defensivo en el campo, para desde allí librar una guerra de guerrillas. Como sea, el MIR habría contado con no más de 200 armas de guerra y espera recibir otro tanto de parte de los soldados o del GAP, en caso necesario[55]. Los comunistas disponen de las «comisiones de vigilancia» (de 10 militantes) y de varios «grupos chicos» (5 personas). Estos últimos forman un contingente de alrededor de 200 personas, bien preparadas. Según un informe posterior de Luis Corvalán, el armamento del PC se limita a un número indeterminado de armas cortas, 400 fusiles automáticos y 6 lanzagranadas (con 3 proyectiles cada uno). El secretario general debe admitir además que de todos modos, la formación político-militar nunca fue realmente tomada en serio por la dirección[56]. Por lo demás, si se realizaron algunas reuniones de coordinación entre los diferentes aparatos militares de los partidos de izquierda, esto quedó en un nivel extremadamente embrionario[57]. Sin embargo, aún convencida de contar con el apoyo de una mayoría de militares, la izquierda se deja llevar por un verbalismo revolucionario bélico, muy alejado de su real capacidad político-militar. Así, el 11 de agosto de 1973, Luis Corvalán, ante una multitud de militantes enardecidos, declara:

Si la sedición reaccionaria pasa a mayores, concretamente al campo de la lucha armada, que a nadie le quepa dudas que el pueblo se levantará como un solo hombre para aplastarla con prontitud. En una situación tal, que no deseamos, que no buscamos, que queremos evitar, pero que se puede dar, no quedará nada, ni siquiera una piedra, que no usemos como arma de combate[58].

Con la misma elocuencia el MAPU anuncia, el 24 de agosto de 1973: «Mañana cuando empiece el combate, bajo el ruido de la dinamita y la metralleta, al calor de los gritos y canciones del pueblo, abriremos el camino a la verdadera victoria[59]».

Portada de ¡Poder!, ligado al MAPU de Santiago (mayo 1973)



APOYADO EN EL GOBIERNO:

SOLO EL PODER POPULAR PODRA DETENER GUERRA CIVIL



OPERACION RODRIGO AMBROSIO:

el Mapu perfecciona su organización, para conducir correctamente a las masas

¡UTILIZAN A LA JUVENTUD!

Fuente: ¡Poder!, 29 de mayo de 1973

Los cordones industriales: ¿un ejército revolucionario?

Después de la descripción de las importantes debilidades de la táctica político-militar de los partidos de izquierda, parece casi inútil preguntarse si realmente existió un ejército de los cordones industriales. Según las memorias del general Pinochet, los «Cordones de la muerte» eran peligrosas escuelas de guerrillas marxistas y el CI Vicuña Mackenna poseía una variada dotación de armamento[60]. Hasta el 11 de septiembre, la oposición multiplicó este tipo de declaraciones y El Mercurio consagra portadas y editoriales sobre este supuesto ejército clandestino de los cordones. El Libro blanco del régimen militar cita un «plan de defensa del cordón Cerrillos», un escrito también apócrifo y que podría basarse parcialmente en algunos documentos de la izquierda en manos de los servicios de inteligencia.

No se puede negar de que se hayan considerado planes de protección de los cordones industriales, pero en este caso igualmente, la prensa militante parece poner sus deseos por sobre la realidad. Así, para el MAPU, no hay duda de que «en caso de guerra civil, cada obrero será un miliciano, cada sección una milicia y cada cordón un ejército[61]». Igual de «temeraria» y dogmática, Tarea Urgente publica, apenas cinco días antes del golpe:

No tememos a la sedición, ni al enfrentamiento. La clase [obrera] está preparada […] esta guerra será hasta el triunfo final de la revolución socialista […] Proletarios y líderes revolucionarios, transformemos los Cordones Industriales en verdaderos cuarteles operativos de la revolución socialista[62].

Sin embargo, nunca existió un ejército de los CI más allá de la retórica de algunos sectores de izquierda o en la propaganda de la oposición. Guillermo Rodríguez y Javier Bertín revelan que durante el Tancazo efectivamente existió un plan de defensa del CI Cerrillos. Pero, una vez superado el peligro, los

militantes de la UP abandonan la comisión militar que se había formado y llaman a confiar en el gabinete cívico-militar[63]. Esta impresión es confirmada por Peter Winn, quien participa en las últimas asambleas del cordón industrial O'Higgins, realizadas en la industria ex-Yarur. La Prensa denuncia la existencia de iniciativas de autodefensa en varios CI, los que son atribuidos –seguramente con razón– al trabajo del MIR. Pero estas pocas medidas son tardías y muy limitadas. A inicios de julio, en un documento confidencial del PS (filtrado por la prensa) se solicita establecer una lista completa de las fábricas tomadas, de las localizaciones realizadas y también considera iniciar la confección artesanal de «instrumentos de defensa popular». Esta circular se acompaña de instrucciones dirigidas a los militantes del cordón O'Higgins[64]. De hecho, aunque muy básicas, las únicas medidas efectivas son las que los partidos ofrecen a algunos de los militantes de los CI: entrenamientos de autodefensa, cursos para el uso de bastones, armas blancas y –en el mejor de los casos– armas de fuego. Rodrigo recuerda –entre risa y desesperanza– que, siendo obrero y delegado del MAPU en su CI, aprende algunas llaves y posiciones de karate[65]. Carmen Silva por su parte, cuenta que después del Tancazo

un diputado socialista […] nos puso en contacto con los Carabineros. Yo iba de coordinadora de los Cordones con seis hombres de confianza de cada Cordón para que nos dieran entrenamiento militar. El que nos enseñaba era un brasileño […]. Después dijeron que ese tipo entregó a mucha gente, sobre todo del Cordón Macul[66].

Según Tomás Inostroza, la falta de armas y municiones en el CI Macul hace que toda idea de defensa sea sólo hipotética: las únicas armas que el CI posee en cantidad, son las bombas molotov, fabricadas por los pobladores del sector[67]. Por otra parte, como lo señala Guillermo Rodríguez, las famosas «tanquetas» de los cordones industriales (mencionadas incluso en la prensa internacional) no son más que montacargas forrados con planchas de acero y que debían servir para proteger las fábricas de un eventual ataque de los paramilitares de extrema derecha![68]

Los estudiantes, los profesores, estábamos muy convencidos de que venía el golpe –recuerda Teresa Quiroz–, pero nunca nos imaginamos [su] magnitud. Nuestro imaginario era que iban a llegar probablemente los tanques, los obreros iban a resistir, iban a luchar hasta el final, el tanque no iba a entrar, poco menos

que iban a tocar el timbre… [Pero] todo fue violento, muy violento. En el imaginario [nuestro] se creía que bastaba con resistir: había muy pocas armas, y había una noción de organización que bastaba con estar organizados o con avisarse mediante distintos métodos de una fábrica a otra y, en ese momento, resistir, probablemente alguno iba a morir, pero no que el enfrentamiento iba a ser tan confrontacional[69].

A sólo un mes del bombardeo a La Moneda, el 9 de agosto, Luis Figueroa en persona va a negociar la participación de los CI de Santiago en la masiva marcha organizada por la CUT, cuyo lema es «No a la sedición y a la guerra civil[70]». El 28 de agosto, esta consigna pacifista es retomada por Rolando Calderón en nombre de la CUT, en una gran manifestación, donde el dirigente socialista insiste, una vez más, en valorar el rol de los oficiales legalistas[71]. Los CI, subordinados a esta orientación pacifista, no pudieron, en ningún momento, configurar una infraestructura defensiva susceptible de resistir el golpe de Estado. Es lo que por lo demás quedará cruelmente de manifiesto el 11 de septiembre.

«El ejército y el pueblo unido…» (julio 1973)


EL EJERCITO Y EL PUEBLO
UNIDO JAMAS SERAN VENCIDOS

Fuente: La Aurora de Chile, N°32, 19 de julio de 1973

«Mañana, cuando empiece el combate…»

11 de septiembre de 1973

Si los mil días de la Unidad Popular habían sido vertiginosos, el tiempo sufrió una enorme aceleración el 11 de septiembre. Fue un día de definiciones. Lo que estaba en juego no solo era la política, el cambio, el socialismo; lo que ahora estaba en el centro de todo era la vida sin abstracciones, era la propia vida[72].

A principios de septiembre, Patria y Libertad ya no vacila en distribuir a gran escala panfletos que le dejan dos «alternativas» a Allende: la renuncia inmediata o el suicidio:

Propaganda de Patria y Libertad (1973)

1973

Allende frente a dos alternativas:

RENUNCIA O SE SUICIDA

Es una orden de Chile

El pais no resiste más
la canallesca administración
extranjera.
Los chilenos estamos cansados
de la intervención soviética
y cubana.
El pueblo, que la UP dice
proteger, ha sido engañado,
es el principal perjudicado.

Si no acepta la orden de Chile,
el pueblo le hará juicio
solicitándole su vida
y la de sus cómplices.

Luchar para vencer o morir



Todos saben que el enfrentamiento está próximo, que es una cosa de horas, a lo más, de días. Como lo recuerda Rigoberto Quezada, el tema del armamento vuelve una y otra vez a ser discutido en las bases obreras: «el golpe estaba anunciado en los diarios, en la radio y hasta por el presidente del Senado, Eduardo Frei (padre). Se hablaba mucho de la revolución española, por ejemplo, donde los obreros asaltaron los cuarteles y se armaron[73]». El golpe está presente en todas las bocas y en todos los espíritus. Allende tiene plena conciencia de esta coyuntura dramática y juega su última carta, aunque tardía: el llamado a un referéndum popular, para cambiar la constitución con la esperanza de poder estabilizar el gobierno hasta las elecciones presidenciales de 1976. Con bastante certeza se puede decir que si el golpe de Estado ocurre precisamente el 11 de septiembre, es porque el presidente de la República tiene proyectado convocar al plebiscito esa misma tarde, como se lo ha anunciado personalmente al general Pinochet. Este último no necesita más para decidirse a actuar rápidamente[74]. No nos detendremos aquí en los detalles de las operaciones militares que van desde la intervención de la Armada en el puerto de Valparaíso, temprano en la mañana del 11 de septiembre, hasta los desplazamientos de tropas en la capital, acontecimientos ya bastante conocidos[75]. Se trata de una guerra relámpago de algunos días, una guerra interna llevada a cabo con vistas al poder total. Comprende el uso de aviones de caza y tanques, y empuja al suicidio del presidente Allende en el palacio presidencial de La Moneda[76], a eso de las dos de la tarde. Rechazando el ultimátum de los oficiales, Allende decide resistir algunas horas sin dejar el palacio presidencial como se lo solicita el aparato militar del PS. Junto a algunas personas de su círculo cercano y miembros del GAP, el compañero-presidente tuvo el tiempo de pronunciar su último discurso (conocido como el «Discurso de las grandes Alamedas»), que es también un testamento político dejado a las generaciones futuras. Como lo ha explicado posteriormente el escritor Gabriel García Márquez, la muerte de Allende en La Moneda en llamas, es una parábola que resume las contradicciones de la vía chilena: la de un militante socialista defendiendo, metralleta en mano, una revolución que él deseaba pacífica y una Constitución formulada por la oligarquía chilena a inicios del siglo[77]. Esta muerte es también la de un hombre íntegro y fiel a sus principios y compromisos hasta el final.

Hasta las 8 de la mañana del mismo 11 de septiembre, el presidente de la República tuvo confianza en la lealtad del general Pinochet y espera, de un minuto a otro, su intervención en defensa del gobierno[78]. Es sin embargo este último quien encabeza la rebelión. Los soldados, carabineros o suboficiales que rechazan lo que consideran una traición, son inmediatamente fusilados. La estrategia militar desencadenada en la capital sigue un plan simple pero eficaz: incursión directa a La Moneda para destruir (simbólica y físicamente) el poder central y desde allí, dirigirse hacia la periferia con la prioridad de tomar el control de los cordones industriales[79]. En sus memorias, el general Pinochet manifiesta su sorpresa ante la débil resistencia encontrada en los CI: «Luego se inició una dura labor de limpieza. En esos momentos finales no recibimos en los cordones industriales ninguna de las reacciones que temíamos[80]». Inmediatamente después del golpe de Estado, en el mundo circularon numerosos rumores que anunciaban una oposición masiva de los obreros chilenos al golpe.

Hoy conocemos más precisamente la amplitud de esta reacción popular y «primera resistencia[81]». En efecto, el principal foco de resistencia tuvo lugar en la zona sur de Santiago, gracias al accionar de militantes de izquierda aguerridos, miembros de los aparatos militares del PS y del MIR que se desplazaron dentro de los cordones, muchas veces con el apoyo activo de los trabajadores dispuestos a combatir. Una vez iniciado el golpe, el aparato militar del PS (encabezado por Arnoldo Camú) logra congregar y armar a una centena de hombres, mientras que en la industria FESA del CI Cerrillos se reúne la Comisión Política de este partido[82]. Las instrucciones consisten en iniciar un plan de defensa del gobierno que intentaría liberar una zona de la ciudad donde pudiesen coordinarse acciones en colaboración con los obreros de los CI de San Joaquín, Santa Rosa y Vicuña Mackenna. El punto de encuentro fijado es la industria Indumet (CI Santa Rosa), donde se reúnen los responsables del PC, del PS y del MIR y a los cuales se suman alrededor de 200 trabajadores combativos. A las 11 de la mañana, los dirigentes nacionales de cada organización evalúan su capacidad político-militar inmediata[83]. Como lo relata Patricio Quiroga, testigo de esta reunión, para los militantes la precariedad de la preparación es evidente. La propuesta del PS (tomar por asalto una unidad militar para avanzar hacia La Moneda) es rechazada por el PC, que prefiere confiar en la reacción tan esperada de las Fuerzas Armadas (para finalmente pasar a la clandestinidad). Por su parte, Miguel Enríquez –que está de acuerdo en intervenir– anuncia que la Fuerza Central del MIR necesita varias horas más para estar operativa, y reunir… sólo cincuenta hombres bien armados. Según Guillermo Rodríguez, el MIR desde el 6 de septiembre había puesto en vigilia su aparato político-militar (y por ello

había enterrado las armas), persuadido de que el gobierno estaba en un nuevo proceso de conciliación con la derecha[84].

Rápidamente, las fuerzas represivas intervienen, lo que obliga a los hombres armados a arrancar por la parte de atrás de Indumet. Ahí se produce la dispersión de varios de entre ellos, entre los cuales un grupo dirigido por Miguel Enríquez, que escapa de la zona. Es desde aquí también que se inicia el peligroso periplo de varios militantes socialistas, incluida la columna dirigida por Arnoldo Camú. Esta huida se desarrolla en el desorden, aunque después de enfrentamientos en la población La Legua, varios de los combatientes logran llegar a su objetivo: la fábrica Sumar-Polyester. Sumar es emblemática, ya que en esta industria varias decenas de armas de guerra han sido efectivamente encaminadas y distribuidas por el PS.

Con estas armas se comenzaría a organizar la resistencia en Sumar Poliéster, y los esfuerzos de los trabajadores de la industria se verían ampliados a primeras horas de la tarde, cuando comienzan a llegar a la fábrica algunos de los trabajadores y militantes que se habían replegado directamente desde Indumet, así como aquellos que habían realizado el camino por La Legua, los cuales además venían reforzados por algunos pobladores militantes del comité local Galo González del PC. De esta forma se va tejiendo, en las primeras horas de la tarde del 11, una espontánea alianza para combatir el golpe[85].

Desde esta misma fábrica, el grupo de Camú logra incluso impactar –desde una copa de agua– un helicóptero que sobrevuela la zona y tiene que replegarse, acontecimiento grabado en la memoria obrera y de la población La Legua hasta hoy.

Pero es la excepción que confirma la regla. Ya en la tarde, varios militantes han caído bajo las balas y la mayoría de los trabajadores combativos de los CI se encuentran paralizados, a falta de directivas y armamento. El anuncio de la muerte de Allende, para muchos de ellos, significa el fin de toda tentativa de oponerse al golpe de Estado. La dirección del MIR, muy rápidamente, decide que el enfrentamiento es imposible y que deben replegarse. Por su parte, la CUT se quedó muda, sin organización ni radios clandestinas capaces de articular a los trabajadores. Este dato es aún más impresionante si recordamos que sólo algunos días antes (el 4 de septiembre), la central sindical había logrado reunir a varias

centenas de miles de personas en apoyo al gobierno. Sin ningún poder de reacción, la caída de Allende es también la de la CUT, poniendo de este modo término a una larga crisis del movimiento sindical. Sin embargo, fueron miles los que, en vano, esperaron las armas en sus respectivas industrias. Mireya Baltra, que el día del golpe va al cordón Vicuña Mackenna por orden de su partido, admite «los obreros me pedían las armas[86]…». El sentimiento de José Moya, que también aguarda en su fábrica el armamento con qué luchar, lo encontramos en la mayoría de los militantes de los CI:

Pasamos toda la noche esperando armas que no llegaron nunca. Sentíamos balaceras por el cordón San Joaquín, donde había varias empresas; ahí tenían armamento por lo menos en una de ellas, una empresa textil, la Sumar […] nuestro sueño era que en cualquier momento nos podía llegar armamento y también podíamos hacer lo mismo. Pero no pasó nada[87].

En Valparaíso, la misma constatación: «teníamos un sentimiento de impotencia total –recuerda Pierre Dupuy–. Es inconcebible. ¿Qué están haciendo los dirigentes de la UP? […] es más fuerte que mí, tengo que gritar, nuestros dirigentes nos han traicionado[88]». Sin hablar de traición, el pequeño grupo que milita en el CI Cerrillos también rechaza las instrucciones de su partido de replegarse. Durante la mañana, patrullas de soldados recorren las avenidas e instalan ametralladoras y tanquetas frente a las fábricas, controlando inmediatamente las vías de acceso a los CI. Es el caso en Vicuña Mackenna y también en Cerrillos. En la zona en la que Guillermo Rodríguez es encargado, cuando él llega al lugar ya hay varios batallones militares fuertemente armados:

Yo diría que no hubo funcionamiento [del sistema de defensa] para el 11 de septiembre en el Cordón y tampoco lo hubo de la estructura del MIR. Quienes llegamos ahí a tratar de conducir la situación somos los miembros de la dirección del GPM. No llegó ninguno de los que respondían a mi mando, nos quedamos sin armamento[89].

Después de varios retrasos, estos militantes de Cerrillos logran formar un contingente bastante considerable en la industria Perlak, abandonada por los trabajadores. Al anochecer, a pesar de varios enfrentamientos con los soldados,

dos pequeños grupos de 20 y 30 personas siguen dispuestos a pelear. El desbande general es tal que recuperan armas abandonadas en los CI por otros militantes de la UP. Durante toda la noche, atacan a las patrullas que pasan cerca y dificultan el desplazamiento de las unidades militares. Este tipo de actos heroicos ocurren en varios lugares del país, pero todo es muy precario, sin coordinación ni centralización de las direcciones de los partidos, a tal punto que, durante la noche, los dos grupos que resisten en Cerrillos intercambian disparos entre ellos, creyendo que se enfrentaban al enemigo: un militante es mortalmente herido…

En el caso de ex-Yarur,

Cuando no aparecieron ni las fuerzas amigas, ni las armas, y quedó claro que Allende estaba muerto y la batalla militar perdida, los angustiados trabajadores fueron enviados a sus casas. Unos pocos líderes se quedaron en ex-Yarur, ya fuera para vigilar la fábrica contra robos y daños de los cuales pudieran hacerlos responsables, ya en una última postura de desafío que terminó cuando las tropas se acercaron a la fábrica y los líderes más revolucionarios saltaron el muro del recinto y desaparecieron en la resistencia clandestina[90].

Hernán Ortega, después de una reunión realizada en Fensa, ordena el repliegue inmediato de los CI: «porque lo que vi venir, era una masacre». A pesar de algunas reacciones valientes pero esporádicas, ese 11 de septiembre de 1973 los cordones industriales se mantuvieron paralizados. Esta afirmación es confirmada, indirectamente, por una revisión minuciosa de las sentencias dictadas por los tribunales militares, después del golpe de Estado: sólo se realizaron siete consejos de guerra, involucrando a 55 personas relacionadas con los cordones industriales[91]. En las poblaciones más organizadas se repite la misma situación. Según Christine Castelain, sólo el campamento Ho-Chi-Minh posee un cierto grado de preparación (y dos metralletas). En Nueva Habana, hacia las 10 de la mañana, se realiza una reunión de la directiva y, más tarde, una de los cuadros pobladores del MIR. Por lo demás, ¡sólo hay un fusil para defender todo el campamento!, razón por la cual el MIR llama a no seguir a los pobladores que decidieran resistir[92]. Por su parte, Abraham Pérez insiste en la falta de preparación de los miristas del campamento para enfrentar este tipo de situación. Recuerda que en un primer momento, cuando el golpe comienza, es el único dirigente presente en una asamblea que tuvo lugar en el campamento y en

la que participan 500 personas que le preguntan cuándo llegarán las armas[93]. En el sur, misma situación, misma impotencia: la represión en Constitución –por ejemplo– comenzaría alrededor de las 23 horas del día 11 de septiembre de 1973, profundizándose el día 12 contra obreros, pobladores y militantes de izquierda en general, bajo la dirección de efectivos militares de la Escuela de Artillería de Linares, al mando del capitán Juan Morales Salgado, sin posibilidad de resistencia[94].

Finalmente, sin la ayuda de soldados de izquierda y sin una planificación político-militar de largo plazo, el poder popular es incapaz de organizar una resistencia armada al golpe de Estado. Como lo dice hoy Guillermo Rodríguez, quien junto a sus compañeros y a pesar de todo combatió ese día, «creo que peleamos para la historia en ese momento, pero era para dejar clavada una banderita diciendo: hicimos el intento y en otras partes no se hizo nada[95]».

La represión y el inicio del terrorismo de Estado

La violencia de Estado invade el país y pone en su mira, en primer lugar, a los militantes de izquierda y dirigentes del movimiento sindical y popular, a todos aquellos que se lanzaron en la aventura del poder popular. En los testimonios, la dimensión traumática de esas horas de violencia intensa es omnipresente. Es el inicio del «período negro» para los militantes que sufrirán la detención, tortura, el asesinato de sus cercanos, el exilio y/o la clandestinidad durante años. Al mismo tiempo que la dictadura impone su manto de terror al conjunto de la sociedad, los habitantes de las poblaciones, los obreros de los cordones, los militantes de izquierda, conocen el significado concreto de lo que puede representar el terror de Estado[96]. Un ejemplo entre muchos, es el de Carlos Mujica, trabajador de la industria metalúrgica Alusa, militante del MAPU y delegado del cordón Vicuña Mackenna:

El día del golpe ya había muertos en la calle, los traían de otro lado, los tiraban ahí […] ¡y uno no podía hacer nada! Creo que lo más duro fue en ese tiempo, en el año 1973, 1974. Después en 1975 me va a buscar la CNI[97] a Alusa, me llevan detenido y me llevan a la Villa Grimaldi, ahí a uno lo tiraban arriba de la parrilla, en un somier y le aplicaban corriente en las piernas, en los muslos. Ellos sabían

que era delegado del sector[98]…

Son centenas de miles los que pasan por las manos de los servicios secretos de la Junta Militar y que son torturados.

Guillermo Orrego tenía 24 años y trabajaba en Standar Eléctric, fábrica que era filial de la ITT norteamericana y pertenecía al Cordón Industrial Vicuña Mackenna. El 11 de septiembre de 1973 estuvo en su fábrica, junto a decenas de trabajadores, para cumplir el llamado de los Cordones y la CUT de cuidar las fábricas y empresas. Al día siguiente, fue detenido en otra fábrica del sector, Textil Progreso, donde se dirigió para tratar de coordinar la resistencia. Guillermo fue trasladado al Estadio Chile, en el centro de Santiago, donde vio a Víctor Jara antes de ser asesinado, aproximadamente el 16 de septiembre fue transferido al estadio nacional, en la escotilla 7. Algo similar vivió Ismael Ulloa, que era dirigente sindical de Cristalerías Chile, también perteneciente al Cordón Vicuña Mackenna. Luego de ser detenido, Ismael estuvo en el estadio nacional, desde el 27 de septiembre hasta el 8 de noviembre, casi 50 días. Muchos de los detenidos recuerdan las torturas que sufrieron, como Germán, quien era interventor –es decir estaba el frente del proceso de paso al área de propiedad social del Estado– de la fábrica Sumar Sedas[99].

Varios miles de sindicalistas y militantes son, hasta hoy, detenidos-desaparecidos[100]. En Constitución, figuras del movimiento popular local como Arturo Riveros Blanco (nombrado gobernador después de la toma de la ciudad) o José Alfonso Saavedra Betancourt, dirigente sindical y del CCT, hacen parte de las personas inmediatamente arrestadas y siguen hoy siendo detenidos-desaparecidos. En el caso del primero, los testimonios confirman que fue detenido por carabineros:

A primera hora del día siguiente, Riveros se dirigió a la Celco, donde participó en una reunión con dirigentes sindicales. Antes de que ésta terminara, los militares rodearon la industria y comenzaron a detener a la mayoría de los sindicalistas y trabajadores, todos los cuales eran individualizados por un escribiente de carabineros que los acompañaba. En estas circunstancias fue detenido Riveros y trasladado, junto al resto, en un microbús de locomoción

colectiva a la Comisaría de Carabineros, ubicada junto a la Gobernación[101]»

A escala nacional, la cantidad de muertos desde septiembre de 1973 es todavía imprecisa y varía según los cálculos. Según Nathaniel Davis, embajador de Estados Unidos en Chile al momento del golpe de Estado: «Las estimaciones acerca del número de gente muerta durante o inmediatamente después del golpe varían desde menos de 2.500 a más de 80 mil. Una lista de 3 mil a 10 mil muertos cubre las estimaciones más fiables[102]». Esta represión está claramente dirigida a las clases populares como lo prueban las estadísticas oficiales de la Comisión «Verdad y Reconciliación» (1991), según la cual:

El conjunto de actos violatorios de derechos humanos por parte de agentes del Estado, se comienzan a producir desde el mismo día 11 de septiembre, con la detención y posterior desaparición o muerte de algunas de las personas que se encontraban en el Palacio de La Moneda, o en algunos recintos universitarios o industriales, como ocurre por ejemplo en la Universidad Técnica del Estado o en fábricas de los denominados «cordones industriales», las que fueron allanadas por efectivos militares, procediéndose a la detención de las personas que se encontraban en ellos[103].

En el documental Septiembre chileno –realizado en caliente, después del golpe–, Bruno Muel recoge el testimonio de un obrero metalúrgico del cordón Vicuña Mackenna que relata cómo cerca de 90 obreros habrían sido fusilados por los soldados en su fábrica (sin que se haya podido comprobar este dato[104]). Una de las primeras medidas de la Junta tiene como objetivo aplastar al movimiento sindical y prohíbe la CUT. La derrota del movimiento revolucionario implica verdaderas purgas políticas al interior de las empresas que –en el caso de las más importantes– sufren la razzia por parte de los militares: en Madeco hay más de 270 detenidos, 500 personas son inmediatamente despedidas en Sumar, y también se lleva a cabo una represión más dirigida, como en Yarur y Cristalerías Chile[105]. Muchos patrones participan activamente en el sistema de delación y arresto de los militantes que instala la Junta, como sucede precisamente en la fábrica Elecmetal:

El 17 de Septiembre de 1973, la Empresa Elecmetal, ubicada en Avenida Vicuña

Mackenna 157, fue devuelta a sus antiguos dueños con la nominación de Patricio Altamirano como delegado directo de la Junta Militar. El directorio de esta empresa entregó a seis de sus trabajadores, algunos dirigentes de la empresa y otros del cordón Vicuña Mackenna, a un piquete compuesto por efectivos del Ejército y Carabineros. Los trabajadores José Devia Devia, José Maldonado, Augusto Alcayaga, [los hermanos] Miguel y Juan Fernández Cuevas y Guillermo Flores fueron asesinados brutalmente y luego repartidos en diversas calles de Santiago. Solo por casualidad sus cuerpos fueron encontrados en el Instituto Médico Legal poco antes de ser enterrados como N.N. Sus cuerpos presentaban señales de torturas y múltiples impactos de bala. La decisión de entregarlos fue tomada por el directorio de la empresa compuesta por Ricardo Claro Valdés, Fernán Gazmuri Plaza, Danilo Garafulic, Gustavo Ross Ossa, Raúl Briones y el delegado de la Oficial de los Golpistas Patricio Altamirano, quien personalmente retiene en su oficina a Juan Fernández Cuevas y lo entrega a sus ejecutores. Los demás dirigentes fueron detenidos al interior de Elecmetal y sacados en un vehículo de carabineros y otro dispuesto por la misma empresa[106].

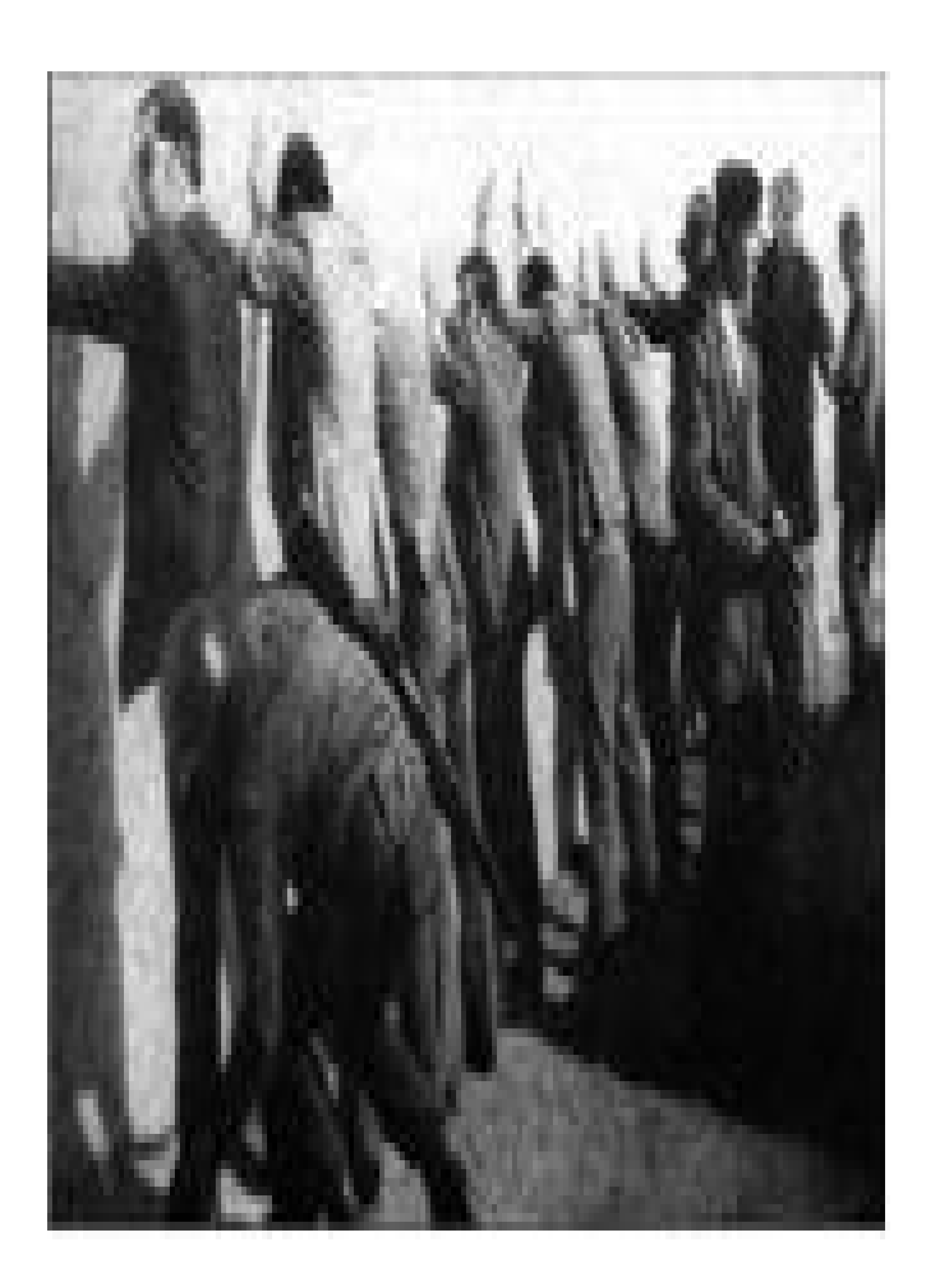
Al parecer, Armando Cruces, uno de los máximos líderes de los cordones de Santiago, también es arrestado en esta misma ola represiva de Elecmetal, pudiendo escapar –y posteriormente partir al exilio– sólo porque lo dieron por muerto: «Confundieron su sangre con la sangre de sus compañeros[107]». Otro caso represivo es el de la textil Sumar. Las cuatro plantas son allanadas el 12 de septiembre e intervenidas por efectivos del Ejército. El 23 de septiembre son detenidos una veintena de trabajadores, entre ellos Ofelia Villarroel (encargada del Departamento Femenino del Sindicato de Empleados y militante comunista), Adrián Sepúlveda (obrero de la sección Hilandería y delegado del personal) y Donato Quispe (obrero boliviano). Estos tres trabajadores, reconocidos por su compromiso sindical, son ejecutados este mismo día, Hernán Ovalle Hidalgo era el oficial al mando. Según informa la Comisión Verdad y Reconciliación.

Testimonios múltiples y concordantes de obreros y empleados que se encontraban en el interior de la empresa señalan que las víctimas fueron detenidas allí, por funcionarios del Ejército, y luego separadas de los otros trabajadores que también habían sido detenidos, siendo esta la última vez que se les ve con vida. Los cadáveres de los afectados fueron encontrados en la vía pública, en la carretera General San Martín[108].

Esta represión y militarización de los lugares de trabajo sobrevuela todo el país y se acompaña con el despido de 100 mil asalariados inscritos en las «listas negras» de la Junta (para que no pudiesen ser recontratados). Al mismo tiempo, la dictadura impone la ley marcial, clausura el Congreso, suspende la Constitución y prohíbe la actividad de los partidos políticos, incluidos aquellos que apoyaron el golpe de Estado.

Comienza la represión en las calles de Santiago





Reproducido en: La Huella, Nº 12, septiembre de 2002

La represión antiobrera sigue en los meses siguientes en la capital, como también en provincia. En octubre 1973 ocurre la llamada «caravana de la muerte», dirigida por el general Sergio Arellano Stark y que deja más de 100 muertos, decenas de personas torturadas en las seis ciudades visitadas por la criminal comitiva, violando incluso las disposiciones de la propia justicia militar. Al dar cuenta de los hechos en Antofagasta, El Mercurio –gran apoyo ideológico de la dictadura– relata:

Se procedió a la ejecución de Mario Silva Iriarte, Eugenio Ruiz Tagle Orrego, Washington Muñoz Donoso y Miguel Manríquez Díaz, implicados todos en la formación de los denominados «cordones industriales». El comunicado oficial de la Oficina de Relaciones Públicas de la Jefatura de Zona en Estado de Sitio informó que «las ejecuciones fueron ordenadas por la Junta Militar de Gobierno a fin de acelerar el proceso de depuración marxista y de centrar los esfuerzos en la recuperación nacional[109].

Poco a poco, Pinochet y sus acólitos le otorgan a la represión una dimensión transnacional. En coordinación con los otros regímenes militares de la región y con el apoyo del gobierno de Estados Unidos, organizan lo que se conoce como la «Operación Cóndor[110]». Y es claramente en el marco de la relación de fuerzas políticas mundiales que se inscribe este fin trágico de la Unidad Popular. Se trata de una victoria estratégica del imperialismo que permite no sólo retroceder en los numerosos progresos sociales conquistados durante estos mil días, sino también transformar Chile en un verdadero laboratorio: el de un capitalismo neoliberal, hasta entonces desconocido en otras latitudes. Este pequeño país del sur se convierte así en el primero en experimentar sus recetas bajo la conducción de los «Chicago boys». Los 17 años de dictadura corresponden a lo que Tomás Moulian ha llamado «revolución capitalista» debido a la gran remodelación que sufrirá la sociedad[111]. Se trata, de hecho, de una contrarrevolución en el sentido más estricto del término. Y la magnitud de la violencia de Estado es claramente desproporcionada vista la resistencia que se le opone, lo que sólo se explica

porque se trata no únicamente de asesinar a los individuos más activos en el proceso de la UP, sino también arrancar las huellas, en lo más profundo de su enraizamiento social, de las experiencias autogestionarias que se habían multiplicado.

Maurice Najman, que viajó a Chile para observar la UP, afirma en octubre de 1973, «en definitiva, los militares intervinieron en el momento en que el desarrollo del poder popular planteaba e incluso comenzaba a resolver, la cuestión de la formación de una dirección política alternativa a la Unidad Popular[112]». Frente al golpe de Estado, Najman había creído en una rápida resistencia armada. Este pronóstico errado se debe a una visión sobredimensionada de la fuerza del poder popular. De hecho, la oposición masiva a la dictadura sólo aparecerá más tarde, a comienzos de los años ochenta, con las grandes protestas. Entre tanto, el conjunto de los intentos de poder popular desaparecieron completamente bajo la mano de hierro del régimen militar. Sin embargo, antes de concluir, volvamos algunos instantes sobre una característica del poder popular que la dictadura no pudo borrar completamente: su memoria o más bien sus memorias.

A modo de epílogo: las memorias emblemáticas del poder popular

Como lo señala el historiador español Mario Amorós, existe una «memoria del dolor» en el «pueblo de izquierda» del Chile actual[113]. La investigación oral llevada a cabo en el marco de este trabajo, permite iniciar una reflexión sobre otro tipo de memoria militante. Cuando se recorre el hilo conductor de dichos relatos, aparecen las alteraciones, pero también una continuidad, hasta nuestros días, de la memoria del poder popular[114]. En efecto, en el Chile de hoy, laboratorio a tamaño real del neoliberalismo, después de haber sido un caldo de cultivo de la transformación social, nos encontramos frente a un difícil ir y venir entre la memoria, el relato histórico y la vida cotidiana. Uno de los pioneros en la explicación de los marcos sociales que constituyen la memoria, Maurice Halbwachs, pudo comenzar a develar su funcionamiento, introduciendo el concepto de «memoria colectiva» de una sociedad[115]. Desde entonces, numerosos autores han tratado de explicar las relaciones complejas que vinculan historia y memoria (colectiva e individual). Sin duda en Chile, el investigador

parece conectado en línea directa con un «pasado que no pasa» y que se inscribe en una lógica de guerra de las memorias. La memoria del poder popular pertenece así a lo que Steve Stern, después de una larga investigación, ha definido como «memorias emblemáticas[116]».

Si nos detenemos brevemente en el conjunto de testimonios recopilados, es sorprendente constatar que cada uno de los testimoniantes reproduce, en mayor o menor medida, el discurso de las organizaciones políticas a las que pertenecían durante el gobierno de Allende. Identificamos aquí, como fijados en el tiempo, los análisis de la izquierda chilena y una memoria que poco ha evolucionado. Se trata de una primera memoria emblemática del «poder popular», todavía moldeada en el dogmatismo y retórica política de los años setenta. José del Pozo constató un fenómeno muy parecido en su estudio en torno a los exiliados chilenos en Canadá[117]. Sobre este tema, se podría levantar la hipótesis de que esta continuidad memorial se debe situar en el marco de la «democratización» truncada y parcial que vive Chile desde 1990, puesto que, en ese contexto, la memoria militante juega un rol de resistencia pasiva frente a una herida histórica no cerrada, la de un pasado enterrado demasiado rápidamente[118].

Sin embargo, la memoria del «poder popular» no se reduce a esta continuidad. Dialéctica de la memoria agitada al ritmo de la coyuntura histórica, esta construcción se produce gracias a los puentes que se tienden entre las «memorias inconexas» individuales y la elaboración de un marco memorial colectivo, sociabilizado. Así, la continuidad de la memoria se produjo en paralelo con una combinación de profundas alteraciones. En muchos casos, los actores entrevistados realizan un retorno crítico sobre su compromiso político y sus consecuencias. Repetidamente, la historia oral está también marcada por una cierta autocrítica sobre el rol jugado por los trabajadores y los militantes revolucionarios: no habrían estado a la altura de la oportunidad histórica de tomar el poder. Algunos testigos de la época incluso cuestionan los valores del socialismo por los cuales se entregaron en «cuerpo y alma». En gran parte, esta percepción subjetiva es producto de una mirada retrospectiva de la derrota de 1973 y de la violencia que siguió al golpe de Estado. En este retorno sobre sí mismo se anida el fenómeno de revisión permanente que vive la memoria colectiva en el contacto con el presente; una memoria que navega, así como lo escribió el filósofo Paul Ricoeur, entre la historia y el olvido[119]. En este caso, los ingredientes de esta mutación memorial (que no es necesariamente, una «oxidación») son la derrota de la izquierda chilena, la represión, el exilio, la «victoria» del nuevo modelo de acumulación neoliberal más allá de la dictadura,

etc. Todos estos hechos empujan a la reflexión, a la justificación y a la modificación de las memorias.

Por otra parte, podemos observar que las formas de permanencia de la memoria dependen también de las trayectorias individuales (orígenes sociales, capital cultural, tipo de compromiso político,…) y de la posición del testigo en la sociedad actual. Así, desmenuzando cada testimonio, se puede percibir la gran heterogeneidad de esas memorias emblemáticas. En cada caso, la deformación a posteriori, el subjetivismo, el retorno crítico son elementos más o menos, importantes. Comparemos por ejemplo, el relato de Hernán Ortega con el de Edmundo Jiles. El primero sigue siendo militante del Partido Socialista y, sobre todo, es un responsable político que ha participado en los gobiernos de la Concertación. Desde esta posición de poder, intenta establecer un balance altamente positivo de su acción como dirigente del cordón Industrial Cerrillos. Asimismo, justifica los valores políticos, el lugar social y las responsabilidades que actualmente tiene. Por el contrario, el testimonio de Edmundo Jiles, también sindicalista de Cerrillos, es mucho más medido y autocrítico, lo que se puede explicar por el hecho de que este último siempre tuvo una postura distanciada en cuanto a la acción de los partidos políticos: nunca perteneció a alguno de ellos y critica la cooptación que han hecho del movimiento social. Además, Edmundo Jiles sigue trabajando con las bases sindicales de la zona de Cerrillos y vive en condiciones socioeconómicas difíciles. Pero también busca valorar positivamente su compromiso, ya que, según él, el cordón Cerrillos y el comando comunal de Renca –dos organizaciones en las que participó– habrían sido los organismos más importantes del poder popular. De hecho, la tentación permanente del testigo es sobredimensionar el rol de su partido u organización social, buscando así justificar su acción personal pasada. También podemos señalar que pareciera (aunque es necesario comprobarlo con una muestra más significativa) que los procesos de alteración y de revisión crítica son más limitados entre las personas que tuvieron responsabilidades importantes y que militan todavía. En fin, más allá de la polisemia, los relatos de vida del poder popular comparten otros puntos en común. Cualesquiera sean las opciones políticas de unos y otros, hoy esta memoria emblemática valora el potencial que habría podido encarnar el «poder popular» para superar las dificultades que vivió la «vía chilena al socialismo». Se trata de un rasgo esencial de esta memoria militante. Del mismo modo, se percibe en los testimonios una fuerte carga emocional y un claro reconocimiento de la imagen de Salvador Allende, aunque en ocasiones se lo describa como demasiado «blando» frente a la reacción. Finalmente, los actores entrevistados –en general– insisten en la riqueza de la

experiencia vivida, lo correcto de la lucha colectiva llevada a cabo, los numerosos aportes de la sociabilidad militante de la época y la importancia del balance a realizar con vistas a la construcción de nuevos proyectos de emancipación para el siglo XXI[120].

1 Clausewitz, Carl von, De la guerre, París, Éditions de Minuit, 1955.

2 Illanes, María Angélica, La batalla de la memoria, op. cit., p. 183.

3 Rocher, Guy, Le changement social, op. cit., p. 278.

4 Tribuna, 24 de julio de 1973.

5 La Prensa, 6 de julio de 1973.

6 Frei M., Eduardo, Pareto, Luis, «Declaración del parlamento sobre los sucesos de junio de 1973», La Prensa, 8 de julio de 1973.

7 Ibid.

8 El Mercurio, Santiago, 24 de julio de 1973.

9 Revista Qué Pasa, N° 104, 12 de abril de 1973.

10 Como lo señala Pierre Bourdieu «En una sociedad jerárquica, no hay espacio que no esté jerarquizado y no exprese las jerarquías y las distancias sociales, de un modo (más o menos) deformado y sobre todo enmascarado por el efecto de naturalización que entraña la inscripción duradera de las realidades sociales en el mundo natural» («Efectos de lugar», La Miseria del mundo, op. cit., p. 120).

11 Futuro, 22 de julio de 1973.

12 El Mercurio, Santiago, 5 de agosto de 1973.

13 Cámara de Diputados, «Proyecto de acuerdo sobre la ruptura de la legalidad», 23 de agosto de 1973. En: Farías, Víctor, op. cit., t.VIII, pp. 4996-5000.

14 Revista Qué Pasa, N° 104, 12 de abril de 1973.

15 Mensaje, nº 221, agosto de 1973.

16 Sobre la relación entre la UP y las FFAA, y en cuanto a la politización de los militares durante el gobierno Allende, consultar: Valdivia Ortiz de Zárate, Verónica, «El gran trauma. La oficialidad bajo los mil días de un rojo amanecer». En: El golpe después del golpe. Leigh vs Pinochet. Chile 1960-1980, Santiago, LOM ediciones, 2003, pp. 63-96.

17 Pinochet, Augusto, El día decisivo, op. cit.

18 Prats, Carlos, Memorias…, op. cit., p. 430.

19 Chile Hoy, nº 65, 7 al 13 de septiembre de 1973.

20 Corvalán M., Luis, La secreta obscenidad de la historia de Chile contemporánea, op. cit.

21 Por ejemplo, según el Ministerio del Interior, el 28 de julio de 1973, hubo no menos de 40 atentados en todo el país (Clarín, 29 de julio de 1973).

22 Entrevista realizada en Santiago, 6 de mayo de 2002.

23 Tarea Urgente, 3 de julio de 1973.

24 Para una descripción detallada de esta ley, ver Prats, Carlos, Testimonio de un soldado, op. cit., p. 303.

25 Valdivia Ortiz de Zárate, Verónica, «Chile, un país de excepción. La ley de control de armas y la máquina represiva puesta en marcha». En: Pinto, Julio (Ed.), Fiesta y drama. Nuevas historias de la Unidad Popular, op. cit., pp. 221-222.

26 La tragedia chilena, op. cit., pp. 179-184.

27 El Mercurio, Santiago, 22 de julio de 1973.

28 El Mercurio, Santiago, 24 de julio de 1973.

29 Punto Final, suplemento del nº190, 14 de agosto de 1973.

30 La Aurora de Chile, 9 de agosto de 1973.

31 La Nación, 7 de agosto de 1973.

32 Citado por Valdivia Ortiz de Zárate, Verónica, «Chile, un país de excepción…», op. cit., p. 225.

33 Entrevista realizada en Santiago, 6 de mayo de 2002.

34 El Mercurio, Santiago, 20 de julio de 1973.

35 Entrevista realizada en Santiago, 5 de diciembre de 2001.

36 Vega, Héctor, «Carta abierta del Cordón Centro Osorno al comandante en jefe del Ejército, general Augusto Pinochet», Osorno, 24 de agosto de 1973, De Frente, 7 de septiembre de 1973.

37 Entrevista realizada en Santiago, 5 de diciembre de 2001.

38 El Mercurio, Santiago, 4 de septiembre de 1973.

39 Valdivia Ortiz de Zárate, Verónica, «Chile, un país de excepción…», op. cit., pp. 224-225.

40 Quiroga, Patricio, Compañeros, op. cit., p. 103.

41 Insunza, Jorge, «Ganar la mayoría para derrotar el golpe e impedir la guerra civil», op. cit.

42 Libro blanco del cambio de gobierno en Chile, Santiago, Lord Cochrane, 1973.

43 Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (Informe Rettig), Santiago, 1991, en [http://www.ddhh.gov.cl/ddhh_rettig.html].

44 Entrevista realizada en Santiago, 11 de marzo de 2002.

45 Este comienzo de autocrítica que aparece durante el pleno de 1977 anuncia el giro llamado «rebelión popular» de principios de los años ochenta (Varas, Augusto, (comp.), El Partido Comunista de Chile: estudio multidisciplinario, Santiago, Cesoc-Flacso, 1988, pp. 453-485).

46 MIR, «Prepararse para luchar en todos los terrenos», El Rebelde, 3 de

septiembre de 1973.

47 Pascal, Andrés, «El MIR, 35 años de lucha», Punto Final, nº 477, nº 478 y nº 479, op. cit.

48 Cf. Garcés, Mario; Leiva, Sebastián, Historia y memoria del golpe de Estado de 1973. Resistencia y represión en la población La Legua y la industria Sumar, Santiago, Informe de investigación, Universidad Arcis, 2003 (publicado por LOM ediciones en 2005).

49 Citado por Pérez, Cristián, «Salvador Allende. Apuntes sobre su dispositivo de seguridad», op. cit.

50 Entrevista realizada en Santiago, 11 de marzo de 2002.

51 Una treintena de esos militantes pudo recibir una formación más importante en Cuba y en Corea del Norte.

52 Este plan fue iniciado con éxito durante el Tancazo (Quiroga, Patricio, Compañeros, op. cit., pp. 80-85).

53 Pérez, Cristián, «Salvador Allende. Apuntes sobre su dispositivo de seguridad», op. cit.

54 Entrevista realizada en Santiago, 6 de agosto de 2003.

55 También de la embajada cubana en Santiago. Pascal, Andrés, «El MIR, 35 años de lucha», op. cit.

56 Corvalán, Luis, Santiago-Moscú-Santiago, op. cit.

57 Garcés, Mario; Leiva, Sebastián, Historia y memoria del golpe de Estado de 1973 en el pueblo, op. cit.

58 Corvalán, Luis, «Del discurso en el acto de masas del PC en el teatro Caupolicán», 11 de agosto de 1973. En: Farías, Víctor, op. cit., t.VIII, pp. 4809-4811.

59 MAPU, «¿Quién allanará a los patrones?», De Frente, 24 de agosto de 1973.

60 Pinochet, Augusto, El día decisivo, op. cit., anexo 8.

61 De Frente, 20 de julio de 1973.

62 Tarea Urgente, nº15, 31 de agosto al 6 de septiembre de 1973.

63 Entrevista realizada en Santiago, 6 de agosto de 2003.

64 La Prensa, 6 de julio de 1973.

65 Entrevista realizada en Santiago, 17 de mayo de 2002

66 Entrevista realizada en Santiago, 20 de noviembre de 2001.

67 Entrevista realizada en Santiago, 4 de julio de 2002.

68 Entrevista realizada en Santiago, 6 de agosto de 2003.

69 Entrevista realizada en Santiago, 18 de marzo del 2002.

70 Esta gigantesca marcha converge hacia el centro de la capital. Dividida en cuatro columnas y donde se encuentran los principales Cordones de la capital (Clarín, 9 de agosto de 1973).

71 Clarín, 29 de agosto de 1973.

72 Quiroga, Patricio, Compañeros, op. cit., p. 142.

73 Testimonio de Rigoberto Quezada, recogido por Miguel Silva (op. cit.).

74 Para una descripción de los últimos días de Allende y de los dilemas que enfrentan el equipo del presidente, consultar Garcés, Joan, Allende y la experiencia chilena, op. cit., pp. 331 y ss.

75 Verdugo, Patricia, Interferencia secreta. 11 de septiembre de 1973, Santiago, Ed. Sudamericana, 1988.

76 Como es ampliamente conocido, existen todavía numerosos interrogantes y una polémica historiográfica y jurídica para saber si el presidente se suicidió o fue asesinado (Cf. Amorós, Mario, Allende. La biografia, op. cit.).

77 García M., Gabriel, «La verdadera muerte de un presidente» (1974), in [http://www.archivochile.cl/entrada.html].

78 Ver las notas sobre este tema de Luis Vega, entonces consejero del Ministerio del Interior, en Valparaíso. Vega, Luis, Anatomía de un golpe de Estado. La caída de Allende, Jerusalén, La semana publicaciones, 1983.

79 Martínez, V., «La estrategia militar en Santiago», La Tercera, número especial, septiembre de 2003.

80 Pinochet, Augusto, El día decisivo, op. cit., p. 145.

81 Vidaurrázaga, Ignacio, Martes Once. La primera resistencia, Santiago, LOM ediciones, 2013.

82 Sin otras indicaciones de nuestra parte, el relato realizado está basado sobre los siguientes escritos: «El combate en la zona sur de Santiago», in [http://www.archivochile.com/Experiencias/exp_popu/EXPpopulares0031.pdf]; Pascal, Andrés, «El MIR, 35 años de lucha», Punto Final, op. cit,; Quiroga, Patricio, Compañeros, op. cit. y Garcés, Mario; Leiva, Sebastián, Historia y memoria del golpe de Estado de 1973…, op. cit.

83 Se encuentran en el lugar Víctor Díaz y José Oyarce, del PC: Miguel Enríquez y Andrés Pascal, del MIR; Arnoldo Camú, Exequiel Ponce y Rolando Calderón, del PS.

84 Entrevista realizada en Santiago, 6 de agosto de 2003.

85 Garcés, Mario y Leiva, Sebastián, El golpe en la Legua…, op. cit., p. 48.

86 Entrevista realizada en Santiago, 22 de febrero de 2003.

87 Entrevista realizada en Santiago, 20 de noviembre de 2001.

88 Dupuy, Pierre, Chili 1967-1973, op. cit., p. 144.

89 Entrevista realizada en Santiago, 6 de agosto de 2003.

90 Winn, Peter, La revolución chilena. op. cit., p. 125.

91 Osorio, Víctor, «Mitos y mentiras del golpe militar», La Huella, nº 12, Santiago, septiembre de 2002, pp. 9-10. La mayor parte de estas sentencias se encuentran archivadas en la Fundación Archivo de la Vicaría de la Solidaridad del Arzobispado de Santiago [www.vicariadelasolidaridad.cl].

92 Castelain, Christine, Enquête sociologique sur le bidonville Nueva Habana, op. cit., pp. 98-101.

93 Según Abraham Pérez, Alejandro Villalobos –el dirigente mirista del campamento– ni siquiera tenía un lugar seguro donde esconderse. Es asesinado por la dictadura en 1975. (Entrevista realizada en Santiago, 6 de mayo de 2002).

94 Estudio de caso del movimiento social popular en la localidad de Constitución…, op. cit.

95 Entrevista realizada en Santiago, 6 de agosto de 2003. Menares Díaz, Guillermo, «Se nos presentó un solo camino», op. cit.

96 Stohl, Michael; López, George, The state as terrorist, Wesport, Greennewood Press, 1984.

97 En esta época, es la DINA (Dirección de Inteligencia Nacional) la que coordina parte de la represión de la dictadura, bajo dirección de Manuel Contreras. La CNI (Central Nacional de Informaciones) nace en 1977, reemplazando a la DINA.

98 Entrevista realizada en Santiago, 14 de mayo de 2002.

99 López, Ana, «El Estadio Nacional, la dictadura y el fútbol», La izquierda diario, 4 de julio de 2015. En: [www.laizquierdadiario.com/El-Estadio-Nacional-la-dictadura-y-el-futbol].

100 García, Antonia, La muerte lenta de los desaparecidos en Chile, Santiago, Cuarto Propio, 2011

101 CODEPU-DIT-T, Labradores de la Esperanza. La Región del Maule, Santiago, 1992, p. 149 (citado por Menares Díaz, Guillermo, «Se nos presentó un sólo camino», op. cit.).

102 Citado en Rojas, María Eugenia, La represión política en Chile, en:

[http://www.derechos.org/nizkor/chile/libros/represion/cifras.html].

103 Ver Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (Informe Rettig), Santiago, 1991, in [http://www.ddhh.gov.cl/ddhh_rettig.html].

104 Muel, Bruno; Robichet, Théo, Septembre chilien, Iskra-Bruno Muel production, Paris, 1973, 40 min.

105 Winn, Peter, Tejedores de la revolución, op. cit, pp. 325-333 y Rodríguez, Cinthia; Fernández, Moisés; Rojas, Jorge, Cristaleros…, op. cit. pp. 160-167.

106 [http://www.memoriaviva.com/empresas/elecmetal.htm]. El caso de Elecmetal es más conocido, ya que se pudo, varios años después, encontrar –por casualidad– y realizar la autopsia a los cuerpos de las víctimas. (Cf. «La complicidad de Elecmetal y Ricardo Claro», El Siglo, Santiago, 20 de octubre de 2000).

107 Mujica, Dolores, «Armando Cruces, Elecmetal y el verdadero oficio del historiador», PTR, 14 de septiembre de 2013, [http://www.ptr.cl/mov-obrero/armando-cruces-elecmetal-y-el-verdadero-oficio-del-historiador].

108 Cf. [http://interactivos.museodelamemoria.cl/victimas/?p=2804]. Consultar también Garcés, Mario y Leiva, Sebastián, El golpe en La Legua, op. cit., pp. 68-72.

109 El Mercurio, Santiago, 15 de noviembre de 1973 (citado en «La resistencia de los primeros tiempos: solidaridad y derechos humanos», 14 de junio de 2010, [http://www.socialismo-chileno.org/PS/index.php?option=com_content&task=view&id=117]).

110 Gaudichaud, Franck, Operación Cóndor. Notas sobre el terrorismo de Estado en el Cono sur, Madrid, Sepha, 2005.

111 Moulian, Tomás, Chile actual, anatomía de un mito, op. cit. y Gárate, Manuel, La revolución capitalista de Chile (1973-2003), Santiago, Ed. Universidad Alberto Hurtado, 2012.

112 Le Monde Diplomatique, París, octubre de 1973.

113 Amorós, Mario, Chile. Después de la lluvia, Santiago, Cuarto Propio, 2005.

114 Sobre el hilo conductor de la memoria militante del comunismo francés se puede consultar: Lavabre, Marie-Claire, Le fil rouge. Sociologie de la mémoire communiste, París, Presses de la Fondation Nationale des Sciences Politiques, 1994.

115 Halbwachs, Maurice, Los marcos sociales de la memoria, Barcelona, Anthropos, 2004. Sobre la memoria colectiva chilena, consultar Garcés, Mario (ed.), Memoria para un nuevo siglo: Chile, miradas a la segunda mitad del siglo XX, Santiago, LOM ediciones, 2000.

116 Stern, Steve, «De la memoria suelta a la memoria emblemática». En: Garcés, Mario (ed.), Memoria para un nuevo siglo…, op. cit., pp. 11-33 y Gaudichaud, Franck, «Chile. A broken collective memory». En: Memory and Popular culture, Latin American Perspectives, California, Sage, 2009, pp. 45-62.

117 Pozo, José del, «Les courants d'opinion des partisans de la gauche chilienne: une vision prospective et rétrospective». En: Le Chili de 1979 à 1990. De l'Unité Populaire à l'après Pinochet, Montréal, ULB éditeur, 1994, pp. 81-104.

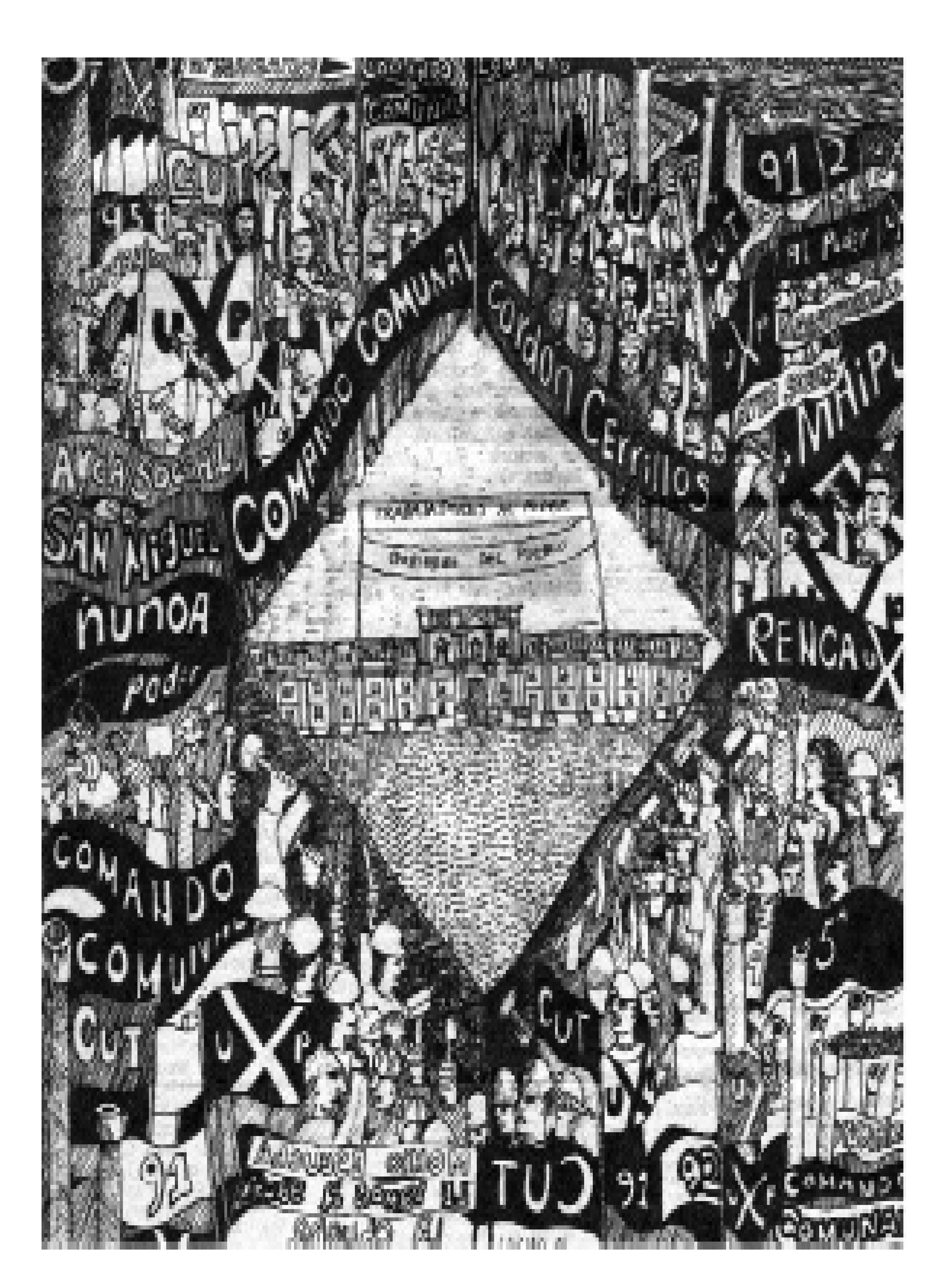
118 Gaudichaud, Franck; Compagnon, Olivier, «Chili: un passé trop vite passé?». En: Les guerres de mémoires dans le monde: enjeux, médias et identité, París, Hermès, 2008, pp. 83-91.

119 Ricoeur, Paul, La mémoire, l'histoire, l'oubli, París, Le Seuil, 2000.

120 Gaudichaud, Franck, «L'Unité Populaire par ceux qui l'ont faite», Le Monde Diplomatique, París, septiembre de 2003.

Conclusión general

Poder popular urbano constituyente y políticas del conflicto. Claves para comprender mil días que estremecieron al mundo



Cordon Cerrillos
SAN MIGUEL
ÑUNOA
poder
RENCA
COMANDO
CUT
91

Fuente: Dibujo publicado en Chile Hoy, 7 de diciembre de 1972.

Lo que parece estar más allá de toda duda o creencia es que ningún historiador será nunca capaz de narrar la historia de nuestro siglo sin tejerla sobre 'trama de las revoluciones'; por el momento, y mientras su fin esté oculto entre las brumas del futuro, se trata de un relato que aún no se puede contar.

Hannah Arendt

, Sobre la revolución, Madrid, Alianza, 1988, p.264

«Cordones industriales», «participación de los trabajadores», «abastecimiento directo», «comandos comunales», «territorio libre de explotación» son algunos de los ingredientes del proceso sociopolítico que hemos intentado analizar y que permiten restituir toda su dimensión colectiva al poder popular chileno. Así, gracias al desplazamiento de la mirada han podido resurgir algunos «tesoros perdidos» (Hannah Arendt) de este episodio fundamental de la historia del siglo XX. Haciendo énfasis en estos datos originales que tienen sus raíces en el torbellino del movimiento obrero y en el seno de las poblaciones surgió, casi como una evidencia, la necesidad de recurrir a los archivos escritos, pero también a los testimonios orales de los actores de la época. Una aproximación metodológica «híbrida» y multidisciplinaria (la de una «ciencia política sociohistórica») nos ha empujado a recomponer el ritmo de los eventos, a insistir sobre las fechas y momentos clave. Todo esto incluyendo particularmente el aporte de la sociología política y los análisis en términos de política(s) del conflicto.

Esta aproximación permite observar que en el corazón de este período de enfrentamientos sociales y trastornos políticos, existieron varios intentos de lo que hemos propuesto llamar «poder popular constituyente», noción que definimos en la introducción como la «creación de experimentaciones sociales y políticas de contrapoder y contrahegemonías organizadas» y que conducen a

«nuevas formas de apropiación colectivas populares» y a un «cuestionamiento –total o relativo– de las relaciones de producción, formas de organización del trabajo, de las jerarquías sociales, espaciales y de los mecanismos de dominación materiales o simbólicos». Es precisamente en la configuración específica (e históricamente determinada) que toman esas formas de poder popular donde reside la verdadera originalidad del proceso chileno, en su capacidad transformadora y su fuerza histórica. Esto, más allá del carácter inédito del proyecto allendista de transición al socialismo o de una supuesta estabilidad –intangible– de las instituciones democráticas del «Estado de compromiso». Nos parece que en esto hay una pista a seguir, un camino a profundizar, para el estudio de otras grandes crisis políticas o procesos revolucionarios latinoamericanos.

Si se revisan en detalle las diversas facetas de esta ebullición colectiva que movilizó a varias decenas de miles de trabajadores, pobladores y militantes de izquierda, vemos cómo se asoma una «gramática de la contestación[1]» de la Unidad Popular, aún poco conocida. Esta «idea-fuerza[2]» es la del poder popular, pero en ese cielo agitado, una estrella brilló con más fuerza que otras: los cordones industriales.

Seguramente,

La temática de los «cordones industriales» se refiere a una de las experiencias más importantes y exitosas de la Unidad Popular, aproximándonos quizás a una de las utopías más realizadas del socialismo chileno: aquella donde los trabajadores construyeron un protagonismo con alta responsabilidad económica y política colectiva en el proceso en marcha[3].

Casi siempre surgidos en la periferia de las grandes ciudades, son organismos territoriales de coordinación de clase que agrupan a los sindicatos de varias empresas de una zona urbana específica, con el objetivo inmediato de concretar reivindicaciones tales como la ampliación del sector estatizado, el control obrero de la producción, la autodefensa de las fábricas, el aumento de los salarios e incluso –a mediano plazo– la instauración de una nueva arquitectura institucional basada en consejos populares comunales y provinciales. Los cordones, junto a los otros actores del movimiento social, dibujan así una nueva topografía de las luchas en medio urbano. Se anclan progresivamente en una

ciudad en lucha y en territorios apropiados por y para las clases populares masivamente movilizadas.

Pero ¿qué fueron realmente estos diversos órganos de poder popular –más allá de su inmensa carga simbólica– que iluminan aún los imaginarios colectivos? Aparece muy nítidamente que la noción de «poder popular» es un concepto que posee una multiplicidad de significados y aplicaciones concretas, según los sectores sociales y políticos que lo reclaman. Por cierto, deberíamos hablar de los poderes populares. Comprenderlos en la realidad chilena de inicios de los años setenta es una tarea todavía difícil si se quiere verdaderamente restituir dicho polimorfismo. En el transcurso de estas páginas, han aparecido varios «paisajes de la verdad» (Michael Löwy) de los que hemos podido esbozar sus contornos, definir las características esenciales y sus límites. Sobre todo, creemos haber relevado la historicidad, la experiencia y algunos elementos de la economía moral de una clase obrera movilizada. Una clase que se constituye en tanto sujeto político de pleno derecho en el curso de sus movilizaciones y en la intersección de relaciones sociales conflictivas. Una clase que «se crea ella misma tanto como es creada[4]», y cuya centralidad es muy evidente en la sociedad chilena de principios de los años setenta.

Voz del poder popular, voz de las instituciones. Los tiempos rotos del gobierno de Allende

Buscando evitar nuevas interpretaciones reduccionistas o mitificadas sobre una experiencia revolucionaria compleja, nuestro enfoque y metodología utilizada levantan el velo sobre una dinámica diacrónica entre el movimiento obrero y el proyecto de transición al socialismo de la izquierda; entre la lógica telúrica de la lucha de clases y la voluntad del gobierno de Allende de respetar el tiempo institucional. Pensamos haber logrado mostrar el interés de este tipo de análisis interaccional entre la «voz de la calle», la del poder popular y la «voz de las instituciones», específicamente la del gobierno y del Estado, aspecto de la Unidad Popular que paradójicamente ha sido poco estudiado. En la introducción, recordábamos que varias teorías recientes sobre la acción colectiva subrayan las «pasarelas» entre «mundos ‘movimientistas’» y partidarios, constatando que «entre política institucional y no-institucional, sólo existe una frontera imprecisa

y permeable, incluso un continuum de acción, ya que las interacciones entre las dos esferas son constantes y que el paso de una a otra es relativamente fácil[5]». Sin embargo, hemos demostrado que, por el contrario, en este período revolucionario esta interacción es cada vez más tensa y conflictiva a medida que el proyecto allendista entra en crisis y que se radicalizan tanto los sectores populares que apoyan al gobierno como la oposición de derecha y extrema derecha.

La discordancia de los tiempos sociales y políticos de la Unidad Popular es develada como un dato capital. Durante este período, se conjugan claramente lo que el filósofo Daniel Bensaïd describía como momentos de aceleración brusca y de ralentización repentina (les hoquets du temps brisé) del conflicto de clase[6]. Del impulso nacido de la participación de los trabajadores en el sector estatizado, orientado por el gobierno, al desbordamiento de las direcciones de los partidos de izquierda; de la crisis del aparato sindical hasta el surgimiento de los cordones industriales; de los intentos de abastecimiento directo de los barrios periféricos a la movilización de algunos campamentos, asistimos a diversos sobresaltos de autoorganización y a varios destellos autogestionarios. Esta epopeya del movimiento social corresponde a una batalla colectiva llevada en condiciones (locales, nacionales y mundiales) adversas. Los relatos de vida permiten restituir la dimensión microsocial de esas luchas y entrever lo que pasó en una fábrica, un sindicato o durante la asamblea de un cordón industrial; es decir, comprender de qué modo la acción colectiva y los compromisos individuales se combinaron con el enfrentamiento político global. En consecuencia, son varios los niveles de análisis que se deben abordar si se quiere restituir toda la lógica dialéctica del movimiento social y de los debates que atraviesan a la izquierda.

El flujo de conflictos estudiado puede dividirse en varios episodios que unen diversas secuencias de interacciones conflictivas[7], en el curso de las cuales se confirman formas diferentes, incluso asimétricas, pero combinadas, de participación de las clases dominadas y de los agentes movilizados en el proceso del cambio social. De modo permanente, lo que se plantea es la cuestión de la interfaz, este ir y venir diacrónico, entre el movimiento popular, el campo sindical, el Estado y los partidos políticos que buscan representar los intereses de las capas sociales subalternas. En gran medida, esta articulación determina el ritmo de desarrollo y reflujo, la respiración de los intentos de autoorganización obrera y de pobladores. El sociólogo Guy Rocher insiste sobre esta interacción, muchas veces caótica: «El movimiento revolucionario a menudo se enfrenta con

el dilema de saber si mantiene la dirección de la revolución o si abandona el poder popular. Este dilema es entonces fuente de divisiones suplementarias entre aquellos que hacen la revolución[8]». Para Hannah Arendt, la gran contradicción del siglo pasado sería precisamente de este orden:

El conflicto entre estos dos sistemas, el de partidos y el de consejos, ocupó un lugar privilegiado en todas las revoluciones del siglo XX. Lo que se ponía en juego era el problema de la representación frente a la acción y la participación. Los consejos eran órganos de acción, los partidos revolucionarios eran órganos de representación y, aunque los partidos revolucionarios reconocieron sin entusiasmo a los consejos como instrumentos de la «lucha revolucionaria», intentaron en plena revolución apoderarse de ellos desde dentro; sabían muy bien que ningún partido, por revolucionario que fuese, sería capaz de sobrevivir a la transformación del gobierno en una verdadera república soviética[9].

La dinámica del poder popular confirma, aunque sólo en cierta medida, este análisis pesimista de la filósofa alemana, muy marcada por el impacto del estalinismo en Europa. ¿Cómo no considerar el hecho de que, casi siempre, la transformación social pasa por una articulación entre campo político y movimiento social donde intervienen compromisos partidarios y movilizaciones colectivas? Es lo que confirma la experiencia chilena. Es ahí también, es cierto, donde quizás fracasó… Sin embargo, es innegable que son los militantes de las organizaciones políticas y sindicales los que permitieron al poder popular estructurarse, permanecer en el tiempo, cambiar de escala. Esos activistas, multicomprometidos, no se proponían defender únicamente reivindicaciones transitorias, sino crear formas de coordinación territorial que fueran los gérmenes de una sociedad futura y la base de un socialismo democrático.

Durante el gobierno de Allende, los aparatos políticos que acompañan las acciones colectivas protestatarias están representados mayoritariamente por los partidos que componen la UP (principalmente el PC y PS). Organizaciones partidarias que controlan el poder ejecutivo, una parte (minoritaria) del Parlamento y durante todo el período a una amplia fracción del sindicalismo y del movimiento de pobladores. Estos partidos organizan y se apoyan sobre luchas sociales que hacen explosión –literalmente– en todo el país a partir de 1970. Paralelamente, el objetivo táctico de la izquierda gubernamental es lograr canalizar los agentes sociales movilizados en torno al programa «etapista» de la

revolución institucional y pacífica. Esto sucede al mismo tiempo que las acciones colectivas entran en un curso ascendente, extremadamente difícil de contener en dichos límites. Así, como en la mayoría de los fenómenos revolucionarios, este pequeño y largo país del Cono Sur vive una dinámica de desbordamiento, no sólo de los partidos de izquierda, sino también del conjunto de los poderes instituidos de representación política o mediación social. Al principio, en una relación muy estrecha, casi simbiótica, que podríamos calificar de heterónoma, se va revelando una diferenciación cada vez más clara entre el espacio del movimiento obrero y el campo partidista. Finalmente, en el curso de esos mil días, se traslapan formas de «poder popular institucionalizado» (bajo control del gobierno) con diversas variaciones de «poder popular constituyente» surgidas desde la base. En una visión sincrónica, podemos identificar, concluyendo este trabajo, tres grandes secuencias[10].

Los tres respiros entrecortados del poder popular chileno

La primera secuencia va desde la elección de Allende hasta el gran paro patronal organizado por la oposición, en octubre de 1972. Está marcada por una fuerte identificación entre la UP y su base social. El gobierno se apoya decididamente en el asalariado organizado y favorece las movilizaciones colectivas, masivas, festivas y entusiastas en todo el país. Lanza un vigoroso programa de reformas democráticas, de redistribución de la riqueza y pone término a la represión estatal en contra de los movimientos sociales, creando así una estructura de oportunidades políticas abierta. Es la noción de participación institucional la que prevalece: Comités de la Unidad Popular, comités de abastecimiento (JAP), sistema de participación de los trabajadores en el sector estatizado, comités de vigilancia de la producción en el sector privado. Se trata de una participación impulsada y dirigida desde el Estado, restringida a ciertas capas sociales específicas sobre las cuales el gobierno busca apoyarse prioritariamente. Rápidamente, varias iniciativas de este tipo fracasan o no tienen continuidad. Es el caso de los Comités de la Unidad Popular que dejan de existir por falta de un proyecto político concreto; otras muestran sus límites, como las JAP, las que a pesar de su real contribución al combate en contra del mercado negro, no alcanzan a tener un poder real; o los comités de vigilancia del sector privado, que nunca lograron constituirse efectivamente por miedo a gatillar la furia de la

pequeña y mediana burguesía. Fundamentalmente, el proyecto de la UP tiene numerosos rasgos de productivismo, en el sentido de que insiste más en la «batalla de la producción» que en la importancia de la praxis participativa del conjunto de las clases populares, lo que el historiador Gabriel Salazar llama, de un modo a propósito provocador, como un proyecto de «reformas para el pueblo, sin el pueblo». Una de las medidas emblemáticas de la UP con el apoyo de la CUT, a favor de una transformación progresiva de las relaciones sociales de producción, fue implantar un sistema de cogestión en las empresas estatizadas. La constitución (y ampliación) del Área de Propiedad Social (APS) es una de las piedras de tope de este período, ya que acentúa el contenido y la radicalidad de los conflictos entre capital y trabajo, al mismo tiempo que se constituye en un rico ensayo de apropiación social de la esfera productiva por parte de los asalariados. Recordemos que son finalmente más de 400 empresas las que conforman el APS en 1973, de las cuales más de 260 fueron requisadas bajo presión de los trabajadores. A pesar de los avances en términos de liberación del trabajo y participación, es cierto que se mantienen varias formas de heterogestión y, a veces, un paternalismo alejado de la gesta autogestionaria deseada por algunos militantes obreros. Igualmente, la difícil cuestión de la propiedad de las empresas nunca fue resuelta por el gobierno, ya que tuvo que enfrentar un Parlamento mayoritariamente hostil y un aparato judicial que rechaza el derecho a estatizar.

Progresivamente, la energía liberada por esta «revolución desde abajo» se expande, por capilaridad, desde los sectores obreros más organizados hacia las capas populares subalternas. La extensión y difusión de la acción colectiva a un sujeto social cada vez más amplio se vuelve en contra del proyecto de reformas institucionales y graduales de la UP. Los dirigentes sindicales de las medianas empresas mantenidas por el gobierno en el sector privado, los pobladores vinculados al ala rupturista de la izquierda, los militantes en general jóvenes y críticos hacia sus direcciones políticas, se convierten en líderes de un movimiento donde se mezclan, de un modo fecundo, renovación generacional, identidades populares insurreccionales y radicalización política. Indudablemente, en las bases de este desarrollo encontramos una modernización acelerada de las fuerzas productivas que cada vez más se sienten aprisionadas en el marco de relaciones sociales de producción, a menudo arcaicas.

El segundo respiro del poder popular toma impulso con el paro de octubre de 1972 y termina en junio de 1973. El rasgo esencial de esta etapa es el surgimiento de organizaciones independientes del ejecutivo, tales como los

cordones industriales y, en menor medida, los comandos comunales y diversos comités vinculados al movimiento de pobladores. En esta etapa aparece con fuerza el movimiento de pobladores como parte fundamental del poder popular urbano. Varias experiencias colectivas llevadas a cabo por estos agentes sociales demuestran la importancia de sus movilizaciones y cómo logran interpelar al Estado central sobre su situación en lo relativo al transporte, vivienda, salud, etc. El caso del campamento Nueva Habana es, en este sentido, simbólico aunque haya sido una excepción. Este ensayo de barrio autogestionado representa un embrión de poder popular constituyente local. Sin embargo, y al igual que otros sectores del movimiento pobladores, este campamento no vivió una verdadera «revolución cultural» y sus habitantes se mantienen insertos en una lógica verticalista en sus relaciones con los cuadros del MIR. En cuanto a la aparición de los comandos comunales, si bien permite confirmar la tendencia a la unidad de los sectores subalternos (que se acelera durante el paro de octubre de 1972), podemos concluir que su real praxis ha sido ampliamente mitificada.

A partir de mediados del año 1972, la Unidad Popular debe moverse en un contexto de grave crisis económica en la que se retroalimentan inflación y mercado negro, conscientemente organizados por la burguesía y la oposición. Las clases dominantes, después de haber centrado sus ataques en el gobierno, se preparan para actuar decididamente fuera del marco institucional. Producto de esta acumulación de tensiones, se dibuja una inquietante división dentro del gobierno, entre un sector «rupturista» y un polo más moderado. El fenómeno queda claramente de manifiesto con los sucesos de la Asamblea de Concepción, duramente condenada por Allende y el PC, líderes del ala gradualista. Pero es sobre todo el creciente desfase entre, por una parte, el gobierno, las direcciones de los partidos y, por la otra, los trabajadores y algunos militantes de base, lo que marca la crisis de representación que vive el conjunto de la izquierda partidaria. El aumento exponencial de las movilizaciones obreras no podía dejar de estremecer a la CUT, incluso si ésta logra mantener una estabilidad de fachada durante las elecciones sindicales nacionales de mayo de 1972. Frente a la rápida ofensiva de la oposición, a las crecientes dificultades del gobierno de Allende (atacado desde el interior pero también por el imperialismo), a la integración progresiva de la CUT al aparato estatal, algunas fracciones del movimiento social buscan nuevas forman de expresión autónomas. El «octubre chileno» es, en ese sentido, una verdadera prueba de fuego. Asistimos a la creación de múltiples autoorganizaciones, donde se combinan la actividad de varias capas sociales en un gran movimiento destinado a defender el gobierno, pero que también sobrepasa ampliamente los límites del programa de la izquierda

parlamentaria. El sistema institucional en el cual se fue progresivamente estancando la Unidad Popular aparece de repente obsoleto. El gobierno y la CUT se ven paralizados ante el vigor de la ofensiva y es fundamentalmente desde la base que surge la resistencia, otorgándoles –temporalmente– consistencia a las consignas de poder popular. A nivel de la industria, estas coordinaciones de carácter horizontal y territorial responden masivamente al boicot patronal con una ola de tomas de fábrica y, en algunos casos, con la reorientación del aparato productivo bajo control obrero. Esta autodefensa obrera se adecúa a la movilización en el seno de las empresas del Área de Propiedad Social. Así, varios cordones en sí, que existen en el paisaje urbano de las grandes ciudades, se autoorganizan sobre bases políticas radicales e intentan constituirse en tanto cordones para sí en el marco de espacios de lucha bien determinados, muy anclados localmente. Son el resultado de «un conjunto de procesos moleculares de unificación interna del movimiento obrero» que sobrepasa el carácter corporativista de los sindicatos y de la división social del trabajo[11].

La descentralización de la actividad política es tal, la dinámica de socialización y de intermediación de las acciones colectivas tan importante, que de sujetos pasivos en el marco de un proceso de reformas por etapas, sectores completos de las capas dominadas pasan a «la condición de sujetos determinantes en el mundo material y social que les rodea[12]». Nos encontramos claramente frente a una coyuntura fluida de profunda crisis política. Sin embargo, después de cada episodio de desectorización del espacio social, los órganos embrionarios de poder popular se ven atrapados entre su fidelidad a Allende (quien les pide respetar sus compromisos institucionales) y el deseo de mantener la presión social para hacer avanzar la transición. Esta indecisión los lleva a un período de reflujo, de desmovilización y nueva separación entre los diversos agentes en lucha (obreros, pobladores, estudiantes, etc.) alimentado, además, por las numerosas divisiones de la izquierda. Al final, el poder popular se «entrega» a Allende (como lo muestra la carta, desesperada, de los cordones de Santiago, fechada el 5 de septiembre de 1973 y reproducida en el Anexo 7).

Rápidamente, el gobierno retoma el control de la situación y canaliza su base militante, muy activa en los embriones de poder popular. El presidente de la República adopta, entonces, una inestable posición de moderador de los conflictos sociales, se lanza en interminables negociaciones con la Democracia Cristiana (cada vez más a la derecha) y busca frenar las opciones de poder popular constituyente, en la medida que éstas cuestionan sus compromisos legales. Esta táctica se sostiene también en la integración creciente del aparato

sindical al Estado y por una invitación apremiante a las Fuerzas Armadas para que sus más altos oficiales ocupen cargos en la gestión pública. Asumiendo este rol de árbitro sui generis del conflicto de clase, la fracción moderada de la UP –especialmente el PC– condena vigorosamente el «izquierdismo» de las tomas de fábricas, acusando al MIR de ser su instigador. Pero el compañero presidente tuvo también la inteligencia política de admitir el rol esencial jugado por la autoorganización del movimiento social, reconociendo específicamente a los cordones industriales por sus acciones decisivas. Jugando a dos bandas, la Unidad Popular estatiza empresas decididamente, designa interventores al mismo tiempo que deja fuera de su proyecto de participación directa a los trabajadores de numerosas empresas del sector privado ocupadas, pero juzgadas «no estratégicas». Identificamos la misma lógica en lo que se refiere al problema del abastecimiento y a las relaciones del ejecutivo con el movimiento de pobladores. De ahí las numerosas marchas de los campamentos en el centro de la capital y en provincia, o también, la aparición de Comandos de abastecimiento directo, destinados a denunciar la falta de iniciativas gubernamentales en la esfera de la circulación de mercaderías.

Esta dinámica de péndulo que deja insatisfechas numerosas reivindicaciones populares y que tampoco reconforta a las capas medias y superiores de la sociedad, se reproduce durante la tercera secuencia de las políticas del conflicto de la UP, es decir, a partir del intento de golpe de junio de 1973 (el Tancazo). A esta fecha, la contrarrevolución ya está en marcha. La figura tutelar de los militares se vuelve omnipresente en todos los niveles y la relación general de fuerzas se degrada considerablemente para los militantes y el movimiento social. La izquierda parlamentaria no quiere apoyar un poder popular que podría hacer surgir una dualización en relación con las instituciones vigentes (como lo reclama el MIR). El debate sobre el poder popular está en su apogeo y el conjunto de las organizaciones políticas del país reconoce su fuerza potencial, sea para condenarlo en nombre del peligro de la «dictadura marxista», sea para intentar canalizar su fuerza. Más que nunca, los cordones industriales proyectan una imagen deformada, desmedidamente aumentada en la escena política nacional, alimentada por algunos periódicos cercanos a la izquierda «rupturista» y que no tiene relación con sus verdaderas capacidades de movilización.

El poder popular posee sin embargo un repertorio de acción colectiva amplio y diversificado, bastante clásico pero vigoroso, que le permite afirmarse como un actor importante. Algunas jornadas de movilización son incluso excepcionales, como las de junio y julio de 1973. Sin embargo, ver en los cordones industriales

«soviets a la chilena» es más bien una ilusión heroica militante[13]. No cuentan con una organización permanente y democrática, basada sobre delegados elegidos en asamblea y que representen a los miles de trabajadores de su zona. De hecho, la participación política de la mayor parte de la clase obrera y del movimiento social urbano ha sido sólo garantizada en coyunturas determinadas y defensivas (paro de octubre, Tancazo…). Una vez la situación estabilizada, la gran mayoría de los asalariados se resitúa bajo la orientación gradualista del gobierno, que sigue representando la esperanza. Entre tanto, las actividades de los órganos de poder popular son mantenidas por algunas minorías activas, algunos cientos de individuos; a menudo, ellos mismos comprometidos políticamente con los partidos de gobierno. En esas condiciones, la estructuración de comandos comunales de Trabajadores, que articulen un amplio bloque social y en condiciones de hacerse cargo democráticamente de la gestión de una comuna, de una provincia, sólo ha sido una ilusión. Los caudillismos militantes, las prácticas sustitucionistas de los partidos, también afectan la dinámica democrática del poder popular. El distanciamiento simbólico, cultural, entre dirigentes y obreros, entre cuadros militantes y pobladores, entre hombres y mujeres, es elemento que siguió pesando.

Así, divisiones históricas y sectorización del movimiento social (dentro de la clase obrera, entre el movimiento obrero y los pobladores, entre dirigentes políticos y base social) fueron, a pesar de todo, la norma. Los intentos de coordinación provincial fueron demasiado tardíos y cortocircuitados por las divisiones de la izquierda, y principalmente, por un debate sin fin sobre la relación tumultuosa entre la CUT y los cordones. Así como lo subraya el historiador Hugo Cancino

Las tentativas de coordinación de los nacientes órganos de Poder Popular, solo se lograron en un ámbito provincial, en Santiago, y a nivel de los Cordones Industriales. Empero, la capacidad de convocación, movilización y efectividad orgánica de esa coordinación no puede sobrevalorarse. Se trataba de un esbozo que, por lo demás, tropezó con múltiples obstáculos en cada uno de los sectores geográficos del Gran Santiago. Dichos obstáculos se arraigan en las desiguales relaciones de fuerza entre los partidos socialista y comunista y las diferentes tendencias o grupos caudillescos dentro del PS que a veces se disputaban parcelas o sectores de poder en el movimiento obrero[14].

Desde fuera de la UP, el MIR participa activamente y, en la medida de sus posibilidades, en las movilizaciones. Con vehemencia, sus militantes buscan construir un «poder dual» que se constituiría en la célula de base de la nueva sociedad por venir. El MIR, sin embargo, subestimó la importancia de las iniciativas de centralización de los cordones industriales. La joven organización revolucionaria, que se mantiene minoritaria, se posicionó fundamentalmente en el campo político como una fuerza de presión sobre el ejecutivo, incapaz de encarnar una alternativa válida para amplios sectores del movimiento obrero. Paralelamente, el aparato de la CUT busca integrar bajo su dirección a los cordones industriales, mientras los dirigentes comunistas multiplican las maniobras para lograr arrancarlos de las manos del PS y de los «izquierdistas». Atemorizados por una dinámica libertaria que no controla, el partido fundado por Luis Emilio Recabarren no supo considerar esta dimensión del movimiento social, distante de su concepción monolítica de la acción colectiva. El PS, por su parte, heredero de su historia de partido-movimiento policlasista, fue progresivamente tomando el liderazgo de numerosos órganos de poder popular, gracias a jóvenes militantes provenientes de algunos comités regionales muy comprometidos, no sin una buena dosis de oportunismo. De ahí la postura vacilante de los dirigentes socialistas de los cordones: muy comprometidos, critican duramente a su gobierno, pero en momentos clave son los principales moderadores del entusiasmo de los trabajadores para volverlos al regazo allendista.

En el transcurso de estos tres tiempos discordantes del poder popular, se encuentra implícitamente la relación dialéctica entre lo que algunos investigadores han llamado la «revolución desde abajo» (se trata en realidad de la autoorganización de los sectores populares) y la política de reformas del gobierno de Allende. No se trata de una dicotomía simple, ni de un proceso cosificado, cristalizado. Si el concepto de «revolución desde abajo» ha permitido efectivamente hacer avanzar nuestra visión, llamando la atención de los investigadores sobre lo que se trama en la base de la sociedad, no se le puede enfrentar aisladamente, separado de su contexto y de sus relaciones orgánicas con la UP. Sin ninguna duda, esas relaciones tumultuosas permitieron progresos, en un primer momento, en la democratización de la sociedad, en la politización de las capas sociales subalternas y en el inicio de reformas progresistas radicales. Pero una vez que el marco institucional es desbordado por los agentes sociales hasta entonces al margen de la participación política tradicional, esta articulación se convierte en freno para las movilizaciones. El «constitucionalismo terco» de la UP, su situación de minoría en el Parlamento (hecho político fundamental) y

una confianza desmedida en el legalismo de las Fuerzas Armadas, explican que el gobierno haya aceptado ese rol de equilibrista, de árbitro del conflicto social. Un ejecutivo que, por ejemplo, permitió que se aplicara la Ley de Control de armas en contra de los cordones industriales y que incluso toleró el arresto de los marinos de Valparaíso. Salvador Allende, fiel hasta la muerte a sus principios y a sus promesas de campaña, siempre intentó mantener un equilibrio peligroso de conciliación para impedir una ruptura del orden constitucional que lo llevó a la cabeza del Estado. Ninguna vía de escape se presentó con suficiente fuerza para liberar a los poderes populares constituyentes de esta relación de dependencia con el Estado y el gobierno.

¿Un proceso revolucionario sin dualidad de poder?

Más allá de su diversidad y de sus contradicciones, el poder popular urbano puede ser definido como un «poder en movimiento» en el sentido en que lo entiende Sidney Tarrow. Y como bajo otras latitudes, «no puede ser comprendido sin que sea tomada en cuenta la centralidad de la oposición capital-trabajo, en el seno de las sociedades capitalistas contemporáneas[15]». Desde un punto de vista epistemológico, estas políticas del conflicto de gran amplitud subrayan que sería iluso querer segmentar al extremo los conceptos de movimiento social, movimiento obrero, lucha de clases, acciones colectivas y procesos revolucionarios, tratando de separar unos para mejor apartar otros. Al contrario, períodos como el de la Unidad Popular recuerdan la lógica ininterrumpida, aunque diacrónica, de los grandes conflictos sociales. Charles Tilly, a propósito de las revoluciones europeas ha subrayado en muchas ocasiones, que desde la huelga hasta la constitución de un episodio revolucionario, el camino es tortuoso y que –la mayoría de las veces– ha terminado en violentas derrotas. Según Tilly, en el curso de tales experiencias colectivas excepcionales, conviene distinguir dos etapas fundamentales: la «situación revolucionaria» (revolutionary situation) y el «resultado revolucionario» (revolutionary outcome). También se debe reconocer el grado de división de la comunidad política y la amplitud de la transferencia de poder en el transcurso de este proceso[16]. Si nos basamos en estos criterios, podemos afirmar que durante la UP, decanta una situación revolucionaria, por el hecho de la importante movilización y división de la sociedad civil, por la profundidad de la

crisis del régimen político así como por el peso de las fracciones de la población que aspiraban a una transformación social radical. Sin embargo, aunque se reunieron estas condiciones, ello no significó mecánicamente un resultado revolucionario, es decir, y siempre a partir de la grilla de análisis de Tilly, una ruptura del aparato estatal, la neutralización de las Fuerzas Armadas y una transferencia de poder a manos de las fuerzas revolucionarias. En esa perspectiva, podemos afirmar que el poder popular no representó órganos de doble poder en el pleno sentido del término. O, dicho de otro modo, los órganos de poder popular constituyente se quedaron en una fase de desarrollo local, la mayor parte del tiempo, en una etapa embrionaria sin llegar a conformar las células de base de la nueva organización social, que vacila en gestarse. Sin embargo, una poderosa tendencia a la autogestión existió en Chile y podemos concluir, con Marie-Noëlle Sarget, que los organismos de poder popular,

eran portadores de una forma de democracia alternativa y opuesta a la democracia chilena, basada ya no sobre la exclusión del proletariado y los pobres, sino sobre la de los sectores hostiles a la política de reformas del gobierno popular[17].

Pero estos organismos de poder popular son portadores sólo como una posibilidad no advenida, una bifurcación eventual pero rápidamente cerrada, de ese proceso. Podemos identificar un potencial autogestionario en marcha en la periferia de las grandes ciudades y, en el curso del último año de la UP, un principio de dualización de poder que desemboca, como en España de los años treinta o en otras situaciones revolucionarias latinoamericanas, en la multiplicación de consejos obreros y campesinos.

Como lo ha señalado René Zavaleta Mercado «los partidos no se iban a los cordones abandonando el poder 'oficial' sino que existían a la vez en el poder oficial y en los cordones[18]». Para nosotros, un punto importante olvidado durante mucho tiempo, se sitúa precisamente aquí: más allá de sus divisiones, el conjunto de la izquierda partidaria y amplias fracciones del movimiento social compartieron una concepción profundamente estatista del cambio social. Para la UP, el Estado de compromiso no es considerado un obstáculo para su estrategia de transición, sino más bien al contrario, como una de sus herramientas fundamentales. Esta «visión estatista» o estadocentrada proviene de un conjunto de tradiciones ideológicas y culturales, de percepciones heredadas de una

formación sociopolítica que se forjó en el curso de los años veinte al servicio de una oligarquía preocupada por el avance de la «cuestión social». A pesar de varios elementos de ruptura, el proyecto de la UP se inscribe, como lo afirman los historiadores Gabriel Salazar y Julio Pinto, en la línea de esos proyectos «nacionalistas-desarrollistas». El sueño inconcluso de Salvador Allende fue intentar combinar esta herencia con un programa de transición al socialismo como prolongación, pero sobre todo como su superación gracias a la participación de las clases populares organizadas. Sin embargo, en esas condiciones, los órganos de participación gubernamentales y los poderes populares embrionarios, surgidos desde la base, se encontraron muy pronto maniatados «en la jaula liberal tendida desde 1925 por la Constitución Política[19]».

Por su parte, las clases dominantes inteligentemente lograron sobreponerse a sus divisiones y tomar conciencia de que el corazón del problema ya se encontraba situado fuera del campo institucional. Casi instintivamente, comprenden que ya no se trata de conservar un pacto social forjado en el marco del Estado de compromiso, sino de defender, a cualquier precio, la propiedad privada de los medios de producción. Es precisamente aquí que se sitúa, a lo largo de todo el siglo XX, la «frontera de la democracia» chilena, como lo ha demostrado en un estudio innovador, el politólogo Juan Carlos Gómez. Pretendiendo socializar los principales medios de producción al mismo tiempo que el mantenimiento del respeto del juego democrático y electoral, Allende cree poder evitar el enfrentamiento violento. Pero, «el conflicto en torno a las áreas de la propiedad social nunca logró ser resuelto democráticamente, pero fue resuelto definitivamente: el derecho de propiedad volvió a ser inviolable, garantizado no a través de las formas constitucionales, sino por las instituciones armadas[20]» y el terrorismo de Estado. En 1974, con ocasión de la conmemoración del primer año del golpe de Estado, el diario El Mercurio, pudo cínicamente felicitar a los vencedores:

el poder popular se desvanece frente al ruido, el olor y las balas de la guerra verdadera. El pueblo tendrá armas, proclama Allende, sin embargo el silencio frente a los tanques revela que el pueblo marxista no tiene todavía la preparación[21]…

Se revela así, desde los años treinta hasta el golpe de Estado del 11 de

septiembre de 1973, un continuum institucional relativo, acompañado de la presencia combinada de una discontinuidad social sostenida, jalonado por luchas sociales explosivas y represión regularmente sangrienta[22]. Y es también en una trayectoria histórica aún más vasta que se inscriben los poderes populares constituyentes de la UP. Al intentar conectarlos con los diversos momentos de independencia de clase y de autoorganización colectiva de la historia social del país, nos reenvían a otras experiencias, como por ejemplo la Asamblea Obrera de la Alimentación Nacional (AOAN) de 1918-1919, o las «sociedades de resistencia» de fines del siglo XIX.

Lecciones chilenas, fin y continuidades

Desde el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, se han escrito miles de páginas que buscan hacer un balance de la UP y muchos son los autores y actores que han intentado explicar las causas de la tragedia chilena. Por supuesto, la injerencia activa del gobierno de Nixon no puede ser eludida y actualmente ha podido ser bien documentada. El rol del imperialismo (y de Henri Kissinger) es, en efecto, una coordenada mayor al momento de analizar el fin de esos mil días de esperanza, de consignas y luchas. Nuestro trabajo no busca, en ningún caso, minimizar este aspecto sobre el cual existen numerosos escritos, investigaciones y documentales[23]. La campaña de desestabilización llevada a cabo por Estados Unidos fue considerable: más de ocho millones de dólares fueron gastados en tres años para financiar medios de comunicación (especialmente El Mercurio) e influenciar a la opinión pública, a los partidos de oposición (entre los cuales, particularmente la DC para que rechazara cualquier compromiso con Allende) y, en menor medida, a corporaciones del sector privado contrarias a la UP. Esto sin contar la presión económica ejercida en contra de Chile, los contactos con los militares golpistas y el apoyo logístico de la CIA: esta «secreta obscenidad» de la historia reciente debe ser parte de toda reflexión sobre el fin de la «vía chilena[24]». De hecho, para nosotros, es la primera lección. Sin embargo, el objeto de este libro consiste más bien en explorar otros horizontes que permitan enriquecer nuestro conocimiento colectivo sobre este período. Es así que hemos puesto en el centro de nuestra investigación las tensiones sociopolíticas y las relaciones de fuerza internas al proceso.

En ese campo, hoy todavía y más allá de los matices de cada uno, varios analistas –a menudo ubicados a la izquierda en el tablero político– lamentan amargamente la excesiva polarización del «centro político», denuncian la irresponsabilidad del polo «rupturista» y de los partidarios del poder popular, los que habrían contribuido a fragilizar al gobierno y su política de negociación con la DC, para finalmente distanciarlo de las «clases medias». Ya en 1973, esta constatación había empujado a los eurocomunistas italianos, luego europeos, a proclamar la imposibilidad de una ruptura violenta de las instituciones liberales y la necesidad de reformas progresistas impulsadas por amplias mayorías electorales[25]. En la misma línea, treinta años después, un sociólogo crítico chileno (cercano al Partido Comunista) como Tomás Moulian, manifiesta que la única salida para la UP habría sido una política de «profundización reformista» en torno a la cual había que aglutinar al «partido centrista dominante». Moulian como el historiador Luis Corvalán M. o, en otro registro, Alain Touraine, atribuyen, en parte, al «comportamiento de las masas que se tomaban en serio su papel de actores históricos y que, en ocasiones, actuaban con autonomía, desde sus impulsos espontáneamente vividos[26]», la incapacidad de Allende (calificado de «realista moderado») para dirigir el proceso.

A la luz de nuestra investigación, podemos legítimamente sorprendernos con estos postulados, basados sobre una visión estrecha de la transformación social y, sobre todo, muy descontextualizada, una perspectiva que permitiría creer en la posibilidad histórica de un proceso revolucionario bien ordenado, sin desbordamientos colectivos y tranquilamente controlado «por arriba», en el marco del Estado de compromiso. Aventurarse en tal posibilidad es precisamente no comprender los mecanismos en funcionamiento en el espacio de las luchas sociales de este período, la radicalización del campo militante y borrar de un plumazo la energía creadora del poder popular con –es cierto– todas sus limitaciones. Finalmente, la conclusión de esta investigación parece darle la razón al economista Pedro Vuskovic, a quien difícilmente se le puede considerar de mala fe cuando juzga al gobierno de la UP, ya que fue uno de sus ministros más importantes. Vuskovic, desde 1976, y a diferencia de la mayoría de los dirigentes de izquierda, intenta hacer un balance autocrítico, afirmando que «no se percibió suficientemente la potencialidad de movilización de masas y de gestación y desarrollo de nuevas formas de poder popular[27]». Evidentemente, no se trata de dar lecciones de revolución desde un escritorio, a más de 40 años del golpe, ni tampoco de querer transformar lo que fueron los actores sociales y políticos reales, en este momento, comenzando por la trayectoria del propio Salvador Allende. Así como lo resalta Peter Winn:

La propia preferencia de Allende por soluciones constitucionales, un cambio controlado y políticas electorales, también sugería un compromiso político. Es posible que la economía chilena estuviera en ruinas, que el conflicto de clases se manifestara en las calles y que la política se encontrara polarizada más allá de cualquier solución, pero Allende no era capaz de transformarse en el «Lenin de los Andes» y dar vuelta la espalda al trabajo de toda su vida. […] No está claro que el hecho de adoptar la estrategia alternativa [rupturista] hubiera conducido a un avance revolucionario. Bien pudo haber llevado a un golpe más temprano y a una masacre aún más sangrienta. Pero lo que en retrospectiva es evidente es que la elección de Allende de abandonar la revolución desde abajo y mantener su vía democrática condenó a la revolución chilena a la derrota[28].

La historia y las memorias del poder popular todavía tienen mucho por decirnos, lejos de un pasado petrificado como la estatua de Salvador Allende instalada frente a La Moneda, en la plaza de la Constitución, en Santiago. Al alba del siglo XXI, las «lecciones chilenas» todavía son dignas de enseñanzas y numerosos aspectos de esta experiencia colectiva extraordinaria quedan por analizar y descubrir[29]. El politólogo francés Pierre Cours-Salies señala sobre este tema «continuidades de problemas y de debates políticos más importantes de lo que creemos[30]». Si la Unidad Popular nos sigue interpelando es porque nos señala las inmensas dificultades de un cambio radical de sociedad y de una democratización plena en todos los niveles, que pueda reconciliar emancipación y representación, participación democrática y apropiación social. El tema de la independencia del movimiento obrero, de la autonomía de los movimientos sociales, las relaciones a veces difíciles –pero también necesarias– entre espacio protestatario y campo militante, entre izquierdas sociales e izquierdas políticas, el lugar del Estado y su rol, deben estar en el corazón de las reflexiones sobre este período. Esto no debe hacernos olvidar que, en un momento de tanta polarización, una élite amenazada en sus intereses fundamentales es capaz de apoyarse en el terrorismo de Estado para restablecer sus privilegios. Así como también es cierto que estos cuestionamientos deben necesariamente sufrir una renovación teórica, ser actualizados y vinculados con otras experiencias (pasadas y presentes) y nuevas problemáticas (de género, ecológicas, poscoloniales, institucionales, etc.[31]).

Desde la caída del muro de Berlín y después de un siglo XX marcado a fuego por el estalinismo y los totalitarismos, algunos ideólogos han intentado afirmar,

sin mayor costo, que la historia habría llegado a su fin: la humanidad estaría condenada a aceptar dócilmente o por despecho su suerte, lejos de las utopías y de otros mundos posibles. Sin embargo, el «volcán latinoamericano[32]» nos recuerda, desde hace una decena de años, que la sonrisa del fantasma de los poderes populares constituyentes recorre nuevamente América Latina. La región ha conocido importantes movilizaciones colectivas en contra de las consecuencias del neoliberalismo con dinámicas de luchas que en ocasiones, lograron la dimisión de los gobiernos considerados ilegítimos o el cuestionamiento del poder de las transnacionales y oligarquías locales. La modificación de las relaciones de fuerza en el patio trasero de Estados Unidos y lo que ha sido calificado por algunos analistas como el «giro a la izquierda» (en Bolivia, Ecuador y Venezuela, especialmente), más allá de su importante diversidad e importantes contradicciones, son el resultado de una crisis de hegemonía de las élites tradicionales, pero también de movimientos sociales creativos que han sabido combinar reivindicaciones sociales, experimentos democráticos «desde abajo» con una orientación antineoliberal y, a menudo, antiimperialista. Esta coyuntura demuestra la existencia de numerosos actores en resistencia (indígenas, cesantes, campesinos sin tierra, sin casa, trabajadores y sindicalistas, militantes ecologistas, mujeres y feministas, etc.) en toda la región, así como una multiplicidad de experimentaciones concretas y alternativas de hacer sociedad. Se dibuja, entonces, la cartografía en actos de otras formas de vida cotidiana, de organizaciones sociales, políticas e incluso económicas. En diferentes contextos, gérmenes de poderes populares buscan a tientas los caminos de la emancipación, en general en contra de los poderes constituidos, frente a la represión estatal o paramilitar, pero también, a veces, vinculados con políticas públicas posneoliberales. A diferentes escalas y en varios territorios de lucha, en una relación original con el poder y con las cuestiones organizacionales, estas emancipaciones en construcción «indo-afro-latinoamericanas» son ricas, contradictorias e innovadoras. Nos interpelan, particularmente en un momento en que el «viejo mundo» vive una crisis mayor, radical, una crisis de civilización[33].

Considerada de este modo, la memoria colectiva de los tesoros perdidos chilenos aparece con toda su modernidad, con el ardor de una brasa que todavía quema. Nos muestra ese pasado que sigue viviendo en nosotros, ese tiempo revolucionario que podríamos haber creído terminado pero cuyo pulso continúa palpitando, pues «la memoria viva no nació para servir de ancla –escribe Eduardo Galeano–; tiene más bien vocación de catapulta. No quiere ser un remanso de llegada, sino un puerto de salida. No reniega de la nostalgia, pero

prefiere la esperanza, sus peligros, sus intemperies. Los griegos pensaban que la memoria era hija del tiempo y del mar... No estaban equivocados[34]».

1 Pereire, Irène, Les grammaires de la contestation. Un guide de la gauche radicale, París, La Découverte, 2010.

2 Para Pierre Bourdieu la «fuerza propiamente política de la idea reside, en último análisis, en la fuerza del grupo que logra movilizar» («Questions de politique», Actes de la recherche en sciences sociales, nº 16, 1977, pp. 55-89).

3 Illanes, María Angélica, La batalla de la memoria, op. cit., p. 178.

4 Thompson, Edward P., La formation de la classe ouvrière anglaise, op. cit., p. 174.

5 Luck, Simon; Dechezelles, Stéphanie, Voix de la rue ou voix des urnes?, op. cit., p. 20.

6 Bensaïd, Daniel, La discordance des temps, París, Les Éditions de la Passion, 1995.

7 Para continuar con la terminología de Tilly, Charles; Tarrow, Sidney, Politique(s) du conflit, op. cit., anexo 2.

8 Rocher, Guy, «Le processus révolutionnaire», Le changement social, op. cit., pp. 277-278.

9 Arendt, Hannah, Sobre la revolución, Madrid, Alianza editorial, 1988, p. 283.

10 Jorge Magasich también identifica tres etapas (Pouvoir formel et pouvoir réel, op. cit.).

11 Cruz, Luis, «Estado, partidos y movimiento obrero», op. cit., p. 410.

12 Smirnow, Gabriel, Le développement de la lutte pour le pouvoir pendant l'Unité Populaire, op. cit., p. 85.

13 Es por ejemplo, el caso de Maurice Najman (Le Chili est proche, op. cit., p.

22) o de Dolores Mujica (Cronología comentada de los cordones industriales), op. cit.

14 Cancino, Hugo, Chile: La problemática del poder popular…, op. cit., p. 373.

15 Ver la introducción en Béroud, Sophie; Mouriaux, René; Vakaloulis, Michel, Le mouvement social en France, op. cit.

16 Ver Tilly, Charles, From mobilization to revolution, op, cit., y del mismo autor: Las revoluciones europeas. 1492-1992, Madrid, Crítica, 2000.

17 Sarget, Marie-Noëlle, Système politique et Parti Socialiste au Chili, op, cit., pp. 103-106.

18 Zavaleta, René, El poder dual en América Latina, op. cit., p. 258.

19 Salazar, Gabriel; Pinto, Julio, Historia contemporánea de Chile, t.1, op. cit., pp. 151-166.

20 Gómez, Juan Carlos, La frontera de la democracia. El derecho de propiedad en Chile. 1925-1973, Santiago, LOM ediciones, 2004, p. 353.

21 El Mercurio, Santiago, 11 de septiembre de 1974.

22 Riz, Liliana de, «La lucha de clases en la sociedad chilena: hipótesis para su interpretación», Revista Mexicana de Sociología, vol. 38, nº 1, México, 1976, pp. 127-149.

23 Ver bibliografía al final de este texto.

24 Corvalán M., Luis, La secreta obscenidad de la historia de Chile, op. cit.

25 Hacemos alusión aquí al «compromiso histórico» anunciado por el secretario general del PC italiano Enrico Berlinguer, en septiembre-octubre de 1973, a la luz de los eventos en Chile.

26 Moulian, Tomás, Conversación interrumpida con Allende, op. cit., p. 97.

27 Vuskovic, Pedro, (comp. Maldonado, R.), «Política económica y poder político» (1976). En: Obras escogidas sobre Chile (1964-1992), Santiago, Cepla,

1993, p. 271.

28 Winn, Peter, La revolución chilena, op. cit., p. 115.

29 Gaudichaud, Franck, «Retour sur les leçons chiliennes», Contretemps, París, Textuel, 2004, pp. 166-178.

30 Cours-Salies, Pierre, «Continuité de lutte». En: Arenas, Patricio; Gutiérrez, Rosa; Vallespir, Oscar (coord.), Salvador Allende. Un monde possible, Paris, Syllepse, Col. «Coyoacán», 2004, pp. 29-35.

31 Collectif Lucian Collonges, Autogestion: hier, aujourd'hui, demain, Paris, Syllepse, 2010.

32 Gaudichaud, Franck (dir.), El volcán latinoamericano. Izquierdas, movimientos sociales y neoliberalismo al sur del río Bravo, Concepción, Escaparate, 2011.

33 Gaudichaud, Franck, Emancipaciones en construcción en América Latina, Santiago, Tiempo robado Ed.-América en movimiento, 2015.

34 Galeano, Eduardo, «Ce passé qui vit en nous», Le Monde Diplomatique, Manière de voir, nº 82, París, agosto-septiembre de 2005.

Fuentes y breve selección bibliográfica[1]

Sobre la experiencia de la Unidad Popular

Allende, Salvador. Un Estado democrático y soberano. Mi propuesta a los chilenos (texto póstumo), Ed. Centro de Estudios Políticos Simón Bolívar y Fundación Presidente Allende (España), 1993. En: <www.salvador-allende.cl/Documentos/1970-73/proyecto_constitucion.pdf]>.

Altamirano, Carlos. Dialéctica de una derrota. México: Siglo XXI, 1977.

Álvarez, Rolando. Arriba los pobres del mundo. Cultura e identidad política del Partido Comunista de Chile entre democracia y dictadura. 1965-1990. Santiago de Chile: LOM ediciones, 2011.

Amorós, Mario. Compañero Presidente. Valencia: Publicaciones de la Universidad de Valencia, 2008.

Arenas, Patricio; Rosa Gutiérrez y Óscar Vallespir (coord.). Salvador Allende. Un monde possible. Paris: Syllepse, Coll. Coyoacán, 2004.

Bitar, Sergio. Chile 1970-1973: asumir la historia para construir el futuro. Santiago: Pehuén, 1995.

Bitar, Sergio y Crisóstomo Pizarro. La caída de Allende y la huelga de El Teniente. Santiago: Las Ediciones del Ornitorrinco, 1986.

Castells, Manuel. La lucha de clases en Chile. Buenos Aires: Siglo 21 Editores, 1974.

Castex, Patrick. Voie chilienne au socialisme et luttes paysannes. Paris: Maspero, 1977.

Cofré, Boris. El movimiento de pobladores en el Gran Santiago: las tomas de sitios y organizaciones en los campamentos. 1970-1973. Tesis de maestría en Historia, Universidad de Santiago de Chile, 2011.

Corvalán Márquez, Luis. Los partidos y el golpe del 11 de septiembre: contribución al estudio del contexto histórico. Santiago: CESOC, 2000.

. La secreta obscenidad de la historia de Chile contemporáneo. Santiago: Ceibo Ediciones, 2012.

Corvalán L., Luis. De lo vivido y lo peleado. Santiago: LOM ediciones, 1997.

. El gobierno de Salvador Allende. Santiago: LOM ediciones, 2003.

Debray, Régis. Conversación con Allende. México: Siglo XXI, 1974.

Dupoy, Georges. La chute d'Allende. Paris: R. Laffont, 1983.

Enríquez, Miguel. Con vista a la esperanza. Santiago: Escaparate Ediciones, 1998.

Faúndez, Julio. Marxism and Democracy in Chile: from 1932 to the fall of Allende. New Haven: Yale University Press, 1988.

Garcès, Joan. Allende y la experiencia chilena. Barcelona: Ariel, 1976.

. El estado y los problemas tácticos en el gobierno de Allende. México: Siglo XXI, 1974.

Garcés, Mario. La lucha por la casa propia y una nueva posición en la ciudad, El movimiento de pobladores en Santiago. Santiago: Pontificia Universidad Católica de Chile, Tesis de Doctorado, 1999.

Garcés, Mario y Sebastián Leiva. El golpe en La Legua. Santiago: LOM ediciones, 2005.

Garretón, Manuel A. (dir.). El proceso político chileno. Santiago: FLACSO, 1983.

Gaudichaud, Franck. «L'Unité populaire à l'aune des mouvements sociaux. Retour d'expérience», Propos recueillis par Matías Sánchez Barberán. En : Obregón, Jimena y Muñoz R., Jorge (dir.). Le 11 septembre chilien Le coup d'État à l'épreuve du temps, 1973-2013. Rennes: PUR, 2016, pp. 265-278.

. «A 40 años del golpe. Historiografía crítica y pistas de investigación para (re)pensar la Unidad Popular (1970-1973)», Revista Tiempo Histórico. Santiago: Universidad Academia de Humanismo Cristiano, N°6, 2013, pp. 63-79.

. (coord.), Dossier : «Autour du mouvement révolutionnaire chilien», Dissidences. Nancy, N° 14-15, 2004.

. «Retour sur les leçons chiliennes», Contretemps. París: Textuel, 2004, pp. 166-178.

Gaudichaud, Franck. Les rapports entre le gouvernement de l'Unité populaire et le mouvement ouvrier chilien (1970-1973). Université Bordeaux III, UFR Histoire, Mémoire de DEA, 1999.

Gumucio, Rafael A. Apuntes de medio siglo. Santiago: Chile América - CESOC, 1994.

Harmer, Tanya y Alfredo Riquelme S. (eds). Chile y la Guerra Fría global. Santiago: RIL Editores, Instituto de Historia - Pontificia Universidad Católica de Chile, 2014.

Harnecker, Marta. La lucha de un pueblo sin armas (Los tres años de gobierno popular). Rebelión, septiembre 2003. En: <www.rebelion.org/harnecker/030912harnecker.pdf>.

Labarca, Eduardo. Corvalán, 27 horas: el PC chileno por fuera y por dentro. Santiago: Quimantú, 1972.

Magasich, Jorge. Los que dijeron «No». Historia del movimiento de los marinos antigolpistas de 1973. Santiago: LOM ediciones, 2008.

Marini, Ruy Mauro. El reformismo y la revolución. Estudios sobre Chile. México: ERA, 1976.

Martínez, Gonzalo. Instantes de decisiones: Chile 1972-1973. México: Ed. gribaljo, 1998.

Millas, Orlando. Memorias 1957-1991, una digresión. Santiago: CESOC, 1996.

Moulian, Tomás. La Forja de Ilusiones: el sistema de partidos, 1932-1973. Santiago: ARCIS-FLACSO, 1993.

. Conversación interrumpida con Allende. Santiago: LOM ediciones, 1998.

Neghme, Fahra y Sebastián Leiva. La política del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) durante la Unidad Popular y su influencia sobre los

obreros y pobladores de Santiago, Tesis de licenciatura. Santiago: Usach, 2000.

ODEPLAN-Universidad de Sussex. La Vía Chilena al Socialismo. México: Siglo XXI, 1973 (en: <www.blest.eu/biblio/via_chilena/index.html>).

Padilla, Elías. La memoria y el olvido. Detenidos desaparecidos en Chile. Santiago: Ediciones Orígenes, 1995.

Palieraki, Eugenia. Manifestations de rues à Santiago durant l'Unité populaire. París: I-La Sorbonne, Mémoire de maîtrise d'histoire, 2001.

Pingeot, François. Populisme urbain et crise du centre-ville dans les sociétés dépendantes: enquête sociologique sur les mouvements revendicatifs urbains à Santiago du Chili: 1969-1973, Thèse de doctorat du troisième cycle. París: Université de Paris V, 1976.

Pinto, Julio (coord.). Cuando hicimos historia. La historia de la Unidad Popular. Santiago: LOM ediciones, 2005.

. (coord.), Fiesta y drama. Nuevas historias de la Unidad Popular. Santiago: LOM ediciones, 2014.

Politzer, Patricia. Altamirano. Santiago: Ed. Melquíades, 1989.

Power, Margaret. La mujer de derecha: el poder femenino y la lucha contra

Salvador Allende, 1964-1973. Santiago: Centro de Investigaciones Diego Barros Arana, DIBAM, 2008.

Pozo, José del y André Jacob (dir.). Le Chili de 1970 à 1990. De l'Unité populaire à l'après Pinochet. Montréal: ULB Editeur, 1994.

Pozo, José del. Rebeldes, reformistas y revolucionarias: una historia oral de la izquierda chilena en la época de la Unidad Popular. Santiago: Ed. Documentas, 1992.

Prats, Carlos. Testimonio de un soldado. Santiago: Pehuén, 1987.

Quiroga, Patricio. Compañeros. El GAP: la escolta de Allende. Santiago: Aguilar, 2001.

Ramos, Sergio. ¿Chile, una economía de transición? Santiago: CESO, Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Chile, 1972.

Samaniego, Augusto. Les stratégies syndicales de la «Central Unique des travailleurs» et l'action sociopolitique des salariés (1953-1973). Université Paris VIII, Thèse de doctorat en sociologie, 1998.

Seguel-Boccara, Ingrid. Les passions politiques au Chili durant l'Unité populaire (1970-1973): un essai d'analyse systémique. Paris: L'Harmattan, 1997.

Silva-Cáceres, Raúl. Mentalités idéologies et comportement politique dans le Chili de Salvador Allende: étude de cas d'un quartier de Santiago. Stockholm: Ed. UPPSALA, 1986.

Smirnow, Gabriel. The Revolution disarmed. New York: ERA, 1979.

Touraine, Alain. Vie et mort du Chili populaire, journal sociologique. Paris: Seuil, 1973.

Trumper, Camilo. A ganar la calle. The politics of public space and public art in Santiago Chile (1970-1973). Berkeley: Ph. D. of Philosophy in History, University of California, Berkeley, 2008.

Uribe, Armando. Le livre noir de l'intervention américaine au Chili. Paris: Seuil, 1974.

Valdivia Ortiz de Zárate, Verónica. El golpe después del golpe. Leigh vs Pinochet. Chile 1960-1980. Santiago: LOM ediciones, 2003.

Valenzuela, Arturo. El quiebre de la democracia en Chile. Santiago: FLACSO, 1989.

Vega, Héctor. L'économie du populisme et le projet de passage au socialisme proposé par l'Unité populaire. Université Aix-Marseille II, Thèse d'Etat en économie, 1981.

Vega, Luis. Anatomía de un golpe de Estado. La caída de Allende. Jerusalén: La semana publicaciones, 1983.

Verdugo, Patricia. Interferencia Secreta. 11 de septiembre de 1973. Santiago: Editorial Sudamericana, 1988.

Vidaurrázaga, Ignacio. Martes Once. La primera resistencia. Santiago: LOM ediciones, 2013.

Vuskovic, Pedro (comp. R. Maldonado). Obras escogidas sobre Chile (1964-1992). Santiago: CEPLA, 1993.

Winn, Peter. La revolución chilena. Santiago: LOM ediciones, 2013.

Sobre los cordones industriales y las formas de poder popular

Cancino, Hugo y Cecilia Castro. Poder obrero y popular en Chile 1970-1973. Aarhus, Romansk Institut Aarhus Universitet, 1981.

Cancino, Hugo. La problemática del poder popular en el proceso de la vía chilena al socialismo 1970-73. Aarhus, Aarhus Universitet Press, 1988.

Castelain, Christine. Enquête sociologique sur le bidonville Nueva Habana - Chili - 1970-1973. Rapports entre transformations des pratiques sociales, des

représentations idéologiques et intervention politique dans un mouvement revendicatif urbain. Paris: Ecole Pratique des Hautes Etudes, Thèse de troisième cycle, 1976.

Castillo, Sandra. Cordones Industriales. Nuevas formas de sociabilidad obrera y organización política popular (Chile 1970-1973). Concepción: Escaparate, 2009.

Cheetham, Rosemond; Alfredo Rodríguez; Gastón Rojas y Jaime Rojas. Comandos urbanos: alternativa de poder socialista. Santiago: CIDU-U. Católica de Chile, Documento de trabajo Nº 65, marzo 1973.

Cofré, Boris. Campamento Nueva La Habana, El MIR y el Movimiento de Pobladores 1970-1973. Concepción: Escaparate, 2007.

Cordero; María Cristina; Eder Sader y Mónica Threlfall. Consejo comunal de trabajadores y Cordón Cerrillos-Maipú: 1972. Balance y perspectivas de un embrión de poder popular. Santiago: CIDU-U. Católica de Chile, Documento de Trabajo Nº 67, agosto 1973.

Fausto, Ayrton; Patricio Frías y Andrés Opazo. Perspectivas de Poder Popular en Chile: Informe Preliminar. Santiago: FLACSO, Área de movimientos sociales (circulación interna), agosto 1972.

Gaudichaud, Franck. «¿Construyendo poder popular? El movimiento sindical chileno en el periodo de la Unidad Popular». En: Pinto, Julio (coord.), Cuando hicimos historia. La historia de la Unidad Popular. Santiago: LOM ediciones, 2005, pp. 81-106.

. «Chile. A broken collective memory», Memory and Popular culture, Latin American Perspectives. California: Sage Ed., 2009, pp. 45-62.

. «La Central Única de Trabajadores y los cordones industriales en el período de la Unidad Popular. Ensayo de interpretación histórica». En: Tres décadas después. Lecturas sobre el derrocamiento de la Unidad Popular, Cuadernos Sociológicos. Université ARCIS, Nº 3, 2005, pp. 86-109.

. «Poder popular? L'expérience chilienne». En: Collonges, Lucien (coord.), Autogestion. Hier, aujourd'hui, demain. Paris: Syllepse, 2010.

. Étude du mouvement social urbain chilien : «pouvoir populaire» et dynamique des Cordons industriels (1970-73), Thèse de doctorat en science politique sous la direction de Michael Löwy, Université Paris VIII, Laboratoire «Théorie du politique et rapports sociaux», 2005 (en linea: http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00788830).

Henríquez, Renzo. Cordón Cerrillos Maipú. Experiencia en movimiento y ejercicios de poder popular (1972-1973), memoria de Licenciatura. Santiago: Universidad Arcis, 2008.

. El poder del campo. Los campesinos de Maipú durante el gobierno de Allende. Santiago: Ediciones Londres 38, 2015.

Kries, Rafael. El ABC del Poder Popular. Cordones industriales y proyectos sociales en Chile 1970-1973. Concepción: Escaparate, 2014.

Leiva, Sebastián. Teoría y práctica del poder popular: los casos del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR, Chile, 1970-1973) y el Partido Revolucionario de los Trabajadores - Ejército Revolucionario del Pueblo (PRT - ERP, Argentina, 1973 - 1976), Tesis para optar al grado de Magíster en Historia. Santiago: USACH, 2007.

Magasich, Jorge. Pouvoir formel et pouvoir réel au Chili 1972-1973, Mémoire de Licence d'histoire, Université Libre de Bruxelles, Faculté de philosophie et lettres, 1980.

Miranda, Nicolás. Los Cordones industriales, la Revolución chilena y el Frente-Populismo. Santiago: Ediciones «Clase contra Clase», 1999

Mujica, Dolores. «Cronología comentada de los cordones industriales» (Folleto). Santiago: Ediciones «Clase contra Clase», 2005.

Najman, Maurice. Le Chili est proche : révolution et contre-révolution dans le Chili de l'Unité populaire. Paris: F. Maspero, Coll. Cahiers Libres, 1974.

Pastrana, Ernesto y Mónica Threlfall. Pan, techo y poder: el movimiento de pobladores en Chile (1970-1973). Buenos Aires: Ed. SIAP-Planteos, 1974.

Raptis, Michel. Quel socialisme au Chili? Etatisme ou autogestion. Dossier de la participation des travailleurs au processus révolutionnaire du pays. Paris: Ed. Anthropos, 1973.

Rodríguez, Guillermo. De la brigada secundaria al cordón Cerrillos. Santiago: Editorial Universidad Bolivariana, 2007.

Sader, Eder y Santiago Quevedo. Algunas consideraciones en turno a las nuevas formas de poder popular en poblaciones. Santiago: CIDU-U. Católica de Chile, Documento de trabajo Nº 57, 1972.

Silva, Miguel. Los Cordones Industriales y el socialismo desde abajo. Santiago: s/e, 1999.

Wilson, James W. Freedom and Control: Worker’s Participation in Management in Chile, 1967-1975, Ph. D. diss., Cornell University, 3 vols., 1979.

Winn, Peter. Tejedores de la revolución. Los trabajadores de Yarur y la vía chilena al socialismo. Santiago: LOM ediciones, 2004.

Historia oral, testimonios y entrevistas

Condaminas, C. (Comp.). Chili: vous êtes témoins, nos duele Chile. Paris: Les amitiés franco-chiliennes, 1975.

Dupuy, Pierre. Chili 1967-1973: témoignage d’un prêtre ouvrier. Paris: L’Harmattan, 2000.

Gaudichaud, Franck. Poder popular y cordones industriales. Testimonios sobre la dinámica del movimiento popular urbano 1970-1973. Santiago: LOM ediciones-DIBAM, 2004.

Henfrey, Colin y Bernardo Sojr. Chilean Voices: activists describe their experience of the popular unity period. New Jersey: Atlantic Highlands, 1978.

La tragedia chilena: testimonios. Buenos Aires: Merayo Ed., Coll. Documentos, 1973.

Le Chili d'Allende: témoignages de la vie quotidienne, Montréal, Ed. coopératives A. St Martin, 1978.

López D., Ana; Santiago Aguiar; Valeria Yáñez y Gabriel Muñoz. Testimonios de los Cordones Industriales. Reconstruyendo la historia con sus protagonistas. Santiago: Universidad Academia de Humanismo Cristiano, 2015.

Zamora, Sergio, Après septembre. Paris: Ed. Florent-Massot, Coll. Mémoires vives, 1994.

Documentación fotográfica y audiovisual

Cardoso, Armindo. Un otro sentimiento del tiempo. Santiago: Ediciones Biblioteca Nacional, 2015.

Colectivo de cineastas latinoamericanos, Cuando despierta el pueblo. New York: Tricontinental Film Center, 1973.

Congregación Católica Maryknoll. Campamento Nueva La Habana: Chile-EE.UU., 1971.

Cohen, Tom. Campamento Nueva Habana. New York: Amram nowak production, 1975.

Depardon, Raymond. Chile 1971. Santiago: Lom ediciones, 2013.

Guzmán, Patricio. La Batalla de Chile. La Batalla de Chile, Chile/Cuba/Venezuela 1975-1979, 3 partes.

. Salvador Allende. Espagne/Allemagne/Belgique/Chili/France/Mexique, Patricio Guzmán Producciones, 2004.

López, Ana y Valeria Yañez. Cordones industriales, Colectivo Artístico Tarea Urgente Santiago, 2016.

Mattelart, Armand. La Spirale. France: Betacam SP, 1975.

Marker, Chris. Le fond de l’air est rouge. France: I.N.A./Iskra/Dovidis, 1977,

145 min.

Marker, Chris y Miguel Littin. On vous parle du Chili. Paris: Iskra, 1973.

Moulian, Tomás (coord). Chile: 1970-2000. La Memoria oxidada. Santiago: LOM ediciones, 1997.

Muel, Bruno. Septembre chilien. Paris: Iskra - Bruno Muel production, 1973.

Mujica, Dolores. Trabajadores al poder. El Chile de los Cordones Industriales. Santiago: Biblioteca obrera, 2009.

Burgos, Pepe. Los Cordones Industriales y el Poder Popular. Santiago: Taller Audiovisual Llalliypacha, 2013.

Burgos, Pepe. Tomé. Memoria obrera. Santiago: Taller Audiovisual Llalliypacha, 2013.

. Las Jap y el abastecimiento directo. Santiago: Taller Audiovisual Llalliypacha, 2011.

Algunos archivos sobre la represión y la intervención de Estados Unidos

Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, Informe Rettig. Santiago, 1991 in <www.memoriaviva.com/Documentacion/informe_rettig.htm>.

Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, Informe Valech. Santiago, 2003-2011 in <www.indh.cl/wp-content/uploads/2011/10/Informe2011.pdf>.

The National Security Archive, Chile and the United States: Declassified Documents relating to the Military Coup, 1970-1976, Washington in <www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB8/nsaebb8.htm>.

Kornbluh, Peter. The Pinochet File. A declassified dossier on atrocity and accountability. New York: New Press, 1989.

Senado de los Estados Unidos. Informe Hinchey sobre las actividades de la CIA en Chile. Washington, 18 de septiembre de 2000 in <www.derechos.org/nizkor/chile/doc/hinchey-e.html>.

Senado de los Estados Unidos (Informe Church). Acción encubierta en Chile 1963-1973: Informe de la comisión designada para estudiar las operaciones gubernamentales concernientes a actividades de inteligencia. Washington, 18 de diciembre de 1975 in <www.derechos.org/nizkor/chile/doc/encubierta.html>.

Selección de compilación de archivos

CEDETIM. Chili, 1970-72. L’affrontement de masse. Paris: NPP, 1973.

CEDETIM. Chili. L’affrontement de classe. Paris: NPP, 1973.

«Chile en los archivos de la URSS (1959-1973): documentos del Comité Central del PCUS y del Ministerio de Relaciones Exteriores de la URSS», Estudios Públicos, Nº 72. Santiago, 1998, pp. 391-476.

«Chile en los archivos de EE UU (1970): documentos del embajador de EE UU en Chile (1967-1971), E. M. Korry», Estudios Públicos. Santiago, Nº 72, 1998, pp. 325-390.

Corvalán, Luis. Chile: 1970-1973, Sofia, Sofia Press, 1978.

Farías, Víctor (comp.). La izquierda chilena (1969-1973): documentos para el estudio de su línea estratégica, 6 tomos. Berlín: CEP, 2000-2001.

González, Miguel y Arturo Fontaine (comp.). Los mil días de Allende. Santiago: 2 tomos, CEP, 1997.

INDAL. Chile: El diálogo o las armas, Nº 11 y Nº 12. Caracas, 1975.

INDAL. El Partido Comunista de Chile en el gobierno de Unidad Popular, Nº 9. Caracas, 1974.

Izquierda Cristiana. Recueil de textes 1970-1973. Paris: Ed. Politique Hebdo, trad. Anne Valier, 1974.

Joxe, Alain. Le Chili sous Allende, Paris, Gallimard, Coll. Archives. Paris, 1974.

Kalfon, Pierre. Allende. Chronique. Paris-Biarritz, Atlantica, 1998.

Martner, Gonzalo (comp.). Salvador Allende 1908-1973. Obras Escogidas. Santiago: Ed. Antártica, Coll. Chile siglo XX, 1992.

MAPU. Recueil de textes : 1970-1973. Paris: Ed. Politique Hebdo, trad. Anne Valier, 1974.

MIR. Documentos Internos 2-A - 1973. Paris: Archives du CEDETIM.

MIR. Documentos Internos - 1972. Paris: Archives du CEDETIM.

MIR. Recueil de textes 1970-1973. Paris: Ed. Politique Hebdo, trad. Anne Valier, 1974

Quiroga, Patricio (comp.). Salvador Allende. Obras escogidas (1970-1973). Barcelona: Editorial Crítica, 1989.

Centros de archivos y de documentación consultados

Archivos nacionales del siglo XX - Santiago de Chile

Archivos del Congreso - Santiago de Chile

BDIC (Bibliothèque de documentation internationale contemporaine) - París

Biblioteca Nacional, Santiago de Chile

CEDETIM (Centre d’études et d’initiatives de solidarité internationale) - París

IHEAL (Institut des Hautes Etudes de l’Amérique latine) - París

Varios archivos privados militantes (Chile y Francia)

Testimonios recopilados durante el trabajo de historia oral (2002-2005)

La mayoría de estos testimonios están publicados en su versión integral en:

Gaudichaud, Franck, Poder popular y cordones industriales. Testimonios sobre el movimiento popular urbano 1970-1973, Santiago, LOM ediciones-DIBAM, 2004.

• Sergio Aguilar: Trabajador de la empresa estatizada ex-Yarur - militante del MAPU.

• Juan Alarcón: Obrero textil - militante del PC.

• Carlos Altamirano: Secretario general del PS - Diputado y senador.

• Boris B.: estudiante en arquitectura –militante del ala izquierda del PS– participa en el periódico La Aurora de Chile.

• Mireya Baltra: Dirigente nacional de la CUT –Miembro del Comité Central del PC– Ministra del trabajo bajo la administración Allende.

• Javier Bertín y Guillermo Rodríguez: militantes del MIR en el CI Cerrillos (Grupo Político Militar N° 4).

• Eugenio Cantillana: obrero de la fábrica Rittig –Presidente del CI Industrial Macul– militante del PCR.

- Exequiel E.: Chófer de bus y responsable sindical en la Universidad de Concepción-militante del PC.

- Tomás Inostroza: Consejero del CI Macul y administradorde la fábrica textil Paños Continental – Militante del PS (fundador del regional Cordillera).

- Edmundo Jiles: Dirigente sindical de la comuna de Maipú – Participa en la formación del CI Cerrillos.

- Fernando Quiroga: Militante del PS –secretario de la sección Maipú y luego del Regional Norte.

- Teresa Quiroz: profesora de la Universidad Católica – militante cristiana y del PS.

- Luis: funcionario del puerto de Valparaíso – militante del FTR y del MIR.

- Luciano: Obrero – Militante del PSR.

- Máximo Méry: Obrero de la empresa Alusa – militante del MAPU y del CI Vicuña Mackenna.

- José Moya: Obrero de la industria electrónica IRT – Militante del MIR, vive en el campamento Nueva Habana.

- Carlos Mujica: Obrero de la industria metalúrgica Alusa – Militante del MAPU – Delegado del CI Vicuña Mackenna.

- Pablo Muñoz y Luis Ahumada : militantes del PS y activistas en los cordones.

- Mario Olivares: Sindicalista del FTR de Muebles Easton – militante del MIR y del CI Vicuña Mackenna.

- Hernán Ortega: Militante del PS y administrador de la empresa Fantuzzi – Presidente del CI Cerrillos y presidente de la CPI.

- Patricio Palma: Miembro del Comité Central del PC – Director de DIRINCO.

- Abraham Pérez: Obrero de la construcción – Dirigente del campamento Nueva Habana – Militante del MIR.

- Miguel R.: militante del MIR – estudiante universitario – militante del movimiento pobladores.

- Miguel Raptis: obrero de la industria y luego de la construcción – cercano al ala izquierda del PS.

- Rodrigo: obrero de la empresa nacionalizada IRT – militante del MAPU –

Delegado en el CI Vicuña Mackenna.

- Adonis Sepúlveda: Senador – miembro del Comité Central del PS – Vicepresidente de la Unidad Popular.

- Carmen Silva: Artista pintora – militante del PS – activista de los cordones industriales.

- Héctor Vega: funcionario del Ministerio de Agricultura – militante del MIR – Presidente del CI Osorno Centro.

- Neftalí Zúñiga : Obrero textil – Militante del PC – administradorde la gran empresa textil Pollak.

Prensa consultada y utilizada

- La Aurora de Chile

- Carta Informativa

- Causa Marxista Leninista

- Central Única
- Chile Hoy
- Combate
- Crea
- Clarín
- Detallista
- El Compañero
- El Combate
- El Mercurio
- Futuro
- FENATEX

- La FIEMC
- IC. Testimonio Hernán Mery
- Le Monde (Francia)
- Las Noticias de Última Hora
- La Tercera de la Hora
- Trinchera (Santiago)
- Trinchera (Talcahuano)
- Periódico Universitario
- Punto Final
- Poder

- Poder Obrero
- Poder Popular
- Posición
- Principios
- La Prensa
- Mensaje
- Presencia
- Revolución Permanente
- La Segunda
- El Rebelde
- El Siglo

- El Surazo
- Tarea Urgente

Selección de sitios Internet

- http://www.archivochile.com
- http://www.abacq.net/imagineria/index.htm
- http://cordonesindustriales.cl
- http://www.memoriaviva.com
- http://www.memoriachilena.cl
- http://www.gwu.edu/~nsarchiv/latin_america/chile.htm
- http://www.rebelion.org

- http://www.cepchile.cl
- http://www.vicariadelasolidaridad.cl
- http://www.derechos.org/nizkor/chile
- http://www.museodelamemoria.cl
- http://www.salvador–allende.cl

1 Presentamos aquí solamente algunas publicaciones y fuentes importantes, una bibliografía completa está disponible en Gaudichaud, Franck, Étude du mouvement social urbain chilien, op. cit. (en linea: [http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00788830]).